



INSTITUTA
DE LA
JURISPRUDENCIA

ESTABLECIDA POR LAS
Exmas. CÁMARAS DE APELACIONES
DE LA
CAPITAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EN SUS SENTENCIAS, POR ORDEN NUMÉRICO Y ALFABÉTICO

Es una ley de la inteligencia humana que desde el momento en que se obtiene un gran número de verdades, el principio de clasificación se presenta a ordenarlas.

Hugh Miller.

POR EL
D^R J. J. HALL
(ABOGADO)

Comprende los tomos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la 3^a Serie de la Jurisprudencia Civil
y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la 4^a Serie de la misma

TOMO V—PRIMERA PARTE

BUENOS AIRES

IMPRENTA EUROPEA, MORENO Y DEFENSA

1895





Abandono—Véase: *Divorcio*, número 10.

1. **Abogado**—Sus honorarios se prescriben á los dos años de terminado el juicio, y el término corre aún cuando con posterioridad haya patrocinado á la misma persona en otros asuntos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 169, Ser. 3^a.

2. **Abogado**—Patrocinante, puede ser fiador del arrai-go del juicio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 5, Ser. 4^a.

3. **Abogado**—Y procurador, carecen de personería para apelar personalmente de la regulación de honorarios contenida en una sentencia inapelable.—Jur. Civ., tom 3, pág. 377, Ser. 4^a.

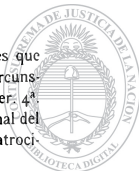
4. **Abogado**—Siendo la suspensión del ejercicio duran-

1—El art. 4032 del Cód. Civ. en su inc. 1º, dice que la prescripción empieza á correr desde que *feneció el pleito*, lo que demuestra el espíritu de la ley que quiere que la prescripción se opere en cada caso particular, sin involucrar los servicios prestados en otros juicios.

2—Es facultad exclusiva del Juez apreciar la calidad de la fianza que se ofrece para juzgar del grado de responsabilidad del fiador propuesto —art. 454 del Cód. de Proc.

3—Por que no les afecta dicha regulación, por no ser parte en el juicio. Esta resolución está de acuerdo con otro caso resuelto, como puede verse en el tom. 4º de la Inst.

4—El delito cometido por el abogado consistió en haber enmendado fechas y firmado escritos ya presentados sin firma de letrado. Estos actos los consumó mientras tuvo en su poder los autos para alegar



te un término dado, la más grave de las correcciones que pueden aplicarse al abogado, solo puede serlo por circunstancias muy graves.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 326, Ser. 4^a.

5. **Abogado**—El derecho de recusación es personal del litigante: no puede hacerse extensivo al abogado patrocinante.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 121, Ser. 4^a.

6. **Abogado**—La condenación en costas impuesta al Juez, no enerva el derecho del abogado para exigir el pago de sus honorarios á la parte.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 125, Ser. 4^a.

7. **Abogado**—Tiene derecho para cobrar los servicios extrajudiciales que hubiese prestado en el ejercicio de su profesión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 169, Ser. 4^a.

8. **Abogado**—Los honorarios de abogado devengados

de bien probado. La Cámara consideró que estos delitos no eran graves, y que por consiguiente la pena de suspensión era muy severa, reformándola y aplicando la multa de 100 nacionales. Es muy benigna la Cámara con los abogados que no saben sostener su dignidad, pero es dura é injusta con los letrados que ejercen con altura, su profesión y que no se doblegan ante la autoridad suprema de su voluntad que no es la ley. La pena de suspensión es la más grave, porque está en el último grado establecido por el art. 53 del Cód. de Proc. Si en algún caso debió imponerse la pena de suspensión es en este.

5—La causal de la recusación fué la enemistad con el abogado patrocinante. No se hizo lugar á la recusación: 1^o porque al formularla, no se ofreció prueba para su comprobación; y 2^o porque el derecho de recusar no alcanza al abogado. El art. 368, en su inc. 11, resuelve el caso con toda precisión. Está de acuerdo con la jurisprudencia establecida.—Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Recusación*, núm. 2.

6—La condenación en costas no crea á favor del abogado vencedor, ningún derecho contra el vencido: su derecho se circunscribe á cobrar de su patrocinado el honorario devengado. La sentencia solo crea relaciones de derecho entre las partes litigantes.

7—De acuerdo con lo que establece el art. 1627 del Cód. Civ., debiendo los servicios determinarse por árbitros.

8—Véase nota precedente.



extrajudicialmente deben ser determinados por peritos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 169, Ser. 4ª.

9. **Abogado**—La imposibilidad de concurrir á la absolución de posiciones el abogado director, es causal para fijar nuevo día para su presentación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 230, Ser. 4ª.

10. **Abogado**—Defensor de los que se consideran con derecho al patronato de una capellanía, carece de derecho para cobrar sus honorarios haciéndolos efectivos en la finca gravada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 74, Ser. 4ª.

11. **Abogado**—El abogado del peticionante de la herencia cuya acción ha sido rechazada, carece de derecho para cobrar honorarios á la testamentaria.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 84, Ser. 4ª.

12. **Abogado**—La enemistad del Juez con el abogado ó procurador, no es causa de recusación.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 106, Ser. 4ª.

13. **Abogado**—La amistad con el abogado, no es causa

9—La parte que debió absolver las posiciones pidió se diera por decaído el derecho de presentarlas, á lo que el Juez proveyó de conformidad por no considerar como causal justa la alegada: la Cámara revocó la resolución, fundándose en el art. 128, inc. 2º. por considerar causal bastante la espresada en el sumario.

10—La cuestión versó sobre mejor derecho á una capellanía, habiendo el abogado que pretendió cobrar sus honorarios, patrocinado á la parte vencida. El abogado no puede pretender que el vencedor pague sus honorarios, y mucho menos que la finca sea responsable de ellos.

11—Porque si el peticionante es vencido es por carecer de derecho á los bienes hereditarios, no pudiendo exigir el abogado que se pague sus honorarios con bienes que no son de su cliente. El sumario está de acuerdo con otras resoluciones, como puede verse en el tom. 2º, página 241, y tom. 8º, págs. 486 y 238 de la 1ª Ser. de la Jur. Civ.

12—Véase el núm. 5.

13—Véase el número precedente --No siendo procedente la recusa-



de recusación, ni en consecuencia de nulidad de la sentencia dictada á favor de la parte por él patrocinada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 313, Ser. 4ª.

14. **Abogado**—Patrocinante, tiene derecho para exigir el pago de sus honorarios directamente á su patrocinado, con prescindencia absoluta de los apoderados ó intermediarios.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 151, Ser. 4ª.

15. **Abogado**—Y procurador, carecen de personería para reclamar el pago de sus honorarios en caso de condena-ción en costas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 81, Ser. 4ª.

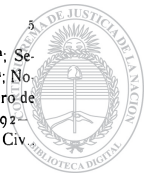
Abogado—Véase: *Enemistar*, núm. 1—*Escusación*, número 2—*Honorarios*, núms. 15 y 18—*Escepción de inhabilidad de título*, núm. 14—*Amistad*, núm. 1.

1. **Abogados**—Instrucciones en la matrícula durante el mes de Marzo de 1890—Jur. Civ., tom. 5, pág. 258, Ser. 3ª; Junio de 1890—Jur. Civ., tom. 7, pág. 164, Ser. 3ª;

ción y fundándose la nulidad de la sentencia en esta causal, la nulidad no existe.

14—Un abogado se presentó cobrando honorarios devengados: el patrocinado dijo que no tenía por qué abonarlos, pues el honorario fué devengado en actuaciones ejecutadas en beneficio de tercero, y que era éste quien debía abonarlos, debiendo tenerse presente que los servicios profesionales no fueron requeridos por él. La acción que nace de estos actos es directa contra el patrocinado, y si con ellos se beneficia á un tercero, es cuestión á resolverse entre el patrocinado y el tercero, pero en manera alguna entre éste y el patrocinante. Se dijo además que cuando el escrito fué firmado por el interesado, no llevaba firma de abogado. Este no es argumento, porque es práctica constar te que el abogado firme el escrito después de la parte ó antes. Ninguna influencia puede tener respecto del derecho á cobrar los honorarios el hecho de firmar primero el abogado y después la parte ó viceversa. El intermediario que ha buscado el abogado, nada tiene que ver en este caso con los honorarios devengados.

15—Es jurisprudencia constante establecida por la Cámara.—Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Honorarios*, núm. 7; tom. 1º, verb. *Abogado*, número 5.



Junio de 1891—Jur. Civ., tom. 4, pág. 267, Ser. 4^a; Setiembre de 1891—Jur. Civ., tom. 7, pág. 80, Ser. 4^a; Noviembre de 1891—Jur. Civ., tom. 9, pág. 47; Enero de 1892—Jur. Civ., tom. 9, pág. 152; Febrero de 1892—Jur. Civ., tom. 9, pág. 275; Marzo de 1892—Jur. Civ., tom. 10, pág. 122, Ser. 4^a.

2. Abogados—Acuerdo fijando la fórmula del juramento que deben prestar ante la Excm. Cámara de lo Civil.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 265, Ser. 4^a.

1^a. Absolución—Del acusado en el juicio criminal, hace responsable al acusador, por los daños y perjuicios que le hubiese irrogado la querella.—Jur. Civ., tom. 6, página 269, Ser. 3^a.

Absolución—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 12—*Acción civil*, núm. 1.

Absolución de posiciones—Véase: *Domicilio*, núm. 2—*Alegato*, núm. 1—*Posiciones*, núms. 32, 34 y 35—*Audiencia*, núm. 2.

Absolución del acusado—Véase: *Daños y perjuicios*, número 12 y 17—*Acto ilícito*, núms. 8 y 10.

Absolución del demandado—Véase: *Pruebas del actor*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 45—*Falsedad*, núm. 7—*Costas*, núm. 49.

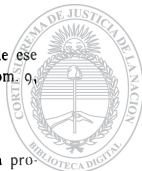
Absolvente—Véase: *Posiciones*, núms. 7 y 38—*Confesión*, núm. 3—*Domicilio*, núm. 12—*Rebeldía*, núm. 19—*Audiencia*, núm. 1.

1^b. Abuela—La tutela de los menores corresponde á

2—La fórmula dice: «¿Jurais por Dios y por la Patria desempeñar lealmente la profesión de abogado guardando la Constitución y las Leyes de la Nación?—Si así no lo hicieris, Dios y la Patria os lo demanden.»

1^a—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 39.

1^b—Art. 391 del Cód. Civ.



ésta, y solo por causas graves puede ser privada de ese derecho, á juicio de los Tribunales.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 236, Ser. 4^a.

Abuelos—Véase: *Hijo natural*, núm. 3.

Accesorio—Véase: *Depósito de muebles*, núm. 1.

1. Accidente—La responsabilidad de la empresa pro-

1—El actor había tomado pasaje para Córdoba en la Estación Central de esta Capital. El tren en que tomó pasaje fué el del Rosario, debiendo seguir viage desde aquella ciudad hasta Córdoba en el Ferrocarril Central Argentino en combinación. Al llegar el tren á la Estación del Rosario tuvo lugar un choque con un vagón del Ferrocarril Central Argentino del que resultó el actor con heridas graves. Este imputaba la culpa á la empresa del Ferrocarril del Rosario, habiéndose producido por culpa ó negligencia de sus empleados, pues la vía debió estar completamente libre para el paso del tren. La responsabilidad de la empresa procede de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1070, 1108, 1109 y 1113 del Cód. Civ. y 53 de la Ley Nac. de ferrocarriles. La empresa dijo que era efectivamente cierto el accidente que motivaba la demanda, pero que él tuvo lugar en la línea del Ferrocarril Central Argentino en su Estación del Rosario por hechos en que la empresa demandada nada tiene que ver ni ha tenido participación de ninguna clase: Que la vía en que tuvo lugar el accidente depende exclusivamente del Central Argentino, y que aunque se tratara de una vía de tráfico común, la ley, doctrina y jurisprudencia han resuelto que desde que un tren está colocado en ella, queda bajo la responsabilidad única de la empresa que deba remolcarlo ó descargarlo. Se ve que toda la defensa de la empresa demandada se hace consistir en que el hecho tuvo lugar en la vía del F. C. C. Arg. en la estación de esta empresa en el Rosario, afirmando que la vía, el convoy y todos los conductores dependían exclusivamente de ésta. Tal extremo no se comprobó por quien lo alegaba. La presunción legal está en contra: porque si el damnificado tomó en la Estación Central pasaje hasta Córdoba en el Ferrocarril del Rosario en combinación con el C. Arg., las obligaciones del primero para con el pasajero no cesan hasta que éste llegue al Rosario y descienda del tren para tomar el siguiente de combinación. Constaba de autos que el actor fué herido en un coche del ferrocarril que tomó en esta Capital, siendo dirigido el convoy por maquinistas y vigilado por guardas y empleados de la misma empresa. Si ese tren



pietaria del tren que sufre el accidente es directa hacia el damnificado, sin perjuicio de su derecho á repetir contra la empresa culpable.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 61, Ser. 4.^a

Accidente—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 46, 100, 101, 103, 105 y 107.—*Víctima*, núm. 2. *Acto ilícito*, número 6—*Acto de administración*, núm. 1.

1. **Acción**—Cuando el demandante no justifica su ac-

al llegar al Rosario ocupaba una vía de otro ferrocarril y por obstáculos en ella encontrados se produjo el hecho, no por eso cesa su responsabilidad. No debió entrar en esa vía sin tomar las precauciones que requería la seguridad de la vida de los pasajeros que conducía: cualesquiera que sean los arreglos entre esas empresas, la responsabilidad es de aquella que contrató con el pasajero, y mucho más cuando el pasajero se encontraba en el mismo coche de la empresa. El mismo demandado lo reconoció así en su contestación cuando dijo que «desde el momento en que un tren ó vehículo está colocado en la vía, aunque sea común, quedará bajo la responsabilidad única de la empresa que debe remolcarlo ó descargarlo.» En el caso que nos ocupa el tren estaba en movimiento por cuenta del ferrocarril al Rosario, remolcado por sus máquinas, dirigido y vigilado por sus empleados; de donde resulta que es esa empresa la única responsable para con el damnificado. Puede que haya habido omisión ó descuido asimismo de parte del Central, pero eso puede originar cuestiones entre ambas empresas, lo que en nada perjudica ni obsta al derecho del lesionado, que persigue del culpable inmediato las indemnizaciones que la ley le acuerda.

1—Art. 216 del Cód. de Proc.; Ley 1.^a, tit. 14, Part. 3.^a, y 8, tit. 22, de la misma Part. La Ley 1.^a dice así: «E naturalmente pertenece la prueba al demandador, quando la otra parte negare la demanda. Ca si non lo prouasse, *deuen dar por quito al demandado*, de aquella cosa que non fue prouada conrra el: e non es tenuta la parte de prouar lo que niega, etc.» La ley 8.^a citada más arriba, dice: «E por ende dezimos, que los que en esta manera fazen demandas, ó se defienden contra otro, non auiedo derecha razon por que lo deuen fazer, que non tan solamente deue el luagador dar por vencido en su pleyto en el juyzio de la demanda, al que lo fiziere, mas aun lo deue condenar en las costas.»



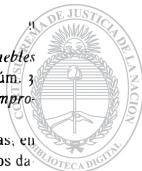
ción, el demandado debe ser absuelto.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 113, Ser. 3ª.

2. **Acción**—Si demandante y demandado la han deducido igual ante distintos jueces, debe conocer el que entendió primero.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 30, Ser. 4ª.

3. **Acción**—El Juez competente para aplicar la multa por infracción al impuesto de papel sellado debe conocer en la acción entre los firmantes solidarios.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 59, Ser. 4ª.

Acción—Véase: *Costas*, núms. 7, 24 y 39—*Mandato*, núm. 1—*Albacea*, núm. 2—*Costas*, núm. 8 y 16—*Cláusulas*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 4, 14, 40, 42, 52 y 58—*Error de hecho*, núm. 2—*Fiador*, núm. 1—*Funcionarios públicos*, núm. 2—*Posiciones*, núm. 7—*Prescripción de la indemnización*, núm. 1—*Prueba preconstituida*, núm. 1—*Carta de crédito*, núm. 2—*Poseción*, núm. 5—*Uso regular*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núms. 6 y 22—*Derecho de petición*, núm. 2—*Escepción de falta de personería*, núms. 2, 14 y 15—*Divorcio*, núms. 4 y 5—*Arbitros*, núm. 1—*Interdicto de retener*, núm. 2—*Demandante*, núm. 1—*Obligación de hacer*, número 7—*Posiciones*, núms. 1 y 2—*Acusación calumniosa*, núm. 1—*Plazo*, núm. 4—*Sentencia*, núm. 7—*Cuestiones*, núm. 2—*Testamento*, núm. 5—*Contrato de compraventa*,

3—Abonada una multa por una de las partes, solicita reintegración de lo que ha pagado por la otra. Aun dado el caso de que la suma que se quiere repetir no fuese de la competencia del Juzgado, éste, no obstante, tiene jurisdicción para entender en la acción, porque en primer lugar los jueces para exigir el pago de toda la multa jamás se fijan en esta circunstancia, y no sería justo que la parte diligente en el pago esté en peor condición que la parte remisa; y en segundo lugar, la acción es un incidente de lo principal, pues se trata de cobrar del otro litigante la suma que le corresponde abonar por una infracción en la confección de un documento que es base ó causa del litigio.



núm. 18—*Nulidad de la sentencia*, núm. 13—*Muebles embargados*, núm. 1—*Prescripción interrumpida*, núm. 3—*Abogado*, núms. 11, 14 y 15—*Escritura de compromiso*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 17.

1^a. Acción civil—La falta de condenación en costas, en la acusación criminal, y de pronunciamiento sobre los daños y perjuicios solicitados por el acusado, no hace cosa juzgada en la acción civil, fundada en la sentencia absolutoria.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 269, Ser. 3^a.

Acción civil—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 10, 11, 12, 13, 15, 17 y 35—*Acción criminal*, núm. 1.

1^b. Acción criminal—Debe ser resuelta antes que la civil por daños y perjuicios, si antes fué iniciada.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 333, Ser. 3^a.

Acción deducida—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 5.

Acción de filiación natural—Véase: *Filiación natural*, números 6 y 12.

Acción de jactancia—Véase: *Jactancia*, núms. 2 y 3.

Acción de los menores—Véase: *Rendición de cuentas*, número 7.

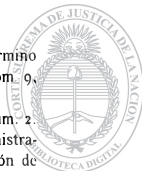
Acción de nulidad—Véase: *Nulidad*, núms. 1 y 10—*Escritura*, núm. 2—*Acto jurídico*, núms. 1 y 2—*Nulidad de un acto jurídico*, núms. 4, 5 y 6.

1^c. Acción determinada—La iniciación de un juicio sin

1^a—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 37.

1^b—Se trataba de la indemnización del daño causado por un delito, en cuyo caso si la acción criminal precede á la acción civil, no puede haber condenación en el juicio civil antes de la condenación en el juicio criminal—art. 1101, Cód. Civ.

1^c—Las actuaciones anteriores no constituyeron ni una acción real ni personal, no pudiendo el escrito de iniciación considerarse como una verdadera demanda, ni por su forma, ni por las peticiones en él contenidas. La interrupción de la prescripción, no puede operarse en estas condiciones, desde que la ley exige para ello que la interpelación



deducir acción determinada, no interrumpe el término que la ley fija para la prescripción.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 180, Ser. 4^a.

Acción directa—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 2.

1^a. **Acción ejecutiva**—No procede contra el administrador de la testamentaria sin previo juicio de rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 40, Ser. 3^a.

2. **Acción ejecutiva**—No procede sin la presentación del título en que se funda.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 324, Ser. 4^a.

3. **Acción ejecutiva**—Solo puede iniciarla el que justifica su derecho á exigir el cumplimiento de la obligación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 114, Ser. 4^a.

Acción ejecutiva—Véase: *Escepción de falta de personería*, núm. 12.

Acción en forma—Véase: *Seña*, núm. 6.

Acción judicial—Véase: *Nulidad del desistimiento*, número 1.

1^b. **Acción pauliana**—Para que el acreedor tenga dere-

revista los caracteres de una demanda, aunque sea llevada ante Juez incompetente, y aunque sea nula por defectos de forma ó por incapacidad del demandante—art. 3186, Cód. Civ.

1^a—No habiendo precedido la rendición de cuentas, se ignora á cuánto ascienden los fondos adeudados, y no habiendo cantidad líquida no puede procederse ejecutivamente—art. 464 del Cód. de Proc.

2—El art. 471 del Cód. de Proc. prescribe al Juez la obligación de examinar cuidadosamente el documento con que se deduce la acción. No es posible cumplir con esta prescripción si no se acompaña el título.

3—Para exigir el cumplimiento de una obligación es necesario que se compruebe el vínculo de derecho que une á actor y ejecutado, pues de otro modo carecería de acción para iniciar la ejecución.

4—Este caso fué resuelto por mayoría de tres votos contra dos, y ha dado una solución, en cuanto á la simulación se refiere, manifiestamente equivocada. Deducida una tercera, el ejecutante opuso al título

cho de deducir la acción pauliana ó la de simulación de los actos del deudor, es requisito indispensable que su cré-

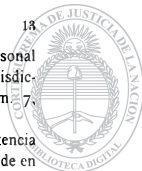
en que fundaba su dominio el tercerista, estas dos defensas: 1ª que la escritura exhibida por el tercerista era simulada; 2ª además de la simulación, y subsidiariamente, la nulidad del acto por haber sido ejecutado en fraude de los acreedores. La sentencia de primera instancia declaró simulada la venta hecha por el ejecutado al tercerista en que éste fundaba su dominio. Apelada la sentencia, el tercerista sostuvo que el ejecutante carecía de acción para demandar la nulidad de la escritura por no haber sido acreedor del ejecutado en la época del otorgamiento de la misma. El razonamiento de la mayoría es el siguiente: la simulación de un acto jurídico no es reprobada por la ley cuando á nadie perjudica ni tiene un fin ilícito—Cód. Civ., art. 957;—el art. 1047 del mismo Código dispone que pueden alegar la nulidad todos los que tengan interés en hacerlo, y, en concepto de la ley, ese interés han debido tenerlo en el momento de celebrarse el acto que se dice simulado; que el Código exige entre otros requisitos para la procedencia de la acción pauliana, que el crédito en virtud del cual se intenta debe ser de fecha anterior al acto del deudor; que el acreedor toma por decirlo así, á su deudor en el estado de su responsabilidad actual, no en sus responsabilidades precedentes; lo toma con su solvencia y su patrimonio en el momento de la constitución del acto, no con su patrimonio ó su solvencia de antes. Invoca en su apoyo y como precedente, un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial (Causa DXLII). Hemos dicho que esta doctrina es manifestamente equivocada, y así lo demostró el voto de la minoría, que expondremos en seguida. Antes de hacerlo haremos notar brevemente que el error fundamental de la sentencia de que nos ocupamos, consiste en confundir la acción pauliana con la de simulación, incurriendo en un defecto de interpretación que el mismo codificador quiso evitar, repitiendo en la nota al art. 962 estas palabras de Aubry y Rau: «todas las dificultades que se exponen, nacen de confundir la acción pauliana con la acción de simulación. Ateniéndonos en primer lugar á la interpretación literal, observamos que la materia de la simulación y la del fraude en los actos jurídicos, está tratada en capítulos separados; que el requisito de que el crédito en virtud del cual se intenta la acción debe ser de fecha anterior al acto del deudor, está exigido por el art. 962, exclusivamente con referencia á la acción de fraude ó perjuicio, y no es una disposición general ó común á las dos acciones; que en el capítulo de la simulación no hay dis-



dito sea de fecha anterior al acto que se pretende anular.
—Jur. Civ., tom. 4, pág. 285, Ser. 4ª.

posición alguna que autorice una restricción semejante, y que las restricciones para el ejercicio de una acción, son como todas las limitaciones, de interpretación estricta y no pueden extenderse arbitrariamente á otras acciones á que la ley no ha puesto tales límites. Racionalmente, se concibe también como no sería jamás ni justo ni justificable, que el acreedor no pudiera decir de simulación del acto del deudor anterior á la existencia del crédito. Es indiscutido el principio de que todo el patrimonio del deudor responde de sus deudas. Cuando una persona ha simulado la enajenación de un bien cualquiera, ¿puede decirse seriamente que ese bien ha salido de su patrimonio? Habrá creado una mera *apariencia* de enajenación, pero la verdad, la realidad será siempre que aquel bien continúa en el patrimonio del deudor; está, en consecuencia, sometido á aquel principio, y la acción del acreedor no tiende sino á destruir aquella *apariencia*. En el fraude ó el perjuicio que dan lugar á la acción pauliana, no hay ó puede no haber *simulación* alguna; el acto de enajenación es verdadero; el bien sobre que versó el acto ha salido del patrimonio del deudor, entrado en el de un tercero, y se trata de obtener la *revocación* del acto, mientras que en la simulación se trata de establecer su *inexistencia*. Se invoca la disposición del art. 957 del Cód. Civ. que cubre la simulación cuando á nadie perjudica ni tiene un fin ilícito. ¿Ha podido con esto la ley autorizar la preparación de todo perjuicio posible ó futuro para los acreedores? Cuando el autor de la simulación intenta hacerla valer crea, con el uso de la misma, el perjuicio que autoriza el ejercicio de la acción, y la ley lo reprueba de la misma manera que reprueba no solo la falsedad sino el uso de lo falso. La minoría de la Cámara insistió suficientemente en que se confundía la acción pauliana con la acción de simulación; invocó la opinión de los más ilustrados tratadistas, y concluyó diciendo: «no puede ser otra la conclusión, á poco que se considere que la acción pauliana es revocatoria y se propone destruir los efectos de un acto hecho en fraude de los derechos del acreedor; la simulación, que puede ser absoluta ó relativa, revistiendo el primer carácter, cuando se celebra un acto jurídico que tiene nada de real—Código Civil, art. 953—anula el acto—art. 954—y en tal caso vuelven las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto anulado—art. 1050—de modo que debiendo reputarse que los bienes no han salido nunca del dominio del deudor, el acreedor está siempre en tiempo de ejercerla.





1. **Acción personal**—El demandante por acción personal puede renunciar al fuero federal, ocurriendo á la jurisdicción del domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 113, Ser. 3^a.

2. **Acción personal**—Carece el Juzgado de competencia sobre el demandado por acción personal, que no reside en su jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 128, Ser. 3^a.

3. **Acción personal**—La deducida á nombre personal, no puede ser transferida á un tercero sin aquiescencia del demandado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 266, Ser. 4^a.

Y si se quiere agregar á esto un argumento de estricto derecho, lo tenemos en el art. 1196 del Código que autoriza á los acreedores para ejercer todos los derechos y acciones de su deudor. Supuesta una simulación lícita, que no tuviera el propósito de perjudicar á tercero, estarían por lo mismo habilitados los acreedores para reincorporar al patrimonio de su deudor los bienes de que éste se hubiera despojado para garantizarse con ellos de sus créditos. La acción acordada al deudor que hubiera simulado el acto jurídico para recuperar lo suyo que en realidad nunca saliera de sus bienes, es la misma que sus acreedores pueden ejercitar siempre sin dependencia de fechas.»

1.—Un vecino de una provincia demanda al de otra ante la jurisdicción común; el demandado opone excepción de incompetencia, la que es rechazada porque el fuero federal ha sido establecido en beneficio del extranjero ó del vecino de distinta provincia, pudiendo renunciar al privilegio. Es evidente su derecho á recurrir al tribunal local del fuero del demandado—art. 4 del Cód. de Proc.

2.—Siempre que no se encuentre allí aunque sea accidentalmente—artículo 4 del Cód. de Proc.

3.—Entablada una demanda á nombre personal, quiso después una sociedad tomar intervención alegando que la demanda había sido instaurada por ella, pues ella era la dueña del pleito. El actor estuvo conforme, pero no así el demandado. No se hizo lugar á la transferencia porque hasta cierto punto se autorizaría el desistimiento de la acción contra la voluntad del demandado, y sin las ventajas que ello reportaría para éste, pues en vez de terminar el pleito tendría que seguirlo con el nuevo litigante. Por lo demás, la cesión de las acciones litigiosas puede hacerse, pues está autorizada por la ley, siempre que se obser-



4. **Acción personal**—No puede considerarse incidente de la testamentaria, la acción personal dirigida contra el que en representación del causante firmó el contrato.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 323, Ser. 4ª.

Acción personal—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 8.

Acción por daños y perjuicios—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 1, 2, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 26 y 27—*Embargo indebido*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 4—*Funcionarios públicos*, núm. 1—*Contrato bilateral*, núm. 3—*Locatario*, núm. 3.

1. **Acción reivindicatoria**—Para que sea procedente es

ven las formas por ella prescriptas—arts. 1446 y 1455 del Cód. Civ.—sin perjuicio de la responsabilidad de cedente y cesionario si la parte no consintiese en la cesión.

4—El contrato se celebró por el esposo de la causante y á nombre de ella, pero fué suscripta por el esposo á nombre propio. La demanda se inició contra éste: de acuerdo con lo establecido en el art. 634 del Cód. de Proc. y 3284 del Cód. Civ., dicha acción no pasa al Juez de la sucesión.

1—El art. 2748 del Cód. Civ. establece, que la acción reivindicatoria nace del *dominio* que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el propietario *que ha perdido la posesión* la reclama y la reivindica contra aquel que se encuentra en posesión de ella. De esta definición resulta, que para promover esta acción no basta tan sólo invocar el título de propiedad; es de todo punto necesario comprobar el dominio adquirido por medio de la tradición efectiva y real.—Los arts. 577, 2609 y 3265 corroboran esta teoría. Así el primero dice: «Antes de la tradición de la cosa el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real»; el 2609 establece que «se pierde igualmente el dominio por enajenación de la cosa, cuando otro adquiere el dominio de ella por la tradición en las cosas muebles, y en las inmuebles después de firmado el instrumento público de enajenación *seguido* de la tradición. El art. 3265 exige asimismo la tradición para la transmisión de los derechos que pasan de una persona á otra en virtud de contrato. Estos artículos de nuestra ley civil, y sus concordantes dejan establecido que no basta la escritura pública de enajenación para transmitir el dominio; es necesario que se haga la tradición de la cosa, y mientras esta no se

necesario justificar el dominio adquirido por medio de la tradición efectiva: no basta la presentación del título de propiedad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 346, Ser. 3ª.

verifique, la relación jurídica entre enajenante y adquirente es la que surge de una obligación de hacer. *Traditionibus dominia rerum non multis pactis transferentur*, decía el principio romano, el que pasó á formar parte de nuestra legislación civil. De manera que el que tiene un título de propiedad no tiene el dominio si la tradición no le ha sido hecha. El no puede tomar posesión de la cosa de su propia autoridad y debe exigir la entrega. Freitas dice que el derecho real debe manifestarse por otros caracteres, por otros signos que no sean los del derecho personal, y que esos caracteres y esos signos sean tan visibles y tan públicos cuanto sea posible. Nuestra ley ha sido tan exigente en materia de tradición que ha ido más lejos aún que la ley romana y que las leyes de Part. Así es que no basta para producir la tradición la sola declaración del tradente de darse por desposeído ó de dar al adquirente la posesión de la cosa; esa posesión, tratándose de inmuebles, sólo puede adquirirse por la tradición hecha por actos materiales del que entrega la cosa con asentimiento del que recibe, ó por actos materiales del que recibe con asentimiento del que los entrega, ó desistiendo el poseedor de la posesión que tenía y ejerciendo el adquirente actos posesorios en el inmueble, en presencia de él y sin oposición alguna —arts. 2378, 2379 y 2380 del Cód. Civ.; Freitas, art. 3819; Molitor, *Posesión*, núm. 45. En el caso que nos ocupa, el reivindicante no comprobó que hubiese tenido ó perdido la posesión de la cosa que quería reivindicar. Del título que presentó no resultaba justificado que hubiese tomado posesión de la cosa: de él no resultaba que el vendedor le hubiese hecho la tradición de la cosa, y por el contrario, contenía la formal promesa de dar al comprador la posesión real de lo vendido, libre de toda otra tenencia y sin contradictor que se oponga, lo que importaba establecer que esa posesión no se la daba en el acto de suscribirse la escritura de enajenación, ni que se la hubiese dado antes. Si nunca se ha tenido la posesión, no puede ejercitarse la acción reivindicatoria que nace del dominio que cada uno tiene de las cosas, y por la cual el que ha perdido la posesión la reclama y la reivindica del que actualmente la tiene—artículo 2758.—En el presente caso nada puede suplir al hecho material para que la tradición se opere según la opinión de la Cámara de lo Civil, mientras que la de lo Comercial ha establecido un principio contrario—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Tradición*, núm. 1.





2. **Acción reivindicatoria**—La escepción de prescripción opuesta por el demandado de reivindicación, hace procedente la exoneración de las costas al demandante vencido.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 3ª.

3. **Acción reivindicatoria**—Es improcedente si el demandante no justifica haber tenido la posesión.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 415, Ser. 4ª.

Acción reivindicatoria—Véase: *Embargo preventivo*, número 2—*Evicción*, núm. 1—*Prescripción treintenaria*—*Reivindicación*, núm. 10.

Acciones—Véase: *Jactancia*, núm. 1—*Posiciones*, número 4—*Heredero*, núm. 7—*Venta en remate*, núm. 1—*Herederos*, núm. 7—*Locación*, núm. 8.

1. **Acciones civiles**—El damnificado por una resolución del Consejo Nacional de Higiene, puede entablar las que crea convenir á su derecho, sin ocurrir al jurado que pres-

2—De acuerdo con la jurisprudencia establecida, y fundada en que en este caso no hay ni temeridad ni malicia, pudiendo el Juez hacer uso de la facultad que le acuerda el art. 221 del Cód. de Proc.—Véase: Inst., tomo 1º, verb. *Costas*, núm. 649; en la nota se consigna el voto de un camarista en contra del principio sentado en el sumario.

3—Véase el núm. 1.

1—El art. 48 de la Ley de 18 de Julio de 1877, establece que si el interesado se considera agraviado por una resolución, debe apelar de ella para ante un jurado presidido por el Juez del Crimen. La Ley de 31 de Diciembre de 1880, organiza y determina las atribuciones del Consejo Nacional de Higiene, y establece en su art. 4º, inc. 6º, que se encuentra facultado para vigilar el ejercicio legal de la medicina, de la farmacia y de las demás ramas del arte de curar, con arreglo á las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires, hasta tanto el Congreso dicte la ley que rija esta materia en la Capital, de donde se deduce la vigencia de la ley de la Provincia. Si el damnificado no hace uso del derecho que le acuerda la ley para apelar ante el jurado de la resolución del Consejo, esto no importa renunciar á las acciones civiles de que pueda hacer uso contra quien ordenó la medida que causó el perjuicio.



cribe la ley especial sobre ejercicio indebido de la medicina.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 317, Ser. 4^a.

1^a. **Acciones criminales**—Justificada la confabulación entre el tercerista y el ejecutado, la sentencia que los condena en las costas y detención dejando á salvo á favor del ejecutante las acciones criminales que viere convenirle, debe ser confirmada.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 108, Ser. 3^a.

1^b. **Acciones personales**—El Juez de la sucesión, es incompetente para conocer en las acciones personales que se dirijan contra los herederos.—Jur. Civ., tom. 1, página 370, Ser. 3^a.

Acciones reales—Véase *Evicción*, núm. 1.

Accionar—Véase: *Interdicto de adquirir*, núm. 1.

Acceptación—Véase: *Cesión*, núm. 3—*Desistimiento*, número 2—*Locación de servicios*, núm. 1—*Servicios profesionales*, núm. 1.

Aclaraciones—Véase: *Contrato*, núm. 6.

Acreedor—Véase: *Contrato de locación*, núm. 1—*Pago por consignación*, núm. 3—*Fiador*, núm. 1—*Cesión*, número 3—*Depósito particular*, núm. 1—*Cesión de bienes*, núm. 1—*Acción pauliana*, núm. 1—*Obligación á plazo*, núm. 2—*Tacha*, núm. 2—*Escepción de defecto legal*, nú-

1^a—Es la sanción contenida en el art. 534 del Cód. de Proc. Si la Cámara encuentra bien aplicado por el Juez de 1^a Instancia dicho artículo, debe confirmarse la resolución del Superior.

1^b—Es principio general que el Juez competente para entender en las acciones personales lo es el del domicilio del demandado—art. 4 del Cód. de Proc.—salvo los casos establecidos tanto en este artículo como en el 634 del Cód. de Proc., que reglamenta el 3284 del Cód. Civ. para los juicios testamentarios. La escepción á la regla general establecida para los casos de juicio universal de testamentaria que atrae á sí á todos los demás, tiene aplicación cuando la persona demandada es la sucesión, pero no cuando es un heredero, porque la primera es una persona distinta de la segunda.



mero 17—*Honorarios*, núm. 26—*Costas*, núm. 58—*Penas*, núm. 3—*Prelación*, núm. 1.

1. **Acreedor hipotecario** — Formado concurso civil, el acreedor hipotecario carece de personería para oponerse a la venta en remate público de los bienes afectados con hipoteca.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 57, Serie 4^a.

2. **Acreedor hipotecario**—El de segunda hipoteca, tiene

1—El art. 735 del Cód. de Proc. dispone que se proceda inmediatamente a la enajenación de los bienes del concurso, si la mayoría de los acreedores no acordase lo contrario: este artículo no hace distinción alguna entre los bienes libres de gravamen y los afectados con hipoteca. Los arts. 761 y 763 del mismo Código, establecen en su letra, y se desprende de su espíritu que en la venta de los bienes del concurso están comprendidos los bienes hipotecados, pues el primero de ellos establece que su producto se distribuirá á prorrata entre los acreedores, á no ser que haya causa legítima de preferencias en virtud de privilegios ó hipotecas; y el segundo ordena que el sobrante de la venta, después de satisfecho el acreedor hipotecario, ingrese á la masa, debiendo éste concurrir á prorrata con los acreedores personales en caso de no ser cubierto el crédito con el producto del bien hipotecado. El Código Civil no contiene disposición alguna que prohíba la venta. No puede objetarse tampoco diciendo que la venta con una base inferior al importe de la hipoteca sea perjudicial para el acreedor hipotecario, pues en primer lugar ellos mismos proceden de diario á la venta con una base inferior á la hipoteca; y en segundo lugar, el acreedor hipotecario puede concurrir al remate y hacer posturas hasta donde considere conducente á su derecho. El Juez de 1^a Instancia decía que el acreedor hipotecario carecía de personería para oponerse á la venta, porque sólo corresponde al síndico gestionar y dirigir todo lo relativo á la liquidación del concurso: la Cámara confirmó «por sus fundamentos el auto apelado».

2—El art. 3196 establece, que la hipoteca se extingue desde el momento en que el comprador consigna el precio, siempre que se hiciese con citación de los acreedores hipotecarios: esa citación tiene por objeto dar la intervención que les corresponda en el juicio en salvaguardia de sus derechos. Si con la apelación de la regulación puede conseguir que algo se adjudique á la segunda hipoteca, el derecho que consagra el sumario es evidente.

derecho para apelar de las regulaciones de honorarios recaídas en la sentencia de la ejecución de la primera hipoteca.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 109, Ser. 4.^a

3. **Acreedor hipotecario**—La falta de aceptación por parte de éste, de la transferencia del bien hipotecado, solo puede lesionar los derechos del vendedor.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 348, Ser. 4.^a

1. **Acreedor privilegiado**—La falta de intervención de éste, en el juicio de graduación de créditos, no enerva el carácter ejecutivo de la sentencia, que adquiere hacia él la fuerza de la cosa juzgada desde la fecha en que se justifique haber llegado á su conocimiento.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 394, Ser. 4.^a

1.^a. **Acreedores**—Carecen de personería para intervenir en el concurso civil: sus derechos están representados por el síndico.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 112, Ser. 4.^a

Acreedores— Véase: *Herederos*, núm. 4—*Simulación*, núm. 14—*Recusación*, núm. 6—*Concurso civil*, núm. 4—*Acto simulado*, núm. 1—*Inhibición*, núm. 6.

1. **Acreedores del viudo**—No están obligados á esperar

3—Un deudor hipotecario trasfirió á otro la hipoteca constituida á favor del Banco Hipotecario de la Provincia. No se gestionó la aceptación de esa transferencia por el acreedor común. Esa falta de aceptación no puede nunca afectar al segundo deudor hipotecario, pues que su situación en vez de ser más gravosa es menos onerosa, porque el Banco podrá ejercitar su acción contra el deudor primitivo dejando libre al segundo adquirente. Resulta, pues, que sólo los derechos del cedente hipotecario pueden ser lesionados por la falta de aceptación de la transferencia de la hipoteca.

1.^a—La ley da al síndico, como representante del acreedor; lo que por otra parte es ajustado al procedimiento del juicio de concurso, pues la intervención de los acreedores traería la confusión en la marcha regular del concurso. Los acreedores no pueden intervenir salvo los casos espresamente determinados.

1—La acción contra el esposo no puede ser enervada por la testa-



la liquidación de la testamentaria de la esposa para la ejecución de sus créditos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 12, Serie 4ª.

2. **Acreedores del viudo**—Los acreedores del marido no lo son de la sucesión de la esposa.—Jur. Civ., tom. 3, página 63, Ser. 4ª.

Acta matrimonial—Véase: *Esposos*, núm. 1.

Acto—Véase: *Escritura pública*, núm. 10—*Interdicto*, núms. 2 y 3—*Bautismo*, núm. 1—*Día*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 12—*Mandante*, núm. 3—*Documentos públicos*, núm. 2—*Mandato*, núm. 13—*Escritura de venta*, número 1.

Acto anulado—Véase: *Nulidad*, núm. 4.

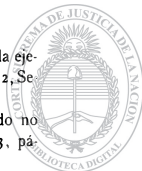
Acto condicional—Véase: *Condiciones impuestas*, número 1.

1. **Acto de administración**—La contestación á una demanda de daños y perjuicios procedentes de un accidente ó cuasi-delito ocurrido con motivo de una construcción, es acto de administración.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 79, Serie 4ª.

mentaria de la esposa, porque ésta nada tiene que ver con aquella. Los derechos y obligaciones existentes entre esposos por el hecho del matrimonio se resuelven entre ellos y sus herederos, salvo el caso de concurso. Han contratado con una persona determinada y solo contra ella deben seguir sus gestiones tendentes al cumplimiento del contrato.

2—La acción era dirigida contra el marido, no contra la sucesión de la esposa.—Véase nota precedente.

1—Una demanda se dedujo contra el constructor de obra en su carácter de director de una sociedad anónima, por ser el único que atendía á todos los servicios, pagos y demás actos de la administración como principal. Por consiguiente el director estaba obligado á entender en la demanda que reconocía como causa eficiente un accidente acaecido en las construcciones que él dirigiese, y que siendo un acto de administración lo debe atender el que administra.





Acto del remate— Véase: *Remate judicial*, núm. 3.

1. **Acto ilícito**—La calificación de prófugo hecha al rebelde, no importa la comisión de un acto ilícito que pueda fundar una acción por daños y perjuicios.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 312, Ser. 3^a.

2. **Acto ilícito**—La demanda por daños y perjuicios es improcedente, mientras no se justifique la existencia del acto ilícito punible y el dolo, culpa ó negligencia del agente.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 55, Ser. 3^a.

3. **Acto ilícito**—El propietario tiene derecho de desalojar como intruso al que ocupa su propiedad sin su consentimiento, sin que este acto importe un acto ilícito.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 167, Ser. 3^a.

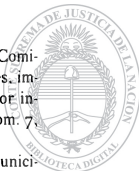
4. **Acto ilícito**—La omisión, por parte de una empresa de transporte, de medidas tendentes á prevenir el daño á terceros en sus vías, es un acto ilícito por el cual es responsable civilmente de los daños y perjuicios que haya causado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 36, Ser. 3^a.

1—La demanda tuvo por fundamento el hecho de haber un Juez de Corrales calificado de prófugo á un rebelde; la Cámara dijo que la palabra prófugo podrá no ser adecuada, pero no se puede exigir que los conocimientos de un Juez lego, vayan hasta más allá de lo que quiere la ley, y que ese epíteto ninguna sombra puede traer sobre su reputación.

2—Art. 1067 del Cód. Civ.

3—Art. 1071 del Cód. Civ.

4—El juicio fué motivado por un choque habido entre una locomotora y un carro, ocurrido en una de las calles de Barracas. De ese choque resultó destrozado el carro, y su conductor gravemente herido. El actor justificó que la calle donde ocurrió la catástrofe se hallaba casi obstruida por una hilera de wagones de carga, dejando para el tránsito público el espacio que ocupa un wagón y que como no sintiera movimiento alguno, ni avisara nadie de la proximidad, se determinó á cruzar, pero en ese momento una locomotora que no había dado aviso por medio del silbato, como es de práctica hacerlo á distancia conveniente; chocó con el carro haciéndolo pedazos é hiriendo gravemente



5. **Acto ilícito**— Los actos llevados á cabo por un Comisario de Policía, estralimitando sus facultades legales. Importan un acto ilícito que puede funda una acción por indemnización de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

6. **Acto ilícito**—La construcción sin permiso municipal, importa un acto ilícito, y arroja sobre el propietario al conductor. La empresa fué condenada á pagar los perjuicios ocasionados, fundándose en que el siniestro fué causado por culpa del conductor que no dió aviso de su aproximación, y que no fué avisado por nadie de la existencia del peligro. La cuestión se reduce á saber si el choque se produjo por un hecho imputable á la empresa, y si ésta es en consecuencia responsable de los perjuicios causados. La obstrucción indebida de la calle por los wagones que estaban allí estacionados, la ausencia de un guardavia encargado de vigilar y avisar á los transeúntes el movimiento de las máquinas para evitar los peligros, y la circunstancia de que el silbato no se hizo oír, dicidieron por la culpabilidad de la empresa, pues la falta de todo aviso ó señal era una garantía de hallarse espedita la vía. La ley de ferrocarriles nacionales prescribe entre otros deberes de las empresas, el de establecer guardavías y poner barreras en todos los puntos en que cruzaren los caminos á nivel, estableciendo igualmente que estas barreras deben cerrarse á la aproximación de cada tren y abrirse después que haya pasado, para dejar espedito el tráfico—art. 2.—Si el guarda por lo menos, hubiese estado en su lugar, la catástrofe no se habría producido. La omisión de la empresa, es, pues, evidente y la misma omisión por parte del conductor al dejar de avisar por el silbato su proximidad. Siendo imputable á la empresa el accidente, su responsabilidad es inevitable y evidente en derecho. Esta doctrina está de acuerdo con la jurisprudencia establecida.—Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Acto ilícito*, núm. 3; *Daños y perjuicios*, núms. 24 y 25.

5—Arts. 1109 y 1112 del Cód. Civ.

6—El demandado contrariando disposiciones municipales vigentes y las órdenes recibidas del inspector municipal, hizo cavar un pozo, en el patio de la casa de su propiedad, destinado á recibir los desagües de la misma. El Inspector ordenó la suspensión de la obra, aplicando una multa y mandando cegar el pozo; y no obstante ésto la construcción se hizo hasta terminarla, produciéndose más tarde el hundimiento de la tapa que lo cubría. Dicho hundimiento tuvo lugar en circuns-



la responsabilidad de cualquier accidente que por defecto de construcción pudiera ocasionarse á terceros.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 253, Ser. 4^a.

7. **Acto ilícito**—La acción de simulación de un acto público entre las partes que lo llevan á cabo, es improcedente siempre que se reconozca la existencia de un acto ilícito en perjuicio de tercero.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 220, Ser. 4^a.

tancias que se encontraban sentadas en el patio la esposa del actor y una hija, estando allí de visita: la niña cayó dentro del pozo pereciendo en él no obstante los auxilios prestados. Ahora bien, el hecho del hundimiento ó desmoronamiento del pozo donde cayó y pereció la niña ¿es imputable al demandado? ¿Es éste responsable por las consecuencias legales de ese hecho? El pozo fué hecho sin permiso de la autoridad municipal, en contravención á la ordenanza reglamentaria de construcción de fecha 21 de Junio de 1887. El pozo se hizo pues en contravención de las ordenanzas municipales. Si se hubiese solicitado el permiso, el pozo no se habría hecho en las condiciones que se construyó. Si se hubiese construido con el permiso correspondiente, la responsabilidad habría desaparecido. La construcción en esas condiciones, es un hecho ilícito, porque es contra la ordenanza citada.—artículo 1066, Cód. Civ.—Los hechos ilícitos se denominan delitos cuando han sido ejecutados á sabiendas y con intención de dañar la persona y los derechos de otro—art. 1072.—El hecho ilícito, no fué seguramente ejecutado con intención de dañar, en este caso, y por consiguiente no constituye un delito. Todo acto ilícito hecho sin intención de dañar, como el que nos ocupa, es un cuasi-delito ó simplemente un acto ilícito que responsabiliza por sus consecuencias al autor—arts. 1107 y siguientes.—La responsabilidad que nace de un delito, es diferente de la que nace de un hecho simplemente ilícito. El principio general es que hay daño causado por un delito siempre que resulte de esto algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria—arts. 1068 y 1069.—La responsabilidad procedente de un delito es más estensa, como puede verse en los arts. 1073 y siguientes. De acuerdo con lo establecido en el art. 1109 y concordantes citados del Cód. Civ., resulta que el sumario consagra los principios sentados por la ley.

7—Art. 959 del Cód. Civ.



8. **Acto ilícito**—La absolución del procesado ante la jurisdicción criminal, no basta para eximirlo de la responsabilidad que la ley civil le impone por aquellos actos ilícitos que por su culpa ó negligencia hayan irrogado un perjuicio.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 97, Ser. 4^a.

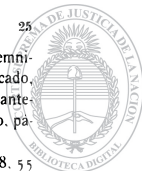
9. **Acto ilícito**—La suma dentro de la cual el damnificado por un acto ilícito ó cuasi-delito, debe prestar el juramento estimatorio, debe ser fijada según el prudente arbitrio del Juez, teniendo en cuenta las constancias de autos.—Jur. Civ. tom. 6, pág. 103, Ser. 4^a.

10. **Acto ilícito**—La absolución del reo ante el Juez del Crimen no forma prueba sobre su culpa ó negligencia en el juicio civil por indemnización de los daños y perjuicios emergentes del acto ilícito.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 154, Ser. 4^a.

8—Esta cuestión fué resuelta por mayoría de votos en el sentido del sumario, el que por otra parte está de acuerdo con la jurisprudencia sentada.—Véase: Inst., tom. 2^o; verb. *Daños y perjuicios*, núm. 3.—La minoría dijo, que la resolución de la cuestión en el juicio criminal hace cosa juzgada para el civil, pues en derecho no existen dos culpas, y por lo tanto cuando existe absolución del acusado en el juicio criminal, no puede promoverse acción civil proveniente del mismo hecho que motiva aquella absolución, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 1103 del Cód. Civ.

9—Arts. 519 y 1083 del Cód. Civ.

10—Del estudio comparado de los arts. 1102 y 1103 del Cód. Civil, así como de la nota explicativa del codificador, resulta que en el juicio civil no puede invocarse la resolución del juicio criminal. Un hecho puede ser imputable á determinada persona, sin que ésta sea un delincuente ó un criminal. La misión de los Tribunales del Crimen es establecer si el hecho atribuido al acusado existe: si el inculcado es el autor, y si ese hecho le es imputable según la ley penal como delito del derecho criminal. Los Tribunales del crimen, á no ser que la persona perjudicada se haya presentado en el juicio, no tienen que decidir si el hecho constituye ó nó un delito del derecho civil ó un cuasi-delito. Cuando se sobresee en una causa por homicidio, no es porque el hecho



11. **Acto ilícito**—La fijación del monto de la indemnización que el autor de un acto ilícito debe al damnificado, debe ser hecha por los Tribunales con arreglo á los antecedentes que suministre el litigio.—Jur. Civ., tom. 10, página 337, Ser. 4ª.

Acto ilícito—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 7, 8, 55 y 71.

1. **Acto jurídico**—La acción de nulidad de un acto jurídico, no exime á las partes de ser compelidas al cumplimiento, bajo la responsabilidad del que lo solicita.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 90, Ser. 3ª.

2. **Acto jurídico**—Se prescribe á los años el derecho de pedir la nulidad de un acto jurídico, por error; y el término corre para los firmantes, desde la fecha del acto.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3ª.

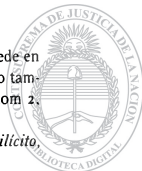
Acto jurídico—Véase: *Nulidad de un acto jurídico*, números 2 y 3—*Daños y perjuicios*, núm. 42—*Mandato*, núm. 13—*Simulación*, núm. 13—*Escritura*, núm. 4.

de la muerte no exista, sino porque ella no es imputable á la parte. Pero si el hecho de la muerte fué producido, el hecho generador de la obligación existe. Se resuelve que según la ley penal el hecho no le es imputable á la parte; en el juicio civil debe resolverse si según la ley civil le es imputable ese mismo hecho. Esta resolución está de acuerdo con la jurisprudencia sentada en casos análogos. Véase, Inst., tom. 1º, verb. *Cosa juzgada*. Por otra parte, el sobreseimiento provisorio tampoco hace cosa juzgada, aun para el juicio criminal, como lo tiene resuelto la Excm. Cámara. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Sumario*, núm. 2, y *Cosa juzgada*, núm. 1.

11—Véase el núm. 9.

1—La Cámara no resolvió lo que espresa el sumario, solo dijo que mientras no se pronuncie sobre si efectivamente existe ó nó nulidad, deben garantizarse los intereses de los litigantes cuando éstos lo pidan y en su consecuencia procede el embargo preventivo á los efectos indicados. No es por consiguiente exacto que las partes puedan exigir el cumplimiento del acto jurídico atacado de nulidad.

2—Art. 4030 del Cód. Civ.



1ª. **Acto lícito**—La ignorancia del derecho, no puede en ningún caso fundar la nulidad de un acto lícito, pero tampoco puede dar validez á un acto nulo.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 160, Ser. 3ª.

Acto público—Véase: *Testamento*, núm. 3—*Acto ilícito*, núm. 7.

1ª. **Acto simulado**—La confesión por escritura pública de que el acto que consta por instrumento público era simulado, vuelve las cosas al mismo é igual estado que tenían antes, pero sus declaraciones sobre derechos anteriores al acto simulado carecen de valor legal.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 157, Ser. 4ª.

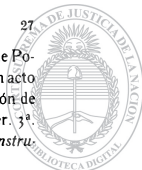
Acto simulado—Véase: *Simulación*, núm. 6.

1ª. **Actos**—El Ministerio de Menores está obligado á reconocer y considerar como válidos los actos llevados á cabo con su intervención cualquiera que sea la persona que desempeñe el puesto.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 241, Serie 3ª.

1ª—La ignorancia de las leyes ó el error de derecho jamás puede servir de excusa para impedir los efectos legales de los actos lícitos, ni para evadir la responsabilidad de los ilícitos. Cuando se habla de actos lícitos se les supone válidos porque éstos son los únicos que pueden producir efectos legales, como se explica en la nota al art. 923 en la cual se dice: «El sentido de la máxima *error juris nocet*, es bien claro: perjudica al que pretende escapar de las consecuencias legales de un acto jurídico regular y válido. Si por ignorancia ó error se omite la forma esencial de un acto jurídico, no por eso los agentes resultarían obligados; por el contrario, siendo nulo el acto, no puede producir efecto alguno, ni originar obligaciones, según el principio *quo de jure nullum est nullum sortitur effectum*».

1ª—Art. 1050 del Cód. Civ.

1ª—El art. 1048 del Cód. Civ. establece que la nulidad relativa no puede ser declarada sino á petición de aquellos en cuyo beneficio lo han establecido las leyes, ni puede ser pedida por el que ejecutó el acto sabiendo ó debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Esta prescrip-



2. **Actos**.— Los llevados á cabo por un Comisario de Policía estralimitando sus facultades legales, importan un acto ilícito que puede fundar una acción por indemnización de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 370. Ser. 3^a.

Actos.— Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 14—*Instrumento privado*, núm. 1—*Revocación*, núm. 1.

1^a. **Actos comerciales**.— El conocimiento del juicio sobre actos comerciales de una sociedad anónima, corresponde á la jurisdicción comercial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 19. Ser. 4^a.

Actos de propietario.— Véase: *Venta*, núm. 4.

Actos de sevicia.— Véase: *Divorcio*, núm. 8.

Actos del deudor.— Véase: *Acción pauliana*, núm. 1.

Actos del mandatario.— Véase: *Instrumento privado*, número 1.

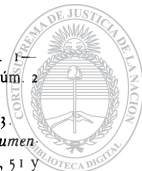
1^b. **Actos judiciales**.— El apoderado ó procurador judicial puede representar ó acompañar á su poderdante en todos los actos ó diligencias judiciales.—Jur. Civ., tom. 7, página 127, Ser. 3^a.

ción legal es aplicable al Ministerio de Menores cuando interviene y acepta un convenio celebrado, aunque él haya sido celebrado por otra persona ó funcionario á cargo ántes de las mismas funciones, pues el Ministerio Público es indivisible en el sentido de que los actos pasados en autoridad de cosa juzgada con intervención de uno de los funcionarios que lo desempeñan, obligan respecto de ese acto á todos los que suceden en el cargo. Lo contrario lejos de beneficiar á los menores, heriría de muerte sus intereses; separándolos por completo del comercio, pues que nadie contrataría sobre intereses de menores: las transacciones no reposarían sobre una base seria, si hubieran de ser susceptibles de tantas transformaciones cuantas fueran las renovaciones del personal del Ministerio Público en el largo trascurso del tiempo necesario para que un menor llegue á la mayor edad.

2.— Véase: verb. *Acto ilícito*, núm. 5.

1^a.— Arts. 7 y 8, inc. 6^o del Cód. de Com.

1^b.— Es un derecho acordado por la ley á los litigantes.



Actos jurídicos— Véase: *Escritura pública*, núm. 1—*Nulidad de un acto jurídico*, núm. 1—*Simulación*, núm. 2—*Transacción*, núm. 2.

Actos personales— Véase: *Contradocumento*, núm. 3.

Actor— Véase: *Cuenta presentada*, núm. 1—*Documentos*, núm. 2—*Costas*, núms. 8, 9, 10, 11, 23, 46, 49, 51 y 52—*Alimentos*, núm. 5—*Incapaz*, núm. 1—*Interdicto de adquirir*, núm. 2—*Interdicto de recobrar*, núm. 11—*Bienes determinados*, núm. 1—*Jactancia*, núm. 5—*Mandatario*, núm. 17.

Actuaciones— Véase: *Domicilio*, núm. 13.

Actuario— Véase: *Ratificación*, núm. 3—*Notificación*, núm. 10.

1^a. **Acusación calumniosa**— No procede la acción de daños y perjuicios fundada en una acusación calumniosa, si el demandado se limita a la denuncia del delito ante la Policía, sin designar la persona que lo hubiere cometido ni hacerse parte en el juicio criminal.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 107, Ser. 4^a.

Acusación criminal— Véase: *Absolución*, núm. 1—*Acción civil*, núm. 1.

1^b. **Acusaciones**— El Poder Judicial tiene derecho y está obligado a entender en las acusaciones, sean civiles o criminales, que se inicien contra empleados públicos, aun por actos que hayan merecido la aprobación de sus superiores, sin que esto importe obstaculizar la acción de otros Poderes, ni estralimitación de facultades que le son propias.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

Acusado— Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 12.

1^a— De acuerdo con la ley y la jurisprudencia establecida. Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 9.

1^b— Véase: verb. *Empleados públicos*, núm. 1.



Adjudicaciones—Véase: *Bienes de la sucesión*, núm. 1—*Herederos mayores*, núm. 1—*Herederos forzosos*, núm. 1—*Petición de herencia*, núm. 3—*Bienes testamentarios*, núm. 1.

Ad-mensuran—Véase: *Venta ad-corporis*, núm. 1.

1ª. Administración—Los informes de las oficinas públicas, ya sean de la administración ó de los escribanos de registro, son pruebas que ofrecen más garantías de exactitud que la pericial cuando se trata del precio de terrenos sin edificio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 220, Ser. 3ª.

Administración—Véase: *Herencia en efectivo*, núm. 1—*Albacea*, núm. 3—*Mandatario*, núm. 9—*Rendición de cuentas*, núm. 9—*Curador*, núm. 1—*Divorcio*, núm. 7—*Condominio*, núm. 1—*Tutor*, núm. 12.

1ª. Administrador—La ley supone que los fondos suplidos al administrador lo han sido para uso del establecimiento: el tercero no debe justificar ese extremo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 214, Ser. 3ª.

1ª—Esto no lo resolvió la Cámara: dijo todo lo contrario, que como principio general no admitía duda de que la prueba pericial es la que ofrece mayores garantías de exactitud y de acierto, pero que en el caso resuelto no podía imperar ese principio: 1.º Porque el dictamen de los peritos no era uniforme, condición requerida por el art. 178 del Cód. de Proc. para que constituya prueba legal, y 2.º Porque para la apreciación de la tierra no hay peritos especiales designados por la ley. La Dirección de Rentas informó y ese informe fué corroborado por un escribano público que dió el precio de venta de los terrenos próximos, según constancias de sus libros de protocolos. En tales casos nada más lógico que acordar mayor fuerza probatoria á los informes.

1ª—El administrador es un mandatario y está autorizado para contraer deudas en el ejercicio de esa administración y dentro de los límites generales. En el caso presente estaba espresamente autorizado al efecto por su principal, siendo desde luego aplicable la disposición del art. 1946 del Cód. Civ.



2. **Administrador**—De la herencia, el albacea no puede oponerse al nombramiento de un heredero reconocido aunque no declarado, como administrador de la herencia.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 361, Ser. 4ª.

3. **Administrador**—No debe tomar posesión de aquellos bienes que un heredero alegue tener á nombre propio, aun cuando sean de los incluidos en el testamento.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 27, Ser. 4ª.

4. **Administrador**—La separación voluntaria de los cónyuges no altera las facultades de administrador de los bienes propios de la esposa, con las que la ley ha investido al marido.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 49, Ser. 4ª.

2—No entra en sus atribuciones, pues las del albacea se limitan á las indispensables para dar cumplimiento á las disposiciones del testador, adoptadas con arreglo á los preceptos de la ley, principalmente en lo que se refiere á la institución de legados—art. 3851, Cód. Civ.—Y solo por escepción está facultado á intervenir en las contestaciones relativas á la validez del testamento ó sobre la ejecución de las disposiciones que éste contenga—art. 3862, ibid.

3—El art. 643 del Cód. de Proc. al establecer el nombramiento de un administrador, se refiere á los bienes que forman el caudal hereditario—art. 642.—El testamento no es por sí solo título bastante para que un bien haya de conceptuarse comprendido en el caudal hereditario, y mucho menos cuando existe oposición de parte interesada que sostiene su derecho excluyente. El art. 660 tiene resuelto que para los casos de inclusión ó exclusión de algunos bienes debe seguirse juicio contradictorio en pieza separada. Mientras no termine ese juicio, nada autoriza á innovar en los derechos de dominio y posesión que cualquiera pueda tener sobre dichos bienes por más solemne que sea la manifestación hecha en el testamento.

4—El Cód. Civ., tanto en el título «del matrimonio»—hoy regido por la ley de Matrimonio Civil—como en el de «la sociedad conyugal», ha acordado al marido, entre otras numerosas facultades, la de administrar todos los bienes del matrimonio desde que éste principia hasta que se disuelve, espresando los casos en que esa administración cesa ó pasa á la mujer casada. La interpretación de los artículos 64 y 66 de la Ley de Matrimonio Civil, establece que para que la separación judi-

Administrador—Véase: *Mandatario*, núm. 1 — *Acción ejecutiva*, núm. 1 — *Rendición de cuentas*, núm. 1 — *Divorcio*, núm. 7.

1. **Administrador judicial**—La viuda del causante, nombrada judicialmente administradora de los bienes, tiene derecho á cobrar honorarios.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 21. Ser. 4^a.

2. **Administrador judicial**—El embargo de alquileres hace procedente el nombramiento de administrador judicial. Jur. Civ., tom. 8, pág. 51, Ser. 4^a.

3. **Administrador judicial**—Reconocida la existencia de una sociedad verbal, procede el nombramiento de administrador judicial, si no existe acuerdo entre los socios.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 91, Ser. 4^a.

cial de los esposos surta sus efectos legales, es indispensable que ella sea decretada por sentencia de juez competente dictada en el juicio respectivo de divorcio, llegando hasta prohibir que éste tenga lugar por mutuo consentimiento de los esposos. Si la separación voluntaria es ilegal y nula, fluye lógicamente que ella no puede alterar los vínculos y relaciones jurídicas que competen á marido y mujer, ni limitar la órbita de sus facultades y atribuciones conferidas por el art. 1276 del Código Civil.

1—El art. 683 del Cód. de Proc. le acuerda este derecho, de una manera espresa y terminante.

2—La Cámara dijo que siendo procedente el nombramiento de un depositario judicial dado el embargo decretado sobre los alquileres, debía confirmarse el auto en que se nombraba administrador. Son dos cosas bien distintas, el nombramiento de administrador y el de depositario: las facultades de uno y otro son bien diversas. No vemos la necesidad del nombramiento de depositario para los alquileres embargados, pues basta que el inquilino los deposite en el banco á la orden del Juzgado.

3—Reconocida la existencia de la sociedad, y no habiendo socio administrador nombrado, son todos ellos considerados como administradores—art. 1676 del Cód. Civ.—Pero si no hay acuerdo, puede aplicarse, por analogía, el art. 1684.



Adopción—Véase: *Filiación legítima*, núm. 2.

Adquirente—Véase: *Indivisión*, núm. 1.

1. Adoquinado—El pago del importe del adoquinado no

1—Esta cuestión fué resuelta por mayoría de votos revocando la sentencia de 1.^a Instancia, aduciéndose de ambas partes razones poderosas y que hace necesaria otra resolución en el mismo sentido á fin de sentar jurisprudencia. La cuestión á resolver es esta: la obligación que con arreglo á la ley de Noviembre de 1888, pesa sobre las empresas de tramways, de contribuir al pago del adoquinado en la proporción que determina el art. 1.^o de esa ley, ¿es ó no un impuesto? La mayoría de la Cámara dijo que sí, fundándose en que son impuestos los recursos que un Gobierno ó una Municipalidad exige de los particulares en su calidad de mandatario Nacional, Provincial ó Municipal según el caso, para atender con ellos los servicios públicos de que están encargados. Son, como dice Colmeiro, —tom. 2.^o, pág. 173, *Derecho Administrativo*—la primera deuda de la propiedad, y su conjunto forma la renta de un estado. El Gobierno no puede ni debe ser productor á semejanza de los particulares; y por eso, para subvenir á las cargas públicas, pide al individuo una parte alícuota de su fortuna, que cada miembro de la sociedad cede por el bien general. Se ve, pues, que es esencial á todo impuesto que su producido, percibido directa ó indirectamente por el Estado ingrese á sus arcas para ser distribuido según lo exijan las necesidades de la Administración, ó para ser aplicado á los fines que espresamente determine la ley. En nuestro régimen institucional, y concretando la cuestión de acuerdo con las leyes que rigen el sistema municipal, todo impuesto supone una sanción previa del Consejo Deliberante, que lo incorpora al cálculo de recursos que anualmente se sanciona. Y bien ¿reune aquellos caracteres la obligación que la ley del Congreso impone á las empresas de tramways de pagar la cuarta parte del adoquinado? Indudablemente nó. La Municipalidad no percibe suma alguna con motivo de la construcción de adoquinado, por el contrario, de acuerdo con las leyes de 1.^o de Octubre y 12 de Noviembre de 1888, contribuye con una parte á retribuir ese servicio, y por consiguiente, tampoco figura ninguna cantidad de semejante origen, en las partidas destinadas á subvenir los gastos que su administración reclama. Esa obligación de pagar el adoquinado, que la ley proporcionalmente distribuye entre el propietario y el empresario de tramways, tiene entonces su razón de ser en el beneficio que directamente reciben, y es una de tantas cargas que pesan sobre los propietarios, por mejoras que aunque aprovechan también á la comunidad,—por cu-



puede calificarse de impuesto, y en consecuencia, no se en-

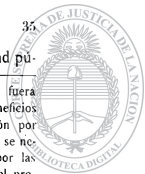
yo motivo la Municipalidad concurre con una cuota—interesan más directamente á aquellos, sin que en ningún caso determinen un ingreso á las arcas municipales. Se alega que esta última circunstancia concurre en la cuota de afirmados: que es un impuesto cuyo producido recoge la Municipalidad, y para el efecto hace el siguiente raciocinio: «El producido del impuesto de alumbrado en definitiva, va á las cajas de las empresas que prestan ese servicio público ¿y deja por eso de ser un impuesto? El impuesto de aguas corrientes, cloacas y desagües, es cobrado directamente por la Empresa arrendataria de las Obras de Salubridad, y no por eso deja de ser impuesto, aunque su producido no ingresa directamente en las arcas fiscales». Es bien deleznable semejante argumentación. A ella se contesta con lo ya dicho. El pretendido impuesto no figura en parte alguna del cálculo de recursos de la Municipalidad; esta corporación, lejos de percibir con motivo de la construcción de adoquinados, contribuye proporcionalmente á satisfacer ese servicio: desembolsa en vez de cobrar. No sucede lo mismo con el impuesto de alumbrado: él figura en el cálculo de recursos de la Municipalidad, lo percibe directamente del vecindario en la proporción que la ordenanza establece, para pagar el servicio á la empresa que lo presta. Ni es aplicable tampoco lo que acontece con el impuesto de aguas corrientes, arrendado en crecidas sumas que han ingresado al Tesoro Nacional. Además que cuando se dictó la ley de 1876, que invocaba á su favor el ejecutado, no se tuvo en cuenta la construcción de afirmados como el que ha dado margen á este litigio, y que al referirse á exoneración de impuestos provinciales ó municipales, entendía que era á aquellas contribuciones que entonces ingresaban al tesoro, ó á otras análogas que más tarde también se percibieran. Por consiguiente, el fundamento de que me he ocupado, no es suficiente á determinar la prosperidad de la excepción. Se sostiene que el título en que se funda la ejecución sería también inhábil porque las leyes de 1.º de Octubre y 13 de Noviembre de 1888 hacen obligatorio el pago del adoquinado que se mande efectuar por la Municipalidad, según la primera, ó se mande construir según los términos que emplea la segunda de esas leyes; y según el certificado el contrato del ejecutante con la Municipalidad para la construcción del adoquinado que se cobra, se celebró el 9 de Abril de 1888, es decir, mucho antes de sancionarse esas leyes, las que solo disponen para lo futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos ya adquiridos. Tampoco estamos de acuerdo con esta conclusión, pues entendemos, que la ley de Noviembre de 1888 es apli-





cuentra comprendido en la escepción que sobre pago de

cable á todos los tramways que atraviesan calles que en las fechas de la promulgación no estuvieran adoquinadas; y es exacto lo alegado por empresarios de afirmados que las que cruza el tramway Rural no lo estaban en esa época, pues de lo contrario el ejecutado hubiera hecho mérito de tal circunstancia y, sin embargo, no la ha invocado, resultando, por lo demás, una presunción favorable para el primero, de las constancias que arroja la misma cuenta en que la ejecución se funda. Para que la citada ley de Noviembre alterase derechos ya adquiridos por el ejecutado, hubiera sido menester comprobar la construcción de los adoquinados con anterioridad á esa fecha, y entre tanto, de autos resultaba que aquél únicamente se había preocupado de establecer, con el certificado espedido, que el contrato para la ejecución de ese trabajo se celebró antes de la promulgación de la ley. También alegaba el ejecutado que no está en la obligación de pagar la cuota que se le reclama, por cuanto el art. 2º de la ley de 1º de Octubre de 1888 impone esa carga tan solo á los propietarios de casas y terrenos que paguen Contribución Directa, y él, en virtud de los preceptos de la ley provincial de 1876, está exonerado de ese impuesto. Es insostenible semejante pretensión, pues la ley de Octubre no ha podido referirse sinó á los propietarios de casas y terrenos, pero en manera alguna á los empresarios de tramways, que ningún derecho de propiedad pueden alegar sobre los terrenos que son cruzados por sus vías á lo largo de las calles. Por lo demás, fácil es fijar la verdadera inteligencia de la ley de Octubre, si se tienen presentes los casos de exoneración del pago de impuesto de Contribución Directa establecidos en la ley de la materia,—que comprende á los templos consagrados á los cultos religiosos, los conventos, los edificios públicos destinados á escuelas gratuitas.—La minoría decía: Ya se denomine aquella carga á los propietarios y á las empresas de tranways para costear los gastos del adoquinado, gravamen, impuesto ó contribución, su exoneración está comprendida en los términos de la ley recordada, y que esta interpretación el principio aceptado por la legislación civil de que los contratos obligan no solo á lo que está formalmente expresado en ellos, sino también á todos las consecuencias que pueden considerarse que hubiesen sido virtualmente comprendidas en ellos—art. 1198, Cód. Civ.—La naturaleza de la concesión y la forma y condiciones en que fué solicitada y acordada por el Gobierno, son antecedentes que lo demuestran y que deben por lo mismo tenerse presentes. Estudiando esa ley sobre tramways, ya recordada, se llega fácilmente á comprender que ella fué inspirada con



impuestos se ha concedido á diversas obras de utilidad pú-

el propósito de favorecer su construcción en grandes distancias, fuera de los centros de población, y es teniéndose en cuenta los beneficios que debía producir, que se ha tratado de facilitar su realización por medio de concesiones que, á la vez de atraer los capitales que se necesitaban para llevarlos á cabo, les ofrecía una compensación por las ventajas que debían producir para el público en general y para el progreso de la provincia directamente. Se explica así que además de la exoneración de todo impuesto fiscal ó municipal por el término de veinte años, se haya acordado también á la empresa demandada hasta una garantía del cinco por ciento sobre el costo de la construcción de la línea desde el día y á medida que se hubieran librado al servicio público las diversas secciones, tomando por máximum el valor de cinco mil pesos fuertes por cada kilómetro—art. 5º de contrato.—Ahora bien, si además de la exoneración de todo impuesto y si además también de otras ventajas y concesiones que espresa el contrato referido, el Gobierno ha garantido á esta empresa en la forma espresada, se deduce que no pudo ser su mente reservarse la facultad de gravarla posteriormente con otros impuestos ó contribuciones de ningún género, haciendo de esta manera ilusorias las garantías y beneficios acordados para su realización, y es entonces lógico decir que cualquier impuesto ó contribución creados por leyes posteriores, aun aquellas que tengan un carácter transitorio, han sido virtualmente comprendidos en la misma concesión, conforme á lo dispuesto por la ley civil, al tratar de los efectos de los contratos. Pero se ha hecho además cuestión de lo que debe considerarse bajo la denominación de *impuesto*, sosteniendo que no deben llamarse tales las obligaciones emanadas de leyes sancionadas posteriormente con respecto á la forma y condiciones en que debe hacerse el pago de los adoquinados que se construyen por la Municipalidad en las calles públicas de este municipio, aunque lo espuesto demuestra con claridad la falta de consistencia de esta observación, débese sin embargo, agregar que esta obligación es también una contribución ó impuesto público, que pesa directamente sobre el propietario en la proporción determinada por la ley, como son también impuestos todas las demás cargas ó contribuciones que el Estado ó los Poderes públicos que lo forman, imponen para costear los gastos de la Administración, como una condición de su existencia. Sin detenerse en la averiguación del origen de los impuestos, y cuyo sistema, por demás complicado, es materia de largos estudios, como lo enseña Laferriere en su *Tratado de Derecho Público y Administrativo*, nos basta saber que esa palabra, en



blica llevadas á cabo por empresas particulares.—Jur. Civil, tom. 3, pág. 260, Ser. 4^a.

su acepción legal, significa toda contribución, carga ó tributo exigido por el Estado para atender á sus necesidades. La misma acepción le dñan los economistas, comprendiendo en aquella denominación tanto las cargas de carácter permanente como las puramente transitorias ó periódicas, dentro de la división de impuestos directos é indirectos. Lo enseña así el mismo Laferriere en su obra *Derecho Público y Administrativo* citado—tom. 2º, caps. 1º y 2º.—El doctor Ferreyra, en sus *Estudios sobre el derecho administrativo de la República*, al tratar de las contribuciones que pueden imponerse por los Poderes públicos de la Nación ó los Estados en particular—cap. XI,—así como Menier en su opúsculo *El impuesto sobre el capital*; Linguet-Squiron en su notable obra sobre impuestos; Proudhon en su teoría sobre la misma materia, y tantos otros. Lo consagra, por otra parte, la legislación misma en general. En Francia, tanto en el antiguo sistema que abrazaba las tres ramas de contribuciones conocidas en el derecho moderno, como durante el período de la revolución, que cambió ese sistema, y posteriormente hasta nuestros días, aparece empleándose siempre la misma palabra impuestos á todas las contribuciones ó cargas que gravitan sobre la propiedad ó las personas con destino á costear los gastos de la Administración y cualquier servicio ú obra pública. La legislación financiera de la República no ha sido menos uniforme desde sus primeros tiempos. Basta consultar las leyes de Presupuestos Nacionales, como de Provincia, así como las especiales sobre las diversas ramas de impuestos que aquellas enumeran como fuentes de recursos para cubrir los gastos de la Administración. Lo mismo puede decirse con respecto á los impuestos de carácter municipal establecidos por sus ordenanzas en los diversos ramos que son de su competencia. Son así impuestos fiscales las contribuciones, gravámenes ó derechos que se cobran sobre la importación ó la esportación, sobre el almacenaje, el Papel sellado, las Patentes, Contribución Directa, Correos y Telégrafos, Ferrocarriles y tantos otros creados sobre diversas materias por las leyes de la Nación; como son impuestos municipales los establecidos por sus ordenanzas sobre los ramos de su competencia y que esa repartición de la Administración pública retribuye al contribuyente en los servicios á que se destinan. Toda contribución es, pues, un impuesto que grava la propiedad ó el capital, ya lleve la forma de una Contribución Directa, como la que gravita sobre la propiedad territorial, ó indirecta, como es la de aduana, la de piso, peage, pontazgo, estafetas, limpieza pública, alum-



2. Adoquinado—El pago del importe del adoquinado no

brado, patentes de rodado, etc. En esta denominación se encuentra la que se ha creado para costear los gastos de adoquinados que se construyan por la Municipalidad, y como se han creado por los Poderes públicos que deben considerarse una continuación de los que contrataron con el demandado, acordándole los beneficios que éste invoca, tiene entonces derecho á considerarse exonerado del pago que se le exige y á oponer, como opuso, una escepción que la ley lo autoriza y procede en justicia. Poco importa, por lo mismo, saber si ese impuesto es percibido directamente por la Municipalidad, si entra en sus arcas á formar parte de su tesoro, ó si, por el contrario, lo recibe el empresario que tome á su cargo la construcción del adoquinado. No es esto esencial, por cuanto esta circunstancia no le quita las condiciones de una carga pública, impuesto ó contribución, llámese como se quiera, que solo ha podido imponerse por medio de una sanción emanada de los Poderes públicos, que ya habían acordado su exoneración espresamente al demandado. En autos se encontraban los antecedentes emanados de la Municipalidad de esta Capital y de la Dirección General de Rentas, de que se había hecho mérito por el ejecutado en justificación de la escepción que opuso. El primero de esos antecedentes es una sanción del Concejo Deliberante, que lleva la fecha de 26 de Abril de 1889, por la que se declara que el impuesto de o por ciento creado por la ley de Noviembre de 1888, no afecta el producido del tramway Rural, en conformidad á la ley de 4 de Noviembre de 1876 citada, sobre la que se basa la concesión; y el segundo, es una resolución de la Dirección de Rentas, en que se declara que los terrenos, que corresponden á la empresa del espresado tramway, ocupados por la vía, estaciones y talleres, se encuentran exonerados del pago del impuesto de la Contribución Directa, establecido por la ley de la Nación, de conformidad con la ley de la Provincia, que lo esceptuaba del pago de todo impuesto por el término de 20 años. Estos antecedentes de autoridad irrefutable, concurren á demostrar no sólo la vigencia de la sanción legal que el demandado invocó en su favor, sino también la interpretación y alcance que se le ha dado por la misma Municipalidad al declarar que una ley de impuesto sancionada con posterioridad, no afecta á la empresa del tramway demandada, en virtud de la exención que le había sido acordada anteriormente.

2—Esta cuestión es en todo semejante á la anterior. La Cámara, invocando los fundamentos de esa sentencia, la resolvió en el sentido del sumario por unanimidad de votos. Debe tenerse presente que tanto



puede calificarse de impuesto, y en consecuencia no se encuentra comprendido en la escepción que sobre pago de impuestos se ha concedido á diversas obras de utilidad pública llevadas á cabo por empresas particulares.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 152, Ser. 4ª.

3. **Adoquinado**—Facultando la ley el pago por cuotas, los empresarios de adoquinado, no pueden ejecutar por el total de la deuda, ni aun por las cuotas, mientras no se

esta resolución como la anterior fué resuelta por la Cámara constituida en Tribunal de Interlocutorios.

3.—El art. 4º de la ley de 1º de Octubre de 1888 dispone, que el pago del afirmado se hará por los propietarios en doce mensualidades por partes iguales y á la presentación de la cuenta con el descuento del 8 % sobre su importe, á cuyo efecto tendrán carácter ejecutivo las cuentas visadas por la Intendencia. La fecha para que principien á correr las doce mensualidades no puede ser la de la presentación de las cuentas á la Municipalidad para su visación, puesto que la deuda solo es exigible á los propietarios mediante la visación de la Intendencia: tampoco puede principiar á correr el término desde el día en que la visación se haga, porque si así fuera, los empresarios podrían despojar á los propietarios del derecho que les acuerda la ley de pagar la cuenta al contado y á su presentación con el descuento del 8 %. Bastaría que el empresario, una vez obtenida la visación, guardara silencio durante doce meses sin dar aviso á los propietarios ni exigirles el pago para que éstos no pudiesen disfrutar del beneficio del descuento, ni de la ventaja de poder satisfacer la cuenta en cuotas mensuales que la ley ha establecido especialmente á su favor. Al disponer la ley que el pago se haga en doce mensualidades, ha tenido por objeto beneficiar á los propietarios facilitándoles el medio de efectuarlo; y siendo ese el espíritu de la ley, quedaría burlado con menoscabo del derecho de los propietarios. Para que principien á cobrar las doce mensualidades, es necesario que los empresarios hayan hecho saber á los deudores que sus cuentas están visadas por la Intendencia, ó sería necesario que los hubiesen interpelado judicial ó extrajudicialmente, pues solo desde entonces puede correr el término para el pago, constituyendo á los deudores en mora á su vencimiento—art. 509 del Código Civ.—Como los empresarios no contratan directamente con los propietarios; como no son ellos los que tienen que ver si las obras se efec-



fije y se haga saber la fecha desde la que deben los propietarios empezar á pagarlas.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 305, Ser. 4^a.

4. Adoquinado— Los reclamos de los propietarios, contra los constructores de adoquinado solo pueden fundarse en errores de hecho, pero sin que puedan discutir ni interpretar la forma en que se ha cumplido el contrato con la Municipalidad.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 241, Ser. 4^a.

Adquisición—Véase: *Bienes*, núms. 4 y 5.

Adulterino—Véase: *Hijo natural*, núm. 1.

Adulterio—Véase: *Filiación legítima*, núm. 1—*Paternidad legítima*, núm. 1—*Divorcio*, núm. 11.

túan ó nó con arreglo al contrato; como esto solo incumbe á la Municipalidad; para que sepan que la obra se ha hecho debidamente, que ha sido recibida y que están obligados á pagar su importe en la forma establecida por la ley, esto es en doce mensualidades, es claro que los empresarios deben hacerlo saber á los propietarios exhibiéndoles las cuentas debidamente visadas.

4—Y estos reclamos solo pueden hacerse en juicio ordinario, á no ser que pudiese formularse como escepciones en el juicio ejecutivo—artículo 481 del Cód. de Proc.—Se dijo que en las cuentas que fueron materia del juicio ejecutivo se habían cobrado sumas que no se tenía derecho á cobrar, por haberse incluido la superficie ocupaba por la vía. No se puede decir que la visación que la Municipalidad verifica en las cuentas presentadas por los empresarios, se oponga á que este reclamo se haga en juicio ordinario, pues ese acto ó requisito no tiene más efecto que dar fuerza ejecutiva al documento; pero si las cuentas están erradas ó equivocadas, nada obsta para que se compruebe el error y se de mande la devolución de lo indebidamente pagado. No se puede decir que la iniciación de una demanda tendente á salvar ese error implique que un reclamo contra el procedimiento administrativo de la Municipalidad: es simplemente un reclamo para salvar un error de hecho en que ha incurrido la Municipalidad al visar las cuentas. Si se dijera que el adoquinado no fué construido de acuerdo con el contrato sería otra cosa; pues esa Corporación, procediendo administrativamente, es la única que puede resolver la cuestión, sin que los empresarios estén obligados á cuestionar con cada uno de los propietarios obligados al pago.



Afirmaciones—Véase: *Peritos*, núm. 5.

1. **Afirmados**—Las empresas de tramways se encuentran comprendidas en la escepción de la ley que obliga á los constructores de afirmados á descontar un tanto por ciento cuando los propietarios verifican el pago al contado—Jur. Civ., tom. 3, pág. 156, Ser. 4^a.

2. **Afirmados**—Los propietarios pueden reclamar de los contratistas constructores de afirmados, en juicio ordinario, lo que indebidamente les hubiesen hecho pagar en juicio ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 241, Ser. 4^a.

1—Por disposición del art. 4° de la ley de 1° de Octubre de 1888, el pago de los afirmados debía hacerse por los propietarios en doce mensualidades por partes iguales y á la presentación de la cuenta con el descuento del 8 %/. El art. 2° de dicha ley establecía que los propietarios de casas y terrenos estaban obligados á abonar la tercera parte del total del afirmado, debiendo la Municipalidad abonar las otras dos terceras partes. Por estas disposiciones no estaban comprendidas las empresas de tramways, que tienen sus líneas en las vías públicas. Después se dictó la ley de 13 de Nov. de 1888, la que en su art. 1° estableció la forma en que debía hacerse el pago, á saber: «En las calles donde hayan establecidas líneas de tramways, las empresas respectivas pagarán la cuarta parte del costo del afirmado, los propietarios de ambas aceras dos cuartas partes y la Municipalidad la otra cuarta parte.» De esta manera las empresas de tramways vinieron á ser gravadas con una carga que no establecía la ley de Octubre de 1888. Como se vé, la ley posterior no reformó la forma en que debía hacerse el pago, quedando por consiguiente subsistente la establecida por el art. 4° de la ley anterior; y como aquella determinaba la forma, resulta que la cuarta parte que las empresas estaban obligadas á pagar gozaba de las liberalidades de aquella disposición. La ley no distinguía las personas sujetas al pago, y consiguientemente tampoco los interesados pueden distinguir. Por otra parte, es más justo, es más equitativo que las empresas estén equiparadas á los particulares que á la Municipalidad, pues los primeros se encuentran en igualdad de condiciones: ellos no intervienen en los contratos que se celebran ni establecen las condiciones del pago.

2—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 525 del Cód. de Proc. Véase: verb. *Adoquinado*, núm. 4.



3. **Afirmados**—Las cuentas por afirmados aunque visadas por la Intendencia Municipal, solo tienen fuerza ejecutiva cuando para su expedición se han llenado las prescripciones de la ley.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 383, Ser. 4^a.

1^a. **Agente Fiscal**—No es recusable por intervenir como parte en el juicio.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 228, Serie 4^a.

Agentes fiscales—Véase: *Fiadores*, núm. 1.

1^b. **Agravio**—La declaración de que quedan á salvo los

3—La cuenta que servía de base á la ejecución, estaba visada por la Municipalidad y procedía de trabajos hechos efectivamente, pero la forma y las condiciones en que se quería hacer efectivo el pago no se ajustaba á la disposición de la ley de afirmados. No se cobraba la tercera parte del costo sino la mitad: ni el cobro se hacía por cuotas sino que se pedía el pago íntegro. Además se comprobó que el empedrado había sido hecho sin licitación previa, siendo así que la ley exigía que este trámite administrativo se llenara, y solo las cuentas presentadas por esos trabajos y en las condiciones determinadas podían traer aparejada ejecución. Si los trabajos se hacen sin licitación previa, no se acuerda á los propietarios la garantía que la ley ha querido establecer á su favor á fin de que no se les obligase á pagar más de lo que justamente valen esos trabajos. El empresario que contrata sin ajustarse á las prescripciones de la ley, violándola, no puede invocarla á su favor, porque voluntariamente se ha colocado fuera del amparo de sus prescripciones. Al imponer la ley, á los propietarios, la obligación de pagar los trabajos de afirmados, sin que pudiesen intervenir en la formación de los contratos que al efecto debían celebrarse con los empresarios, no dejó librado al arbitrio del Poder Administrativo Municipal la forma en que esos contratos debieron celebrarse. De manera que cualquier contrato celebrado fuera de esas condiciones impuestas por la ley no tenía para los propietarios fuerza ejecutiva, siendo por consiguiente inhábil el título en que se fundaba la ejecución. Así se declaró por el Juez y fué confirmado por la Cámara.

1^a—Los representantes del Ministerio Público, no son recusables, pero deben manifestar cuando tienen algún impedimento legítimo á fin de que el Juez de la causa pueda darlos por separados—art. 390, Código de Proc.

1^b—Porque esa salvedad no entraña condenación alguna.



derechos de una parte contra un tercero, no causa agravio á la contraria.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 124, Ser. 4ª.

Agravio—Véase: *Sentencia*, núm. 6.

1ª. **Agravio moral**—Justificada la culpa del demandado, nace la obligación de indemnizar el daño, y como tal debe ser tenido el agravio moral que sufre el padre por la muerte de su hijo, cualquiera que fuese su edad.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 154, Ser. 4ª.

2. **Agravio moral**—Debe ser confirmada la suma fijada como indemnización por el agravio moral, si el Tribunal la juzga equitativa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 149, Ser. 4ª.

Agravio moral—Véase: *Indemnización*, núm. 8.

Agregación—Véase: *Documentos*, núms. 5 y 6—*Testimonios*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 33—*Diligencias de prueba*, núm. 28—*Espediente*, núm. 5—*Prueba*, número 12.

Agregación de expedientes—Véase: *Testimonios*, núm. 1.

Agregación de firmas—Véase: *Desacato*, núm. 2.

1ª. **Agrimensor**—Los honorarios del Agrimensor nombrado particularmente deben ser fijados por peritos: la disposición del Cód. de Proc. que ordena su regulación por el Dep. de Ingenieros, solo es aplicable cuando su nom-

1ª—De acuerdo con la jurisprudencia establecida por esta Cámara en el caso de Tapella. Puede verse asimismo el tom. 1º, pág. 253, Serie 4ª de la Jur. Civ.

2—El art. 1084 del Cód. Civ. establece que el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla deben ser fijados con arreglo al criterio de los jueces. En esta designación están comprendidos todos los miembros del Poder Judicial: de manera que si el Juez de 1ª Inst. fija ese monto, y la Cámara cree que el Inferior ha ejercitado prudentemente el arbitrio judicial, la fijación debe confirmarse por la Cámara.

1ª—Arts. 1627 del Cód. Civ. y 625 del Cód. de Proc. Este último artículo legisla para los honorarios devengados en los juicios de mensura á que se refiere el tit. 20 del mismo Código.

bramiento ha sido judicial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 58. Ser. 4^a.

Agrimensor—Véase: *Honorarios*, núms. 5 y 27.

1. **Albacea**—No puede prescribir á su favor mientras no justifique haber cambiado la posesión para sí; la ley supone que ha continuado poseyendo para el causante ó sus herederos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 394, Ser. 3^a.

2. **Albacea**—Carece de personería para entablar demandas contra terceros á nombre de la testamentaria, cualquier que haya sido el origen de la acción.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 312, Ser. 3^a.

3. **Albacea**—Está obligado á rendir cuenta de su admi-

1—Los interesados en una sucesión se presentaron diciendo que ésta tenía una finca en esta ciudad, de la que si bien no tenían título, existían en su poder las pruebas necesarias para formarlos. Acompañaron piezas de cuyo análisis resultaba que una señora hipotecó la propiedad de que se trataba en 1843 á favor del causante de la testamentaria, y que en el mismo año otorgó testamento nombrando albacea al acreedor hipotecario. Agregaban que fallecida la testadora, el albacea y acreedor hizo todos los gastos, pagó todos los legados, y como la testamentaria le quedara debiendo una suma de dinero al albacea, y no existiera sucesión, *aquí se la cobró quedándose con el terreno*, desde cuya época entró en quieta y pacífica posesión. Basta esta sola confesión para dejar establecido que esa posesión no pudo jamás dar por resultado el conferir el dominio al poseedor porque es elemental en derecho que para adquirir el dominio por prescripción, se requiere que la posesión sea *animo domini*—art. 2351, Cód. Civ.—esta calidad de la posesión se requiere aun en la continua de treinta años, la que por otra parte no requiere, ni buena fe ni justo título—art. 4015.—Además el art. 2353 establece que nadie puede cambiar por sí mismo ni por el trascurso del tiempo la causa de su posesión. «El que ha comenzado á poseer por otro se presume que continúa poseyendo por el mismo título mientras no se prueba lo contrario».

2—Art. 3862 del Cód. Civ.

3—Debe rendir cuenta porque el art. 3868 del Cód. Civ. así lo preceptúa. En cuanto á la segunda parte, la Cámara dijo que las costas debía abonarlas el albacea porque no había contestado á la demanda ni





nistración y debe ser condenado en las costas del juicio si por su actitud en él hace necesario un pronunciamiento del Juzgado obligándolo á rendirlas. —Jur. Civ., tom. 3, página 200, Ser. 3ª.

4. Albacea—Contra quien se compruebe distracción ó mal manejo de fondos, debe ser destituido, pasando los antecedentes al Juez del Crimen—Jur. Civ., tom. 7, pág. 50, Ser. 3ª.

5. Albacea—Carece de personería para entablar demandas á nombre de la sucesión, y debe ser condenado personalmente al pago de las costas de las que promueva. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 177, Ser. 3ª.

6. Albacea—Debe depositar el saldo que reconozca adeudar en la rendición de cuentas, sea ó no ésta aprobada—Jur. Civ., tom. 3, pág. 7, Ser. 4ª.

7. Albacea—Carece de personería para representar á

tomó participación alguna en la tramitación del juicio hasta la sentencia, haciendo necesario el pronunciamiento de ésta y las diligencias que la habían precedido. Es evidente que si á un albacea se le exige rendición de cuentas y él se presta á ella, no hay porque condenársele en las costas, por el contrario las costas de esa rendición son de cuenta del que las pide.

4—Arts. 457, inc. 3º, y 3864 del Cód. Civ.

5—Art. 3862. La condenación en costas es personal á los albaceas porque no tienen personería para promover ningún juicio: carecen de acción y de facultad para iniciar juicio á nombre de la sucesión. Si las costas deben imponerse, no es justo que las pague la sucesión que no ha estado debidamente representada, y á nadie se le puede imputar mejor que á aquel que promovió el juicio sin derecho y contra la disposición terminante de la ley que se lo prohíbe.

7—El art. 3862 del Cód. Civ., establece que los albaceas no pueden intervenir en los pleitos que promueven los acreedores de la sucesión: y solo son parte los herederos ó legatarios. El albacea no representa á la sucesión, y por consiguiente el mandamiento no puede diligenciarse con él, teniendo presente la disposición del art. 471 del Cód. de Proc. Si bien es cierto que no es indispensable para la validez del

los herederos en las ejecuciones seguidas contra la testataria: el mandamiento de pago debe librarse contra éstos, y la omisión de este trámite hace procedente la nulidad del juicio.—Jur. Civ., tom. 6. pág. 207, Ser. 4^a.

Albacea—Véase: *Inhabilidad de título*, núm. 7—*Administrador*, núm. 2—*Indivisión*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 17.

1^a. **Alegar**—El término para alegar, solo empieza á correr desde la fecha en que se puedan extraer los autos de la secretaria.—Jur. Civ., tom. 4. pág. 242, Ser. 3^a.

2. **Alegar**—Cuando la demora en el diligenciamiento de la prueba no es imputable á la parte, debe suspenderse el término para alegar.—Jur. Civ., tom. 3. pág. 392. Ser. 4^a.

Alegar—Véase: *Término para alegar*, núm. 2.

1^b. **Alegato**—El pedido de absolución de posiciones, no

juicio ejecutivo que el mandamiento de embargo se formalice personalmente con el deudor, también lo es que el mandamiento de ejecución debe dirigirse contra él á fin de que se le requiera el pago, por que solo en defecto de éste puede hacerse efectivo el embargo y proseguirse la tramitación del juicio, lo que basta para demostrar que la falta de esa formalidad anula el juicio porque es un trámite sustancial. Así opinan también los prácticos, como puede verse entre otros á Manresa y Reus, en su comentario á la Ley de Enj. Española, tom. 4^o, art. 971.

1^a—El retardo no pudo imputarse á la parte, por haber tenido que permanecer los autos en secretaria á causa de posiciones pedidas.

2—Art. 118 del Cód. de Proc.

1^b—Es jurisprudencia constante en los Tribunales. Sin embargo, debe distinguirse, si las posiciones se pidieron dentro del término de prueba y en tiempo hábil para producirse dentro de dicho término, en cuyo caso el término para alegar debe suspenderse porque no hay razón para hacer una escepción con este medio probatorio. Si las demás diligencias pedidas autorizan á que se suspenda el alegato hasta que se produzcan—art. 118, Cód. de Proc.—no hay razón para que se exceptúe de esa regla general la prueba de posiciones. Pero si ellas han





suspende el término para alegar.—Jur. Civ., tom. 5, página 193, Ser. 3ª.

2. **Alegato**—El auto por el cual se declara decaído el derecho de presentar el alegato, es inapelable.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 76, Ser. 4ª.

3. **Alegato**—Siempre que resulte comprobada la presentación del alegato á un escribano público antes del vencimiento del término, debe agregarse al espediente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 417, Ser. 4ª.

4. **Alegato**—La absolución de posiciones, no interrumpe el término para alegar.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 103, Ser. 4ª.

Alegatos—Véase: *Diligencias de prueba*, núm 2—*Prueba*, núms. 9 y 10—*Excepción de prescripción*, núm. 4.

1. **Alhajas**—Estas y los objetos de poco valor que el causante no haya determinado espresamente, correspon-

sido pedidas después de vencido el término de prueba, es evidente que el término para alegar no puede suspenderse. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Posiciones*, núm. 12.

2—Porque no causa gravamen irreparable, dice la Cámara. Es fuera de duda que causa un gravamen que no puede repararse. Si se devuelve el alegato, ¿cuándo llegará la oportunidad de repararse el agravio causado? El sumario consagra la jurisprudencia establecida por la Cámara. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Alegato*, núm. 1. Se ha resuelto también que el auto que suspende el término para alegar no es apelable.—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Alegar*, núm. 135.

4.—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara en numerosos casos. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Posiciones*, núm. 12. Es necesario hacer la distinción que contiene la nota n° 1; —tom. 2º, verb. *Término*, número 15, y *Alegar*, núm. 1; tom. 1º, verb. *Término*, núm. 2581.

1—El legado se hizo de los muebles y ropas de uso. En el ítem de esta cláusula se reclamaron también alhajas, las que se mandaron entregar porque la intención del testador fué la de legar todas las cosas muebles que dejaba, y que estaban comprendidas en la designación hecha por él mismo bajo las palabras «muebles y ropas de uso». El testador hizo una enumeración de todos sus bienes muebles y demás,

den al legatario especial de sus muebles y ropas de uso.—
Jur. Civ., tom. 10, pág. 52, Ser. 4ª.

Alimentario—Véase: *Pensión alimenticia*, núm. 1.

1. **Alimentos**—Deben ser proporcionados á los bienes del alimentario, de tal manera que la suma fijada no pueda en ningún caso sobrepasar á sus facultades.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 63, Ser. 3ª.

2. **Alimentos**—Las obligaciones del padre, respecto de los alimentos de los menores, no pueden ser exigidas de la testamentaria de la madre.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 424. Ser. 3ª.

sin enumerar las alhajas reclamadas habiéndose constituido el legado sobre los demás bienes no enumerados, era evidente la intención del testador de que lo reclamado quedara comprendido en el legado.

1—La alimentación que se acuerde á los hijos no ha de ser tal que pueda poner al alimentario en el caso de no poder cumplir con las obligaciones que impone la naturaleza y que tienen su fundamento en los dos instintos más poderosos de todo ser, cuales son, el de la reproducción y el de conservación.

2—Un padre se obligó á prestar alimentos á sus hijos, y no habiéndolos satisfecho se dirigió acción contra la testamentaria de la madre de los menores, esposa del alimentario. Se fundaba la acción en que aun cuando la obligación en que se fundaba sea personal contra el padre, puede la acción dirigirse contra la testamentaria de la esposa, por cuanto siendo éste cónyuge y heredero de la esposa, la acción contra el intestado es pertinente contra la testamentaria, máxime si se tiene presente que al esposo no se le conocen otros bienes que los que puede heredar en la testamentaria. En esta argumentación hay una confusión de derechos: una cosa es la obligación de responder á los reclamos por actos personales, y otra cosa es la garantía de los bienes en que el resultado de dichos reclamos tengan que hacerse efectivos. Y así en el caso presente, el acreedor puede, si cree convenirle, deducir su demanda contra el padre, y si ella prospera, hacer efectivas las responsabilidades á que éste sea condenado en los bienes que puedan corresponderle en la testamentaria de su esposa ó en otros cualesquiera, á elección del reclamante: cosa muy distinta la una de la otra por cierto.





3. **Alimentos**—La pensión por alimentos á menores, debe pasarse desde la fecha en que el cuidador los tenga en su poder, aun cuando la sentencia que fija la obligación no lo haya declarado esplicitamente.—Jur. Civ., tom. 5, página 131, Ser. 3ª:

4. **Alimentos**—Si bien la ley permite que los alimentos puedan exigirse en juicio sumario, procede su petición en demanda ordinaria, en la que debe justificarse el título en cuya virtud se exigen.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 319. Serie 3ª.

5. **Alimentos**—Para que proceda la demanda de alimen-

3—La sentencia estableció que los alimentos debían pesar proporcionalmente sobre ambos padres, sin establecer la fecha desde cuando debieron prestarse los alimentos. Es indudable que esa fecha debe contarse desde que uno de los cónyuges se hace cargo de los hijos, pues no sería equitativo que se obligara á uno solo al pago de los gastos ocasionados durante la época transcurrida entre la demanda de alimentos y su fijación definitiva. El art. 604 del Cód. de Proc. establece que los alimentos se deben por mensualidades adelantadas.

4—Para exigir alimentos debe comprobarse el derecho en virtud del cual se piden, y esa justificación puede hacerse conjuntamente con la demanda de alimentos, sin que sea necesaria la justificación previa del parentesco, pues no sólo no existe disposición alguna de la ley que así lo prescriba, sino que no habría razón alguna para exigirse esa justificación previa. La paternidad ó el parentesco aducido como fundamento de la demanda, es un hecho que debe establecerse en el curso de ella, como que es la base de la acción. Cuando la ley autoriza al demandante para deducir la acción sumaria á que se refiere el tit. X del Código de Proc., ella no ha querido privarle del derecho á deducir la acción por la vía ordinaria, si cree convenirle. El fundamento del juicio brevísimo de alimentos está en la necesidad de satisfacer las más imperiosas necesidades de la vida. El juicio sumario de alimentos no implica supresión del juicio ordinario: es un privilegio que la ley acuerda y que como tal puede renunciarse. El juicio sumario ha sido instituido para los alimentos *provisorios* y el juicio ordinario para los *definitivos*. El que tiene derecho á ser alimentado, puede elegir cualquiera de las dos vías, como mejor le conviniere.

5—El sumario no espresa el caso resuelto. Una señora se presentó



tos, el actor debe justificar el título que invoca. —Jur. Civil, tom. 6, pág. 181, Ser. 3ª.

6. **Alimentos**—El Ministerio Fiscal solo es parte en el juicio de divorcio en cuanto se discuta el vínculo, pero no en los incidentes de alimentos y litispensas.—Jur. Civil, tom. 7, pág. 152, Ser. 3ª.

7. **Alimentos**—La sentencia de alimentos hace procedente el embargo de bienes suficientes para responder a su pago.—Jur. Civil, tom. 1, pág. 165, Ser. 4ª.

8. **Alimentos**—Las diligencias pedidas por el alimentario, no suspenden la tramitación del juicio de alimentos.—Jur. Civil, tom. 3, pág. 394, Ser. 4ª.

9. **Alimentos**—Antes de la partición, los herederos tienen derecho a una cuota alimenticia imputable a su haber

entablado demanda contra la sucesión de un causante, fundándose en que éste le había entregado un niño recién nacido para que lo cuidara: lo tuvo durante 7 años sin que se le abonasen los alimentos. Decía que existía un contrato y que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 1627 pedía el pago de sus servicios. La parte no comprobó ninguno de los extremos. No comprobó el carácter de hijo que invocaba a nombre del niño, ni comprobó la existencia del contrato. La demanda no pudo prosperar y fué rechazada.

6—La intervención que se le da al Fiscal en el juicio de divorcio, se funda en la necesidad de velar por la observancia de las leyes de orden público, en cuanto concierne al matrimonio. En las cuestiones de alimentos y litis espensas, el ministerio público no está interesado, y por consiguiente, no hay razón para que intervenga el Fiscal.

7—La parte obtiene una sentencia favorable y puede, de acuerdo con el art. 448 del Cód. de Proc., pedir un embargo preventivo.

8—El alimentario quiso paralizar el juicio de alimentos provisorios, solicitando medidas probatorias propias del juicio de alimentos definitivos, a lo que la Cámara no hizo lugar, fundándose en el art. 607 del Código de Proc.

9—Se tuvo en cuenta las circunstancias especiales en que se encontraba la parte que solicitaba los alimentos.



en la oportunidad debida.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 399, Ser. 4^a.

10. **Alimentos**—En el juicio sumario de alimentos, todas las excepciones son improcedentes.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 152, Ser. 4^a.

11. **Alimentos**—Justificados los extremos que la ley prescribe, procede la fijación de alimentos á los hijos naturales.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 411, Ser. 4^a.

12. **Alimentos**—Dictada sentencia de alimentos, debe decretarse embargo aunque no se encuentre consentido.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 17, Ser. 4^a.

13. **Alimentos**—Justificados los extremos que la ley exige, la prestación de alimentos es ineludible.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 222, Ser. 4^a.

14. **Alimentos**—El marido, además de los alimentos, debe pagar los muebles que la esposa necesita para su uso, según su condición social.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 87, Ser. 4^a.

10—El art. 607 del Cód. de Proc. prohíbe toda discusión sobre el derecho á percibir los alimentos ó sobre su entidad. Es en la demanda ordinaria donde deben ventilarse esas cuestiones y no pueden involucrarse en el juicio sumario sin desnaturalizarlo, haciendo frustránea la intención del legislador.

11—Art. 331, Cód. Civ., y 602 del Cód. de Proc.

12—Porque se ha obtenido una sentencia favorable. Véase el número 7. Y porque en el juicio de alimentos, la sentencia que se dicta no necesita quedar consentida, pues solo es apelable en efecto devolutivo—art. 605 del Cód. de Proc.

13—Art. 604 del Cód. de Proc.

14—El marido está obligado á prestar á la esposa todos los recursos que le fueren necesarios, pudiendo ésta, en el caso de que aquél falte á esa obligación, pedir judicialmente que le pase los alimentos y las expensas necesarias en los juicios. Entre los recursos que el marido debe prestar á la mujer, deben comprenderse los muebles necesarios para su uso, atendida su condición social, pues tanto estos como la ropa necesaria para vestir, son elementos indispensables para la vida.



15. **Alimentos**—Justificados los extremos que la ley exige, la sentencia que obliga á pasar alimentos debe ser confirmada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 123, Ser. 4^a.

Alimentos—Véase: *Costas*, núm. 29—*Embargo*, núm. 7—*Pensión alimenticia*, núm. 1.

1^a. **Alimentos provisorios**—La sentencia que fija para alimentos provisorios una suma proporcionada al caudal del alimentario, no causa agravio.—Jur. Civ., tom. 1, página 89, Ser. 4^a.

2. **Alimentos provisorios**—Reconocidos los hijos naturales y probado el caudal del padre, la sentencia que lo condena al pago de alimentos no causa agravios.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 311, Ser. 4^a.

3. **Alimentos provisorios**—La cuota fijada y consentida para alimentos provisorios, en juicio sumario, solo puede ser modificada en juicio ordinario.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 173, Ser. 4^a.

4. **Alimentos provisorios**—Justificados los extremos de la ley, es procedente la fijación de alimentos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 49, Ser. 4^a.

Alimentos provisorios—Véase: *Juicio sumario*, núm. 1.

Almoneda—Véase: *Personería*, núm. 1.

1^b. **Alquiler**—Para que exista mora en el pago de alquiler—

15—Art. 664, Cód. de Proc.

1^a—No causa agravio porque una resolución así fundada es justa. La sentencia que fija los alimentos provisorios, es apelable en el solo efecto devolutivo—art. 605, Cód. de Proc.

2—No causa agravio, pero es apelable en el efecto devolutivo—artículo 605, Cód. de Proc.

3—Cualquiera reclamación que las partes quieran hacer respecto á la entidad y al derecho de los alimentos provisorios, debe ventilarse en la forma ordinaria—art. 607, Cód. de Proc.

4—Arts 602 y 604 del Cód. de Proc.

1^b—El art. 1579 del Cód. Civ., faculta al locador para pedir la rescisión—



leres, el acreedor debe justificar el requerimiento judicial ó extrajudicial hecho en el domicilio del deudor, siempre que no exista lugar designado para el pago. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 349, Ser. 4^a.

2^a. **Alquiler**—La prueba de que la suma recibida á cuenta era como arras y no como alquiler, corresponde al que lo afirma. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 385, Ser. 4^a.

3. **Alquiler**—El embargo del alquiler hace procedente el nombramiento de administrador judicial. —Jur. Civ., tomo 8, pág. 51, Ser. 4^a.

Alquiler—Véase: *Locación*, núm. 6 —*Daños y perjuicios*, núm. 90—*Acto ilícito*, núm. 10.

1. **Alquileres**—Reconocido el carácter de locatario y el precio de la locación, el pago de los alquileres es ineludible. —Jur. Civ., tom. 1, pág. 245, Ser. 3^a.

2^b. **Alquileres**—Su cobro en juicio ejecutivo solo proce-

sión del contrato cuando el locatario ha dejado de abonar dos mensualidades consecutivas: para que este artículo sea aplicable, se requiere que el deudor hubiese incurrido en mora, la que no se opera por el solo trascurso del tiempo. Es necesario que el locador exija del locatario el pago de la locación, y recién después de ese requerimiento sin resultado, el locatario incurre en mora. En el contrato no se estableció lugar para el pago, en cuyo caso éste debe hacerse en el domicilio del deudor—art. 747, Cód. Civ.—á menos que fuese alguno de los casos especificados en el art. 509 del mismo Cód. Esta resolución está de acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara. Véase: Inst., tom. 3, verb. *Mora*, núm. 1; tom. 2, mismo verb.; tom. 1, verb. *Alquiler*, número 158.

2^a—El recibo no espresaba el carácter en que se hacía la entrega: esta es una cuestión de hecho cuya prueba incumbe producir al que afirma ese carácter especial que le quiere dar.

3—El Juez dijo que en atención á que la propiedad embargada estaba abandonada, procedía el nombramiento de un depositario judicial.

1—Art. 1556 del Cód. Civ.

2b—El art. 466 del Cód. de Proc. lo espresa terminantemente cuando requiere para preparar la vía ejecutiva que el demandado manifieste



de mientras el locatario ocupa el predio arrendado.— Jurisprudencia Civ., tom. 3, pág. 15, Ser. 4ª.

3. Alquileres—Aun justificada la locación, no procede la inhibición general para garantizar los alquileres.—Jurisprudencia Civ., tom. 10, pág. 299, Ser. 4ª.

Alquileres—Véase: *Fianza*, núm. 2.

1. Aluvión—Para que el terreno acrecentado por alu-

previamente si *es locatario*. Véase Inst., tom. 3, verb. *Acción*, núm. 2; tom. 1, verb. *Alquileres*, núm. 162; Jur. Civ., tom. 5, pág. 450, Ser. 1ª. La acción ejecutiva se acuerda al que *es inquilino actual*.

3—Tendría solo derecho para solicitar el embargo preventivo de las cosas afectadas a su privilegio de locador, acordado por el Cód. Civ.; y dado el caso de que no se le conociese bienes procedería la inhibición, decía el Juez. Habiéndose confirmado por sus fundamentos la resolución, resulta que la inhibición puede pedirse cuando no se le conocen bienes al locatario.

1—Se solicitó por un propietario ribereño el deslinde judicial de su propiedad, cuyos títulos aunque indicaban la extensión de que ella constaba, le señalaban también límites determinados, lindando por uno de sus costados con el río. Decretado y practicado el deslinde, resultó que la superficie contenida dentro de estos límites era mucho mayor que la designada en los títulos, excediéndola en cinco hectáreas. El terreno se hallaba situado muy próximo a Buenos Aires, en sus alrededores, siendo de mucho valor. La Municipalidad entabló acción reivindicatoria, la que fué desechada. Esta corporación sostuvo que el exceso del terreno debía reputarse público, ya que se le considere terreno no repartido, ó que se suponga formado posteriormente por aluvión, por ser adyacente a la margen de un río navegable. La parte contraria dijo: que suponiendo que todas las enagenaciones ó trasposos del terreno se habían verificado *ad-corpus* sin otro límite en uno de sus rumbos que el río, pretendía que le habría correspondido el derecho de aluvión, en virtud de que le pertenecía el aumento natural que aquel hubiese tenido: que aun cuando no fuese así, habiendo tenido título para poseer todo el terreno comprendido dentro de los límites asignados por la escritura, y habiéndolo poseído efectivamente hasta el mismo río, él y sus causantes lo habrían prescripto en virtud de la posesión durante el tiempo requerido por la ley: y que encontrándose en legítima posesión del terreno disputado, si la Municipalidad afirma ser suyo, le incumbe el acreditar-

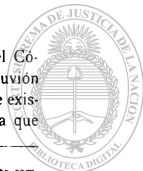


vión sea del dominio público, debe justificarse plenamente que su formación es posterior á la promulgación del Código, mucho más cuanto que constando haber salido el terreno del dominio público, no habría podido volver á caer en él sino mediante un título especial de nueva adquisición. La Municipalidad por su parte sostuvo que no existe en favor de los particulares el derecho de aluvión en la costa de los ríos navegables; que no pudo haber prescripción porque ésta requeriría cuarenta años de posesión que aun no se habían cumplido: y por último que habiendo sucedido esta Corporación en los derechos del Estado que por su soberanía es dueño de todo lo que no se halle sujeto á propiedad particular, no reivindica en las condiciones de los demás bastándole á justificar su demanda, el que resulte que el poseedor carece de títulos legítimos. El poseedor comprobó por medio de testigos, y planos topográficos con carácter público, haber sido poseedor, él y sus causahabientes en propiedad, del terreno hasta el río. Se declaró que el exceso del terreno pertenecía al poseedor en virtud de la prescripción que se había operado. Las leyes 14 y 21, tit. 12, lib. 4º, Rec. de Indias, reconocen y admiten, en términos espresos, la prescripción de tierras realengas, pero no se hallaba determinado del mismo modo el tiempo que ella requería. Pero es sabido que estaba resuelto, que los bienes raíces pertenecientes á las ciudades ó á los cabildos, no se prescribían por menos de cuarenta años; de donde resulta que las tierras fiscales tampoco podían prescribirse en menos tiempo. Esta fué la opinión general y fué la doctrina que prevaleció, de acuerdo con la legislación romana que exigía también cuarenta años en la prescripción de bienes vacantes aun no incorporados al patrimonio del Fisco.—Zolórzano, Polit. Indiana, tom. 2º, lib. 6º, cap. 12, núm. 10; Escala Gazof, lib. 1º, cap. 25, núm. 57.—Estos principios fueron consagrados espresamente por nuestra legislación provincial de 1867. Debe tenerse presente la declaración hecha por el Cód. Civ. en su art. 4031, por el cual se establece que aunque las prescripciones comenzadas antes de su vigencia deben regirse por las leyes anteriores, si por ellas se requiere mayor tiempo que el que el Código exige, se consideran completas desde que haya transcurrido el plazo que ésta determina, contando desde que se puso en vigencia dicha ley. Se quiso establecer en términos absolutos, que siendo del dominio público las costas de los ríos navegables, lo son también los nuevos terrenos que lleguen á formarse paulatina y sucesivamente, por aluvión. Así sucede con arreglo á las prescripciones del Cód. Civ. que hoy nos rige. Pero es necesario averiguar si lo propio sucedía con arreglo á la antigua



go Civil, pues por las antiguas leyes correspondía al propietario ribereño.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 63, Ser. 3ª.

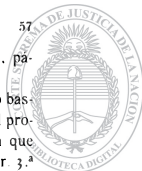
doctrina vigente según las leyes españolas, las que estaban calcadadas en las del derecho romano. Por el derecho romano solamente el uso de las costas de los ríos navegables era público, pero su propiedad correspondía á los ribereños, los que sin embargo sufrían una servidumbre legal, que les impedía hacer cosa alguna que importase un obstáculo á la navegación, ó prohibir á los navegantes que se sirviesen de aquéllas en lo que fuese preciso. Aun la propiedad al álveo, en cuanto no fuese ocupado por las aguas, se entendía ser de los dueños de las heredades confinantes con los ríos, por cuya causa les correspondía también las islas que en ellas aparecían, y el suelo que quedase seco si mudasen su curso; lo que la fuerza de la corriente, arrebatando de una parte, trasportase á otra, y en fin, el terreno que se formase en la costa paulatina y sucesivamente, que es lo que se llama aluvión. Esta doctrina está espuesta en las Instituciones, lib. 2º, tit. 1º, §§ 4, 20, 21 y 22, en términos que no dejan lugar á duda de ningún género, y la dilucidan los comentadores entre otros Pothier, Voet y Vinnio. Debe tenerse muy presente que ese derecho no se acuerda á las poseedores de predios concedidos por medida, sino tan solo á los que no tienen más límite que el río, por cuya razón se les llama *arcifinios*. Las Partidas adoptaron la misma doctrina y las incorporaron á sus disposiciones.—Leyes 6, 7, 26, 27 y 31, tit. 28, Part. 3ª.—De éstas la más pertinente al caso que nos ocupa es la Ley 26, la que dice: «E por ende dezimos que todo quanto los ríos tuellen a los omes poco a poco, de manera que no puedan entender la quantia dello porque no lo llenan ayuntadamente, que lo ganan los señores de aquellas heredades a quien lo ayuntan e los otros a quien lo tuellen non han en ello que ver.» Ahora bien, si aplicamos esta doctrina al caso que nos ocupa, en que se trata de un terreno cuyos títulos, haciendo constar varias enagenaciones *ad-corpus* señalan por límite un río navegable, y remontan al tiempo en que regía la Ley de Partida que se acaba de transcribir, tendríamos averiguado que á los causahabientes del actual poseedor, le correspondía el derecho de aluvión en lo que hubiese acrecido á dicho terreno. Es cierto que el Cód. Civ., ha cambiado por completo el sistema de legislación en esta materia; porque como ella prescribe que debe dejarse á la costa de los ríos navegables una calle de treinta y cinco metros de ancho, desde entonces los particulares, no lindando ya con los ríos, no pueden continuar gozando los derechos enunciados de accesión natural, y todos ellos se han transferido al público.—Véanse los articu-



2. **Aluvión**—Aun después de la promulgación del Código Civil, para que los terrenos formados por aluvión correspondan en propiedad á la Municipalidad, debe existir perfectamente deslindada la estensión de ribera que

los 2340, 2572, 2575 y 2639 del Cód. Civ.—Pero para que este cambio de legislación pueda aprovechar á la Municipalidad, es necesaria la concurrencia de dos circunstancias: 1ª, que la Corporación demuestre que el terreno cuestionado se hubiese formado por aluvión en los últimos años, es decir, con posterioridad á la vigencia del Cód. Civ., cuyas disposiciones debieron por consiguiente regir en el caso; 2ª, que la calle de treinta y cinco metros prescripta por la ley hubiese sido trazada efectivamente, y determinándose según correspondía hacerse, pues como puede observarse por los términos en que se encuentra redactado el art. 2639 del Cód. Civ., ello no importa declarar espropiada *ipso jure*, todas las costas de los ríos navegables en el ancho que designa, sino que impone simplemente la obligación á los propietarios limítrofes con los ríos, que sirven á la comunicación por agua, de dejar dicha calle de la estensión espresada, obligación cuyo cumplimiento incumbe á no dudarlo, á la misma Municipalidad. Antes de esto, el propietario no pierde su dominio, pues según los principios mismos del Código, aquél no se trasmite por la sola obligación, como erróneamente lo establece la legislación francesa, sino mediante la tradición, y sin que á los ribereños pueda siquiera considerárseles constituidos en mora antes de haber sido requeridos para verificarlo—art. 306 y 572.—También sería imposible, sin este requisito, deslindar ó definir los respectivos derechos de los ribereños y de la Municipalidad en la materia de que se trata. Y así suponiendo en el caso que nos ocupa, que el aluvión empezó á formarse desde muchos años atrás, y continuó aumentando en el último tiempo después de la publicación y vigencia del Código. ¿Cómo se determinaría ahora, en dónde viene á quedar la calle que se mandaba dejar, para averiguar lo que en el terreno nuevamente formado perteneciese al propietario limítrofe, y lo que correspondería á la Municipalidad? No habría ciertamente manera de establecerlo, y no puede adoptarse otra resolución más equitativa que el reconocer que el terreno debe suministrar los treinta y cinco metros para calle siempre que esa estensión fuese necesaria por carecer de ella la Municipalidad—art. 2773.

2.—Véase nota precedente.



aqué! fija á los ríos navegables.—Jur. Civ., tom. 2, página 263, Ser. 3.^a

3. **Aluvión**—Si por efecto de éste, existe terreno bastante para dejar los cuarenta metros que fija la ley, el propietario ribereño queda exonerado de la obligación que aquélla le impone.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 263, Ser. 3.^a

1.^a **Allanamiento**—Existe violación siempre que careciendo de orden de allanamiento dictada por Juez competente, la autoridad se introduce en el domicilio privado sin permiso del propietario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3.^a

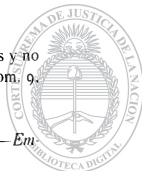
Allegados—Véase: *Condominio*, núms. 4 y 5.

1. **Amistad**—La del Juez con el abogado, no es causa

3—Véase el núm. 1.

1.^a—Un Comisario de Policía, penetró en el club Sud-América violando el domicilio de la persona jurídica, pues estaba legalmente autorizada por el Gobierno, procedió á la prisión del presidente y de todos los socios. La acción deducida es la que procede de un delito del derecho criminal—arts. 1077, 1078 y 1096.—Para todo club que reviste legalmente el carácter de persona jurídica, la inviolabilidad de su domicilio está amparada por el art. 18 de la Const. Nac. y el Comisario al penetrar en él sin el competente permiso ó sin la autorización necesaria, incurre en el delito previsto por el art. 165 del Cód. Pen. El carácter de Comisario no autoriza para allanar el domicilio sin orden escrita de Juez competente. Ni siquiera bastaría la orden verbal del Jefe de Policía para eximirse de responsabilidad. Para salvar su responsabilidad sería necesario que la orden en virtud de la cual procede á entrar en el local, esté legalmente espresada en la faz del documento.—Calvo, Decisiones Constitucionales, núm. 2588.

1.—El abogado fué nombrado Síndico de un concurso civil por el Juez de la causa. No se hizo lugar á la recusación porque según la Cámara, el Síndico reviste el carácter de representante de los acreedores, no siendo por consiguiente el caso previsto en el art. 368, inc. 10. La Cámara padece error cuando dice que el Síndico representa á los acreedores. Según opiniones autorizadas el Síndico tiene una triple representación, pues representa no solo á los acreedores sino también al deudor y á la ley. Así lo tiene resuelto la Cámara de



de escusación en cuanto éste representa á terceros y no tenga interés personal en el juicio.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 44, Serie 4ª.

Amistad—Véase: *Abogado*, núms. 12 y 13.

Ampliación—Véase: *Compulsa de libros*, núm. 1—*Embargo*, núm. 18—*Informes*, núm. 3.

Animal—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 38.

Antecedentes—Véase: *Acto ilícito*, núm. 11.

Anticipos—Véase: *Habilitado*, núm. 1.

1. **Apelable**—El auto que rechaza al apoderado ó procurador nombrado, es apelable.—Jur. Civ., tom. 3, página 92, Ser. 4ª.

2. **Apelable**—La sentencia que no hace lugar á las escepciones opuestas á la ejecución de una sentencia, es apelable aun cuando no se haya producido prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 105, Ser. 4ª.

Apelable—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 9—*Diligencias judiciales*, núm. 3.

lo Com.—Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Acreedores*, núm. 3 y su nota.—Si el Síndico tiene esta triple representación, es evidente que la recusación no procede en el caso del sumario, porque la parcialidad del Juez debe temerse que se ejerza en favor de uno solo de los litigantes, pero si aquí todos concurren en una sola persona que los representa, no puede existir ese temor; porque si el Síndico puede ejercitar su influencia para con el Juez, ella concurrirá con igual fuerza á favor de todos y cada uno de sus representados conjuntamente.

1.—Trae gravámen irreparable, y afecta los derechos de la parte privándola de la facultad de elegir libremente quien la represente en juicio.

2.—No se produjo prueba porque el ejecutante se opuso á la admisión de las escepciones por considerarlas improcedentes é inadmisibles en cuyo caso es apelable la resolución que se dicte—art. 491 del Código de Proc.—Lo propio sucede en las escepciones que constituyen cuestiones de puro derecho, en las que no se producen prueba, y á pesar de ello la resolución que recaiga es siempre apelable.



1ª. **Apelables**—En el juicio ejecutivo solo son apelables los autos que la ley espresamente declara tales.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 28, Ser. 3ª.

Apelables—Véase: *Autos inapelables*, núm. 1.

1. **Apelación**—En espedientes contenciosos, la Municipalidad debe conceder ó negar el recurso de apelación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 126, Ser. 3ª.

2. **Apelación**—El apelado carece de derecho para oponerse al desistimiento del recurso que haga el apelante.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 144, Ser. 4ª.

Apelación—Véase: *Acreedor hipotecario*, núm. 2—*Nulidad*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núms. 10 y 45—*Diligencias judiciales*, núm. 3—*Recurso de apelación*, núm. 1—*Concurso civil*, núm. 2—*Recurso de reposición*, número 2.

1ª. **Apelación de hecho**—El escrito interponiendo el recurso de apelación de hecho, no puede ser fundado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 24, Ser. 4ª.

1ª—Art. 305 del Cód. de Proc.—El ejecutado apeló de una providencia que no era apelable según el artículo citado. Debe tenerse presente que la inapelabilidad de los autos en el juicio ejecutivo solo ha sido establecida por el ejecutado, pudiendo el ejecutante apelar de todas aquellas providencias que decidan algún artículo ó traigan gravámen irreparable, como si se tratara de un juicio ordinario.

2—El recurso de apelación una vez concedido solo puede aprovechar al que lo interpuso, pudiendo renunciar á ese beneficio que acuerda la ley á todo litigante cuyas pretensiones hubiesen sido rechazadas. El desistimiento no puede nunca perjudicar á la parte contraria, y por consiguiente no tiene derecho á oponerse.

1ª—Con motivo del recurso de hecho el apelante infringió el artículo 269 del Cód. de Proc., pues «entró en consideraciones tendentes á demostrar los agravios que le infería el auto apelado.» No se puede fundar la apelación espresando los agravios que la resolución apelada causa, pero sí puede fundarse el recurso á fin de dejar establecida la procedencia de la apelación indebidamente denegada.



2. **Apelación de hecho**—El recurso directo ante la Cámara, en los asuntos contencioso-administrativos, solo procede por denegación del de apelación interpuesto ante la Municipalidad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 225, Ser. 4^a.

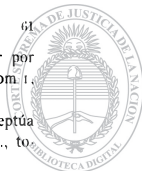
1. **Apellido**—Justificada la identidad de la persona por instrumentos públicos, procede la aprobación de la información que justifica la existencia de error en el apellido.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 111, Ser. 4^a.

Apellido—Véase: *Filiación natural*, núm. 3.—*Menores*, núm. 2.

1^a. **Apercibimiento**—Para que surta efecto, debe especificar lo que sucederá al apercibido; la cláusula de «en

2—El art. 52 de la Ley Org. de la Municipalidad, dispone que los particulares que se consideren damnificados por las resoluciones municipales deberán ejercitar su derecho en juicio contencioso-administrativo, con apelación para ante el Tribunal que el Cód. de Proc. designa. La ley de Nov. de 1886 prescribe á su vez que la Cámara conocerá de los recursos contra las resoluciones de la Municipalidad en asuntos de carácter contencioso-administrativo. La jurisprudencia ha fijado el alcance de estas disposiciones, estableciendo que á falta de un procedimiento especial y mientras no se dicte la ley de Proc. en lo contencioso-administrativo, debe aplicarse por analogía el ordinario ó común. De manera que el damnificado por las resoluciones municipales debe interponer el recurso de apelación ante la misma Municipalidad en el tiempo y forma que prescribe el Cód. de Proc. Así la Cámara no puede conocer por un recurso directo sino después que la apelación hubiese sido denegada por la misma Municipalidad. Debe tenerse presente que las resoluciones de la Municipalidad son las únicas que pueden llevarse ante la Cámara, pues las de la Intendencia solo son apelables para ante el Consejo. Esta resolución está de acuerdo con la jurisprudencia establecida en otros casos entre los cuales pueden citarse los que se registran en el tom. 8^o, pág. 399, Ser. 1^a; y tom. 1^o, págs. 103 y 110, 1^a Ser. de la Jur. Civ.

1^a—La citación fué para absolver posiciones, la que debe hacerse de acuerdo con lo que dispone el art. 127 del Cód. de Proc. que espresamente preceptúa que sea «bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa será tenido por confeso.»



cuanto ha lugar por derecho», no basta para dar por absueltas las posiciones en rebeldía.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 368, Ser. 3ª.

2ª. **Apercibimiento**—Procede si el Juzgado conceptúa irrespetuosos los términos de un escrito.—Jur. Civ., tom. 3, página 56, Ser. 3ª.

Apercibimiento—Véase: *Jactancia*, núm. 2—*Remate judicial*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 15—*Remate judicial*, núm. 19.

1ª. **Apoderado**—Sus honorarios se prescriben á los dos años de liquidados.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 163, Serie 3ª.

2ª. **Apoderado**—La renuncia de éste, no suspende la tramitación. La citación al mandante para la notificación de la renuncia del mandatario debe hacerse por edictos si no se conoce el domicilio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 207, Ser. 3ª.

3. **Apoderado**—O procurador judicial, puede representar ó acompañar á su poderdante en todos los actos ó diligencias judiciales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 127, Ser. 3ª.

4. **Apoderado**—Este á nombre de su mandante, puede pedir la nulidad de lo actuado con su intervención, si carecía de facultad para representarlo en juicio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 134, Ser. 3ª.

5. **Apoderado**—La ratificación de la persona capaz revalida y da fuerza legal á todos los actos ejecutados perso-

2ª—La Cámara consideró ofensivos al decoro del Juzgado los términos en que estaba concebido el escrito y confirmó la resolución del Inferior.

1ª—Art. 4032 del Cód. Civ.

2ª—Art. 20 del Cód. de Proc.

3—Véase: verb. *Actos judiciales*, núm. 1.

5—Art. 1059 y siguientes del Cód. Civ.



nalmente ó por medio de apoderado durante la incapacidad.—Jur. Civ., tom. 8. pág. 61. Ser. 4^a.

6. **Apoderado**.—El abogado patrocinante tiene derecho para exigir el pago de sus honorarios, directamente á su patrocinado con prescindencia absoluta de los apoderados ó intermediarios.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 151, Ser. 4^a.

Apoderado—Véase: *Posiciones*, núms. 1, 3 y 4—*Domicilio*, núm. 1—*Fallecimiento*, núm. 6—*Mandatario*, número 15—*Transacciones*, núm. 11—*Obligación de hacer*, núm. 15.

1. **Apoderado único** — Los interesados que gestionen iguales derechos, deben nombrar un solo apoderado que intervenga en el juicio. —Jur. Civ., tom. 1. pág. 348. Serie 3^a.

2. **Apoderado único**—Deben nombrarlo, si existen varios

6—Véase: verb. *Abogado*, núm. 14.

1—Para obligar á las partes que gestionan el mismo derecho en virtud de un interés común, á nombrar un apoderado único, es necesario proceder con muchas reticencias, porque la medida está muy restringida por la ley á ciertos y determinados casos que la práctica ha querido ampliar, con grave perjuicio de los litigantes. En el caso presente eran dos los interesados, los que estuvieron conformes en que cualquier de los dos fuese el representante único. Una vez nombrado uno de ellos, el otro apeló y la Cámara confirmó el nombramiento fundándose en ese consentimiento y en la falta de oposición.

2—Esta resolución tiene su fundamento en varias disposiciones de las leyes españolas, las que no todas están de acuerdo en sus términos; la primera disposición que se dictó á este respecto fué la Ley 3^a, tit. 2^a, lib. 2^o del F. Juzgo, al establecer «que si los que se querellan fueren muchos, deben escojer uno ó dos de sí, que traygan el pleyto», dice: «Si de alguna de las partes son muchos querellosos, e de la otra pocos, el juez deve mandar, que escoian entre sí quales traian el pleyto, ca non lo deven todos razonar de so uno; mas aquellos solamiente que fueran puestos dambas las partes, que ninguna de las partes non sea destorvada por grandes voces ni por grandes vueltas.» La ley 15, tit. 10, lib. 1^a, dice: «Si muchos han un pleyto de so una, quier en demandar,

demandantes ó demandados. Jur. Civ., tom. 5, pág. 217. Ser. 3ª.

3. **Apoderado único** Aun cuando el procurador pueda individualizar la defensa, si son varios demandados deben nombrar un solo apoderado ó representante judicial.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 121, Ser. 3ª.

quier en responder, den todos un personero, ca no es razon que un pleyto se razone por muchos.» La ley 5ª, tit. 1ª, lib. 2º de F. R. también se refiere á esta clase de representación única, pues la que legisla con especialidad el caso, es la ley 6ª siguiente la que dice: «Si sobre una demanda fueren muchos homes, de la una parte, y pocos, ó muchos de la otra, el alcalde mande, que cada una de las partes dei quien razone por sí; y no lo deben todos razonar: mas aquellos que fueren dados amas las partes razonen, porque el pleyto no sea destorvado por voces de muchos.» Se da asimismo por nuestros jueces como fundamento del sumario la ley 18, tit. 5ª, Part. 3ª, pero esta ley no es aplicable al caso porque en ella se habla de aquel en que un mismo litigante constituye varios apoderados para el mismo pleito, y siempre que todos ellos quisieren defender el mismo derecho, la ley dice: «que aquel que primeramente lo comenzare es tenuto de lo seguir, fasta que que sea acabado e los otros non se deuen ende trabajar. Pero si todos los personeros vinieren en uno al pleyto, e la otra parte de agraviare en razonar con todos, deuen dar uno dellos que razone. E si non se acordaren, tome el Juez qual dellos entendiese que lo fara mejor. Esta ley trata del caso inverso al del sumario, allí se trata de un pleito en que hay varias partes que desempeñan el mismo rol de actores ó demandados, mientras que en esta ley se trata de un litigante que constituye varios apoderados para el mismo pleito, lo que ya no se estila entre nosotros. Se cita asimismo como que resuelve el caso la ley 6ª, tit. 10, Part. 3ª, pero ella no tiene relación con el caso del sumario. De lo espuesto resulta que los jueces no están habilitados á nombrar ó á obligar á las partes á nombrar un solo apoderado sino en casos muy limitados, como lo hemos dicho en el número 1º. Nuestros Tribunales hacen lo contrario, amplian la disposición á casos que no entran en el espíritu ni en la letra de la ley. No debe olvidarse que cuando nuestro Cód. de Proc. quiere que se nombre un representante único, porque la uniformidad del juicio así lo exige, lo establece espresamente—artículos 633 y 722.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Apoderado*, núm. 1.

3—Véase el número precedente.





4. **Apoderado único**—Procede el nombramiento de oficio de un apoderado común que represente los derechos de los herederos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 97, Ser. 4ª.

5. **Apoderado único**—La unidad de la representación que exige el nombramiento de un solo apoderado, no procede si entre los demandados existe oposición de intereses que haga inevitable la diversidad de la defensa.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 377, Ser. 4ª.

6. **Apoderado único**—Cuando la ley obliga á los demandantes al nombramiento de un solo apoderado, no es precedente la contrademanda en la misma forma siempre que el demandado reconozca que su derecho y como consecuencia la obligación de los demandantes tiene distinto origen y puede dar lugar á defensas completamente opuestas.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser. 4ª.

Aprobación—Véase: *Contador*, núm. 1—*Costas*, núm. 21—*Transacción*, núm. 4 y 5—*Posesión cuarentenaria*, número 1—*Apellido*, núm. 1.

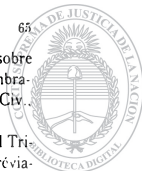
Arancel—Véase: *Bienes raíces*, núm. 2.

1. **Arbitro**—La parte tiene derecho de proponerlo en reemplazo del que no acepta, cualquier que sea el número de los renunciantes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 371, Ser. 4ª.

4—El Juez ordenó que constituyeran un solo apoderado dentro de un término que se designó: no habiéndose cumplido con lo ordenado, el Juez haciendo efectivo el apercibimiento decretado lo nombró de oficio. El nombramiento recayó en un extraño, lo que no se ajusta á la ley, pues ella establece que el nombramiento debe hacerse eligiendo uno de los litigantes conjuntos. La ley dice testualmente así: «E si non se acordaren, tome el Juez *qual dellos* entendiase que lo fára mejor.»—Ley 18, tit. 5ª, Part. 3ª.

5—Para unificar la representación es necesario que exista el mismo vínculo de derecho.

1—Es decir, aunque los nuevamente nombrados vayan renunciando sucesivamente, siempre tendrá derecho la parte para proponer otro que deba reemplazarle.



1. **Arbitros**—Si deben entender en las cuestiones sobre interpretación de un contrato, no procede su nombramiento, si la acción es por cobro de pesos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 140, Ser. 3^a.

2. **Arbitros**—El demandado para la formación del Tribunal arbitral, debe contestar la demanda sin que previamente se establezcan las cuestiones que deben someterse á los árbitros.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 44, Ser. 4^a.

3. **Arbitros**—Si el precio debe fijarse por árbitros, no existe defecto legal en el modo de proponer la demanda aun cuando no se fije cantidad.—Jur. Civ., tom. 9, página 261, Ser. 4^a.

Arbitros—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 74.

Arcas fiscales—Véase: *Empedrados*, núm. 3.

Archivo General de los Tribunales—Véase: *Espedientes*, núm. 1.

Area - Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 17.

1—El contrato decia que se dirimiria por árbitros-arbitradores cualquiera cuestión á que diere lugar su inteligencia; la cuestión promovida no versó sobre la inteligencia ó interpretación de las cláusulas del contrato, sino sobre cobro de pesos proveniente de él. Aun en caso de duda es deber de los jueces hacer que las cuestiones se ventilen por la vía ordinaria, desde que no esté claramente establecido que todas las cuestiones se resuelvan por medio de arbitradores.

2—El nombramiento no puede tener lugar sin que las partes se pongan de acuerdo á cerca de los hechos que deben ser sometidos á su decisión. Cuando el compromiso no se hubiese establecido ante Escribano Público, debe serlo ante el Juez de la causa y secretario—art. 770 del Cód. de Proc.—en este caso la contestación á la demanda tiene por objeto que el demandado niegue ó confiese los hechos que le sirven de fundamento.

3—No existe oscuridad en la demanda, ni defecto legal en el modo de proponerla. La parte en estos casos pide que se le condene al pago de la suma que estimen los árbitros. Sinembargo hay conveniencia en fijar el monto á fin de establecer la competencia del Juzgado. Es por esto que generalmente se espresa la suma en que estima el actor ó la que determinen los árbitros.



Area determinada—Véase: *Contrato de compraventa*, números 16 y 17.

Argentino—Véase: *Jurisdicción federal*, núm. 2.

Artículo de incontestación—Véase: *Escepción perentoria*, núm. 1.

Artículo previo—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 7.—*Rebel-día*, núm. 18.

1. **Arraigo**—Consentido el auto que fija la suma de la fianza, no puede ser aceptada la personal. —Jur. Civ., tomo 1, pág. 145, Ser. 4^a.

2. **Arraigo**—Reconocida que la residencia del demandante es fuera de la jurisdicción del Juzgado, procede el arraigo del juicio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 14, Ser. 4^a.

3. **Arraigo**—La información de pobreza con objeto de evitar el arraigo del juicio, debe deducirse ante el Juez en turno.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 94, Ser. 4^a.

1—En el caso presente se dice en la sentencia, que la parte manifestó su intención de arraigar pecuniariamente, y que el monto de la fianza quedó consentido. Esto no es exacto, pues la parte pidió simplemente que se fijara el monto de la fianza, pero no manifestó su intención de afianzar pecuniariamente. Solicitó que se fijara la cuota, con la intención de que una vez establecida, ofrecería la persona que afianzaría por esa suma, pues es siempre muy difícil conseguir un fiador por cantidad indeterminada. La Cámara con su ligereza acostumbrada no se fijó en ello y confirmó el auto. El art. 85 del Cód. de Proc. preceptúa que el arraigo del juicio no debe hacerse consistir necesariamente en fianza pecuniaria; por el contrario, admite la personal. A nadie se le puede ocurrir que por el mero hecho de pedir que se fije el monto de la fianza, se renuncia á ofrecer una garantía personal. Se fija el monto para luego hacerla efectiva en dinero ó personalmente.

2—Art. 85 del Cód. de Proc.—La Cámara declaró además que la suma de mil pesos era bastante y que esa suma podía ser garantida con cualquiera de las fianzas que autoriza el derecho. Esta última parte, viene á cohonestar lo que sostenemos en la nota precedente.

3—Opuesta la escepción de arraigo, el actor pidió: 1° que no le corriera término para oponerse á la escepción de arraigo, y 2° que se hi-



4. **Arraigo**—Del juicio, aun consentida la orden de arraigar, el demandante no tiene término perentorio para su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 105, Ser. 4^a.

Arraigo—Véase: *Excepción de arraigo*, núms. 1 y 2.

1^a. **Arras**—La prueba de que la suma recibida á cuenta lo fué en carácter de arras y no como alquiler, corresponde al que lo afirma.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 385, Ser. 4^a.

1^b. **Arrendamiento**—El contrato que verse sobre un inmueble puede ser hecho por instrumento privado, no siendo requisito esencial para su existencia y validez su otorgamiento por escritura pública.—Jur. Civ., tom. 6, página 285, Ser. 3^a.

ciese la declaratoria de pobreza, admitiéndole la información del caso. No se hizo lugar á ninguna de las dos peticiones. En cuanto á la necesidad de presentarse al Juez de turno, el art. 593 del Cód. de Proc., lo preceptúa terminantemente.

4—Esta resolución fué revocatoria de otra de 1^a Inst., en la que se dijo que es principio general que los jueces pueden dictar providencias compeliendo á los litigantes para que las cumplan por medio de apercibimientos y que por consiguiente pueden asimismo fijar un término dentro del cual debe darse cumplimiento al auto que manda arraigar bajo apercibimiento de tener al actor por desistido de su demanda, siendo esto equitativo y arreglado á derecho, pues no sería justo tener indefinidamente á un litigante bajo el peso de la amenaza de una demanda para cuando se le ocurra cumplir la orden de arraigo: que en el caso presente puede aplicarse por analogía el art. 460 del Cód. de Proc. La Cámara revocó esta providencia, diciendo, que la excepción de arraigo no puede surtir otro efecto que demorar el ingreso al juicio en los mismos términos que las demás excepciones dilatorias enumeradas en la ley.

1^a—Véase: verb. *Alquiler*, núm. 3.

1^b—El Juez de 1^a Instancia dijo que el contrato debió ser hecho en escritura pública bajo pena de nulidad, de acuerdo con lo que dispone el art. 1184, inc. 1^o del Cód. Civ., el que establece: «los contratos que tuviesen por objeto la transmisión de bienes inmuebles en propiedad ó usufructo, ó alguna obligación ó gravamen sobre los mismos». La Cámara dijo que «el Inferior partiendo de la base errada de que para el



2. **Arrendamiento**—El término para éste, solo empieza á correr desde la fecha en que el locador pone en posesión al locatario.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 146, Ser. 4^a.

3. **Arrendamiento**—La prueba de la conformidad de un condómino, con el contrato de arrendamiento del inmueble sobre que existe el condominio, debe resultar del contrato mismo firmado por el otro condómino, la testimonial no es procedente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 281, Serie 4^a.

arrendamiento de un inmueble sea necesario escritura pública, cuando el art. 1184 en que él se funda, solo se refiere á los contratos de transmisión de inmuebles ó que versan sobre constitución de gravámenes sobre los mismos, ha incurrido también en error, etc.» Como se vé, para la Cámara poco importa suprimir una palabra ó un concepto con tal de amoldar la disposición de la ley á la resolución que quiera dictar. Así aquí se suprime la parte del artículo que hace referencia á alguna obligación, como si en el concepto genérico de obligación no estuviese comprendido el del contrato. La ley ha exigido la forma de escritura pública para las *obligaciones* que versen sobre inmuebles y por consiguiente los contratos que tengan este objeto deben ser hechos en esa forma, y si fuesen hechos en forma privada, solo tendrán la fuerza que les asigna los arts. 1185 y siguientes.

2—Arts. 510 y 1514 del Cód. Civ.

3—El copropietario de una cosa indivisa, no puede arrendarla, ni aun en la parte que le pertenece, sin el consentimiento de los demás partícipes—arts. 1512 y 2682 del Cód. Civ.—Cuando la cosa materia del contrato de locación excede de 200 pesos, la prueba de ese consentimiento solo puede establecerse por escrito—arts. 1193 del Código Civil, y 180 del de Proc.—Si se ha requerido la prueba escrita para la comprobación del contrato, no hay razón para no exigirla cuando se trata de comprobar el consentimiento de uno de los condóminos en virtud del principio jurídico de que *ubi eadem est ratio eadem esse debet juris dispositio*. Si se quisiese decir que el condómino ha ratificado el contrato celebrado, sería necesario que esa ratificación se hiciese de acuerdo con lo establecido en el art. 1062 del Cód. Civ., según el cual la forma del instrumento de confirmación, debe ser la misma y con las mismas solemnidades que están exclusivamente establecidas para el acto que se confirma. La Cámara aceptaba la prueba de testigos, pero mediante



Arrendamiento—Véase: *Contrato de locación*, núm. 17
—*Jurisdicción*, núm. 1.

Arrendatario—Véase: *Compraventa*, núm. 4.

A ruego—Véase: *Autenticidad*, núm. 1 — *Documento privado*, núm. 5—*Documento*, núm. 4.

Asesor de menores—Véase: *Demencia*, núm. 1.

1. Asistencia médica—Para que su pago sea obligatorio por un tercero, debe justificarse no solo la prestación, sino que fué por su orden.—Jur. Civ., tom. 8, página 426, Ser. 4^a.

2. Asistencia médica—Los facultativos que la prestan tienen derecho á cobrarla, aunque no comprueben el número de visitas y curaciones con tal de que comprueben que efectivamente la prestaron.—Jur. Civ., tom. 8, página 426, Ser. 4^a.

— — —
un principio de prueba por escrito: no concurriendo en el caso, ni uno ni otro extremo. Nosotros consideramos que la prueba escrita no puede suplirse aquí, ni aun con el documento privado, porque el art. 1184 exige en su inc. 1^o la escritura pública para «los contratos que tuviesen por objeto la transmisión de bienes inmuebles en propiedad ó usufructo, ó alguna obligación ó gravamen sobre los mismos.» La Cámara ha considerado en otro caso ya resuelto que la escritura pública no es necesaria para el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles.—Véase el núm. 1.

1—Para exigir el pago de los servicios profesionales á una persona determinada, se requiere no solo que se compruebe la asistencia médica y que se establezca la obligación de abonarla. El art. 1627 del Código Civ. dice, que el que hiciese algún trabajo á otro, tendrá derecho á exigir de él el pago de dicho trabajo, pero no consagra el derecho de exigir el pago de ese servicio de un tercero.

2—En este caso el Consejo Nacional de Higiene puede justipreciar esos trabajos teniendo en cuenta el tiempo que pudo durar la asistencia, y la naturaleza de la enfermedad. Esta repartición tiene á su cargo la apreciación técnica de los servicios, tomando en consideración todos los antecedentes del caso, de acuerdo con lo establecido en el art. 1627 citado. Este sumario ha sido omitido en la publicación oficial.



Asistencia médica—Véase: *Honorarios*, núm. 16—*Mémoires*, núm. 2.

Asistencia personal—Véase: *Notificación*, núm. 6.

1^a. **Asuntos judiciales**—La revocación del mandato en estos asuntos debe ser espresa, la simple presentación personal del mandante no basta para dar por revocado el poder.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 171, Ser. 4^a.

Atestación—Véase: *Nulidad de un testamento*, núm. 2.

Atribuciones—Véase: *Funcionario público*, núms. 4 y 5—*Contradocumento*, núm. 2.

1^b. **Audiencia**—Solo pueden darse por absueltas en rebeldía las posiciones, si se abre la audiencia y no se presenta el absolvente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 98, Serie 4^a.

2. **Audiencia**—Para resolver si procede la absolución de

1^a—El art. 1972 del Cód. Civ. establece que interviniendo el mandante directamente en el negocio encomendado al mandatario y poniéndose en relación con los terceros, queda revocado el mandato si él espresamente no manifiesta que su intención no es revocarlo; pero como el art. 1870, inc. 6º del mismo Código establece que las disposiciones del título *del mandato* rigen respecto de las procuraciones judiciales siempre que no se opongan á los del Cód. de Proc., el que en su art. 18 dice que los apoderados ó procuradores no cesan en su mandato sino por revocación espresa del poder, luego que sea admitida judicialmente.

1^b—Se sostiene por la Cámara que la apertura de la audiencia es necesaria para formular las peticiones que las partes vieren convenir á sus derechos. Este requisito establecido por la Cámara es una corruptela que se quiere introducir en procedimiento, pues la ley no exige el requisito de la apertura de la audiencia. Cuando el art. 128 dice que en la audiencia señalada el interesado manifestará las posiciones, se refiere al caso en que comparezca el absolvente al acto. Pero para tenerlas por absueltas, el artículo citado, no requiere otra cosa sino la citación sea personal y bajo apercibimiento, y que deje de comparecer sin justa causa: en ninguna parte exige la apertura de la audiencia. Estamos convencidos de la injusticia y sin razón de este requisito. La Cámara de lo Com. jamás lo ha exigido.

2—Véase nota precedente.

posiciones en rebeldía, debe existir en autos constancia de que se abrió la audiencia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 303, Ser. 4ª.

Audiencia—Véase: *Interdicto de retener*, núm. 1—*Testigos*, núm. 7—*Interdicto*, núms. 8 y 9—*Término*, números 3 y 4—*Obras*, núm. 2—*Posiciones*, núm. 33—*Interrogatorio*, núm. 1.

Audiencia del poseedor—Véase: *Interdicto de retener*, número 3.

Audiencia del demandado—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 4.

Aumento—Véase: *Pensión alimenticia*, núm. 1—*Locación*, núm. 10.

Ausencia—Véase: *Fallecimiento*, núm. 3—*Posiciones*, núm. 34—*Edictos*, núm. 1.

Ausencia involuntaria—Véase: *Posiciones*, núm. 14.

Ausente—Véase: *Posiciones*, núm. 19—*Rebeldía*, número 14—*Citación*, núm. 2.

Autenticación—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 7—*Firmas*, núm. 6—*Boleto de compraventa*, núm. 29—*Certificado médico*, núm. 1.

1. **Autenticidad**—Los testigos firmantes de un documento privado firmado á ruego, no bastan para justificar su autenticidad después del fallecimiento de aquel que resulta obligado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 313, Ser. 3ª.

1.—La prueba rendida fué únicamente la de testigos, la que debe ser juzgada con arreglo á lo prescripto en el art. 204 del Cód. de Proc., y de acuerdo á los principios de la sana critica. La parte contraria produjo prueba concluyente respecto á la inverosimilitud de la obligación contenida en el documento privado firmado á ruego, y es por esto que el Juzgado dijo que: «los testimonios de dichos testigos por sí solos y sin ninguna presunción que los contrariase, podrían quizá tomarse como decisivos para constatar el hecho sobre que versan: pero cuando repe-





2. **Autenticidad**—Negada la del documento privado en que se funda la acción, corresponde al demandante en primer término justificarla, y solo subsidiariamente procede la prueba sobre el contrato que de él resultaría.—Jur. Civil, tom. 4, pág. 317, Ser. 4ª.

3. **Autenticidad**—El reconocimiento de la autenticidad del contrato, no implica el del cumplimiento de aquellas estipulaciones que den origen á una obligación.—Jur. Civil, tom. 8, pág. 87, Ser. 4ª.

Autenticidad—Véase: *Documento de depósito*, núm. 1—*Obligación*, núm. 1—*Documento privado*, núms. 1, 3, 4, 5 y 7—*Peritos calígrafos*, núm. 1—*Diligencias de prueba*, núm. 7—*Certificado médico*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núms. 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 29 y 30—*Obligación de hacer*, núm. 12—*Transacción*, núm. 7—*Ratificación*, núm. 3—*Mandato*, núm. 12.

Auto—Véase: *Rebeldía*, núm. 7—*Juicios voluntarios*, núm. 1—*Curadora*, núm. 1—*Concurso civil*, núm. 4—*Tutor*, núm. 6—*Caución*, núm. 1—*Recurso de reposición*, núm. 3—*Liquidación*, núm. 5.

tidos indicios desautorizan su veracidad, no es posible admitirlos como prueba plena y completa.» Los testigos del acto habían, por otra parte, incurrido en graves contradicciones. Todo esto hace que el sumario se interprete en un sentido restrictivo y que el principio allí sentado sea tan solo exacto en cuanto se relacione con el caso resuelto, pero no puede admitirse como precedente para otros.

2—Este sumario no fué materia de resolución ni en primera ni en segunda instancia, y solo se dijo que el actor no había justificado su demanda en manera alguna, «pues no es tal el mismo documento que espresa el contrato arguido de falso por los demandados.» Es evidente que conviene probar la autenticidad de la firma, pero esta omisión no implica que la prueba del contrato no tenga eficacia si no se comprueba la firma. Puede establecerse en el curso del juicio la existencia del contrato por medio de la confesión, en cuyo caso la falta de autenticidad de la firma, no obstaría al progreso de la acción.



Auto apelable—Véase: *Concurso civil*, núm. 2.—*Diligencias judiciales*, núm. 1.

Auto consentido—Véase: *Excepciones*, núm. 7.—*Mandatorio*, núm. 15.

Auto de prueba—Véase: *Notificación*, núm. 13.

1^a. **Auto inapelable**—El auto que ordena medidas para mejor proveer es inapelable. Jur. Civ., tom. 9, págs. 81 y 143, Ser. 4^a.

2. **Auto inapelable**—El que ordena el levantamiento de la inhibición por haberse presentado bienes á embargo es inapelable.—Jur. Civ. tom. 9, pág. 83, Ser. 4^a.

Auto inapelable—Véase: *Autos inapelables*, núm. 1.
Inapelable, núms. 1 y 2.

1^b. **Auto judicial**—No procede el interdicto de despojo de

1^a —La Cámara dijo, que es facultativo del Juez dictar, con carácter de para mejor proveer, todas aquellas medidas que juzgue conducentes á ilustrar su juicio, fundándose en la disposición del art. 215 del Código de Proc. que parece autorizar esta inteligencia. Pero no debe olvidarse que cuando este artículo dice que si se ordenara alguna diligencia para mejor proveer etc., lo hace refiriéndose al art. 57 que enumera de una manera taxativa los autos que pueden dictarse con carácter de para mejor proveer.—Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Mejor proveer*, núm. 1.—De aquí resulta, que si la providencia es de las que los jueces pueden dictar de acuerdo con el art. 57, no será apelable, pero sí lo será cuando se ordenen medidas que no están allí comprendidas. Así se ha reuelto que no pueden ordenar declaraciones de testigos.—Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Declaraciones*, núm. 7.—Y si lo ordenaran ese auto sería apelable.

2.—Según la Cámara, es inapelable porque el art. 454 del Cód. de Proc. faculta al Juez para calificar por sí solo la caución ofrecida, tendente á obtener el levantamiento de un embargo preventivo, y además porque la inhibición general cualesquier que sean los motivos que la funden, debe dejarse sin efecto cuando pueda tener lugar un embargo de bienes determinados suficientes para hacer efectiva la garantía del acreedor—art. 457.—Esta es la jurisprudencia de la Cámara, la que hemos impugnado.—Véase: Inst., tom. verb. núm.

1^b—Según lo dispone el art. 581 en su inc. 2^o, Cód. de Proc., para que



la posesión si se ha perdido en virtud de un auto judicial.

—Jur. Civ., tom. 9, pág. 285, Ser. 4^a.

Auto judicial— Véase: *Interdicto de retener*, núms. 1 y 3.

Autos— Véase: *Apelables*, núm. 1—*Prescripción en segunda instancia*, núm. 1—*Causante*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 5.

Autos apelables— Véase: *Apelables*, núm. 1.

1^a. **Autos inapelables**— Solo lo son para el ejecutado en el juicio ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 233, Ser. 3^a.

Autos para sentencia— Véase: *Sentencia*, núm. 9.

Autos testamentarios— Véase: *Posesión*, núm. 7.

Autor— Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 61 y 113—*Acto ilícito*, núm. 11.

1^b. **Autoridad**— Existe violación siempre que careciendo de orden de allanamiento dictada por Juez competente, la autoridad se introduce en el domicilio privado sin permiso del propietario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

tenga lugar la acción de despojo es indispensable que el que lo intente haya sido despojado con violencia ó clandestinamente su posesión: si esa posesión se toma en virtud de un mandato judicial, faltan los elementos esenciales requeridos para la acción de despojo, pues esta no existe sino en el caso de que alguien haya tomado la cosa de su propia autoridad. La ley 10, tit. 10, Part. 3^a, define esta acción así: «Entrando ó tomando alguno por fuerza por sí mismo, sin mandato del Juzgado, cosa ajena».... Esta es la interpretación que dan los tratadistas á la acción de despojo.—Caravantes, tom. 3^o, núm. 1045; Llerena, Concordancias y comentarios del Cód. Civ.—Además, según terminante disposición del art. 2492 del Cód. Civ., la acción de despojo no compete al poseedor de inmuebles que perdiera la posesión de ellos por otros medios que no sean despojo. En este sentido tiene resuelto la Cámara algunos casos.—Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Auto judicial*, núm. 1.

1^a—Esta es la jurisprudencia de nuestros Tribunales.—Véase Inst., tom. 3^o, verb. *Juicio Ejecutivo*, núm. 1, el que en parte está equivocado según lo espresa la nota que lleva al pie; tom. 1^o, verb. *Apelaciones*, núm. 183; tom. 4, verb. *Inapelables*.

1^b—Véase: verb. *Allanamiento*, núm. 1.



2. **Autoridad**—El reo de desacato á la autoridad, no puede hacer responsable al funcionario desacatado, por los daños y perjuicios que la prisión fundada en ese delito le haya causado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 396. Ser. 3^a.

Autoridad—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 40—*Jurisdicción ordinaria*, núm. 1.

Autoridad legal—Véase: *Estatutos sociales*, núm. 1.

Autorización judicial—Véase: *Tutor*, núm. 1—*Bienes de menores*, núm. 3—*Mandante*, núm. 3.

1. **Avaluación**—Para la de terrenos, no se requiere título pericial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 84, Ser. 3^a.

Avalúo—Véase: *Consejo de higiene*, núm. 1.

2—El actor fundó su demanda en los arts. 1078 y 1083 del Código Civil. El demandado dijo que haciendo uso del derecho que le acuerda el Reg. de Policía y llenando una obligación inherente á su cargo, había constituido en arresto al actor, remitiéndolo en seguida con los antecedentes al Jefe de Policía y que con eso cesó su intervención. Al fundar su acción el demandante, en el art. 1078 del Cód. Civ., implícitamente sostiene que los procedimientos usados con él constituían un delito del derecho criminal. Para que se considere existente esta clase de delitos, y que pueda dar nacimiento á la acción de daños y perjuicios, es necesario establecer en juicio la infracción definida y castigada por la ley. Admitiendo que la acción se quiera fundar en la comisión de un acto ilícito, debe comprobarse que el agente obró con dolo, culpa ó negligencia como lo exige el art. 1068. El hecho enunciado en el sumario, no puede constituir un acto ilícito porque según el artículo 1071, el ejercicio de un acto legal no puede constituir como ilícito ningún acto.

1—El Juez dijo, que no estando matriculadas las personas que habían sido propuestas no podían ser nombradas. La Cámara dijo simplemente que, para la tasación de terrenos no se requiere título profesional. ¿Por qué? Ella lo sabrá y basta: no se considera obligada á dar la razón de su resolución, considerando que es suficiente fundamento la suficiencia de su propia autoridad. Además de que es Tribunal Superior, y nadie le puede obligar á cumplir con su deber.



1. **Avisos**—La falta de intervención de algunos herederos, como asimismo la publicación de los avisos del remate judicial por menos días que los fijados por el Juez, hacen procedente la nulidad de la ejecución aun después de aprobada la venta, hecha la oblación del precio y dada la posesión al comprador.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 310, Ser. 4^a.

1—La ejecución se fundaba en la regulación de honorarios de un agrimensor por trabajos practicados en unos autos testamentarios, sin que esa regulación hubiese sido notificada á una de las partes. Es evidente que el juicio tiene que ser nulo para esa parte, pues es sustancial en todo juicio la necesidad de oír al demandado, siendo así que la petición de regulación constituye una verdadera demanda: y si como consecuencia de esa regulación se sigue el juicio contra todos los deudores conjuntos, vendiéndose la cosa común, esos actos, ese procedimiento ejecutivo nulo, porque nadie puede ser condenado sin ser oído. En cuanto á la falta de publicación de los avisos, debe tenerse presente lo que la Cámara resolvió en otro caso.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Errores*, núm. 1; tom. 4º, verb. *Remate judicial*, núm. 3.—Arts. 986 del Código Civ., y 513 del de Proc.



Balance—Véase: *Cuenta corriente*, núm. 1.

Banco—Véase: *Remate judicial*, núm. 20.

Banco Nacional—Véase: *Depositario judicial*, núm. 2.

Bases—Véase: *Cláusulas*, núm. 1.

1. **Bautismo**—La prueba supletoria para justificarlo, es procedente siempre que no existe la partida en el lugar en que se tenga seguridad haberse celebrado el acto.—Jurisprudencia Civil, tom. 5, pág. 236, Ser. 3ª.

1—Esta resolución se dictó con motivo de uno de los innumerables casos resueltos por el juez Méndez Paz, quien opinó que es necesario acreditar en forma la imposibilidad de presentar la partida, siendo así que la circunstancia de haber tenido lugar el acto en un local determinado, no es bastante demostración de que allí se haya celebrado efectivamente el acto, pues bien pudo haberse verificado en otro punto, no siendo consiguiente al caso de proceder a la prueba supletoria. La Cámara revocó el auto fundándose en que no es posible obligar a ningún interesado a producir prueba negativa, siendo bastante, a los efectos del art. 85 del Cód. Civ., el resultado negativo del informe expedido por el Oficial público. El sumario está de acuerdo con la jurisprudencia constante de la Cámara. Véase: Inst., tom. 4º, verbo *Información supletoria*, núm. 1; tom. 3, verb. *Informe*, núm. 2, y *Fallecimiento*, núm. 1; tom. 1º, verb. *Partidas parroquiales*, núm. 1965.—Con toda esta jurisprudencia, el mencionado juez continúa impertérrito resolviendo las cuestiones en sentido contrario, produciendo así graves perjuicios en los intereses de los que se ven obligados a impetrar justicia ante él.



Bien rematado—Véase: *Remate judicial*, núm. 23.

1. **Bienes**—Corresponden á la sucesión del esposo los bienes que le fueron adjudicados en virtud de la cuenta de partición debidamente aprobada en la testamentaria de la esposa, aun cuando fuesen propios de ésta y siempre que á sus herederos se les hubiese adjudicado bienes que representen igual valor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 90, Ser. 3^a.

2. **Bienes**—La solidaridad no se presume; el simple fiador no está obligado al pago mientras no se haga escusión en los bienes del deudor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 175, Serie 3^a.

3. **Bienes**—Si los dados á embargo corresponden al monto de la fianza, debe levantarse la inhibición.—Jurisprudencia Civil, tom. 4, pág. 249, Ser. 3^a.

4. **Bienes**—Pertenecen exclusivamente á la esposa los

1—El marido adquirió los bienes de la esposa en virtud de adjudicación que se le hizo en pago de su haber. Esa adjudicación se hizo por el importe de la tasación, dejando de pertenecer á la sucesión de la esposa. Y no puede ser de otra manera, porque si bien el terreno pudo ser considerado como un bien del patrimonio de la esposa, y por su muerte pertenecer á sus hijos, dejó de serlo por haber sido apreciado en la cuenta particionaria de su testamentaria, separado como un capital de la misma por el valor de su tasación y adjudicado ese valor á sus hijos, recibiendo así éstos todo lo que podían pretender.

2—La solidaridad no se presume—arts. 701 y 2003 del Cód. Civ.—En cuanto á la necesidad de la escusión, tenemos el art. 705 que la exige para hacer efectiva la fianza.

3—De la tasación verificada resultó que los bienes dados á embargo garantían acabadamente la suma ejecutada, en cuyo caso procede el levantamiento de la inhibición—art. 461 del Cód. de Proc.

4—Fallecido el marido, la esposa dedujo demanda contra la sucesión de aquél á fin de que se declarase que algunas propiedades adquiridas durante su matrimonio le pertenecían exclusivamente por haber sido compradas con bienes provenientes de la herencia recibida de su padre. El esposo declaró que los bienes los había comprado con la dote de su mujer y para ella. Ante una declaración de esta naturaleza, el hecho no



bienes comprados con anterioridad á la vigencia del Código Civil, con dinero propio, aun cuando la declaración no conste en la escritura de adquisición.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 363, Ser. 3ª.

5. **Bienes**—Los adquiridos durante la sociedad conyugal se suponen gananciales aun cuando hayan sido comprados á nombre de uno de los esposos, mientras no se justifique plenamente que la adquisición se hizo con fondos particulares.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 378, Ser. 3ª.

6. **Bienes**—El fiador de un curador sólo responde por

admite duda para los hijos, pues como esa declaración fué muy anterior al fallecimiento del causante, no existe ni siquiera la duda de que ella hubiese sido hecha con la intención de defraudar á sus hijos en sus legítimos bienes. Pero aun en el caso de que esto no fuera así, la declaración del recibo de la dote prueba que efectivamente la esposa la introdujo—art. 1228, Cód. Civ.—De aquí resulta que si la esposa introdujo dote al matrimonio, y si esa dote se empleó en la adquisición de inmuebles, éstos pertenecen exclusivamente á la esposa—Leyes 3, título 9, lib. 5 Recop.; 11, tit. 4, lib. 3, F. R.; y 49, tit. 5, Part. 5ª.—Esta última ley, después de sentar el principio de que la adquisición hecha por una persona con dinero ajeno, es de la que hace la compra, agrega: «Fueras ende si los dineros fuesen de la dote de alguna mujer, é su marido con voluntad de ella ficiese la compra. Ca en tales casos magüer el comprador compre la cosa en su nome, gana el señorío della aquel cuyos eran los dineros que fueron pagados por el precio della». Esta ley no exige, como se ve, que en la escritura se espresé que la compra se hace con el dinero de la esposa, sino que lo sea con bienes de ella y con su aquiescencia. La actora comprobó asimismo, por medio de documentos fehacientes, que introdujo al matrimonio un capital muy superior al que representaba en el momento de las adquisiciones de los bienes el precio pagado por éstos. El consentimiento de la esposa puede manifestarse aun después de otorgada la escritura de adquisición, pues la ley no exige que sea en el acto mismo.

5—Art. 1271 del Cód. Civ.; Leyes 1 y 4, tit. 3, lib. 3, F. R.; 1 y 2, tit. 9, lib. 5, Rec. Cast., 203 del Estilo; 4, tit. 9, lib. 10, Nov. Rec.

6—El contrato de fianza es siempre por su naturaleza un contrato accesorio; de manera que para que exista, es indispensable que se considere existente válidamente la obligación principal, cuyo cumplimiento

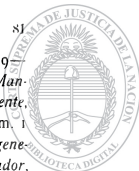


los bienes pertenecientes á los menores: probado el indebidó nombramiento por no haber menores, falta la causa de la fianza.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 345, Ser. 3^a.

7. **Bienes**—Debe declararse inoficiosa la donación si el donante carecía de bienes el día de su fallecimiento.—Jurisprudencia Civil, tom. 6, pág. 74, Ser. 3^a.

garante subsidiariamente—art. 1994 del Cód. Civ.—Uno de los requisitos necesarios en toda obligación, para que ella tenga eficacia legal, es que reconozca una causa, y si falta la causa espresada, por lo menos que se funde en otra verdadera—arts. 499 y 501 *ibid.*—Si la persona sometida á una curatela lo está indebidamente, la fianza carece de causa, porque ella tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento de las funciones de curador, y no habiendo curador, no existe aquel cargo. Si se garanten las funciones de curador y la curatela no existe, la obligación accesoria desaparece por inexistencia de la principal. Si una persona administra bienes en el carácter de curador de personas perfectamente capaces, ese ejercicio se convierte en mera administración y sus actos son considerados como tal, pero no como los de un curador, y sólo debe rendir cuenta como simple administrador, no como curador.

7—Se trata de saber si para que una donación pueda considerarse inoficiosa, debe atenderse únicamente á la época en que se hizo. La opinión contraria prevaleció en la Cámara. La ley reputa inoficiosa una donación cuando ella excede la parte que el donante podía disponer. La ley 4, tit. 4, Part. 3^a, dice así: «E quando la donación es fecha simplemente por carta, o por palabra, mas non es aun entregada á aquel á quien la faze tenuto es de la cumplir aquel que la faze ó sus herederos. Pero esto se debe entender desta guisa: que si aquel que la donacion ha de cumplir, fuese tan rico que deja, de lo que le fincare, tanto de lo suyo que pueda bien venir de guisa que non aya de demandar lo ageno, entonce es tenuto de la dar cumplidamente, mas si por ende no se fincase de que pudiera vivir si lo cumpliese, entonce non seria tenuto de cumplir la donación». El Código francés dispone, en su art. 920: que las donaciones, sea entre vivos ó por causa de muerte, que excedan de la parte disponible, serán reducidas á ésta á la apertura de la sucesión. En el mismo sentido se expresan los arts. 838 del Cód. napolitano y el 760 del de Holanda, siendo de advertir que todos ellos han sido citados por el Códificador en la nota al art. 1830 de nuestro Cód., implicando esta circunstancia que ellos han sido incorporados á nuestra legislación como su mejor ilustración. El art. 1831 siguiente, corrobora esta inteligencia de la ley, cuando es-



Bienes—Véase: *Embargo*, núms. 3, 5, 14, 16, 18 y 19—*Partición estrajudicial*, núm. 3—*Impuesto*, núm. 3—*Man datario*, núm. 11—*Inhibición*, núm. 16—*Juez competente*, núm. 2—*Reivindicación*, núm. 22—*Gananciales*, núm. 1—*Comprador*, núm. 4—*Tutor*, núm. 1—*Inhibición gene ral*, núm. 13—*Dominio público*, núm. 1—*Administrador*, núm. 3—*Hijuela*, núm. 1—*Herederos*, núm. 7—*Estatutos scciales*, núm. 1—*Personería*, núm. 3—*Administrador ju dicial*, núm. 1—*Posesión*, núms. 10, 11 y 17—*Caso for tuito*, núm. 1—*Inscripción*, núm. 1—*Contrato de compra venta*, núm. 5—*Petición de herencia*, núm. 1—*Sociedad conyugal*, núm. 2—*Honorarios*, núm. 29—*Herencia*, nú mero 4—*Divorcio*, núm. 7—*Curador*, núm. 1—*Legado*, núm. 4.

Bienes á embargo—Véase: *Auto inapelable*, núm. 2.

Bienes adjudicados—Véase: *Esposo*, núm. 2.

Bienes comprados—Véase: *Desistimiento*, núm. 6.

1. **Bienes de menores**—Cualesquiera que hubiesen sido

tablece, que si por el inventario de los bienes del donante fallecido, se conociese que las donaciones que ha hecho fuesen inoficiosas, sus he dereros necesarios podrán demandar su reducción hasta que queden cu biertas sus legítimas. Lo contrario importaría una desheredación, y lo que es más, una desheredación inconsciente, porque ni siquiera podía imaginár el donante. Bien pudo tener suficientes bienes al tiempo de hacer la donación, y que lo propio no sucediera al tiempo de su muerte. Se dirá que el donatario puede no exigir durante la vida del donante el cumplimiento de la donación, teniendo en cuenta consideraciones per sonales; pero esto poco vale como argumento, porque en todo caso de be imputarse á sí mismo el no haberla exigido cuando pudo ser debida mente satisfecha. El doctor Llerena, comentando el art. 1831 del Có digo Civil, se espresa en el mismo sentido que queda espuesto.

1—Se trata de la venta de bienes de menores: para saber si ella es válida, basta averiguar tan solo las razones que motivaron la enagenación de la propiedad y si al celebrar el acto se han observado las for malidades prescriptas por el derecho, dándose al menor la debida re-



las omisiones en que hubiese incurrido el tutor, el menor solo tiene acción contra él, pero no contra terceros adquirentes de los bienes con las formalidades que impone la ley y con la debida intervención judicial.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 33, Ser. 3ª.

2. **Bienes de menores**—Solo pueden ser vendidos privadamente por un precio mayor que el de la tasación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 78, Ser. 4ª.

3. **Bienes de menores**—La autorización para la venta particular de bienes de menores, es facultativa de los jueces.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 40, Ser. 4ª.

4. **Bienes de menores**—La venta estrajudicial de estos

presentación por medio de un tutor, y la intervención que le corresponde al Ministerio de Menores—arts. 59 y 491 a 494 del Cód. Civ.—En el otorgamiento de la escritura se llenaron todas las formalidades con la autorización del Juez de la tutela. Si el tutor falta á sus deberes incurriendo en omisiones; si el pupilo sufre perjuicios en sus intereses, y si con este motivo el tutor contrae responsabilidades, esa es cuestión que debe ventilarse en otro juicio, tratando de hacer efectivas las responsabilidades personales del tutor, pero jamás daría ello acción á decir de nulidad de la enagenación. Una solución contraria afectaría intereses de orden público, entronizando la inseguridad en la propiedad adquirida con buena fe, justo título y bajo las garantías de la autoridad judicial. Llevaría la estafa al último de los extremos, puesto que las autoridades judiciales serían coautoras de ella.

2—Art. 442 del Cód. Civ.

3—La Cámara dijo, que no encontrando el Juzgado ninguna ventaja en la venta, no procedía la autorización para verificarla. El Juez dió como fundamento la circunstancia de que el bien que se quería enagenar privadamente estaba en condominio, lo que impedía conocer si la venta era ó no conveniente. Este es un fundamento demasiado pueril para ser tenido en consideración. El condominio no puede jamás ser un obstáculo para la venta, por el contrario, es un deber el proceder á la venta de los bienes que se encuentren en estas condiciones como lo preceptúa el art. 436 del Cód. Civ.

4—De acuerdo con la jurisprudencia.—Véase el núm. 2—y con la ley—art. 442, Cód. Civ.



bienes, solo puede autorizarse por mayor precio que el de tasación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 232, Ser. 4^a.

5. Bienes de menores—Deben ser vendidos en remate judicial.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 231, Ser. 4^a.

6. Bienes de menores—El padre usufrutuuario de los bienes de aquéllos, no puede cargarles los gastos de contribución directa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4.

Bienes de menores—Véase: *Venta privada*, núm. 1—*Menores*, núm. 1.

Bienes del alimentario—Véase: *Alimentos*, núm. 1.

1^a. Bienes del concurso—El Juez del concurso es el único competente para entender en la venta de ellos.—Jur. Civil, tom. 5, pág. 410, Ser. 4^a.

Bienes del deudor—Véase: *Fiador*, núm. 1—*Prenda*, número 1.

Bienes del donante—Véase: *Donación*, núm. 1.

1^b. Bienes del esposo—Justificada la separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse, la esposa carece de derecho á los bienes quedados por fallecimiento del marido.—Jur. Civ., tom 6, pág. 366, Ser. 3^a.

1^c. Bienes del heredero—El administrador no debe tomar posesión de aquellos bienes que un heredero alegue tener á su nombre propio aun cuando sean de los incluidos en el testamento.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 27, Ser. 4^a.

Bienes del pupilo—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 8.

Bienes del viudo—Véase: *Sociedad conyugal*, núm. 1.

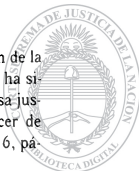
5—Art. 139 del Cód. Civ. —Salvo los casos de excepción establecidos por el art. 442.

6—Arts. 291 y 2894, Cód. Civ.

1^a—En virtud del carácter de universal que tiene este juicio, que atrae á sí á todos los demás.

1^b—Art. 3575 del Cód. Civ.

1^c—Véase: verb. *Administrador*, núm. 3.



1^a. **Bienes de la esposa**—Cuando la representación de la esposa que la ley confiere personalmente al marido, ha sido delegada en un tercero, la esposa puede, con causa justificada pedir su remoción, y los jueces deben conocer de su procedencia ó improcedencia.—Jur. Civ., tom. 6, página 49, Ser. 4^a.

1^b. **Bienes de la sociedad**—Presentados éstos á embargo, bastantes á responder al crédito, debe levantarse la inhibición personal de los bienes particulares de los socios.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 411, Ser. 4^a.

Bienes de la sociedad—Véase: *Estatutos sociales*, núm. 1.

1^c. **Bienes de la sucesión**—Los padres pueden comprarlos, en tanto no se haya verificado la partición y adjudicación á los menores.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 99, Serie 4^a.

1^a—Se dijo que el apoderado nombrado por el esposo había sido condenado en otro tiempo á tres años de penitenciaría por estafa, lo que constaba en uno de los fallos de la Cámara respectiva que corren publicado. El Superior no pudo resolver el punto por cuanto esa circunstancia no hacía al fondo de la cuestión que se ventilaba en el juicio, y la demanda no tenía por objeto provocar á ese respecto una resolución, sino que pedía se la concediera venia para administrar sus bienes en atención á la avanzada edad del esposo. Pero la Cámara dijo «que el Juez de la causa deberá adoptar los procedimientos que correspondan para salvaguardar los intereses de la esposa con motivo de la denuncia hecha.»

1^b—El art. 443 del Cód. de Com. preceptúa que los bienes particulares de los socios que no se incluyeron en la formación de la sociedad, no pueden ser ejecutados para el pago de la deuda social sino después de ejecutados todos los bienes de la sociedad.

1^c—Parece que los arts. 297 y 1361, inc. 1^o del Cód. Civ. se opusiesen á esta resolución, pues los bienes en condominio pertenecen á una entidad distinta de la de cada uno de los copropietarios, como lo demuestra el hecho de que cualquiera de ellos puede adquirir la cosa por licitación, de lo contrario aparecería el condómino comprando lo propio.—Véase: verb. *Bienes testamentarios*, núm. 2.



2. Bienes de la sucesión.—El cónyuge supérstite puede comprar en remate judicial, bienes de la sucesión en tanto no exista partición ni hayan sido adjudicados á los menores.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 257, Ser. 3^a.

3. Bienes de la sucesión.—El legatario de parte alicuota tiene un derecho proporcional en los frutos y rentas de

2.—Véase nota precedente.—Aqui se resolvió que el Juez podia conferir una representación especial á los menores á fin de que no se perjudicasen en la compraventa celebrada.

3.—El cesionario de parte alicuota tiene derecho á una parte en la sucesión, en la que tiene un interés dirreto y legitimo constituyendo una verdadera comunidad con los herederos en todos los bienes ó cosas, que constituyen la universalidad del caudal hereditario. Así el artículo 3263 dice: «Sucesor universal es aquel á quien pasa el todo ó una parte alicuota del patrimonio de una persona, y no sería posible en presencia de este precepto negarle al legatario alicuota el carácter de heredero, pues aun cuando el sucesor universal por excelencia es indudablemente el heredero, suponiendo el Codificador la existencia de otros herederos universales, éstos no pueden ser sino los legatarios de una parte alicuota de la herencia. Parece que el art. 3417 del Cód. Civ. se opusiera á lo establecido en el sumario. Dicho artículo dispone efectivamente que los frutos y productos de la herencia corresponden al heredero que ha entrado en posesión de ella; pero este principio no es incompatible con los derechos del legatario, ya sea que se ejercite respecto de la universalidad de la herencia ó respecto de cosas determinadas de ella, pues siendo su razón filosófica la de que los efectos de la posesión se retrotraen á la época de la muerte del causante, este beneficio de la ley alcanza, como lo observa el doctor Llerena—tomo 6^o, pág. 205,—al legatario que adquiere también los frutos desde la misma época. La legislación francesa está en contra de la nuestra, pues en el art. 1005 del Godigo Napoleón establece que el goce no empieza sino desde el día de la demanda. Nuestra ley tiene más amplitud, y el pensamiento del legislador aparece claro en la nota al artículo 3766 cuando hablando de su oposición á las ideas de Troplong establece, que el heredero no hace suyos los frutos de la cosa legada, ni es poseedor de buena fe en los casos en que el legatario no hubiese demandado su entrega. Es por esto que según la mente de nuestra ley, los legados producen en general sus efectos desde el día de la muerte del testador.—Véase las notas á los arts. 3766 y 3769.—Aubry



los bienes de la sucesión mientras dura la indivisión.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 418, Ser. 4^a.

4. Bienes de la sucesión—El legatario de porte alicuota puede pedir en cualquier tiempo la rendición de cuentas sin esperar á que termine el juicio sucesorio con la división definitiva de los bienes y completa ejecución del testamento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 418, Ser. 4^a.

1^a. Bienes determinados—La acción de jactancia solo procede si el reo se atribuye derechos á los bienes determinados de propiedad del actor.—Jur. Civ., tom. 10, páginas 114 y 295, Ser. 4^a.

Bienes determinados—Véase: *Herencia*, núm. 2—*Poseción judicial*, núm. 12.

1^b. Bienes dotales—La información para justificar la y Rau dicen, que el legatario á título universal, en lo que concierne al goce de los frutos y legados, debe ser asimilado al legatario universal que se encuentra en concurrencia con los herederos, y que si bien no representa la personería del difunto y no goza de la posesión, tiene empero desde la muerte del testador un derecho de copropiedad sobre los bienes dejados por éste: y más adelante agregan, que Zachariæ incurre en error al sostener que dichos legatarios, si bien propietarios de la cuota, parte ideal en que son instituidos, no tienen sin embargo antes de la partición, ningún derecho de propiedad, ó copropiedad sobre los objetos individualmente determinados que componen la herencia, precisamente porque haciéndose dichos legatarios desde la apertura de la sucesión, copropietarios de la herencia, se hacen también desde ese momento copropietarios de todos y cada uno de los objetos que la constituyen—§ 720 y 721.

4—Es un derecho que surge de la nota precedente.

1^a—Art. 425 del Cód. de Proc.

1^b—La confesión, hecha por el marido, de los bienes dotales, no perjudica á los acreedores si no consta de las convenciones matrimoniales ó de otros actos jurídicos revestidos de igual fuerza, como lo prescribe el art. 1229 del Cód. Civ. Los acreedores pueden siempre atacar estos instrumentos por cualesquiera de las causas determinadas en el art. 959. Es inútil pretender garantizar los bienes de la esposa por medio de una información, pues ellos están garantidos por la ley: los



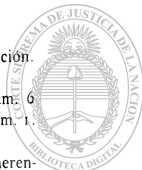
existencia de bienes dotalos no reconocidos por contrato, es improcedente.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 237, Ser. 4^a.

1.° **Bienes embargados**—Solo debe venderse una parte de los bienes embargados bastante á cubrir el crédito si existe conformidad de partes.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 182, Ser. 4^a.

2.° **Bienes embargados**—Si no se encuentran en posesión arts. 1258 y 1259 del Cód. Civ., establecen los derechos y obligaciones de la mujer para el caso que fuese concursado el marido ó la sociedad conyugal, y entonces sería llegado el caso de hacer la declaración y no antes como medida preventiva. Aun dado el caso de que hubiese de aprobarse la información, ella carecería de valor, porque no podría oponerse á terceros ni á los acreedores futuros del esposo: los actos jurídicos no pueden oponerse á la libertad de las acciones ni á los derechos de terceros—art. 953.

1—Existiendo conformidad, no hay porque oponerse á ello, puesto que el interés de las partes es la medida de las acciones en juicio.

2—El embargo se trabó en bienes muebles que se encontraban en una casa distinta de aquella en que vivía el demandado, comprobándose al mismo tiempo por el opositor y por medio de documentos públicos que los bienes eran de su propiedad. En este caso no hay necesidad de deducir tercería. El art. 478 del Cód. de Proc. establece, que el embargo se trabará en los bienes que el acreedor designe si estuviesen en poder de ellos el deudor. Cuando los bienes estuviesen en poder de un tercero, es necesario así establecerlo y hacérselo saber—artículo 473.—Esta medida de levantar el embargo trabado sin deducirse tercería ha sido introducida por la Cámara entre ese cúmulo crecido de medidas inventadas y que no son otra cosa que corruptelas sin fundamento legal, y que contribuyen á hacer más indecisos los derechos en litigio. La Cámara de lo Com. ha sentado el mismo principio.—Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Tercería*, núm. 3.—Pero últimamente ha reformado esta jurisprudencia, como puede verse en el caso de Bennini con Rochi sobre ejecución de sentencia, Juzgado del doctor Peyret Sec. de Balado. Puede verse asimismo de acuerdo con el sumario el tom. 4^o de la Inst., verb. *Tercería*, núm. 1; y tom. 2^o, mismo verbo, núm. 2, y *Oposición*, núm. 1; tom. 1^o, verb. *Tercería*, núm. 2552. La Cámara de lo Comercial en el tom. 2^o, pág. 36, Ser. 1^a, estableció que «la propiedad de los bienes embargados judicialmente debe probarse en juicio contradictorio.» Esta es la sana doctrina.



del deudor procede al levantamiento por simple oposición.

—Jur. Civ., tom. 10, pág. 77, Ser. 4^a.

Bienes embargados—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 6.

—*Depositario judicial*, núm. 1—*Venta en remate*, núm. 1.

Bienes entregados—Véase: *Indivisión*, núm. 2.

1^a. Bienes fiscales—La propiedad de los que por herencia vacante son declarados fiscales, corresponden al Consejo Nacional de Educación.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 109, Ser. 3^a.

Bienes fuera de la República—Véase: *Impuesto*, núm. 3.

Bienes hereditarios—Véase: *Litispendencia*, núm. 1—*Herederero*, núm. 7—*Tasación*, núm. 3—*Indivisión*, núm. 2.

1^b. Bienes hipotecados—La falta de aceptación por el acreedor hipotecario de la transferencia del bien hipotecado, solo puede lesionar los derechos del vendedor.—Jurisprudencia Civil, tom. 10, pág. 348, Ser. 4^a.

Bienes hipotecados—Véase: *Costas*, núm. 58.

Bienes inmuebles—Véase: *Contrato privado*, núm. 2—*Comisión*, núm. 5—*Posesión judicial*, núm. 6—*Boleto de compraventa*, núm. 27.

Bienes muebles—Véase: *Comisión*, núm. 4—*Venta*, número 6.

1^c. Bienes municipales—El Concejo Deliberante carece de facultad para enagenar bienes municipales sin llenar la condición esencial de licitación que requiere la Ley Orgánica de la Municipalidad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 372, Serie 4^a.

1^a—Art. 44, inc. 10, de la Ley de Educación, de 8 de Julio de 1884.

1^b—Véase: *Acreedor hipotecario*, núm. 3.

1^c—El art. 44, inc. 2^o, de la Ley Org. de la Municipalidad, establece que el Concejo Deliberante podrá acordar con dos tercios de votos de los miembros que lo componen, la enagenación por medio de licitación de las propiedades que no sean de uso público.



Bienes particulares—Véase: *Embargo*, núms. 7 y 10
—*Bienes de la sociedad*, núm. 1—*Venia*, núm. 4.

Bienes poseídos—Véase: *Prescripción*, núm. 3.

1. Bienes propios—El importe de los del viudo, no debe ser incluido en el haber de la testamentaria de la esposa, sino en la parte que ellos hayan sido objeto de mejoras durante la sociedad conyugal.—*Jurisprudencia Civil*, tom. 2, pág. 417, Ser. 3ª.

2. Bienes propios—Los herederos no pueden reclamar de terceros los bienes propios enajenados por los padres durante su menor edad, si hubiesen aceptado la herencia.—*Jur. Civ.*, tom. 4, pág. 56, Ser. 4ª.

1—En el caso presente, hubo conformidad de partes en que las mejoras debían ser consideradas como gananciales. De lo contrario, este sumario estaría en contra de la disposición del art. 1266 del Cód. Civ., en su última parte, que atribuye la propiedad al cónyuge á quien corresponde la especie principal. Sin embargo, debe hacerse presente que el sumario está de acuerdo con el inc. 6 del art. 1272. El sumario, pues, debe tomarse bajo el sentido especial que la Cámara le dió. En algunos casos las mejoras son gananciales, en otros no; todo depende de si ellas fueron hechas por la sociedad ó por un tercero: en el primer caso, pertenecen á la sociedad conyugal; en el segundo, son propios del dueño de lo principal.

2—Este caso fué resuelto bajo el imperio de las antiguas leyes, las que prohibían á los padres enajenar los bienes propios de sus hijos, quedando en su caso obligados los suyos y con la facultad reservada al heredero para perseguirlos si hubiesen pasado á manos de terceros. Pero este principio, contenido en la Ley 24, tit. 13, Part. 5ª, no acordaba al heredero un derecho absoluto; hay en la misma un límite á su ejercicio: «E esto se entiende, dice, quando non quisiieren heredar, ni auer parte en los bienes del padre. Ca si quisiessen heredar en ellos, entonce non podrian demandar los sus bienes propios á aquellos á quienes los ouisse el padre enajenado, segund que es dicho: porque todos los pleitos derechos que el padre ouisse fecho, serian tenudos de guardar, e de non venir contra ellos, despues que fuesen herederos». Si el causante no podía alzarse contra la enajenación, estando, por el contrario, obligado á su cumplimiento, es fuera de duda que sus sucesores



Bienes propios—Véase: *Administrador*, núm. 4.

1^a. Bienes raíces—La comisión del martillero en la venta de bienes raíces es de dos por ciento.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 105, Ser. 4^a.

2. Bienes raíces—La escritura pública no es indispensable para justificar la propiedad de bienes inmuebles adquiridos durante la vigencia de las antiguas leyes.—Jurisprudencia Civil, tom. 10, pág. 262, Ser. 4^a.

Bienes recibidos—Véase: *Cuenta particionaria*, número 5.

1^b. Bienes testamentarios—El padre puede comprar los bienes testamentarios, en tanto no exista adjudicación, ó si fuesen en condominio con los herederos menores.—Jurisprudencia Civil, tom. 4, pág. 230, Ser. 4^a.

res también carecen de derecho para accionar. *Quod ipsis, qui contraxerunt obstat, et successoribus eorum obstat*. El heredero sucede á su autor en todos sus derechos y obligaciones, siendo jurídicamente considerado como una sola persona.—Ley 13, tit. 9, Part. 6^a.—La S. C. N. ha sentado la misma jurisprudencia.—Véase: tom. 8^o, pág. 492, Ser. 1^a; tomo 13, pág. 267, Ser. 2^a.

1^a—Véase. verb. *Comisión*, número último.

2—Así lo tiene declarado la Cámara en la causa de Oliver con el Ferrocarril del Norte fallada en 9 de Junio de 1891, fijando el verdadero alcance de las leyes 56 y 114, tit. 18, Part 3^a, con el texto expreso de la ley 6, tit. 15, Part. 5^a, que autoriza la venta de bienes raíces sin la formalidad de la escritura pública, cuando establece que el contrato puede hacerse de dos maneras: con carta y sin ella; é invocando la autoridad de Caravantes, de Antonio Gómez, de Gutiérrez Fernández, y la jurisprudencia de la S. C. P.—Véase la nota al verb. *Escritura pública*, núm. 12.

1^b—El inmueble pertenecía al padre y á los hijos como herederos de la madre. Ordenada la venta pública, lo adquirió para sí y para algunos de sus hijos; de manera que no es el caso del art. 1361, inc. 1^o, puesto que en vez de comprar bienes de los hijos que están bajo su patria potestad, compró con ellos un bien común, haciendo cesar la indivisión que tenía con otros hijos.



2. Bienes testamentarios—El inventario de éstos debe hacerse en el local en que existan los muebles.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 360, Ser. 4^a.

3. Bienes testamentarios—Carece de valor legal con respecto á los legatarios, la tasación de dichos bienes verificada sin su intervención; y en consecuencia el mayor ó menor valor fijado, no enerva su derecho á exigir el pago íntegro del legado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 390, Ser. 4^a.

Bienes testamentarios—Véase: *Declaratoria de herederos*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 11—*Indivisión*, núm. 1—*Condominio*, núm. 3.

Bigamia —Véase: *Separación de bienes*, núm. 3.

Blancos—Véase: *Escritura pública*, núm. 10.

1. Boleto de compraventa—No puede en ningún caso

2—Esa operación por su naturaleza debe practicarse en la forma establecida en el sumario.

3—La facción del inventario debe tener lugar con citación de los legatarios—arts. 637 del Cód. de Proc. y 3857 del Cód. Civ.—Si por cualquiera causa no se hace la citación á los legatarios, esa omisión no puede perjudicarlos, ni puede invocarse contra ellos el inventario practicado por ser para ellos *res inter alios acta*.

1—Un boleto de compraventa, en ningún caso, ni por voluntad de partes, puede importar por sí solo un contrato perfecto de compraventa, de modo que las arras no pueden en este caso darse como prueba de un contrato perfeccionado. El art. 1184. en su inc. 8, establece que deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad, las transacciones sobre bienes inmuebles; pero el 1185 faculta á las partes á hacer estos contratos en instrumento privado, pero en este caso no quedan concluidos como escritura pública, mientras ésta no se halle firmada. Esta obligación será juzgada como una obligación de hacer, y la parte que se negare á su cumplimiento puede ser demandada por los daños y perjuicios—art. 1187 *ibid.*—De aquí resulta, que á pesar de que en el boleto se diga que la entrega de una suma se hace como señal ó parte de precio, eso no implica que el comprador no pueda arrepentirse del contrato y devolver la suma con otro tanto, quedando libertado de hacer la escritura pública. Nuestro Cód., en materia de arras, ha innovado la antigua legislación, y se ha apartado también de



considerarse contrato perfecto, y como simple obligación de hacer el vendedor que se niegue al cumplimiento debe devolver doblada la suma recibida aun como parte del precio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 124, Ser. 3ª.

2. **Boleto de compraventa**—Sin plazo para la escrituración, no puede declararse rescindido; debe exigirse su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 117, Ser. 3ª.

3. **Boleto de compraventa**—La conformidad con los títulos, estipulada en el boleto, obliga al comprador á justificar que la prestó en oportunidad, sin que pueda exigir

la legislación francesa, cortando las cuestiones á que dieran lugar las leyes españolas sobre la importancia de las arras, cuando se entregaban para asegurar la celebración del contrato, ó cuando su objeto era garantizar el cumplimiento del contrato ya perfecto, estableciendo que en uno y otro caso, el que las recibió puede arrepentirse y no celebrar el contrato, y no cumplirlo si está ya perfecto, devolviendo las arras con otro tanto de su valor. La letra del art. 1202 es bien clara y explícita, así como la nota explicativa puesta por el codificador, sin que se oponga á ello el art. 1204, que es la regla general, de la cual es una excepción el 1202, ni menos los arts. 655 y 1189, desde que por el principio establecido en dicho art. 1202, la constitución de una seña ó arras, importa ante la doctrina de nuestro Cód., la reserva explícita del artículo 658. Esta es la jurisprudencia sentada por la Cámara en otros casos.—Véase: Inst., tom. 2º, verb *Arras*, núms. 1 y 2.

2—El actor se presentó con un boleto simple de compraventa, alegando que la otra parte no había cumplido las obligaciones que le incumbían, pretendiendo que se declarase rescindido. No se le hizo lugar porque los arts. 1201 y 1204 se oponen á ello.

3—El boleto decía: «Cuando el Escribano haya revisado, y que se acepten los títulos, y cuando el comprador esté satisfecho de estos, depositaré la suma indicada á la orden del vendedor, siendo estos buenos (los títulos) y libres de todo gravámen, las escrituras se harán en seguida». Correspondía por consiguiente, al actor comprobar los siguientes extremos: conformidad del comprador, con los títulos, después del examen de estos por el Escribano; depósito de la seña en caso de resultar las escrituras buenas y libre de todo gravámen el inmueble. El actor no comprobó ninguno de estos hechos, mientras que el deman-



la subsanación por el vendedor, ni tampoco los daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 255, Ser. 3ª.

4. **Boleto de compraventa**—El vendedor cuyo título consiste en un simple boleto, no puede obligar al comprador al cumplimiento del contrato, siempre que le haya vendido como cosa propia perteneciendo el inmueble á un tercero.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 341, Ser. 3ª.

5. **Boleto de compraventa**—Para que éste importe una cesión de derechos y acciones, debe existir la transmisión hecha al tercero del boleto otorgado por el propietario que promete vender.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 325, Ser. 3ª.

dado comprobó que la compra se había hecho á satisfacción del comprador y que el Escribano designado por éste no encontró que los títulos eran deficientes. No habiendo cumplido el comprador, que era el actor, con las obligaciones que le incumbían, no podía prosperar su acción.

4—El actor había firmado al demandado boleto de compraventa de un terreno sobre el que á su vez había obtenido promesa de venta, hecha por un tercero. Llamado el segundo comprador á la escritura, se opuso por deficiencia de los títulos del primer comprador, que solo tenía á su favor un boleto simple de compraventa, y no las escrituras necesarias, ni tampoco la posesión de lo vendido. Con este motivo y habiendo el primer vendedor rescindido el contrato con pérdida de la seña dada por el primer comprador, éste deduce demanda por daños y perjuicios por la seña perdida y por la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Para que el segundo comprador pueda ser condenado á pagar los daños y perjuicios consiguientes á la falta de cumplimiento de su obligación de escriturar y que impone el artículo 311 del Cód. Civ. al deudor de la obligación que por culpa propia deja de cumplirla, era necesario, de acuerdo con el art 1201, que se hubiera demostrado que el actor se hallaba en estado de cumplir su obligación, exigirle el cumplimiento de su contrato. Era necesario que demostrase ser propietario con exhibición de sus títulos de dominio y demás recaudos necesarios para otorgar escritura de venta. Sin embargo, cuando se entabló la demanda, al actor no era dueño de la cosa y mal podía exigir que se le permitiera vender lo ajeno.

5—De lo contrario hay compraventa,



6. Boleto de compraventa.—El boleto otorgando promesa de venta, se juzga por las disposiciones del contrato de compraventa, aun cuando el vendedor no sea propietario del inmueble materia del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 325, Ser. 3ª.

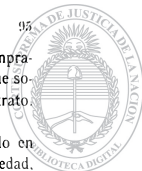
7. Boleto de compraventa.—Aun cuando el comprador se haya reservado en el boleto privado de compraventa el derecho de designar la persona á cuyo favor debe otorgarse la escritura, no procede la nulidad de la convención por no existir persona determinada.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3ª.

8. Boleto de compraventa.—Puede exigirse la conver-

6—Porque el art. 1177 del Cód. Civ. establece que las cosas ajenas pueden ser objeto de los contratos, apesar de que el art. 1329 dice que las cosas ajenas no pueden venderse.

7—Con quien se celebre el contrato ese debe ser tenido como comprador. El boleto decia que la venta se hacia al comprador ó á la persona que éste designara. Como no se contrató con el tercero que debió designarse, nada tiene éste que ver en el contrato por ser para esa persona indeterminada una *res inter alias acta*. Si el boleto concede al comprador la facultad de designar esa tercera persona, mientras no la designe, le corresponde asumir el rol de comprador con todas las solemnidades inherentes á tal carácter.

8—Porque cuando se exige la escrituración del boleto, no se pide el cumplimiento del contrato de compraventa. Las disposiciones legales relativas á la compraventa no son aplicables en este caso y por consiguiente, el art. 1201 del Cód. Civ. no tiene aplicación. Cuando se contrata sobre bienes raices por medio de un boleto privado, ese boleto no importa un contrato de compraventa, el adquirente solo tiene derecho para obligar á la otra parte á hacer escritura pública. El que demanda no ejecuta una acción del contrato perfecto: no pide la efectividad de la venta, no pretende hacer producir sus efectos propios. Se trata simplemente de obtener la escrituración que le es debida en virtud del boleto. El derecho correlativo de la obligación de escriturar consiste en firmar á su vez la escritura pública del boleto, la que implícitamente *se ofrece cumplir* desde que se gestiona el cumplimiento de la escrituración. Una vez elevado á escritura pública el boleto, y exi-



sión á escritura pública de un boleto privado de compraventa, sin manifestar la voluntad de cumplirlo, la que solo es obligatoria al expir el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 57, Ser. 3^a.

9. **Boleto de compraventa**—Privado, el plazo fijado en él para hacer uso del derecho de retrotraer la propiedad, solo puede contarse desde que el instrumento privado quede convertido en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 72, Ser. 3^a.

10. **Boleto de compraventa**—La convención contenida en un boleto de compraventa, no puede ser materia de decisión judicial, mientras no se convierta el instrumento privado en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 124, Ser. 4^a.

gido el otorgamiento de la escritura de enajenación del inmueble, será el caso de ofrecer cumplir la obligación de pagar el precio que le corresponde. Esta doble escrituración de un boleto privado de compraventa, es una medida sugerida por la Cámara contra la cual está la opinión de los tratadistas. Es una práctica que debe suprimirse, como lo sostenemos en otro lugar.—Véase el núm. 11.

9—No es justo por cierto pretender que un acto puramente privado tenga la eficacia y produzca los efectos exclusivamente reservados á los instrumentos públicos.—Véase la nota al verb. *Escritura pública*, número 7.

10—El autor fundó su acción en los arts. 1411, 1412 y 1413 del Cód. Civ., los que no pueden aplicarse, pues ellos se refieren á las obligaciones del vendedor cuando se trata de un contrato de compraventa, debidamente concluido con la escritura pública que la ley exige bajo pena de nulidad en las ventas de inmuebles que no se verifican en pública subasta; pero cuando esas convenciones se celebran por escritura privada, no crean más derechos que los acordados por los arts. 1185 y 1187 del Cód. Civ., los que facultan á exigir la escritura pública como obligación de hacer y que no cumplida podría recién dar margen á demandar daños y perjuicios. Esta es la jurisprudencia establecida por la Cámara, la misma que hemos combatido siempre.—Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 7 y su nota.



11. **Boleto de compraventa**.—Reconocida la autenticidad del boleto, procede su reducción á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 402, Ser. 4^a.

12. **Boleto de compraventa**.—Reconocida la autenticidad del boleto de compraventa, debe procederse al otorgamiento de la escritura pública: los daños y perjuicios, solo proceden por la negativa á otorgarla dentro del término que fija la sentencia ejecutoriada.—Jur. Civ., tom. 4, página 183, Ser. 4^a.

13. **Boleto de compraventa**.—La cláusula inserta en el boleto de compraventa, de ser la operación verificada para un tercero, y el reconocimiento del vendedor de la personería de éste, desobliga á los firmantes del boleto de toda obligación personal entre ellos, siempre que el mandante hubiese aprobado y ratificado el acto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 207, Ser. 4^a.

11—De acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Cámara, según puede verse en el número precedente. El doctor González del Solar votó en disidencia diciendo: «He sostenido en otras ocasiones análogas á la presente, que cuando un contrato de compraventa de un bien raíz fuere celebrado en otra de la que determina el Cód. Civ. en su art. 1184, inc. 1º, es decir, por instrumento privado ó verbalmente, cualquiera de las partes puede demandar á la otra el otorgamiento de la escritura pública correspondiente á dicho contrato bajo la pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses como lo disponen los arts. 1185 á 1188. Consecuente con esta opinión que he fundado estensamente en otras causas, entre ellas en la LVII de la Serie 4ª, considero que la demanda es perfectamente ajustada á derecho en cuanto pide el otorgamiento de la escritura pública del terreno vendido y á que se refiere el boleto.» Esta opinión está de perfecto acuerdo con nuestro modo de pensar, como puede verse en la nota al verb. *Escritura pública*, núm. 7.

12—En el mismo caso del anterior se ordenó la escrituración del boleto á fin de otorgarse después la escrituración del terreno. También hubo el mismo voto en disidencia.

13— Arts. 1161, 1162 y 1163 del Cód. Civ.



14. **Boleto de compraventa**—Reconocida la autenticidad del boleto privado de compraventa, debe reducirse á escritura pública antes de exigir el cumplimiento del contrato que él contenga.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 260, Ser. 4^a.

15. **Boleto de compraventa**—Privado, reconocida la autenticidad del boleto privado de compraventa, procede su conversión á escritura pública.—Jur. Civ., tom 5, página 318, Ser. 4^a.

16. **Boleto de compraventa**—Procede la reducción á escritura pública del boleto de compraventa cuya autenticidad se ha reconocido por las partes, pero no el de la convención en él estipulada.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 298, Ser. 4^a.

17. **Boleto de compraventa**—Reconocida la autenticidad

14—Véase los números precedentes.

16—Tratándose de la compraventa de inmuebles el contrato debe ser hecho en escritura pública bajo pena de nulidad—art. 1184, inciso 1º, Cód. Civ.—pero cuando, como en el caso que nos ocupa, el contrato se ha hecho por instrumento particular firmado por las partes en que éstas se han obligado á reducirlo á escritura pública no queda concluido como tal contrato de compraventa mientras la escritura no se halle firmada, pero queda concluido como contrato en que las partes se han obligado á reducir á escritura pública—art. 1185.—Cuando la escritura pública se firma, es decir, cuando el boleto es reducido á escritura pública, recién entonces será llegada la oportunidad para exigir el cumplimiento del contrato, pudiendo el vendedor demandar el pago del precio y el recibo de la cosa con las demás obligaciones accesorias del contrato si las hubiese. Aquí se ven las consecuencias lógicas de la mala teoría sentada por la mayoría de la Cámara, obligando á las partes á deducir dos demandas cuando todas las cuestiones pueden quedar solucionadas en un solo juicio. La Cámara lo que hace con esta interpretación de la ley es multiplicar los pleitos, siendo así que el objeto primordial de la legislación es disminuir su número en lo posible.

17—Véase nota precedente.—Para el cumplimiento de la obligación de hacer escritura pública, no es un obstáculo la defensa que pueda oponerse al fondo de la demanda, pues en la escrituración del boleto



del boleto privado de compraventa, procede su reducción á escritura pública: las escepciones que obsten al cumplimiento del contrato, solo pueden ser juzgadas cuando se exija su cumplimiento:—Jur. Civ., tom. 6, pág. 320, Serie 4^a.

18. **Boleto de compraventa**—Para su reducción á escritura pública, no es necesaria la presentación de los títulos. —Jur. Civ., tom. 6, pág. 423, Ser. 4^a.

19. **Boleto de compraventa**—Reconocida su autenticidad debe reducirse á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, página 336, Ser. 4^a.

20. **Boleto de compraventa**—Reconocida por las partes su autenticidad debe convertirse en escritura pública. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 346, Ser. 4^a.

21. **Boleto de compraventa**—Reconocida la autenticidad del de compraventa, procede su reducción á escritura pública, pero no la del contrato que le da origen.—Jur. Civil, tom. 7, pág. 221, Ser. 4^a.

22. **Boleto de compraventa**—El término estipulado en el

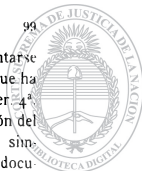
no se lleva otro objeto que dar vida legal al contrato en la forma marcada por la ley para hacerlo exigible en todas sus partes.

18—Con el boleto privado se tiene todo lo necesario para su cumplimiento. La escritura de propiedad será necesaria cuando se trate de escriturar el inmueble según la teoría de la Cámara.

19—Véase el núm. 11, como asimismo el 10.

21—Existe el perfecto derecho de exigir la escrituración del boleto, pero no la escrituración del inmueble, porque mientras aquella no esté firmada, no existe el contrato de compraventa del inmueble, y por consiguiente los contratantes no pueden hacer uso de las acciones que emanan de la compraventa; y así el comprador no puede exigir la entrega de la cosa, ni el vendedor la del precio.

22—En el boleto se estipuló que el comprador escrituraría dentro de treinta días contados desde que el vendedor subsanara el error contenido en el título de compra en el que aparecía cambiado el apellido, bajo condición de que si no escrituraba en el término fijado, per-



de compraventa con pacto comisorio solo debe contarse desde la notificación judicial en que se haga saber que ha empezado á correr.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 346, Ser. 4^a.

23. Boleto de compraventa—No procede la rescisión del contrato de compraventa constante en instrumento simple mientras no sea reducido á escritura pública el documento privado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 320, Ser. 4^a.

24. Boleto de compraventa—Demandada la conversión á escritura pública del boleto simple de compraventa, los Tribunales deben fijar un término para que el demandado lo verifique sin que sea necesaria la presentación de los títulos que solo es obligatoria cuando se exige el cumplimiento de la convención.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 193, Ser. 4^a.

dería el derecho á una suma entregada en el acto de firmarse el boleto quedando dicho compromiso sin valor ni efecto. Las diligencias para subsanar el error se practicaron. Habiéndose acordado treinta días al comprador para escriturar después de subsanado el error, es incuestionable que es necesario ante todo buscar el punto de partida para el cómputo del término. De la prueba que se produjo no pudo deducirse con exactitud la fecha en que el vendedor estuvo en disposición de otorgar escritura haciéndoselo saber al comprador. Si no se puede comprobar el conocimiento estrajudicial, solo debe tenerse en cuenta la interpelación judicial, sin que ésta sea necesaria sino cuando aquella no pueda constatarse. La Cámara no dijo que la notificación judicial fuese necesaria.

23—Porque mientras el boleto no se eleve á escritura pública, no existe el contrato de compraventa, puesto que la transmisión de bienes inmuebles, debe ser hecha en escritura pública, bajo pena de nulidad—art. 1184, inc. 1^o, Cód. Civ.—Si no se ha otorgado la escritura pública que acredite en forma la existencia del contrato de compraventa el comprador no puede pedir la rescisión, sino la reducción á escritura pública de los documentos simples en los términos de los arts. 1185 y 1187. Los arts. 1331 y 1413 no son aplicables, porque estos artículos presuponen la existencia legal del contrato perfectamente terminado.

24—Véase el núm. 18.



25. **Boleto de compraventa**—Para la reducción á escritura pública del boleto de compraventa, no es obligatoria la presentación de títulos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 36, Ser. 4^a.

26. **Boleto de compraventa**—Para que proceda el cumplimiento del contrato de compraventa, el boleto simple debe ser reducido á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 153, Ser. 4^a.

27. **Boleto de compraventa**—Importa una obligación de otorgar en instrumento público la promesa de venta que él contenga, pero no la definitiva que la ley exige para la transmisión del dominio sobre bienes raíces.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 276, Ser. 4^a.

28. **Boleto de compraventa**—La sentencia que lo manda reducir á escritura pública, solo importa su protocolización en un Registro Público.—Jur. Civ., tom. 9, página 229, Ser. 4^a.

29. **Boleto de compraventa**—Declarada la autenticidad del boleto privado, procede su conversión en escritura pública dentro del término que el Juez señale.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 222, Ser. 4^a.

30. **Boleto de compraventa**—La falta de cumplimiento de la obligación de hacer escritura pública, hace procedente la rescisión del contrato de compraventa constante

25—Véase el número precedente y el 18.

27—Véase los núms 15, 16, 17 y 21.

29—Generalmente se acuerda el término de diez días.

30—Condenado un litigante á otorgar escritura pública, dentro de 15 días, de un boleto de compraventa que contenía el pacto comisorio, solicitó así se declarara de acuerdo con lo preceptuado en el art. 1203 del Cód. Civ. Como el comprador dejara vencer el término, se pidió se declarara rescindido el contrato, lo que así se declaró, de acuerdo con el artículo citado.



de un boleto privado —Jur. Civ., tom. 7, pág. 252, Serie 4ª.

31. **Boleto de compraventa**—Reconocida su autenticidad, procede su elevación á escritura pública. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 248, Ser. 3ª.

32. **Boleto de compraventa**—Debidamente reconocido, debe ser reducido á escritura pública: las escepciones que el vendedor alegue para justificar la imposibilidad de entregar la cosa vendida, solo pueden ser consideradas y juzgadas en el juicio sobre cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 46, Ser. 4ª.

33. **Boleto de compraventa**—Si en las diligencias previas del remate ó en el acto de firmarse el boleto de venta, el martillero no hace constar que obra á nombre de un tercero, el comprador tiene acción directa contra él para el cumplimiento de la obligación de hacer.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 82, Ser. 4ª.

34. **Boleto de compraventa**—Para que pueda considerarse como obligación de hacer escritura, debe primero ser reducido á escritura pública el contrato privado que de él resulte—Jur. Civ., tom. 2, pág. 251, Ser. 4ª.

Boleto de compraventa—Véase: *Mandatario*, núm. 2—*Cosa ajena*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 3, 4, 15, 18.

32—Véase los núms. 12 y 17.

33—Es el mismo caso resuelto anteriormente, de Juan Recalt con Godoy, y en el cual se estableció que habiendo el martillero suscrito el boleto en su nombre propio, habia contraído una obligación directa y personal, y que no figurando en él el nombre del mandante ni habiéndose probado que éste fuera realmente propietario, la responsabilidad del martillero era incuestionable. Las relaciones entre el martillero y su principal están regidas por las leyes del mandato: la obligación legal de éste es siempre insalvable, cuando obra á nombre propio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 1929 y 1930 del Cód. Civ.

34—De acuerdo con la jurisprudencia uniforme de la Cámara.

25, 26, 27 y 28—*Obligación de hacer*, núm. 9 y 12—*Compraventa*, núm. 2—*Simulación*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 98.

Boleto impreso de remate—Véase: *Pacto comisorio*, número 2.

Bolsa—Véase: *Moneda de oro*, núm. 1.

Bonificación—Véase: *Desistimiento*, núm. 2—*Información supletoria*, núm. 2.

Bóveda—Véase: *Compraventa*, núm. 4—*Condominio*, núm. 4.

Buena fe—Véase: *Excepción de prescripción*, núm. 1—*Prescripción de diez años*, núm. 1—*Remate judicial*, número 12—*Posesión treintenaria*, núm. 2.



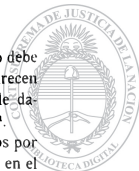


Cálculo de recursos — Véase: *Empedrados*, núm. 3.—*Impuesto*, núm. 1.

1. *Caligrafías*—Inscripciones en la matrícula durante el mes de Junio de 1890, Jur. Civ., tom. 7, pág. 164, Ser. 3^a; durante el mes de Julio de 1891, Jur. Civ., tom. 5, página 125, Ser. 4^a; durante el mes de Setiembre del mismo año, Jur. Civ., tom. 7, pág. 80, Ser. 4^a.

1^a. *Calumnia*—La falta de intención criminal y la exis-

1^a—La falta de intención criminal, ni la buena fe en la existencia del delito, son suficientes para eximir al reo de la indemnización civil de daños y perjuicios, por que tal defensa podría muy bien emplearse si se tratara de un juicio criminal por acusación calumniosa, mas no cuando se prosigue lisa y llanamente una acción civil por daños y perjuicios. Laurent, ocupándose de estudiar los delitos y los cuasi-delitos, dice así: «Es necesario no confundir el delito civil con el delito criminal. El delito criminal consiste en la infracción de la ley penal; lo que le caracteriza, es que una pena se impone al culpable en interés de la sociedad; tratándose del delito civil el interés social no es el primer motivo. La parte perjudicada se propone obtener la reparación del daño que el delito le ha causado; *en el interés privado, no hay un culpable propiamente dicho, hay un deudor y un acreedor*. El delito criminal puede ser al propio tiempo un delito civil cuando de él ha resultado un perjuicio ocasionado deliberadamente. Pero si no ha existido el propósito de perjudicar, y no obstante ha resultado daño, *el delito criminal habrá engendrado un cuasi delito, ó sea la obligación de indemnizar un perjuicio*»—tom. 20, § 385, Principios del Derecho Civil.



tencia de hechos que pudieron inducir en error, solo debe tenerse en cuenta en el juicio por calumnia, pero carecen de valor legal en el juicio civil por indemnización de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 26, Ser. 3^a.

2. **Calumnia**—La acción civil de daños y perjuicios por calumnia, es improcedente si el demandado justifica en el juicio civil la verdad de los hechos en que fundó la querrela y estos se encuentran calificados como delitos por el derecho penal.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 294, Ser. 4^a.

Calle—Véase: *Remate judicial*, núms. 2 y 3.

1^a. **Calles**—La falta de nombre de las calles en que están ubicados los terrenos de los suburbios, no importa una deficiencia del título.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 333, Ser. 3^a.

1^b. **Cámara**—Ella solo puede conocer y resolver las

2—Art. 1089 del Cód. Civ. Véase además la nota precedente.

1^a—El título decía que el terreno estaba ubicado en la esquina formada por dos calles que se designaban por sus nombres con los linderos bien demarcados. En una segunda enajenación no se designaron las calles, pero se dieron los mismos linderos. Es pues, de poco monto la falta de designación de las calles en esta segunda adquisición, cuando en la primera ya habían sido espresadas. Además, el terreno vendido en la segunda operación era un lote que formaba parte integrante del primero, y éste se componía de dos cuerdas de frente por dos de fondo. Más tarde se abrieron las calles: no era de extrañarse que no tuviesen nombre las nuevas calles, pues éstas no existían cuando el terreno estaba en su integridad.

1^b—A no ser que al alegar de bien probado se oponga la excepción de prescripción. Las cuestiones para ser resueltas por el Superior deben ser propuestas y resueltas ante el Inferior, de no ser así vendría á alterarse el orden establecido para toda contienda judicial por el Código de Proc. y por la Ley Org. de los Tribs. de la Cap., los que prescriben el orden de proceder y las facultades conferidas á la Cámara para conocer en última instancia de los recursos que se interponen contra las resoluciones de 1^a Inst. y en los demás casos que la última ley de 1886, establece en su art. 80.



cuestiones que ha resuelto el Inferior, sin que deba tomar en consideración las suscitadas en la espresión de agravios.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 273, Ser. 3^a.

2. Cámara—Solo puede resolver puntos que hayan sido materia de resolución en 1^a Instancia. Jur. Civ., tomo 7, pág. 49, Ser. 4^a.

Cámara—Véase: *Recurso de reposición*, núm. 2 — *Informe in voce*, núm. 1 — *Apelación de hecho*, núm. 2.

Camarista—Véase: *Recusación*, núm. 12.

Cambio legal—Véase: *Poder*, núm. 2.

Campo—Véase: *Tasación*, núm. 2.

1^a. Cantidad—Para la fijación de la cantidad á suplir por litisexpensas, debe justificarse el capital del esposo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 152, Ser. 3^a.

Cantidad—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 64, 66, 69, 72, 73 y 74.—*Arbitros*, núm. 3.

Cantidad determinada—Véase: *Embargo preventivo*, número 31.

Cantidad excedente—Véase: *Comisión*, núm. 3.

Cantidad indeterminada—Véase: *Sellos*, núm. 2.

Cantidad líquida—Véase: *Embargo preventivo*, núms. 19, 25 y 26.—*Inhibición*, núm. 9.

Capaz—Véase: *Apoderado*, núm. 5.

1. Capellanía—Su fundación debe subordinarse á lo dispuesto por el propietario fundador, las modificaciones

2—Si así no fuese, la Cámara dictaría un fallo en única instancia, cuando la ley solo la autoriza á dictar fallos en grado de apelación. Véase el número precedente.

1^a—El art. 608 del Cód. de Proc. establece que la reclamación de litisexpensas se sustanciará por los mismos trámites el juicio de alimentos. El art. 602, inc. 2^a, exige la justificación del caudal del alimentario.



que pretendan los usufructuarios ó patrones no pueden ser aprobadas.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 422, Ser. 3^a.

2. **Capellanía.**—El reclamante sobre mejor derecho al patronato de una capellanía, debe justificar su derecho exclusivo con arreglo á las condiciones impuestas por el fundador. —Jur. Civ., tom. 4, pág. 71, Ser. 3^a.

3. **Capellanía.**—La fundada en moneda de pesos plata.

2—Al que alega mejor derecho le incumbía la prueba porque él era el actor y esa la base de la demanda. —Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.

3—Este sumario está equivocado: no espresa lo que la Cámara resolvió. La cuestión consiste en averiguar si una capellanía de 4000 pesos plata, fundada en 1866, con la renta de 200 $\frac{1}{2}$, puede ser redimida abonándose el capital mitad en efectivo y mitad en papel moneda corriente por su valor nominal; ó si por el contrario, el capital debe ser satisfecho íntegramente en efectivo. Esta cuestión fué resuelta por el Juez *ad quo* y por la Cámara, en un sentido completamente contrario al del sumario, pues se dijo que el capital capellánico fué sustituido en pesos plata pero no había tenido lugar la designación de determinada especie ó calidad de moneda para que se hiciera aplicable el art. 619 del Cód. Civ., ordenándose en consecuencia que el pago se hiciese depositando en el Banco una cantidad tal de billetes de banco ó en títulos de los autorizados por la ley, que al interés de 6 % anual dé una cantidad igual á 206 pesos con 66 cts. $\frac{1}{2}$ que es el equivalente de 200 pesos que al año devenga la capellanía. Como lo dispone el art. 1^o de la Ley de 10 de Junio de 1858 y convenían en ello todos los interesados, para redimir una capellanía debe depositarse á interés en el Banco una suma en moneda corriente que al seis por ciento al año produzca una renta igual á la que daba el capital al tiempo de su redención, ó en fondos públicos del crédito interior del Estado en iguales condiciones. En ausencia de estipulación espresa los intereses deben pagarse en la misma moneda que la obligación principal como que son accesorios de ella. La ley de 30 de Abril de 1828 no tiene en su aplicación á este litigio la importancia que quiere dársele, como que solo preceptúa respecto de las obligaciones anteriores y posteriores al 9 de Enero de 1826. Otro tanto ocurre con la de 1839 en que se apoyaba el demandante, como que ella presupone forzosamente censos constituidos con anterioridad y se ocupa solo del modo de pagarse los intereses sin derogar las leyes generales ni la misma de 1828. Leyendo el Diario de Sesiones de la

puede ser reducida en moneda especial por su valor equi-

época, se adquiere el convencimiento de que no solo esa ley fué dictada transitoriamente bajo la presión de las circunstancias difíciles por que atravesaba el país, y que en el sentir de muchos de nuestros legisladores, por la ley de 1828 los intereses capellánicos quedaban comprendidos en la disposición del art. 12, es decir, que debían pagarse íntegros á metálico, sino que también mediando la consideración de que no existía la obligación de pagar el capital á censo y de que siendo esa obligación solo aplicable á los intereses, á ese solo y único efecto del pago de éstos fué introducida la modificación, ó si se quiere, la aclaración de la ley de 1828 sin derogar ésta en lo demás, y por consiguiente en ninguna de las disposiciones que debía regir las obligaciones de fecha posterior á la misma, como la que motivaba esta sentencia. Tampoco hacen presión en el ánimo de un Juez de derecho que se encuentra en presencia de un texto claro de la ley y que debe aplicarla sin juzgar de su mérito intrínseco, las opiniones vertidas en el debate de los legisladores, mucho más cuando resultaba de la discusión á que se refería el demandante, que solo incidentalmente se hizo presente que los intereses de los censos se pagaban mitad plata y mitad papel, pero sin entrar á juzgar si en casos especiales ese pago podía hacerse en otra forma. Siendo la mayor parte de las capellanías anteriores á la que se quiere redimir, nada de particular tenía que en la discusión se tuviera en cuenta la generalidad de los casos, en que el interés se pagaba mitad plata y mitad papel. Con mejor derecho podría decirse que la misma respetable opinión del Dr. Velez Sarsfield en que se apoyaba una de las partes, servía para sostener la tesis de la otra parte, desde que si la ley de 1858 tenía por objeto reparar la injusticia que cometiera la ley de 1828 esceptuando á los censos de la forma de pago allí establecida, es prueba de que se refería á las obligaciones que debían juzgarse bajo el imperio de esa ley y nó á los censos. También valiéndose de esas mismas discusiones, se podría recordar que la ley de 1828 tuvo por objeto crear un medio arbitrario pero equitativo, de facilitar las transacciones entre el acreedor que no quería sino metálico y el deudor que quería pagar puramente en papel enormemente depreciado por la quiebra del Banco á causa de los sucesos de la guerra del Brasil, y que esa situación especial, producida por sucesos extraordinarios, que no pudieron preveer los contratantes, no siendo aplicable á las obligaciones posteriores en que ya la depreciación del papel era conocida, no han podido dar lugar á leyes análogas á esas de 1828 y 1839, ó lo que es lo mismo, que no se puede argumentar



valente en pesos fuertes.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 138, Ser. 3^a.

con estas leyes especiales para aplicar el espíritu de sus disposiciones á una obligación como la de que se trata, en la que si se estipuló pesos plata con tanta posterioridad á aquellos acontecimientos, fué sin duda para no dar lugar á equívocos. En menos palabras, si el Dr. Velez y sus colegas quisieron efectivamente con la ley de 1858 corregir la injusticia de la ley de 1828, es indudable que han tenido solo en vista las obligaciones anteriores á esa época, puesto que solo respecto de ellas podía ser injusta esa ley al exonerar á los capitales capellánicos. Si se hubieran referido á los posteriores, habrían cometido una injusticia mayor, pues al par que otras obligaciones se podían constituir á moneda determinada para que los pagos tuvieran lugar en ella;—artículo 8º—los censos capellánicos mirados con tanto favor, se habrían podido redimir con puro papel depreciado hasta el extremo de quedar reducido á la proporción de veinte y cinco por uno.—Ley de Octubre de 1864.—El art. 11 como el art. 12 de la ley de 1828 declaran exceptuadas de la disposición del art. 3º anterior, entre otras obligaciones, los capitales á censo; pero ¿puede de aquí inferirse lógicamente que la ley no haya podido ocuparse de esos mismos capitales á otro efecto? Por lo mismo que el legislador exceptuara del pago con papel depreciado, los capitales capellánicos amparándolos con ese beneficio, ¿cabe ante el buen sentido, que si el art. 8º introducía también excepción para las obligaciones posteriores, no quedaran comprendidas en ellas las capellánicas? El Fiscal de las Cámaras Dr. Cortés en una luminosa vista sostuvo que la renta capellanica debía abonarse en pesos fuertes ó su equivalente en pesos moneda nacional de curso legal, según su valor corriente el día en que se verifique la redención, fundándose en que la cuestión que se debatía en esa causa consistía en averiguar si una capellanía de 4000 pesos plata, fundada en 1866, con la renta de 200, puede ser redimida, abonándose el capital, la mitad en efectivo y la otra mitad en papel moneda corriente por su valor nominal; ó si, por el contrario, el capital debe ser satisfecho íntegramente en efectivo. Habiendo suspendido el Banco la conversión de sus billetes en 9 de Enero de 1826, y depreciándose aquellos consiguientemente sobremanera, surgieron como era natural, dificultades sobre la manera de satisfacer las obligaciones contraídas antes de ese acontecimiento. La ley de 30 de Abril de 1828, resolvió que esas obligaciones se cancelasen, abonándose la mitad del capital en efectivo y la otra mitad con papel moneda; exceptuándose sin embargo, de esa disposición, los capitales impuestos á





4. **Capellanía**—La prescripción del derecho al patronato y los destinados á objetos piadosos. Esta ley se refiere únicamente en su resolución á las obligaciones contraídas con anterioridad á la inconvención, pues para lo futuro permitía espresamente pactar con entera libertad la clase de moneda en que deberían cancelarse y ordenaba además, que en este caso, se observase fielmente lo estipulado. Sobre el sentido de esta ley se suscitó duda, y á consulta del Ejecutivo, se declaró posteriormente por la ley 13 de Julio de 1839 que solo tuvo carácter de interina ó provisoria, que debían considerarse definitivamente canceladas las pensiones de los censos pagadas mitad plata y mitad moneda corriente, sin perjuicio de que en oportunidad la Legislatura volvería á ocuparse de este negocio, lo que sin embargo no sucedió. Al espresarse esta ley en los términos indicados, se refería únicamente, como la de 1828, en esplicación de la cual era dada, á los censos establecidos antes del 9 de Enero de 1826; y al declarar que se considerasen legalmente satisfechas las pensiones por mitad á papel y en efectivo, prometiendo al mismo tiempo otra resolución, parece que aun respecto de los indicados censos anteriores al 9 de Enero de 1826, solo se contraía á los pagos que se hubiesen verificado hasta su fecha, prohibiendo suscitar cuestión sobre su legalidad, pero sin establecer esto mismo para lo sucesivo, ni aun con relación á los censos de la época indicada. Pero si eso pudiera ser dudoso, no lo es de modo alguno que no trató de establecerlo para los fundados con posterioridad á la época de la inconvención á moneda metálica, pues habiéndolo sido con perfecta legalidad, por hallarse permitido determinar la moneda en todo género de obligaciones, y estando ordenado que en ese caso se guardase fielmente lo convenido, no podía destruir los derechos adquiridos con permitir que aun en las obligaciones de censos posteriores al 9 de Enero de 1826, y contraídas con determinación de la moneda á metálico, se pudiese abonar las pensiones en efectivo y con papel por mitad. Cuando se admitiese, pues, en el caso más favorable á los deudores de censos, el que la ley de 13 de Julio de 1839 equiparase absolutamente á los demás los capitales de aquéllos, lo que resultaría sería que podrían cancelarse mitad metálico y mitad papel, cuando hubiesen sido debidos con anterioridad á la inconvención; ó con solo papel por su valor nominal, si siendo posteriores no se hubiese determinado la moneda en que se debía hacer el pago. Interpretar las leyes de 30 de Abril de 1828 y 13 de Julio de 1839 en diverso sentido de lo espuesto,

(Sigue en la página siguiente.)

4—De acuerdo con otros casos resueltos. Véase: Inst., tom. 4^o. verb. *Capellanía*, núms. 1 y 2.



to de una capellanía solo empieza á correr desde la fecha

sería ponerlas en contradicción con los más claros principios de la jurisprudencia, y hacerlas incidir en el absurdo, porque lo sería en efecto, declarar lícita y válida una condición de los contratos y permitir al mismo tiempo su violación; autorizar el que se pudiese determinar en aquéllos la moneda de pago, ordenando que se respetase fielmente lo estipulado, y resolver sin embargo que fuese legal el pago de un censo verificado por mitad en papel y en efectivo, á pesar de haberse estipulado espresamente ese pago en moneda metálica. Demostrado que las indicadas leyes en cuanto establecían sobre la manera de cancelarse las obligaciones de los censos, solo se referían á los creados antes de la inconvención; en todo caso, á los anteriores á su fecha, permitiendo para lo sucesivo pactar libremente sobre la moneda en toda especie de obligaciones, se deduce claramente que solo en esta parte y de ningún modo en las disposiciones especiales que hizo necesaria la inconvención, serían aplicables á la capellanía de que se trata, la cual no solo es posterior á dichas leyes, sino que fué constituida espresamente en moneda metálica, condición que según ellas mismas, debía ser respetada en todo contrato y cumplida fielmente. Por más que en épocas posteriores el desarrollo de las ideas económicas hiciese comprender lo dañoso de los censos y capellanías constituidas sobre bienes raíces, á los cuales inmovilizaban ó amortizaban impidiendo la libre circulación indispensable al progreso, no se ha intentado sin embargo, suprimirlos arbitraria y violentamente. Se empezó como era natural por prohibir la fundación de nuevos censos ó capellanías que hubiesen de constituirse sobre fincas, y buscándose después la manera de conciliar los intereses del poseedor y de los futuros patronos con lo que exigía la conveniencia pública, se procuró facilitar la extinción ó redención de dichos censos bajo bases equitativas. Si se hubiera querido acabar inmediatamente con los censos atropellándose por todo, y sin respetarse los derechos adquiridos, habría bastado exonerar al poseedor del deber de satisfacer las pensiones, ó bien permitirle pactar con el futuro patrono sobre la manera de dividirse el capital; pero como se ha observado, no se trataba de proceder de esa manera; se conservaba la institución aunque modificada, y si bien se deseaba extinguir los censos ya establecidos sobre bienes raíces, facilitando su redención, se respetaban en todo los principios de justicia que reglan la propiedad. Tal fué el objeto de la ley de 10 de Julio de 1858, ella no se ocupa sino incidentalmente de la clase de moneda en que deba hacerse la redención de los censos, refiriéndose á lo que se hallase pactado é es-

de la fundación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 388, Ser. 4.^o

establecido al respecto en el documento, aunque permitía verificar también aquella con fondos públicos del Estado, se contrae principalmente á determinar la suma que ha de entregarse por el poseedor, exigiendo que sea tal que al 6 por ciento de interés anual, produzca igual renta á la que daba el censo ó la capellanía al tiempo de la redención. Inútilmente se aduce, pues, esta ley para demostrar que apesar de haberse constituido la pensión de un censo ó de una capellanía en metálico y esto con posterioridad á la fecha de la inconversión, 9 de Enero de 1826, y con posterioridad también á las mencionadas disposiciones de 30 de Abril de 1828 y 13 de Julio de 1839, pueda sinembargo, redimirse en todo ó en parte, á papel por su valor escrito; porque, lejos de encontrarse en dicha ley cláusula alguna que preste el más leve apoyo á semejante pretensión, se hallará por el contrario, que distingue también en cuanto á la redención, si la pensión es á papel ó en efectivo. Se pretende probar que la ley de 10 de Junio de 1858 permite redimir todos los censos y capellanías, cualquiera que haya sido la época de su fundación, y cualquiera que fuese también la clase de moneda determinada en el contrato, abonándose el capital, la mitad en efectivo y la otra mitad en papel, por ciertas palabras del Dr. Velez al discutirse esa ley, por las cuales manifestó que en su concepto, en la del año 28 se había cometido una injusticia, al eximirse del pago en la indicada forma á los capitales capellánicos ó de fundaciones piadosas. Pero como la ley del año 28 solo reglaba el pago de las obligaciones contraídas antes del 9 de Enero de 1826, y la indicada escepción respecto á los censos y capellanías se refería también por consiguiente á las fundadas antes de la espresada fecha, es respecto de ellos únicamente, que el Dr. Velez encontraba injusta la resolución de que su capital se pagase íntegramente en metálico. No podía ser en manera alguna, que hablase también de los establecidos con posterioridad á la fecha recordada, porque habiendo permitido tanto la ley del año 28, cuanto las demás que se dieron al respecto, estipularse libremente en todo género de obligaciones la moneda en que se habían de satisfacer, prescribiendo además el que si se estipulasen á metálico, se observase fielmente lo pactado, el facultarse apesar de esto, solamente á los deudores de censos ó capellanías, para que no obstante haberse establecido de un modo espreso á metálico, las redimiesen sinembargo, á papel por su valor nominal, habría sido ciertamente otra injusticia igual á la que criticaba el mismo Dr. Velez en el privilegio acordado en dicha ley del año 28 en favor de los censos y capella





5. **Capellanía**—El abogado defensor de los que se consideran con derecho al patronato de una capellanía, carece de derecho para cobrar sus honorarios de la finca gravada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 74, Ser. 4^a.

6. **Capellanía**—Al patrono corresponde la posesión de la finca capellánica aun cuando no se haya fundado la capellanía.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 74, Ser. 4^a.

7. **Capellanía**—Solo el patrono tiene derecho á intervenir en las diligencias necesarias para fundar la capellanía.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 74, Ser. 4^a.

Capellanía—Véase: *Censo capellánico*, núm. 1.

Capital—Véase: *Memoria pía*, núm. 1—*Intereses*, número 2—*Censo capellánico*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 26—*Cantidad*, núm. 1—*Contrato escrito*, núm. 1.

Capital capellánico—Véase: *Patrono*, núm. 1.

Capital determinado—Véase: *Intereses*, núm. 3.

Capitalización—Véase: *Intereses*, núm. 6.

Cargo—Véase: *Desacato*, núm. 2.

1. **Carta**—Dirigida á un tercero ordenándole un pago,

nas de fecha anterior á la inconversión, por cuanto los eximía de la regla común y quebrantaba el principio de igualdad. Es evidente que el Dr. Cortés interpretaba correctamente el alcance de las leyes citadas, mientras que la sentencia de 1^a Instancia que fué confirmada por la Cámara no guarda analogía con los antecedentes de la cuestión. La resolución de la Cámara está en contra de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de la Nación, la que ha sentado el principio contrario.

5—Véase, *Abogado*, núm. 10.

6—El patrono tiene derecho indiscutible de poseer la finca capellánica á fin de ejercer el patronato con que fué investido. Además la finca debe estar poseída por alguien y nadie puede tener mejor derecho que el patrono.

7—Porque es el único que tiene interés en ello.

1—El art. 1036 del Cód. Civ., establece que las cartas dirigidas á terceros no serán admitidas en juicio aunque en ellas se mencione al-



no es carta misiva sino carta orden, y en consecuencia, auténtica es prueba de la existencia del contrato. Jur. Civ., tom. 8, pág. 419, Ser. 4ª.

2. **Carta**—Reconociendo espresamente la obligación y ordenando el pago por un tercero, no se encuentra comprendida entre aquellas que la ley rechaza por tener solo referencias incidentales.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 419, Serie 4ª.

3. **Carta**—De pobreza, solo procede su otorgamiento al que justifique carencia de recursos y la imposibilidad de adquirirlos. Jur. Civ., tom. 9, pág. 29, Ser. 4ª.

1. **Carta de crédito**—Contra la deuda proveniente de una carta de crédito, solo procede la prescripción de diez ó de veinte años, la escepción fundada en menor término debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 11, Ser. 3ª.

guna obligación: Escribela define diciendo: que es el papel que uno escribe y jirige, regularmente cerrado, á otro manifestándole sus pensamientos sobre alguna cosa. En la carta en cuestión no se hacían manifestaciones íntimas, sino que se ordenaba el pago de una cantidad de dinero, siendo este su esclusivo objeto. Debía considerarse como carta orden, pues en ella se decía quiere usted pagar la suma de. . . al Dr. . . . No es, por consiguiente, un documento confidencial, es una carta orden.

2—Véase la nota anterior.

3—Art. 595 del Cód. de Proc.

1—La escepción de prescripción se fundaba en el art. 1003, inc. 3ª, del Cód. de Com. ant., el que dice: «Se prescribe por cuatro años las deudas justificadas por cuentas corrientes entregadas y aceptadas, ó por cuentas de ventas liquidadas ó que se presumen liquidadas. El caso del sumario no puede comprenderse en ninguno de los enumerados en este inciso. La obligación en virtud de la cual el tomador de una carta de crédito debe abonar al dador su importe, es una obligación comercial sometida al precepto del art. 1002, que establece el término de veinte años, cuando no se intenta acción alguna durante dicho lapso de tiempo. Si se aplicara el Cód. Civ., la prescripción sería de diez ó veinte años—art. 4023—como acción personal que es.



2. **Carta de crédito**—El dador de una carta de crédito, es el único que tiene acción contra el tomador ó cobrador que haya hecho uso de ella; el pagador solo tiene relación de derecho contra el primero.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 11, Ser. 3ª.

Carta de crédito—Véase: *Carta misiva*, núm. 1.

1ª. **Carta misiva**—En ella no hay obligación de expresar las medidas de acuerdo con el sistema métrico decimal, y por consiguiente, no puede aplicarse multa por esta causa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 253, Ser. 4ª.

Carta misiva—Véase: *Carta*, núm. 1.

1ª. **Cartas privadas**—Aun cuando importen el reconocimiento de una obligación, no están sujetas al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 353, Ser. 4ª.

Casa de comercio—Véase: *Prescripción de una marca de fábrica*, núm. 1.

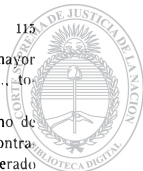
1ª. **Caso fortuito**—Las frecuentes lluvias fuera de la es-

2—El art. 627 del Cód. de Com. ant., es terminante al respecto cuando dice que el dador de una carta de crédito queda obligado hacia la persona á cuyo cargo la dió, por la cantidad que hubiese pagado en virtud de ella, no excediendo de la que se fijó en la misma carta. Y el 630 establece que el portador debe reembolsar al dador la cantidad que hubiere percibido en virtud de ella; y si no lo hiciere, podrá el dador exigir el pago de la cantidad y demás accesorios.

1ª—Las cartas misivas no están comprendidas en la disposición del art. 14, inc. 4º, de la ley de Julio de 1887, que regía el caso, por cuanto ellas se referían á declaraciones testimoniales producidas en forma de cartas y tendientes á establecer en juicio hechos ya consumados.

1ª—Siendo una carta de carácter privado, no estaba sujeta á lo dispuesto en el art. 2 de la Ley de 1891.

1ª—El contratista se comprometió á construir una obra en el término de 40 días, salvo fuerza mayor —art. 514, Cód. Civ.—El plazo debió empezar á correr desde el 25 de Octubre, es decir, cuando comenzaba la estación de verano, época en que las lluvias no son frecuentes. El informe de la Oficina Meteorológica demostró que ese verano fué extraordinariamente lluvioso, al extremo de haber caído una cantidad de



tación natural, importan el caso fortuito ó fuerza mayor previsto en el contrato de construcción.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 300, Ser. 4^a.

2. **Caso fortuito**—El embargo de los bienes, de uno de los contratantes, que le impida el cumplimiento del contrato, aun declarado indebido, no puede ser considerado como caso fortuito.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 144, Ser. 4^a.

1. **Caucción**—Siendo de competencia privativa del juzgado fijar el monto de la caucción, el auto en que se fija es inapelable.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 249, Ser. 4^a.

agua igual ó mayor á la que cae comunmente en varios años en igual periodo de tiempo. Esa circunstancia era por sí sola suficiente para justificar el caso fortuito y era tanto más atendible, si se tenía en cuenta que la construcción debía levantarse en un terreno sumamente bajo y sujeto á continuas inundaciones.

2—Porque ese embargo que ha sido trabado es justo ó es injusto. En el primer caso, el acreedor debe soportar sus consecuencias porque ha sido trabado por su culpa, y ha sido un hecho que ha podido perverse, no siendo en estas condiciones un caso fortuito—art. 512, Cód. Civ.—En el segundo caso tampoco puede constituir tal hecho un caso fortuito; porque las violencias y los abusos de los particulares no pueden contarse como caso fortuito, por estar sujetos á otros principios que obligan á la reparación del mal que causan, como lo expresa la doctrina espuesta por el codificador en la nota al art. 514.

1—Esta resolución se fundó por la Cámara en el art. 454 del Cód. de Proc., el que declara que «el Juez la calificará por sí solo». De manera que la atribución concedida esclusivamente al Juez no es sobre el monto sinó sobre la clase de fianza ofrecida. En cuanto á su monto, el mismo art. dice: «y encontrándolo bastante mandará otorgar la escritura correspondiente». De esto resulta que es atribución privativa del Juez, calificar la fianza ofrecida; esto es, si debe ella ser personal ó pecuniaria; pero una vez resuelta la clase de fianza que el Juez quiere admitir viene la fijación del monto, el que solo puede resolverlo en grado de apelación el Superior. Así lo ha entendido esta misma Cámara que hoy piensa en la forma sentada en el sumario, pues en el tom. 8^o, pág. 313, Ser. 2^a, Jud. Civ. corre publicada una resolución en la que se fijó en 3.000 nacionales una fianza determinada en 10.000 por el Juez de 1^a Instancia. Véase Inst., tom. 3^o, verb. *Fianza*, núm. 2.



2^a. **Caución**—De *rato et grato*, procede para las gestiones sin poder bastante, debiendo fijarse un término para la presentación del mandato en forma.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 398; Ser. 4^a.

Caudal—Véase: *Alimentos provisorios*, núm. 2.

Caudal hereditario—Véase: *Pensión alimenticia*, núm. 3.

Causa justificada—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 23—*Padrastró*, núm. 1.

Causas graves—Véase: *Abuela*, núm. 1.

1. **Causante**—Existiendo en autos suficientes datos para identificar al causante de la testamentaria, no debe producirse información para subsanar un error de la partida de matrimonio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 190. Ser. 3^a.

2^b. **Causante**—Si resulta que falleció en jurisdicción de la Provincia antes de la federalización, debe declararse la incompetencia del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 145, Ser. 3^a.

Causante—Véase: *Posesión*, núm. 7—*Testamentaria*, número 2—*Hijuela*, núm. 1—*Herederó*, núm. 7—*Administrador judicial*, núm. 1—*Acción personal*, núm. 4—*Alhajías*, núm. 1.

Cedente—Véase: *Posiciones*, núm. 30—*Evicción*, número 3.

1^a. **Cédula**—El traslado de las excepciones no debe

2^a—Ley 21, tit. 5^o, Part. 3^a.

2^b—Art. 3284 del Cód. Civ. y 634 del de Proc.

1^a—Esta resolución fué revocatoria de la de 1^a Instancia en la que se dijo que asumiendo el demandado el rol de demandante al oponer una excepción, el término para evacuar el traslado solo puede empezar á correr desde que la providencia que lo confiere le es notificada personalmente ó en la forma que establece el art. 77 del Cód. de Proc. La Cámara dijo que no estando la providencia comprendida en lo dispuesto en el art. 33 del Cód. de Proc., basta que ella sea notificada por nota.



ser notificado por cédula.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 11. Ser. 3ª.

2. Cédula—Para testigos, solo pueden hacerse en papel simple, si existe papel sellado para reponerla en el acto.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 241. Ser. 4ª.

Cédula—Véase: *Traslado*, núm. 1 — *Posiciones*, núm. 15 — *Modificaciones*, núm. 4.

1. Censo capellánico—No procede su cancelación, mientras no se compruebe plenamente el derecho de los que

2—Dijo el Juzgado que si bien por la práctica constante de nuestros tribunales se ha establecido que las cédulas a los testigos se dejen impresas en papel simple, dada su extensión y con el fin de facilitar el diligenciamiento de las notificaciones, ello no faculta a los secretarios para efectuarlas sin que se les entregue el papel sellado correspondiente con el fin de reponer la foja *ipso facto*, por cuanto el art. 41 de la Ley de papel Sellado solo autoriza a los Jueces y funcionarios públicos de la Nación para actuar en papel común con cargo de reposición. Este argumento falla por su base, pues la ley de papel sellado se infringe desde el momento en que se permite a los secretarios copiar las cédulas en papel común, aunque ella tenga que reponerse *ipso facto*, como dice el fallo. El término más o menos largo que media entre el diligenciamiento de la notificación y la reposición de la cédula poco importa a los efectos de la ley. Lo cierto es que se les prohíbe actuar en papel común y sin embargo es práctica constante, diaria que esas cédulas se hacen todas en papel común, cuando esto lo prohíbe espresamente la Ley La Cámara y los Jueces, escusan ésto, fundándose en el recargo de trabajo. Este argumento sería bueno cuando se tratara de reformar la ley, pero no al tratarse de su aplicación. Con el hecho de agregar una cédula escrita en papel común se viola la ley ¿qué inconveniente hay en que esa cédula se reponga un poco más tarde? La razón de la resolución está en otra parte; tanto los Jueces como la Cámara tratan de salvar a sus subalternos de los muchos cargos que diariamente formulan los litigantes contra ellos, por su desidia y por la lentitud del procedimiento, y encuentran un pretexto, una excusa, en el sumario. Esta jurisprudencia tiene que modificarse, ya sea en el sentido de no permitir que se agreguen las cédulas impresas o ya sea permitiendo que se repongan después de las diligenciadas: lo primero sería lo más arreglado al derecho.



prestan su conformidad como patrones.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 76, Ser. 3^a.

Certificado—Véase: *Ejecución hipotecaria*, núm. 1.

1^a. **Certificado médico**—No siendo negada su autenticidad, procede el señalamiento de nuevo día para la absolución de posiciones.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 78, Ser. 4^a.

1^b. **Cesión**.—El cedente ó sus herederos deben devolver el precio y sus intereses, siempre que se justifique que no existía la cosa, cuando tuvo lugar la cesión.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 197, Ser. 3^a.

2. **Cesión**.—Hecha por un socio, de una parte de las utilidades que pueda proporcionarle un negocio determinado, no basta para conceder al tercero cesionario los derechos de socio que aquel tenía: el cedente es el único deudor responsable para con el tercero.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 350, Ser. 3^a.

3. **Cesión**.—La prueba de la de una obligación de hacer,

1^a.—Porque el certificado justifica la imposibilidad de concurrir á la audiencia, causal bastante para señalar nuevo día. Puede suceder que no se niegue la autenticidad de la firma, pero sí la exactitud de su contenido. El hecho aseverado en él puede no ser cierto, en este caso debe abrirse á prueba el incidente.

1^b.—La cesión versaba sobre acciones y derechos á unos lotes de tierras, la que está sujeta á las disposiciones relativas á la compraventa, en cuanto no fuesen modificadas en la forma del artículo 1435 del Cód. Civ. Cuando la cesión se verificó, los derechos habían ya caducado, siendo de estricta aplicación el artículo 1476, á no ser que la cesión hubiese sido hecha como que el derecho cedido tuviese el carácter de dudoso.

2.—Porque los contratos no obligan á terceros.—art. 1199, Cód. Civil.—Es aplicable con especialidad al caso del sumario el art. 1671.

3.—Otorgado un boleto de compraventa de un inmueble, se exigió la escrituración por el vendedor: el comprador dijo que el boleto lo había cedido á un tercero y que esa cesión fué notificada al vendedor.



como asimismo la de su aceptación por el acreedor es á cargo exclusivo del deudor que la invoca.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 392, Ser. 3^a.

Cesión—Véase: *Cesionario*, núm. 1.—*Contrato rescindido*, núm. 1.—*Contrato de arrendamiento*, núm. 18.—*Obligación de hacer*, núm. 7.—*Interdicto de recobrar*, número 10.

1^a. Cesión de bienes —Para que el acreedor pueda compeler al deudor á hacer cesión de bienes, su crédito debe ser incontestado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 420, Ser. 4^a.

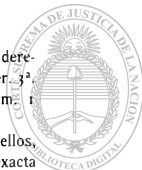
Cesión de bienes—Véase: *Poder*, núm. 3.

1^b. Cesión de créditos—Las disposiciones referentes á la

Abierta la causa á prueba nada comprobó el demandado á quien en el caso correspondía la prueba, en virtud del principio de que al que aduce un hecho nuevo en juicio le corresponde la prueba. La cesión hecha por el comprador es para el vendedor una *res inter alios acta* con la que nada tiene que ver el vendedor. En el caso del sumario el demandado confesó el fundamento de la demanda, pero opuso defensas, las que son á su cargo, como lo establece la ley 8, tit. 3, Part. 3^a, cuando dice: «Conocen á las vegadas los demandados, lo que les demandan en juyzio. Pero ponen luego defensiones ante si, que han pagado ó fecho aquello que les demandan. E por ende dezimos, que en tales razones como estas, ó en otras semejantes dellas, que deue el juzgador dar plazo al demandado, á que prueue la defension que ouiere puesta ante si. E si al plazo que fuere puesto, non pudiera prouar la defension, deuel dar por vencido de la demanda.»

1^a—El título fué tachado de nulo por varias razones, no reuniendo entonces las condiciones requeridas por el art. 719 del Cód. de Proc. que exige que el acreedor sea legítimo. Además el documento era privado. Esta disposición de la ley civil, está en consonancia con la ley mercantil, la que también exige que el acreedor sea legítimo—art. 1392 del Cód. de Com.

1^b—El título «De la cesión de Créditos» del Cód. Civil—arts 1459 y 1470—legisla las relaciones de derecho entre cedente y cesionario y el deudor cedido, entre sí y respecto de terceros, pero en la cesión de derechos hereditarios que motivó este juicio, se trataba de la cuestión surjida entre dos cesionarios, el cedente no intervenía para nada. En



cesión de créditos, no son aplicables á la cesión de derechos hereditarios.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 102, Ser. 3^a.

Cesión de créditos—Véase: *Crédito hipotecario*, núm. 1.—*Escritura pública*, núm. 13.

1. **Cesión de derechos**—Hereditarios, tratándose de ellos, no es requisito indispensable su determinación exacta para la validez de la escritura de cesión, ni es causa de nulidad la falta de posesión de los bienes cedidos.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 125, Ser. 3^a.

2. **Cesión de derechos**—Para que el boleto de compraventa importe una cesión de derechos y acciones, debe existir el endoso al tercero, del boleto otorgado por el propietario.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 325, Ser. 3^a.

la cesión de créditos la notificación al deudor cedido y la aceptación hecha por éste creó relaciones directas entre el cesionario y el deudor, y por consiguiente esa notificación y aceptación es el hecho principal para obligar á este último que es extraño al acto de la cesión: de aquí resulta, que el primero que ha notificado la cesión al deudor, ó ha obtenido su aceptación auténtica tenga preferencia sobre otra cesión de fecha anterior, pero posterior á la notificación al deudor. En la cesión de créditos para que la cesión surta todos sus efectos legales, es necesario que concurren cedente, cesionario y deudor cedido. No sucede lo propio en la cesión de derechos hereditarios.—Véase: *Derechos Hereditarios*, núm. 6.

1—El vendedor no transfiere sino lo que le corresponde, y debe entenderse que la cesión se limita á lo que le corresponde al cedente y al ejercicio de sus acciones. No es posible determinar con precisión los bienes que se enajenan en una cesión de derechos hereditarios, pues la herencia es el conjunto de los bienes que constituyen el patrimonio de una persona. Como conjunto ideal é indeterminado que es en cierto modo, no puede designarse con precisión las cosas individuales vendidas. Los bienes aun indeterminados pueden ser materia del contrato de compraventa. Los arts. 2160 al 2163 del Cód. Civ. lo autorizan. Aunque no se supiese que la herencia existiese positivamente, la cesión podría siempre hacerse porque la autoriza el art. 1446 del mismo Cód.

2—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 5.



3. Cesión de derechos—Justificada por la confesión ficta y por la cesión de derechos la existencia del contrato, los tribunales no pueden ponerlo en duda, aun cuando no se haya agregado á los autos el único ejemplar existente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 408, Ser. 3ª.

4. Cesión de derechos—Debe acompañarse y agregarse al expediente, testimonio de toda cesión de derechos hereditarios hecha en escritura pública. Jur. Civil, tomo 1, pág. 64, Ser. 4ª.

5. Cesión de derechos—Hereditarios, no puede ser rescindida aun cuando una parte resulte de menor valor que el que le fué reconocido en el contrato.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 127, Ser. 4ª.

Cesión de derechos—Véase: *Mandatario*, núm. 11—*Contrato*, núm. 12—*Cesión de créditos*, núm. 1—*Evicción*, núm. 3—*Derechos hereditarios*, núm. 5.

1. Cesionario—El cesionario de un contrato, que debía recibir un tanto por ciento del total de las obras en pago de la cesión, tiene derecho á la parte proporcional de

3—Se dió por contestada la demanda en rebeldía; se abrió á prueba y el demandado no produjo ninguna: dictada sentencia se apeló y no se negó la existencia del boleto cuando el demandado intervino: todos estos antecedentes hacen presumir la exactitud de los hechos alegados y de la existencia del boleto. La minoría que la compuso un voto dijo que la incontestación á la demanda no producía la confesión ficta de los hechos que la instruyen, ni exime al demandante del peso de la prueba.

4—Se ordenó á fin de acreditar la personería de los interesados.

5—Arts. 1328, 1435, 1476 y 1477 del Cód. Civ. Habría lugar á la evicción—art. 2089.

1—La suma percibida representa la utilidad que se deja de obtener por el contratista por la falta de cumplimiento del contrato—art. 510 del Cód. Civ.—El contrato de cesión, como todo contrato, obliga no solo á lo que está formalmente espresado, sino también á todas las consecuencias que puedan considerarse virtualmente comprendidas en él—art. 1198, *ibid*.



la suma percibida por su rescisión.—Jur. Civil, tom. 5, pág. 400, Ser. 3ª.

Cesionario—Véase: *Derechos hereditarios*, núm. 1—*Posesión*, núm. 5—*Jurisdicción*, núm. 1—*Contrato de arrendamiento*, núm. 18.

Cesionarios—Véase: *Socios*, núm. 1.

Ciencia propia—Véase: *Contradocumento*, núm. 2.

Circulación—Véase: *Moneda especial*, núm. 1.

1ª. Citación—Procede la recepción á prueba del incidente sobre nulidad de la citación por ausencia del citado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 69, Ser. 4ª.

Citación—Véase: *Título de propiedad*, núm. 1—*Nulidad de la citación*, núm. 1—*Interdicto*, núms. 3, 6 y 7—*Testigos*, núms. 9 y 10—*Hijo natural*, núm. 10—*Poseción judicial*, núm. 12—*Posiciones*, núm. 41—*Escritura pública*, núms. 7 y 16.

Citación de evicción—Véase: *Evicción*, núms. 1 y 4.

Citación por edictos—Véase: *Domicilio*, núm. 13.

Ciudadano argentino—Véase: *Escepción de incompetencia*, núm. 5—*Jurisdicción federal*, núm. 3.

Clandestinidad—Véase: *Interdicto de recobrar*, núms. 1, 2 y 3—*Edificación*, núm. 1.

Cláusula—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núms. 15 y 18.

1ª. Cláusula penal—Si el vendedor opta por el cumplimiento del contrato, no puede exigir la aplicación de la cláusula penal estipulada para la falta de cumplimiento dentro del término señalado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 166, Ser. 4ª.

1ª. A fin de apreciar debidamente los efectos legales de dichas citaciones.

1ª. Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 20.



1. **Cláusulas**—El reconocimiento de la existencia de un contrato verbal, no importa el reconocimiento de las bases, y corresponde al demandante la prueba de las cláusulas cuya existencia afirma al deducir su acción. — Jur. Civ., tom. 3, pág. 322, Ser. 3ª.

Cláusulas—Véase: *Escrituras*, núm. 1 — *Locatario*, número 2 — *Mandatario*, núm. 3 — *Contrato verbal*, número 6 — *Boleto de compraventa*, núm. 13 — *Escritura de venta*, núm. 1.

Clausura—Véase: *Consejo Nacional de Higiene*, número 1.

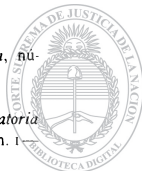
Cliente—Véase: *Honorarios*, núm. 23.

Coadyuvante—Véase: *Posiciones*, núm. 2.

Co-autor—Véase: *Indemnización*, núm. 9.

Cobrador—Véase: *Carta de crédito*, núm. 2.

1—El actor dijo que se había celebrado un contrato verbal de arrendamiento, por el término de tres años: el demandado dijo que el contrato se había celebrado efectivamente pero solo por un año y bajo la condición de que se le daría un fiador abonado, es evidente que no habiendo cumplido con la condición, el contrato debía considerarse como no perfecto, aunque si bien es cierto que el demandado confesó que hubo un convenio para el arrendamiento, no por eso debe darse por probado el contrato en la forma y condiciones espuestas por la parte, porque á este respecto no existe conformidad en los hechos alegados: y como en esta clase de contratos, las condiciones varían al infinito, corresponde la prueba de que el contrato quedó definitivamente concluido, al que alegó su existencia. Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª. Se dijo que el demandado había negado el término del contrato así como el destino de la cosa, y que por consiguiente esa negativa importa destruir una presunción é incumbe la prueba á quien la niega. Esto no es así, pues desde que se reconoce que sobre los puntos enunciados solo se han producido negativas por parte del demandado. No sucedería lo propio si se hubiese traído á tela de juicio algunos hechos nuevos, pues entonces su prueba incumbiría al que los aduce. Pero aquí no se formulan hechos nuevos, puesto que se trata de un contrato que forma un solo conjunto en todas sus cláusulas.



Cobrar—Véase: *Excepción de falta de personería*, número 8.

Cobro—Véase: *Mandatario*, núms. 13 y 14.

Cohederos—Véase: *Heredero*, núm. 1—*Declaratoria de herederos*, núms. 1 y 3—*Demanda ordinaria*, núm. 1—*Cuenta particionaria*, núm. 5.

1ª. **Colación**—Ella solo es aplicable á los herederos ó legatarios: las deudas del padre no pueden afectar los derechos hereditarios de los hijos en la herencia materna.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 218, Ser. 3ª.

Colación—Véase: *Cuenta particionaria*, núm. 5.

Comerciante—Véase: *Libros de comercio*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 5—*Jurisdicción civil*, núm. 1.

1ª. **Comisario**—Los actos llevados á cabo por un Comisario de policía estralimitando sus facultades legales, importan un acto ilícito que puede fundar una acción por indemnización de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 201, Ser. 3ª.

2. **Comisario**—De policía, es responsable de las órdenes

1ª—Arts. 3477 y 3478 del Cód. Civ.

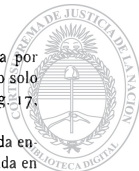
1ª—Véase *Acto ilícito* núm. 5.

2—El art. 1012 del Cód. Civ. determina con precisión las responsabilidades de los funcionarios públicos por sus hechos y omisiones cometidas en el ejercicio de sus funciones, las que quedan comprendidas bajo el título De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos. Entablada demanda contra un comisario con motivo de haber dado una orden arbitraria cuyo resultado fué la clausura de la casa de comercio del damnificado, impidiéndole extraer sus mercaderías y obligándole á cerrar su negocio con menoscabo de su crédito. El demandado negó los hechos generadores de la acción, reconociendo solo que el auxiliar de la Comisaría se prestó, ante exigencias de un acreedor del demandante, á averiguar el nuevo domicilio de éste en caso de mudarse y se dió orden al vigilante de facción en ese sentido. Es principio sentado en nuestra legislación civil que «las consecuencias inmediatas de los hechos libres son imputables al autor de ellos».

de sus subalternos las que habiendo llegado á su conocimiento no hayan merecido su desaprobación en tiempo oportuno.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 396, Ser. 4ª.

«Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho cuando las hubiere previsto y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa haya podido preverlas». Así lo estatuyen los arts. 903 y 904 de nuestro Cód. Civ. Claro es por demás, que si la intervención policial en este asunto solo hubiera revestido la forma que afirmaba el demandado, el pleito no se habría producido; pero cuando se sostiene que no es así y que acaso á virtud de la misma orden á que el señor comisario se refiere, los vigilantes se estralimitaron, la responsabilidad que aquella trae aparejada en fuerza de los preceptos legales que quedan transcriptos es de aplicación estricta, si el actor prueba los hechos en que funda su demanda. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos, dice con mucha oportunidad nuestro Código en su art. 902. Si, pues, la Comisaría dió órdenes para funciones que no le corresponden, y esas órdenes mal interpretadas han producido perjuicios, suya es la responsabilidad. Desde entonces todo el debate se reduce á inquirir si la acción de la Policía se ha contenido en los términos que sostiene el demandado, ó bien si se ha estralimitado hasta donde lo denuncia el actor. La prueba del demandante convencia de la estralimitación de los agentes de la Comisaría. Ahora, para dar á esta prueba toda su importancia, con arreglo á los preceptos de la sana crítica, ocurre preguntar: ¿es verosímil que los hechos en que el actor se funda sean forjados por su imaginación? ¿Se concibe confabulación de testigos para una demanda contra la policía, para reclamar indemnización á un comisario? ¿Es común entre nosotros que se preste el vecindario á perseguir á un empleado público inocente, y más cuando éste dispone de la fuerza pública instituida para el bien y la seguridad común? ¿No es más hacedero que el comisario haya dado una orden y sus agentes la hayan cumplido mal? Y si no, ¿por qué es que el mismo demandado en sus repreguntas trató de probar que la orden superior que invocaban los agentes no emanaba de él? Ahora, si lo que hay es una estralimitación de los subalternos, de buena ó de mala fe, sería demasiada insistencia volver á repetir porqué la responsabilidad recae siempre sobre el demandado. Queda, pues, en toda su fuerza la prescripción del art. 1109 del Código: «Todo el que ejecuta un hecho que por su culpa ó negligencia





1. **Comisión**—La del corredor deberá ser abonada por comprador y vendedor, aun cuando directamente uno solo haya requerido los servicios.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 17. Ser. 3ª.

2. **Comisión**—De venta de un inmueble, la demanda entre corredores, por parte de dicha comisión, y fundada en un contrato de sociedad, debe tramitarse ante la jurisdicción comercial.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 245, Ser. 3ª.

3. **Comisión**—Estipulada como comisión del corredor el excedente del precio fijado, las fluctuaciones que sufra la especie en que se verificó la venta, son á cargo del corredor y no del vendedor.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 201. Ser. 3ª.

4. **Comisión**—De venta en remate judicial es de cuatro

cia ocasiona un daño á otro, está obligado á la reparación del perjuicio. Si no ha existido culpa en el demandado por no haber dictado la orden que ha causado el daño, cuando menos habría de su parte *negligencia* por no haberla revocado al tener conocimiento de ella, y le sería siempre aplicable la misma disposición de la ley.

1—En cuanto á la comisión, así lo establece el art. 112 del Código de Comercio. Debe abonarse la comisión por ambos, porque desde el momento en que se acepta la intervención de los que como corredores se presentan proponiendo un negocio, se contrae la obligación de remunerar sus trabajos. Se trataba de la comisión de venta de un inmueble.

2—Si se tratara de la división de una sociedad formada exclusivamente para la compra y venta de bienes raíces, percibiendo una comisión, esa sociedad sería de carácter civil; pero como la sociedad se constituyó para comisiones en general, ella no puede tener otro carácter que el de mercantil; y como en el caso del sumario se trataba de dilucidar cuestiones entre esa clase de socios, con arreglo al art. 7 del Cód. de Com., la cuestión es mercantil. No debe olvidarse que los corredores son agentes auxiliares del comercio, y como tales, sujetos á la jurisdicción mercantil—art. 88, inc. 1ª, del Cód. de Com.

4—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: Jur. Civil, tom. 5º, pág. 568, Ser. 1ª; S. C. P., tom. 6, pág. 378, Ser. 2ª. Véase la nota siguiente y verb. *Remate judicial*, núm. 34.

por ciento en los muebles.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 176, Ser. 4ª.

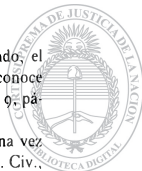
5. **Comisión**—De dos por ciento es la que corresponde en remate judicial de bienes inmuebles.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 177, Ser. 4ª.

6. **Comisión** —Estipulada como comisión de venta de

5—Véase nota precedente.

6—Se convino en que el comisionado trataría de vender un inmueble en la suma de 30.000 nacionales, estableciéndose como comisión el excedente que pudiese obtenerse sobre el precio fijado: la venta se verificó en 40.000 pesos que fueron después reducidos á 30.000 al firmarse la escritura pública correspondiente. El mandatario demandó el pago de la diferencia, es decir, de 10.000 nacionales, considerando terminada la operación para él desde el momento en que el comprador aceptó el precio, á lo que se opuso el mandante, alegando que el precio por el que se realizó en definitiva la venta, dadas las dificultades que opuso el comprado, fué reducido á la suma de 30.000 nacionales, y diciendo además que esa rebaja en el precio primitivo de la venta se hizo con conocimiento y consejo del mismo comisionista ó mandatario. Si esto es exacto, resulta que no tiene derecho al cobro de la comisión estipulada. No puede decirse que la operación quedó concluida por el simple hecho de firmarse el boleto, considerándose desde ese momento el mandatario con derecho á cobrarse la comisión estipulada como en el caso de una simple operación de corretaje, que termina para el corredor cuando el vendedor y comprador se ponen de acuerdo en las condiciones de la venta. Se trata de un contrato de compraventa que la ley establece que debe hacerse en escritura pública bajo pena de nulidad—art. 1184, inciso 1º, del Cód. Civ.—De donde resulta que la operación no puede considerarse concluida mientras no se lleve á cabo el contrato contenido en el boleto privado otorgándose la escritura en forma. Pero resulta que la operación no pudo concluirse en los términos convenidos, y que para ello fué necesario una rebaja de precio, que la propuso el mismo mandatario, interviniendo directamente para que se llevara á cabo la venta con la rebaja de 10.000 nacionales. Así se comprobó en el curso del pleito, y por consiguiente falta la base del derecho para pedir el pago de una comisión dando por terminada una operación por una suma determinada, cuando resulta que no es esa la efectiva sino otra. Al aceptar el mandatario esta rebaja daba á entender que renunciaba tácitamente á la comisión que le correspondía según los términos de la au-





un inmueble el excedente de un precio determinado, el mandatario carece de derecho para exigirla si reconoce que no se cumplió la condición.—Jur. Civ., tom. 9, página 90, Ser. 4^a.

7. Comisión—Equitativa, el Juez debe fijarla, una vez suspendido el remate sin culpa del martillero.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 141, Ser. 4^a.

Comisión—Véase: *Compraventa*, núm. 1—*Tutor*, número 8—*Curador*, núm. 1—*Bienes raíces*, núm. 1.

1^a. Comisionista—Reconocido que el vendedor no ha percibido más del precio estipulado, el comisionista a quien correspondía la demasia, carece de derecho para iniciar contra él reclamo de suma alguna.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 201, Ser. 3^a.

Comisionista—Véase: *Mandatario*, núm. 5—*Obligación de hacer*, núm. 8.

1^b. Como se pide—Esta providencia importa la conce-
torización. Además, tratándose de una obligación condicional, es necesario para que la condición se cumpla, como dice Pothier, que se verifique el hecho del modo que probablemente han querido las partes ó, como lo dice el art. 533 del Cód. Civ., que se cumpla de la manera que verosíblemente quisieron y entendieron que había de cumplirse. Aquí aparecía con toda claridad expresada la condición de pagar como comisión el excedente del precio fijado para la venta, y si esa condición no se realizó en los términos convenidos, no puede decirse que exista obligación por parte del mandante, ni que el mandatario tenga derecho a exigir el pago de la comisión tal como lo pedía.

7—Hay que distinguir si el remate se suspende sin culpa del martillero y sin culpa del mandante, pues en este caso no hay derecho a comisión. Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Remate*, núm. 2. Si el remate se suspende sin culpa del martillero, pero por voluntad del mandante, la comisión proporcional es debida. Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Remate*, núm. 1.

1^a.—Véase: verb. *Comisión*, núm. 3.

1—Habiéndose señalado día para que dos testigos concurrieran a prestar declaración, la parte contraria pidió que declararan ambos en



si6n del pedido en su fondo y en su forma.—Jur. Civ., tomo 1, p6g. 60, Ser. 4^a.

C6moda divisi6n—V6ase: *Tasaci6n*, n6m. 3.

1^a. *Compensaci6n*—Reconocido el hecho de haberse recibido un dep6sito irregular, el deudor est6 obligado a su devoluci6n sin que pueda invocar la compensaci6n con saldos de cr6ditos que no revisten igual origen.—Jur. Civ., tom. 7, p6g. 257, Ser. 3^a.

Compensaci6n—V6ase: *Mandatario*, n6m. 8 —*Excepci6n de compensaci6n*, n6m. 1.

1^b. *Competencia* —Carece el Juzgado de competencia sobre el demandado por acci6n personal, siempre que no resida en su jurisdicci6n.—Jur. Civ., tom. 7, p6g. 128, Serie 3^a.

la misma audiencia; el juzgado provey6 de conformidad: llegado el d6a de la audiencia concurri6 un solo testigo, y la parte contraria se opuso a su examen; el Juez dijo que los arts. 189 y 194 del C6d. de Proc., que hab6an sido invocados en la audiencia por la parte opositora, se refieren a los testigos que son examinados en la misma audiencia, y que no hay disposici6n alguna legal que autorice a una de las partes para exigir que los testigos de la contraria sean examinados en el mismo acto: Que siempre en los tribunales se ha observado la pr6ctica indiscutible de que se tome declaraci6n a los testigos que asisten, seal6ndose nueva audiencia para los inasistentes: Que el juzgado no ha podido resolver en contra de estos principios legales y que al dictar la providencia en que se fundaba la parte opositora, s6lo se ha limitado a se6alar una audiencia para que declaren los dos testigos, y en consecuencia, no hizo lugar a lo solicitado, ordenando se recibiera la declaraci6n al testigo que hab6a concurrido. Apelada esta resoluci6n, la C6mara la revoc6, por cuanto la providencia en que se hab6a proveido de conformidad con lo solicitado en el escrito en que se ped6a la declaraci6n conjunta, hab6a quedado consentida.

1^a—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 2223 del C6d. Civ.

1^b—Siempre que no se encuentre, aunque sea de una manera accidental, en el lugar en que se le demanda 6 en el que se celebr6 el contrato materia del pleito.—Arts. 3 y 4, inc. 6^o, del C6d. de Proc.

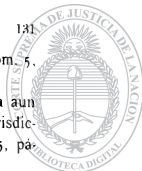


2. **Competencia**—Del Juez, en un interdicto de obra nueva, se rige por el precio asignado al inmueble en la escritura pública de compraventa y no por el de la obra a construir.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 17, Ser. 4^a.

3. **Competencia**—El conocimiento de juicios en que se discute la aplicación de las leyes del Congreso, dictadas en su carácter de Legislatura de la Capital, no es de com-

2—El art. 11 de la Ley Org. de los Trib. de la Cap. de 1886, establece la competencia de los Juzgados de Paz, hasta 2000 nacionales: el art. 14 prescribía el juramento para el caso en que la cosa demandada no sea dinero, el actor manifieste su valor bajo juramento al entablar su demanda. Si esta manifestación no se hace, es porque implícitamente se acepta el asignado en la escritura. Se debe resolver la competencia teniendo en cuenta el valor del terreno y no el del edificio, porque el litigio versa sobre la posesión de aquél, y éste sólo se tiene en cuenta como la causa de esa perturbación. No se cuestiona la posesión de la obra sino la del terreno.

3—Se dijo de incompetencia fundándose en que la obligación cuyo cumplimiento se demandaba—cobro de afirmados—emana de una Ley nacional de 24 Setiembre de 1888, y que estando regido el juicio por una ley nacional, correspondía su conocimiento y resolución á los Jueces Federales, según disposición del art. 2º de la ley de 14 de Septiembre de 1863, sobre jurisdicción y competencia de los Trib. Nac. Pero es el caso que esa jurisdicción y competencia en la Cap. de la Rep. no están regidas por la Ley de 1863, ni pueden estarlo desde que deben su origen á leyes posteriores, motivadas por la federalización de este municipio, una vez constituida la Capital. La Ley Org. de los Trib. de la Cap., de Noviembre de 1886, al crear los Jueces Federales locales, determinó su competencia y jurisdicción en el art. 111, disponiendo en el inc. 1º: que les corresponde conocer de los casos que sean regidos especialmente por la Const. Nac., los tratados públicos con las naciones extranjeras, las leyes nacionales y que sancione el Congreso, con excepción de las que se refieren al Gobierno y Administración de la Cap. La ley que motivaba la cuestión de incompetencia versaba sobre pavimentación de las calles de la Cap.; se refiere únicamente á esta localidad, y por consiguiente, es de las especialmente exceptuadas al final del inciso 1º ya citado. El conocimiento de estos juicios corresponde, en consecuencia, á los tribunales ordinarios—art. 70 de la ley citada.



petencia de los Tribunales Federales.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 305, Ser. 4ª.

4. **Competencia**—Se rige por la suma demandada aun cuando por ser á oro, corresponderia á distinta jurisdicción después de su conversión.—Jur. Civ., tom. 5, página 415, Ser. 4ª.

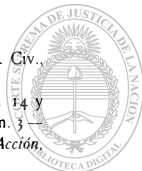
5. **Competencia**—El Juez competente para aplicar la multa por infracción al impuesto de papel sellado, debe conocer en la acción entre los firmantes solidarios de la obligación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 59, Ser. 4ª.

6. **Competencia**—Consentida la competencia en lo prin-

4—Una deuda á oro, fué abonada en su equivalente á papel, otorgándose el recibo á papel; después se gestiona la devolución de su importe; se dice de incompetencia por cuanto la obligación á oro no alcanzaba á la competencia de 1ª Inst.: se declaró que esta era la jurisdicción competente porque el recibo de la deuda originaria estipulada á oro fué satisfecha en moneda de curso legal, cuyo monto excede en mucho á la suma que la ley fija como límite para la jurisdicción de la justicia de Paz. Tratándose de una obligación de dos sumas de dinero cumplida en la forma autorizada por el art. 619 del Cód. Civ., la competencia surge por la opción hecha de la forma de pago modificando la obligación. Este es un caso especialísimo que debe tenerse en cuenta con un alcance muy limitado, y observarse la jurisprudencia establecida en otros casos. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Jurisdicción*, núm. 1, y tom. 3, mismo verb., núm. 7. Puede verse asimismo el tomo 4º, verb. *Jurisdicción*, núm. 8, de la Inst.

5—Si para exigir el pago de la multa no se tiene nunca en cuenta su importe, del mismo modo para exigir la reintegración de lo pagado por esa causa no debe tampoco tenerse en cuenta su monto. Tanto en uno como en otro caso, el cobro iniciado es un incidente de lo principal; porque tiene por base y causa documentos que son fundamento del pleito: lo contrario sería perjudicar al litigante que siendo más diligente se adelanta al pago de la multa, dificultándose el reintegro de lo pagado por la otra parte.

6—Es principio general que el único juez competente para entender en los incidentes es el de lo principal.



cial, no puede declinarse en los incidentes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 306, Ser. 4^a.

Competencia—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 14 y 15—*Funcionarios públicos*, núm. 1—*Posesión*, núm. 3—*Comisión*, núms. 1 y 2—*Juez de FERIA*, núm. 1—*Acción*, núm. 2—*Escepción dilatoria*, núm. 4.

Competente—Véase: *Demanda*, núm. 1—*Interdicto de recobrar*, núm. 4—*Declaratoria de herederos*, núm. 5.

Complicidad—Véase: *Revocación*, núm. 1.

Compra—Véase: *Contrato de compraventa*, número 7—*Desistimiento*, núm. 1—*Dinero propio*, núm. 2—*Remate judicial*, núms. 1, 2, 13 y 15—*Bienes de la sucesión*, número 1.

1. **Comprador**—Cumplida por el vendedor la condición á que estaba subordinada la entrega del precio, el comprador está obligado al pago.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 443, Ser. 3^a.

2. **Comprador**—Que en el acto de la venta conocía la existencia de los títulos en poder de un tercero, no puede retardar el cumplimiento del contrato siempre que aquel

1—Art. 1197 del Cód. Civ.

2—El inmueble vendido reconocía una hipoteca á favor del Banco Hipotecario Nacional, según lo espresaba el mismo boleto de compraventa, pudiendo por consiguiente el comprador examinar los títulos de propiedad, cuando él quisiera, en aquel establecimiento. El demandado alegó que no podía escriturar sin que previamente tuviese los títulos en su poder, á fin de llevárselos á su abogado para que los examinara. Tal pretensión era inesplicable, pues los títulos pudieron ser examinados en el establecimiento, de donde no salen hasta que el préstamo se cancela totalmente, como lo ordenan sus estatutos. La obligación del vendedor, en estos casos, consiste en entregar la libreta del Banco para examinar los títulos: no se le puede imponer la obligación de entregar los títulos ó una copia de ellos. No puede retardarse el cumplimiento del contrato por falta de examen ó entrega de los títulos cuando ellos están á disposición del interesado.

los tenga á su disposición.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 166. Ser. 4^a.

3. Comprador—Puede invocar á su favor los derechos

3.—Siempre que los derechos le hubiesen sido trasmitidos por el vendedor. El caso es el siguiente: El comprador de un inmueble se presenta con su título de propiedad demandando á un tercero para que le entregue la cosa de que está en posesión. El comprador al mismo tiempo de comprar el inmueble adquirió la facultad de practicar cuantas diligencias fueran necesarias á fin de obtener la posesión de ese inmueble reivindicándolo de los que lo disfrutaban sin título alguno. La Cámara resolvió por mayoría, que el comprador, apesar de no tener la posesión y de no haberla tenido antes, podía reivindicar. La minoría sostuvo que el comprador carece del dominio, y por consiguiente, no puede ejercitar ninguna de las acciones reales que nacen del derecho de propiedad, entre las que se cuenta la de reivindicación—Arts. 2756 y 2758, Cód. Civ.—La escritura pública de adquisición solo confiere al comprador un derecho á la cosa comprada, mas no el dominio pleno sobre ella, desde que aun no ha entrado en posesión, la cual no pudo darle el vendedor, porque no la tenía. Pero de los antecedentes espuestos surge esta cuestión: ¿Puede el comprador ejercitar por su causante las acciones y derechos que tenga para reivindicar el inmueble poseído por un tercero, usando al efecto de las facultades que le confiere la cláusula transcrita? La afirmativa se impone. Si el vendedor tenía derecho y acción para reivindicar por sí mismo la propiedad, ha podido también conferir esos derechos al comprador para que los ejercite, promoviendo la demanda que ellos pudieron iniciar directamente. Nada se opone á esta solución, ni hay error que pueda resultar del carácter que por ellos se atribuye el comprador. De aquí resulta que independientemente de las acciones que pueden resultar del contrato de compraventa entre vendedor y comprador sobre entrega de la cosa y de su precio, el último puede invocar los derechos que corresponden al primero para exigir de un tercero la entrega de la cosa vendida, ejercitando las mismas acciones que aquel tuviese. En este caso el tercero y actual poseedor, puede á su vez oponer al comprador las mismas defensas que podía deducir contra el vendedor. Por lo demás, concurre á robustecer la solución dada, el art. 2786 del Cód. Civ., que acuerda el derecho de reivindicar á todo aquel que tenga sobre la cosa un derecho real perfecto ó imperfecto. Resulta, pues, que no es necesario para la procedencia de la acción reivindicatoria que los ex-





del vendedor para exigir de un tercero la entrega de la cosa vendida.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 298, Ser. 4ª.

4. **Comprador**—El que acepta un bien con los gravámenes que sobre él pesan, es el único responsable de los perjuicios que la falta de servicio de intereses le irrogue.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 348, Ser. 4ª.

Comprador—Véase: *Declaratoria de herederos*, núm. 1 —*Pacto comisorio*, núms. 2 y 8 —*Boleto de compraventa*, núms. 7 y 33 —*Compraventa*, núm. 4 —*Título de propiedad*, núms. 2 y 15 —*Comisión*, núm. 1 —*Desistimiento*, núms. 1, 2, 4 y 6 —*Posesión*, núm. 5 —*Remate judicial*, núms. 1, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 20 y 32 —*Reivindicación*, núm. 5 —*Daños y perjuicios*, núms. 23 y 56 —*Recusación*, números 1 y 3 —*Contrato de compraventa*, núms. 10, 13, 15 y 22 —*Información supletoria*, núm. 2 —*Contrato bilateral*, núm. 5 —*Juicio ordinario*, núm. 1 —*Precio*, núm. 1 —*Seña*, núm. 5 —*Simulación*, núm. 7 —*Condominio*, núm. 7 —*Inhibición*, núm. 9 —*Socios*, núm. 1 —*Depósito judicial*, núm. 1 —*Evicción*, núm. 1

temos enumerados en el art. 2758 se cumplan en la persona misma del reivindicante, pues basta que lo hayan sido en sus causantes, de cuyos derechos puede hacer uso el sucesor. Puede consultarse en el sentido indicado, la fuente de donde han sido tomados los arts. 2789 y 2790. Pothier, tom. 8, núm. 324, publicación Dupin; Aubry Rau; Llerena, tom. 4, pág. 426; Laurent, tom. 6, núm. 170. La Cámara tiene sentada esta misma doctrina en el caso de Vázquez con Barros y en el de J. Marín con Pascuala Santana.

4—El comprador se reservó una suma de dinero para hacer frente al crédito hipotecario, «del que se hace cargo en un todo bajo los mismos plazos, cláusulas y condiciones con que fué constituido». Ante esta cláusula, bien explícita por cierto, es fuera de duda que quien debía atender el servicio de la deuda hipotecaria era el comprador, desde que el vendedor al desprenderse del dominio, en uso del derecho que le acuerda el art. 3157 del Cód. Civ., transfiere también al comprador el gravamen que afectaba á la finca.

— *Venta*, núm. 5.—*Posesión al comprador*, núm. 1.—*Avisos*, núm. 1.—*Escrituración*, núm. 5.—*Intereses*, núm. 8.

Comprador condicional — Véase: *Incidente*, núm. 2.

1. Comprador judicial—Debe verificar la oblación antes del otorgamiento de la escritura, sin perjuicio de su derecho á oponerse que se disponga del depósito.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 360, Ser. 3ª.

2. Comprador judicial—El derecho del que conceptúa defectuosos los títulos de la compra hecha en remate judicial, está limitado al desistimiento si los vendedores se niegan á practicar las diligencias necesarias para la subsanación de los defectos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 93, Ser. 3ª.

1—La venta se había verificado mitad al contado y mitad á 90 días de plazo: el precio al contado debía oblarse, pudiendo oponerse á que se disponga del depósito hasta tanto no se escriture el inmueble, siempre que el comprador no tuviese la posesión de la cosa, pues en este caso la falta de escrituración no obsta á que se pueda disponer del precio de compra de la cosa. Con la posesión de la cosa adquirida que se le da al comprador, el contrato queda perfecto. La venta de bienes raíces debe hacerse en escritura pública bajo pena de nulidad, con excepción de las que se hacen en subasta pública. En este caso, una vez aprobado el remate y puesto en posesión el comprador, adquiere éste el dominio de la cosa sin necesidad de escrituración, pues esta no es sino una mera formalidad que nada tiene que ver con la trasmisión del dominio: si el comprador tiene el uso y goce de la cosa, no hay razón para que el vendedor no tenga el uso y goce del precio. Perfeccionado el contrato de compraventa, no hay razón para privar al vendedor de la disposición del precio.

2—El defecto de los títulos no era subsanable en breve tiempo, quedando en este caso perfectamente deslindado el derecho del comprador, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 522 del Cód. de Proc. El caso éste está de acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase *Inst.*, tom. 4, verb. *Títulos*, núm. 3; tom. 2, verb. *Desistimiento*, núm. 4, y *Títulos*, núm. 11.





3. **Comprador judicial**—Solo procede el desistimiento del comprador en remate judicial, después de resueltas las observaciones que formule contra los títulos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 94, Ser. 4ª.

1. **Compraventa**—Aun cuando ésta no se lleve a término, los corredores tienen derecho al cobro de la comisión, siempre que la rescisión no les sea imputable.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 17, Ser. 3ª.

2. **Compraventa**—La promesa estipulada en documento privado no concede derechos á un tercero, si la cesión

3—Formuladas las observaciones contra los títulos que en concepto del comprador constituyan los vicios ó defectos, es necesario esperar la resolución judicial, á fin de aplicar la disposición del art. 522 del Cód. de Proc., porque no basta el criterio individual de las partes para establecer si existen ó no tales vicios, ó si ellos son subsanables en breve tiempo, pues solo en este caso está el comprador obligado á esperar á que se subsanen las deficiencias, sin que esté autorizado á desistir de la compra.

1—Abonándose la comisión en razón de la compra ó de la venta desde el momento en que la operación queda ajustada, los servicios del corredor desaparecen, quedando perfecto su derecho para exigir el cobro de su trabajo, sin que los hechos posteriores ó las convenciones que se celebren entre comprador y vendedor puedan perjudicarle ni tengan nada que ver con él, porque las consecuencias de esos hechos y los efectos de los contratos no alcanzan á terceros—Art. 1199 del Cód. Civil.

2—El boleto de compraventa contiene obligaciones recíprocas, de una parte la de escriturar y de la otra la de pagar el precio; luego no se trata de la cesión de un crédito establecido en favor de una de las partes, pues hay obligaciones mutuas. Si la cesión fuese hecha en estos casos contra la voluntad del vendedor, tendríamos que los compradores podrían eludir á voluntad el cumplimiento del contrato con solo transmitirlo á un tercero sin responsabilidad, burlando así la buena fe del vendedor. En las obligaciones bilaterales, una de las partes no puede cambiar la relación jurídica que los une, sin el consentimiento de la otra.—Art. 1459, Cód. Civ.



del boleto ha tenido lugar sin el consentimiento de los firmantes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 184, Ser. 4^a.

3. **Compraventa**—La cláusula inserta en el boleto de compraventa, de ser la operación verificada para un tercero, y el reconocimiento del vendedor, de la personería de aquél, desobliga á los firmantes del boleto de la obligación personal, siempre que el mandante hubiese aprobado y ratificado el acto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 207, Ser. 4^a.

4. **Compraventa**—La compra á perpetuidad, del terreno en que se encuentra la bóveda de familia, en venta particular y como heredero del anterior arrendatario, establece un condominio con los demás herederos, para cuya adquisición solo están obligados á abonar la parte que les corresponda en el precio de compra.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 116, Ser. 3^a.

Compraventa—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 1 y siguientes—*Contrato de compraventa*, núm. 1 y siguientes—*Cosa ajena*, núm. 1—*Escritura*, núm. 1—*Confesión*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 3—*Inhibición*, número 1—*Sociedad conyugal*, núm. 2—*Renuncia tácita*, núm. 1—

3—Véase *Boleto de compraventa*, núm. 13.

4—Una sepultura fué adquirida por 20 años, edificando el adquirente una bóveda: fallecido éste fué inhumado allí. Uno de sus hijos, invocando su carácter de tal, adquirió á perpetuidad el terreno: el otro le entabló demanda á fin de que se declarase el condominio, pues deseaba conservar aquel lugar para el sagrado donde reposaban los restos de sus antepasados. Se hizo lugar á la demanda, debiendo pagar al comprador la parte correspondiente y proporcional del precio de compra. Uno de los hijos no ha podido proceder á realizar la compra sin consultar previamente con el otro su voluntad, pues no era de suponerse que quisiera dejarlo abandonado. Como el comprador invocó su carácter de hijo al hacer la adquisición, la Municipalidad no publicó los avisos que estila, llamando á los deudos de los sepultados, de manera que no pudo el hermano tener conocimiento de la adquisición que se iba á hacer, conservando en consecuencia íntegro su derecho.



Escritura pública, núms. 12, 13, 15, 18 y 28—*Vendedor*, núm. 1—*Contrato verbal*, núms. 3, 5 y 8—*Jurisdicción por la cantidad*, núm. 1—*Nulidad de la venta*, núm. 1—*Obligación de hacer*, núms. 6, 8 y 12—*Pacto comisorio*, núm. 7—*Títulos de propiedad*, núm. 19—*Daños y perjuicios*, núm. 101 y 104.

1ª. *Compulsa de libros*—Después de vencido el término de prueba, no procede la ampliación de una compulsa de libros.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 63, Ser. 3ª.

2. *Compulsa de libros*—La diligencia aclaratoria de una compulsa de libros, debe practicarse dentro del término de prueba.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 420, Ser. 4ª.

Compulsa—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 43.

Común apoderado—Véase: *Apoderado único*, núm. 1 y siguientes.

Comunidad—Véase: *Cuenta particionaria*, núm. 6.

Comunidad de intereses—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 1.

Comunidad legal—Véase: *Separación de bienes*, núm. 3.

Concepción—Véase: *Filiación legítima*, núm. 1—*Filiación natural*, núms. 1 y 2.

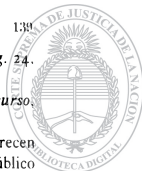
Concesión—Véase: *Término extraordinario*, núm. 5.

Concesión especial—Véase: *Empedrados*, núm. 3.

1. *Concubinato*—Es una fuerte presunción de que los hijos de la concubina, habidos durante la vida común, son

1ª—La prueba debe ser pedida, ordenada y producida dentro del término probatorio—Art. 118 del Cód. de Proc.

2—De conformidad con la jurisprudencia establecida y con los preceptos legales que rigen el caso. Véase el número precedente. En el caso presente, el auto haciéndose saber la agregación de la diligencia de compulsa, se hallaba consentido, y la diligencia se había practicado con el asentimiento del interesado en ella, sin que la observara.



hijos naturales del querido.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 24. Ser. 3^a.

Concurso—Véase: *Poder*, núm. 3—*Bienes del concurso*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 26—*Venta*, núm. 6.

1^a. **Concurso civil**—Los acreedores hipotecarios carecen de personería para oponerse á la venta en remate público de los bienes afectados con hipoteca.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 57, Ser. 4^a.

2. **Concurso civil**—Del auto en que se declara el concurso civil procede el recurso de apelación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 363, Ser. 4^a.

3. **Concurso civil**—El Ministerio Fiscal solo debe intervenir en los casos espresamente determinados por la ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 120, Ser. 4^a.

4. **Concurso civil**—Solo procede el levantamiento del auto de concurso con la conformidad de todos los acreedores.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 47, Ser. 4^a.

5. **Concurso civil**—Los acreedores carecen de personería para intervenir en el concurso civil: sus derechos están representados por el Sindico.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 102, Ser. 4^a.

1^a. **Condénación en costas**—No es obligatoria si los tri-

1^a—Véase *Acreedores hipotecarios*, núm. 1.

2—Art. 724, inc. 5^o, Cód. de Proc.

3—Art. 760 del Cód. de Proc.

4—Por el hecho de declararse el concurso, la masa de los bienes pasa á servir de garantía común á los acreedores del concursado: constituyendo una garantía, ella no puede suprimirse ni quedar sin efecto contra la voluntad de los acreedores beneficiados con esa garantía.

5—Véase *Acreedores*, núm. 1.

1^a—Véase la nota al verb. *Costas*, núm. 1. Salvo en el juicio ejecutivo en el que su imposición es de precepto legal—Art. 507, Cód. de Proc. O en otros casos especialmente establecidos por la ley Art. 578, ibid.



bunales no encuentran suficiente mérito para decretarla.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 111, Ser. 4ª.

Condenación en costas—Véase: *Abogado*, núm. 6—*Costas*, núm. 1 y siguientes.

Condenación expresa—Véase: *Intereses*, núm. 7.

1. **Condición**—No llenada á su debido tiempo, no puede exigirse el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 255, Ser. 3ª.

2. **Condición**—Justificado que se ha llenado la condición de cuyo cumplimiento dependía la obligación de dar, el deudor debe ser condenado al pago.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 50, Ser. 3ª.

3. **Condición**—Para fijar el monto de la indemnización de los daños y perjuicios causados por un delito, debe tenerse en cuenta las condiciones de fortuna del condenado á satisfacerlos.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 249, Ser. 4ª.

1—El vendedor de un inmueble se presentó demandando al comprador por escrituración. El boleto decía: «Cuando el Escribano haya revisado, y que se acepten los títulos, y cuando el comprador esté satisfecho de éstos, depositará la suma indicada, á la orden del vendedor, siendo éstos buenos, y libres de todo gravamen las escrituras se harán en seguida». El cumplimiento de las condiciones á que el boleto está subordinado debe justificarse por el que lo invoca. El vendedor remitió inmediatamente los títulos á un Escribano indicado por el comprador, contestando éste que los títulos eran deficientes, según se comprobó en autos. Si la venta era condicional y si esa condición dependía del comprador, es evidente que no podía pretender éste que el vendedor fuese condenado á escriturar sin comprobar haber cumplido con las condiciones impuestas. En los contratos bilaterales, una de las partes no puede demandar el cumplimiento del contrato sino comprobando que él lo cumplió por su parte ú ofreciendo cumplirlo.

2 —Arts. 533, 536 y 543 del Cód. Civ.

3 —Como asimismo el género de necesidades que la indemnización debe llenar, la naturaleza de los perjuicios y un cúmulo de circunstancias y de hechos que varían al infinito. —Véase Inst., tom. 3, verb. *Daño*, núm. 1.

Condición.— Véase: *Obligación condicional*, núm. 1.—
Capellanía, núm. 2.—*Comisión*, núm. 6.—*Seña*, núm. 7.—
Jactancia, núm. 3.

Condición esencial.— Véase: *Bienes municipales*, núm. 1.

1. Condición resolutoria.— La fijación de un término para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en un contrato privado, no importa una condición resolutoria cuyo vencimiento deje sin efecto el contrato, sino un plazo suspensivo dentro del cual no puede exigirse judicialmente el cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 208, Ser. 4^a.

1.— El boleto decía: «Los vendedores se obligan á otorgar escritura pública dentro del término de cincuenta días». Esto quiere decir que durante ese término, el comprador no puede exigir que se le otorgue la escritura, ni el vendedor puede exigir que el comprador la acepte. Si ninguno de los demandantes podían demandarse dentro de ese término, que se considera común de acuerdo con el art. 570 del Cód. Civ., el cumplimiento de la obligación de hacer, es porque dicho plazo era suspensivo, suspendía el ejercicio del derecho del acreedor. Si ese plazo hubiese de considerarse resolutorio, resultaría que pendiente el plazo, el cumplimiento de la obligación no habría podido ser legalmente demandado, y que á su vencimiento ésta quedaría resuelta, quedando así librado á la voluntad de los contratantes el cumplimiento de sus obligaciones. Si se tuviese en cuenta la naturaleza del negocio, tampoco resultaría el carácter resolutorio del plazo. Un boleto de compraventa con la obligación de escriturar dentro de cierto plazo, es muy general, y ordinariamente nada puede determinar á creer que la intención de los contratantes hubiese sido hacer la escritura dentro del plazo, de tal manera que este fuese la razón determinante de la voluntad de los contratantes y que debieron considerarse desligados de todo vínculo vencido el plazo. La obligación contraída en boletos concebidos en los términos transcritos, es una obligación con plazo meramente suspensivo, y vencido éles exigible su cumplimiento. No hay que averiguar quién es el culpable para la no escrituración dentro del plazo estipulado porque lo mismo tiene como consecuencia legal. No mediando pacto expreso que autorice á una de las partes á disolver el contrato si la otra no lo cumple, dice el art. 1204, el contrato no podía disolverse y solo puede exigirse su cumplimiento.





Condición resolutoria—Véase: *Contrato verbal*, núm. 3—*Obligación condicional*, núm. 2.

Condición social—Véase: *Alimentos*, núm. 14.

1^a. **Condición suspensiva**—La fijación de un término para escriturar importa una condición suspensiva y no resolutoria.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 327, Ser. 4^a.

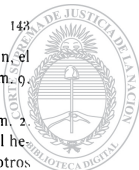
Condiciones—Véase: *Contrato privado*, núm. 2—*Obligación*, núm. 1—*Documento privado*, núm. 6.

1^b. **Condiciones impuestas**—Si el donante no se reserva el derecho de obligar al cumplimiento de las condiciones impuestas para perfeccionar la donación, se considera que el acto es condicional y no de modo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 49, Ser. 4^a.

2. **Condiciones impuestas**—Cumplidas por el donatario

1^a—Véase *Condición resolutoria*, núm. 1.

1^b—Para decidir si las cargas puestas á una donación importan una condición ó una carga ó modo, según la terminología de los tratadistas, es necesario tener en cuenta, más que los términos ó locuciones empleados, la intención presunta, y sobre todo la naturaleza de la prestación ó del hecho sobre que recae. Por otra parte, las donaciones hechas con cargo se diferencian de las hechas bajo condición suspensiva: primero, en que el donatario puede, al menos cuando se trata de prestaciones apreciables en dinero, ser compelido al cumplimiento de las cargas impuestas á la donación, mientras que él es siempre dueño de cumplir ó no las condiciones potestativas de su parte á las cuales ésta se encuentra subordinada; y segundo, en que el cargo no suspende, ni la apertura ni aun la ejecución de la disposición, mientras que la condición suspende su apertura—Aubry y Rau, parágrafo 701.—Así lo ha entendido nuestro Código cuando en la nota al art. 588, establece la diferencia entre el modo y la condición, espresándose así: La distinción entre el modo y la condición puede reducirse á lo siguiente: la condición es suspensiva pero no coercitiva. El modo es coercitivo pero no suspensivo. Así el modo no impide la adquisición del derecho y no espone al peligro de una pérdida total. No debe olvidarse que si el donatario se constituye en mora, procede la revocación de la donación—Arts. 1849 y 1850, Cód. Civ.



las condiciones impuestas en la escritura de donación, el acto queda perfeccionado é irrevocable.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 49, Ser. 4^a.

Condiciones requeridas—Véase: *Nombramiento*, núm. 2.

1. **Condominio**—Reconocido por un condómino el hecho de la administración, debe rendir cuenta á los otros condóminos aun cuando no haya existido mandato en forma.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 143, Ser. 3^a.

2. **Condominio**—Para justificar la existencia de un condominio sobre inmuebles, solo es admisible la prueba resultante de un instrumento público.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 180, Ser. 3^a.

3. **Condominio**—Siendo forzosa la venta del bien, para la división del condominio, la existencia de un contrato de locación, no puede modificar la regla.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 250, Ser. 3^a.

1—Arts. 1909 y 2701 del Cód. Civ.

2—Se dijo que los bienes habían sido adquiridos en sociedad, debiendo en este caso el contrato hacerse en escritura pública bajo pena de nulidad—art. 1184, inc. 3^o, Cód. Civ.—No se comprobaron los extremos de los arts. 1191 y 1192 para hacer admisible otra clase de prueba. Aquí uno de los litigantes dijo que los terrenos habían sido adquiridos en sociedad. La Cámara no dijo que la escritura sea necesaria para comprobar el condominio, solo dijo que: «No se ha exhibido la escritura pública de sociedad, ni puede aceptarse para probar la existencia del contrato invocado, la aplicabilidad al caso de lo establecido en los arts. 1191 y 1192 del Cód. Civ., y 180 del Cód. de Proc.»—El sumario pues, está equivocado, puesto que la escritura pública no es esencial para comprobar el condominio, pues la ley admite excepciones.

3—El copropietario tiene la facultad de pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común—art. 2692, Cód. Civ.—Ese derecho no puede considerarse limitado por la existencia de un contrato de locación que puede y debe ser cumplido por el sucesor particular—arts. 1498 y 3266.—El art. 2715 es una excepción á la regla general.



4. **Condominio**—Existe sobre un sepulcro siempre que se permite la inscripción á nombre de los condóminos y se reconoce el derecho de disponer de él para su familia y allegados, aun cuando el título de propiedad del terreno se encuentre otorgado á nombre de uno solo de los condóminos.—Jur. Civil, tom. 6, pág. 5, Ser. 3^a.

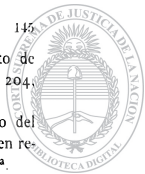
5. **Condominio**—La compra á perpetuidad del terreno en que se encuentra la bóveda de familia, en adquisición particular y como heredero del arrendatario, establece un condominio con los demás herederos, para cuya adquisición éstos solo están obligados á abonar la parte que les corresponda en el precio de compra.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 116, Ser. 3^a.

6. **Condominio**—El reconocimiento de un condominio

4—La posesión en común databa desde antes de la vigencia del Cód. Civ., cuando no era requerida la escritura pública para la constitución de derechos reales sobre inmuebles—Ley 4, tit. 4. Part. 5^a—El condominio quedó evidenciado por una serie de hechos irrelevantes, con documentos privados autenticados en forma, declaraciones de testigos, confesión de parte, inscripción sobre la portada de los nombres de los condóminos: uso común que habían hecho para la inhumación de los miembros de su familia sin previo consentimiento recíproco, refacción y cuidado de la bóveda.

5—Véase: verb. *Compraventa*, núm. 4.

6—Aquí viene á establecerse el principio sustentado por nosotros, de que los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública, como la compraventa de inmuebles, fuesen hechos en documentos privados, puede pedirse la escrituración del inmueble sin pedir previamente la escrituración del boleto. El condominio, según el art. 1184 del Cód. Civ. debe hacerse en escritura pública—inc. 1^o—bajo pena de nulidad. Ahora bien, el documento privado que reconocía el condominio, debió primeramente elevarse á escritura pública, para después pedir la escrituración del inmueble en condominio; pero en el caso que nos ocupa, la Cámara olvidó el principio por ella sentado y ordenó que el condominio declarado en un documento privado fuese escriturado. El Juez de 1^a Instancia decía: «Quedando subsistente la obligación contraída en el recordado ins-



en instrumento privado, importa el reconocimiento de hacer escritura pública.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 204, Ser. 4ª.

7. Condominio—Su existencia importa un defecto del título que permite el desistimiento del comprador en remate judicial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 401, Ser. 4ª.

8. Condominio—Reconocido éste, el condómino está

trumento privado, falta solo resolver sobre los efectos legales de esa obligación.» Habiéndose obligado por él á otorgarse en cualquier momento que se pida escritura en forma, reconociendo el condominio en la cosa, *la obligación es hacer*, y debe ser juzgada de acuerdo con lo que disponen los arts. 625 y 1187 del Cód. Civ., según los cuales, la persona obligada debe ejecutar de hecho en un tiempo propio y del modo que fué la intención de las partes que el hecho se ejecutara, y pudiendo la parte que se resistiese á hacer la escritura pública, ser demandado por la otra para que la otorgue, bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses. Por esto fallo, condenando á que se otorgue la escritura pública del condominio á que se obligó, bajo apercibimiento de derecho. La Cámara confirmó esta sentencia diciendo: «No encuentro en la espresión de agravios un solo argumento que destruya los sólidos fundamentos de la sentencia apelada. Se trata del cumplimiento de una obligación de otorgar la escritura de condominio de una finca. Reconocida la autenticidad de la firma ha quedado reconocido el cuerpo de él—art. 1028, Cód. Civ.—En estas y otras consideraciones se funda para confirmar la sentencia. Se ve pues, que en el caso que nos ocupa no se exigió que se elevara á escritura pública el boleto para luego escriturar el inmueble. Esta es la verdadera doctrina, y la misma Cámara de vez en cuando no puede dejar de consagrarla, como para dejar aquí y allá esparcidas algunas resoluciones que no den la esperanza de volver sobre su jurisprudencia tan reñida con la letra y el espíritu de las leyes que rigen el caso. Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 7.

7—Es un defecto que no puede subsanarse en breve tiempo á causa de las múltiples diligencias y trámites que hay que llenar para dividir el condominio.

8—Este caso es la repetición del núm. 6. El Juez resolvió que debía otorgarse la escritura correspondiente de un lote de terreno, bajo pena de resolverse la obligación en pérdidas é intereses. La Cámara confirmó



obligado á otorgar escritura pública de ese reconocimiento, pero no de la parte que debería corresponder á cada uno de los condóminos como si se hubiese verificado la división.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 31, Ser. 4^a.

9. **Condominio**—La demanda sobre propiedad á título de heredero reconociendo en el contrario la posesión, hace prueba plena para rechazar la división de un condominio que no se invocó por el causante en la primera acción. Jur. Civ., tom. 8, pág. 157, Ser. 4^a.

10. **Condominio**—La existencia de un condominio sobre el terreno locado, no puede fundar la resistencia del locador al cumplimiento del contrato de locación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 385, Ser. 4^a.

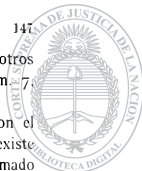
Condominio—Véase: *Bienes testamentarios*, núm. 1—*Indivisión*, núm. 1—*Heredero*, núm. 7—*Arrendamiento*, núm. 3.

1. **Condómino**—La venta hecha por éste, de una parte la sentencia, pero exigiendo la escrituración previa del condominio, porque, «siendo jurisprudencia de la Cámara, fundada en los artículos 1183, 1184, 1175 y 1191 del Cód. Civ., que cuando como al presente, se ejecutan derechos que emanan del dominio de un inmueble, es necesario que ellos tengan su apoyo en escritura pública, de manera que solo debe otorgarse escritura pública en que conste el condominio del inmueble». Se ve que la Cámara vuelve otra vez á su antigua teoría, la que tanto combatimos.

9—Una persona entabla acción reivindicatoria, es vencida y muere: sus herederos inician nueva acción fundados en nuevos recaudos, pidiendo al mismo tiempo la división del condominio. Se dice que los herederos no pueden deducir esta acción de división porque el causante no lo hizo.

10—Véase *Contrato de arrendamiento*, núm. 26.

1—El caso fué juzgado de acuerdo con las prescripciones de las antiguas leyes. La ley 55, tit. 5, Part. 5^a establece que: «dos omes ó mas, aviendo alguna cosa comunalmente de so uno, decimos que cualquier dellos puede vender la su parte, magüer la cosa non sea partida». Esta premisa se refiere á la venta de la parte indivisa de la cosa, según se



determinada de la cosa, sin el consentimiento de los otros condóminos, es nula é insubsistente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 419, Ser. 3ª.

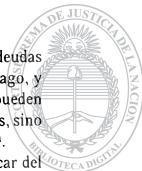
2. Condómino—La prueba de su conformidad con el contrato de arrendamiento del inmueble sobre que existe el condominio, debe resultar del contrato mismo firmado por el otro condómino: la testimonial no es procedente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 281, Ser. 4ª.

3. Condómino—Las cantidades adjudicadas sobre un

desprende de la glosa 303 puesta al final. Esta es la inteligencia que corrientemente le dan los espositores, y nuestro propio Codificador, ilustrando con su cita el art. 2677, que espresamente concede á los condóminos el derecho de enajenar su parte indivisa. De esta facultad acordada al comunero para disponer de su parte ideal, no se desprende que la tenga para disponer de una parte físicamente determinada de la cosa, porque estos conceptos son sustancialmente distintos, y de ahí que en un mismo cuerpo de leyes pueda, sin que en ello haya implicancia, permitirse lo primero y prohibirse lo segundo, como sucede en nuestro Cód.—Arts. 2677 y 2680.—Alcubilla, comentando la ley de Partida que dejamos citada dice en su Diccionario de Administración, verb. *Condomini*, que esa ley solo autoriza á los condueños á vender su parte, la que sea y como le pertenezca, no una parte fija y determinada que el vendedor señale á su arbitrio, tal vez en perjuicio de los condóminos. Si en estado de indivisión cualquier de los condueños pudiese á su arbitrio y sin sanción para sus actos, disponer de una porción determinada de la cosa común, los beneficios del juicio divisorio desaparecerían, primando sobre ellos el provecho é interés individuales contrariamente á la regla *non debe alteri per alterum iniqua conditio inferri*. Nuestra legislación ha incorporado á sus disposiciones el mismo principio—art. 2680, citado.

2—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 27.

3—Se convino que «la ejecución de estos pagos se encomienda al cónyuge, siendo entendido que satisfechas las deudas y libre de toda responsabilidad la sucesión, quedará á beneficio del espresado cónyuge la parte de los bienes que se asigna para la cancelación de estas deudas en la cuenta particionaria». Era inútil pretender que la división se hiciese en otra forma, cuando el convenio la estableció tan claramente, debiendo éste cumplirse—art. 1197, Cód. Civ.



bien testamentario para el pago de la hijuela de deudas aumentan el haber del heredero encargado de ese pago, y en consecuencia los condóminos herederos no pueden pretender que se dividan las rentas por partes iguales, sino equivalentes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4^a.

4. Condómino—Carece de derecho para reivindicar del tercero detentador, una parte materialmente determinada de la cosa común sin el consentimiento de sus condóminos ó sin haberse verificado antes la división.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 210, Ser. 4^a.

Condómino—Véase: *Derechos y acciones*, núm. 1.

1^a. Confabulación —Justificada la confabulación entre tercerista y ejecutado, la sentencia que los condena en las costas y detención dejando á salvo á favor del ejecutante las acciones criminales que viere convenirle, debe ser confirmada.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 108, Ser. 3^a.

Conferencias — Véase: *Regulación de honorarios*, número 4.

1^b. Confesión—La del demandado, de la existencia del contrato verbal de compraventa, hace inútil la resolución de si procede ó no la prueba testimonial. —Jur. Civ., tomo 3, pág. 334, Ser. 3^a.

2. Confesión—El reconocimiento de una deuda en el

4—Arts. 1331, 2679 y 2758 del Cód. Civ.

1^a—Art. 534 del Cód. de Proc.

1^b—La confesión de parte releva á la contraria de toda prueba: es la *probatio probatissima* de la Ley de Part.

2—El art. 3788 del Cód. Civ., preceptúa que el reconocimiento de una deuda hecha en un testamento, es reputado como un legado mientras no se pruebe lo contrario. Si el legado ó el reconocimiento excede de 200 nacionales, se requiere principio de prueba por escrito para hacer procedente la testimonial—art. 1193 del Cód. Civ., y 180 del Cód. de Proc.—El art. 1192 del Cód. Civ., dice que cualquier documento público ó privado que emane del adversario, ó de su causante y



testamento, importa un principio de prueba escrita para hacer procedente la testimonial á los efectos de justificar la veracidad de la confesión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 330, Ser. 4ª.

3. Confesión—La confesión por medio de las posiciones es indivisible, de manera que no puede admitirse lo favorable sino con las mismas restricciones que el absolvente haya hecho valer.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 360, Ser. 4ª.

Confesión—Véase: *Contrato verbal*, núms. 1, 2, 3 y 6—*Posiciones*, núms. 7 y 8—*Prueba testimonial*, núm. 8—*Contrato de locación*, núms. 2 y 4—*Inhibición*, núm. 12—*Acto simulado*, núm. 1.

Confesión contradictoria—Véase: *Prueba*, núm. 14.

que haga verosímil el hecho, se considera principio de prueba. Tratándose del reconocimiento expreso de la deuda hecho por el único interesado directo, es fuera de duda que es suficiente principio de prueba. Esta es la opinión de Troplong, quien comentando el art. 2061 del Cód. de Napoleón dice: «los antiguos autores han debatido la cuestión de saber si la confesión de una deuda contenida en un testamento revocado puede por lo menos servir de principio de prueba por escrito; ellos se han decidido por la afirmativa—tom. 3º.—Toullier y Merlin también se deciden en este sentido. Si debe considerarse principio de prueba la cláusula de un testamento revocado, con más razón debe considerarse la de un testamento en vigor.

3—La Cámara dijo: que según doctrina uniforme consagrada también por la jurisprudencia, la confesión prestada en un acto y de una sola vez por uno de los litigantes á solicitud del adversario se reputa *indivisa*; de modo que no se puede admitir en una parte y desechar en otra, porque la confesión no se constituye sino de todas sus partes, las cuales son mutuamente condición unas de otras: *Confesio dividi non debet*—Escherich, verb. *Confesión judicial*.—Con arreglo á esta doctrina no puede prescindirse de las modalidades de la confesión, dividiéndolas y aislándolas de su parte principal. Esta es la opinión de la Cámara, la que se guarda bien de citar la jurisprudencia, precisamente porque ella es contraria á lo resuelto por ese tribunal. Véase Inst., tom. 4º, verb. *Confesión indivisible*, núm. 1; tom. 3, verb. *Confesión*, núm. 3.



Confesión del demandado—Véase: *Cartas*, núm. 16.

Confesión expresa—Véase: *Confesión ficta*, núm. 2.

Confesión extrajudicial — Véase: *Filiación natural*, número 17.

1ª. *Confesión ficta*—Justificada por ésta y por la cesión de derechos, la existencia del contrato, los tribunales no pueden ponerlo en duda, aun cuando no se haya agregado á los autos el único ejemplar existente.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 408, Ser. 3ª.

2. *Confesión ficta*—O expresa, que hace procedente el embargo preventivo, debe resultar del mismo expediente en que se dicte.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 100, Ser. 4ª.

Confesión ficta—Véase: *Ilegitimidad*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 2.

Conformidad—Véase: *Cuenta corriente*, núm. 2—*Espediente*, núm. 1—*Cuenta*, núm. 1—*Regulación de honorarios*, núm. 2—*Remate judicial*, núm. 13—*Concurso civil*, núm. 4—*Cuenta corriente*, núm. 1—*Arrendamiento*, número 3.

Conformidad de partes—Véase: *Divorcio*, núm. 5—*Locación de servicios*, núm. 2.

1. *Conocimiento* — Basta la afirmación del Escribano sobre conocimiento de las partes, para no exigir testigos: la afirmación de una de aquellas, de no conocerlo, no forma prueba.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 296, Ser. 3ª.

1ª—Véase: *Contrato*, núm. 12.

2—El art. 448 del Cód. de Proc. se refiere á la confesión que resulte del mismo expediente, dice la Cámara. No sabemos en qué puede este tribunal fundarse para resolver así esta cuestión. La ley no exige sino que durante un juicio ordinario, resulten probados hechos, por confesión expresa ó ficta, que hagan presumir verosíblemente el derecho alegado. El requisito apuntado es una limitación á la ley impuesta por la Cámara.



Conocimiento personal—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 19—*Contrato por escritura pública*, núm. 1.

Conocimientos especiales—Véase: *Perito*, núm. 3.

Consejo de Educación—Véase: *Bienes fiscales*, núm. 1—*Herencia vacante*, núm. 2.

1. Consejo de Higiene—La falta de prueba sobre la importancia de los servicios médicos prestados, no permite su avalúo por el Consejo de Higiene, pero debe condenarse al pago de lo que el demandado reconozca adeudar.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 207, Ser. 3ª.

2. Consejo de Higiene—El dañado por una resolución del Consejo de Higiene puede entablar las acciones civiles que crea convenir á su derecho, sin ocurrir al Jurado que prescribe la ley especial sobre ejercicio indebido de la medicina.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 317, Ser. 4.

Consejo de Higiene—Véase: *Honorarios*, núm. 16.

Consejo Deliberante — Véase: *Bienes municipales*, número 1.

Consentimiento—Véase: *Acto ilícito*, núm. 1—*Contrato de compraventa*, núm. 19—*Condómino*, núm. 1—*Pose-*

1—El actor justificó haber prestado servicios profesionales, pero no comprobó su monto, habiendo el demandado manifestádose conforme en abonarle 200 nacionales: la Cámara mandó pagar esta suma, pues no se hallaba en aptitud de justipreciarla por falta completa de una base.

2. El art. 48 de la Ley Prov. de 18 de Julio de 1877 vigente en la Cap. federal en virtud de ley de 31 de Diciembre de 1880, establece que las resoluciones del Consejo Nacional de Higiene son apelables para ante el Jurado, cuya presidencia la ejerce el Juez del Crimen, y si el interesado no hace uso de ese derecho eso no importa renunciar á las acciones civiles de que pueda hacer uso contra quien ordenó la ejecución de un acto fuera de sus atribuciones. El ejercicio del derecho de apelación está prescripto para las resoluciones tomadas por la autoridad competente, pero para aquellas estralimitaciones de facultades de los funcionarios públicos está la disposición del art. 1112 del Cód. Civ.



sión judicial, núm. 9—*Emancipación*, núm. 1—*Nulidad de una venta*, núm. 2—*Obligación de hacer*, núm. 7—*Contrato por escritura pública*, núm. 1—*Inhibición*, número. 16.

1^a. **Consignación**—El cumplimiento del contrato que motiva la consignación, no puede llevarse á cabo en tanto no se declare aquella procedente, rechazando la acción de rescisión sometida á juicio. --- Jur. Civ., tom. 5, pág. 358, Ser. 3^a.

Construcción—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 19, 24 y 25—*Acto ilícito*, núm. 6—*Perito*, núm. 3—*Contrato de locación*, núm. 4.

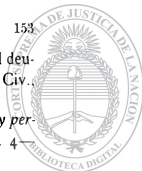
1^b. **Construcciones**—La demora de la Intendencia Municipal en dar la línea de edificación, no puede dar origen á una acción por daños y perjuicios, si los planos presentados no llenan los requisitos que prescribe el Reglamento de construcciones.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 100, Ser. 4^a.

2. **Construcciones**—La falta de convención espresa so-

1^a—Habiéndose oblado el precio de un inmueble adquirido en compra, se solicitó la escrituración en el acto de acompañar el recibo del depósito. Antes de esto el vendedor había iniciado demanda sobre rescisión del contrato. Es evidente que antes que esta última demanda no sea resuelta, no puede ordenarse la escrituración. La procedencia y alcance de la consignación no podría apreciarse rectamente sino después de fallado en definitiva el juicio sobre rescisión. Si el contrato se declara rescindido, la escrituración no procede.

1^b—Se mandaron devolver los planos presentados porque no reunían las condiciones requeridas. Para que la demora del despacho fuese la causa de los perjuicios, habría sido necesario que los planos resultaran en forma: si no lo estaban, ningún cargo podía hacerse al Intendente, pues estando aun en forma y despachados en el día, podrían dar el resultado de habilitar la edificación. El edificio proyectado excedía de la altura acordada por el Reglamento, siendo aplicable el art. 1111 del Cód. Civ.

2—Art. 1636 del Cód. Civ.



bre la forma del pago de una construcción, permite al deudor verificarlo después de terminada la obra.—Jur. Civ. tom. 7, pág. 258, Ser. 4^a.

Constructor—Véase: *Materiales*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 96 y 99—*Contrato de locación*, núm. 4—*Adoquinado*, núm. 4—*Afirmado*, núm. 2.

Contacto carnal—Véase: *Filiación natural*, núms. 1 y 2.

1. Contador—Aun después de aprobada la cuenta participacionaria no puede negarse á concurrir al juicio verbal de-

1—Esta es una de las resoluciones confirmadas «por sus fundamentos» por la Cámara. Cuando este tribunal dicta un auto de esta naturaleza es porque se encuentra fatigado de resolver cuestiones, y se saca de encima sin trabajo alguno y cómodamente un fardo que le molesta. Se trata aquí de una cuenta participacionaria aprobada y consentida por todas las partes. Después de algún tiempo se presenta uno de los adjudicatarios diciendo que la cuenta contiene graves irregularidades: el Juez llama á juicio verbal, á lo que el Contador se opone diciendo que su misión ha terminado con la presentación y aprobación de la cuenta. El Juzgado dice que si bien es cierto que la cuenta ha sido aprobada, esto no es un motivo para privar á las partes interesadas de hacer las observaciones ó reclamos que consideren justos cuando se apercibieren de cualquiera omisión ó error numérico tan susceptible de cometerse en esta clase de operaciones, con tanta más razón cuanto que las cuentas participacionarias se aprueban, como lo fué la que motivó este incidente, en cuanto ha lugar por derecho. Aquí se confunden dos distintas clases de relaciones: una que tiene lugar entre los diversos adjudicatarios, y otra entre éstos y el contador. Las relaciones entre contador y adjudicatarios terminan con la aprobación de la cuenta, siempre que esté consentida, y los errores de la cuenta pueden los coherederos subsanarlos ellos mismos ó nombrando algún otro contador. Los errores son susceptibles de rectificarse por los mismos coherederos; pero no es posible estar molestando al contador á cada momento y siempre que á cualquier adjudicatario se le antoje decir que la cuenta está equivocada. Esto sería para nunca concluir. Si los adjudicatarios estuviesen facultados para molestar al contador aun después de aprobada la cuenta, el auto aprobatorio del Juzgado no tendría ningún objeto práctico. Si á pesar de ese auto, se puede volver constantemente sobre lo aprobado, se habría dictado una providencia completamente inútil, lo que no es



cretado para subsanar los errores que contenga.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 191, Ser. 3ª.

2. Contador—Público, la liquidación como consecuencia de una sentencia, debe ser practicada por aquél.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 115, Ser. 4ª.

Contadores—Inscriptos en la matrícula durante el mes de Julio de 1891, Jur. Civ., tom. 5, pág. 125; durante el mes de Agosto del mismo año, Jur. Civ., tom. 5, pág. 425, de la misma Ser.; durante el mes de Octubre de 1891, Jur. Civ., tom. 8, pág. 72, Ser. 4ª; durante el mes de Noviembre de 1891, Jur. Civ., tom. 9, pág. 48; durante el mes de Diciembre del mismo año, Jur. Civ., tom. 9, pág. 89, Ser. 4ª; durante el mes de Enero de 1892, Jur. Civ., tomo 9, pág. 152, Ser. 4ª; durante el mes de Febrero del mismo año, Jur. Civ., tom. 9, pág. 275, Ser. 4ª; durante el mes de Abril del mismo año, Jur. Civ., tom. 10, pág. 336 Ser. 4ª.

Contadores—Véase: *Inscripciones*, núm. 1.

Contencioso—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 4.

1ª. Contenciosos—En expedientes que tengan este carácter, la Municipalidad debe conceder ó negar el recurso de apelación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 126, Ser. 3ª.

1ª. Contencioso-administrativo—El conocimiento y decisión de las cuestiones sobre falta de cumplimiento de un contrato, por parte de la Municipalidad, en su carácter de posible admitir. El contador concluye su mandato con la aprobación de la cuenta presentada, como el martillero con la aprobación del remate. Sin embargo la Cámara, con el desparpajo y poseída del desprecio que la inspiran los intereses públicos, confirmó la resolución «por sus fundamentos».

2—La liquidación cuando se trata de cuestiones complicadas debe ser hecha por árbitros ó por contador público—art. 557 del Cód. de Proc.

1ª—Véase verb. *Apelación*, núm. 2.

1ª—Véase verb. *Contrato*, núm. 19.



persona jurídica, corresponde á la jurisdicción de los tribunales ordinarios: solo puede conceptuarse contencioso-administrativa la resolución dictada en su carácter de poder administrador. — Jur. Civ., tomo 6, pág. 115, Ser. 4^a.

2^a. Contencioso-administrativo—El recurso directo ante la Cámara, en estos asuntos, solo procede por denegación del de apelación interpuesto ante la Municipalidad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 225, Ser. 4^a.

Contencioso-administrativo—Véase: *Demolición*, núm. 1.

Contestación á la demanda.—Véase: *Sentencia*, núm. 8—*Documentos*, núm. 1—*Prueba del actor*, núm. 2—*Posiciones*, núms. 7 y 8—*Escepciones*, núms. 2 y 3—*Escepción dilatoria*, núm. 2—*Rebeldía*, núms. 8 y 9—*Inapetible*, núm. 1.

Contrademanda—Véase: *Poder especial*, núm. 4—*Apo-derado único*, núm. 6.

1. *Contradocumento*—Es improcedente la prueba testimonial para justificar la simulación deducida por uno de los otorgantes del contrato, en tanto no exista contradocumento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 299, Ser. 3^a.

2^b. *Contradocumento*—La simulación de las atestaciones de una escritura pública puede justificarse por contradocumento, en tanto se relacione con actos personales de los que han intervenido, de los cuales el oficial público solo afirma que se hizo manifestación, pero que no da fe de su existencia por ciencia propia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 179, Ser. 4^a.

2^a—Véase *Apelación de hecho*, núm. 2.

1—De acuerdo con la jurisprudencia recibida en nuestros tribunales. Véase: Inst., tom. 4, verb. *Prueba testimonial*, núm. 1; tom. 3, verb. *Simulación*, núm. 2; tom. 2, mismo verb. núms. 1, 7 y 11.

2^b—Art. 960 del Cód. Civ.



3. **Contradocumento**—Para probar la falsedad de un pago, el contradocumento prueba contra el tercero que intervino por medio de mandatario en la formación de la escritura pública.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 179, Ser. 4^a.

Contradocumento—Véase: *Prueba de presunciones*, núm. 1—*Simulación*, núm. 9.

Contratista—Véase: *Afirmados*, núm. 2.

1. **Contrato**—Las resoluciones municipales que dejan sin efecto un contrato celebrado por la Municipalidad en

3—El tercero que ha intervenido por medio de apoderado en la formación de la escritura, deja de ser tal, y se convierte en parte.

1—Unos empresarios contrataron con la Municipalidad la estracción de la arena del río, y pendiente ese contrato el P. E. creó oficinas especiales para el percibo de esos derechos, haciendo caso omiso del contrato celebrado. Aquellos pidieron indemnización á la Municipalidad y no habiéndoselos acordado, recurrieron á la Cámara de lo Civil, imprimiéndole al juicio el carácter de contencioso-administrativo. El doctor Cortés, en su carácter de Fiscal, produjo un notable dictamen con el que demostró que de acuerdo con nuestra organización constitucional, no puede existir entre nosotros lo que se llama juicio contencioso-administrativo. La Cámara no tomó en consideración las ideas allí desarrolladas, porque no consideró llegado el caso de resolver ese punto de derecho, pues ella estaba de acuerdo con las ideas allí emitidas en cuanto tenía relación con el caso ocurrente. Es indudable que aun admitida la existencia de lo contencioso-administrativo, nadie dudó jamás que no todos los actos de la Municipalidad dan lugar á su promoción, siendo esto aceptado generalmente: cuando la Municipalidad firma una letra ó un pagaré, la ejecución de sus compromisos queda librada á la justicia ordinaria. Nadie ha negado que esa corporación obra en numerosos casos, no como autoridad sino como persona jurídica. Solo en este carácter puede contratar, y solo así ha podido la Municipalidad contratar en el caso que nos ocupa. La estracción de arena es una fuente de la renta de la Municipalidad que ella ha hecho efectiva por medio de contratos. En esto no hay nada que afecte al orden público, ni á la seguridad, ni á las buenas costumbres, ni á la higiene pública: ni nada de lo que está delegado á la Municipalidad como parte de la autoridad pública; se trata tan solo de ajustar los actos de la persona jurídica á la práctica de las personas naturales. Se trata de un contrato que puede celebrar



su carácter de persona jurídica, no pueden dar origen á un juicio contencioso-administrativo. — Jur. Civ., tom. 2, pág. 432, Ser. 3^a.

2. **Contrato**—El conocimiento del juicio sobre falta de cumplimiento por parte de la Municipalidad, á un contrato celebrado con particulares, corresponde á la jurisdicción de los tribunales ordinarios.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 432, Ser. 3^a.

3. **Contrato**—Para que proceda la prueba testimonial sobre modificaciones á un proyecto de contrato, el princi-

toda persona jurídica, porque como lo establece el art. 31 del Cód. Civ., las personas de existencia ideal pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. La Municipalidad es una de esas personas de existencia ideal—art. 33.—Ahora bien, el art. 42 establece que las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles y que puede hacerse ejecución en sus bienes, no admite duda alguna que cuando se demanda á una persona jurídica por un contrato que celebra y no cumple con razón ó sin ella, corresponde proceder como contra cualquiera persona de existencia real, instaurando demanda en forma ante los tribunales comunes. Bien pueden los interesados admitir que su contienda sea dirimida por la Municipalidad, pero siendo las jurisdicciones, de orden público, nunca pueden traerse á la Cámara, las contiendas, por la vía contencioso-administrativo, lo que debe ser materia de un recurso de sentencia dictada con formalidades bien distintas por un Juez ordinario de la capital. Los interesados debieron gestionar sus derechos en juicio ordinario ante el Juzgado Civil en turno, pero jamás pudieron llevar el asunto en apelación ante el Superior con la sola resolución municipal. El recurso de apelación supone una sentencia válida, y ésta á su vez supone jurisdicción contenciosa que solo puede competir á los tribunales.

2—Véase nota precedente.

3—La cuestión versó sobre prórroga de un contrato celebrado por cinco años. El contrato era de mayor cuantía, en cuyo caso no procede la prueba de testigos—art. 1193 del Cód. Civ.—fuera de los casos de escepción del art. 1191. La parte que sostuvo la prórroga del contrato presentó como prueba un borrador que no estaba firmado por la otra parte: esa falta de firma en el documento de prórroga favorece á esta última, pues el contrato que se pretendía prorrogado estaba firmado por



pio de prueba escrita debe referirse terminantemente á las modificaciones; no basta el proyecto para hacerla procedente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 302, Ser. 3ª.

4. **Contrato**—Justificados los hechos que importaban la voluntad tácita de los contratantes de rescindir el contrato, debe ser rechazada toda gestión en la que estemporáneamente se exija su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 254, Ser. 3ª.

5. **Contrato**—La falta de cumplimiento del contrato permite á aquel á cuyo favor se estipule la pena, á demandar su entrega sin justificar perjuicio alguno.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 335, Ser. 3ª.

6. **Contrato**—Las aclaraciones ó modificaciones hechas al mandato por el mandante después de firmado el contrato, no son aplicables ni obligan al tercero.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 335, Ser. 3ª.

7. **Contrato**—No llenada la condición á su debido tiem-

las partes, y no sería lógico suponer que las ellas tuvieron más confianza al celebrar la ampliación que al celebrar el contrato primitivo.

4—En el caso presente hubieron hechos de ambas partes respectivamente que autorizaron la inexecución de las obligaciones de cada uno é infracción recíproca de las prescripciones legales que marcaban á cada litigante el camino legal á seguir cumpliendo por sí el contrato para que su contrario lo cumpliera y no darlo por disuelto sin pacto expreso para que autorizara su disolución, y que por consiguiente no daba lugar á ella sino sólo á exigir el cumplimiento de lo pactado.

5—En el contrato se pactó una multa para cualquiera de las partes que no cumpliese lo convenido. Esa multa constituye una cláusula penal—art. 652, Cód. Civ.—siendo aplicable el precepto legal en virtud del cual el deudor que no cumple su obligación en el tiempo convenido, aunque por justas causas no hubiese podido verificarlo, incurre en la pena estipulada—art. 654—sin serle necesario al acreedor probar que ha sufrido perjuicios, y sin que el deudor pueda eximirse aun probando que el acreedor no los ha sufrido—art. 656.

7— Véase verb. *Condición*, núm. 1.



po, no puede exigirse el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 255, Ser. 3ª.

8. **Contrato**—Para exigir el cumplimiento del contrato al que se dice mandante, es indispensable la justificación de la existencia del mandato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 397, Ser. 3ª.

9. **Contrato**—La modificación á una oferta importa la proposición de un nuevo contrato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 278, Ser. 3ª.

10. **Contrato**—El cumplimiento del contrato que motiva la consignación, no puede llevarse á cabo en tanto no se declare aquella procedente rechazando la acción de rescisión sometida á juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 358, Ser. 3ª.

11. **Contrato**—Aun cuando no se requiera que el principio de prueba por escrito, se refiera directamente al contrato, es necesario que de sus términos resulte verosímil su existencia para que proceda la prueba testimonial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 415, Ser. 3ª.

8—La demanda en este caso tiene por fundamento la existencia del mandato, y es un principio de procedimiento que la prueba de un hecho corresponde al que afirma su existencia—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

9—Art. 1152, Cód. Civ.

10—Véase verb. *Consignación*, núm. 1.

11—Se trata de una convención de compraventa que tenía por objeto un inmueble cuyo valor fué asignado en 16.000 pesos nacionales, afirmándose que el contrato fué concluido verbalmente, cuya forma prevé y autoriza la ley. Negada su existencia por el demandado, el actor produjo unas cartas que no hacían la más mínima referencia al contrato, no autorizando por consiguiente la prueba de testigos, pues para que ésta sea procedente se requiere que las enunciacíones que contenga sean de tal naturaleza que haga presumible la existencia del hecho principal alegado. Esta es la doctrina aceptada por nuestra ley, fundada en el común sentir de los tratadistas, quienes enseñan que la apreciación de esa circunstancia queda librada exclusivamente al criterio judicial. Véase



12. **Contrato**—Justificada por la confesión ficta y por la cesión de derechos, la existencia del contrato, los tribunales no pueden ponerlo en duda, aun cuando no se haya agregado á los autos el único ejemplar existente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 408. Ser. 3ª.

13. **Contrato**—Siempre que se justifique que el contrato tuvo un principio de ejecución, no procede la nulidad del contrato bilateral por haberse omitido el número de ejemplares que la ley exige para su validez.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3ª.

14. **Contrato**—No existiendo pacto comisorio espreso, no puede dejarse sin efecto el contrato por la sola voluntad de una de las partes.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 188. Ser. 3ª.

15. **Contrato**—Si el mandatario estiene el contrato á nombre propio, se hace responsable personalmente de los daños y perjuicios que la falta de cumplimiento irroque al tercero, aun cuando se justifique que éste conocía su carácter de mandatario.—Jur. Civ., tom. 7, página 33. Ser. 3ª.

16. **Contrato**—Si los árbitros deben entender en las Duranton, tom. 3, § 344; Zachariæ, tom. 3, § 598, nota 8; Dalloz, Codes anotés, sobre el art. 1347 § 245.

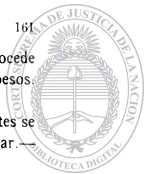
12—Véase verb. *Cesión de derechos*, núm. 3.

13—Aun cuando con arreglo al art. 1021 del Cód. Civ. en los contratos sinalagmáticos, el ejemplar único no es prueba eficaz del acto, la falta del doble ejemplar no anula la convención si por otras pruebas se demuestra que quedó definitivamente concluido—art. 1023.—Puede verse el tom. 4, pág. 293, Ser. 2ª, que contiene una resolución análoga á la presente. Véase Inst., tom. 3, verb. *Disposición*, núm. 1.

14—Art. 1204, Cód. Civ.

15—Surge de la disposición de los arts. 1929, 1930 y 1946 del Cód. Civ. Pothier, tom. 5, pág. 207; Troplong, *Mandat*, § 509; F. S. C., tom. 13, pág. 319, Ser. 2ª.

16—Véase ver. *Árbitros*, núm. 1.



cuestiones sobre interpretación del contrato, no procede su nombramiento cuando la acción es por cobro de pesos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 140, Ser. 3ª.

17. **Contrato**—Cuando por él solo una de las partes se obliga, basta la redacción y forma de un solo ejemplar.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 204, Ser. 4ª.

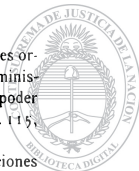
18. **Contrato**—La falta de firma del fiador estipulado en el contrato, inhabilita á la parte que se impuso esa obligación para exigir su cumplimiento y por consiguiente su rescisión.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 300, Ser. 4ª.

19. **Contrato**—El conocimiento y decisión de las cuestiones sobre falta de cumplimiento de un contrato por parte de la Municipalidad en su carácter de persona jurídica.

17—Arts. 1012, 1020 y siguientes del Cód. Civ.

18—El demandante había ofrecido una fianza personal á los efectos del fiel cumplimiento del contrato cuya ejecución pedía. Se trataba de un contrato bilateral, y de acuerdo con los arts. 510 y 1201, no podía pedir su cumplimiento sin cumplirlo él en todas sus partes ú ofreciese cumplir. Como el fiador no había suscrito el contrato, el que ofreció la fianza no podía invocar sus cláusulas á los efectos de su cumplimiento ó de su rescisión, pues al faltar á este compromiso perdió todo derecho que de él pudiese nacer.

19—El recurso fué llevado á conocimiento de la Cámara en virtud de lo dispuesto en el art. 80, inc. 3ª de la Ley Org. de los Trib. La Cámara declaró improcedente el recurso como «lo hizo en los casos de Unzué con la Municipalidad y en el de Gerard y Gómez Molina también contra la Municipalidad». Allí se estudió detenidamente, si atendido nuestro régimen institucional que divide el Gobierno en tres ramas independientes y con funciones propias perfectamente determinadas, era posible admitir ese procedimiento que constituye al Poder Municipal en Juez y parte en sus propios asuntos resolviéndolos en 1ª Instancia, es ó no una anomalía y un privilegio inconciliable con ese sistema de Gobierno y con el espíritu de la Constitución que nos rige. Ese juicio no procede toda vez que la Municipalidad obra en su carácter de persona jurídica, en cuya categoría está colocada por nuestra ley civil—arts. 33 y 34.—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Contratos*, núm. 1; *Obligaciones*, núm. 2, y *Contencioso-administrativo*, núm. 2.



dica, corresponde á la jurisdicción de los tribunales ordinarios: solo puede considerarse contencioso-administrativa la resolución dictada en su carácter de poder administrador.—Jurisprudencia Civil, tom. 6, pág. 115, Ser. 4^a.

20. **Contrato**—Las modificaciones ó interpretaciones que pretenda hacer la Municipalidad á un contrato llevado á cabo en su carácter de persona jurídica, debe gestionarlas ante los tribunales en juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 314, Ser. 4^a.

21. **Contrato**—No puede conceptuarse incidente testamentario, la acción personal dirigida contra el que en representación del causante firmó el contrato.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 323, Ser. 4^a.

Contrato—Véase: *Pacto comisorio*, núm. 2, 3, 4 y 8—*Seña*, núms. 1, 5 y 7—*Prueba testimonial*, núms. 4 y 8—*Remate judicial*, núms. 3 y 11—*Lesión enorme*, núm. 1—*Locatario*, núm. 2—*Mandatario*, núm. 3—*Cosa juzgada*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 11 y 29, 81 y 104—*Depósitos de inmuebles*, núm. 1—*Fianza*, núm. 2—*Contradocumento*, núm. 1—*Escritura pública*, núms. 2 y 15—*Locación deservicios*, núm. 1—*Fuerza mayor*, núm. 1—*Obligación de hacer*, núms. 9 y 12—*Simulación*, núm. 7—*Escrituración*, núm. 4—*Obras*, núm. 1—*Mandato*, núm. 12—*Boleto de compraventa*, núms. 14 y 17—*Excepción de incompetencia*, núm. 6—*Materiales*, número 1—

20—Como se ha visto en el caso precedente, cuando la Municipalidad obra como persona jurídica, contrae obligaciones y adquiere derechos como los particulares, pero no puede en manera alguna alterar los contratos por sí sola, y debe recurrir para la resolución de toda cuestión á las autoridades judiciales ordinarias. Véase la nota precedente.

21—Véase *Acción personal*, núm. 4.



Rendición de cuentas, núm. 19 — *Sindicato* núm. 1 — *Documento*, núm. 3 — *Corredor*, núm. 1 — *Posesión al comprador*, núm. 1 — *Carta*, núm. 1 — *Cesión de derechos*, núm. 5 — *Evicción*, núm. 3 — *Obligación*, número 3.

1. **Contrato bilateral**—Carece de valor legal el documen-

1—El documento presentado consistió en un contrato de sociedad celebrado entre dos personas; una de estas traspasa sus derechos á un tercero, según anotación puesta al pié, pero sin la firma del cedente y solo con la del cesionario. Ahora bien, la firma de las partes en todo documento privado, es una condición esencial, y no puede ser reemplazada, ni por signos, ni por las iniciales de los nombres y apellidos—art. 1012, Cód. Civ.—El Dr. Velez Sarsfield en la nota al art. 916, citando á Savigny, dice: «desde la edad media la declaración escrita se hace poniendo el nombre propio debajo de un acto escrito, y la firma expresa el pensamiento y la voluntad del que lo firma.» El acto no valdría por el derecho moderno aunque estuviese escrito por la parte si no estuviese también firmado. Bonnier, en su Tratado sobre las Pruebas, tom. 2, pág. 232, edición de 1869, sostiene el mismo principio. El Dr. Goyena, en su Proyecto de Cód. Civ. para España, al comentar el art. 1204 dice: «Sin el requisito de la firma, importa poco que sean escritos enteramente de manos de aquel contra quien se presentan». La doctrina sentada por nuestro Código está de acuerdo con la opinión de los autores, y puede decirse que tiene su fundamento en el tit. de contratos y obligaciones convencionales, en la opinión de Bigot de Promeneau, emitida al discutirse el Cód. Nap.—Curso de Leg., tom. 2, pág. 279, edic. de 1841. Si para una obligación contraída por acto público la ley exige la firma de las partes ¿con cuánta más razón no debe exigirse en los contratos celebrados bajo firma privada? El contenido del segundo concepto del sumario no fué materia de una resolución, habiéndose dicho tan solo al respecto que: «aun suponiendo que el acto se hubiese entendido en varios ejemplares y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1013 del Cód. Civ., bastase que dichos ejemplares no estuviesen firmados por todas las partes sinó por aquella que en dicho contrato se obliga para con aquel que posee el ejemplar, en el caso *sub-judice* ocurre lo contrario, pues la cesión con la que el actor pretende hacer valer su derecho, está firmada por el que lo posee y lo presenta». El contenido del sumario está de perfecto acuerdo con lo que dispone la ley—art. 1012, citado.



to privado sin las firmas de las partes que celebran un contrato bilateral: para que la firma de una sola de ellas haga suponer que existe otro ejemplar, el presentado debe tener la firma del contrario.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 402 Ser. 3^a.

2. **Contrato bilateral**—No puede exigirse el cumplimiento de un contrato bilateral celebrado por instrumento privado, si no se justifica la existencia del doble ejemplar que exige la ley. —Jur. Civ., tom. 3, pág. 416, Ser. 3^a.

3. **Contrato bilateral**—No procede la acción por daños y perjuicios por la falta de cumplimiento de un contrato bilateral, si en oportunidad no se demanda su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 254, Ser. 3^a.

4. **Contrato bilateral**—La falta de doble ejemplar de un contrato bilateral, no anula la convención siempre que por otros medios quede justificada la existencia del contrato.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 248, Ser. 3^a.

5. **Contrato bilateral**—La preferencia para la compra por un precio determinado, establecido en favor del comprador, sin obligación de comprar por parte de éste, no importa un contrato bilateral.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 248, Ser. 3^a.

2—Art. 1021, Cód. Civ. Este punto no fué resuelto por la Cámara; solo fué uno de los considerandos en que se basaba la sentencia del Juez de 1^a Instancia; sentencia que fué confirmada por el Superior. El sumario está en contra de la jurisprudencia sentada por la Cámara en otros casos. Véase Inst., tom. 4^o, verb. *Contrato bilateral*, núm. 1; tomo 3, verb. *Disposición*, núm. 1.

3—Art. 1204, Cód. Civ.

4—Véase el núm. 2.

5—La preferencia por el mismo precio á favor de determinada persona para el caso de venta, no implica obligación de comprar, siendo únicamente el vendedor el que se obliga á darle la preferencia á aquél.



6. Contrato bilateral—Para exigir su rescisión, debe el actor justificar que ha cumplido con las obligaciones que él le imponía.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 300, Ser. 4^a.

Contrato bilateral—Véase: *Contrato*, núm. 13—*Inhibición*, núm. 5.

1^a. Contrato con pacto comisorio—Siendo principio fundamental de nuestro derecho civil, que los contratos se forman para cumplirse, la resolución solo es procedente si existe pacto comisorio espresamente estipulado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 350, Ser. 3^a.

1^b. Contrato consensual—La parte que exija judicialmente el cumplimiento de un contrato consensual constante de instrumento privado, debe justificar que cumplió en la debida oportunidad y dentro del término fijado, las obligaciones que le incumbían.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 3^a.

1^c. Contrato de arrendamiento—Para que se declare rescindido, el locador debe justificar que existe mora en el pago.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 415, Ser. 3^a.

2. Contrato de arrendamiento—Siendo forzosa la venta

6—Si según los arts. 510, 1201 y 1204 del Cód. Civ., la parte que no ha cumplido con las obligaciones que el contrato le impone, no puede exigir su cumplimiento, menos puede exigir su rescisión.

1^a—Es doctrina definitivamente consagrada en nuestra jurisprudencia, que cuando una de las partes no cumple con su obligación la otra no puede exigir la rescisión y si solo su ejecución. Las disposiciones de nuestro Cód. Civ. son claras al respecto—arts. 1204 y 1432.

1^b—El art. 1201 del Cód. Civ., establece que en los contratos bilaterales una de las partes no podrá exigir el cumplimiento del contrato si no probase haberlo cumplido ú ofreciese cumplirlo.

1^c—Esta resolución está de acuerdo con la jurisprudencia constante de la Cámara. Véase: *Inst.*, tom. 3^o, verb. *Mora*; tom. 1^o, verb. *Alquiler*, núm. 158.

2—Cada copropietario tiene el derecho de pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común—art. 2692 del Cód. Civ.—Este derecho no



del bien para la división del condominio, la existencia de un contrato de locación no puede modificar la regla.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 250, Ser. 3ª.

3. **Contrato de arrendamiento**—Se reputa simulado el contrato de locación de los bienes de la esposa, celebrado por el esposo después de iniciada la demanda de separación de bienes, y debe declararse su nulidad —Jur. Civ., tom. 3, pág. 239, Ser. 3ª.

4. **Contrato de arrendamiento**—Los preliminares necesarios para este contrato, y aun la entrega de la llave del predio, no bastan para dar por establecida la existencia del contrato, si no se justifica su terminación de común acuerdo de partes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 167, Ser. 3ª.

5. **Contrato de arrendamiento**—No procede la escepción

puede considerarse limitado por la existencia de un contrato de locación, que puede y debe ser cumplido por el sucesor particular de la sociedad vendedora, según lo disponen los arts. 1498 y 3266 del Cód. citado.

3—El art. 1297 del Cód. Civ., establece terminantemente el principio sentado en el sumario. La presunción de simulación establecida en este artículo, es susceptible de prueba en contrario, pero ella no fué rendida, demostrándose por el contrario que existían elementos de prueba que robustecían la presunción legal.

4—El locador, que fué el demandado, confesó que habían mediado propuestas, que hubo ajuste de precio, que se indicaron fiadores, y que se hizo entrega de la llave para que el interesado viera la casa, pero afirmando siempre el propietario que no se consumó el contrato. Estos hechos inducen á creer que el contrato no se llevó á efecto, y no prueban otra cosa que la existencia de preliminares que no importan la perfección del contrato de locación. Si para el locador es una condición principal la presentación de fiador y si el interesado no comprueba que uno de los fiadores propuestos hubiese sido aceptado, es evidente que el contrato no puede considerarse como perfecto, hasta tanto esa condición no hubiese sido cumplida.

5—El juicio por desalojo se seguía ante un Juzgado, mientras que la demanda de escrituración seguía su tramitación ante el Juez de 1ª Instancia. Este magistrado dijo que la escepción no procedía porque am-



de litispendencia, en el juicio sobre reducción á escritura pública del contrato de locación, fundada en el juicio de desalojo del mismo predio. Jur. Civ., tom. 5, pág. 186, Ser. 3ª.

6. **Contrato de arrendamiento**—El juicio sobre su reducción á escritura pública, corresponde á la jurisdicción que resulte competente para entender en la suma que arrojen de todas las mensualidades.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 186, Ser. 3ª.

7. **Contrato de arrendamiento**—Los daños y perjuicios fundados en la falta de cumplimiento de un contrato de locación, requieren indispensablemente la justificación de que existió el contrato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 387, Ser. 3ª.

8. **Contrato de arrendamiento**—Sobre inmuebles, puede ser hecho por instrumento privado, no siendo requisito esencial para su existencia y validez su otorgamiento por escritura pública.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 3ª.

9. **Contrato de arrendamiento**—El sublocatario no puede por su voluntad cambiar la forma del contrato convirtién-

dos juicios eran de distinta indole, de diferente carácter y que en ambos se perseguía diverso fin. El Fiscal dijo que tampoco era procedente la escepción, porque uno de los juicios era ordinario y el otro sumario. Ambos fundamentos fueron aceptados por la Cámara.

6—No se trata de la prestación ó del pago de una mensualidad, sino del cumplimiento del contrato que comprende todas las mensualidades.

7—Desde el momento en que la demanda tiene por base la existencia del contrato, que en este caso se decía no haber respetado el demandado, era evidente que no existiendo la causa no existía el efecto. La demanda parte de la base de la existencia del contrato; no demostrándose su existencia, no procede ninguna indemnización, porque no hay obligación de cumplir un contrato que no existe.

8 Véase *Arrendamiento*, núm. 1.



dose en locatario directo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 165, Ser. 3^a.

10. **Contrato de arrendamiento**—La falta de presentación del poder dentro del plazo estipulado, deja sin efecto el contrato de locación.—Jur. Civ., tom. 6, página 285, Ser. 3^a.

11. **Contrato de arrendamiento**—El locatario que no ha hecho inscribir su contrato privado en el Registro de Propiedad, carece de derecho para demandar al tercero comprador de buena fe por acciones emergentes del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 122, Ser. 3^a.

12. **Contrato de arrendamiento**—No existiendo término estipulado para la locación, el locador tiene derecho á rescindir el contrato en cualquier tiempo, sin que ese hecho pueda fundar una acción por daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 315, Ser. 3^a.

10—El art. 1201 del Cód. Civ., establece que «en los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su cumplimiento si no probase ella haberlo cumplido ú ofreciese cumplirlo.» La parte no había cumplido, ni podía ofrecer cumplirlo porque ya el término había vencido para ofrecer la garantía estipulada.

11—El adquirente de una propiedad que reconoce un contrato de locación, es un tercero con relación al contrato. El art. 239 de la Ley Org. de los Tribs. de 1886, establece que los actos ó contratos á que se refiere la presente ley, solo tendrán efecto contra terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro. El art. 225, enumera entre los contratos que deben inscribirse, los contratos de arrendamiento de bienes raíces por tiempo determinado que exceda de un año—inc. 5^o.

12—Porque según el art. 1509 del Cód. Civ., cuando el arrendamiento es por tiempo indeterminado, el arrendador puede desalojar al inquilino cuando viere convenirle, siempre que se trate de fincas urbanas. Demandando el desalojo en este caso, se usa de un derecho acordado por la ley, y como el ejercicio de un derecho propio á el cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir en ilícito ningún acto, tampoco existe responsabilidad cuando se pide el desalojo—art.



13. Contrato de arrendamiento—La estipulación en el contrato de que el locatario no podrá hacer innovaciones en el edificio, importa que tampoco puede hacerle agregaciones que puedan afectar su solidez y seguridad, aun cuando resulte intacto el existente. --Jur. Civ., tom. 7, pág. 168, Ser. 3ª.

14. Contrato de arrendamiento—La sentencia recaída en 1071 del Cód. Civ.—Esta disposición está fundada en el aforismo de derecho *nom videtur dolo facere qui jure suo utitur*.

13—La cláusula pertinente del contrato decía: «El inquilino no podrá innovar el orden actual de los edificios, y deberá cuidar de su conservación, haciendo de su cuenta las reparaciones consiguientes, pero podrá, si le conviniese, levantar dentro del terreno otros edificios, siendo entendido que todas las mejoras, de cualquiera clase que sean, quedarán a beneficio del propietario. Esta cláusula es una regla a la cual debían someterse los contratantes, como a la ley misma—art. 1197, Cód. Civ.—El locatario está obligado al uso y goce estipulados de la cosa arrendada, dice el art. 1554; es decir que el locatario solo podía hacer mejoras, entre las cuales no estaban comprendidas las obras que confesó haber hecho, consistentes en cubrir patios, abrir claraboyas en los techos, sustituir ventanas por puertas, abrir y arreglar albañales de desagües, y poner vía ferrea para la conducción de cajones. Todo esto se hizo en beneficio exclusivo del locatario y con perjuicio de la solidez del edificio. Es notorio que el hecho de cerrar patios perjudica la ventilación de los edificios, y en consecuencia tiene derecho a hacer cesar las causas del perjuicio—art. 1559.

14—La naturaleza y objeto de ambos juicios son bien distintos, circunstancias que bastan para hacer improcedente la cosa juzgada. En el juicio ordinario generalmente no se trata de resolver si la sentencia recaída en el juicio especial de desalojo era ó no procedente; sino que se trata de saber si se pudo pedir el desalojo sin faltar a las obligaciones contraídas en el contrato de locación, lo que pudo resolverse por el Juez que entiende en el desalojo por la naturaleza especial de este juicio. El cumplimiento ó ejecución de una sentencia puede dar lugar a una acción de daños y perjuicios, especialmente cuando se trata de sentencias que han sido dictadas en juicios sumarios en los que no se pueden discutir los derechos de las partes, emergentes de un contrato cuyo alcance debe ventilarse en juicio ordinario. Es por esto que en el juicio ejecutivo no se discuten ciertos derechos, sino que quedan relegados



el juicio sumario de desalojo, no hace cosa juzgada en el que por daños y perjuicios por falta de cumplimiento del contrato deduzca el locatario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 303. Ser. 3ª.

15. **Contrato de arrendamiento**—La cláusula que permite la prórroga de un contrato de locación, se presume puesta en favor del locatario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 303. Ser. 3ª.

16. **Contrato de arrendamiento**—El locador que exige

para el juicio ordinario: y es por esto también que el Juez al dictar sentencia de desalojo dijo: «siendo el juicio de desalojo sumarísimo no es posible sustanciar y resolver en este juicio el derecho que se alega corresponder por la ya mencionada cláusula del contrato.»

15—Si se considerara que la cláusula es en beneficio de ambas partes, llegaríamos a la conclusión de su inutilidad, puesto que con ó sin ella podrían renovar ó prorrogar el contrato. Se debe buscar entonces una interpretación racional de dicha cláusula, de manera que se armonice con la voluntad presunta de las partes. El art. 1198 del Cód. Civ. establece, que los contratos obligan no solo á lo que está formalmente expresado en ellos, sino á todas las consecuencias que puedan considerarse que hubiesen sido virtualmente comprendidas en ellos. ¿Cuáles son estas? Los tratadistas que el codificador cita en la nota al art. 1198 enseñan, que son las que se desprenden de la equidad, del uso ó costumbres, y de la ley. Así en el caso presente la casa fué alquilada para negocio, y teniendo presente que estos son más productivos cuanto más clientela tienen, la que aumenta á medida que transcurre mayor tiempo; y que para la instalación de los negocios hay que hacer gastos y mejoras que deben generalmente quedar en beneficio del locador, es evidente que la prórroga es más ventajosa para el locatario que para el locador, porque como dicen Aubry y Rau, los términos susceptibles de dos interpretaciones deben ser tomados en el que más convenga al objeto del contrato—§ 347.

16—Establecido que la prórroga fué estipulada en favor del locatario como en el caso precedente, y como que el locador está en la obligación de mantener al locatario en el uso y goce de la cosa locada, inclusive la prórroga—art. 1515, Cód. Civ.—la falta de cumplimiento de esa obligación lo constituye responsable de los daños é intereses—arts. 511 y 512—en la forma que disponen los arts. 518 y siguientes.

judicialmente el desalojo faltando á lo estipulado en el contrato sobre prórroga es responsable de los daños y perjuicios que con su conducta ilícita cause al locatario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 303, Ser. 3ª.

17. **Contrato de arrendamiento**—En que se estipula que las mejoras quedan á favor del locador, debe estenderse en el sello que la ley fija para el valor de las mejoras y no por el precio del arrendamiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 67, Ser. 4ª.

18. **Contrato de arrendamiento**—Estipulado el derecho del locatario á prorrogar el contrato, cualquier cesionario que le subroga, tiene derecho á exigir el otorgamiento del

17—El art. 3º de la Ley de Papel Sellado, de 1891, dispone que los contratos sujetos á prestaciones periódicas deben estenderse en el sello correspondiente á la mitad del valor total de aquellas: pero esta disposición no es aplicable cuando el valor de las mejoras exceden al de las prestaciones periódicas, pues la otra prestación viene á ser lo principal del contrato, que consiste en la adquisición de lo edificado, por parte del dueño del terreno á la terminación del contrato. La circunstancia de que en un contrato se estipulen prestaciones periódicas no implica que no se tenga en cuenta cualquiera otra prestación que crea derecho y beneficio para los contratantes. Los contratos por los cuales trasmite el dueño de un terreno su uso á un tercero, obligándose éste además de pagar periódicamente una suma de dinero, á levantar un edificio á veces de gran valor, conviniéndose en que esas construcciones queden á beneficio del dueño á la terminación del contrato, ¿puede decirse que la importancia del contrato queda determinada, por la prestación periódica, aunque ésta sea insignificante? Evidentemente que no, pues en los cálculos del que da el uso del terreno y del que lo toma, entra de una manera positiva el desembolso que para el uno importa la edificación, y el lucro que para el otro representa el edificio cuando llega el momento de tomar posesión de él. No puede considerarse que el contrato no tiene más importancia de lo que determinan las prestaciones periódicas: la importancia real y verdadera del acto la constituyen la totalidad de las prestaciones.

18—Art. 1583 del Cód. Civ.





nuevo contrato, si no existió cláusula prohibiendo la cesión.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 266, Ser. 4^a.

19. **Contrato de arrendamiento**—Por tiempo indeterminado á favor del locatario. solo es rescindible á la espiración del máximo que fija la ley. Jur. Civ., tom. 2, página 116, Ser. 4^a.

20. **Contrato de arrendamiento**— El locatario que abandona el predio arrendado antes del vencimiento del término estipulado en el contrato, está obligado á indemnizar al locador los daños y perjuicios que cause su falta de cumplimiento al contrato.—Jur. Civ., tom 6, pág. 260, Ser. 4^a.

21. **Contrato de arrendamiento**—Obliga por el término estipulado, tanto al locador como al locatario, salvo convenio expreso que faculte su resolución antes del vencimiento.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 260, Ser. 4^a.

19—El contrato es la regla á la cual deben las partes someterse como á la ley misma—art. 1197, Cód. Civ.—No se trata en el caso del sumario, en realidad de verdad, de un contrato por tiempo indeterminado, sino que se ha enunciado el término implícitamente, por suponerse que el locador ha renunciado tácitamente á la facultad de resolverlo ó darlo por terminado cuando él lo quisiese, siendo así que en el contrato se obligaba á no pedir la casa mientras el locatario la ocupara. Es así cómo el término del contrato puede durar hasta que el locatario quiera, término que se encuentra establecido á su favor, y podía continuar hasta tanto fenezca el término máximo establecido por la ley—art. 1505.

20—Los contratos bilaterales como el de locación, crean obligaciones recíprocas que obligan á los contratantes á su cumplimiento, y ninguno puede argüir que él se celebró en su beneficio exclusivo. El término de la locación obliga á ambas partes; al locador á conceder el uso y goce de la cosa locada, y al locatario á pagar el precio de la locación. Esto resulta con toda claridad de los términos en que están concebidos los arts. 1493, 1515, 1556 y 1604, inc. 1^a del Cód. Civ. Si la obligación subsiste durante todo el término del contrato, la obligación de indemnizar los daños y perjuicios surge de la disposición de los arts. 511 y 1579 del Cód. Civ.

21—Véase nota precedente.



22. **Contrato de arrendamiento**—Procede la resolución del contrato, si el locatario infringió prohibiciones espresamente estipuladas por el locador. —Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 4^a.

23. **Contrato de arrendamiento** —La falta de cumplimiento de las obligaciones impuestas en él, hace procedente su rescisión, si tal pena estaba terminantemente estipulada en el contrato.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 84, Ser. 4^a.

24. **Contrato de arrendamiento**—La menor extensión del

22—De acuerdo con el principio general establecido en el art. 1197 del Cód. Civ. El contrato contenía la cláusula de que el locatario no podía hacer construcciones de madera y si las hiciese, podía pedirse la rescisión del contrato. No puede pues argumentarse diciendo, con el art. 1565, que solo puede impedir la ejecución de las obras; y si estuviesen ejecutadas, demandar su demolición, ó exigir al finalizar el contrato, que el locatario restituya la cosa en el estado que se encontraba al tiempo que la recibió: la rescisión en el contrato que motivó la sentencia, fué espresamente estipulada.

23—Véase nota precedente.—Se pidió la rescisión del contrato por falta de pago de dos mensualidades—art. 1579, Cód. Civ.

24—La demanda se basó en la disminución del terreno locado, á causa del ensanche de una calle antes de la fecha en que se celebró el contrato de arrendamiento, de lo que tenía conocimiento el locador, quien negó á su vez la exactitud de la imputación que se le hacía. La cuestión á resolver se basa en conocer la buena ó mala fe con que procedió el locador, incumbiendo su prueba al que alega la mala fe. No basta consignar un hecho para ser amparado de un derecho, sino que es necesario comprobar su existencia. El art. 1525 del Cód. Civ., establece que el locador responde de los vicios ó defectos graves de la cosa arrendada que impidieren el uso de ella, aunque él no los hubiese conocido, ó hubiesen sobrevenido en el curso de la locación; y el locatario puede pedir la disminución del precio ó la rescisión del contrato, salvo si hubiese conocido los defectos ó vicios de la cosa. Nuestro Código llama vicios redhibitorios en su artículo 2164, á los defectos ocultos de la cosa cuyo dominio ó uso se transmitió por título oneroso, existentes al tiempo de la adquisición, que la hagan impropia para su destino si de tal modo disminuyen el uso de ella, que á haberlos conocido el adquirente no habría adquirido ó habría



predio arrendado, no puede fundar la rescisión del contrato de locación en tanto que no se justifique que resulta inhábil para el objeto que se propuso el locatario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 163, Ser. 4^a.

25. Contrato de arrendamiento—No es procedente la re-

gado menos por ella, formando una escepción á esta regla el art. 1525, según el cual pueden considerarse tales todos los sobrevenidos después de la adquisición. Si la disminución en el área existe, ella no constituye un defecto oculto de la cosa: y siendo éste un elemento esencial del vicio redhibitorio resulta que él no existe. La segunda condición, es que la cosa sea impropia para el uso que se le destina: la disminución del área en el caso era insignificante en relación al total que puede considerarse ódoso que el locatario hubiese por esta causa desistido del contrato en caso de haberla conocido. Aun aceptada la existencia del vicio, el art. 2168 dispone, que incumbe al adquirente comprobar que ese vicio existía al tiempo de la adquisición, y no probándolo se presume que sobrevino después. Y como el espíritu de la última parte de este artículo es el de libentar al enagenante de toda responsabilidad por los vicios sobrevenientes á la fecha de la celebración del contrato, según se desprende de los términos en que está concebida la nota del Codificador al art. 1525, es indudable que al comprador incumbe probar que el vicio existía antes ó sobrevino después de la fecha en que se extendió el contrato de locación, so pena de tenerlo por no existente y declarar que el locador, como consecuencia, está exento de toda responsabilidad. El mismo art. 1525 niega al locatario el derecho para pedir la disminución del precio ó la rescisión del contrato cuando hubiese conocido los vicios ó defectos de la cosa. Si estos son visibles y aparentes de manera que de ellos hubiesen podido tener conocimiento el locatario al entrar en posesión de lo arrendado, es improcedente que por esta causa se declare rescindido el contrato, pues el art. 1604, inciso 5º, se opone terminantemente á ello.

25—Para que exista mora no basta acreditar la falta de pago de dos períodos consecutivos de alquiler, es necesario comprobar que hubo interpelación judicial ó estrajudicial, á menos que concurra alguna de las causas de escepción espresadas en el art. 509 del Cód. Civ. Esta interpelación debe ser hecha en el domicilio del deudor, que es el lugar donde debe hacerse el pago—art. 747.—Esta ha sido la jurisprudencia constante en nuestros Tribunales. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Contrato de locación*, núm. 7; tom. 1º, verb. *Alquiler*, núm. 158.



solución del contrato cualquiera que sea el número de mensualidades vencidas, en tanto no se justifique que existe mora por parte del locatario.—Jur. Civ., tom. 8, página 349, Ser. 4ª.

26. **Contrato de arrendamiento**—La existencia de un condominio sobre el terreno locado, no puede fundar la resistencia del locador al cumplimiento del contrato.—Jur. Civil, tom. 8, pág. 385, Ser. 4ª.

27. **Contrato de arrendamiento**—La prueba de la conformidad de un condómino con el contrato de arrendamiento del inmueble sobre que existe el condominio, debe resultar del contrato mismo firmado por el otro condómino: la prueba de testigos no es procedente.—Jur. Civ., tom. 10, página 281, Ser. 4ª.

28. **Contrato de arrendamiento**—Una sociedad sucesora de otra en los negocios de su giro, puede exigir la escrituración de la prórroga de un contrato de locación celebrado con la anterior, siempre que el locador hubiese consentido los pagos que ésta hubiese hecho de los alquileres devenidos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 266, Ser. 4ª.

29. **Contrato de arrendamiento**—Para que proceda la rescisión de este contrato por medio del desalojo por falta de pago del precio de locación, el locador debe justificar

26—No se comprobó que el arrendatario hubiese tenido conocimiento de la existencia del condominio, en cuyo caso el locador no puede oponerse al contrato de acuerdo con los principios sentados en los artículos 1047, 1512 y 2682 del Cód. Civ.

27—Véase: verb. *Condómino*, núm. 2.

28—Porque se presume que consiente en la cesión dice el fallo. Pero debe tenerse presente que aquí no hubo cesión sino subrogación tácita.

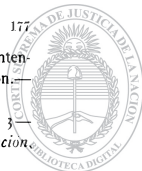
29—Para que el locatario incurra en mora es necesario que haya habido interpelación—art. 509, Cód. Civ.—Jur. Civ., tom. 2, página 340, Ser. 1ª; tom. 4, pág. 490, Ser. 2ª. Véase el núm. 25.

que exigió estrajudicialmente el pago en la debida oportunidad.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 267. Ser. 4^a.

30. Contrato de arrendamiento—La pena por la rescisión

30.—La cláusula pertinente del contrato decía: «El locador podrá vender la cosa arrendada cuando quiera, pero si lo hiciese antes de cuatro meses de la fecha, pagará á los inquilinos la cantidad de 1000 nacionales por indemnización, y si lo verificara después de los cuatro meses dará 2000 pesos, quedando en ambos casos rescindido el contrato.» Es necesario averiguar cuál ha sido la intención de los contratantes al estipular esta cláusula. Si la sola venta de la cosa acarrea la rescisión del contrato naciendo la obligación de pagar las indemnizaciones estipuladas, ó si solo autoriza al locador á resolverlo en caso de venta, determinando desde luego la indemnización que debía satisfacer. ¿La cláusula de la indemnización importa una pena para el caso de venta? Esto último no es aceptable. Porque el locatario no tiene derecho por ley, ni lo tenía por contrato, para impedir la enagenación de la cosa materia de la concesión, y por consiguiente el locador no está en la obligación de abstenerse de la venta. El único interés de un locatario es que se le respete en su contrato, y es evidente que la sola venta de la cosa, no va contra ese interés. De aquí resulta que la cláusula no puede ser una pena para el locador. La cantidad á abonarse en caso de venta es por vía de indemnización quedando rescindido el contrato. Ahora bien, esa rescisión ¿se opera *ipso facto* por la venta que de la cosa arrendada haga el locador? Estudiando la cuestión á la luz de la ley y de la razón, resulta una contestación negativa. Para ello habría sido necesario que la persona del locador hubiese sido una causa determinante del contrato, y nada induce á presumir este extremo. Para exigir el pago de la pena, sería previa la rescisión del contrato, y nada induce á creer que el locatario tiene otro interés que no sea el que se le respeten sus derechos al uso ó goce de la cosa arrendada por todo el tiempo de la locación. Ningún perjuicio se le sigue al locatario porque el locador sea Juan ó Pedro, y por consiguiente ninguna indemnización podría demandar por el solo hecho de que el locador dejara de ser propietario de la cosa arrendada. De donde resulta, que esa cláusula debe entenderse razonablemente como que importa una facultad acordada al locador para que pueda resolver el contrato en caso de venta, debiendo entonces abonar al locatario las cantidades que se estipulen por vía de indemnización de las pérdidas é intereses que le ocasionase la rescisión. Esa cláusula es necesaria en todo contrato de locación constante de escritura pública,





de un contrato en caso de enajenación solo puede entenderse aplicable si la venta deja sin efecto la locación.—

Jur. Civ., tom. 7, pág. 423, Ser. 4ª.

Contrato de arrendamiento—Véase: *Locatario*, núm. 3—*Escritura pública*, núm. 6—*Desalojo*, núm. 4—*Locación*, núm. 4—*Daños y perjuicios*, núm. 89.

1. **Contrato de compraventa**—El conocimiento por parte del comprador, antes de la adquisición, de los vicios de que adolece el contrato, importa una renuncia tácita á la evicción fundada en los mismos.—Jur. Civ., tom. 2, página 21, Ser. 3ª.

2. **Contrato de compraventa**—El vendedor está obligado á subsanar los defectos del título para el otorgamiento de la escritura: la resolución del contrato no puede declararse sin la conformidad del comprador. —Jur. Civ., tom. 2, página 193, Ser. 3ª.

3. **Contrato de compraventa**—El vendedor está obligado á subsanar aquellos defectos del título, cuya existencia reconoció al estipular la venta: su desidia no puede fundar la rescisión de la venta.—Jur. Civ., tom. 2, página 226, Ser. 3ª.

4. **Contrato de compraventa**—El error de hecho sobre la ubicación del terreno materia del contrato, anula el acto,

por cuanto una vez inscripto, como tiene que ser en el Registro de la Propiedad, tiene que respetarse necesariamente en caso de venta del inmueble.

1—Art. 2106 del Cód. Civ.; Troplong, comentario al art. 1626 del Cód. Francés, núm. 418.

2—En cuanto á la primera parte del sumario debe entenderse que solo está obligado cuando los defectos fuesen de fácil subsanación—artículo 522 del Cód. de Proc.—En cuanto á la segunda parte, véase el art. 1204 del Cód. Civ.

3—Véase nota precedente.

4—Art. 927, Cód. Civ.



mientras no se justifique la existencia de dolo.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 367, Ser. 3ª.

5. **Contrato de compraventa**—De bienes, celebrado entre madre é hijo, es válido mientras no se justifique que tuvo por objeto defraudar los bienes de la sociedad conyugal.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 417, Ser. 3ª.

6. **Contrato de compraventa**—El vendedor que no lo cumple, solo está obligado á devolver la seña recibida, en tanto no se haya estipulado otra pena.—Jur. Civ., tom. 4º, pág. 103, Ser. 3ª.

7. **Contrato de compraventa**—Ejecutado el comprador en remate judicial por el precio de la compra, no procede la rescisión del contrato.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 325, Ser. 3ª.

8. **Contrato de compraventa**—Justificada la imposibilidad de cumplir el contrato de compraventa, el vendedor está obligado á la devolución del precio con sus intereses á estilo de banco.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 318, Ser. 3ª.

5—Un esposo, durante la sociedad conyugal, vendió á su madre un inmueble: los hijos de los cónyuges dijeron de nulidad de esa venta, habiendo sido rechazadas sus pretensiones, porque no es posible hacer cuestión de si el hijo puede ó no vender válidamente los bienes de la sociedad conyugal durante la existencia de ésta, salvo los derechos de la esposa cuando la venta fuese hecha en fraude de ella. La circunstancia de tratarse de un contrato celebrado entre madre é hijo, no es por sí sola una prueba de fraude ó de simulación, para declarar en su mérito nulo ó simulado el acto. El art. 1357 del Cód. Civ. establece quiénes son los que pueden comprar y vender: los artículos siguientes enumeran taxativamente quiénes no pueden celebrar ese contrato, y entre las personas enumeradas no se encuentran comprendidos el hijo y la madre. Siendo esto así, el contrato es perfectamente válido.

6—Art. 1189 del Cód. Civ.

7—Porque la ejecución iniciada implica exigir el cumplimiento del contrato, y no es posible pedir conjuntamente la rescisión y el cumplimiento de los contratos—art. 1204, Cód. Civ.

8—Art. 1413 del Cód. Civ.



9. **Contrato de compraventa**—El boleto otorgando promesa de venta se juzga por las disposiciones del contrato de compraventa, aun cuando el vendedor no sea propietario del inmueble materia del contrato.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 325, Ser. 3ª.

10. **Contrato de compraventa**—Justificada la mora del comprador en cumplir el contrato de compraventa constante de documento privado, procede se declare su rescisión.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 408, Ser. 3ª.

11. **Contrato de compraventa**—Reconocida la existencia del contrato de compraventa constante en instrumento privado, procede su reducción á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 188, Ser. 3ª.

12. **Contrato de compraventa**—El vendedor debe otorgar escritura pública del contrato de venta constante en instrumento privado, bajo pena de ser condenado en las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3ª.

13. **Contrato de compraventa**—Justificada la imposibili-

9—Véase *Boleto de compraventa*, núm. 6.

10—Préviamente había solicitado la parte el otorgamiento de la escritura dentro de diez días: fué notificado, y vencido el término acordado, se presentó la misma parte pidiendo se declarara rescindido el contrato. Así se declaró por mayoría de votos: la minoría formada de un vocal dijo, que el demandado no había acompañado el boleto, ni menos comprobado que él contuviese cláusula alguna resolutoria. No habiendo insinuado siquiera la existencia del pacto comisorio, el vendedor no pudo útilmente gestionar la resolución sino el cumplimiento de la venta, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1204 y 1432 del Cód. Civ.

11—Arts. 1185 á 1187, 1204 y 1432 del Cód. Civ. Véase verbo *Escritura pública*, núm. 4.

12—Véase *Escritura pública*, núm. 3.

13—El contrato constaba de un documento privado, en cuyo caso aunque se haga la tradición de la cosa, la venta no queda perfecta por que el dominio se adquiere por escritura pública de adquisición segunda de la tradición. Si no hay escritura pública, falta uno de los elemen-



dad de cumplirse, procede la devolución del precio, aun cuando el comprador hubiese tomado posesión de la cosa ó materia del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, página 325, Ser. 3ª.

14. **Contrato de compraventa**—Al vendedor que alega su rescisión, corresponde la prueba de la escepción; si no la justifica, debe ser condenado á su cumplimiento en un término perentorio, bajo pena de resarcir las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 371, Ser. 3ª.

15. **Contrato de compraventa**—La pérdida de la seña permite al comprador dejar sin efecto este contrato.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 228, Ser. 4ª.

16. **Contrato de compraventa**—El de una área determinada por un precio único, solo puede quedar sin efecto por diferencia del vigésimo en el total.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 245, Ser. 4ª.

17. **Contrato de compraventa**—El vigésimo que la ley fija para permitir la rescisión del contrato, es sobre el total del área, no sobre la dimensión de la parcial de uno de sus costados.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 245, Ser. 4ª.

18. **Contrato de compraventa**—No procede la acción sobre cumplimiento del contrato de compraventa de un inmueble, en tanto no se haya estendido la escritura pública

tos esenciales de la compraventa y por consiguiente no puede ser considerada como perfecta. Si su cumplimiento no es posible, el vendedor puede exigir que inmediatamente se le devuelva el precio—art. 1413, Cód. Civ.

14—Se acordó 15 días para escriturar, bajo el apercibimiento del artículo 1187 del Cód. Civ.

15—Art. 1202, Cód. Civ.

16—Arts. 1341, inc. 5º, 1346 y 1347, Cód. Civ.

17—Así lo dice espresamente el art. 1346 del Cód. Civ.

18—De acuerdo con la jurisprudencia establecida por la mayoría de la Cámara. Véase verb. *Escritura pública*, núm. 7.



que la ley declara indispensable para reconocer su existencia y validez.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 109, Ser. 4^a.

19. **Contrato de compraventa**—El comprador que en el acto de la compra conoció la existencia de los títulos en poder de un tercero, no puede retardar el cumplimiento del contrato siempre que aquél los tenga á su disposición.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 166, Ser. 4^a.

20. **Contrato de compraventa**—Si el vendedor opta por el cumplimiento del contrato, no puede exigir la aplicación de la cláusula penal estipulada por la falta de cumplimiento dentro del término señalado.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 166, Ser. 4^a.

21. **Contrato de compraventa**—La modificación del contrato de compraventa con pacto de retroventa, permitiendo que el vendedor lleve á cabo actos de propietario después del vencimiento del término, transforma el contrato y permite al deudor hacer uso del derecho de retrotraer la propiedad.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 55, Ser. 4^a.

19—Véase verb. *Comprador*, núm. 2.

20—Véase *Cláusula penal*, núm. 1.

21—El vendedor comprobó que el término de la retroventa había sido prorrogado de común acuerdo de partes, quedando las estipulaciones contenidas en la escritura de venta con pacto de retroventa sustancialmente modificadas. Se presentó un documento del que resultaba que las partes convinieron en fijar un plazo prorrogando el término de la retroventa: en la misma forma se estableció que una nueva convención había sustituido á la primera, mediante la cual se crearon nuevas relaciones de derecho, autorizándose al comprador á vender en público remate y á nombre del vendedor primitivo, la propiedad materia del contrato, facultándolo asimismo para cobrarse lo que se le adeudaba y cancelar un gravamen que reconocía el inmueble á favor del Banco Hipotecario. Este documento privado fué reconocido por el comprador, teniendo en consecuencia la misma fuerza que el documento público—art. 1026, Cód. Civ.—por él se estableció una nueva forma de pago de lo adeudado por el vendedor.



22. **Contrato de compraventa**—Si el comprador persiste en la compra hecha en remate judicial aun reconocida la imposibilidad de la escritura en breve término, no procede la resolución del contrato.—Jur. Civ., tom. 8, página 414, Ser. 4^a.

23. **Contrato de compraventa**—No procede la rescisión de un contrato de compraventa de inmuebles por instrumento privado, si no existe pacto comisorio.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 276, Ser. 4^a.

22—Comprado un terreno se pidió quedaran en suspenso las obligaciones del adquirente y la aprobación del remate por resultar que la propiedad se encontraba en litigio. Se proveyó de conformidad en virtud de lo prescripto en el art. 1425 del Cód. Civ., y sin perjuicio de llevar adelante la percepción del precio con afianzamiento. Posteriormente el vendedor pidió se dejara sin efecto el remate para no dejar indefinidamente postergada la venta, pero el comprador se opuso amparándose en el art. 1204. Desde luego debe tenerse presente que el art. 522 del Cód. de Proc. no es aplicable al caso, porque aquí no se trata de vicios opuestos á los títulos; y además porque esa disposición tiene por objeto evitar que terceros adquirentes de bienes vendidos en juicio ejecutivo impidan que el acreedor se haga pago á la brevedad posible de su crédito, objeto principal del juicio ejecutivo. Aquí no dependía del comprador el que los vendedores no se encontrasen en aptitud de escriturar, y más bien es imputable al vendedor, quienes no habían tratado de hacer desaparecer los obstáculos que se oponían á su escrituración. El caso está resuelto por los arts. 1204 y 1425. El primero no da derecho á los vendedores á dejar sin efecto el contrato desde que no existe pacto comisorio, mientras que el segundo autoriza al comprador á no entregar el precio estipulado hasta tanto no desaparezca el temor de ser molestado por acción reivindicatoria. Aquí no se trataba del perfeccionamiento del contrato á cuya realización no se oponían el comprador que aceptó el auto suspendiendo los efectos de la compra, sino de la retención del precio que compete al comprador en las ventas perfectas de acuerdo con el art. 1425. El auto que mandaba suspender la aprobación del remate y las obligaciones del comprador estaba consentido y no era posible volver sobre lo mismo, por esto no se hizo lugar á lo nuevamente pedido en contra de esa resolución.

23—Art. 1204, Cód. Civ.



24. Contrato de compraventa—Para que proceda el cumplimiento de este contrato, el boleto simple debe ser convertido á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 153, Ser. 4^a.

25. Contrato de compraventa—Justificada la existencia de este contrato por instrumento privado, procede su conversión en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 9, página 337, Ser. 4^a.

Contrato de compraventa—Véase: *Títulos de propiedad*, núm. 19—*Desistimiento*, núm. 2—*Renta*, núm. 4—*Boleto de compraventa*, núms. 1 y siguientes—*Autenticidad*, número 3—*Escritura pública*, núms. 26, 27 y 28.

Contrato de construcción—Véase: *Caso fortuito*, núm. 1.

1. Contrato de locación—De servicios, debe justificarse plenamente la existencia de este contrato, para que proceda el pago de los trabajos ejecutados.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 430, Ser. 4^a.

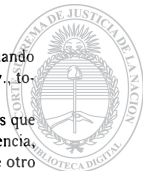
2. Contrato de locación—De servicios, justificada por confesión del demandado la existencia de este contrato, pro-

24—Véase verb. *Escritura pública*, núm. 7.

25—Véase nota precedente.

1—En virtud del principio general de que la prueba corresponde al actor.—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.

2—En el contrato de locación de servicios casi siempre hay hechos realizados, de manera que la prueba de esos hechos puede ser rendida por cualquiera de los medios admitidos por el artículo 1190. La disposición que prohíbe la prueba de testigos en los contratos que exceden de 200 pesos no es aplicable porque el art. 1191 establece, en su última parte, que son admitidos todos los medios probatorios «cuando una de las partes hubiese recibido alguna prestación y se negase á cumplirla.» De aquí resulta que la prueba de testigos sería siempre procedente, cuando han habido servicios prestados, ya sea que el deudor hubiese confesado parte de esos servicios ó que no hubiese confesado nada. Esa prueba sería procedente no solo respecto de lo accesorio sino que también con relación á lo principal.



cede la prueba de testigos sobre sus detalles, aun cuando no exista principio de prueba por escrito.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 383, Ser. 4ª.

3. **Contrato de locación**—De servicios, para aquellos que se requiere título profesional, reconocida su existencia, debe ordenarse su pago, aun cuando se justifique que otro fué el que desempeñó la parte mecánica de la operación.—Jur. Civ., tom 7, pág. 400, Ser. 4ª.

4. **Contrato de locación**—De servicios, reconocida su existencia, el constructor está obligado á pagar al propie-

3—Contratada la mensura y delineación de un centro agrícola, el agrimensor encomendó, el trabajo material de medir, á otro del gremio pero sin título. Hecha la medición el titulado completó la operación, firmó la diligencia y la presentó al Departamento de Ingenieros obteniéndose su aprobación. Viene á cobrar sus honorarios el primero y se opone la parte al pago, porque dice que la medición no la hizo él sino otro agrimensor y que por consiguiente no tenía derecho á reclamo alguno. El agrimensor titulado dijo que el otro había hecho la mensura, pero como «operador material, en calidad de ayudante, debiendo someterse á las instrucciones que él le diera, como lo hizo», habiendo formado el primero los demás planos. El trabajo de una mensura no lo constituye solo la medición material que un agrimensor puede confiar á su ayudante que obra bajo la responsabilidad de su firma. La elaboración de una mensura se forma con sumandos de un orden superior; con el estudio de títulos; con las instrucciones que deben recibirse del Departamento, la inteligencia con los linderos, las instrucciones al operador para la dirección de sus líneas, puntos de arranque, orientación y tantos otros datos y antecedentes de detalle. Si por el hecho material de la medición se puede decir que el agrimensor que hace esta operación es el que hace la mensura en todos sus detalles y que tendría derecho á cobrar esos honorarios, sucedería que un dependiente de un estudio de abogado que hace un escrito bajo la dirección del letrado, y que éste lo firma, tendría derecho ese dependiente á cobrar el honorario de su principal, lo que sería un absurdo. Del propio modo el ayudante que hace la medición material del terreno, tendrá derecho á cobrar ese trabajo, pero no como agrimensor sino como ayudante, mientras los honorarios de la mensura corresponderán al agrimensor.

4—Arts. 1623, 1630, 1631 y 1647 del Cód. Civ.



tario los daños ocasionados por mala construcción.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 415, Ser. 4ª.

5. **Contrato de locación**—De servicios, es reputado civil cuando los servicios son prestados á un comerciante en otro carácter que el de dependiente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 65, Ser. 4ª.

Contrato de locación—Véase: *Sentencia*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núms. 28, 90, 93, 95 y 96—*Honorarios*, números 25 y 27—*Locación*, núms. 8 y 9—*Interdicto de recobrar*, núm. 10.

Contrato de matrimonio—Véase: *Separación de bienes*, núms. 2 y 3.

Contrato de mayor cuantía—Véase: *Prueba escrita*, número 3.

1. **Contrato de mutuo**—Al que alega la simulación de la

5—Es regla general que la jurisdicción se determina atendiendo á la naturaleza de la causa que motiva la acción, sirviendo la calidad de las personas tan solo para establecer una presunción *juris tantum*, que cede á la prueba en caso de duda: de aquí resulta que contratando un comerciante con quien no tiene esa calidad y siendo el acto ejecutado de de naturaleza civil, el comerciante puede ser traído, por razón de ese acto á la jurisdicción civil. En el caso presente se trataba de obligaciones emergentes de un contrato de locación de servicios prestados de otra manera que aquellos de los dependientes ó empleados del comerciante á quien benefician, siendo entonces un contrato puramente civil y sujeto á esta jurisdicción.

1—Todo aquel que aduce un hecho nuevo en juicio, está obligado á comprobarlo. La ley 8, tit. 3, Part. 3ª, dice: Conocen á las vegadas los demandados, lo que les demandan en juzio. Pero ponen luego defensiones antesi. E por ende dezimos que en tales razones como estas, ó en otras semejantes dellas, que deve el Judgador dar plazo al demandado, a que prueue la defension que ouiere puesto ante sí. El reo en la escepcion se hace actor, y es sabido que á este último incumbe la prueba—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª—Además la escritura pública tiene á su favor la presunción de verdad que le acuerda la ley—arts. 993 y 995 del Cód. Civ.—Al que trata de destruir esa presunción legal le incumbe la prueba.



venta con pacto de retroventa, corresponde la prueba de que existía efectivamente un contrato de mutuo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 299, Ser. 3^a.

1. **Contrato de sociedad**—Aun cuando llegue á crear una comunidad de intereses, no basta para calificarlo como constitución de sociedad, y en consecuencia es improcedente la acción de resolución.—Jur. Civ., tom. 5, página 343, Ser. 3^a.

2. **Contrato de sociedad**—La demanda por parte de comisión de venta de un inmueble, entre corredores, y fundada en un contrato de sociedad, debe tramitarse ante la jurisdicción comercial.—Jur. Civ., tom. 5, página 245, Ser. 3^a.

3. **Contrato de sociedad**—Reconocida la existencia de participación en las utilidades de un negocio determinado, el que lo llevó á cabo debe rendir cuenta de la negociación, aun cuando no exista contrato social.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 240, Ser. 3^a.

Contrato de sociedad—Véase: *Daños y perjuicios*, número 26.

1—Al celebrarse el contrato, las partes no tuvieron por fin inmediato obtener una utilidad apreciable en dinero para dividirse entre ellos, como lo requiere el art. 1648 del Cód. Civ. El objeto propuesto fué el de constituir un condominio sobre un inmueble en la proporción de un tanto por ciento de cada parte. Este contrato no es un verdadero contrato de sociedad, y no basta para que produzca los efectos peculiares que la ley atribuye á los de su naturaleza, como lo enseña el codificador en la nota al art. 1748. No existiendo sociedad, la acción instaurada sobre disolución fundada en el art. 1773 del Cód. Civ. es improcedente.

2—Véase verb. *Comisión*, núm. 2.

3—Arts. 2701 y 1909 del Cód. Civ.; Castro, *Práctica Forense*, párrafo 488; Leyes 26, 27 y 31, tít. 12, Part. 5^a; Ley 18, tít. 5, y Ley 5, tít. 14, Lib. 9, R. C.



Contrato directo—Véase: *Desalojo*, núm. 4.

1^a. Contrato escrito—Cualquiera que sea el principio de prueba por escrito, la testimonial es improcedente para justificar la existencia de una sociedad cuyo capital excede del límite para el cual la ley exige ineludiblemente el contrato por escrito.—Jur. Civ., tom. 10, página 172, Ser. 4^a.

Contrato escrito—Véase: *Ratificación*, núm. 2.

Contrato nupcial—Véase: *Bienes dotales*, núm. 1.

Contrato perfecto—Véase: *Boleto de compraventa*, número 1.

1^b. Contrato por escritura pública—El consentimiento de las partes, exigido en un contrato por escritura pública, debe revestir la primera forma: el tácito por el conocimiento personal que tuvo de la infracción, no importa la renuncia de su derecho á exigir la rescisión estipulada como pena.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 4^a.

2. Contrato por escritura pública—La prueba de modifi-

1^a—El sumario está en abierta oposición con el precepto del artículo 1663 del Cód. Civ., y está asimismo en contra de lo resuelto por la Cámara. Como principio general es insubsistente el sumario, sin embargo de que para el caso que nos ocupa podría aceptarse limitándolo para cuando se trata de obtener que se cumpla un contrato celebrado pero que no ha recibido ejecución, no siendo aceptable para cuando se trata de contratos realizados en los que ha habido operaciones, entregas y ganancias, etc.—Arts. 976, 1184, inc. 3, 1185, 1188, 1193 y 1665 del Cód. Civ.

1^b—Por una de las cláusulas de un contrato de arrendamiento se estipuló que el locatario no podía hacer construcción alguna sin previo consentimiento escrito del locador. Las construcciones se hicieron á vista y paciencia del locador, y una vez hechas pidió la rescisión del contrato. El locatario alegó que el consentimiento tácito suplía al consentimiento expreso. Es claro que aquel no puede suplir á éste, porque la estipulación es clara y terminante, y es ley para las partes—art. 1197, Cód. Civ.

2—Art. 1184, inc. 10 del Cód. Civ.



caciones á un contrato así constituido, debe revestir igual forma.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 353, Ser. 4^a.

1. **Contrato privado**—Puede exigirse la conversión á instrumento público del boleto privado de compraventa, sin manifestar la voluntad de cumplirlo, lo que solo es obligatorio al exigirse el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 57, Ser. 3^a.

2. **Contrato privado**—Cualesquiera que sean las condiciones que hayan estipulado las partes en un contrato privado, solo pueden hacerse efectivas después de reducido á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 72, Ser. 3^a.

3. **Contrato privado**—La fijación de un término para el cumplimiento de obligaciones contraídas en un contrato privado, no importa una condición resolutoria cuyo vencimiento deje sin efecto el contrato, sino un plazo suspensivo dentro del cual no puede exigirse judicialmente su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 208, Ser. 4^a.

4. **Contrato privado**—Cuya existencia reconoce el de-

1—Véase *Boleto de compraventa*, núm. 8.

2—De acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara.—Véase verb. *Boleto de compraventa*, núms. 10, 14, 16, 17, 32, y especialmente el verb. *Escritura pública*, núm. 7.

3—Véase *Condición resolutoria*, núm. 1.

4—De acuerdo con otro caso resuelto. Véase *Cesión de derechos*, núm. 3. En tésis general, el que demanda debe acompañar á la acción instaurada todos los documentos que la justifiquen; pero esta disposición como casi todas trae aparejada su escepción, la que en el caso presente consiste en que esa obligación general de acompañar con la demanda todos los recaudos, no puede exigirse cuando ella se ha hecho innecesaria por la prueba rendida en el curso del juicio, como por confesión por ejemplo, porque uno de los principios más elementales del procedimiento es que la confesión de parte releva de prueba. Si la parte confiesa la existencia de un documento, no se puede argüir con la falta de presentación del documento para que la acción no prospere. Argüir así im-

mandado, debe tenerse por válido aun cuando no se encuentre agregado á los autos.—Jur. Civ., tom. 2, página 46, Ser. 4^a.

Contrato privado—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 34—*Condición resolutoria*, núm. 1.

1^a. **Contrato rescindido**—El cesionario de un contrato que debía recibir en pago de la cesión un tanto por ciento sobre el total de las obras, tiene derecho á la parte proporcional de la suma percibida por su rescisión.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 400, Ser. 3^a.

2. **Contrato rescindido**—La suma acordada por la rescisión de un contrato, debe conceptuarse la utilidad que su cumplimiento debía reportar, en tanto no se justifique plenamente que debe imputarse á los daños y perjuicios resultantes de su inejecución.—Jur. Civ., tom. 5, página 400, Ser. 3^a.

Contrato unilateral—Véase: *Escritura pública*, núm. 22.

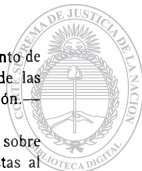
1^b. **Contrato verbal**—El reconocimiento de la existencia

portaría violentar los principios más reconocidos de justicia, rendir un culto al formulismo de la ley contra las nociones claras de la misma, que dominan á ese formulismo, como que las leyes de forma no están establecidas sino como medio de asegurar á los litigantes en sus intereses, lo que es el fin de todo juicio: esclarecer la verdad y hacer justicia. Esto importaría obligar al Juez á fallar por medio de verdaderas sutilezas quebrantando una de las leyes de forma, la más fundamental que enseña, que el Juez busque esa verdad como único objeto del juicio sin ceñirse á las sutilezas del derecho. «Seyendo hallada y probada la verdad del fecho... los jueces determinen y juzguen los pleitos, según la verdad que hallaren probada», dice la Ley 10, tit. 17, lib. 4^o, R. C. Los jueces, por consiguiente, deben prescindir de si el documento ha sido agregado ó no, con tal de que ese documento esté reemplazado con otros medios de prueba que obren en autos, y si todos estos elementos de prueba reunidos son suficientes para formar la conciencia judicial respecto de la existencia de la obligación.

1^a—Véase verb. *Cesionario*, núm. 1.

1^b—Véase verb. *Cláusulas*, núm. 1.





de un contrato verbal, no importa el reconocimiento de las bases, y corresponde al demandante la prueba de las cláusulas cuya existencia afirma al deducir su acción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 322, Ser. 3ª.

2. **Contrato verbal**—La confesión del demandado sobre la existencia del contrato verbal, exime de las costas al demandante aun cuando se rechace la acción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 322, Ser. 3ª.

3. **Contrato verbal**—Reconocida la existencia del contrato verbal de compraventa bajo condición resolutoria, corresponde al que afirma la existencia de la condición, justificar que el hecho condicional tuvo lugar en tiempo oportuno para producir la rescisión del contrato.—Jur. Civ., tom. 3, página 334, Ser. 3ª.

4. **Contrato verbal**—La prueba testimonial es improcedente para justificar la existencia de una promesa de contrato verbal por mayor valor del que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 387, Ser. 3ª.

5. **Contrato verbal**—Negada su existencia, no procede para justificarla la prueba testimonial, si no existe principio de prueba por escrito.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 415, Ser. 3ª.

6. **Contrato verbal**—Justificada su existencia por confesión de partes, los Tribunales deben juzgar si por sus cláusulas es susceptible de cumplimiento sin que puedan obligarlas á aceptar alteración alguna.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 92, Ser. 4ª.

2—Porque eso comprueba la falta de temeridad y malicia por parte del litigante.

3—Véase *Confesión*, núm. 1.

4—Art. 1193 del Cód. Civ., y 180 del Cód. de Proc. Salvo los casos de excepción establecidos en los arts. 1191 y 1192 del Cód. Civil.

5—Arts. 1193 del Cód. Civ., y 180 del de Proc.



7. **Contrato verbal**—Justificada su existencia, las partes están obligadas á hacer escritura pública del convenio, pe-

7—El contrato versaba sobre el condominio de un inmueble. Reconocida su existencia por medio de un contrato verbal, no procede la escrituración del condominio, sino la promesa de otorgarlo, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la mayoría de la Cámara. Véase verb. *Escritura pública*, núm. 7. La minoría dijo, que el Cód. Civ. consagra el principio de que los contratos que tengan por objeto la transmisión de bienes raíces en propiedad ó en usufructo, así como la constitución de cualquier gravamen sobre ellos, deben ser hechos en escritura pública bajo pena de nulidad, con escepción de los que se celebren en pública subasta. Pero declara en seguida, que cuando fuesen hechos en instrumento particular firmado por las partes, con obligación de llenarse aquella formalidad, ó verbalmente, si bien no quedan concluidos como tales, deberán sin embargo considerarse como contratos en que las partes se han obligado á hacer escritura pública, pudiendo en consecuencia demandarse reciprocamente para el otorgamiento de esa escritura, bajo la pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses. Tales son las prescripciones contenidas en los arts. 1184, inc. 1.º, á 1188. Entendemos que la obligación de hacer escritura pública de que habla la ley, tiene su aplicación al mismo contrato de compraventa, es decir, es relativa á la formalidad que debe tener para su validez, según lo prescribe en el art. 1184, mas no con referencia al boleto, por cuanto aparte de que en este caso resultarían dos escrituras públicas, además también de las dificultades que esto podría ofrecer en la mayor parte de los casos y de los gravámenes que causarían á los interesados, importaría hacer depender la validez ó existencia legal del contrato, de una formalidad previa que la ley no consagra en términos espresos. La compraventa es un contrato consensual, considerado así desde el derecho romano, y si bien cuando tiene por objeto la transmisión de bienes inmuebles ó cualquier gravamen sobre ellos, debe concurrir aquella formalidad como esencial para su validez, no puede por esto entenderse que la legislación vigente le haya cambiado su naturaleza. Por el contrario, debe considerarse entre aquellos que se perfeccionan por el solo consentimiento, pero no concluidos mientras no se haya otorgado la escritura pública respectiva que podrían exigirse mutuamente las partes. Lo prueba así también, la prescripción penal de las pérdidas é intereses que el mismo Código impone al que deje de otorgar la escritura pública de ese contrato aunque no se haya dado ninguna señal para asegurar su cumplimiento, al contrario de lo que sucedía



ro no de lo que constituya el objeto del contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 416, Ser. 4^a.

por el Derecho Romano, según una prescripción de la Instituta—Libro 3^o, tit. 23.—No sucede lo mismo con respecto á nuestra actual legislación civil, distinta también en esta parte de la de las partidas y de la del derecho civil francés. El art. 1185 dispone: que los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública, no quedan concluidos como tales mientras la escritura pública no se haya firmado, pero quedarán concluidos como contratos, dice, en que las partes se han obligado á hacer escritura pública. Más adelante, en el art. 1187 dispone también, que lo dispuesto en el artículo anteriormente citado, será juzgado como una obligación de hacer y que la parte que lo resistiese, podrá ser demandada por la otra para que otorgue la escritura pública bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses. ¿A qué contrato ú obligación se refiere la ley? Debe entenderse que á la de la escritura del mismo contrato de compraventa exigida en nuestro caso por el art. 1184, pues, es esa escritura el objeto de la obligación de vender ó comprar de que pueda arrepentirse ó no poder cumplir una ú otra de las partes, esplicándose así el que venga á resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses, al contrario de lo que sucedía con el derecho romano en el que el comprador como el vendedor podían arrepentirse sin incurrir en pena alguna. Resulta, pues, que si bien el legislador ha prescripto la escritura como una solemnidad sustancial de este género de contratos, cuando las partes lo celebran bajo una forma privada ó verbalmente, como en el caso del art. 1188, lo único que puede exigirse es el otorgamiento de la escritura correspondiente al mismo contrato, bajo la pena de daños y perjuicios ó de las responsabilidades establecidas en el art. 1202 en el caso que se hubiera dado una señal para asegurar el cumplimiento del contrato, y entendemos que estando á los términos de la demanda y su contestación, lo que única mente corresponde resolver es la escrituración del contrato de compraventa en condominio, del inmueble cuestionado en la parte que corresponde al actor. No se encuentra por lo tanto la razón legal que justifique la modificación de la sentencia en el concepto de que la escritura, que se condena otorgar al demandado, no es la del condominio de que se ha tratado únicamente en el juicio como lo sostiene la mayoría de la Cámara. No debe olvidarse tampoco que existe jurisprudencia contraria, pues, en algunos casos resueltos antes de ahora se ha mandado otorgar la escritura pública del contrato celebrado en forma privada, sin expresarse que debía hacerse aquella salvedad.



8. **Contrato verbal**—La prueba testimonial es impropia para justificar un contrato verbal de compraventa por mayor valor del que la ley fija, si no existe principio de prueba escrita.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 388, Ser. 4^a.

Contrato verbal—Véase: *Confesión*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 5—*Daños y perjuicios*, núm. 67.

1. **Contratos**—Los que debiendo ser hechos en escritura pública fuesen hechos verbalmente, quedan concluidos á efecto de que las partes puedan demandar su escrituración, bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 334, Ser. 3^a.

2. **Contratos**—Obligan no solo á lo formalmente enunciado sino también á sus consecuencias.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 293, Ser. 4^a.

3. **Contratos**—Siendo principio espreso en derecho que los contratos se forman para cumplirlos, no procede la demanda de resolución sino la de cumplimiento de la convención salvo la existencia de un pacto comisorio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 231, Ser. 4^a.

4. **Contratos**—La Municipalidad de la Capital, no puede ser obligada al cumplimiento de contratos violatorios de su Ley Orgánica.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 372, Ser. 4^a.

Contratos—Véase: *Pacto comisorio*, núm. 1.

Contribución directa—Véase: *Títulos de propiedad*, número 20—*Bienes de menores*, núm. 6.

Convención—Véase: *Contrato bilateral*, núm. 4—*Con-*

8—Véase los núms. 4 y 5.

1—Arts. 1187 y 1188 del Cód. Civ.

2—Art. 1198, Cód. Civ.

3—Arts. 1201 y 1204 del Cód. Civ.

4—Cuando son contrarias á la ley, carecen de todo valor legal.



trato privado, núm. 2 --*Simulación*, núm. 7 --*Boleto de compraventa*, núm. 10 y 24.

Convención expresa—Véase: *Intereses*, núm. 6 --*Obligación de hacer*, núm. 5 --*Construcciones*, núm. 2.

1ª. **Convenio**—Terminado por convenio entre ejecutante y ejecutado el litigio que motivó el embargo, este debe ser levantado declarándose procedente la tercería de dominio á que hubiese dado lugar. --Jur. Civ., tom. 9, página 198, Ser. 4ª.

Convenio—Véase: *Contrato verbal*, núm. 7 --*Nulidad de un desistimiento*, núm. 1 --*Boleto de compraventa*, número 16 --*Daños y perjuicios*, núm. 90 --*Documento*, número 3.

Convenio expreso—Véase: *Mora*, núm. 1 --*Sociedad*, número 2 --*Locación*, núm. 5.

1ª. **Convenio privado**—Reconocida su existencia, no pue-

1ª—En un juicio sobre alimentos se obtuvo el embargo de una propiedad; deducida tercería por el propietario, el embargante dijo de nulidad y simulación de la escritura otorgada por el esposo confesando en el curso del juicio que había arreglado con el marido la cuestión que sostenía, y que la cosa materia de la tercería no le había pertenecido por ningún título, habiendo la esposa dejado de exigir la pensión alimenticia. Si el litigio sobre alimentos había desaparecido, y si la base de la tercería, y consiguientemente de la acción de nulidad ó simulación había desaparecido, es evidente que no hay interés alguno legítimo en obtener la revocación de la venta atacada de simulación. Aun en el supuesto de que esa nulidad hubiese existido, el Juzgado no podría revocar ese acto en interés de uno de los litigantes, puesto que él ni tiene ya interés en la revocación, ni siquiera es accesorio del otro en virtud del convenio celebrado. No pudiendo declararse la nulidad ó simulación, tampoco puede subsistir el embargo que tiene por base el derecho y el interés de uno de los litigantes cuando ese interés ha desaparecido.

1ª—Una vez creada una convención no está en manos de uno de los interesados establecer un pacto comisorio para dejar sin efecto por sí y ante sí lo convenido.



de darse por disuelta la convención mientras no se pruebe también la existencia de un pacto comisorio establecido de común consentimiento de partes.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 416, Ser. 4^a.

Conversión—Véase: *Competencia*, núm. 4—*Contrato de compraventa*, núms. 24 y 25—*Moneda de oro*, núm. 1.

1^a. **Cónyuge superstite**—Puede comprar en remate judicial bienes de la sucesión en tanto no exista partición, ni hayan sido adjudicados a los mismos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 257, Ser. 4^a.

1^b. **Cónyuges**—Justificada la separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse, la esposa carece de derecho á los bienes quedados por fallecimiento del marido.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 366, Ser. 3^a.

Cónyuges—Véase: *Administrador*, núm. 4—*Divorcio*, núm. 12.

1^c. **Copia** — La falta de firma de la copia, no basta para

1^a—Véase *Bienes de la sucesión*, núm. 1.

1^b—Véase, *Bienes del esposo*, núm. 1.

1^c—Esta resolución se funda en la jurisprudencia sentada por la Cámara, cuando dice que la falta de copias de un escrito, no puede producir el efecto de tenerlo por no presentado siempre que el secretario lo recibe sin observación y le pone cargo. Si la falta de esas copias, no trae perjuicio al que presenta el escrito, menos puede traerle la falta de firma de las mismas. Esta jurisprudencia no interpreta con fidelidad la ley de Proc. en su art. 21, el que establece que si las copias no se exhiben al secretario, no recibirá el escrito produciendo el efecto de no presentado. Pero se alega que si el secretario *lo recibe* no es ya el caso del art. 21, pues que este legisla para el caso de que *no lo reciba*. La ley dice que el secretario *no recibirá* el escrito: si en contra de esta disposición terminante de la ley el secretario recibe el escrito poniéndole cargo, ese acto irregular, esa falta de cumplimiento á una prescripción categórica de la ley ¿puede mejorar el derecho del litigante? ¿No es esto autorizar la violación de la ley por el mismo y único funcionario encargado de cumplirla? ¿No es esto entronizar el favoritismo en el procedimiento mejorando la situación legal de los amigos del secreta-



dar por no presentado el escrito, si el secretario lo recibe sin observación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 136, Ser. 4^a.

Copias—Véase: *Rebeldía*, núm. 1—*Comprador*, número 13—*Escrito*, núms. 3, 4 y 5.

1^a. **Correcciones disciplinarias**—El Juzgado debe imponerlas aun cuando la falta sea directa contra el litigante.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 269, Ser. 4^a.

Correcciones—Véase: *Abogado*, núm. 4.

1^b. **Corredor**—Estipulada como comisión de éste, la cantidad excedente del precio fijado, las fluctuaciones que sufra la especie en que se verificó la venta, son á cargo del corredor y no del vendedor.—Jur. Civ., tom. 7, página 201, Ser. 3^a.

2. **Corredor**—El corredor en materia civil, puede con-

rio? Parece imposible que el Tribunal Superior de la Cap. de la República autorice y sancione una jurisprudencia como ésta que va contra la letra clara de la ley. Estas son las corruptelas que desprestigian nuestra administración de justicia, corruptelas introducidas, sancionadas y amparadas por la Cámara. Es necesario volver sobre esta jurisprudencia malsana y violatoria de la ley. El escrito presentado sin los requisitos exigidos por el art. 21, producirá el efecto de no presentado, háyase ó no recibido por el secretario. Así lo tiene resuelto la Cámara en lo Comercial.

1^a—El art. 52 del Cód. de Proc. establece que los jueces tienen el deber de mantener el decoro y buen orden en los juicios; y el art. 75 de la Ley Org. de los Trib. de la Cap. los faculta para imponer correcciones disciplinarias cuando se cometen faltas contra su autoridad y decoro en las audiencias y en los escritos. Estos artículos no espresan con claridad que esa facultad la puedan usar para el caso en que los conceptos vertidos sean contra el litigante, pero de su espíritu resulta que también en este caso tienen esa facultad á fin de mantener el decoro en el debate y el orden en la discusión. No se necesita rudeza en el lenguaje para dar mayor eficacia al argumento jurídico.

1^b—Véase *Comisión*, núm. 3.

2.—Se trata de la comisión devengada en la venta de un terreno. Siendo esta operación un negocio civil, no está sujeto á las disposicio-



tratar con las partes una participación en las utilidades de la operación que le ha sido encomendada.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 187, Ser. 4^a.

Corredor—Véase: *Comisión*, núm. 1.

1^a. Corredores—Aun cuando la compraventa no se lleve á término, los corredores tienen derecho al cobro de la comisión siempre que no les sea imputable la rescisión—Jur. Civ., tom. 3, pág. 17, Ser. 3^a.

1^b. Cosa ajena—El comprador de cosa ajena no tiene derecho á exigir daños e intereses devengados por la falta de cumplimiento del contrato, si tenía conocimiento del hecho al firmar el boleto de compraventa.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 386, Ser. 3^a.

Cosa cierta—Véase: *Obligación de dar*, núm. 1.

Cosa común—Véase: *División en especie*, núm. 1.

nes del Cód. de Com. sino á las del Cód. Civ. Por otra parte, aun dado el caso de que fuera comercial, la persona que ofrece la retribución en esa forma, no tendría derecho á decir de nulidad de ella, porque el art. 1047 del Cód. Civ. se lo prohíbe cuando dice que no pueden alegar la nulidad del acto los que lo han ejecutado sabiendo ó debiendo saber el vicio que lo invalidaba.

1^a—Véase verb. *Compraventa*, núm. 1.

1^b—De los términos del boleto resultaba que tanto el comprador como el vendedor sabían que la cosa era ajena. El sumario está fundado en el art. 1327 del Cód. Civ., que consagra el mismo principio sentado por la ley 19, tit. 5^o, Part. 5^a; ley 6^a, tit. 10, lib. 3^o, F. R.; art. 1599, Cód. francés. Troplong en su comentario á este artículo, después de establecer que la venta es nula en todos los casos, sea que tuviese ó no conocimiento que el vendedor no era el verdadero propietario, refiriéndose al comprador dice, que si ha sabido que la cosa no era del vendedor, ó si el vicio ha sido enunciado, no tiene ningún derecho para suscitar cuestiones porque él ha sido común y ha sido de mala fe, lo mismo que el vendedor, y agrega estas palabras sobre la ley 27 del Digesto: *Mala fidei emptor est, dit Cujas, qui scit rem quam emit non esse vendentis*—tom. 1^o; de la venta núm. 231, pág. 315. Edición de París de 1837.



1. Cosa juzgada—La sentencia que obliga al esposo al cumplimiento del contrato, declarado nulo, no hace cosa juzgada para la esposa que no fué parte en el juicio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 239, Ser. 3ª.

2. Cosa juzgada—Deducida declinatoria, no puede ser iniciada la vía inhibitoria: la resolución recaída en la primera hace cosa juzgada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 232, Ser. 3ª.

3. Cosa juzgada—La falta de condenación en costas en la acusación criminal y de pronunciamiento sobre los daños y perjuicios solicitados por el acusado, no hace cosa juzgada en la acción civil, fundada en la sentencia absolutoria.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 269, Ser. 3ª.

4. Cosa juzgada—Aun cuando la información supleto-

1—No concurren los extremos exigidos por la ley para que haya cosa juzgada: identidad de causa, de cosa, de personas y de condiciones.

2—El art. 412 del Cód. de Proc. consagra el principio sentado en el sumario. Esta disposición legal tiene por objeto impedir la concurrencia de dos sentencias contradictorias sobre el mismo punto. De donde se deduce que la prohibición de usar sucesivamente la vía inhibitoria y la declinatoria no es absoluta, pues mientras no puedan concurrir las dos resoluciones sobre el mismo punto, ambas vías pueden usarse. Así, si en el juicio ejecutivo, se opone la excepción de incompetencia por la vía declinatoria y esa excepción es desechada por estar opuesta fuera de término, ella puede usarse por la vía inhibitoria porque no pueden concurrir las dos sentencias contradictorias.

3—Véase *Acción civil*, núm. 1.

4—Habiéndose presentado un interesado ofreciendo información supletoria para acreditar el dominio de un inmueble, acompañó el interrogatorio para los testigos, confiriéndose vista al Agente Fiscal y traslado á la Municipalidad: evacuándolo ésta se opuso á la producción del juicio informativo mientras no se ampliase los interrogatorios, con datos sobre la extensión y linderos del terreno, requisitos que consideraba indispensables para que los testigos pudieran darse cuenta cabal de los hechos sobre que tenían que declarar. Ampliados los interrogatorios con los antecedentes exigidos por el representante de la Municipalidad, comparecieron á declarar los testigos en dos audiencias señaladas al



ria se califique de juicio voluntario, es contencioso para los que en ella intervengan con intereses opuestos, y por lo tanto la sentencia aprobatoria de la información hace

efecto, sin que en nada fueran observadas las declaraciones prestadas, pues el procurador municipal no concurrió a ninguna de aquellas audiencias. Después de declarar siete de los testigos ofrecidos, solicitó la parte la aprobación de la información y conferido traslado de esta petición al Procurador Municipal, solicitó una prórroga para expedirse en ese traslado, pues necesitaba para ello algunos antecedentes que había pedido a la Intendencia. Concediósele la prórroga y vendida esta, en su rebeldía y previa conformidad del Agente Fiscal, se dictó resolución aprobando la información producida, a efecto de comprobar la posesión de cuarenta años ejercida en el terreno deslindado en los interrogatorios a cuyo tenor se habían prestado uniformemente las declaraciones. Notificada esta resolución al Procurador Municipal, interpuso el recurso de apelación para ante la Ex^{ma}. Cámara que, previo acuerdo, dictó sentencia confirmando en todas sus partes por encontrar que los testigos que habían declarado, todos ellos de edad avanzada, habían podido conocer por ciencia propia los hechos sobre los cuales fueron interrogados, que habían dado razón satisfactoria de su dicho, que ninguno de ellos fué tachado, abundando todos en datos prolijos sobre las personas que poseyeron numerosos años la posesión, extensión del terreno, linderos, etc., etc., y finalmente porque la Municipalidad no había contestado el traslado que de la prueba se la confirió, ni había hecho repregunta alguna durante su elaboración y lo que es más, porque no demostró los agravios que la sentencia le infería. Estos son los antecedentes que el expediente informativo suministra, bien importantes por cierto y demostrativos por sí solos de la falta de razón que a la Municipalidad asistía para pretender, como lo pretendía, que el juicio informativo no puede perjudicarla, por cuanto la prueba que de él resulta no se ha rendido en un juicio contencioso, sino en uno meramente voluntario, y porque esa información se aprobó solamente en cuanto ha lugar por derecho. Basta reparar en los antecedentes que arroja ese expediente, para convencerse que las sentencias en él dictadas tienen para la Municipalidad el sello de la cosa juzgada, en cuanto ellas declaran contra la formal oposición que entonces dedujo, circunstancia que aleja toda idea de juicio de voluntaria jurisdicción, comprobando la posesión en favor de los demandados del terreno que se pretendía reivindicar. En ese expediente, desde su iniciación, intervino el representante de aquella corporación, antes de recibirse



cosa juzgada para ellos.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 234, Serie 4^a.

5. Cosa juzgada—La resolución que rechaza la esepción de incompetencia opuesta como dilatoria, hace cosa juzgada é inhabilita al demandante para oponerla como perentoria.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 332, Ser. 4^a.

6. Cosa juzgada—La sentencia dictada en el juicio su-

la información pidió mayor término para expedirse y no obstante haberle sido acordado, dejó que ella se aprobase en su rebeldía; y apelada la resolución de primera instancia, la Excma. Cámara la confirmó en todas sus partes, en mérito de fundamentos tan concluyentes como los que antes hemos recordado. Por consiguiente, aun cuando haya sido dictada en cuanto ha lugar por derecho, obliga á la Municipalidad que en presencia de la activa intervención que en el juicio informativo ha tenido su representante, no puede pretender que es para ella, *res inter alios acta*, único caso en que no la obligaría. Es en ese juicio que debió presentar los antecedentes que fuera de la oportunidad que previene el artículo 72 del Cód. de Proc. ha traído al presente en vez de promover una demanda reivindicatoria para que como muy bien lo observó el Inferior, los terceros adquirentes de buena fe sean víctimas de la incuria del Procurador Municipal, dado caso que su representado hubiera tenido derechos que hacer valer en la oportunidad debida.

5—El Juzgado se declaró incompetente, siendo el auto revocado por la Cámara estableciéndose la competencia del Tribunal. Es evidente pues que una vez declarada la competencia del Juzgado en virtud de resolución consentida, ésta pasó á la categoría de cosa juzgada y no podía volverse sobre el mismo punto.

6—Los juicios sumarios de interdicto no causan estado ni en cuanto al derecho de poseer ni en cuanto al derecho de dominio: sus decisiones tienen un alcance limitado, la protección momentánea de la posesión contra los actos de terceros cualquiera que sea el origen y los caracteres de aquélla. Es solo el hecho de la posesión lo que ampara la ley porque es solo este hecho y su turbación material lo que puede válidamente discutirse; y de este punto de mira sería contraria á los principios más fundamentales del derecho que las fórmulas estrechas de este debate y en sus procedimientos brevisimos hubieran de quedar aclarados ó definidos derechos permanentes y duraderos. No son estas las inspiraciones de la ley cuando espresamente salva al vencido en la querella sumaria sus acciones de posesión y de dominio y cuando en los



mario de interdicto, no hace cosa juzgada para el petito-

mismos términos espesos prescribe, que el ejercicio de las acciones posesorias no menoscaba el ejercicio ulterior de la acción real. El fin primordial del interdicto es garantizar al poseedor contra la violencia ó ataques de hecho de un tercero, y como este fin queda cumplido con el amparo efectivo que le presta el magistrado, la ejecutoria tiene en ese mismo amparo su limite, y solo desnaturalizándola podría suponerse que por ella se reconocen ó pudieran quedar reconocidos derechos preconstituídos á la posesión ó á la propiedad de la cosa demandada. El alcance jurídico de las resoluciones en el posesorio lo establece La Serna en los términos siguientes, notables por su exactitud y claridad: las sentencias, dice, que en estos juicios se pronuncian— aunque definitivas, tienen un carácter especial, porque si bien condenan ó absuelven de la demanda intentada,—y no puede por lo tanto reproducirse la cuestión bajo el mismo aspecto, no impiden que se vuelva á tratar del mismo negocio en más amplio juicio, con más solemnes formas, con declaraciones que lleven, no el carácter interino y provisional del interdicto, sino estabilidad, permanencia, perpetuidad en los derechos que en el juicio se ventilen. Vienen por lo tanto á ser los interdictos unos juicios sumarísimos y preliminares de otros, en que con más prendas de acierto se aleguen, acciones posesorias; pero si usase de las acciones posesorias, podrá usar después la acción real. Esta reserva final no tiene limitación sustancial en cuanto al fondo del derecho, previniéndose únicamente que el petitorio no podrá tener lugar antes que la instancia posesoria haya terminado y después de haber satisfecho plenamente el demandado las condenaciones pronunciadas contra él—arts. 2484 y 2486.—Molitor, en su comentario al art. 26 del Código de Proc. Francés, que contiene disposiciones análogas á la citada del art. 2482, observa que ha sido justamente criticada en razón de que la pérdida de un derecho no debe presumirse, aunque pudiera, empero, contestarse en defensa del precepto, que intentar una acción petitoria, una reivindicación, presentarse como demandante, tomar sobre sí la carga de la prueba, es reconocer tácitamente que el adversario constituido de esta manera en rco, es el verdadero poseedor de la cosa. —Véase á Boitard sobre el art. 26 citado.—Explicando Vinnio—Cuestiones selectas, tom. 2.º—los motivos legales que obstan á la acumulación del juicio de interdicto con el juicio petitorio, dice, que del mismo modo que la posesión no tiene nada de común con la propiedad y que estas cosas son del todo diversas, siendo la posesión de hecho y el dominio de derecho, así también producen acciones no solo distintas sino



rio ni aun respecto de la posesión que en el primero se haya discutido.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 249, Ser. 4^a.

7. Cosa juzgada.—El rechazo de la escepción de prescripción opuesta como artículo de previo pronunciamiento: y

insociables: el dominio, la reivindicación y la posesión son una acción personal, ó el interdicto y por consiguiente debe también tratarse de ellas en juicios distintos. En sus estudios concordantes de nuestro Código, Llerena, después de recorrer la doctrina de los espositores, se pregunta, qué efecto produce la sentencia en el juicio posesorio respecto al petitorio, opinando que en general ninguna, pues como decía una Corte francesa, las decisiones en el juicio posesorio no forman ni título ni cosa juzgada. No tratándose en aquel, agrega, de la propiedad sino de la posesión, la resolución sobre el primer punto en dicho juicio no puede servir de fundamento para rechazar después la acción de reivindicación, alegando cosa juzgada, aunque en dicha sentencia se reconoce algún derecho al demandante ó demandado. La misma doctrina ha sido declarada por la Corte Suprema Nacional en la causa XCV que se registra en la segunda serie de sus fallos. Suponiendo la acción reivindicatoria, que ha habido una violación del derecho de dominio y el consiguiente menoscabo del derecho de poseer la cosa, y siendo estas cuestiones estrañas al proceso sumario provocado por violencias materiales, no podría en manera alguna prejuzgarse sobre ellas en este último inicio sin manifiesta transgresión de los principios que se han enumerado y muy principalmente el que prohíbe acumular ó confundir el petitorio con el posesorio.

7—En el presente caso se resolvió la escepción de prescripción treintenaria opuesta en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento. Resuelta la articulación, se opuso después la escepción contra el derecho á ejecutar la sentencia recaída, por haberse dejado trascurrir el tiempo requerido por ley sin pedir la ejecución de la sentencia recaída en el juicio. Son dos escepciones bien distintas: la una es la de treinta años y la otra es la *actio judicati*, que surgió de la sentencia anteriormente dictada. Es evidente que si en la acción primitiva se opuso la escepción de prescripción treintenaria, al pedirse la ejecución de la sentencia puede oponerse la escepción de prescripción también de treinta años, puesto que la ley de Partida decía que se podía demandar aquella cosa que la sentencia mandaba cumplir, *fasta treynta años*, y que nuestro Código acuerda hasta veinte en virtud de la acción personal que nace de toda sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada.



discutida como cuestión de puro derecho, no hace cosa juzgada ni inhibe á la parte de oponerla en cualquier estado del juicio después de contestada la demanda, siempre que la prueba de su procedencia resulte justificada en autos.—Jur. Civ., tom. 8. pág. 203, Ser. 4^a.

8. Cosa juzgada.—Importando la cosa juzgada una novación del derecho que motivó la sentencia, la demanda sobre cumplimiento es una acción personal prescriptible en el término de treinta años.—Jur. Civ., tom. 8, página 203, Ser. 4^a.

8—El caso fué juzgado con arreglo á las antiguas leyes. La 63 de Toro, que es la Ley 6^a, tit. 15, lib. 4^o de Rec., señala el término de veinte años, como puede verse del comentario hecho por Llamas, tomo 2^o, pág. 387. La Ley 19, tit. 22, Part. 3^a, se espresa en su parte final diciendo: «E aun dezimos que del juyzio que diesses *nascere demanda* a aquel por quien lo dieron de manera que pueda demandar aquella cosa fasta treynta años, a aquellos contra quienes fuesse dado el juyzio». En cuanto á que una sentencia importa una novación de los derechos en litigio, es doctrina sustentada por todos los tratadistas, y así puede consultarse á Alland, *Chose jugée*; Troplong, *Droit Romain*, tom. 6^o; Duranton, tom. 13; Dalloz, *Chose jugée*. El ejercicio del *actio judicati* que sustituye á la acción primitiva estinguida por el pronunciamiento, es un derecho que nada tiene de común con aquel que motivó la resolución ó sentencia. Toda sentencia condenatoria, dicen Aubry y Rau, engendra una acción especial que tiene por objeto la ejecución de la condenación—tom. 8^o, § 769.—Esta acción solo se prescribe á los treinta años á contar desde la fecha de la sentencia, aun en el caso en que se trate de condenaciones pronunciadas en virtud de un crédito sometido á una prescripción más corta. Pero la prescripción treintenaria, una vez cumplida, estingue el pronunciamiento en todas sus partes, sin que haya lugar á distinguir entre las disposiciones susceptibles de ejecución y aquellas que no lo exigen. La naturaleza de la condenación judicial y de la acción que surge de ella, es siempre la misma, cualesquiera que sean los caracteres y la causa de la obligación en virtud de la cual la condenación ha sido pronunciada. *Non originem judicii spectandam, sed ipsum judicati velut obligationem*. El art. 4019 del Cód. Civ establece que todas las acciones son prescriptibles con las escepciones allí establecidas.



9. Cosa juzgada — El sobreseimiento provisional, no hace cosa juzgada y en consecuencia no basta para fundar una acción por daños y perjuicios por haber sido calumniosa la querella.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 294. Ser. 4ª.

Cosa juzgada.—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 30 y 31—*Escepción de cosa juzgada*, núm. 1—*Contrato de arrendamiento*, núm. 14—*Escepción de nulidad*, núm. 1

9.—El art. 1003 del Cód. Civ. establece, que después de la absolución del acusado en el juicio criminal, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución. Pero la sentencia de la Cámara no fué propiamente tal, porque al dictarse no se estableció que no existía el delito imputado al querrellado, y ni siquiera ella importaba un sobreseimiento definitivo, pues en él no se hacía la declaración de que la formación de la causa no perjudicaba al buen nombre y honor del procesado como terminantemente lo dispone el art. 437 del Cód. de Proc. en lo Crim. El auto de sobreseimiento decía así: «de acuerdo con lo establecido en el artículo 435, inc. 1º del Cód. de Proc., sobreséese en la presente causa y devuélvase á sus efectos al Juzgado de su procedencia.» Esto quiere decir que ello no importa una sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada sino un simple auto de sobreseimiento. Este auto no importa declarar que el delito imputado no existió, ó que los hechos aducidos como fundamento de la querella no constituyen un delito, porque si así fuese el sobreseimiento sería definitivo como lo dispone el art. 434 del Código de Proc., y contendría la declaración que prescribe el art. 437. Cuando el sobreseimiento se funda en el inc. 1º del art. 435, quiere decir que es meramente provisional porque los medios de justificación hasta entonces acumulados en el proceso, no eran suficientes para comprobar la perpetración del delito. Pero es manifiesto que si el querrellado se cree inocente, no debe conformarse con un auto provisional que no salva su buen nombre, pues ese auto no implica su absolución, ni que pueda interpretarse como que la querella es calumniosa. Esta cuestión debe resultar de la prueba á producirse en el juicio civil, sin que pueda la parte considerarse exenta de la obligación de comprobarla, porque el sobreseimiento fué tan solo provisional, no causando instancia, y quedando el proceso siempre pendiente de ser continuado en cuanto se puedan allegar mejores pruebas.



-- *Escrituración*, núm. 5—*Sentencia*, núm. 10—*Acree-
dor privilegiado*, núm. 1—*Liquidación*, núm. 5.

Cosa locada—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 18—*Lo-
catario*, núm. 7—*Posesión*, núm. 14.

Cosa propia—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 4.

Cosa vendida—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 32
—*Comprador*, núm. 3.

1. *Costas*—La falta de prueba del actor, hace proce-
dente su condenación en las costas del juicio.—Jur. Civ.,
tom. 1, pág. 299, Ser 3^a.

2. *Costas*—Cuando la revocación de una providencia

1—El actor debe comprobar su demanda—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a—
Y si no la comprueba, debe pagar las costas, pues como dice la ley 8,
tit. 22, Part. 3^a: Los que maliciosamente, sabiendo que non han
derecho en la cosa que demandan, mueven á sus contendores pleytos
sobre ella, trayendolos en juyzio, e faziendolos fazer grandes costas, e
misiones, es guisado, que non sean sin pena, porque los otros se rece-
len de lo fazer. E porende dezimos, que los que en estas maneras
fazen demanda, ó se defiendan contra otro, non auiedo derecha razon
por lo que deuen fazer, que non tan solamente deue el Judgador dar
por vencido en su pleyto en el juyzio de la demanda, al que lo fiziere,
mas aun lo deue condenar en las costas que fizo la otra parte por razon del pleyto.»
Y más adelante agrega; «Empero, si el Juez entendiere, que el vencido
se mouiera por alguna derecha razon, para demandar ó defender su pleyto,
non ha porque mandar quel pechen las costas.» Es evidente que si hay
ausencia completa de prueba de parte de un litigante, no puede jamás
creerse que hubo «derecha razon para demandar ó defender su pleyto.»
Esto es lo que sucedía en el caso del sumario.

2—El Juez reconoció que el auto fué dictado por error, y haciendo
uso de la facultad que le acuerda la ley 2, tit. 22, Part. 3^a, lo revocó
por contrario imperio, no procediendo la condenación en costas, pues
si el Juzgado pudo equivocarse al resolver erróneamente una cuestión,
razón es esta para creer que no hubo ni malicia ni temeridad de parte
del litigante. Si en el caso presente, la parte hubiese sido condenada en
costas, se habría cometido una de las más grandes injusticias, pues se
trataba de una ejecución iniciada por cobro de afirmados, habiéndola
el Juez despachado favorablemente y luego volviendo sobre sus pasos

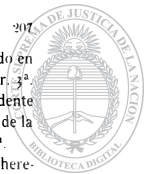
se hace de oficio, no procede la condenación en costas al peticionante.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 16. Ser. 3ª.

3. Costas—La discusión de un punto de derecho no

la revocó por contrario imperio, fundándose en el art. 4º de la ley de 26 de Octubre de 1881. La Cámara dió como fundamento para la no condenación en costas, la circunstancia de «haberse repuesto el juicio al estado de demanda.» Razón de pié de banco es ésta como muchas de las dictadas por la Cámara de lo Civil, la que de lo que menos se ocupa es de estudiar las cuestiones que se someten á su decisión. Hemos dicho que si se le hubiese condenado en costas al actor, se habría cometido la más grande de las injusticias, porque el auto revocado que declaraba la procedencia del juicio ejecutivo en estos casos, estaba perfectamente ajustado á la ley, mientras que la providencia revocándolo estaba en contra no solo de la ley, sino de la jurisprudencia sentada por la misma Cámara. Este último punto no pudo tratarse ante el Superior por cuanto la providencia de 1ª Instancia habría quedado consentida en lo principal, apelándose tan solo por las costas.

3—La Cámara dijo: «Se ha ventilado una cuestión de puro derecho con acopio de doctrina por una y otra parte, y aun suponiendo que fuera errónea la que instruía el reclamo, no debe olvidarse que ella tenía su fundamento en disposiciones espresas de nuestro Código, las que si no amparaban derechamente su acción, se prestaban no obstante á interpretaciones más ó menos serias. La mala fe no ha existido. Tampoco podrá objetarse que la cuestión presentaba una solución fácil y sencilla, pues lo contrario resulta de la naturaleza misma de dicha cuestión, y sin duda que así debió comprenderlo la misma defensa, dados los esfuerzos de argumentación que acusan sus exposiciones. Resulta que los vencidos han tenido razón probable para litigar ó los ha movido alguna derecha razón—Ley 8, tit. 22, Part. 3ª.—Conceptos son estos que excluyen la temeridad y malicia, y consiguientemente no procede la imposición de las costas». Nos parece que esto es el verdadero criterio bajo cuyo imperio deben resolverse las cuestiones que se susciten sobre condenación en costas. Sus conceptos encuadran perfectamente dentro de las ideas emitidas por nosotros al estudiar otro caso resuelto por la Cámara de lo Comercial. Véase: verb. *Costas*, número 14, tom. 3 de la Inst. y su nota. Por tener relación con el punto resuelto en el sumario puede verse además verb. *Costas*, núms. 3 y 13, tom. 3, Inst.; verb. *Costas*, núm. 10, tom. 2 de la misma que está de acuerdo con el sumario que anotamos.





implica temeridad, y el vencido no debe ser condenado en las costas del juicio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 93, Ser. 3^a.

4. **Costas**—La condenación en costas, no es procedente contra el padre vencido en el juicio sobre privación de la patria potestad.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 109, Ser. 3^a.

5. **Costas**—Su imposición no procede contra los herederos á los cuales no puede constar personalmente las obligaciones del causante.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 133, Ser. 3^a.

6. **Costas**—La condenación en costas es procedente contra el tutor, siempre que deba exigírsele judicialmente la rendición de cuentas y éstas no sean aprobadas.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 305, Ser. 3^a.

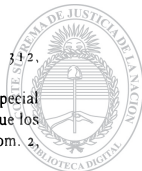
7. **Costas**—No justificada la acción, procede la conde-

4—El Juez de 1^a Inst. dijo que no encontraba mérito para la imposición de las costas, y la Cámara tuvo en consideración además la *calidad de los litigantes*. ¿A qué calidad se refiere la Cámara? Ella no lo dice, pero se supone.

5—La Cámara no resolvió este punto, solo dijo que debía exonerarse de las costas á la parte vencida, teniendo en cuenta las vacilaciones en asunto tan difícil, debiendo recordar que el heredero pudo negar la existencia de hechos que no le eran propios y que pudo poner en duda la autenticidad de documentos no otorgados por ella. Debe tenerse presente que el principio sentado en el sumario está de acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara, la que se ha llevado á los extremos más deplorables, porque basta que el demandado sea un heredero para que se le exonere en las costas, aunque sea el litigante más temerario que jamás haya traspuesto las puertas de la justicia. Si el sucesor ignora los hechos sobre que versa la demanda, no puede imponérsele las costas, pero si se le prueba que tenía cabal conocimiento de ello, no hay razón alguna que autorice una exoneración de las costas. Puede consultarse sobre el punto resuelto en el sumario el tom. 3^o de la Instituta, verb. *Costas*, núm. 10.

6—El tutor fué forzado á la rendición de cuentas, produciéndose un voluminoso expediente, y si á esto se agrega que la rendición de cuentas no fué aprobada, se verá con toda claridad la justicia del sumario.

7—Véase el núm. 1.



nación en costas al actor.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 312, Ser. 3ª.

8. **Costas**—La acción debe ser rechazada con especial condenación en costas, cuando el actor no justifique los hechos negados por el demandado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 91, Ser. 3ª.

9. **Costas**—Es procedente la condenación en costas contra el actor cuando el interdicto ha sido rechazado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 117, Ser. 3ª.

10. **Costas**—Procede la condenación en costas cuando resulta plenamente justificada la temeridad y malicia del demandante.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 294, Ser. 3ª.

11. **Costas**—Si el actor no justifica los extremos de su demanda, debe absolverse al demandado con especial condenación en costas al primero.—Jur. Civ., tom. 2, página 307, Ser. 3ª.

12. **Costas**—Su imposición no es procedente cuando el

8—Ley 1ª, tit. 14, Par. 3ª; y Ley 8ª, tit. 22 de la misma Part. Véase el núm. 1.

9—La imposición de las costas es de precepto legal en los juicios posesorios—arts. 578 y 583 del Cód. de Proc.

10 —O del demandado.—De acuerdo con la jurisprudencia uniforme de nuestros Tribunales. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Costas*, núms. 3 y 10; tom. 2º, núms. 15, 16 y 20; tom. 2º, núms. 4 y 8; y tom. 1º, números 626 y 652. Solo no procede la imposición de las costas aun habiendo temeridad ó malicia cuando el contrario no lo solicita. Véase, mismo verb., tom. 4º, núm. 11.

11—El actor no produjo prueba alguna durante el término, debiendo aplicarse la disposición del art. 221 del Cód. de Proc., y la Ley 1ª, título 14, Part. 3ª. Véase el núm. 1.

12—La demanda versó sobre cobro de daños y perjuicios procedentes de la inexecución de un contrato, estimados en 6800 nacionales. El demandado negó que hubiesen existido daños y perjuicios, rechazando los cálculos hechos por el actor, y no estando conforme, en todo caso, con la suma cobrada. La sentencia fijó los daños y perjuicios en



actor ha pedido más de los que á su derecho corresponde.

—Jur. Civ., tom. 2, pág. 379, Ser. 3ª.

13. *Costas*—El albacea está obligado á rendir cuenta de su administración y debe ser condenado en las costas del juicio si hubiese necesidad de exigírsele judicialmente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 200, Serie 3ª.

14. *Costas*—Aun cuando el mandatario reconozca su obligación de rendir cuentas, debe ser condenado en las costas del juicio, si no lo verifica inmediatamente de serle exigido.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 161, Ser. 3ª.

15. *Costas*—El pedido de diligencias en beneficio pro-

3800 nacionales, sin costas. Para exonerar de éstas al vencido, en contra de lo dispuesto en el art. 221 del Cód. de Proc. dijo, que la diferencia entre lo cobrado por el actor y la suma en que el Juez fijó el monto de la indemnización, es causal bastante para demostrar que el vencido tuvo razón derecha para litigar. Es el caso de excepción de la Ley 8ª, tit. 22, Part. 3ª que dice: «Empero, si el Juez entendiera que el vencido se moviera por alguna derecha razón para demandar ó defender su pleyto, non ha porque mandar quel pechen las costas». Es por esto que en la demanda por daños y perjuicios debe establecerse el monto de lo que se pide, ó el que el Juzgado en su criterio juzgue equitativo con arreglo á lo que resulte de autos. Así es como se ve de diario que los jueces condenan al vencido á una suma inferior de lo pedido, imponiéndole las costas al mismo, porque el actor se guarda bien de dejar la fijación del monto al recto criterio del magistrado. Puede verse el tom. 4º, Inst., verb. *Costas*, núm. 7.

13—Véase verb. *Albacea*, núm. 3.

14—El demandado dijo que las cuentas habían sido ya rendidas privadamente; que el juicio debía versar sobre ratificación de cuentas y que el plazo para la rendición era insuficiente. En esta defensa se pasaron ocho años. La Cámara fundada en estas circunstancias, le impuso las costas.

15—El comprador de un inmueble, después de habérsele otorgado la correspondiente escritura de transferencia, se presentó diciendo que había llegado á su conocimiento que el vendedor usaba un nombre distinto de aquel con que le había vendido la propiedad, y considerando



pio, hace procedente la condenación al pago de las costas y gastos en que hayan tenido que incurrir las demás partes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 124, Ser. 3ª.

16. *Costas*—La confesión del demandado sobre la existencia de un contrato verbal, exime de las costas al demandante aun cuando se rechace su acción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 322, Ser. 3ª.

17. *Costas*—La imposición de las costas es procedente contra el vencido siempre que su temeridad aparezca evidente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 103, Ser. 3ª.

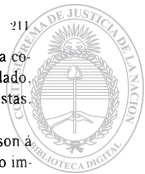
18. *Costas*—No procede la condenación en costas cuando la jurisdicción depende de la exclusiva voluntad del que opuso la excepción.—Jur. Civ., tom. 3, página 48, Ser. 3ª.

prudente averiguar con certeza si los dos nombres correspondían á la misma persona, solicitó un comparendo verbal, el que se celebró efectivamente. Como se ve, no se dedujo acción alguna, no se atacó de falso el documento, y solo se quiso disipar una duda. A este efecto tuvo la otra parte que concurrir á los tribunales, asesorarse, y aun hacerse acompañar al juicio con un letrado. El Juez ordenó que se archivara el expediente, debiendo las costas ser á cargo del que promovió las actuaciones. Esta resolución es perfectamente arreglada á derecho, porque es regla general admitida por todos los autores, que todas las costas que se causaren en cualquiera diligencia que se ejecuta son á cargo y por cuenta de las persona que la piden. Lo contrario sería autorizar peticiones improcedentes de una parte en perjuicio de la otra: sería abrir la puerta á los abusos que bajo cualquier pretexto darían por resultado molestar arbitrariamente á quien se le diera la gana.

16—Porque con esto se demuestra que no se procedió con temeridad, siendo aplicable el precepto de la Ley 8ª, tit. 22, Part. 3ª, en la parte que establece la excepción á la regla general.

17—Véase el núm. 10.

18—Se opuso la excepción de incompetencia fundada en el carácter de extranjero del demandado y en el de argentino del actor—inc. 4º, art. 2º, de la Ley de 1863.—El principio es exacto tratándose de un juicio ordinario, más no lo es cuando se trata de un ejecutivo, la regla sufre una modificación. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Costas*, núm. 12.



19. **Costas**—La exageración de la suma demandada como indemnización, justifica la resistencia del demandado, y en consecuencia la exoneración del pago de las costas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 309, Ser. 3ª.

20. **Costas**—Rechazada la ejecución, las costas son a cargo del ejecutante, aun cuando se hayan declarado improcedentes algunas de las excepciones opuestas por el ejecutado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 74, Ser. 3ª.

21. **Costas**—El mandante ó sus sucesores legales, no pueden ser condenados en el juicio seguido contra el mandatario sobre rendición de cuentas, aun cuando éstas sean aprobadas, mientras no se justifique que habían sido rendidas y aprobadas con anterioridad al juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 124, Ser. 3ª.

22. **Costas**—El Juez no está facultado para eximir de las costas al vencido en el juicio ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 169, Ser. 3ª.

19—Los daños y perjuicios fueron estimados por el actor en 31000 nacionales, habiendo el Juzgado fijado el término de 2000 para que aquel prestara juramento. La diferencia notable entre una y otra suma justificaba la resistencia del demandado. Además, esta resolución está de acuerdo con el núm. 12.

20—El art. 507 del Cód. de Proc. no admite término medio y declara que las costas son a cargo del que resulte vencido en último grado, con excepción de las correspondientes a cualquiera petición de la otra parte que haya sido desestimada. La sentencia de remate solo puede resolver una de dos cosas: llevar la ejecución adelante ó hacer lugar á la ejecución—art. 498.—En el primer caso las costas son a cargo del ejecutante, en el segundo del ejecutado.

21—No puede decirse que haya, ni temeridad, ni malicia de parte del litigante.

22—Este sumario ha sido omitido en el índice de los fallos. El Juez no hizo lugar á la ejecución, exonerando de las costas al actor. La Cámara dijo, que el art. 507 se oponía á que el Juez hiciera uso de la facultad conferida por el art. 221 del Cód. de Proc. Véase el número 20.



23. **Costas**—Si el demandante justifica la verdad de los hechos alegados, procede la condenación en costas al actor.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 16, Ser. 3^a.

24. **Costas**—Procede su exoneración al vencido, si se comprueba que no hubo temeridad de su parte.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 207, Ser. 3^a.

25. **Costas**—La parte está obligada al pago de los honorarios, sin perjuicio de su derecho contra el condenado en costas.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 93, Ser. 3^a.

26. **Costas**—No procede la condenación en costas, si la escepción es potestativa del demandado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 137, Ser. 3^a.

27. **Costas**—Los albaceas carecen de personería para establecer demandas á nombre de la testamentaria, y deben ser condenados personalmente al pago de las costas de las que promuevan.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 177, Ser. 3^a.

23—De acuerdo con lo establecido en el art. 221 del Cód. de Proc.

24—Véase la nota del núm. 1. Esta resolución se dictó por mayoría de votos, estableciendo la misma el principio de que solo atendiendo motivos muy especiales puede eximirse al vencido en un juicio, de la responsabilidad que le impone el art. 221 del Cód. de Proc., y que la lectura de los autos hacía en su opinión evidente que el vencido no solo no habría tenido razón probable para litigar, sino que había procedido temerariamente. Sinembargo, la mayoría opinó de distinta manera y el vencido quedó exonerado de las costas.

25—Porque el contrato de locación de servicios crea relaciones directas entre locador y locatario, contrato que es para el vencido *res inter alios acta*. La sentencia fija las relaciones de derecho entre las partes litigantes, y el mandatario ó abogado que ha devengado honorarios en el pleito no son parte por derecho propio, sino que aquel lo es por representación. Véase: verb. *Abogado*, núm. 6; Inst., tom. 4, verb. *Honorarios*, núm. 7; y tom. 1^a, verb. *Abogado*, núm. 5.

26—Véase el núm. 18; Inst., tom. 4, verb. *Costas*, núm. 12 y su nota donde consta la jurisprudencia uniforme observada por nuestros tribunales; puede verse además el núm. 21.

27— Véase: verb. *Albacea*, núm. 5.



28. *Costas*.—La escepción de prescripción opuesta por el demandado por acción reivindicatoria, hace procedente la exoneración de las costas al demandante vencido.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 3ª.

29. *Costas*.—La petición judicial de alimentos, importa temeridad en el obligado á pasarlos y en consecuencia procede su condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 89, Ser. 4ª.

30. *Costas*.—La condenación en costas, no es procedente contra el reivindicante vencido por prescripción.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 390, Ser. 4ª.

31. *Costas*.—El escepcionante que no justifica la escepción, debe ser condenado en las costas del juicio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 420, Ser. 4ª.

32. *Costas*.—Reconocido por el demandado el derecho

28.—Véase: Inst., tom. 1, verb. *Costas*, núm. 649, y *Escepción de prescripción*, núm. 1072.

29.—Si el padre niega el carácter de tal, no debe esperar á que se le exija judicialmente el cumplimiento de su deber. Ocasiona gastos y debe pagar, con tanta más razón cuanto que la ley le obliga á suministrarlos bajo la denominación de litisexpensas.

30.—La naturaleza de esta articulación previa, obsta al debate amplio del derecho en que la parte vencida funda sus peticiones, é impide toda recta apreciación sobre la legitimidad del derecho que no sea la escepción, sobre su extensión, su fuerza y sobre los recaudos probatorios que deberían de instruirla. No hay por consiguiente, una base segura de criterio para los Jueces, en el sentido de juzgar las razones probables que al vencido en la escepción podría asistirle para litigar en lo principal. Esta es la jurisprudencia constante de la Cámara. Véase el núm. 28.

31.—La defensa alegada «no fué ni remotamente comprobada» dijo la Cámara, Ley 8, tit. 3, Part. 3ª; Véase: verb. *Costas*, núm. 1, tom. 4. Instituta.

32.—El demandado negó en un principio los hechos alegados por el actor, pero después se celebró un juicio verbal en el que se convino que el Juzgado decretara una inspección ocular para verificar si eran ó no exactos los hechos, pues se trataba de construcciones peligrosas á



del demandante, las costas deben ser á su cargo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 426, Ser. 4^a.

33. **Costas**—Al demandante corresponde la prueba de la acción, si no la justifica debe ser condenado al pago de las costas.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 5, Ser. 4^a.

34. **Costas**—No procede la condenación en costas del poseedor con título vencido por resultar procedente la reivindicación.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 24, Ser. 4^a.

35. **Costas**—El monto exagerado de la indemnización pedida, no basta para exonerar al demandado de las costas que forman parte del daño causado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 129, Ser. 4^a.

36. **Costas**—El reivindicante que ha intervenido en la

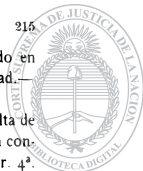
la solidez del edificio contiguo, aseverado en la demanda, debiendo en el primer caso, ordenar que el demandado se colocara en las condiciones exigidas por la ley, y absolver al demandado en caso contrario: el Juez condenó á éste á ponerse en condiciones legales y le impuso las costas. La Cámara dijo que «si el derecho del actor es tan evidente que en ella ha convenido el mismo demandado, ¿á virtud de qué consideración se le podría exonerar de la condenación en costas, con los que por regla general debe cargar el vencido?»

33—Es principio general sentado por el art. 221 del Cód. de Proc., que solo sufre escepciones cuando hay fundados motivos para ello. Véase el núm. 1.

34—Véase los núms. 28 y 30. El vencido se encontraba en posesión de la cosa dada judicialmente, versando la discusión sobre cuál era el mejor título; de donde resulta que el vencido tuvo razón derecha para litigar sin que se le pudiese imputar ni temeridad ni malicia.

35—En contra de lo resuelto en los núms. 12 y 19: Inst., tom. 4, verb. *Costas*, núm. 7.

36—La Municipalidad fué vencida en un juicio reivindicatorio iniciado después de aprobada con su intervención una información sumaria ofrecida. La Cámara resolvió por mayoría de un voto, que la imposición de las costas era procedente: 1º Porque es principio general establecido por el art. 221 del Cód. de Proc.; 2º Porque la temeridad de la Municipalidad era manifiesta. La minoría dijo que el art. 221 del Cód. de Proc. autoriza á los magistrados á apreciar los casos en que



formación del título supletorio, debe ser condenado en todas las costas del juicio por su evidente temeridad.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 234, Ser. 4ª.

37. **Costas**—Reconocido por el demandante la falta de personería alegada por el demandado, no procede la condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 54, Ser. 4ª.

38. **Costas**—El reivindicante que no justifica los hechos invocados como base de su acción, debe ser condenado en las costas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 290, Ser. 4ª.

39. **Costas**—Si bien es regla general la condenación en costas al vencido, la ley faculta a los jueces para exonerarlo cuando no obstante la verdad de los hechos en

deben imponer las costas al vencido, que usando de esa facultad debía exonerársele en el caso presente por no podersele imputar temeridad al querer recuperar una cosa que consideraba pertenecerla, y porque la información producida había sido aprobada en cuanto ha lugar por derecho, cláusula que daba razón probable al vencido para litigar.

37—Se pidió el cumplimiento de un contrato de compraventa consistente de un boleto. demandado el martillero, éste hizo presente que él había vendido por cuenta y orden de un tercero, según resultaba del boleto; entonces se presentó el actor diciendo que inmediatamente de conocida esta persona, no tenía objeto de seguir un juicio con quien carecía de personería, lo que revela según el criterio judicial «todo falta de temeridad ó malicia al promover la acción. Hay una completa confusión de ideas aquí. No se trata de otra cosa sino de un desistimiento fundado en la falta de acción contra la persona demandada. El desistimiento trae aparejada la condenación en costas, de acuerdo con la ley, es por consiguiente equivocada la resolución de la Cámara. De acuerdo con otro caso resuelto. Véase: Inst., tom. 3, verb. *Desistimiento*, núm. 1; en contra Inst., tom. 2, verb. *Costas*, núm. 11, *Desistimiento*, núm. 3.

38—Como todo litigante a quien se le pueda aplicar el art. 221 del Cód. de Proc. Véase el núm. 1.

39—La demanda fué rechazada por carecer de derecho el actor, y el Juzgado haciendo uso de la facultad que le acuerda el art. 221 del Cód. de Proc., lo exoneró de las costas, conceptuando que no había procedido con temeridad ni malicia, y por el contrario había tenido razón plausible para litigar—Véase la doctrina sentada en el núm. 1.



que se funda la acción, carece de derecho para ejercerla.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 116, Ser. 4ª.

40. Costas—El desconocimiento, hecho por los herederos, de la obligación del causante, no importa la temeridad que la ley exige para imponer la condenación en costas al vencido.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 89, Ser. 4ª.

41. Costas—El demandado que al contestar la demanda se conforma con lo pedido por el actor, no es responsable de las costas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 104, Ser. 4ª.

42. Costas—El vencido en el juicio ejecutivo debe ser condenado en las costas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 111, Ser. 4ª.

40—Se trataba de la escrituración de un boleto firmado por el causante. Se ordenó la escrituración sin imposición de costas, las que no podían imponerse por que no se trataba para el vencido de hechos que le sean personales, lo que le faculta á exigir la comprobación de los hechos generadores del juicio, y en el caso especial resuelto, en atención á lo que el art. 1032 del Cód. Civ. dispone. El sumario está de acuerdo con la jurisprudencia establecida en casos análogos. Véase el número 5.

41—Conforme el demandado en cumplir con lo pedido en la demanda, desiste el actor, y pide se le condene en costas al primero. Aquí no procede esa condenación, en primer lugar porque él desistió de su demanda. Si hubiese dejado que se dictara sentencia quizá habría sido más viable su pretensión, pero no cuando hay desistimiento de su parte. El art. 221 del Cód. de Proc. parece que presupone una sentencia, y donde ella no existe no proceden las costas. Esta resolución está en contra de lo establecido en el núm. 32.

42—Véase el núm. 22. Se inició ejecución por la suma de 240,000 pesos nacionales: el ejecutado dijo que solo era deudor de 80,000 \$, y opuso escepciones de compensación, falta de personería en el actor y nulidad de la ejecución. Se declaró procedente la compensación, condenándose al ejecutado al pago de 70,000 nacionales, y no se hizo lugar á las otras dos escepciones. El Juez eximió al vencido de las costas y la Cámara se las impuso. «Ya se aplique la regla del art. 221 del Cód. de Proc., ya la disposición del art. 507, ya el principio consagrado en la ley 43, tít. 2, Part. 3ª, ya se ocurra á los antecedentes ilustrativos de la



43. Costas.—El vencido debe ser condenado al pago de las costas del juicio.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 202, Ser. 4^a.

44. Costas.—Procede su imposición cuando resulte evidente la falta de razón que ha tenido el vencido para promover el juicio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 64, Ser. 4^a.

45. Costas.—No existiendo condenación en costas en la sentencia que condena al demandado al pago de daños y perjuicios, los honorarios y gastos del juicio no deben ser tenidos en consideración al fijar la suma dentro de la cual debe prestarse el juramento estimatorio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 103, Ser. 4^a.

46. Costas.—Tratándose de trabajos que deben ser jurisprudencia del Tribunal—Causa LXXII, tom. 2, Ser. 1^a—es siempre evidente que ha debido imponerse al demandante las costas.» Aquí el vencido en última instancia, como dice el art. 507, fué el ejecutante que exigió una suma mucho mayor de la que se le adeudaba.

43.—Véase el núm. 1. En el presente caso el actor desistió de su demanda, siendo evidente la obligación de pagar las costas. Véase el número 37.

44.—Véase el núm. 1.

45.—Dice la Cámara que los daños y perjuicios no se hallan comprendidos en el resarcimiento de pérdidas é intereses. Tienen una sanción especial, y no puede responsabilizarse por ellos al litigante sino en los casos de condenación decretada en el mismo pleito en que se han producido.—Está de acuerdo con un caso resuelto por la Cámara de lo Comercial. Véase Inst., tom. 3, verb. *Costas*, núm. 8. Puede verse en contra tom. 2, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 18; aquí se permitió la inclusión de las costas causadas en otro juicio, á pesar de no haber habido en él condenación en costas.

46.—Presentado un litigante demandando una suma de dinero por servicios profesionales, el demandado dijo que la suma adeudada era inferior á la pedida y que estaba dispuesto á abonar lo adeudado. El actor dijo que no tenía inconveniente en aceptarla á fin de evitarse las protestas y los gastos de un pleito. El Juez sentenció mandando pagar la suma reconocida sin costas. La Cámara dijo que si el demandado no ha reconocido el hecho fundamental de la acción, si no ha tenido la oportu-



tipreciados por terceros. la conformidad del demandante con el precio reconocido por el demandado, no importa un desistimiento de la acción, que pueda hacerlo pasible de la condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 134, Ser. 4^a.

47. **Costas**.—La falta de justificación de los daños y perjuicios reclamados hace procedente el rechazo de la demanda con especial condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 147, Ser. 4^a.

48. **Costas**.—Las distintas rebeldías en que incurra el demandado después de contestada la demanda, no lo hacen pasible de la condenación en costas que la ley fulmina contra el declarado rebelde.—Jur. Civ., tom. 6, página 201, Ser. 4^a.

unidad ni los medios legales para establecer la *plus petitio*, la condenación en costas no procede: esto decía la mayoría. La minoría fué de opinión que la actitud del demandante importaba un verdadero desistimiento de la demanda que fué promovida por una suma mucho mayor, y en tal caso, corresponde imponerle las costas de acuerdo con la jurisprudencia de los Tribunales—tom. 8, pág. 315, Ser. 1^a, Jur. Civ.

47.—Procede el rechazo de la demanda, pues al actor le incumbe la prueba—Ley 1^a, tít. 14, Part. 3^a—y no comprobada su acción debe ser rechazada: en cuanto a las costas, su imposición procede de acuerdo con lo dispuesto en el art. 221 del Cód. de Proc.—Ley 39, tít. 2, Part. 3^a. Véase el núm. 1.

48.—Los pronunciamientos de los jueces son diversos en ambos casos, ambas son situaciones previstas del derecho procesal, pero incuestionablemente distintas en la manera de producirse y en las sanciones positivas que aparejan. Cuando un demandado ha sido citado en forma y no comparece, ó abandona el juicio después de comparecer, es declarado rebelde para todo el pleito—art. 433, Cód. de Proc.—si la rebeldía es total y procede la aplicación del art. 434 en su última parte que declara á cargo del rebelde las costas del juicio. Si la rebeldía es parcial, como si no concurre á la citación para absolver posiciones, su consecuencia es muy distinta y no tiene más resultado que el de perder el derecho de que podía hacer uso el citado. Puede compararse los arts. 45, 127, 213, 433 y 434 del Cód. de Proc.



49. Costas—La ignorancia del derecho, no excusa la temeridad que importa la falta de prueba, y corresponde la absolución del demandado con costas al actor.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 315, Ser. 4ª.

50. Costas—La condenación en costas y la regulación de honorarios contenidas en una sentencia inapelable son inapelables también.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 419, Ser. 4ª.

49—El vencido quiso eludir el pago de las costas, diciendo que ignoraba el derecho, pues era almacenero; pero contra este argumento está el art. 923 del Cód. Civ.

50—Es jurisprudencia de esta Cámara: sin embargo es un principio altamente injusto y peligroso, porque pone a los litigantes a merced de la conciencia ancha de jueces poco escrupulosos en el cumplimiento de sus deberes. Una prueba evidente del peligro que entraña este principio la tenemos en el art. 1567 del Cód. de Com. que establece la inapelabilidad de las regulaciones que hacen de los honorarios del síndico; fué tal el efecto desastroso de este artículo que el clamor de los esquilados llegó hasta el Congreso, y este alto cuerpo se vió en la necesidad de dictar una ley especial, estableciendo la apelabilidad de las regulaciones. Si esto ha tenido que hacerse para contrarrestar los efectos desastrosos de la ley espesa ¿qué fundamento legalmente atendible puede aducir la Cámara para establecerlo en los casos que la ley no lo autoriza? No! esta es una jurisprudencia que no puede subsistir: su reforma se impone: lo reclaman los intereses en litigio; lo exige la moral, y lo impone una administración recta y honrada de la justicia. Es una heregia judicial: y lo extraño es que haya una Cámara que la sancione con su voto. Puede verse en el sentido del sumario, Inst., núm. 3, verb. *Honorarios*, núms. 5 y 6. Sin embargo esta misma Cámara ha entendido en apelaciones de esta misma naturaleza; así, por ante el Juzgado del Dr. Garay, Secretario del Dr. Alcorta, en el juicio seguido por José M. Gonzalez contra Da. Gertrudis Teresa Cámaras sobre cobro ejecutivo de pesos, se dictó sentencia de transe y remate: interpuesta apelación por el fondo y por las costas, no se hizo lugar a lo primero por no haberse opuesto excepciones, y se concedió el recurso en cuanto a las costas. La Cámara entendió en el recurso y no se le ocurrió decir que la sentencia era inapelable en cuanto a la regulación. Puede ser que este sea el principio de la reforma de tan monstruosa jurisprudencia. Puede verse los argumentos aducidos en el tom. 3 de la Inst., verb. *Regulación de honorarios*, núm. 1.



51. **Costas**—Reconocida por el actor la procedencia de las escépciones opuestas, corresponde su condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 84, Ser. 4ª.

52. **Costas**—No debe condenarse en costas al vencido, si la parte no lo solicita en la demanda.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 254, Ser. 4ª.

53. **Costas**—No procede la condenación si ninguna de las partes consigue lo que respectivamente pretendía.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 280, Ser. 4ª.

54. **Costas**—Procede la exoneración del vencido, si de autos no resulta que existió temeridad.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 292, Ser. 4ª.

55. **Costas**—No existiendo condenación, los honorarios de los peritos nombrados de oficio deben ser satisfechos proporcionalmente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 46, Ser. 4ª.

56. **Costas** --Siendo una carga impuesta al vencido, la

51—Alegó el actor que un error de derecho le indujo á deducir su acción ante autoridad incompetente, y que por consiguiente no había ni temeridad ni malicia para que hiciese procedente la imposición de las costas. No se hizo lugar á la exoneración por las mismas razones aducidas en el núm. 49.

52—La Cámara no dijo lo que espresa el sumario, solo resolvió no imponer las costas porque para que ella sea procedente es necesario que se solicite como lo dice claramente el art. 221 del Cód. de Procedimientos. No pidiéndose, no procede su imposición. Pueden consultarse los demás casos resueltos.—Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Costas*, número 11; tom. 3º, mismo verbo, núms. 9 y 21.

53—El art. 221 impone las costas á la parte vencida: cuando ninguno de los litigantes consigue lo que demanda, no hay parte vencida.

54—Véase el núm. 1.

56—El punto principal y sobre lo que puede decirse versan las cuestiones de daños y perjuicios, es la responsabilidad atribuida al que los causa, lo que generalmente es negado por este: ahora bien, si se declara que el hecho es imputable al demandado, es de aplicación la regla de que al vencido le corresponde pagar las costas—art. 221, Cód.



exageración en la suma demandada por daños y perjuicios, no basta para eximirlo. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 98, Ser. 4^a.

57. *Costas*—Aun declarada procedente la excepción de falta de personería, no debe condenarse en costas al vencido, si no resulta evidente su temeridad. —Jur. Civ., tomo 8, pág. 301, Ser. 4^a.

58. *Costas*—El acreedor que ha dado fianza al recibir en pago el bien hipotecado, está obligado á la devolución en efectivo de lo que fué imputado á su deuda, pero no de los que se le adjudicó por costas y gastos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 394, Ser. 4^a.

59. *Costas*—Al actor corresponde la prueba de los hechos alegados; su omisión hace procedente la condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 74, Ser. 4^a.

60. *Costas*—La condenación en costas contenida en

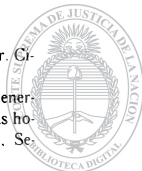
.....
digo de Proc.—Además, las costas del juicio deben considerarse, en causas de esta naturaleza, como una consecuencia de los mismos hechos, y como parte del daño causado cuya obligación de reparar impone espresamente la ley, sin que pueda hacerse caudal de argumentación de la circunstancia de haber obtenido una indemnización menor de la reclamada por el vencedor, desde que en este caso corresponde al arbitrio judicial establecer su monto—art. 1083, Cód. Civ.—De acuerdo con el sumario véase el núm. 35; en contra los núms. 12 y 19. Véase además, Inst., tom. 4^o, verb. *Costas*, núm. 7.

57—La excepción fué originada por la interpretación variable que ha recibido el art. 1003 del Cód. Civ. hasta hoy; esta circunstancia aleja toda idea de temeridad ó malicia de parte del vencido.

58—El acreedor debe devolver lo que ha recibido, pero como los honorarios no los recibió, sino que con ellos pagó los gastos causídicos que son privilegiados, debiendo además tenerse presente que esos gastos los habría tenido que hacer el mismo acreedor de preferente derecho á quien se devuelve el dinero: de manera que vendría éste á quedar beneficiado con fondos de otro acreedor, lo que no sería equitativo.

59—Véase el núm. 1.

60—Véase el núm. 50.



una sentencia inapelable, es inapelable también. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 124, Ser. 4^a.

61. **Costas**—La condenación en costas al Juez, no enerva el derecho del abogado para exigir el pago de sus honorarios á la parte. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 125, Serie 4^a.

62. **Costas**—No procede la condenación en costas, si la sentencia no hace lugar á las pretensiones de demandante y demandado. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 365, Serie 4^a.

63. **Costas**—El que desiste del recurso de revocatoria, debe pagar las costas. —Jur. Civ., tom. 10, pág. 62, Serie 4^a.

64. **Costas**—Cuando el actor no deduce las acciones estrictamente legales que le corresponden, no procede la imposición de las costas. —Jur. Civ., tom. 4, pág. 31, Serie 4^a.

Costas—Véase: *Esposa*, núm. 1—*Litispendencia*, número 1—*Peritos*, núm. 1—*Acción civil*, núm. 1—*Acciones criminales*, núm. 1—*Prueba*, núm. 14—*Daños y perjuicios*, núm. 9—*Honorarios*, núm. 14—*Excepción*

61—El Dr. Mendez Paz debió pagar las costas, las que eran á su cargo en carácter de Juez: la resolución que declara las costas á cargo de otro que no sea el patrocinado del abogado, nada tiene que ver con éste. Se encuentra en las mismas condiciones este caso que el número 25.

62—No hay parte vencedora ni vencida siendo inaplicable el principio general sentado en la primera parte del art. 221 del Cód. de Proc. Véase el núm. 53.

63—El incidente en este caso reconoce como única causal la culpa del desistente. Es principio constante que las costas son á cargo del que desiste.

64—Este sumario no está en la compilación, pero resulta del voto de la Cámara. Las acciones deben deducirse según resulte del estado actual de las relaciones de derecho con el demandado.



de pago, núms. 3 y 4—*Pago por consignación*, núm. 3
—*Rendición de cuentas*, núm. 17—*Abogado*, núm. 15—
Traslado para mejor proveer, núm. 1.

1. Cotejo—El informe de peritos caligrafos no forma prueba plena: el Juez debe hacer por sí mismo el cotejo y puede desechar el dictamen pericial. --Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4ª.

Cotejo—Véase: *Perito*, núm. 4.

Crédito—Véase: *Testamentaria*, núm. 3—*Embargo preventivo*, núms. 18 y 20—*Bienes de la sociedad*, núm. 1—

1—Esta resolución está en abierta oposición con el precepto claro é imperativo del art. 178 del Cód. de Proc. Allí se dice: «Siempre que los peritos tuviesen título y sus conclusiones fuesen terminantemente asertivas tendrán fuerza de prueba legal. En los demás casos, podrá el Juez separarse del dictamen pericial toda vez que tenga convicción contraria.» De manera, que en ese caso especialmente determinado su convicción contraria no lo autoriza á separarse del dictamen de los peritos. Pero la Cámara fundada en la opinión Tejedor, Escriche y Bonnier, se separa de la ley espresa, y acepta como base de su resolución la opinión de dichos prácticos. Esta argumentación sería conducente cuando se tratara de reformar la ley por la rama del Poder Público encargada de su reforma, pero no puede admitirse, cuando como ella, su rol se limita á aplicar las leyes. Si nuestros legisladores se han apartado de la opinión de estos tratadistas, deben haber tenido razones poderosas para ello, pero la Cámara no puede tomar en cuenta otro fundamento para sus resoluciones sino la ley, y solo á falta de ésta puede fundarse en la opinión de los prácticos. Es así como los derechos más inconcusos se convierten en dudosos y un litigante que se presenta ante nuestros tribunales amparado por la ley, se ve burlado en su derecho por resoluciones arbitrarias y atentatorias que convierten los pleitos en verdaderas loterías clandestinas. La Cámara se funda además para resolver la cuestión en el sentido del sumario en el art. 150 y en las demás disposiciones del capítulo III. Pero este artículo solo legisla respecto á la forma cómo debe procederse al cotejo, mas no legisla en manera alguna respecto á la fuerza probatoria del dictamen ó del resultado del cotejo. En el tom. 3º de la Inst. se estudia detenidamente esta cuestión; véase verb. *Informe*, núm. 1.



Embargo, núms. 9 y 18—*Cesión de bienes*, núm. 1—*Man datario*, núm. 14—*Prelación*, núm. 1.

1ª. Crédito hipotecario—La cesión de este crédito cons tituido en escritura pública, debe hacerse en la misma for ma.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 403, Ser. 4ª.

1. Crédito líquido—Cuando la ejecución se dirige con tra la testamentaria por crédito líquido, el ejecutante no está obligado á ejecutar á cada heredero por la parte pro porcional.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 415, Ser. 4ª.

Crédito líquido—Véase: *Inhibición*, núm. 5—*Derecho de retención*, núm. 2.

Quasi delito—Véase: *Prescripción de la indemnización*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 35, 92 y 113—*Acto administrativo*, núm. 1—*Acto ilícito*, núm. 9.

1ª. Cuenta—La recepción de una cuenta sin observarla dentro del término de un mes, implica conformidad por parte del deudor.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 296, Ser. 3ª.

2. Cuenta—Procede la escepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, si no se detalla la cuenta demandada. - Jur. Civ., tom. 10, pág. 321, Ser. 4ª,

Cuenta—Véase: *Peritos*, núm. 1—*Cuenta presentada*, núm. 1—*Papel sellado*, núm. 6—*Afirmados*, núm. 3.

1ª. Cuenta corriente—La conformidad puesta al pié de

1ª—Art. 1184, inc. 9º, Cód. Civ.

1ª—Art. 86 del Cód. de Com.

2—Art. 71, inc. 3º del Cód. de Proc. Véase: *Detalle*

1ª—Sirvió de fundamento para esta resolución una vista fiscal del doctor Rodríguez Bustamante, quien dijo: que así como no hay obligación sin conformidad prestada con arreglo á la ley, no hay contrato ni obligación válida hecha por escrito cuando falta la firma del obligado ó contratante. La Ley de Papel Sellado, es muy general en sus términos, gravando por el art. 1º con el impuesto de sellos á todo *acto, contrato, documento ú obligación*, sin que ella esceptúe del impuesto, á los balances ni á las cuentas corrientes entre particulares; en cuanto á las

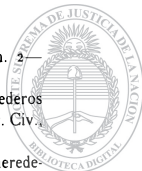


una cuenta corriente ó balance entre particulares está sujeta al impuesto de papel sellado, siempre que importe una obligación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 12, Ser. 4^a.

2. Cuenta corriente—La manifestación de conformidad con el saldo que arroja trimestralmente la cuenta corriente, no está sujeta al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 38, Ser. 4^a.

cuentas corrientes y balances bancarios hace escepción en el art. 26—Ley de 1889—y esta misma escepción confirma la regla general. A los efectos de la ley, la firma puesta por una persona al pié de una cuenta ó de un balance, significa que dicha persona reconoce un crédito en su contra y por consiguiente reconoce una obligación, debiendo por lo tanto ser gravada por el impuesto correspondiente.

2—Esta resolución está en abierta oposición con lo resuelto en número precedente. En ambos casos las sentencias se fundaron en la opinión del Fiscal de las Cámaras. En ambos casos los Fiscales y Jueces inferiores resolvieron que las cuentas estaban sujetas al pago del impuesto. La resolución de este sumario lleva la fecha de 26 de Noviembre de 1891, y aquélla la de 1^o de Oct. del mismo año: dos resoluciones contradictorias con dos meses de intervalo. El Dr. Cortés decía al fundar su opinión, la que sirvió de base á la resolución de este sumario, que según el art. 26 de la Ley de sellos de 1891, las cuentas corrientes de los bancos están sujetas al impuesto de uno por mil. En el movimiento de esas cuentas también se las grava con otro impuesto, pues los cheques deben llevar una estampilla. Si se agrega á estos impuestos un medio por ciento trimestral sobre el saldo que esas cuentas arrojen, obedeciendo al precepto del art. 793 del Cód. de Com., sería recargar de una manera considerable esta clase de operaciones comerciales, y recargarlas por un acto interpretatorio de la ley, pues no se encuentran categóricamente comprendidas en el art. 1^o de la Ley de Papel sellado. Las cuentas corrientes pasadas trimestralmente son accesorias del contrato de cuenta corriente estipulado entre el particular y el banco, y estando gravada la operación principal, debe quedar exenta la accesoria, mucho más cuanto esta no está gravada con un impuesto de una manera clara y espresa. Es por otra parte necesario interpretar restrictivamente los impuestos y mayormente los actos mercantiles de esta naturaleza que son los que dan vida al comercio.



Cuenta corriente—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 2—*Prescripción liberatoria*, núm. 1.

1. Cuenta particionaria—Aprobada ésta, los herederos tienen derecho á retirar su parte de herencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 41, Ser. 3^a.

2. Cuenta particionaria—Su aprobación por los herederos y legatarios, sin reserva alguna de derechos, importa la de cada una de sus partidas.—Jur. Civ., tom. 4, página 145, Ser. 3^a.

3. Cuenta particionaria—Siempre que existan intereses encontrados entre el padre y los hijos, debe nombrarse tutor especial para la revisación de la cuenta particionaria.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 179, Ser. 4^a.

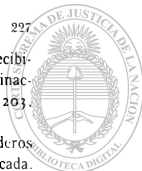
4. Cuenta particionaria—La sentencia que no hace lugar á su aprobación, debe ser fundada con arreglo á la ley: si no se llena ese requisito es nula.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 262, Ser. 4^a.

5. Cuenta particionaria—El derecho de los coherederos

3—Art. 397, inc. 1º, Cód. Civ. Esta facultad deben ejercitar los jueces con suma prudencia y solo en caso de ser evidente la oposición entre los intereses del padre y del hijo. Véase: *Inst.*, tom. 2º, verbo *Tutor especial*, núms. 1 y 2.

4—Siendo definitiva sobre el incidente que la motiva, debe contener los fundamentos en cuyo mérito se deniega la aprobación.

5—El caso cae bajo el imperio de la antigua legislación. El punto de partida fué una sentencia que ordenó «se procediera á levantar la cuenta particionaria de los bienes mortuorios, por los contadores que nombrasen las partes, trayéndose á colación las sumas que hubiesen recibido los herederos á cuenta de su herencia y consten de autos ó se hiciese constar en bastante forma.» Despues de este fallo no se provocó por los herederos las medidas legales tendentes á su cumplimiento y ejecución, dejando pasar más de 40 años: de manera que la prescripción se había operado, á menos que los derechos de ella emergentes fuesen imprescriptibles, lo que no se admite en derecho, como puede verse en el verbo *Cosa juzgada*, núm. 8.



para exigir su formación colacionando los bienes recibidos por partición estrajudicial se prescribe por la inacción durante treinta años.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203. Ser. 4^a.

6. Cuenta particionaria—Aprobada ésta, los herederos aun menores, solo podrán disponer de la parte adjudicada. ---Jur. Civ., tom. 3, pág. 66, Ser. 4^a.

Cuenta particionaria —Véase: *Contador*, núm. 1 —*Indivisión*, núm. 2.

1^a. Cuenta presentada.—Por el actor, si bien justifica la verdad de los hechos y la fecha en que tuvieron lugar, no prueba su inacción, y en consecuencia no puede tenerse como el documento auténtico del cual resulta probada al escepción de prescripción.—Jur. Civ., tom. 1, página 245, Ser. 3^a.

Cuentas.—Véase: *Empedrados*, núms. 1, 2 y 3 —*Intereses*, núm. 1 —*Mandatario*, núm. 13.

Cuerpo general de bienes—Véase: *Herencia*, núm. 4.

1^b. Cuestiones—Las que no han sido planteadas en la

6—Hecha la cuenta particionaria y aprobada, el representante de un menor pidió que de los fondos que quedaron como comunes de la sucesión se estrajese una parte para hacer las cloacas en una propiedad adjudicada á su pupilo: no se hizo lugar porque se consideró que no había razón para que se emplearan fondos comunes cuando los tenía propios el menor, máxime cuando esos fondos iban á ser empleados en beneficio esclusivo de éste.

1^a—El documento presentado por el actor y en el cual el demandado fundaba su escepción, era una planilla en la que se consignaba el número de unas mensualidades que se reclamaban, la que sin duda no se presentó con otro objeto que el de precisar la cantidad que dichas mensualidades importaban. Es evidente que de ellas no puede resultar, ni el silencio, ni la inacción del acreedor por el tiempo que la ley exige para que la prescripción se opere.

1^b—Las cuestiones deben ser traídas oportunamente al debate, ya sea al entablar la demanda ó al contestarla, á fin de quedar trabado el cua-



litiscontestación, no deben ser resueltas por el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 194, Ser. 4ª.

2. Cuestiones—Discutidas varias cuestiones, el Juez debe resolverlas separadamente, aun cuando por cualquiera de ellas resultase el rechazo de la acción, debe plantear y resolver las demás para que el Tribunal pueda pronunciarse sobre ellas.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 23, Ser. 4ª.

3. Cuestiones—De puro derecho, el término para evacuar el traslado en estas cuestiones, solo empieza á correr desde que el espediente se encuentra á disposición de la parte.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 72, Ser. 4ª.

Cuestiones—Véase: *Arbitros*, nums. 1 y 2—*Sentencia*, núm. 9—*Contrato*, núm. 19.

Culpa—Véase: *Acto ilícito*, núm. 2, 8 y 10—*Daños y perjuicios*, núms. 46, 51, 71, 77, 95, 99, 101, 111 y 113—*Seña*, núm. 5—*Indemnización*, núm. 9—*Agravio moral*, núm. 1.

1. Culpa ó negligencia—La omisión por parte de los empleados subalternos de una empresa de trasportes, de precauciones establecidas por disposiciones vigentes, importa culpa ó negligencia, y hace recaer sobre ella la res-

si-contrato de litiscontestación. El art. 216 del Cód. de Proc. dice, que la sentencia definitiva debe contener decisión expresa y positiva, con arreglo á las acciones deducidas en juicio.

2.—Arts. 216 y 217 del Cód. de Proc. —La jurisprudencia establecida sobre este punto no es uniforme. Véase: Inst., tom. 3º, verbo *Cuestiones*, núm. 2. Es necesario distinguir si las cuestiones son principales ó de detalle, pues en este último caso, su omisión no causaría nulidad de la sentencia. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Sentencia*, número 6.

1.—Arts. 1066, 1067, 1069, 1076, 1109 y 1113 del Cód. Civ.—El sumario está de acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Ferrocarril*, núm. 2; *Ferrocarriles*, núm. 1, y *Daños y perjuicios*, núm. 21; tom. 2º, verb. *Daños y perjuicios*, núms. 24 y 25.

ponsabilidad del daño que sufran los pasajeros.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 193, Ser. 4^a.

Culpabilidad—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 10, 14, 15 y 16.

Culpable—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 67.

1^a. Cuota alimenticia—La madre natural tiene personería para gestionar y percibir la cuota alimenticia sin que sea necesario el nombramiento de tutor especial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 411, Ser. 4^a.

Cuota alimenticia—Véase: *Personería*, núm. 8—*Alimentos provisionarios*, núm. 3.

Cuotas—Véase: *Empedrado*, núms. 1 y 2—*Adoquinado*, núm. 3—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 13.

Curaciones—Véase: *Asistencia médica*, núms. 1 y 2.

1^b. Curador—Tiene derecho á cobrar comisión por la administración de sus bienes, aun cuando sea heredero y pariente del causante.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 123, Serie 4^a.

1^a—La madre ejerce sobre sus hijos menores de edad la patria potestad—art. 328 del Cód. Civ.—En este carácter puede recibir las sumas necesarias para vestir y alimentar á sus hijos, lo que verdaderamente no constituiría un acto de administración sino el cumplimiento de sus deberes impuestos por la naturaleza á su carácter de madre. Si la ley le impone el deber de alimentar á sus hijos cuando tiene medios de hacerlo, con el mismo derecho debe recibir los fondos cuando ella no pueda suministrarlos.

1^b—El art. 475 del Cód. Civ. establece que son aplicables á la curatela los principios que rigen para la tutela, y el art. 451 dice, que los tutores tendrán una comisión por la administración de los bienes de sus pupilos, sin hacer distinción alguna cuando ejercen la tutela los hermanos ó el abuelo del menor. Es de notarse además que á los mismos padres que ejercen la patria potestad y que son los administradores de los bienes de sus hijos menores, la ley les acuerda el usufructo como una compensación á sus cuidados y trabajos. No hay razón pues para privar al curador, por el hecho de ser pariente, del derecho que la ley le acuerda á la comisión devengada en el desempeño del cargo.





2. Curador—El nombramiento del curador de un insano, solo puede recaer en un extraño, cuando existen causas graves que inhabilitan á los parientes llamados por la ley para ejercer el cargo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 173, Ser. 4^a.

3. Curador—La presentación de herederos, aunque no declarados, hace cesar la intervención del curador de la herencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 379, Ser. 4^a.

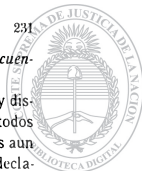
4. Curador—Especial, si existe oposición de intereses entre el esposo y la esposa insana, procede el nombramiento de curador especial hasta la solución del conflicto.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 221, Ser. 4^a.

5. Curador—De la herencia, carece de facultad para reconocer deudas contra la testamentaria, mientras no se encuentren plenamente justificadas.—Jur. Civ., tom. 3, página 417, Ser. 4^a.

2—Arts. 391, 397 y 475 del Cód. Civ.

3—El art. 688 del Cód. de Proc. dice, que cuando ningún pretendiente se presentase, la sucesión se reputará vacante, y el art. 689 ordena que en este caso se nombre un curador á la herencia. Debe tenerse presente asimismo lo que dispone el art. 692.

4—Todo esto sin perjuicio del derecho que más tarde puede ejercer el marido respecto de la curatela definitiva. El peligro que corrían los bienes de la esposa si se nombraba curador de ella al esposo, era evidente á los ojos del Tribunal: la oposición de intereses era notoria, siendo consiguientemente aplicables las facultades concedidas por la ley á los jueces. El art. 475 declara que son aplicables á la curatela los principios que rigen para la tutela. El art. 391 establece que el Juez no conferirá la tutela sino al que por sus bienes ó buena reputación fuese idóneo para ejercerla, quedando esta calificación al arbitrio del Juez. El art. 1293 es aplicable al caso por analogía, como asimismo el art. 397, cuyo inc. 1º faculta al Juez á nombrar tutor especial cuando los intereses de los menores están en oposición con los de su padre, bajo cuyo poder se encuentran. Parece que esta resolución estuviese en contra de lo que se registra en el tom. 2º de la Inst. verb. *Insania*, núm. 1; pero allí no había como en el caso del sumario oposición de intereses.



Curador—Véase: *Bienes*, núm. 6—*Rendición de cuentas*, núm. 7—*Insano*, núm. 1.

1^a. Curadora—La madre á quien se ha nombrado y discernido judicialmente el cargo de curadora de todos sus hijos, tiene legalmente la representación de éstos aun cuando no hubiesen sido incluidos en el auto de declaratoria de herederos.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 13, Serie 4^a.

Curia eclesiástica—Véase: *Información ad perpetuum*, núm. 1.

1^b. Chancelación —No procede la de un censo capellánico, mientras no se justifique plenamente el derecho de los que prestan su conformidad como patronos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 76, Ser. 3^a.

2. Chancelación—De cuentas, sin salvedad, importa que ella fué total y no parcial, y que comprendió todos los derechos anteriores á su fecha.—Jur. Civ., tom. 7, página 358, Ser. 3^a.

1^a—El nombramiento tuvo lugar antes de la vigencia de nuestro Código Civil, y fué hecho comprendiendo tanto á los hijos declarados como á los no declarados herederos: luego tiene la representación de todos ellos.

1^b—Véase *Censo capellánico*, núm. 1.

2—Una liquidación de negocios debe presumirse general cuando del mismo acto no resulta ser meramente parcial. Si se pretende que ella fué parcial, la prueba incumbe al que va contra la presunción natural, es decir, al que alega que no fué sino parcial.



Dador—Véase: *Carta de crédito*, núm. 2.

1ª. Damnificado—Por la violación de domicilio, tiene personería para gestionar la indemnización aun cuando él no sea el propietario ó su representante legal.—Jur. Civ. tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

Damnificado—Véase: *Acto ilícito*, núm. 9.

Daño—Véase: *Acto ilícito*, núm. 1—*Costas*, núm. 35.

1ª. Daños y perjuicios—La acción de daños y perjuicios fundada en un embargo indebido, es improcedente, si el demandado como responsable no lo solicitó, y si llevado

1ª—Un socio de un club que fué allanado sin orden de autoridad competente, demandó á un comisario, por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados á él personalmente con motivo de la violación de domicilio, daños y perjuicios que le fueron ocasionados en su persona é intereses, tomándolo y deteniéndolo después del allanamiento. Es evidente que á pesar de que la casa del Club no le pertenece á él solo, tiene los derechos que le confiere su carácter de socio y consiguientemente es de aplicarse el art. 1079 del Cód. Civ.

1—El que ejecuta un hecho que por su culpa ó negligencia ocasiona un perjuicio á otro está obligado á su reparación. El que no solicitó un embargo que ha sido trabado, no puede consiguientemente ser responsabilizado por sus consecuencias—arts. 1109 y 1111 del Cód. Civil.—Fundada en estas disposiciones del Código, la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido del sumario. Véase: Inst., tom. 3º, verbo *Daños y perjuicios*, núm. 9; tom. 2º, mismo verbo, núm. 20.



á efecto no se opuso á su levantamiento.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 187, Ser. 3ª.

2. Daños y perjuicios—Esta acción fundada en un embargo preventivo indebido, es improcedente contra el Juez, mientras no se pruebe la irresponsabilidad del que lo obtuvo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 312, Ser. 3ª.

3. Daños y perjuicios—La falta de prueba sobre el valor de éstos, permite á los jueces la fijación de la suma dentro de la cual el damnificado debe prestar el juramento estimatorio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 381, Ser. 3ª.

4. Daños y perjuicios—El embargo indebido hace responsable, al que lo pidió, de los daños y perjuicios causados ya sea á un tercero, ya al mismo ejecutado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 381, Ser. 3ª.

5. Daños y perjuicios—La responsabilidad del padre por los que causen sus hijos menores, procede aun respecto de aquellos que no habiten con él, siempre que no se en-

2—La Cámara solo dijo que «el embargo decretado á solicitud y bajo la responsabilidad de la parte, no autoriza una demanda directamente contra el Juez que lo dictó, que en último caso solo podría ser responsable subsidiariamente.» Esta opinión está en contra de los principios sentados por nuestro Código, pues en estos casos quedan obligados en los términos del art. 1109 del Cód. Civ., según el cual es aplicable á los hechos ilícitos que no son delitos el art. 1081 que establece la solidaridad para los casos á que se refiere contra todos los que han producido ó cooperado al delito. Véase, Aubry y Rau, núm. 446, párrafo 4º.

3—Siempre que la existencia de los daños y perjuicios estuviese legalmente comprobada, aunque no su monto, como lo establece el artículo 220 del Cód. de Proc. y es jurisprudencia constante.

4—Art. 1109 del Cód. Civ.—Aubry y Rau, cuyas opiniones sigue el Codificador, dicen que un hecho aun cuando sea perjudicial á otro ó imputable á su autor, no constituye un *cuasi-delito*, hecho ilícito que no es delito, sino en cuanto ha existido de parte del último, ó una falta positiva, ó por lo menos negligencia ó imprudencia—párrafo 446, tomo 4º.

5—Arts. 1114 y 1115 del Cód. Civ.

cuentren bajo la vigilancia y á cargo de otra persona.—
Jur. Civ., tom. 2, pág. 29, Ser. 3ª.

6. Daños y perjuicios—Aun cuando se declare proce-

6—El art. 478 del Cód. de Proc. faculta al acreedor para solicitar el embargo de bienes siempre que se hallen en poder del deudor. Este hecho constituye el ejercicio de un derecho legítimo y por consiguiente no puede dar lugar á una demanda de daños y perjuicios, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 1071 del Cód. Civ. No comprobándose los extremos de los arts. 1067 y 1109, la indemnización no procede. Este fué el fundamento del voto de la mayoría, formada por los doctores Gimenez y Sauze, siendo el primero quien fundó su voto y el segundo se adhirió á él. Los fundamentos del voto del Dr. Gimenez fueron en cuanto á los hechos enunciados, tergiversando por completo las constancias de autos y suprimiendo hechos de gran trascendencia para la resolución de la cuestión. Ese fallo no es el fruto de un criterio recto é imparcial. Es por esto que la minoría calificó el voto del doctor Gimenez como «el colmo de lo absurdo en derecho y en justicia», lo que es todo lo que puede decir del fallo de un Tribunal de la Capital de la República. Este Camarista declaró que el embargante no era responsable por haber embargado valores por la suma de 150.000 pesos oro sellado para responder á un crédito que no pasaba de 2.000 pesos moneda nacional de curso legal. ¡Qué justicia la de nuestro país! Esto es como decía otro Camarista al fundar su voto en otro caso, «conculcar los principios más sagrados de la justicia, y desconocer los axiomas más elementales del derecho.» Para darse una exacta cuenta de la injusticia del voto del Dr. Gimenez, será necesario esponer los antecedentes de la cuestión para después deducir el derecho que de ellos surge. Las antiguas y sabias leyes de Partida contienen una disposición, consagrada por la jurisprudencia universal y encerrada en aquel principio de estricta justicia de *sua cuique culpa nocet*. La Ley 6ª, título 15, Part. 5ª, prescribe la obligación de reparar el daño por aquel que lo ha causado, aunque no lo hubiere causado á sabiendas, con estas testuales palabras: «tenudo es de fazer emienda; como quier que él non fizo a sabiendas el daño al otro, pero acaesció, por su culpa.» Esta prescripción basada en los principios de derecho Romano, ha sido incorporada á nuestra actual legislación civil; se contiene también en el Código que redactó para España el doctor Goyena y está en armonía con la de varios otros códigos extranjeros, como el Francés, cuyos arts. 1382 y 1383 concuerdan con el primero. Todo el que ejecuta un hecho que por su culpa ó negligencia ocasiona un daño á otro, está





dente la tercería, el ejecutante no es pasible de los daños

obligado á la reparación del perjuicio, dice el art. 1109 del Código Civil, concordando en esta disposición con la Ley de Partida y la de los artículos del Código Francés citado. No hay para que entrar en la demostración de la filosofía que encierra este artículo. Basta saber que, según sus propios términos, aunque el hecho que ha causado el daño no pueda elevarse á la categoría de un delito de derecho criminal y sea tan solo el resultado de una simple negligencia, existe por parte de su autor la obligación de repararlo. Esto es de estricta equidad y justicia, por aquel principio de que la culpa ó negligencia no debe perjudicar sino á su autor, en que se basa la ley. Se trata del caso siguiente: se demandó ejecutivamente por cobro de mil setecientos ochenta y dos pesos con quince centavos. No pudiendo conseguir su pago del deudor, se dirigió la acción contra el fiador del mismo, haciendo embargar, como de su propiedad, un establecimiento de campo, embargándose también las haciendas vacunas, lanares y yeguarizas que en él se encontraban en cantidad de dos mil las primeras, dos mil las segundas y ciento nueve las terceras, entre mulas, caballos y yeguas. Así constaba de la diligencia del embargo respectivo, como constaba también que ese embargo fué ordenado por el Juzgado de 1.^a Instancia de esta Capital á cargo entonces del señor Vocal doctor Sauze, á solicitud del ejecutante. Es de advertirse que al denunciar el embargo por el actor, del establecimiento mencionado, manifestó que no sabía ciertamente—fueron sus palabras—si ese establecimiento era del ejecutante, en condominio con otro, ó si estaba exclusivamente á su nombre y que el campo tenía un área poco más ó menos de mil cuadras. Este embargo fué levantado posteriormente por haber depositado el ejecutado los fondos necesarios para el pago del crédito de que era deudor como fiador, y es el que motivó la demanda interpuesta contra el ejecutante, pidiendo se le condenara al pago de daños y perjuicios que decía haberle causado impidiendo la venta de aquel establecimiento que tenía en trato. El que embarga una cosa ajena como de su deudor, es responsable de los daños que este hecho pueda irrogar y esta responsabilidad no puede escusarla, ni menos justificarla, la circunstancia de que la cosa era ajena, mucho más cuando como en el caso del sumario el ejecutante tenía motivos para saber á quién pertenecía la propiedad denunciada á embargo, y cuando aparecía de su propia manifestación que abrigaba duda, es decir, que no sabía ciertamente si estaba en condominio ó éste era exclusivo. Lo contrario importaría dejar establecido que cualquiera puede entablar la más insignificante ejecución y denunciar como bienes de su deudor, va-

y perjuicios si los bienes embargados se encontraban á cargo del ejecutado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 5, Ser. 3ª.

liosos intereses, hacerlos embargar, sacarlos de la administración que ellos tengan, causando de esta manera inmensos daños y librarse después de toda responsabilidad con solo decir, que había ignorado que pertenecieran á un tercero y que no había procedido con dolo, lo que sería el colmo de lo absurdo en derecho y en justicia. No es necesario que proceda con dolo el que tal daño causa, para responsabilizarlo. En este caso se habría cometido un verdadero delito, ejecutando, á sabiendas y con intención de dañar un acto reprobado que tiene una sanción penal distinta. Basta que haya negligencia en el que ejecuta un hecho que ocasiona un daño, para que esté obligado á la reparación del perjuicio, dice la ley, sin que sea necesario que aparezca su intención dolosa; y en el caso presente, no solo ha habido negligencia, sino que hasta puede decirse, que se ha procedido con temeridad al pedir el embargo de todo un establecimiento valioso, arrancando, por medio de la acción judicial, la posesión que tenían sus dueños, para garantir un crédito de mil setecientos ochenta y dos pesos. Esto es tan evidente, que hace innecesaria toda demostración en presencia de la relación de los bienes embargados, que espresaba la diligencia ya citada, y el importe del crédito cuyo pago perseguía el ejecutante. Este debió tener presente, que para asegurarse el pago de su crédito, era suficiente denunciar una parte de los bienes que consideraba pertenecer á su deudor; debía tener presente también el orden establecido por el Cód. de Proc. para el embargo; debió considerar, en fin, que era de su deber averiguar antes si esos bienes le pertenecían, para evitar un daño y exonerarse de la responsabilidad en que podría incurrir. Ha habido entonces negligencia, cuando menos, en la ejecución del hecho que se discute, y si ese hecho ha causado el daño que se demanda, debe repararlo el que lo ha ocasionado. Las pruebas producidas por el actor acreditaban que el demandado tenía pleno conocimiento de que la propiedad que denunció y que fué embargada, no pertenecía al ejecutado sino á un tercero. A lo espuesto debemos agregar la jurisprudencia invocada por el actor y que encontramos de aplicación. La Suprema Corte de Justicia Nacional en la causa citada, en la que se trató como en ésta de la responsabilidad del daño causado por un embargo de bienes que no correspondían al deudor, al confirmar la sentencia del Inferior por los fundamentos, dejó sentado «que es un principio universal de derecho y sanción de nuestras leyes, que todo aquel que por su hecho y sin derecho, causa daño á otro, aunque no haya procedido con temeri





7. **Daños y perjuicios**—Esta demanda es improcedente mientras no se justifique la existencia del acto ilícito punible y la del dolo, culpa ó negligencia del agente.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 55, Ser. 3ª.

8. **Daños y perjuicios**—Declarada por sentencia ejecutoriada la obligación de indemnizar los daños y perjuicios, basta á los efectos de la ley, la justificación de los sufridos por parte del damnificado como consecuencia del acto ilícito.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 81, Ser. 3ª.

9. **Daños y perjuicios**—Reconocida por el obligado la falta de cumplimiento de una obligación de hacer, aunque se alegue imposibilidad material, debe ser condenado á cumplirla, ó en su defecto, al pago de los daños é intereses y las costas del juicio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 142, Serie 3ª.

10. **Daños y perjuicios**—Corresponde al damnificado la

dad y malicia, está obligado á repararlo y que esta obligación pesa sobre el que pide un embargo que se lleva á cabo, bajo su responsabilidad, fuera de los límites en que estuvo autorizado á pedirlo.»

7—Véase: *Acto ilícito*.

8—Se trataba de ejecutar una sentencia que había declarado el derecho que tenía el propietario limitrofe para demoler la pared divisoria haciendo responsable á la parte que se opuso, por los daños y perjuicios ocasionados. La obligación de reparar éstos á los que se refiere el art. 1109 del Cód. Civ., fué resuelta en 1ª Instancia, reservándose la fijación para otro juicio, que es del que se trata—art. 219, Cód. de Proc.—Esos perjuicios comprenden todos los determinados en el artículo 1069 del Cód. Civ.

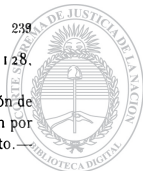
9—El propietario de un inmueble firmó boleto privado de compraventa á uno, y escrituró el mismo terreno á otro. La Cámara dijo que esa circunstancia no constituía una imposibilidad material, puesto que podría readquirirlo para entregarlo después al primer comprador. En cuanto al derecho de exigir los daños y perjuicios, se funda en el artículo 1187 del Cód. Civ.

10—Una mujer en momentos de atravesar la calle fué atropellada por un coche que venía á todo trote por la avenida Alvear. A esa hora los



prueba de la culpa ó negligencia del demandado, para que

dueños de carruages corren carreras al trote á fin de exhibir la superioridad de los troncos que los conducen. El cruzar aquella avenida se hace imposible á esa hora. Dicha mujer pretendió cruzarla y uno de los coches la llevó por delante. Se trataba de un hecho ilícito que no es delito: en este caso es necesario, para que el agente sea pasible de daños y perjuicios, que se le pueda imputar culpa ó negligencia, y si esto no se comprueba desaparece la responsabilidad por las consecuencias del hecho. Es principio general, que la prueba incumbe al actor—Ley 1ª, tít. 14, Part. 3ª—En el caso presente sucedía lo propio, pues la demandada imputaba la culpa ó negligencia al demandado, á lo que éste contestó que si existió culpa ó imprudencia, ella debía imputarse á la actora por su temeridad al atravesar la calle en momentos que estaba llena de carruages en movimiento. Negados los hechos correspondía su justificación al actor, pues el dolo, la culpa y la negligencia no se presumen, ni su imputación al agente del hecho aparea la obligación de su parte de establecer una prueba negativa. Para que aquella presunción existiera, sería necesario que se hubiese violado una ordenanza municipal ó policial de parte del demandado, circunstancia que no se alegó ni justificó, y por consiguiente en ausencia de tales condiciones, la prueba del hecho corresponde exclusivamente á quien lo afirma. Y aún dado el caso de que la prueba incumbiera al demandado, aquí la imprudencia y la temeridad de la víctima quedaban comprobadas. Debe tenerse presente que el hecho acaeció en momentos en que los innumerables carruages que se retiraban de Palermo llenaban la calle, cruzándola á todo trote, así se comprende que solo una grave imprudencia pudo inducir á la víctima á atravesar la calle en esos momentos. Es principio de derecho que el hecho que no cause daño á la persona que lo sufre sino por una falta imputable á ella no impone responsabilidad alguna—art. 1111—Por otra parte, para que haya acto ilícito punible, es necesario que al agente se le pueda imputar, como se ha dicho ya, dolo, culpa ó negligencia. Puede verse además, á Laurent, párrafo 547, pág. 585, tom. 20. «Para que «haya delito ó cuasi delito», dice este autor, «es necesario que el demandante haya sufrido un daño por culpa del demandado.» No bastaba establecer el hecho material del daño causado, era necesario probar que habria habido culpa, negligencia ó imprudencia. Tal es el derecho común: cuando la obligación resulta de un delito ó de un cuasi delito, el demandante debe probar que existe delito ó cuasi delito; debe probar por consiguiente que hay culpa. Dalloz en la palabra «Responsabilidad» art. 5º prueba del cuasi delito, núm. 214, enseña: «que aquel que alegue un



pueda prosperar la acción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 128. Ser. 3^a.

11. Daños y perjuicios—Es ineludible la justificación de la existencia del contrato para que proceda la acción por daños y perjuicios fundada en la falta de cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 167. Ser. 3^a.

12. Daños y perjuicios—La absolución del acusado, por

hecho cualquiera, tiene el deber de probarlo, y que es al que reclama la reparación de un daño á quien incumbe la prueba de la culpa, pues la culpa es el hecho del cual nace la obligación reclamada.» Y la Cámara en un caso análogo al presente, ha declarado que los daños y perjuicios causados por un hecho ilícito, solo son procedentes si se justifica que hubo culpa ó negligencia por parte del que los causó; tom. 6, Ser. 1^a, pág. 37. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 1; tom. 1, mismo verb., núms. 727 y 736; tom. 3, verb. *Daño*, núms. 2, 11 y 19.

11—No existiendo contrato no hay vínculo de derecho; y es sabido que la responsabilidad solo empieza cuando concluye el derecho—art. 1071, Cód. Civ.

12—El actor entabló demanda por daños y perjuicios, afirmando que la parte contraria le había demandado criminalmente, y diciendo que á pesar de haber sido absuelto fué privado de su libertad, correspondiendo en consecuencia la aplicación del art. 142 del Cód. Pen., que impone la obligación de indemnizar los daños causados. El demandado se defendió alegando que la causa se había seguido de oficio y que el procesado no había sido absuelto de culpa y cargo, resultando exactos estos dos extremos. La acción para hacer efectivas las penas correspondientes fué declarada prescripta y la sentencia en última Instancia declaró, que habiéndose absuelto simplemente al procesado, no había lugar á concluir que hubo malicia ó temeridad de parte del que denunció el delito. Esta sola declaración basta para que la acción por daños y perjuicios no pueda prosperar, pues ella debe tener necesariamente la condición de ser temeraria una acusación para que proceda la obligación de indemnizar daños y perjuicios. Esta misma Cámara ha declarado en una causa que corre publicada en el tom. 7, pág. 443, Ser. 1^a, que los datos suministrados á la justicia no dan lugar á la acción de daños y perjuicios cuando no se puede imputar malicia al denunciante—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 9—La S. C. N. ha declarado en otro fallo publicado en el tom. 12, pág. 613, Ser. 1^a, que no existiendo acusa-



hallarse prescripto el delito, no puede fundar una acción de daños y perjuicios contra el demandante que no fue parte actora en el juicio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 232, Ser. 3^a.

13. Daños y perjuicios —La falta de intención criminal y la existencia de hechos que pudieran inducir un error, solo deben tenerse en cuenta en el juicio por calumnia, pero carecen de valor legal en el juicio civil por indemnización de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 3, página 26, Ser. 3^a.

14. Daños y perjuicios—Los jueces no son demandables
ción dolosa no puede existir el delito de calumnia, y el acusador en causa propia solo comete este delito y responde de los daños y perjuicios causados al acusado cuando su acusación es evidentemente calumniosa. En consecuencia el art. 1067 del Cód. Civ. no es aplicable al caso.

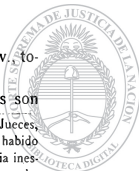
13—Véase: verb. *Calumnia*, núm. 1.

14—Esta cuestión fué iniciada en el año 1875, y tenía por objeto hacer efectiva la responsabilidad en que según el actor, había incurrido un magistrado, con arreglo á la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por los daños y perjuicios causados en un pleito. La sentencia de 1^a Instancia fué dictada cuando la ciudad de Buenos Aires no había sido aún federalizada. La demanda se basaba en el derecho acordado por el art. 46 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, sancionada en 1873, artículo que autorizaba al que hubiese sufrido los efectos de toda orden que violase ó menoscabase los derechos, libertades y garantías establecidas en la misma Constitución, el ejercicio de una acción civil contra el empleado ó funcionario que hubiera ejecutado ó autorizados aquellos actos, por los perjuicios que con tal motivo se hubieran causado. En la demanda no se estableció, ni el curso del juicio se comprobó, cuál de los derechos y garantías constitucionales fueron violados, faltando en tal virtud el fundamento de la acción ejercitada, la improcedencia de la demanda era evidente. Por otra parte, los arts. 190 y 192 de la Constitución de la Provincia entonces vigente disponían, que los Jueces podían ser acusados por cualquiera del pueblo por delitos y faltas cometidas en el desempeño de sus funciones, ante un Jury calificado, compuesto de siete Diputados y cinco Senadores profesores en derecho, los que después de admitida la acusación



por daños y perjuicios ante los tribunales ordinarios, si la acción tiene por fundamento actos llevados á efecto en su

debían pronunciar un veredicto declarando al Juez acusado culpable ó no culpable de los hechos imputados. El art. 194 establecía con precisión cuáles eran los delitos y faltas acusables, estableciendo al mismo tiempo las condiciones para que la acusación fuese admitida. Es principio general, que de todo delito nacen dos acciones: la pública y la privada, y aunque ellas son independientes, las condiciones para el ejercicio de la una influyen muchas veces sobre las condiciones para el ejercicio de la otra. Tratándose de delitos ó faltas cometidos por los Jueces en el desempeño de sus funciones, la Constitución había establecido ante quién debía ser perseguida la acción pública, pero como todos los motivos que existen para haber separado de la jurisdicción ordinaria la instrucción de los procesos por dichas faltas ó delitos, la declaración de su existencia y apreciación de su naturaleza, cuando se trata de la acción pública, existen igualmente cuando se trata de la acción privada: se deduce con toda evidencia, que en este caso la acción pública tiene que ser siempre prejudicial á la acción privada. Para que la acción por daños y perjuicios proceda, es necesario que exista el hecho generador, esto es, la falta ó delito que se imputa al Juez, pero si es solo al Jurado de doce miembros de la Legislatura, ó profesores en derecho á quienes corresponde declarar que la falta ó delito existe, no puede sostenerse que los Tribunales ordinarios sean también competentes para hacer igual declaración. No habiendo sido dictada la ley reglamentaria á que se refiere el art. 194 y no sabiéndose por lo tanto, cuáles sean las faltas ó delitos acusables, ni el procedimiento que debe seguirse ante el Jury, no pueden aplicarse las disposiciones que al respecto contiene la Constitución, y es preciso entonces ocurrir á los principios del derecho y á las demás leyes generales que estatuyen sobre la materia para la solución del presente caso. La Ley 19, tit. 1º, libro 2º, F. J. dice: «El Juez no debe haber ninguna pena jurando que non judgo tuerto, por amor, ni por cobdicia, ni por ruego sinon por ignorancia.» La Ley 2ª, tit. 2º, lib. 2º, F. R. dice: «si el alcalde judgó tuerto ó mando tomar alguna cosa por negligencia que lo no entiende, jure que lo no fizo por ruego, por amor, ni por precio é non haya ninguna pena.» La Ley 24, tit. 22, Part. 3ª, después de señalar las penas de los Jueces que juzguen á «sabiendas contra derecho» dice: «que si juzgase por necesidad se debe salvar de la pena jurando que aquel juicio non lo dió maliciosamente más por yerro ó por su disentendimiento ó por non saber escoyer el derecho». Estas leyes demuestran con evi-



carácter de funcionarios del poder judicial.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 345, Ser 3ª.

15.—Daños y perjuicios—Los Tribunales ordinarios son dencia que solo puede hacerse personalmente responsable á los Jueces, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones, cuando ha habido de su parte dolo ó fraude ó cuando ha procedido con ignorancia inexcusable ó con gran negligencia, que se asimilan al dolo, «quasi ex-delicto» pero no se puede en esta materia invocar los arts. 3º y 6º, tit. 9º, Sec. 2ª, lib. 2º del Cód. Civ., porque como dice Duvergier refiriéndose al art. 1382 del Cód. Civ. de Francia que contiene una disposición análoga, «esto sería hacer responsables á los Jueces de toda especie de faltas, lo que nadie puede sostener razonablemente.»—Toulliez Duvergier, tom. 6º, pág. 163, nota.—Responsabilizar á los Jueces por error en sus apreciaciones, sería contra todo principio de equidad, atenta la debilidad del criterio humano y la facilidad de penetrar en las sendas del error, en una ciencia tan vasta y complicada como la del derecho y sobre todo en su aplicación á los casos prácticos, pues por más sabias y previsoras que sean las leyes, la mayor parte está librada á la especulación y pueden calificarse de raros los casos en que la ley se aplica de una manera directa y terminante, con relación á los que es preciso ocurrir á la deducción. Y es justamente para salvar á los litigantes de los errores en que pueden haber incurrido los Jueces, que se ha instituido el remedio de la apelación. Concediendo la ley el recurso de apelación y siendo un principio de derecho y de orden público que la cosa juzgada sea tenida por verdad, sería una verdadera inconsecuencia dar á los litigantes el derecho de demandar á los Jueces por perjuicios causados por una interpretación errónea de la ley, porque ó la sentencia en que así se interpretó la ley fué apelada y el error quedó enmendado, pasando la última sentencia en autoridad de cosa juzgada, ó bien fué consentido el error y en este caso debe imputarse á sí mismo el litigante los perjuicios que le causa el no haber empleado los remedios legales. Las consecuencias legales que surgen de estas últimas consideraciones han venido á ser modificadas con motivo de la disposición terminante del artículo 245 del Cód. Penal, el que establece en su inc. 1º, que comete prevaricato el Juez que espida sentencia si fuese contraria á la ley espresamente invocada en autos.

15.—La demanda fué entablada contra el Intendente Municipal sobre indemnización de daños y perjuicios causados demorando sobremanera el despacho de una solicitud en que se pedía línea para edificar. El demandante, procediendo bajo la base de que por nuestro sistema



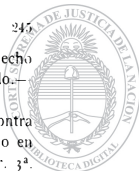
competentes para entender en una acción por daños y perjuicios instaurada contra un funcionario público, sin que

de gobierno, todos los funcionarios públicos son responsables por los delitos ó faltas que cometan en desempeño de sus cargos, sostenía que debe serlo igualmente el Intendente Municipal, cuando por una conducta arbitraria agravié á los particulares en sus derechos, siendo los Jueces ordinarios los que han de hacer efectiva esa responsabilidad. Dijose encontrarse reglamentada la materia en los arts. 1109 y 1112 del Cód. Civ., que declara á todos, incluso los empleados públicos, obligados á reparar el daño que ocasionan á cualquiera por su culpa ó negligencia, no llenando sus deberes ó no cumpliéndolos más que de una manera irregular. Respecto al Intendente y demás empleados de la Municipalidad, cita el art. 70 de la Ley Org., fecha 23 de Octubre de 1882, según el cual responde ante los Tribunales ordinarios por los daños y perjuicios que ocasiona al público ó á los particulares con actos que importan transgresión ú omisión en sus deberes. El demandado opuso la escepción de incompetencia fundándose en que se pretendía imponer responsabilidad al Intendente Municipal por un acto administrativo ejecutado en ejercicio de sus funciones, y que en ese caso no es competente para declarar la jurisdicción ordinaria, pues aun cuando aquél deba responder por sus faltas ú omisiones, es necesario con todo que éstas sean previamente reconocidas y calificadas por el Consejo Deliberante, sin lo cual la administración se haría imposible, siendo turbada y trabada á cada paso. Se pregunta, ¿es exacto que los Tribunales ordinarios, en regla general, sean incompetentes para juzgar los actos administrativos en que se pretende haber existido abuso, con agravio del derecho de los particulares, sin que antes los haya calificado el Superior, de quien dependa el funcionario que los haya producido? De ninguna suerte, porque el admitirlo sería aceptar un principio, el menos liberal, el menos favorable á las garantías individuales. Aunque en Francia y en otras naciones monárquicas que la han seguido se haya establecido así efectivamente ese sistema pernicioso que á cada paso viene á encargar á los particulares con los ministros, dificultando sobremanera las reclamaciones por abusos de los funcionarios públicos, ha sido desechado de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos donde la responsabilidad de aquéllos es directa ante los Tribunales,—Lieber: *La libertad Civil*, tom. 1º, cap. 10, núm. 11, pág. 119. Tocqueville: *La Democracia en América*, lib. 1º, cap. 6º, párrafo 2º, pág. 75. Paul Odent: nota art. 951, de Story.—Habiendo adoptado nosotros por modelo la Constitución Norte-Americana, halla-

sea necesario que los Superiores del demandado se pronuncien sobre su culpabilidad.—Jur. Civ., tom. 3, página 89, Ser. 3ª.

mos en nuestras instituciones consignada la misma doctrina que derivan de los principios fundamentales de aquélla—Ley Nacional de Set. de 1863, art. 2º—sin que por tanto para responsabilizar á un funcionario, sea indispensable llevar la queja gradualmente hasta el Superior antes de ocurrir á los Tribunales en demanda de justicia por cualquier abuso.* Los Tribunales ordinarios juzgan ciertamente sobre actos administrativos, pero examinándolos exclusivamente bajo una fas sola, la del abuso que pueda haber agraviado al particular en sus derechos perfectos, y no por eso debe recelarse el que dificulte ó trabe la administración, pues no es de temerse seguramente en manera alguna el que sin fundamentos de justicia se multipliquen reclamaciones bien difíciles de suyo. Aun cuando el Intendente Municipal, pudiendo ser removido por su mala conducta, se encuentra sujeto á un procedimiento administrativo ante el Concejo Deliberante, semejante al juicio político, no es sin embargo inmune ni de consiguiente se encuentra á cubierto de demandas ante los Tribunales ordinarios por la necesidad de que preceda dicho juicio y de que en él recaiga condenación que lo remueva de su puesto. No hay en esto incompatibilidad alguna, y en Estados Unidos, aunque todo funcionario público puede ser acusado en juicio político, esta circunstancia no excluye de modo alguno, respecto de los inferiores, su responsabilidad directa delante de los Tribunales, antes ó después del indicado juicio que solo tiene por objeto su remoción y que á veces no procedería por no ser falta sumamente grave—Reus, Jurisprudencia Constitucional, Sec. 4ª, pág. 122.—Es una teoría rara é inadmisible la que sostiene que las disposiciones del tít. 9º, Sec. 2ª, lib. 2º del Cód. Civ., en cuanto conciernen á la responsabilidad de los funcionarios municipales se han hecho para ser aplicadas únicamente por el Concejo Deliberante, quedando reducido el papel de los Tribunales á ejecutar las resoluciones y liquidar el valor de los perjuicios por abusos que aquél reconozca; en tal caso el Concejo sería, pues, el verdadero juez, siendo que por los principios de nuestra Constitución—art. 95—las funciones ejecutivas ó administrativas son absolutamente incompatibles con las judiciales. Puesto que el Concejo Deliberante tiene facultades para remover ó reconvenir al Intendente, bien ha podido en el caso presente el Intendente llevar á su conocimiento lo que sucedía, y aun quejarse de la conducta morosa de aquel funcionario, sin que esto importara reconocerlo por Juez competente en el asunto, una vez





16. Daños y perjuicios—No procede el pago si el hecho tuvo origen por culpa ó imprudencia del damnificado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 128, Ser. 3ª.

17. Daños y perjuicios—Procede la acción civil contra el acusador si se produce la absolución del acusado en el proceso criminal. —Jur. Civ., tom. 3, pág. 26, Ser. 3ª.

18. Daños y perjuicios Para que proceda esta acción deducida por el propietario contra el locatario por los deterioros, debe justificarse que son mayores de los que impone el uso regular de la cosa locada, é intencionales. —Jur. Civ., tom. 4, pág. 5, Ser. 3ª.

19. Daños y perjuicios—Justificado el consentimiento del locatario para la construcción de las obras ordenadas por el locador, procede el rechazo de la acción de daños

que tomara el carácter de contencioso, ni radicar allí el juicio, en términos que se haya producido *litispendencia*. No procedería en verdad, equivocada ó irregularmente quien se quejase de un Comisario al Jefe de Policía, más esa queja no importaría por cierto un juicio contencioso que inhibiese al interesado para entablar acusación ante los Tribunales ordinarios, porque obsten la *litispendencia*, no pudiendo confundirse jamás un procedimiento puramente administrativo con el juicio ordinario y contradictorio ante Juez competente. Podría alguien quejarse del Jefe de Policía al señor Ministro del Interior por excesos ó desmanes que supusiera haber cometido; el señor Ministro haría entonces ó no lugar á la reclamación, pero su negativa jamás impediría al agraviado ocurrir á la justicia ordinaria ni sería tampoco indispensable esperar su resolución si esta demorara indefinidamente, para que la acusación en forma fuese procedente ante los Tribunales.

16—Para que el autor de un acto que causa perjuicio á otro, sea responsable de sus resultados, se requiere que sea causado por culpa ó imprudencia de aquél—art. 1109, Cód. Civ.

17—Arts. 1089 y 1090 del Cód. Civ.

18—Arts. 1554, 1559, 1561, 1562, 1563, 1567, 1568, 1569 y 1570.

19—El art. 1524 del Cód. Civ. exige que las construcciones se hagan contra la voluntad del locatario para que éste tenga derecho á ser indemnizado.



y perjuicios, fundada en ese solo hecho.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 208, Ser. 3ª.

20. **Daños y perjuicios**—No procede esta acción por falta de cumplimiento de un contrato bilateral, si en oportunidad no se demanda su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 254, Ser. 3ª.

21. **Daños y perjuicios**—Declarada la responsabilidad por los daños y perjuicios, es indispensable justificar su existencia é importancia.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 309, Ser. 3ª.

22. **Daños y perjuicios**—La omisión, por parte de una empresa de transporte, de medidas tendentes á prevenir el daño de terceros en sus vías, es un acto ilícito por el cual es responsable civilmente de los daños y perjuicios que haya causado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 36, Ser. 3ª.

23. **Daños y perjuicios**—El comprador en remate judicial, que no lleva á efecto la escrituración, se hace responsable de la diferencia de precio, daños y perjuicios y gastos del nuevo remate, si el desistimiento ha sido sin causa justificada.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 108, Ser. 3ª.

24. **Daños y perjuicios**—El propietario de un terreno

20—Véase: verb. *Contrato bilateral*, núm. 3.

21—En toda demanda de daños y perjuicios hay dos cuestiones á resolver: 1ª Si el que los causa está obligado á resarcirlos: 2ª Si hay efectivamente daño causado. La importancia no es cuestión indispensable porque puede el Juez fijar un límite dentro del cual deba la parte prestar el juramento de acuerdo con lo dispuesto en el art. 220 del Cód. de Proc. Véase el núm. 3.

22—Véase: verb. *Acto ilícito*, núm. 4.

23—Art. 519 del Cód. de Proc.

24—El propietario tiene el derecho de poseer la cosa, de disponer ó de servirse de ella, de usarla ó gozarla según su voluntad, pudiendo desnaturalizarla, degradarla ó destruirla, (art. 2513 del Cód. Civ.)—sin que el ejercicio de estas facultades pueda serle restringido porque tuviera por resultado privar á un tercero de alguna ventaja, comodidad ó placer,



puede hacer en él las obras que crea necesarias, y los propietarios de los fundos adyacentes carecen de derecho para

ó traer algunos inconvenientes, con tal que no ataque su derecho de propiedad. Ocupándose el Código de las restricciones y límites del dominio, prescribe que las obras y trabajos hechos por un propietario en su fundo, que sin causar á los vecinos un perjuicio positivo ó un ataque á su derecho de propiedad, tuviese simplemente por resultado privarle de ventajas de que gozaban hasta entonces, no les dan derecho para una indemnización de daños y perjuicios—art. 2620.—Si de la ley pasamos á la razón filosófica que le ha servido de fundamento, encontramos que la prescripción de este art. 2620 es la que debe resolver la cuestión presente. La propiedad del suelo se extiende á toda su profundidad y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares,—art. 2518,—ya sea que cave ó que edifique, el propietario no hace más que usar de ella, dentro de los límites, sin intentar contra la propiedad vecina, y sin enviarle nada de nocivo y perjudicial. Puede entonces cavar tan abajo y edificar tan alto como le plazca, sin que el vecino pueda querellarse, aun cuando la utilidad ó el valor de su propiedad aminorasen notablemente. Este principio era formalmente enseñado por los jurisconsultos romanos, quienes lo fundaban en que no parece que cause daño el que priva á otro de aquello que disfrutaba por causa lucrativa, pues es muy diferente que uno cause daño á otro ó que le prive de aquello de que se utiliza—Ley 26, tit. 2º, lib. 39, Dig.—Tal era también la doctrina de los antiguos jurisconsultos franceses. Cavar un pozo en mi propiedad, aunque el pozo del vecino se agotase, no deja de ser un hecho permitido, es puramente un caso fortuito, y propiamente hablando, el vecino sufre menos un daño efectivo que la cesación de un provecho casual, accidental, provisorio, con el cual no debía contar.—Demolombe, tit. 12, párrafo 647; Toullier, tom. 2, párrafo 328; Zachariæ, tom. 2, párrafo 57; Marcadé, sobre el art. 774 del Cód. francés; Aubry y Rau, párrafo 194.—Desarrollando la misma doctrina, Demolombe se espresa en estos términos: «De dos propietarios vecinos, si el primero usa de su derecho de propiedad sin duda que no puede atentar á la propiedad vecina, respecto á su forma de explotación actual ó aun solamente á su destino natural; pero también es necesario reconocer que puede por su obra nueva, hacer más costoso para el vecino una nueva forma de explotación ó de construcción que éste quisiese establecer en segunda... Es, pues, cierto que la preocupación respecto del ejercicio de los derechos de propiedad, puede dar á uno de los propietarios una ventaja sobre el otro, en el sentido que todo propietario debe



reclamar daños y perjuicios por el menor precio que ellas hayan causado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 304, Ser. 3ª.

25. **Daños y perjuicios**—El derecho á cobrar daños y perjuicios que la ley concede al propietario limítrofe, solo puede resultar de los causados en obras existentes y en manera alguna sobre las hipotéticas que pensaba construir.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 304, Ser. 3ª.

26. **Daños y perjuicios**—Es improcedente esta acción fundada en la falta de cumplimiento de un contrato de sociedad civil, si no existe escritura pública, siendo por un

emplear á sus espensas los medios necesarios para que cualquiera obra que él establezca no dañe á la propiedad vecina, en el estado en que ella se encuentre entonces.» Párrafo 659. Si un propietario es positivamente perjudicado por los trabajos hechos por otro en el terreno de su propiedad y dentro de los límites que á su dominio le atribuye la ley, no puede querellarse porque esos trabajos hagan desmerecer el valor de sus terrenos, cuando el demandado ni ha atentado contra las propiedades de los demandantes, ni las ha dañado en el estado en que se encontraban cuando efectuó dichos trabajos. Y debe tenerse también en cuenta, que según resultaba del escrito de demanda, las excavaciones practicadas habían tenido por objeto extraer la arena, de que se compone el suelo, para venderla. Siendo ello así, es indudable que los demandantes para edificar, tendrían forzosa necesidad de llevar los cimientos de las paredes hasta la tosca ó tierra firme, porque es sabido que no puede edificarse sólidamente sobre la arena, y en tal concepto, las excavaciones hechas por un colindante y rellenadas después, no pueden afectar la solidez del suelo ni obligar á los demandantes en caso de edificar, á hacer más trabajos de cimentación que los que necesariamente habrían hecho aunque no se hubiera extraído la arena por medio de las excavaciones espresadas.

25—Véase el número precedente.

26—El art. 1184 en su inc. 3º prescribe la forma de escritura pública para los contratos de sociedad que excedan de esta suma, ó cuando alguno de los contrayentes aportase bienes inmuebles: esta forma no puede ser suplida, y careciendo de ella, no vale—art. 1147, *ibid*—No existiendo contrato, la acción que se deduce por daños y perjuicios es improcedente, porque esta sería la consecuencia de aquel, y es sabido que no hay efecto sin causa.



capital de más de mil pesos moneda nacional.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 333, Ser. 3ª.

27. **Daños y perjuicios**—Siempre que ha precedido la acción criminal, la civil por daños y perjuicios solo puede resultar después de la terminación de la primera.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 333, Ser. 3ª.

28. **Daños y perjuicios**—Fundados en la falta de cumplimiento de un contrato de locación, requieren indispensablemente la justificación de que existió el contrato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 387, Ser. 3ª.

29. **Daños y perjuicios**—La suma acordada por la rescisión de un contrato debe conceptuarse la utilidad que su cumplimiento debía reportar en tanto no se justifique plenamente que debe imputarse a los daños y perjuicios resultantes de la inejecución.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 400, Ser. 3ª.

30. **Daños y perjuicios**—La absolución ó declaración de

27—Art. 1101 del Cód. Civ.

28—Véase: *Contrato de locación*, núm. 7.

29—Véase: *Contrato rescindido*, núm. 2.

30—En el juicio criminal se dejó completamente á salvo al damnificado su derecho para ejercitar la acción civil emergente del hecho. El juicio civil, tiene por objeto una acción completamente distinta de la criminal. El primero se promueve con el objeto de saber si el hecho generador del proceso entraña un delito previsto en la ley penal y del que pudiera responsabilizarse á su autor. En el juicio civil el actor se propone obtener del causante del daño las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados. El caso no se encuentra comprendido en el art. 1103 del Cód. Civ., que impide alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución en el juicio criminal, porque ambos juicios, como se ha dicho, tienen un fin distinto.—Véase Segovia, Cód. Civ., tom. 1, pág. 301; y Llerena, concordancias al Cód. Civ.—Este último, comentando el recordado artículo dice: «Otro tanto sucede tratándose de hechos que el Juez del Crimen ha juzgado como no pasibles de pena, como sería el caso de un delito puramente civil. El demandante no podría en tal caso probar en



inculpabilidad hecha en el juicio criminal, no importa enervar el derecho del damnificado por los daños y perjuicios procedentes del cuasi-delito que legisla la acción civil.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 374, Ser. 3^a.

31. **Daños y perjuicios**—La falta de condenación en costas en la acusación criminal, y la de pronunciamiento sobre los daños y perjuicios solicitados por el acusado, no hace cosa juzgada en la acción civil, fundada en la sentencia absolutoria.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 269, Ser. 3^a.

32. **Daños y perjuicios**—La falta de derecho para reivindicar, hace inadmisibile la acción de daños y perjuicios que

juicio civil que el delito acusado y del que el demandado ha sido absuelto, es imputable ó es punible por el derecho penal. En cambio puede probar que si bien el demandado ha sido absuelto, el hecho constituye á los ojos de la ley civil un delito que obliga al que lo cometió á indemnizar el daño causado.» Esta ha sido asimismo la jurisprudencia establecida por la Cámara.—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 3.

31—El Juez de lo Criminal, no puede entrar en la apreciación de los daños que son materia de un juicio extraño á su jurisdicción. La indemnización del daño causado por un delito solo puede ser materia de una acción civil, independiente de la acción criminal—art. 1096, Cód. Civ.—y es por esto que la sentencia del juicio criminal solo puede limitarse á condenar ó absolver al reo.

32—La acción de daños y perjuicios de que se trata, es la que compete al propietario de un terreno contra el que lo enagenó á un tercero y que acuerda el art. 2779 del Cód. Civ., como subsidiario en vez de dirigir la acción contra el actual poseedor. El demandado dijo que la acción reivindicatoria deducida y la subsidiaria de daños y perjuicios debían ser rechazadas porque el actor jamás había tenido la posesión ni se le había hecho tradición del inmueble. La acción subsidiaria de daños y perjuicios solo es procedente siéndolo la de reivindicación: resuelta la procedencia ó improcedencia de la acción reivindicatoria, se resuelve también la de daños y perjuicios. El art. 2758 dice que la acción de reivindicación nace del dominio que uno tiene de las cosas particulares, por la cual, el propietario que ha perdido la posesión la reclama y la reivindica contra aquel que se encuentra en poder de ella. No

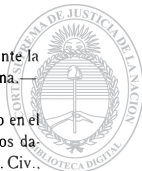
la ley concede como subsidiario.—Jur. Civ., tom. 6, página 346, Ser. 3ª.

33. Daños y perjuicios—La responsabilidad por ellos.

probada la posesión anterior del reivindicante, no procede la acción reivindicatoria, y por consiguiente tampoco procede la acción por daños y perjuicios emergentes de la enagenación de la cosa que se pretende reivindicar.

33—El art. 1124 del Cód. Civ. establece la responsabilidad del dueño de un animal doméstico ó feroz, del daño causado. Pero esa responsabilidad está fundada en la presunción de culpa de parte del propietario del animal; y por consiguiente, si no existe culpa la responsabilidad desaparece. El propietario tiene en su contra esa presunción, pero ella no es *juris et de jure*, es tan solo *juris tantum*. El rigor de la ley no es incondicional, y por consiguiente cuando la inculpabilidad está declarada en el juicio criminal constando de una manera auténtica con anterioridad al juicio civil, no puede ella ser desconocida por la sola presunción de la ley que cede ante la prueba de la contraria, y esa prueba se presenta con todos los caracteres constitutivos de la que es plena. El art. 1128 establece que cuando el daño causado proviene de culpa imputable al que lo ha sufrido, cesa la responsabilidad del dueño: en buena lógica tiene que reconocerse que la responsabilidad está fundada en la presunción de culpa. La ley ha tenido que preocuparse forzosamente de la situación jurídica creada por el daño de un ser inconsciente entre el propietario ó poseedor del mismo y el que es dañado. Ha partido de la base muy justa de que en la generalidad de los casos hay presunción de falta en el dueño ó poseedor, sea porque siendo él quien goza de los beneficios que el animal le produce, debe estar á las pérdidas ocasionadas por él mismo, sea porque él ha podido tomar las precauciones necesarias para evitar el perjuicio. Es por esto, que la ley presume la responsabilidad del dueño, y es por eso que cuando media fuerza mayor ó culpabilidad en el que recibe el daño, cesa aquella responsabilidad—art. 1129—Concurriendo ambos resultados á la conclusión de que la responsabilidad es solo á consecuencia de la culpabilidad presunta del dueño en el hecho del animal. De dos inculpables debe reparar el daño aquel que ha tenido más facilidades para evitarlo, ó que puede ser tachado de omiso ó negligente. A medida que el dueño del animal aumenta el peligro; á medida que de la necesidad de servirse de las bestias para las necesidades de la vida los convierte en instrumentos de placer, la responsabilidad aumenta hasta hacerse efectiva aunque no fuese posible evitar el daño—art. 1129—Esta es la doctrina admitida





que la ley impone al dueño de un animal, solo cede ante la prueba plena de que el hecho es imputable á la víctima.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 374, Ser. 3ª.

34. Daños y perjuicios—La absolución del acusado en el juicio criminal, hace responsable al acusador de los daños y perjuicios que haya irrogado la querella.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 269, Ser. 3ª.

35. Daños y perjuicios—Para fijar la suma dentro de la cual el damnificado debe prestar el juramento estimatorio, los jueces deben tener presente además de la pérdida justifi-

por los autores, y así Sourdou en su obra sobre responsabilidad, observa que el daño causado por animales, es ordinariamente una consecuencia de la falta de aquellos á quienes pertenecen, que debían haberlos vigilado y servidos de ellos de manera que no perjudiquen á los demás.—Edición de 1875, pág. 564—Sirey, registra en el volumen de sentencias de 1867, una, en que la Corte de Montpellier declara terminantemente que la responsabilidad impuesta en el art. 1385 del Cód. Nap., está fundada en una presunción de falta personal—tom. 2, pág. 220—y ese artículo contiene la misma disposición del 1124 de nuestro Código, y nuestro codificador lo cita en la nota. Aubry y Rau, que sostienen la responsabilidad en todos los casos, sin admitirse al propietario la prueba de no haber incurrido en falta, han tenido que admitir en la nota 10 al § 448, que la responsabilidad está fundada en la presunción de falta. Al discutirse el artículo del Código francés igual al nuestro, decía un orador: «Para que el daño esté sujeto á reparación, debe ser efecto de una falta ó imprudencia de parte de alguno: si no puede ser atribuida á esa causa, no es sino obra de la suerte y cada uno debe soportar las eventualidades.» Es sobre este principio que descansa la responsabilidad del propietario con relación á los daños causados por animales, de donde se concluye sin esfuerzo que si hay presunción, la ley no excluye la prueba contraria. En el mismo sentido puede verse una sentencia de la Corte de Bruselas de 3 de Enero de 1863, como en las de los tribunales de Gaud y París de 1861, 1862 y 1863; Laurent, Principios de Derecho Civil, tom. 20, § 620.

34—Véase el núm. 17.

35—El *damnum emergens* y el *lucrum cessans* de que nos habla el artículo 519 del Cód. Civ. Véase verb. *Condición*, núm. 3.



cada, la ganancia dejada de percibir.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 228, Ser. 4^a.

36. **Daños y perjuicios**—Para fijar el monto de la indemnización de los daños y perjuicios causados por un delito, debe tenerse en cuenta: *a)* La naturaleza de los perjuicios; *b)* El género de necesidades que la indemnización debe llenar; *c)* Las condiciones de fortuna del condenado á satisfacerlas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 249, Ser. 4^a.

37. **Daños y perjuicios**—Reconocido el derecho á la retención, la acción de daños y perjuicios fundada en ese derecho, debe declararse improcedente.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 357, Ser. 4^a.

38. **Daños y perjuicios**—La suma que se adeuda por la tenencia de la cosa, debe ser fijada en el juicio iniciado por el que ejerce el derecho de retención, y no en el de daños y perjuicios iniciado por el propietario.—Jur. Civil, tom. 10, pág. 357, Ser. 4^a.

39. **Daños y perjuicios**—La calificación de prófugo hecha al rebelde, no importa la comisión de un acto ilícito

36—Véase nota precedente.

37—Porque la detención en este caso se hace en ejercicio de un derecho, lo que no puede constituir en ilícito ningún acto—art. 1071 del Cód. Civ.—No habiendo acto ilícito, no procede el derecho á pedir una indemnización.

38—El art. 3939 del Cód. Civ. acuerda el derecho de retención al tenedor de una cosa ajena hasta el pago de lo que le es debido por razón de esa misma cosa. Cuando ese tenedor inicia un juicio á fin de hacer efectivo este derecho acordado por la ley, es allí donde deben resolverse las cuestiones que tienen atingencia directa é inmediata con ese derecho. Ocurred á otro juicio, sería ir contra el orden regular de proceder en los litigios. Es allí donde debe resolverse si se ha usado ó abusado del derecho invocado para deducir en consecuencia las acciones que pueden surgir del abuso cometido.

39—Véase *Acto ilícito*, núm. 1.



que pueda fundar una acción por daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 312, Ser. 3ª.

40. Daños y perjuicios—La retención de mercaderías por orden de autoridad competente, no puede fundar una acción por daños y perjuicios procedentes de la falta de entrega.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 5, Ser. 3ª.

41. Daños y perjuicios—Si el mandatario estiende el contrato á nombre propio, se hace responsable personalmente de los daños y perjuicios que la falta de cumplimiento irroque al tercero, aun cuando se justifique que éste conocía su carácter de mandatario.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 33, Ser. 3ª.

42. Daños y perjuicios—Es bastante, el poder conferido con el objeto de pedir la nulidad de un acto jurídico, para reclamar en el mismo pleito los daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 109, Ser. 3ª.

43. Daños y perjuicios—Si no existe prueba plena sobre el precio del terreno que motivó la obligación de hacer convertida en la de indemnización de daños y per-

40—Podría esa falta de entrega dar lugar á una acción contra quien solicitó y subsidiariamente contra quien ordenó indebidamente el embargo; pero no contra el que retuviese las mercaderías, pues no puede decirse que él hubiese procedido ilegalmente y que fuese consiguientemente responsable de los daños y perjuicios, desde que procede en virtud de una orden emanada de autoridad competente—art. 1071 del Cód. Civ.

41 Arts. 1929, 1930 y 1946 del Cód. Civ.; Troplong, *Mandat* § 509; Pothier, tom. V, pág. 207; F. S. C. N., tom. 13, pág. 319, Serie 2ª; tom. 6º, pág. 284, Ser. 1ª, Jur. Civ.

42—La Cámara consideró que dadas las designaciones contenidas en el poder, estaba suficientemente individualizado el acto á que se refería el incidente. Por otra parte, el mandante había ratificado la acción que se decía instaurada sin poder bastante.

43—Las reglas de equidad son de indiscutible aplicación cuando el criterio judicial tenga que aplicarse como base de apreciación.



juicios, los jueces deben fijarla equitativamente.—Jur. Civil, tom. 7, pág. 220, Ser. 3^a.

44. Daños y perjuicios—La inhibición indebida responsabiliza al que la solicitó, por los daños y perjuicios que se causen al inhibido.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 280, Ser. 3^a.

45. Daños y perjuicios —El demandante por daños y perjuicios procedentes de una inhibición indebida, está obligado á justificarlos; la falta de prueba hace procedente la absolución del demandado.—Jur. Civ., tom. 7, página 280, Ser. 3^a.

46. Daños y perjuicios—La culpa de la víctima no exi-

44—Si el que solicita una inhibición no ajusta su proceder á las exigencias de la ley, al proceder así se hace culpable y negligente, y consiguientemente pasible de los daños y perjuicios—art. 1109, Código Civ.

45—En virtud del principio general establecido en la Ley 1^a, tit. 14, Part 3^a. En toda acción de daños y perjuicios, hay dos extremos que deben comprobarse: 1^o, que el daño realmente existió; 2^o, que el reclamante tiene derecho á ser indemnizado. La falta de cualquiera de estos dos elementos es bastante para que la acción no pueda prosperar.

46—Los arts. 1109, 1113 y 1122 del Cód. Civ., disponen que el que ejecuta un hecho que por su culpa ó negligencia ocasiona un daño, está obligado á la reparación del perjuicio. Para determinar el alcance de esa responsabilidad, es necesario tener en cuenta varias circunstancias, como ser cuando la víctima también tiene su parte de culpa ó imprudencia. Laurent dice, comentando el art. 1382 del Cód. Nap., concordante con el 1109 del nuestro, al ocuparse del conflicto de culpas que resulta comunmente de los accidentes ocasionados por vehículos: «Nosotros no admitimos la irresponsabilidad sino en el caso que la imprudencia de la víctima haya sido la sola causa del accidente. Es necesario no olvidar que el rigor de la ley en los casos de cuasi-delitos tiene por objeto salvaguardar la vida de los hombres. La consecuencia más natural de la culpa, es no declarar libre de toda responsabilidad al autor de un hecho perjudicial, sino que debe ésta ser disminuida de tal manera que los daños é intereses á indemnizar deben estar en



me á la empresa de la responsabilidad por los daños y perjuicios en que incurren por la omisión de aquellas medidas que pudieran haber evitado el accidente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 289, Ser. 3ª.

47. **Daños y perjuicios**—La sentencia recaída en el juicio sumario de desalojo, no hace cosa juzgada en el que sobre daños y perjuicios por la falta de cumplimiento del contrato de locación deduzca el locatario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 303, Ser. 3ª.

48. **Daños y perjuicios**—El locador que exige judicialmente el desalojo faltando á lo estipulado en el contrato de locación sobre prórroga, es responsable por los daños y perjuicios que con su conducta ilícita cause al locatario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 303, Ser. 3ª.

49. **Daños y perjuicios**—Si el demandante á pesar de tener derecho á ser indemnizado de los daños y perjuicios, no justifica su existencia, debe absolverse al demandado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 303, Ser. 3ª.

50. **Daños y perjuicios**—No existiendo término estipulado para la locación, el locador tiene derecho á rescindir el contrato en cualquier tiempo, sin que ese hecho pueda fundar una acción por daños y perjuicios.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 315, Ser. 3ª.

51. **Daños y perjuicios**—La omisión, por parte de la víctima, de proporcionar al grado de la culpa, y ésta disminuye cuando el daño es imputable en parte á la falta de quien lo experimenta.—Principios de derecho civil francés, tom. 20, pág. 522.

47—Véase *Contrato de arrendamiento*, núm. 14.

48—Véase *Contrato de arrendamiento*, núm. 16.

49—Véase los núms. 3, 8, 21 y 45.

50—Véase *Contrato de arrendamiento*, núm. 12.

51—Esta sentencia fué dictada por la Cámara por mayoría de un voto. Los antecedentes de la causa comprobaron que una persona de 20 años de edad pretendió subir al coche de un tranvía por la plataforma



tima, de aquellas medidas precaucionales que pudieron evitar el accidente, arrojan sobre ella la culpa, y exime de

delantera cuando éste iba al galope de los caballos, cayendo debajo del carruaje donde murió destrozado por las ruedas. Como se ve, hubo concurrencia de faltas, siendo aplicable el principio sentado por esta misma Cámara en el núm. 46. La Cámara como siempre haciendo caso omiso de los principios sustentados por ella en otros casos resolvió el presente en contra de aquél. El señor Camarista Dr. Gimenez en cuyo voto se fundó la mayoría para resolver la cuestión dijo, que de los antecedentes de la causa no había encontrado nada que fuese suficiente á constituir los elementos que la ley exige para responsabilizar á la empresa por las consecuencias originadas por el accidente, ni culpa, ni negligencia que pueda imputársele al cochero: que por el contrario todas las constancias de autos demostraban que el daño sufrido solo era imputable á la víctima, y que por consiguiente el art. 1111 eximía de responsabilidad á la empresa. Resultaba comprobado el hecho de que la víctima pretendió subir al coche por la plataforma delantera mientras iba éste á gran velocidad, aunque se le hizo seña al cochero á fin de que se parase. Pretender subir al coche en tales condiciones, no solo importa una grave falta, una imprudencia, sino también una flagrante infracción á las ordenanzas Municipales, que prohíben á los pasajeros subir ó bajar cuando los coches están en movimiento. Se dijo que la víctima en su carácter de empleado de la empresa no podía subir sino por la plataforma de adelante porque así lo mandaba la empresa á sus empleados; y que si perdía ese tranvía llegaría tarde á su empleo, siendo despedido: la empresa contestó diciendo que ella no obliga á sus empleados á viajar en sus coches y que si á ello se vió precisada la víctima para llegar con puntualidad á su empleo, no debió en ningún caso subir esponiéndose á los peligros fáciles de presumir por la marcha veloz del coche, y si con todo lo hizo, deben serle imputables las consecuencias inmediatas de un hecho ejecutado con libre albedrío, tanto más cuanto que las condiciones en que el coche marchaba le obligaban á proceder con mayor prudencia. En el caso que nos ocupa no se comprobó la obligación impuesta á sus empleados por la empresa de subir por la plataforma delantera. Se adujo finalmente como argumento que la doctrina sostenida por los autores respecto al conflicto de culpas que resulta comunmente en los accidentes ocasionados por vehículos, no puede aplicarse á este caso en el que ninguna prueba se produjo para demostrar la culpa ó negligencia de la empresa, porque en lo que respecto á la velocidad con que el coche marchaba, tal circunstancia colocaba á la víctima en



responsabilidad á la empresa por los daños y perjuicios demandados.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 328, Ser. 3^a.

52. Daños y perjuicios—Los actos llevados á cabo por un Comisario de Policía estralimitando sus facultades legales, importan un acto ilícito que puede fundar una acción por indemnización de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

53. Daños y perjuicios—El reo de desacato á la autoridad, no puede hacer responsable al funcionario desacatado, por los daños y perjuicios que la prisión fundada en este

el deber de proceder con mayor prudencia, y cuando más, podía haber dado lugar á la aplicación de una multa por infracción á las ordenanzas. La misma dijo, que era un hecho comprobado en autos que los caballos que conducían el coche iban al galope en el momento en que sucedió el accidente. Si hubo imprudencia por parte de la víctima la hubo por parte del conductor, porque las ordenanzas que reglamentan la marcha de los tranvías, con el objeto de evitar accidentes, previenen que los coches deberán marchar al trote corto de los caballos y al pasar las bocacalles al paso—art. 6º del Reglamento de 1872—Ambos por conguiente, violaron el precepto municipal, la víctima por preteuder subir á un coche en movimiento, y el cochero por llevar el vehículo con una velocidad prohibida: ambos ejecutaron actos ilícitos. Decir que si se comparan las faltas, resulta mayor la de la víctima, y partiendo de esta base, establecer que la rapidez de la marcha no fué ni pudo ser por sí sola la causa de la muerte del menor, y por consiguiente exclusivamente de éste la culpa del accidente, es afirmar un error. 1º Porque el accidente no se produjo por culpa exclusiva de la víctima. 2º Porque el principio consagrado en el art. 1111 del Cód. Civ., supone siempre la falta completa de culpa ó negligencia en el autor del hecho, lo que no sucede en el presente caso. 3º Porque es doctrina aceptada que cuando se produce conflicto de faltas, es decir, cuando hay falta, tanto de parte del agente como de parte de la víctima, aunque esta última sea mayor en gravedad, no queda exento por ello el primero, de la obligación legal de reparar el daño, debiendo solo en tal emergencia disminuirse equitativamente la responsabilidad al arbitrio del Juez.—Aubry y Rau, § 446; Dalloz, Códigos anotados, art. 1383.

52—Véase, *Acto ilícito*, núm. 5.

53—Véase *Autoridad*, núm. 2.



delito le haya causado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 396, Ser. 3ª.

54. **Daños y perjuicios**—El demandante por daños y perjuicios debe justificar plenamente la obligación del demandado y el título en virtud del cual tiene derecho á su cobro.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 402, Ser. 3ª.

55. **Daños y perjuicios**—El propietario, como autor de un acto ilícito, es responsable de los daños y perjuicios causados á las víctimas por un accidente ocurrido en su propiedad.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 253, Ser. 4ª.

56. **Daños y perjuicios**—El comprador que desiste de la compra en remate judicial, debe responsabilizarse por los daños é intereses, y además por la diferencia de precio, no obstante la pérdida de la seña.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 39, Ser. 4ª.

57. **Daños y perjuicios**—Los que se ocasionen por falta

54—Véase los núms. 3, 8, 21, 45 y 49.

55—Véase, *Acto ilícito*. núm. 6.

56—La seña que se entrega en las ventas judiciales es tan solo como parte de precio, pero no como arras. Si los daños y perjuicios ascienden á mayor suma de la entregada á cuenta en el acto del remate, el comprador pierde ésta más lo que se necesite para completar los daños y perjuicios que debe abonar si el comprador resolviese sacar nuevamente la cosa vendida á remate—art. 519, Cód. de Proc.

57—Se trata de una demanda por escrituración habiéndose solicitado por la parte actora que al demandado «se le condenase en oportunidad al cumplimiento de la obligación, más los daños y perjuicios que la falta de cumplimiento le ocasiona.» Esta última parte no es procedente, por que el contrato que versa sobre bienes raíces debe ser hecho en escritura pública, y si lo fuese en instrumento privado, puede el que lo otorga ser demandado por la otra parte para que haga escritura pública, bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses—arts. 1185 y 1187 del Cód. Civ.—De aquí resulta que el comprador no debe daños y perjuicios sino después de otorgada la escritura pública ó después de resistirse á su otorgamiento, porque recién entonces quedaría constituido en mora.



de cumplimiento de una obligación de hacer provenientes de la mora, solo proceden después de haberse pedido judicialmente su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 1, página 83, Ser. 4^a.

58. **Daños y perjuicios**—La acción pidiendo el cumplimiento de una obligación de hacer, no puede ser sustanciada y resuelta conjuntamente con los daños y perjuicios que su falta de cumplimiento ocasiona.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 83, Ser. 4^a.

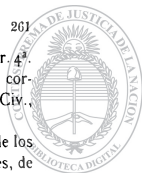
59. **Daños y perjuicios**—Corresponde á la jurisdicción comercial, la ejecución por daños y perjuicios contra los recomendantes de una obligación comercial.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 184, Ser. 4^a.

60. **Daños y perjuicios**—El rechazo de la acción reivindicación declarada improcedente por haberse operado la prescripción, no puede fundar una reserva por

58—Cuando se trata de contratos que en primer lugar deben ser elevados á escritura pública, antes de exigirse su cumplimiento—artículos 1185 y 1187 del Cód. Civ.—Véase nota precedente.

59—El Banco de la Provincia inició juicio contra personas que recomendaron á un tercero en virtud de lo cual el establecimiento le abrió un crédito, siendo responsables siempre que hubiese procedido de mala fe—art. 632 del Cód. de Com. ant.—El acto es comercial—arts. 6 y 7, inc. 2º del mismo Cód., iguales al 7 y 8, inc. 3º del vigente.

60—Los daños y perjuicios fuera de los casos de inejecución de los contratos ó de agravios resultantes de delitos ó cuasi-delitos, pueden resultar de actos ó de hechos de un orden diverso cuya multiplicidad ha debido escapar á las previsiones del legislador. Su reparación no es arbitraria cuando no lo consagra la ley ó el contrato, y necesariamente debe tener un antecedente de hecho ó de derecho que los justifique. Así en la acción reivindicatoria no se discute el fondo del derecho y si se declara procedente es en mérito de defensas estrañas á la gestión principal mirada bajo el punto de vista jurídico. Ni puede decirse que procedan los daños y perjuicios por el embargo trabado, porque la ley lo autoriza espresamente—art. 447 del Cód. de Proc.—Además en estos casos, no hay acto alguno que haga presumir la intención dolosa,



los daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 390, Ser. 4^a.

61. **Daños y perjuicios**—Reconocida su existencia, corresponde al autor justificar su inculpabilidad.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 39, Ser. 4^a.

62. **Daños y perjuicios**—La omisión, por parte de los empleados subalternos de una empresa de transportes, de las precauciones establecidas por disposiciones vigentes, importa culpa ó negligencia, y hace recaer sobre ella la responsabilidad de los daños que sufran los pasajeros.—Jur. Civ. tom. 2, pág. 193, Ser. 4^a.

63. **Daños y perjuicios**—Las empresas de tranways son responsables de los daños y perjuicios causados por sus dependientes, siempre que no justifiquen que ellos llenaron las prescripciones legales —Jur. Civ., tom. 2, página 39, Ser. 4^a.

64. **Daños y perjuicios**—Probada su existencia pero no su monto, procede el juramento estimatorio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 396, Ser. 4^a.

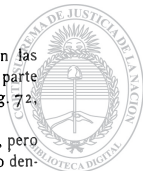
y la pena de daños y perjuicios, no procede en principio como resultantes de controversias judiciales, siendo de notarse que en la prescripción no se presenta la oportunidad de juzgar si son ó no legítimos los motivos de la controversia.

61—El demandado reconoció la existencia del hecho, pero alegó que no era culpable: debió comprobar este aserto, en virtud del principio general de que la prueba incumbe al que alega un hecho nuevo en juicio. En el caso que nos ocupa, el actor comprobó plenamente la culpa del demandado, quedando así subsistente la prueba rendida por el demandante. Véase el núm. 10.

62—Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 8; tom. 3^o, mismo verbo, núm. 21; *Ferrocarril*, núm. 2, y *Ferrocarriles*, núm. 1; tomo 2^o, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 25. El sumario consagra la jurisprudencia constante de nuestros Tribunales. Véase verb. *Culpa ó negligencia*, núm. 1, de este tomo.

63—Véase, nota precedente, y *Acto ilícito*, núm. 4.

64 —Véase los núms. 3 y 21.



65. Daños y perjuicios—Su pago solo procede en las obligaciones de hacer cuando hubiera resistencia de parte de alguno de los obligados.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 72, Ser. 4^a.

66. Daños y perjuicios—Justificada su existencia, pero no el *quantum*, corresponde el juramento estimatorio dentro de la cantidad que fije el Juzgado.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 39, Ser. 4^a.

67. Daños y perjuicios—Emergentes de un principio de ejecución de un contrato verbal cuyo cumplimiento resulta imposible, son á cargo de la parte culpable de la inejecución.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 92, Ser. 4^a.

68. Daños y perjuicios—No procede esta acción, fundada en una acusación calumniosa, si el demandado se limita á la denuncia del delito ante la Policía, sin designar la persona que lo hubiese cometido y sin hacerse parte en el juicio criminal.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 107, Ser. 4^a.

69. Daños y perjuicios—Declarada procedente esta ac-

65—Art. 1187 del Cód. Civ.

66—Véase los núms. 3, 21 y 64.

67—Celebrado verbalmente un contrato de locación y antes de estenderse la escritura pública correspondiente, á que se obligaron las partes, empezóse la demolición de una casa que formaba el objeto de la convención, debiendo aquélla ser reedificada. Antes de estenderse la escritura pública del contrato, los locatarios alegaron conocimiento de que la casa no pertenecía al locador sino en parte, pues la tenía en condominio con sus hijos menores, habiendo sido el inmueble adquirido durante la sociedad conyugal y sin que la testamentaria de la esposa hubiese sido liquidada. El cumplimiento del contrato se hizo imposible porque á ello se opone el art. 2682 del Cód. Civ. La inejecución total del contrato fué imputable tan solo al locador, siendo pasible de los daños y perjuicios emergentes de dicha inejecución.

68—Véase, verb. *Acusación calumniosa*, núm. 1.

69—Esta sentencia fué dictada por mayoría de votos. Tres Camarís-



ción, pero no justificada la suma perdida es improcedente el juramento estimatorio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 116, Ser. 4^a.

70. Daños y perjuicios—Las empresas de ferrocarriles son responsables de los daños y perjuicios que resulten contra terceros por las omisiones de sus empleados.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 129, Ser. 4^a.

71. Daños y perjuicios—La omisión de medidas precau-

tas en el sentido del sumario y dos en contra. La mayoría resuelve esta cuestión en un sentido completamente contrario á la ley y á la jurisprudencia. Se dijo que «la demanda estima los perjuicios en la suma de 20.000 nacionales, pero no ha justificado la existencia de los perjuicios que reclama, con arreglo á lo dispuesto en los arts. 520 y 1069 del Cód. Civ., ni el monto siquiera aproximado de los mismos para hacer aplicable al caso el juramento estimatorio del art. 220 del Código de Proc.» Es de advertirse que esta mayoría admitía la existencia de los daños y perjuicios, pero como no se había establecido suma alguna en la prueba, declaró que el rechazo de la demanda se imponía. La minoría dijo: «que la existencia de los perjuicios ha sido establecida, según resulta de las declaraciones de los testigos: que no habiéndose comprobado el monto á que aquéllos ascienden, es de aplicación lo dispuesto en el art. 220 del Cód. de Proc. que libra al prudente arbitrio del Juez la fijación de la suma dentro de la cual debe prestarse el juramento estimatorio, siempre que la existencia de los perjuicios se encuentre legalmente acreditada, y no resultase justificado su importe: fijación que en el presente caso puede hacerse equitativamente atendiendo á las circunstancias que la misma causa suministra.» El sumario consagra una arbitrariedad, pues va contra la letra y contra la inteligencia del art. 220 citado, el que ha sido siempre interpretado en el sentido del voto de la minoría. El art. 220 es claro y terminante. No se comprende cómo una Cámara puede resolver cuestiones tan trilladas, que pueden decirse axiomáticas, en el sentido que lo hace en el presente caso la mayoría. Consuela sin embargo no ver aparecer esa abrumadora unanimidad de la Cámara. La minoría salvó el principio legal, pero no fué bastante para salvar de la iniquidad al sujeto del derecho.

70—Véase los núms. 62 y 63.

71—Véase *Acto ilícito*, núm. 4.



cionales importa la culpa ó negligencia que la ley exige para responsabilizar por los daños y perjuicios al autor de un acto ilícito.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 129, Ser. 4^a.

72. Daños y perjuicios—Para que el juramento estimatorio sea procedente, debe justificarse al menos que ellos existieron, aun cuando no pueda fijarse su monto.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 150, Ser. 4^a.

73. Daños y perjuicios—Resuelto por sentencia ejecutoriada que el Inferior debe fijar el monto de la indemnización por daños y perjuicios, no procede la recepción de pruebas para fijarlos.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 314, Ser. 4^a.

74. Daños y perjuicios—Reconocida la existencia de

72—Este sumario aplica correctamente el art. 220 del Cód. de Procedimientos. En contra, véase el núm. 69. Esta es una de las frecuentes contradicciones en que incurre la Cámara de lo Civil. Aquí hay dos sentencias abiertamente opuestas la una á la otra. La sentencia consignada en el sumario fué dictada por el voto unánime de la Cámara, y lo que es más extraño aceptada en silencio sin que los tres Camaristas que resolvieron la misma cuestión en el núm. 69, hubiesen fundado la razón de su distinto modo de pensar en la presente. Y para que aparezca más evidente, la inconsciencia de la mayoría de la Cámara debe tenerse presente que la sentencia contenida en el núm. 69 fué dictada el día 14 de Abril de 1891, y la de este sumario el 16 del mismo mes y año. Con dos días de intervalo, dos sentencias contradictorias dictadas por la misma Cámara compuesta de los mismos Camaristas y ambas confirmatorias de las de 1^a Inst. Esta es la justicia de la Cámara, convertida en una verdadera eventualidad.

73—Porque se trata de ejecutar lo resuelto por el Superior, el que habiendo ordenado la prestación del juramento dentro de un límite que debió fijarse en 1^a Inst., no era posible volver sobre la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

74—Siempre que el Juez pueda establecer el límite dentro del cual debe prestarse el juramento estimatorio, debe aplicarse la disposición del art. 220 del Cód. de Proc.: y si no existe, puede ordenarse las medidas necesarias, para fijar ese límite, con carácter de para mejor proveer. No siendo esto posible, puede aceptarse el nombramiento de árbitros.



daños y perjuicios y el derecho á su indemnización procede el juramento estimatorio, y no la fijación por árbitros, dentro de la cantidad que fije el Juzgado, si el damnificado no ha producido prueba de los que se le han causado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 317, Ser. 4^a.

75. Daños y perjuicios—La contestación á la demanda por daños y perjuicios procedentes de un accidente ó cuasi-delito ocasionado con motivo de una construcción, es acto de administración.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 79, Ser. 4^a.

76. Daños y perjuicios—La demora de la Intendencia Municipal en dar la línea de edificación, no puede dar origen á una acción por daños y perjuicios si los planos presentados no llenan los requisitos que prescribe el reglamento de construcciones.—Jur. Civ., tom. 3, página 100, Ser. 4^a.

77. Daños y perjuicios—La disolución de una sociedad por culpa exclusiva de uno de los socios, hace pasible á éste de los daños y perjuicios que hubiese ocasionado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 172, Ser. 4^a.

78. Daños y perjuicios—La demolición regular de una pared medianera, previo aviso al propietario y locatario de la finca contigua, no puede fundar una acción por daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 156, Ser. 4^a.

79. Daños y perjuicios—Esta acción es improcedente si el hecho se produjo por negligencia de la víctima ó de

75—Véase *Acto de administración*, núm. 1.

76—Véase verb. *Construcciones*, núm. 1.

77—Arts. 1109 y 1725 del Cód. Civ.

78—Arts. 1519, 1520 y 1526 del Cód. Civ.

79—Art. 1111 del Cód. Civ. Pero si hay concurrencia de culpa en el agente y en la víctima, siempre aquél responde de los daños y perjuicios aunque en una forma limitada. Véase el núm. 51.



sus guardadores.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 418, Ser. 4^a.

80. Daños y perjuicios—La absolución del procesado ante la jurisdicción criminal, no basta para eximirlo de la responsabilidad que la ley civil le impone por aquellos actos ilícitos que por su culpa ó negligencia hayan irrogado un perjuicio.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 97, Ser. 4^a.

81. Daños y perjuicios—La falta de cumplimiento de un contrato obliga al culpable por los daños y perjuicios que ocasione.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 144, Ser. 4^a.

82. Daños y perjuicios—No procede el embargo preventivo fundado en daños y perjuicios no justificados.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 239, Ser. 4^a.

83. Daños y perjuicios—Justificado el derecho á cobrarlos y su existencia, procede el juramento estimatorio si no se justifica su monto.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 144, Ser. 4^a.

84. Daños y perjuicios—Justificada la culpa del demandado, nace la obligación de indemnizar el daño, y como tal debe ser tenido el agravio moral que sufre el padre por la muerte de su hijo, cualquiera que sea su edad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 154, Ser. 4^a.

85. Daños y perjuicios—El mandatario está obligado á

80—Véase *Acto ilícito*, núm. 8.

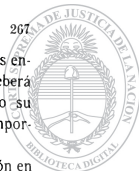
81—La obligación de pagar daños y perjuicios es el resultado de una convención accesoria tácitamente estipulada entre deudor y acreedor: es uno de los efectos que surgen de la convención misma—arts. 505, incs. 520 y 1198, del Cód. Civ.

82—El pleito no versaba sobre daños y perjuicios, sino sobre rendición de cuentas. Además el que solicitó el embargo carecía de personería.

83—Véase el núm. 72.

84—Véase verb. *Agravio moral*, núm. 1.

85—El recibo de documentos para verificar su cobro importa un verdadero mandato—art. 1869 del Cód. Civ.—Si el mandatario no pue-



rendir cuentas al mandante, de los papeles de créditos entregados para su cobro, en caso de no verificarlo deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados pero no su valor íntegro, en tanto no justifique que recibió su importe.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 75, Ser. 4ª.

86. Daños y perjuicios—No existiendo condenación en costas en la sentencia que condena al demandado al pago de los daños y perjuicios, los honorarios y gastos del juicio no deben ser tenidos en consideración al fijar la suma dentro de la cual debe prestarse el juramento estimatorio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 103, Ser. 4ª.

87. Daños y perjuicios—La falta de justificación de los reclamados, hace procedente la condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 147, Ser. 4ª.

88. Daños y perjuicios—La absolución del reo ante el Juez del Crimen, no forma prueba sobre su culpa ó negligencia imputada en el juicio civil por indemnización de daños y perjuicios emergentes del acto ilícito.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 154, Ser. 4ª.

89. Daños y perjuicios—El locatario que abandona el

de verificar su cobro, está obligado á entregar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato, comprendiéndose en dicha obligación la de entregar los títulos, documentos y papeles que el mandante le hubiese confiado—arts. 1909 y 1911, *ibid.*—En el juicio de rendición de cuentas, el mandante debe comprobar que el mandatario recibió el importe y de lo contrario solo responde de los daños y perjuicios que le ocasiona la falta de devolución de los papeles. Así, si el firmante del pagaré es insolvente, la indemnización será nula ó insignificante: siendo además posible que el deudor, en caso de no carecer de fondos, pague al acreedor sin necesidad de la presentación del documento, en cuyo caso no se habría ocasionado perjuicio alguno.

86—Véase verb. *Costas*, núm. 45.

87—Véase verb. *Costas*, núm. 47.

88—Véase verb. *Acto ilícito*, núm. 10.

89—Véase *Contrato de arrendamiento*, núm. 20.



predio arrendado, antes del vencimiento del término estipulado en el contrato, está obligado á indemnizar al locador los daños y perjuicios que le cause la falta de cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 260, Serie 4ª.

90. **Daños y perjuicios**—Los daños y perjuicios en caso de faltar al contrato de locación, deben ser fijados por el precio estipulado como alquiler ó la diferencia en caso de nueva locación por menor suma.—Jur. Civ., tom. 6, página 260, Ser. 4ª.

91. **Daños y perjuicios**—La resolución no haciendo lugar á la indemnización de daños y perjuicios, hace precedente la escusación del Juez para fijarla en caso de ser revocada la sentencia por el Superior.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 85, Ser. 4ª.

92. **Daños y perjuicios**—Reconocido el derecho á la in-

91—La sentencia no hizo lugar á la indemnización porque el Inferior consideró que el hecho imputado no había causado un perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria: la Cámara resolvió lo contrario, estableciendo que el agravio moral es susceptible de ser apreciado en dinero. El Juez se escusó alegando que su sentencia establecía un perjuicio. El art. 368, en su inc. 8ª, del Cód. de Proc., reconoce como causa legal de recusación, el haber emitido opinión acerca del pleito antes ó después de comenzado. Si se tiene en cuenta el motivo que ha tenido el legislador para establecer este principio, se comprenderá la razón del sumario. Los prácticos dan como razón del derecho de escusación, la ausencia de parcialidad y lo difícil que es vencer los impulsos del amor propio que induce al hombre á sostener su opinión. Así cuando, como en el presente caso, un Juez ha dicho que ciertos hechos no son susceptibles de apreciación pecuniaria, y el Superior dice que lo son, ordenándole que fije el monto, es evidente que los estimará en muy poca suma porque él cree que no valen nada: de aquí la razón de ser de la resolución.

92—Se trataba del perjuicio ocasionado por una lesión á un ojo. Es necesario abrir á prueba la causa para justificar tantas circunstancias que intervienen como elemento de criterio al fijar la suma. Dentro de un



demnización de daños y perjuicios procedentes de un cuasi-delito, corresponde la recepción de prueba sobre su monto, y adolece de nulidad la sentencia que sin más trámite fija la suma.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 301, Ser. 4^a.

93. Daños y perjuicios—Reconocida la existencia del contrato de locación de servicios, el constructor está obligado a pagar al propietario los daños ocasionados por mala construcción.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 415. Serie 4^a.

94. Daños y perjuicios—El poder para promover un pleito por daños y perjuicios por indebida retención, es bastante para iniciar demanda para el cobro de la suma en que se aprecian los objetos retenidos.—Jur. Civ., tomo 7, página 73, Ser. 4^a.

95. Daños y perjuicios—Aun pedida la rescisión del contrato, el locatario está obligado al pago del precio de la locación: si por su falta se dictara la resolución, debe ser condenado al pago de los daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 163, Ser. 4^a.

mismo hecho caben innumerables modalidades, como ser los sufrimientos de la víctima, la edad, la posición social, el carácter de la herida, su gravedad, qué tiempo necesitó para su curación, qué gastos ocasionó, si existe deformación, etc. Es necesario que estos extremos se comprueben, porque si bien es cierto que el Juez aprecia soberanamente el monto, debe tener sus antecedentes y sus puntos de apoyo esa apreciación. Además debe tenerse en cuenta que las resoluciones judiciales deben encuadrarse dentro de lo alegado y probado.

93—Véase *Contrato de locación*, núm. 4.

94—Por que el objeto de la demanda es obtener la reparación del daño causado, entrando la acción en los límites del mandato.

95—Se debe el precio porque el contrato subsiste mientras no se declare rescindido. Subsistiendo el contrato continúan las obligaciones que él genera, entre las que se encuentra la obligación, de parte del inquilino, de pagar el precio de la locación.



96. **Daños y perjuicios**—Tratándose de la rescisión de un contrato de locación en el que el locatario está obligado á dejar las construcciones á favor del propietario, los daños y perjuicios aunque no hubiesen sido comprobados deberán ser fijados por peritos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 163, Ser. 4^a.

97. **Daños y perjuicios**—La falta de cumplimiento de un contrato, por parte de la Municipalidad, no puede fundar una acción por daños y perjuicios si el hecho tuvo lugar por fuerza mayor.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 186, Serie 4^a.

98. **Daños y perjuicios**—Solo proceden por falta de cumplimiento de la obligación de hacer escritura pública del boleto de compraventa, la mora en su cumplimiento, que obliga al acreedor á demandarlo judicialmente no basta para hacer procedente la acción.—Jur. Civ., tom. 7, página 227, Ser. 4^a.

99. **Daños y perjuicios**—La suspensión de una obra por culpa imputable única y exclusivamente al constructor, lo hace pasible de los daños y perjuicios que el locador de servicios justifique.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 258, Serie 4^a.

100. **Daños y perjuicios**—La falta de adopción de medi-

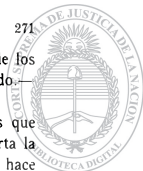
96—No se produjo prueba suficiente para fijar el monto dentro del cual debía prestarse el juramento estimatorio—art. 220 del Cód. de Procedimientos.

97—Art. 513 del Cód. Civ.

98—Véase los núms. 9 y 65.

99—Arts. 903, 904 y 1109 del Cód. Civ.

100—Un niño empleado en el ferrocarril del Sud fué mandado por su superior á limpiar una máquina que se hallaba fuera de los talleres, debiendo tenerse presente que esta operación se hacía siempre dentro de ellos con el objeto de evitar accidentes. Mientras hacía la limpieza otra máquina vino sobre ella, moviéndola con el choque: en el movi-



das tendentes á evitar un accidente obliga al pago de los daños y perjuicios que esa omisión haya ocasionado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 276, Ser. 4^a.

101. Daños y perjuicios.—La omisión de medidas que tiendan á garantizar la seguridad de terceros, importa la culpa y negligencia del constructor de una obra y lo hace pasible de la indemnización de los daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 320, Ser. 4^a.

102. Daños y perjuicios.—Siendo la condenación en costas una carga impuesta al vencido, la exageración en la suma demandada por daños y perjuicios no basta para eximirlo de su imposición.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 98, Ser. 4^a.

miento apretó al niño, causándole una muerte instantánea. Se resolvió que la empresa era culpable porque al mandar hacer esa operación fuera del taller, incurrió en culpa, pues esta práctica se adopta precisamente para evitar accidentes y que al infringirla hubo culpa de parte de la empresa. En materia de cuasi-delitos es doctrina corriente que la falta, por más ligera que sea, basta para engendrar la responsabilidad de aquel que causa un daño á otro y por su hecho, cuando por negligencia no se adoptan aquellas medidas que la prudencia indicaría para prevenir un accidente. Véase, Laurent, tom. 20, núms. 466 y 472, donde estudia el art. 1382 del Cód. Nap., igual al 1109 del nuestro. Aquí la imprudencia es indudable, pues la culpa del que dió la orden de limpiar la máquina en un lugar donde no estaba exento de peligros y donde el accidente era posible, es evidente, siendo de aplicación los artículos 1109 y 1113 del Cód. Civ.

101.—La acción se dedujo contra una empresa constructora de cloacas por los daños causados por un derrumbe que ocasionó la muerte de una persona, accidente producido por culpa ó negligencia imputable á la empresa. La culpa ó negligencia fué comprobada, siendo una consecuencia necesaria de ella la responsabilidad del agente de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civ. La empresa hizo escavaciones contra el muro ó pared medianera en contravención á lo dispuesto en el art. 2624 del Cód. Civ.

102.—Véase: verb. *Costas*, núm. 56.



103. **Daños y perjuicios**—Las empresas de ferrocarriles son responsables por los daños y perjuicios que resulten de la omisión de medidas tendentes á prevenir accidentes en sus vías.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 98, Ser. 4^a.

104. **Daños y perjuicios**—Para la fijación de los causados por falta de cumplimiento de un contrato de compra-venta, debe tenerse en cuenta la diferencia entre el precio de venta y el que tenía en la fecha en que se entabló la demanda.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 137, Ser. 4^a.

105. **Daños y perjuicios**—Los padres tienen derecho á exigir una indemnización por la muerte del hijo, al que resulte responsable civilmente del daño, aun cuando el hecho que motivó el accidente no pueda ser calificado como delito.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 376, Ser. 4^a.

106. **Daños y perjuicios**—El rechazo de una acción de daños y perjuicios, no importa un prejuzgamiento para la fijación del monto en caso de ser revocada la sentencia por el Superior.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 41, Ser. 4^a.

107. **Daños y perjuicios**—Las empresas de trasportes son responsables de los daños y perjuicios que por accidentes se ocasionen á los pasajeros.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 61, Ser. 4^a.

108. **Daños y perjuicios**—El propietario causante de la

103—Véase los núms. 62, 63, 70, 71, 100, y *Acto ilícito*, núm. 4.

105—Arts. 1083, 1109 y 1113 del Cód. Civ. De acuerdo con otro caso resuelto en el tom. 1, pág. 253, Ser. 4^a de la Jur. Civ.

106—Cuando se rechaza una acción de daños y perjuicios teniendo en cuenta la falta de derecho, nada tiene esto que ver con el monto del perjuicio sufrido, dijo la Cámara en este caso. Puede verse en contra el núm. 91, donde se interpreta correctamente la cuestión. Allí hemos emitido nuestra opinión en un sentido contrario al sustentado en el presente sumario.

107—Véase los núms. 62, 63, 70, 71, 100 y 103.

108—Arts. 1197 y 1198 del Cód. Civ.—Véase: verb. *Contrato de arrendamiento*, núm. 16; *Daños y perjuicios*, núms. 81 y 90.



rescisión del contrato de locación no inscripto, es responsable de los daños y perjuicios que tal hecho ocasione al locatario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 104, Ser. 4ª.

109. **Daños y perjuicios**—La acción civil de daños y perjuicios por calumnia, es improcedente si el demandado justifica en el juicio civil la verdad de los hechos en que fundó la querella, y éstos se encuentran calificados como delitos por el derecho penal.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 294, Ser. 4ª.

110. **Daños y perjuicios**—El sobreseimiento provisional no hace cosa juzgada, y en consecuencia no basta para fundar una acción de daños y perjuicios por haber sido calumniosa la querella.—Jur. Civ., t. 9, pág. 294, Ser. 4ª.

111. **Daños y perjuicios**—Justificada la culpa ó negligencia del propietario de la obra ó sus representantes, debe ser condenado al pago de los daños y perjuicios que el derrumbe haya causado á los vecinos linderos.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 195, Ser. 4ª.

112. **Daños y perjuicios**—Reconocida su existencia y el derecho á cobrarlos, pero no justificado su monto, procede su fijación por juramento estimatorio dentro de la suma que determine el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 195, Ser. 4ª.

113. **Daños y perjuicios**—No procede la acción de daños

109—Véase: verb. *Calumnia*, núm. 2.

110—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 9.

111—Véase: *Acto ilícito*, núm. 6. La omisión de medidas precaucionales importa la culpa ó negligencia que la ley exige para responsabilizar por los daños y perjuicios al autor de un acto ilícito, como lo establece la ley y lo consagra la jurisprudencia. Véase: *Acto ilícito*, número 4. Puede verse el núm. 101 del verb. *Daños y perjuicios* que resuelve un caso análogo al del sumario que nos ocupa.

112—Véase los núms. 3, 66, 69, 72, 74 y 83. A este respecto hay jurisprudencia constante, fundada en el art. 220 del Cód. de Proc.

113—En la nota al núm. 6, se desarrollan estensamente los principios



y perjuicios merjentes de un cuasi-delito si no se justifica la culpa ó negligencia imputable al autor del hecho.

—Jur. Civ., tom. 10, pág. 203, Ser. 4ª.

Daños y perjuicios—Véase: *Acto ilícito*, núm. 1—*Cosa ajena*, núm. 1—*Juramento estimatorio*, núm. 6—*Boleto de compraventa*, núm. 12.

Datos—Véase: *Causante*, núm. 1.

Declaración—Véase: *Mandatario*, núm. 4—*Documento privado*, núms. 4 y 5—*Btenes*, núm. 4—*Dinero propio*, núm. 2—*Nulidad de una sentencia*, núm. 3—*Testigos*, núms. 8, 12, 16 y 17—*Divorcio*, núm. 9—*Testigo*, números 3, 4 y 5—*Agravio*, núm. 1—*Instrumento público*, núm. 4.

Declaración de insanía—Véase: *Insanía*, núm. 1.

Declaración de quiebra—Véase: *Quiebra*, núm. 1.

Declaración espresa—Véase: *Indivisión*, núm. 2.

Declaraciones—Véase: *Prescripción adquisitiva*, núm. 1—*Herencia*, núm. 2—*Testigos*, núms. 19 y 20—*Informes*, núm. 2—*Acto simulado*, núm. 1.

1. **Declaraciones**—De los testigos del testamento, contrarias á lo que de su contenido resulta, no forman prueba mientras no justifiquen haber procedido inducidos por dolo ó violencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 218, Ser. 3ª.

2. **Declaraciones**—De testigos en las que no se hubiesen

que rigen el caso. La culpa no es necesario que exista para que nazca la obligación de resarcir el daño causado. Sinembargo la jurisprudencia de la Cámara se inclina en el sentido del sumario. Véase núms. 10, 16 y 20.

1—Art. 992, Cód. Civ.

2—Los vicios consistían en algunas declaraciones, en no haber sido el testigo examinado por las generales de la ley, y á otros no se preguntó por su edad, estado, profesión y domicilio—art. 191, inc. 1ª—siendo por consiguiente nulas las declaraciones—art. 203.



observado las prescripciones de la ley, carecen de fuerza probatoria.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 16, Ser. 3ª.

3. **Declaraciones**—De testigos que no dan razón de sus dichos, no forman la prueba que se exige como fundamento de una sentencia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 134, Ser. 3ª

4. **Declaraciones**—Las del oficial público sobre hechos confesados en su presencia por los otorgantes de un instrumento público, forman prueba, pues no importa una modificación de lo en él declarado, aun cuando sea en sentido contrario.—Jur. Civ. tom. 9, pág. 347, Ser. 4ª.

5. **Declaraciones**—Aun ordenadas éstas, si los testigos no son citados por negligencia de la parte, no pueden declarar después de vencido el término de prueba—Jur. Civil, tom. 3, pág. 405, Ser. 4ª.

6. **Declaraciones**—De testigos, que no se hayan producido por negligencia de la parte, no pueden ser tomadas

3—Ley 28, tit. 16, Part. 3ª.

4—Véase, *Instrumento público*, núm. 4.

5—Porque según disposición del art. 118 del Cód. de Proc., a la parte incumbe urgir la producción de la prueba. La parte, en el caso que nos ocupa, no había suministrado el papel sellado necesario para la citación del testigo con la anticipación requerida por el art. 182 del Código de Proc. En otro caso últimamente se ha suscitado lo contrario, estableciéndose que el hecho de no suministrar el papel sellado necesario, no implica negligencia de la parte, porque el art. 182 citado no exige que la citación sea hecha en papel sellado sino que espresamente determina que se hará en papel simple. Como siempre para esta Cámara los artículos claros de la ley son susceptibles de interpretaciones contradictorias.

6—Art. 118 del Cód. de Proc. De acuerdo con la jurisprudencia uniforme de los Trib. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Declaraciones*, núm. 2; *Diligencias de prueba*, núms. 3 y 4; tom. 3º, mismo verbo, núms. 1, 4, 10, 13 y 15. En el caso del sumario la negligencia de la parte provenía de no haber suministrado el papel sellado necesario para la citación.



después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 86, Ser. 4ª.

7. Declaraciones—Si después del libramiento del exhorto, el testigo cambia de domicilio, el oficio debe reiterarse.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 327, Ser. 4ª.

Declaratoria de demencia—Véase: *Demencia*, núm. 1—*Insania*, núm. 1.

Declaratoria de filiación—Véase: *Filiación natural*, números 4 y 5.

1. Declaratoria de herederos—El comprador de bienes testamentarios carece de personería para objetar la declaratoria de herederos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 331, Serie 3ª.

2. Declaratoria de herederos—El reconocimiento de los coherederos basta para dictar la declaratoria.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 151, Ser. 4ª.

3. Declaratoria de herederos—La de herederos legiti-

7—El auto estaba consentido, no pudiendo impugnarse una vez ejecutoriado. Además el Juzgado consideró que debía reiterarse el exhorto porque la causal que motivaba esa reiteración no le era imputable á la parte.

1—La declaratoria de herederos una vez ejecutoriada cubre cualquiera diferencia que contengan las partidas. En el caso ocurren esas diferencias eran de poco monto, bastando con las demás constancias de autos para hacerse válidamente dicha declaratoria. Esto decía el Juez Dr. Giménez cuando desempeñaba el Juzgado de 1ª Inst., auto que fué confirmado por la Cámara *por sus fundamentos*.

2—Es jurisprudencia constante.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Heredero*, núm. 6 y 7; *Herederos*, núm. 11. Sin embargo debe tenerse presente que cuando hay coherederos menores, no basta el reconocimiento hecho por los mayores. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Declaratoria de herederos*, núm. 2.

3—El matrimonio es un requisito esencial para que el hijo sea legítimo, y mientras ese requisito no se llene, la declaratoria no puede dictarse.

mos solo puede dictarse previa justificación del matrimonio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 41, Ser. 4^a.

4. **Declaratoria de herederos**—Justificada por información la filiación legítima y reconocidos por los coherederos ese carácter, el Juzgado debe dictar la declaratoria.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 59, Ser. 4^a.

5. **Declaratoria de herederos**—El Juez del domicilio es el único competente para conocer en el juicio testamentario; la declaratoria de heredero dictada por otro Juez no prueba ante él.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 174, Ser. 4^a.

6. **Declaratoria de herederos**—Para esto debe justificarse el carácter hereditario de los que la soliciten.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 48, Ser. 4^a.

7. **Declaratoria de herederos**—Es procedente aun cuando exista testamento, si alguno de los instituidos hubiese fallecido antes que el testador.—Jur. Civ., tom. 9, página 264, Ser. 4^a.

Declaratoria de herederos—Véase: *Herederos*, núms. 1 y 6—*Matrimonio*, núm. 6—*Curadora*, núm. 1.

Declaratoria de rebeldía—Véase: *Rebeldía*, núm. 13.

Declinatoria—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 2.

1. **Declinatoria de jurisdicción**—En el embargo preven-

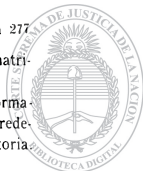
4—Véase el núm. 2.

5—El art. 3284 del Cód. Civ. establece, que la jurisdicción sobre la sucesión corresponde al Juez del último domicilio.

6—El que solicita cualquiera medida judicial, debe justificar el fundamento de su petición.

7—Una vez muerto el heredero instituido, su coheredero solo lo es por la parte que le acuerda el testamento: si la otra parte también le corresponde por haber muerto su co-instituido, debe justificar este último extremo, obteniendo la correspondiente declaratoria a su favor por la parte que el testamento no le acuerda.

1—La incompetencia de jurisdicción solo puede deducirse en la escación oportuna del juicio, siendo además de tenerse en cuenta la disposición del art. 463 del Cód. de Proc., donde se establece que el em-





tivo, como diligencia preparatoria del juicio, no procede la declinatoria de jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 9, página 141, Ser. 4^a.

Decreto—Véase: *Término vencido*, núm. 2.

1^a. Defecto legal—En el modo de proponer la demanda, no existe, cuando el precio debe fijarse por árbitros aun cuando no se determine cantidad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 261, Ser. 4^a.

Defecto legal—Véase: *Excepción de defecto legal*, números 1, 2 y siguientes.

Defectos de procedimiento—Véase: *Notificación*, números 9 y 12.

Defectos de títulos—Véase: *Contrato de compraventa*, núms. 1, 2 y 3—*Comprador judicial*, núm. 2—*Escritura*, núm. 1—*Remate judicial*, núms. 16, 19, 23 y 24—*Escrituración*, núms. 1 y 5—*Término para la subsanación*, núm. 1—*Títulos de propiedad*, núms. 16 y 20—*Condominio*, núm. 7.

Defensas opuestas—Véase: *Apoderado único*, núm. 5—*Sentencia*, núm. 8.

Defensor—Véase: *Abogado*, núm. 10.

Defensor de ausentes—Véase: *Rebeldía*, núm. 14.

Deficiencia—Véase: *Desistimiento*, núm. 1.

Defraudación—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 5.

1^b. Delito—El reo de desacato á la autoridad, no puede hacer responsable al funcionario desacatado, por los daños

bargo decretado por Juez incompetente es válido, siempre que se hubiese dictado con arreglo á las disposiciones del Tit. XIII, sin que ello importe prórroga de jurisdicción para entender en el juicio que debe iniciarse.

1^a—Véase: verb. *Árbitros*, núm. 3.

1^b—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 33.



y perjuicios que la prisión fundada en un delito le hayan causado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 396, Ser. 3ª.

2ª. Delito—Para que proceda la indemnización civil que la ley acuerda al que es víctima de un delito, debe justificarse previamente la existencia del mismo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 396, Ser. 3ª.

Delito—Véase: *Indemnización*, núm. 14—*Daños y perjuicios*, núms. 12, 13, 17, 68, 77, 105 y 113—*Prescripción de la indemnización*, núm. 1—*Calumnia*, núm. 2—*Condición*, núm. 3.

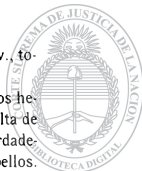
1ª. Demanda—La de la testamentaria contra terceros, corresponde al Juez en turno.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 249. Ser. 3ª.

2ª. Demanda—No debe repetirse en ella los datos que

2ª—La demanda se fundaba en los arts. 107 y 1083 del Cód. Civ., afirmando la existencia del delito del derecho criminal. Al que afirma la existencia de un hecho le incumbe la prueba, lo que vale decir que el actor debe probar el hecho fundamental de su acción.

1—Aunque el juicio sucesorio es universal, esto no quiere decir que todas las cuestiones deban ventilarse ante el Juez de la sucesión. Así por ejemplo, si se trata de cuestiones sobre bienes raíces, éstas deben ventilarse ante el Juez que según los principios generales del derecho sea competente. El juicio universal atrae a sí todos los juicios en que la sucesión sea *demandada*, pero no aquellos en que sea parte como *actora*.

2ª—En una demanda sobre filiación natural no se espresó el lugar en que el niño había nacido, pero se acompañó la partida de bautismo: la Cámara dijo que con la presentación de la partida habían quedado constatados los requisitos del art. 71 del Cód. de Proc. Parece algo dudosa la resolución de la Cámara porque el hecho de bautizarse una persona en un punto, no quiere decir que el nacimiento hubiese tenido lugar allí; pues es frecuente el caso en que se bautizan los niños lejos del lugar en que han nacido. El lugar del nacimiento y el de aquel en que las relaciones ilícitas tuvieron lugar, son hechos de capital importancia en las demandas de filiación, y por consiguiente debe su omisión ser tenida como un defecto legal de la demanda.



resulten de los documentos acompañados. —Jur. Civ., tomo 7, pág. 141, Ser. 3ª.

3. *Demanda*.—El silencio del demandado sobre los hechos invocados por el demandante limitándose a la falta de derecho del actor, hace procedente se tengan por verdaderos sin necesidad de que se produzca prueba sobre ellos. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 285, Ser. 4ª.

4. *Demanda*.—La suspensión del procedimiento después de notificada la demanda, solo puede decretarse de conformidad de partes. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 67, Ser. 4ª.

5. *Demanda*.—La que tiene por objeto el cumplimiento de una ordenanza municipal, corresponde a la jurisdicción de 1ª Instancia. —Jur. Civ., tom. 10, pág. 305, Ser. 4ª.

Demanda.— Véase: *Agravio moral*, núm. 1.—*Albacea*, núm. 5.—*Alimentos*, núm. 5.—*Comisión*, núm. 2.—*Confesión*, núm. 1.—*Arbitros*, núm. 2.—*Jurisdicción*, núm. 4.—*Cosa juzgada*, núms. 7 y 8.—*Contrato de compraventa*, núm. 8.—*Costas*, núms. 16, 37, 43 y 52.—*Domicilio*, núms.

3.—En virtud de lo dispuesto en el art. 100 del Cód. de Proc.

4.—Si bien es cierto que antes de ser contestada una demanda ella puede ser modificada, ampliada y hasta puede desistirse de ella, no es menos cierto que una vez contestada no es posible proceder del propio modo sin la conformidad de demandante y demandado, porque de lo contrario sería obligar al demandado a que éste tuviese sobre sí la amenaza de un pleito cuya continuación quedaría indefinidamente a la voluntad ó al capricho del actor con grave perjuicio para su adversario, lo que no sería ni justo ni equitativo. El demandante fué quien solicitó la suspensión del procedimiento.

5.—Se dijo que el conocimiento de la causa correspondía a la Justicia de Paz porque el valor de lo cuestionado no pasaba de 500 pesos. La Cámara opinó que debía de entender el Juez de 1ª Inst., porque al mismo tiempo se pedía se declarara que la empresa de gas debía ser obligada a cumplir la ordenanza municipal que prohibía cobrar el consumo del gas con arreglo a las tarifas arbitrarias que la empresa confeccionaba.



7, 8 y 11 — *Daños y perjuicios*, núms. 9, 14, 15 y 94 — *Detalle*, núm. 1 — *Documentos*, núms. 3, 8, 9 y 11 — *Embargo preventivo*, núms. 4, 5, 6, 36 y 41 — *Escrito*, núms. 1 y 6 — *Mora*, núm. 3 — *Escepción de defecto legal*, núms. 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 11 — *Escepción de falta de personería*, número 2 — *Escepciones*, núms. 2, 6 y 8 — *Incapaz*, núm. 1 — *Escepciones dilatorias*, núm. 2 — *Notificación*, núms. 3 y 14 — *Instrumento privado*, núm. 6 — *Nulidad*, núm. 1 — *Nulidad de una sentencia*, núms. 4 y 5 — *Petición de herencia*, núm. 2 — *Poder especial*, núm. 1 y 2 — *Posiciones*, núm. 7 — *Posesión*, núm. 12 — *Precio*, núm. 2 — *Rebeldía*, núm. 7, 8 y 18 — *Prescripción*, núm. 13 — *Prescripción interrumpida*, núm. 4 — *Prueba escrita*, núm. 3 — *Reivindicación*, núm. 16 — *Prueba del actor*, núm. 2 — *Prueba preventiva*, núm. 1 — *Recusación*, núms. 4, 5 y 7 — *Sentencia*, núm. 3 — *Sentencia nula*, núm. 1 — *Títulos de propiedad*, núm. 19.

Demanda de jactancia—Véase: *Jactancia*, núm. 2.

Demanda de nulidad—Véase: *Nulidad*, núm. 1 — *Nulidad de una escritura pública*, núm. 1.

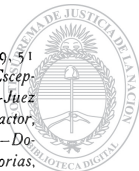
Demanda de petición de herencia—Véase: *Petición de herencia*, núm. 2.

1. Demanda ordinaria—Los reclamos que pretendan deducir los coherederos entre sí, deben sustanciarse como demandas ordinarias por cuerda separada.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 39, Ser. 4^a.

Demanda por daños y perjuicios—Véase: *Prescripción*, núm. 4.

Demanda á terceros—Véase: *Poder especial*, núm. 7.

Demandado—Véase: *Bienes determinados*, núm. 1 — *Acción*, núm. 1 — *Agravio moral*, núm. 1 — *Apoderado*



único, núm. 5—*Daños y perjuicios*, núms. 1, 45, 49, 51 y 54—*Escepción de falta de personería*, núm. 9—*Escepción de incompetencia*, núm. 6—*Jactancia*, núm. 2—*Juez competente*, núm. 2—*Arbitros*, núm. 2—*Prueba del actor*, núm. 1—*Falsedad*, núm. 7—*Apoderado*, núm. 2—*Domicilio*, núms. 7, 8, 11 y 13—*Escepciones perentorias*, núm. 1—*Nulidad de una sentencia*, número 5—*Rebeldía*, núm. 18—*Notificación*, núm. 14—*Posiciones*, núms. 1, 2 y 12—*Calumnia*, núm. 3—*Recusación*, número 4—*Reivindicación*, núms. 13 y 14—*Acción personal*, núms. 1, 2 y 3—*Acción reivindicatoria*, número 2—*Costas*, núms. 26, 28, 37, 45 y 62—*Juez competente*, núm. 2—*Prueba preparatoria*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 13—*Título de propiedad*, número 16.

1^a. **Demandados**—Aun cuando el procurador puede individualizar las defensas, si son varios los demandados deben nombrar un solo apoderado ó representante judicial.—Jur. Civ., tom 7, pág. 121, Ser. 3^a.

1^b. **Demandante**—Corresponde á éste la justificación de los hechos aseverados al deducir su acción y que fueron categóricamente denegados por el demandado.—Jur. Civil, tom. 7, pág. 210, Ser. 3^a.

Demandante—Véase: *Acción*, núm. 1—*Acción reivindicatoria*, núms. 2 y 3—*Arraigo*, núm. 4—*Interdicto de recobrar*, núm. 2—*Interdicto de retener*, núm. 4—*Prueba de la acción*, núm. 1—*Apoderado*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núms. 45, 49 y 54—*Acción personal*, núms. 1 y 2—*Costas*, núm. 62—*Escepción de falta de personería*, núm. 9—*Escepción de incompetencia*, núms. 3 y 4—

1^a—Véase, *Apoderado único*, núm. 3.

1^b—Ley 1^a, tít. 14, Part. 3^a.



Excepción de prescripción, núm. 1—*Excepción de arraigo*, núms. 3 y 4—*Domicilio*, núms. 13 y 14.

1ª. *Demencia*—El pedido de declaratoria de demencia por el Asesor de menores, es causa de escusación si la misma persona desempeña el juzgado en que se ha pedido la insania.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 108, Ser. 4ª.

Demencia—Véase: *Acusación calumniosa*, núm. 1.

1ª. *Demolición*—El juicio contencioso-administrativo, no procede contra resoluciones de la Municipalidad sobre espropiación de un terreno ó demolición de un edificio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 64, Ser. 3ª.

Demolición—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 78.

Demora—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 38—*Alegar*, núm. 2—*Construcciones*, núm. 1.

1ª. *Denuncias*—Los jueces de lo civil son incompetentes

1ª.—El Asesor de menores había dictaminado, que debía declararse el estado de demencia calificada de imbecilidad. En el expediente se discutía si el sujeto era ó no loco y no podía negarse que el Asesor que vino á ser Juez después, había comprometido opinión en uno de los sentidos en que debía recaer resolución definitiva.

1ª.—Véase la nota al art. 43, Cód. Civ.

1ª.—Un acreedor seguía contra una testamentaria juicio sobre cobro de pesos, el que se tramitaba por cuerda separada. Después de llamado autos para definitiva, se presentó diciendo que la firma del testamento en virtud del cual había entrado en posesión de la herencia el heredero, era falsa, y solicitó se agregara el escrito con un dictamen pericial al incidente sobre cobro de honorarios, á fin de que dándose vista al agente fiscal, iniciara éste las acciones del caso. El Juez no hizo lugar, porque el art. 215 se oponía á que ese escrito fuese recibido. Consentida esta resolución, la misma parte se presentó en el expediente testamentario á lo que tampoco se hizo lugar por no ser parte el postulante. Cuando en un expediente se descubre una falsificación, los que son parte en él tienen derecho á denunciar la falsificación y pueden solicitar las medidas necesarias para comprobarla á los efectos civiles: debe hacerse uso de este derecho en el tiempo que acuerdan las leyes de procedi-



para conocer, y no están obligados á dar curso á las denuncias sobre falsedad de documentos agregados á un expediente por el que no sea parte en el juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 400, Ser. 4ª.

Denunciante—Véase: *Fallecimiento*, núm. 5.

1. De oficio—El desconocimiento del carácter heredi-

mientos. Sería anormal admitir que el hecho de tener pleito una persona con otra, facultase á cada uno de los litigantes á intervenir en los demás pleitos de la contraria. Los asuntos judiciales no deben complicarse con puntos que están fuera de discusión. El orden público no lo justificaría desde que hay otros medios de satisfacer sus exigencias. Si se trata de la represión del delito de falsificación, el Juez Civil nada tiene que ver, es el de lo Criminal el único competente: es allí donde debe presentarse, y si para la instrucción del proceso necesita datos, puede pedirlos al Juez Civil. Si la legislación civil ha tomado en cuenta los delitos, es al solo efecto de la indemnización de los daños y perjuicios inferidos á sujetos pasivos del hecho delictuoso.

1.—Un hijo nació á los dos meses de muerto el padre y éste murió un mes después de contraer matrimonio con la madre de aquél. El Dr. Mendez Paz, de oficio no hizo lugar á la declaratoria de herederos, fundándose en que el nacimiento tuvo lugar fuera del término menor que establece la ley para que los hijos sean considerados como legítimos. El Dr. Cortés en su carácter de fiscal de las Cámaras calificó esa resolución de *estraviada, irregular é insubsistente*. La Cámara la calificó del mismo modo, y revocó la resolución fundándose en que cuando el marido supo al casarse el embarazo de su esposa, lo cual debía suponerse en el caso presente desde que en esa época la esposa estaba en el séptimo mes de su embarazo, nadie sino el mismo marido puede desconocer la legitimidad del hijo que dió á luz su mujer antes de los seis meses de casada. Si no lo supo ó falleció todavía en tiempo de reclamar, ese derecho pasa exclusivamente á sus herederos, ya sean éstos, la viuda, los padres ó hermanos, etc. del causante. No es posible sospechar siquiera dentro del orden natural de las cosas que el causante ignorase la preñez de su prometida en el acto de contraer matrimonio, cuando en la época en que esa unión se realizaba había ella entrado en el séptimo mes del embarazo. Goyena al glosar un artículo de su Proyecto, igual al 283 de nuestro Cód. Civ., dice «porque se presume *juris et de jure*, en este caso, que el padre contrajo el matrimonio para reparar la debilidad ó falta anterior, y que no habría consentido en él sin estar persuadido



tario del hijo póstumo, por haber nacido dentro del término mínimo que fija la ley desde la fecha del matrimonio, no puede dictarse de oficio: solo los herederos del esposo tienen personería para solicitarlo. — Jur. Civ., tom. 6, pág. 397, Ser. 3^a.

2. **De oficio**—La legitimidad del hijo no desconocida por el esposo no puede ser discutida ni invocada por terceros y los jueces deben de oficio evitar los juicios que con ese objeto se produzcan. — Jur. Civ., tom. 7, pág. 133, Ser. 4^a.

3—**De oficio**—Los jueces no pueden de oficio descono-

de que la mujer llevaba en su vientre el fruto de sus amores recíprocos; y más adelante agrega. «Si el marido murió antes del nacimiento, ¿quién podrá descorrer el velo de un misterio sabido únicamente por él y por su mujer?» El desconocimiento del carácter hereditario, no puede ejercitarse de oficio por los jueces, porque en esa declaratoria no aparece comprometida ninguna ley de orden público, no es caso de los que por expresa disposición de la ley se hallan facultados para proceder prescindiendo de la voluntad de las partes.

2.—Sin embargo en el número precedente el juez Mendez Paz de oficio quiso promover cuestión sobre este punto de derecho. Cuan distinto es el criterio de este Juez al del común de los hombres. La Cámara dice que *deben evitarse* de oficio estas cuestiones, mientras el Juez piensa que *deben suscitarse* de oficio. Véase: verb. *Ilegitimidad*, núm. 2.

3.—Esta resolución fué revocatoria de una providencia del Juez Mendez Paz, quien «por razones incomprensibles ó de ningún momento» como decía el Fiscal de las Cámaras Dr. Cortés, resolvió de oficio no hacer lugar á la declaratoria de herederos solicitada. Los antecedentes son los siguientes: Fallecida una mujer casada en el año 1879, su esposo y sus hijos se presentaron por medio de un apoderado único iniciando el juicio testamentario del caso, y solicitando que previos los trámites legales se les declarara herederos. Llenados los trámites y cuando se esperaba que se hiciese la declaratoria, el Juez de oficio no hizo lugar porque uno de los hijos que pedía ser declarado heredero había nacido un mes después de contraer matrimonio sus padres. Esta negativa fué tanto más injusta y estraña cuanto que todos los interesados, el esposo y los demás hijos indisputablemente legítimos estaban



cer la legitimidad de los hijos nacidos después del matri-

conformes y se hallaban de acuerdo en reconocer como coheredero al hermano nacido en las circunstancias espuestas. El sumario consagra el verdadero principio que rige al caso. Con efecto, la ley procediendo con mucha prudencia y gran sabiduría, ha querido resguardar la armonía en los matrimonios, la tranquilidad del hogar y el sagrado de la familia impidiendo el que cualquiera pudiese turbarla é introducir en ella la confusión suscitando temerariamente cuestiones delicadas sobre la legitimidad de los miembros que la componen, las que á su vez vendrían á manchar también la memoria de las personas ya fallecidas. En el caso propuesto del nacimiento anticipado ha ido todavía más adelante en la realización de sus propósitos haciendo al marido árbitro exclusivo y absoluto para reconocer ó reclamar sobre la legitimidad del hijo que dió á luz su esposa; porque dependiendo aquélla de que éste sea también suyo ó no, lo que él solo puede saber, la resolución de consiguiente, debía quedar, y en efecto ha quedado librada al dictado de su conciencia. El Código no determina espresamente en qué tiempo el marido debe en tal caso deducir su acción de desconocimiento de la paternidad, pues al señalar el plazo perentorio de dos meses, se refiere á los hijos concebidos durante el matrimonio; pero como la razón porque se ha fijado un plazo tan breve, á saber, la de no dejar de un modo indefinido, incierto, el estado del niño, es igualmente aplicable por analogía al del que nace en el matrimonio, aunque hubiese sido concebido antes, debe suponerse que respecto de éste, rige también el mismo término—Cód. Civ., art. 254.—En los demás casos de desconocimiento de la paternidad, si el marido falleciese dentro del espresado plazo, sin haber deducido su acción, pueden intentarla sus herederos, gozando al efecto íntegro del indicado término, según lo declara espresamente el art. 258, por cuanto lo representan en todo y por todo como sucesores universales, continuando su misma personalidad. Mas en el caso que nos ocupa y tratándose de un niño nacido dentro de los seis meses siguientes á la celebración del matrimonio, los herederos por disposición terminante de la ley no pueden desconocerlo, si el marido no lo hiciese, aun cuando hubiese fallecido antes de vencer los dos meses de haber tenido conocimiento del parto de su mujer—inc. 1.^o del citado artículo.—La razón es, que en este caso, en que el marido conociendo el alumbramiento anticipado de su esposa, no reclamó sin embargo, respecto á su paternidad, se equipara absolutamente á aquel en que se le justificase haber tenido al casarse conocimiento del embarazo de su esposa, en el cual le niega toda acción, pues cuando no hubiese tenido ese



monio y concebidos con anterioridad.—Jur. Civ., tom. 7.
pág. 115, Ser. 3ª.

conocimiento el parto de aquella en dichas condiciones, habría venido á revelárselo—Cód. Civ., art. 243.—Hé aquí cómo se espresa al respecto el Dr. Cortés en el Senado Nacional, con motivo de la corrección que se hizo al precitado art. 253, cambiándose el adverbio *antes* por *dentro*. Hay una disposición en que se prescribe: que si el marido antes del matrimonio hubiera sabido el embarazo de su mujer, no podría contradecir la legitimidad del niño que ésta dé á luz, aunque nazca antes de seis meses; pero sería difícil quizás comprobar el marido, si quisiera desconocer á un hijo suyo, que sabía al casarse el embarazo de la novia. No podría, empero, de ningún modo, el marido pretender haber ignorado el hecho, cuando habiendo nacido un hijo de su mujer, antes de cumplirse seis meses de la celebración del matrimonio, constara que él hubiese tenido noticia del embarazo, pues este suceso vendría á poner de manifiesto aquella circunstancia, desde que ese niño no habría podido ser concebido en el matrimonio. Aceptada, pues, la corrección propuesta, su sentido equivale á declarar: que aunque no se pruebe al marido que conoció el embarazo de su novia, si hubiese sabido después que su mujer libró, antes de cumplidos seis meses del casamiento y no reclamó, esto equivale á haber conocido al casarse el embarazo y de consiguiente no podía ya desconocer al hijo—Correcciones y fe de erratas al Cód. Civ., pág. 251.—La opinión del esponente bien poco valdría por cierto de por sí, pero como ella fué aceptada por el Honorable Congreso, fundándose en las consideraciones indicadas, la corrección que se sancionó y se introdujo en el precitado art. 253, es por esto que se la ha mencionado, á fin de ilustrar el punto que examina con relación á la causa que debe resolverse. Dedúcese de aquí que no habiéndose en el caso presente reclamado por el esposo en más de treinta años contra el desembarazo que no niega haber sabido, en que dió á luz, antes de un mes de celebrado el matrimonio, lo tiene reconocido tácitamente por suyo, no podría ya rechazarlo de modo alguno y éste debe considerarse legítimo—art. 319.—Tanto menos el padre podría cuestionar la filiación ni la legitimidad de aquél, por haber nacido en las condiciones espuestas, cuanto que prohibiéndolo absolutamente la ley, siempre que el marido de cualquier modo hubiese por suyo al hijo de su mujer. El padre no solo lo había verificado tácitamente, sino también criándolo á su lado, tratándolo y considerando como hijo suyo á la par de los demás. A esto se agrega todavía, que el hecho mismo de otorgar en común su poder público,



4. De oficio— Siempre que existan indicios de falsedad, deben pasarse de oficio los antecedentes al Juzgado del Crimen.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

5. De oficio—El Juzgado no puede de oficio exigir que la parte presente los recaudos en que funda su derecho.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 316, Ser. 4^a.

De oficio—Véase: *Costas*, núms. 2 y 55—*Ilegitimidad*, núm. 2—*Inhabilidad de título*, núm. 2—*Nombramiento*, núm. 2—*Peritos*, núm. 6—*Nulidad de la sentencia*, números 3 y 18—*Apoderado único*, núm. 4—*Nulidad absoluta*, núm. 1.

1. Dependientes—El hecho de ser los testigos dependientes de una oficina autorizada para otorgar escrituras públicas, no es causa de nulidad del instrumento: la ley fulmina esa pena para el caso en que los firmantes como testigos sean dependientes autorizados para autorizarlas.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 198, Ser. 4^a.

Dependientes—Véase: *Divorcio*, núm. 9.

Depositorio—Véase: *Documento de depósito*, núm. 1.

como lo hizo junto con el padre con sus demás hijos, para reclamar la herencia de su finada esposa, y el haberla reclamado efectivamente por medio de un procurador en la forma indicada, importaría un acto manifiesto de reconocimiento, después del cual, ni al Juez ni a nadie le era lícito poner en duda la filiación legítima de aquél.

4—Art. 160 del Cód. de Proc.

5—La Cámara dijo que «la no presentación de los documentos con que se instruye la demanda, no da lugar a repeler un escrito de demanda por defecto legal en el modo de promoverla, como lo tiene resuelto la jurisprudencia del Tribunal.» En el caso que nos ocupa, el Juez de oficio rechazó el escrito de demanda, fundado en el art. 75 del Cód. de Proc. Pero es de advertirse que si el Juez tiene el derecho de repeler de oficio las demandas es cuando ellas no se ajusten a las prescripciones del art. 71, entre cuyos requisitos no está la falta de documentos que sirven de fundamento a la acción.

1—Véase *Escritura pública*, núm. 29.



1.^a. Departamento Nacional de Higiene.—Puede penar con multa el ejercicio indebido de la medicina ó la venta de específicos no aprobados ó permitidos, pero carece de facultad para clausurar los establecimientos en que se verifique la expedición.—Jur. Civ., tom. 2. pág. 317, Ser. 4.^a.

Dependiente.—Véase: *Contrato de locación de servicios*, núm. 5.

Depositantes.—Véase: *Embargo*, núm. 20.

Depositario.—Véase: *Esposa*, núm. 5.

1. Depositario judicial.—Los títulos de propiedades indivisas deben estar en poder del depositario de los papeles nombrado judicialmente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 19, Ser. 4.^a.

2. Depositario judicial.—Procede la ejecución contra éste, aun cuando sea el establecimiento fijado por la ley al efecto.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 108, Ser. 4.^a.

1.^a—La ley de 31 de Diciembre de 1880 que organiza y determina las atribuciones de este Departamento, establece en el art. 4, inc. 6.^o, que se encuentra facultado para vigilar el ejercicio legal de la medicina, de la farmacia y de las demás ramas del arte de curar, con arreglo á las disposiciones vigentes de la Provincia de Buenos Aires hasta tanto el Congreso dicte la ley respectiva: de aquí se deduce que la ley vigente es la de la Provincia. Una industria que elabore sustancias medicinales, que tan importantes y delicadas funciones desempeña en las familias, debe estar sometida á reglas fijas, y debe reunir las condiciones especiales que la ley exige, sin que baste para establecerla una patente industrial, para que las autoridades encargadas de velar por la salud pública toleren su permanencia, y por el contrario deben aplicar las penas establecidas para evitarlo: pero esas penas tienen su límite en la ley misma y en manera alguna pueden ultrapasarse. Y así la recordada ley en el cap. VII enunciando las penas en que incurrir los contraventores, no consigna en ninguna de ellas para ordenar la clausura de un establecimiento y si solo para imponer multas en la forma y previos los trámites que determina.

2.—Se trataba del Banco Nacional que no entregaba un depósito hecho en sus arcas. Se ordenó la entrega en virtud de lo dispuesto en el art. 459 del Cód. de Proc.



3. **Depositorio judicial**—El embargado puede ser depositario judicial de los bienes con la responsabilidad que la ley le impone en ese carácter.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 370, Ser. 4^a.

1^a. **Depósito**—Para que haya violación del depósito es necesario que la modificación haya tenido lugar en el objeto embargado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 44, Ser. 4^a.

Depósito—Véase: *Comprador judicial*, núm. 1.—*Jurisdicción*, núm. 1.

1^b. **Depósito de muebles**—Si tiene lugar, como accesorio de otro contrato, se considera gratuito.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 424, Ser. 3^a.

1^c. **Depósito gratuito**—El documento en que conste este

3—De autos resultaba la responsabilidad del deudor como propietario de un inmueble confesado por el acreedor embargante.

1^a—Se decía que el depósito había sido violado, porque se cambió un portón. Pero como solo había sido materia de la diligencia de embargo un galpón y el techo de zinc, se declaró que no había habido violación, pues el portón no estaba comprendido entre los bienes materia del embargo.

1^b—Celebrado un contrato entre el padre de unos menores y otra persona que se comprometió á su guarda mediante una mensualidad, ésta pretendió cobrar depósito por los muebles pertenecientes á los menores y que fueron llevados juntamente con ellos. No se hizo lugar á lo pedido porque los muebles, como se ha dicho, pertenecían á los menores y en tal carácter pasaron á poder de la guardadora, habiéndose estipulado así, y no en calidad de depósito como se pretendía. Es principio elemental aceptado en derecho, que para que un acto tome el carácter de depósito, es preciso que se tenga por fin principal la guarda de la misma, y cuando este objeto es solo secundario, cuando no es sino la consecuencia de un contrato, el depósito en nada cambia la naturaleza de aquél.

1^c—La ley de la materia dice que *todo acto ó contrato*, debe estenderse, cuando se hace por escrito, en el sello proporcional al valor del acto ó contrato. La ley no hace diferencia entre un acto ó contrato de carácter lucrativo y los que no lo tienen, haciendo pesar indistintamente el impuesto sobre unos y otros. Así con los testamentos y donaciones que no puede decirse se hagan con el fin de lucrar, sin embargo están su-



depósito, está sujeto al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 385, Ser. 4^a.

1^a. Depósito judicial—Sin la conformidad del comprador en remate judicial, no se puede disponer del precio oblado, antes de la escrituración: los fondos extraídos indebidamente deben ser reintegrados.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 384, Ser. 4^a.

Depósito judicial—Véase: *Fondos*, núm. 1.

1^b. Depósito irregular—Reconocida la recepción de un depósito irregular, el deudor está obligado a su devolución, sin que pueda invocar la compensación con saldos de créditos que no revisten igual origen.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 257, Ser. 3^a.

1^c. Depósito particular—A la orden del acreedor, no puede en ningún caso tener los efectos del pago por consignación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 99, Ser. 3^a.

jetos al impuesto del papel sellado, del propio modo, el acto que acredita un depósito gratuito está sujeto a las prescripciones de dicha ley. Siempre que el depositante quisiese munirse de una constancia escrita rendría que pagar el impuesto.

1^a—La Cámara dijo: «que ni la testamentaria ni los acreedores pueden disponer para sus pagos de fondos que aun no le pertenecen; pues que han sido depositados en garantía de una compra aun no escriturada.» Cuando la posesión no ha sido dada al comprador, la aplicación de esta resolución es correcta, pero si la posesión ha sido dada, el comprador no puede oponerse, porque el contrato de compraventa queda perfecto con la aprobación del remate, siendo la posesión dada la consumación del contrato. El comprador no puede poseer la cosa y el precio pagado por ella. La compraventa, para que sea considerada como perfecta no requiere la escrituración cuando la venta se hace en subasta pública—artículo 1184 del Cód. Civ.—Por la aprobación del remate y la posesión dada judicialmente pasa el inmueble al dominio del adquirente, y consiguientemente queda éste obligado a abonar el precio. No puede oponerse a su extracción cuando estuviese depositado en el Banco.

1^b—Véase: verb. *Compensación*, núm. 1

1^c—El art. 756 del Cód. Civ. establece que el pago por consignación tiene lugar cuando el depósito es judicial.



1^a. Depósitos judiciales—Acuerdo ordenando que estos se hagan en la Caja de Conversión ó en Banco Nacional, en custodia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 123, Ser. 4^a.

Derecho—Véase: *Mandatario*, núm. 8.—*Jactancia*, número 2.

Derecho acordado—Véase: *Obligación á plazo*, núm. 2.

1^b. Derecho á la herencia—Los que lo pretendan, deben antes de intervenir en el juicio testamentario, justificar por cuerda separada los derechos que invocan.—Jur. Civil, tom. 1, pág. 26, Ser. 3^a.

Derecho á poseer—Véase: *Poseción*, núm. 1.

Derecho común—Véase: *Ordenanzas militares*, núm. 1.

1^c. Derecho de petición —El heredero de grado más pró-

1^a—La ley de 5 de Nov. de 1872, en su art. 23 disponía, que los depósitos judiciales se hiciesen en el Banco Nacional; esta disposición implicaba siempre que el Banco estuviese en condiciones de devolverlos, pero después fué un hecho de pública notoriedad que el Banco se encontraba imposibilitado de dar cumplimiento á la devolución de los depósitos vencidos, de acuerdo con el precepto legal. Ante esa situación anormal de dicho establecimiento, la Cámara consideró que debía tomar las medidas del caso tendentes á salvaguardar los intereses confiados á su custodia, resolvió hacer saber á los jueces, que los depósitos debían hacerse en la Caja de Conversión ó en Banco Nacional, entendiéndose en este último caso que en el carácter de Tesorería Nacional que le confiere la ley de 12 de Oct. de 1872 en su art. 9, y que los fondos que se depositaran debían conceptuarse como colocados en idénticas condiciones á los pertenecientes al Fisco Nacional.

1^b.—De acuerdo con la ley y con la jurisprudencia establecida. Véase: *Inst.*, tom. 1^o, verb. *Heredero*, núm. 1297.

1^c.—El uso de ese derecho importa el ejercicio del derecho de propietario de la herencia y su aceptación pura y simple, y como consecuencia la renuncia irrevocable de la facultad de repudiarla ó de aceptarla bajo beneficio de inventario, remontando su efecto al día de la apertura de la sucesión—arts. 3323, 3329 y 3341 del Cód. Civ. —No habiendo *lanción* por parte de los herederos más próximos en grado, los más remotos carecen de todo derecho á esa herencia.



ximo que aceptando la herencia hace uso del derecho de petición, adquiere el patrimonio para sí y lo transfiere á sus herederos, cesando en consecuencia la personería de los de grado más lejano para iniciar la misma acción.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 250, Ser. 3ª.

Derecho de representación—Véase: *Hijo natural*, núm. 3—*Filiación natural*, núm. 12.

1. **Derecho de retención**—Es improcedente el interdicto de adquirir la posesión si el poseedor tiene por sentencia ejecutoriada reconocido el derecho de retención por las mejoras hechas en la casa.—Jur. Civ., tom. 10, página 140, Ser. 4ª.

2. **Derecho de retención**—Puede ser ejercido por el tenedor de la cosa aun cuando no exista crédito líquido, ni convenio sobre el monto de lo adeudado por razón de la misma.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 357, Ser. 4ª.

3. **Derecho de retención**—Reconocido este derecho, la acción de daños y perjuicios fundada en este hecho, debe declararse improcedente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 357, Ser. 4ª.

1—Arts. 2466, 3939 y 3944 del Cód. Civ.

2—El derecho de retención se acuerda como medida precaucional para asegurar al acreedor—art. 3939, Cód. Civ.—De este derecho se puede hacer uso sin hacerlo depender previamente de un pleito sobre el monto de su acreencia, pues la secuela del juicio daría lugar casi siempre á la desaparición de los objetos á asegurar con el derecho de retención. Este derecho no está subordinado á la condición de que el crédito sea líquido, reconocido por el deudor ó por ejecutoria judicial. Lo contrario se deduce de su propia naturaleza y basta para fundarlo, que la deuda tenga por origen el contrato reconocido por el mismo propietario, y como causa los servicios prestados con ocasión de la cosa misma que se retiene—art. 3940.

3—Porque la retención es un derecho acordado por la ley, y el ejercicio de un derecho no puede constituir en ilícito ningún acto—artículo



4. **Derecho de retención**—La suma que se adeuda por la tenencia de la cosa debe ser fijada en el juicio iniciado por el que ejerce el derecho de retención y no en el de daños y perjuicios iniciado por el propietario.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 357, Ser. 4^a.

Derecho de retención—Véase: *Escribano*, núm. 1.

Derecho de retrotraer—Véase: *Propiedad*, núm. 2.

1. **Derecho en expectativa**—El estado civil de las personas, no puede conceptuarse un derecho en expectativa, y las leyes posteriores al nacimiento no pueden modificar el derecho adquirido.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 388, Serie 4^a.

Derecho excluyente—Véase: *Edictos*, núm. 4.

Derecho penal—Véase: *Calumnia*, núm. 2.

Derecho proporcional—Véase: *Bienes de la sucesión*, número 3.

Derechos—Véase: *Herencia*, núm. 2—*Agravio*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 6—*Comprador*, núm. 3.

Derechos adquiridos—Véase: *Efecto retroactivo*, núm. 1.
Mensura, núm. 1.

Derechos anteriores—Véase: *Acto simulado*, núm. 1.

Derechos contradictorios—Véase: *Información sumaria*, núm. 2.

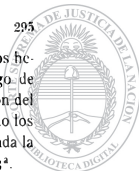
Derechos de socio—Véase: *Cesión*, núm. 2.

Derechos del vendedor—Véase: *Posesión*, núm. 7.

1071 del Cód. Civ.—y por consiguiente el que lo ejecuta no es pasible de los daños y perjuicios—art. 1067 ibid.

4—Tratándose de asuntos que corresponden á distinta jurisdicción, no puede discutirse en el pleito sobre daños y perjuicios lo que ha de ser materia de resolución en otro preexistente. La acción de daños y perjuicios presupone la falta de derecho para usar de la facultad de retener debido á la exageración en el cobro, y es esa exageración la que debe establecerse en el juicio sobre su cobro.

1—Art. 3^o del Cód. Civ.



1. **Derechos hereditarios**—El cesionario de derechos hereditarios, carece de derecho para oponerse al pago de deudas de la sucesión, fundándose en la disminución del haber, pues se le conceptúa como que ha adquirido los que corresponderían á su cedente después de liquidada la testamentaria. —Jur. Civ., tom. 2, pág. 241, Ser. 3^a.

2. **Derechos hereditarios**—Las disposiciones relativas á la cesión de derechos, no son aplicables á la cesión de derechos hereditarios. —Jur. Civ., tom. 6, pág. 102, Serie 3^a.

3. **Derechos hereditarios**—La fecha de la escritura es la fuente del derecho cuando el total de los derechos hereditarios ha sido cedido á diversas personas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 102, Ser. 3^a.

1—Es principio recibido en derecho, que no hay herencia sino después de pagados todos los créditos pasivos de la sucesión. Además, la cesión no tiene más efecto que transferir al tercero los derechos que correspondían al heredero; y si éste no puede oponerse legítimamente al pago de las deudas de la sucesión, tampoco puede hacerlo el cesionario, porque nadie puede transmitir más derechos que los que él tiene. El cesionario continúa la persona del cedente, y si éste no puede oponerse, tampoco puede aquél.

2—Así lo demuestra la nota puesta al art. 1484 del Cód. Civ., cuando dice, «regularmente los Códigos y los escritores tratan en este Título de la cesión de las herencias, método que juzgamos impropio, y reservamos esta materia para el Libro IV, en que se tratará de las sucesiones.

3—Por las razones espresadas en el número precedente. Los artículos 1459 y 1470 son inapelables cuando se trata de la cesión de acciones y derechos hereditarios, pues aquéllos se refieren á la cesión de créditos, la que es distinta de la cesión de acciones hereditarias. Con efecto, el título «De la cesión de créditos» del Cód. Civ., legisla para las relaciones de derecho entre cedente y cesionario y el deudor cedido, entre sí y respecto de terceros, pero en el caso del sumario no se trata de ningún crédito que el cedente tenga contra otra persona que sea su deudora. En la cesión de créditos, la notificación al deudor cedido y la aceptación hecha por éste, crea relaciones directas entre el



4. **Derechos hereditarios**—El derecho que la ley concede al pariente de grado sucesible más lejano, para gestionar los derechos hereditarios por inacción ó renuncia del de grado más próximo, no puede ser ejercido si el último, aceptando la herencia, hizo uso de ese derecho.—Jur. Civil, tom. 6, pág. 250, Ser. 3ª.

3. **Derechos hereditarios**—Si la cosa comprendida en la

cesionario y el deudor, y por consiguiente esa notificación y aceptación es el hecho principal para obligar á este último que es extraño al acto de la cesión. De ahí nace que el cesionario que primero ha notificado la cesión al deudor ó ha obtenido su aceptación auténtica, tenga preferencia sobre otro cesionario de fecha anterior, pero posterior en la notificación al deudor. En la cesión de créditos, para que pueda producir todos sus efectos legales, es necesaria la concurrencia del cedente y del cesionario y la del deudor cedido, ya sea por medio de su notificación de la cesión ó ya por medio de su aceptación formal. En la cesión de derechos hereditarios, basta la concurrencia del cedente y del cesionario, pues no hay deudor alguno al que deba notificarse, ni que deba aceptar la cesión. Y, que la cesión de las herencias ó derechos hereditarios no está legislada en el título de la cesión de créditos, lo demuestra con toda evidencia la nota puesta por el Codificador al artículo 1484. La cesión de derechos hereditarios es un contrato consensual que queda perfeccionado por el acuerdo de voluntades de los contratantes, y la que invocaba el demandante estaba revestida de la forma establecida en el art. 1184, inc. 6º del Cód. Civ. Las escrituras de cesión de fecha posterior carecen de valor, pues el cedente, cuando otorga una escritura posterior, ya se ha desprendido de sus derechos hereditarios, y mal puede ceder lo que no le pertenece.

4—Porque este acto del pariente más próximo, importa el ejercicio de propietario de la herencia, y su aceptación pura y simple, y como consecuencia la renuncia irrevocable de la facultad de repudiarla ó de aceptarla bajo beneficio de inventario, remontando su efecto al día de la apertura de la sucesión—arts. 3323, 3329 y 3341 del Código Civ.—En este caso no hay inacción por parte de los parientes más próximos en grado para recojer la herencia, y mal puede pretenderse por los parientes más remotos, derechos á esa herencia aceptada por aquéllos.

5—Véase *Cesión de Derechos*, núm. 5.



cesión de derechos resulta de menor valor. el cesionario puede pedir la evicción pero no la resolución del contrato. ---Jur. Civ., tom. 8, pág. 127, Ser. 4ª.

Derechos hereditarios — Véase: *Prescripción á nombre propio*, núm. 2 — *Colación*, núm. 1 — *Cesión de derechos*, núms. 4 y 5 — *Escritura pública*, núm. 13 — *Mandato*, núm. 11.

Derechos litigiosos — Véase: *Transacción*, núm. 6.

Derechos no litigiosos — Véase *Transacción*, núm. 1.

Derechos preferentes — Véase: *Capellanía*, núm. 2.

Derechos reales — Véase: *Obligación de dar*, núm. 1 — *Escritura pública*, núm. 12 — *Inscripción*, núm. 1.

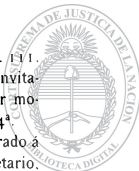
Derechos reconocidos — Véase: *Embargo preventivo*, número 34.

1ª. **Derechos y acciones** — El condómino mayor de edad puede válidamente ceder á un tercero los derechos y acciones que le correspondan sobre la universalidad de los bienes de la herencia, aun cuando alguno de los condóminos sea menor de edad. — Jur. Civ., tom. 2, pág. 125, Ser. 3ª.

1. **Derechos y acciones** — Véase: *Escritura de venta*, número 1 — *Contrato de compraventa*, núm. 21.

Derechos y obligaciones — Véase: *Memoria pía*, núm. 1 — *Escritura de venta*, núm. 1.

1 — Nuestro Código Civil permite la cesión de derechos hereditarios — arts. 2160 y siguientes — además el art. 1446 establece, que los créditos condicionales ó ventuales son cedibles. No puede ser nula la cesión de derechos en el caso del sumario porque ese acto implique transferir á un tercero el condominio, pues antes de la cesión ese estado ya existía; siendo así que la cesión solo hace pasar los derechos de una persona mayor de edad á otra de igual estado que se sustituye al cedente, y este acto no está prohibido por disposición alguna del Código. El cedente solo transfiere la parte que le corresponde sin perjudicar los derechos del menor.



Derrumbamiento—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 111.

1ª. **Desacato**—Importa un desacato al Juez la invitación para que se escuse de entender en el juicio por motivos personales.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 81, Ser. 4ª.

2ª. **Desacato**—La agregación de la firma del letrado a un escrito presentado sin ella, según cargo del secretario, importa un desacato y se encuentra comprendida en la jurisdicción disciplinaria conferida á los Jueces.—Jur. Civil, tom. 5, pág. 326, Ser. 4ª.

3. **Desacato**—El reo de desacato á la autoridad, no puede hacer responsable al funcionario desacatado por los daños y perjuicios que la prisión fundada en ese delito le haya causado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 396, Ser. 3ª.

Desacato—Véase: *Recusación*, núm. 18.

1ª. **Desalojo**—El propietario tiene derecho de desalojar como intruso, sin que ello importe un acto ilícito, al ocupante sin su consentimiento.—Jur. Civ., tom. 3, página 167, Ser. 3ª.

2ª. **Desalojo**—No procede la escepción de litispendencia, en el juicio sobre reducción á escritura pública del contrato de locación, fundada en el juicio de desalojo del mismo predio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 186, Ser. 3ª.

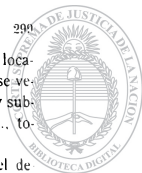
1ª—Esa circunstancia implica falta de respeto y consideración al magistrado á quien se dirige.

2ª—Nos hemos ocupado de este caso en el verb. *Abogado*, núm. 4.

3—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 53.

1ª—Véase, verb. *Acto ilícito*, núm. 1.

2ª—Ambos juicios no son ni de la misma índole ni del mismo carácter: en uno como en otro caso se persigue diverso fin, aun cuando son las mismas partes las que intervienen y la cuestión versa sobre la misma cosa. Por otra parte, el juicio de desalojo se sigue por trámites especiales establecidos en el Cód. de Proc., y en el caso que nos ocupa, correspondía á la justicia de Paz, mientras que el juicio sobre escrituración correspondía á la jurisdicción ordinaria de primera instancia teniendo en cuenta el valor de la cosa, siguiéndose el juicio por la vía ordinaria.



3. Desalojo—Las prestaciones convenidas entre locatario y sublocatario, solo pueden ser reclamadas si se verifica el desalojo; el contrato directo entre locador y sublocador no modifica el primitivo contrato. —Jur. Civ., tom. 6, pág. 165, Ser. 3ª.

4. Desalojo—El locador que exige judicialmente el desalojo faltando á lo estipulado en el contrato de locación sobre prórroga, es responsable de los daños y perjuicios que con su conducta ilícita cause al locatario. —Jur. Civil, tom. 7, pág. 303, Ser. 3ª.

5. Desalojo—La sentencia recaída en el juicio sumario de desalojo, no hace cosa juzgada en el que sobre daños y perjuicios deduzca el locatario por falta de cumplimiento del contrato de locación. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 303, Ser. 3ª.

Desalojo—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 9—*Contrato de arrendamiento*, núm. 29—*Violencia*, núm. 1.

Desaparición—Véase: *Sociedad*, núm. 2.

3—El sublocatario no puede cambiar por su sola voluntad el carácter de tal por el de locatario directo de la propietaria, tanto menos si se considera que el sublocador tiene derecho para exigir del sublocatario la devolución de la cosa sublocada, á la terminación del contrato—art. 1615, Cód. Civ.—á fin de hacer valer los derechos que le correspondan contra el propietario en razón de las mejoras efectuadas, como lo establecía el contrato celebrado. El sublocatario ha debido usar del derecho que le acuerda el art. 1591 del Cód. Civ., en el caso de que el propietario pretendiese eximirse del cumplimiento de las obligaciones que tiene contraídas con el locatario, y en todo caso demandar al sublocador para que cumpla con las obligaciones que le imponen los arts. 1526 y 1527, pero no puede legalmente prescindir de él dando por rescindido el contrato que le afecta directamente, ni tampoco celebrar con el propietario un contrato directo de locación incompatible con el que éste tenía con el locatario primitivo y en virtud del cual era él mismo sublocatario.

4—Véase: verb. *Contrato de arrendamiento*, núm. 16.

5—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 14.



Descargo—Véase: *Estampilla*, núm. 2.

Desconocimiento—Véase: *De oficio*, núm. 1.

Descuento—Véase: *Obligación á plazo*, núm. 2—*Man-datario*, núm. 14.

Desembargo—Véase: *Bienes embargados*, núm. 2.

1. **Desistimiento**—Reconocida la deficiencia de los títulos, procede el desistimiento del comprador dentro del término que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 229, Ser. 3ª.

2. **Desistimiento**—El comprador en remate judicial, no puede exigir la bonificación de los títulos: su derecho se circunscribe á optar por su aceptación ó por el desistimiento de la compra.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 247, Serie 3ª.

3. **Desistimiento**—El apelado carece de derecho para oponerse al desistimiento del recurso que haga el apelante.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 144, Ser. 3ª.

4. **Desistimiento**—Si el comprador opta por el desistimiento dentro del término que la ley fija, debe dejarse sin efecto la venta.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 130, Ser. 4ª.

5. **Desistimiento**—La existencia de un condominio que debe separarse judicialmente, importa un defecto del título

1—Siempre que el vicio no fuese subsanable en breve tiempo—artículo 522 del Cód. de Proc.

2—El comprador fué el Dr. Mendez Paz, quien manifestó estar conforme con los títulos de propiedad, pero exigió que se practicaran previamente á la oblación ciertas diligencias que el Juez consideró *inútiles é ilegales*, por cuya causa no se le hizo lugar á lo pedido, ordenándose la oblación de acuerdo con lo establecido en el art. 522 del Cód. de Procedimientos.

3—Véase: *Apelación*, núm. 2.

4—Si el desistimiento tiene lugar por defectos del título—art. 522 del Cód. de Proc.

5—Véase verb. *Condominio*, núm. 7.



que permite el desistimiento al comprador en remate judicial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 401, Ser. 4^a.

6. **Desistimiento** — El retardo en la escrituración de un bien comprado en remate judicial, no puede fundar el desistimiento si la mora es imputable al comprador —Jur. Civ., tom. 8, pág. 377, Ser. 4^a.

7. **Desistimiento** — El que desiste de su demanda debe ser condenado en las costas causadas. —Jur. Civ., tomo 3, pág. 37, Ser. 4^a.

Desistimiento — Véase: *Honorarios*, núm. 2—*Remate judicial*, núms. 1, 2, 16, 17, 19 y 33—*Seña*, núm. 3—*Daños y perjuicios*, núm. 23—*Testigos*, núm. 10—*Comprador judicial*, núms. 2 y 3—*Nulidad del desistimiento*, núm. 1—*Venta*, núm. 5—*Transacción*, núm. 9—*Costas*, núm. 63.

1^a. **Despojo** —Procede el interdicto de recobrar siempre que se justifique la posesión y el despojo violento—Jur. Civ., tom. 6, pág. 426, Ser. 3^a.

Despojo —Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 4—*Interdicto de obra nueva*, núm. 3.

Destierro—Véase: *Hijos menores*, núm. 2.

1^b. **Detalle**— Si no se acompaña el detalle de los trabajos, la escepción de defecto legal en el modo de proponer

6—El art. 522 del Cód. de Proc. autoriza el desistimiento solamente cuando los títulos adolecen de vicios que no pueden subsanarse en breve tiempo. Según disposición del art. 1204 del Cód. Civ., la resolución de un contrato procede cuando hay pacto expreso que la autorice. La causal espuesta en el sumario, no es bastante para operar la rescisión del contrato.

7—Véase verb. *Costas*, núm. 37 y su nota.

1^a—Art. 581 del Cód. de Proc.

1^b—El art. 71 del Cód. de Proc. exige entre otros requisitos para entablar una demanda, que la cosa demandada esté determinada con toda exactitud. Si los trabajos hechos se engloban en una sola partida,



la demanda por locación de servicios, es procedente.—
Jur. Civ., tom. 10, pág. 300, Ser. 4ª.

Detalle—Véase: *Excepción de defecto legal*, núm. 22.

Detentador—Véase: *Interdicto de adquirir*, núm. 2.

Detención—Véase: *Acciones criminales*, núm. 1—*Confabulación*, núm. 1.

Deterioros—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 18.

1. **Deuda**—El reconocimiento de una deuda en el testamento importa un principio de prueba escrita para hacer procedente la testimonial á los efectos de justificar la veracidad de la confesión.—Jur. Civ., tom. 9, página 330, Ser. 4ª.

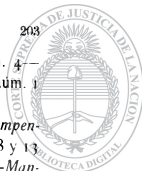
Deuda—Véase: *Adoquinado*, núm. 3—*Carta de crédito*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 38—*Colación*, núm. 1—*Curador*, núm. 5—*Excepción de compensación*, núm. 1—*Donación*, núm. 2—*Jurisdicción*, núm. 4—*Efecto retroactivo*, núm. 1—*Costas*, núm. 58—*Herederos*, núm. 2—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 13—*Prescripción de una deuda*, núm. 1—*Derecho de retención*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núms. 14 y 43—*Excepción de remisión*, núm. 1.

Deudas—Véase: *Derechos hereditarios*, núm. 1—*Herederos*, núm. 4—*Legado*, núm. 4—*Sociedad*, núm. 5.

Deudor—Véase: *Alquileres*, núm. 1—*Mandamiento*, número 1—*Cuenta*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núms. 33 y 45—*Cesión*, núm. 3—*Contrato de compraventa*, número 21—*Fiador*, núm. 1—*Propiedad*, núm. 2—*Condición*, núm. 2—*Precio*, núm. 1—*Bienes embargados*, número 2—*Obligación sin plazo*, núm. 1—*Martillero*, núm.

no es posible determinar con exactitud en qué consisten dichos trabajos, en cuyo caso la litiscontestación no puede trabarse sobre bases seguras y bien determinadas.

1—Véase: verb. *Confesión*, núm. 2.



mero 3—*Cesión de bienes*, núms. 1—*Fianza*, núm. 4—*Nulidad de la ejecución*, núm. 3—*Compensación*, núm. 1—*Excepción de falta de personería*, núm. 8.

Devolución—Véase: *Escrito*, núms. 1 y 2—*Compensación*, núm. 1—*Contrato de compraventa*, núms. 8 y 13—*Seña*, núm. 7—*Depósitos judiciales*, núm. 1—*Man datario*, núm. 14—*Costas*, núm. 58—*Seña*, núm. 7.

1ª. **Día**—Para la fijación del día en que debe tener lugar un acto, el Juzgado no obstante el recargo, debe tener presente la urgencia del caso.—Jur. Civ., tom. 5, página 370, Ser. 4ª.

Día—Véase: *Notificación*, núm. 3—*Posiciones*, números 26 y 35—*Graduación de créditos*, núm. 1—*Diligencias judiciales*, núm. 3.

Día señalado—Véase: *Testigos*, núms. 8, 10 y 21—*Posiciones*, núm. 4.

Días determinados—Véase: *Prejuzgamiento*, núm. 2.

1ª. **Diarios**—Es potestativo del Juzgado, la fijación de

1ª—La Cámara dijo, que en atención á la naturaleza de la causa el Inferior debía señalar una audiencia inmediata.

1ª—La Cámara dijo, que ésta es una facultad privativa de los jueces, sin perjuicio de que si se encuentra algúntotro diario de circulación que pueda hacer las publicaciones en condiciones menos onerosas para los interesados, así lo ordene. La ley no dice que esta sea una facultad discrecional ni potestativa, es la Cámara la que ha consagrado esa jurisprudencia perjudicial en alto grado para los interesados y que compromete en alto grado la moralidad judicial. El art. 639 del Cód. de Proc., solo establece la necesidad de llamar por edictos durante 30 días. El 687 dice, que se anunciará por edictos la muerte del interesado; el 513 del propio modo dice: «el remate se anunciará fijándose edictos y publicándolos en dos diarios.» Ninguno de estos artículos confiere al Juez la facultad privativa de designar el diario. Que no es facultad privativa se demuestra fácilmente. El auto mandando publicar edictos y determinando los diarios, será apelable ó inapelable según que cause gravamen irreparable ó no. Causará gravamen irreparable, si designado un diario de menos circulación que otros, aquél pide por la publica-



los diarios para publicar edictos, sin perjuicio de tener en cuenta que sean los menos onerosos para el interesado.—Jur. Civ., tom. 7 pág. 130, Ser. 3ª.

1. Dictámen pericial—El Juez es el único que según su

ción un precio superior ó igual que éste. Si cobra 100 por un edicto que otro diario de mayor ó igual circulación cobra 50. En este caso hay gravamen irreparable porque no puede repararse una vez cumplido el auto: si es apelable el auto y no habiendo la ley conferido una facultad omnimoda, es evidente que la designación no corresponde única y exclusivamente al Inferior, sino que debe ser determinado en última instancia por el Superior. Así lo exige la equidad, pues de otra manera no se consultan los verdaderos intereses de la justicia. Ese aditamento que le hace la Cámara de que la facultad potestativa del Juez «es sin perjuicio de que si encuentra otro diario de mayor circulación que pueda hacer la publicación en condiciones menos onerosas, así lo ordena», es *pour la gallerie*, algo que está demás, porque la práctica nos comprueba que esto jamás se consulta por los jueces inferiores, los que más bien parecen empresarios de los diarios designados por ellos, que representantes imparciales de la ley, cuyo único interés debe ser abatar la justicia siempre que no redunde en perjuicio de los litigantes. Hay un caso típico que nos da la importancia de ese aditamento puesto á la facultad discrecional de los jueces. Por el Juzgado á cargo del Dr. Peyret se ordenó la publicación de unos estatutos, designándose á «Tribuna». Este diario pidió 1800 pesos moneda nacional por la publicación: no hubo forma de hacerlo por menos,—constaba con la orden del Juez la que es soberana.—«La Prensa» pedía 1000 y «La Nación» lo mismo. «El Diario» 800. Con todos estos datos se presentó el interesado al Sr. Juez pidiendo designara otro, por ser de mayor circulación cualquiera de los nombrados, y por ser más barato. El Juez no hizo lugar fundado en su facultad soberana. Apelada la resolución, la Cámara dijo que no era apelable el auto, y que el Juez era el único con facultad para designar el diario en que debía hacerse la publicación. A estos extremos que desacreditan la administración de justicia nos condena la arbitraria jurisprudencia que sienta el sumario.

1—En el presente caso los calígrafos no estuvieron de acuerdo acerca de la autenticidad de la firma, habiendo habido opiniones contradictorias. El Camarista que fundó su voto al que se adhirió el resto de la Cámara como lo hace siempre indudablemente por no estudiar las causas, decía: «No es discutible por nuestras leyes que es el Juez quien por sí mismo



critorio puede declarar la autenticidad de documentos argüidos de falsos, aun contra el dictamen de peritos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 133, Ser. 3^a.

Dictamen pericial— Véase: *Peritos calígrafos*, núm. 1—*Cotejo*, núm. 1.

Diferencia— Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 104—*Juicio ordinario*, núm. 1—*Obligación á plazo*, núm. 2.

Dilatoria— Véase: *Escepción dilatoria*, núm. 1—*Falta de personería*, núm. 2—*Escepción de falta de personería*, núms. 3, 4 y 5—*Cosa juzgada*, núm. 5.

Diligencia aclaratoria— Véase: *Compulsa de libros*, número 2.

Diligencias— Véase: *Notificación*, núm. 3—*Fallecimiento*, núm. 3—*Término para la subsanación*, núm. 1—*Cappellania*, núm. 7.

1. Diligencias de prueba -- Pedidas después de vencido el

debe hacer el cotejo ó comparación de letras, sirviéndose solo de los calígrafos como peritos para ilustrar su juicio y no para encadenar su conciencia. Tampoco es cierto que el arte caligráfico haya llegado á tal grado de perfeccionamiento, que permita conclusiones terminantemente asertivas en todos los casos. Estos fundamentos podrían considerarse como aceptables aplicados al caso resuelto, pero no como principio general. Si la ley ha querido atar la conciencia del Juez, cuando el dictamen de los peritos es terminantemente asertivo, las conveniencias legales en que ella se funda no puede ser materia de discusión desde la silla del magistrado; que vaya á los bancos del Congreso á discutir su bondad y á iniciar su reforma, pero que no venga á discutirla aquel que no tiene derecho, y cuya única misión es aplicar esa ley dictada por otros. La ley ha dicho que cuando el dictamen de los peritos es terminantemente asertivo y éstos tienen título, su dictamen tiene fuerza de prueba legal. Hay varios casos resueltos en el sentido del sumario. Véase: Inst., tom. 4, verb. *Peritos*, núm. 1; tom. 3, verb. *Informe*, núm. 1. En contra verb. *Prueba plena*, núm. 3, del tom. 4 de la Inst.

1 -- El art. 118 del Cód. de Proc. establece que la prueba debe pedirse, ordenarse y practicarse dentro del término.



término de prueba, deben ser rechazadas.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 19, Ser. 3ª.

2. **Diligencias de prueba**—No practicadas dentro del término sin culpa de la parte, deben serlo antes de los alegatos.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 355, Ser. 3ª.

3. **Diligencias de prueba**—Pedidas en tiempo, no pueden imputarse negligencia á la parte que las solicitó.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 83, Ser. 3ª.

4. **Diligencias de prueba**—Deben ser practicadas dentro del término.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 47, Ser. 3ª.

5. **Diligencias de prueba**—No practicadas dentro del término por omisión de la parte, no pueden serlo después de vencido.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 44, Ser. 3ª.

6. **Diligencias de prueba**—No procede la reiteración de diligencias cuyo cumplimiento no ha urgido el interesado.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 240, Ser. 3ª.

7. **Diligencias de prueba**—La parte puede pedir las dili-

2—Pero si no lo fueren, dice el art. 118 del Cód. de Proc., por omisión de las autoridades encargadas de diligenciarlas podrán los interesados exigir que se practiquen antes de los alegatos.

3—La parte no solo solicitó la prueba en tiempo, sino que el día designado solicitó el señalamiento de nuevo día, alegando causales que el Juzgado consideró suficientes. Es evidente que aquí no hay negligencia.

4—Abierta la causa á prueba, en el mismo día se solicitaron algunas medidas probatorias, á las que el Juzgado no proveyó, porque en el escrito no se constituyó domicilio legal con arreglo á la nueva numeración cuando ésta fué cambiada en la ciudad. El interesado dejó pasar ocho meses sin que hubiese hecho diligencia alguna para su despacho. El art. 118 del Cód. de Proc. impone al interesado la obligación de urgir la producción de la prueba, la que debe serlo dentro del término.

5—Véase nota precedente.

6—La reiteración se pidió después de consentido el auto que ordenaba la agregación de la prueba y después de estar ésta agregada, siendo evidente en este caso que el interesado no urgíó su producción en los términos del art. 118 del Cód. de Proc.

7—Se solicitó que se sacase una copia fotográfica de un pagaré cuya



gencias que crea necesarias para autenticar un documento tachado de falso, sin perjuicio de las que practiquen los peritos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 153, Ser. 3ª.

8. Diligencias de prueba—Es deber de la parte urgir el cumplimiento de las diligencias de prueba.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 143, Ser. 3ª.

9. Diligencias de prueba—En el juicio sumario de interdicto, son apelables los autos que denieguen diligencias de prueba.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 160, Ser. 3ª.

10. Diligencias de prueba—Las pedidas y ordenadas dentro del término, pero no practicadas sin culpa de la parte, deben ser agregadas aun después de vencido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 359, Ser. 4ª.

11. Diligencias de prueba—No practicadas durante el firma fué tachada de falsa, y se solicitó también que se sacaran copias de documentos que debían servir para el cotejo. La Cámara ordenó la producción de esa prueba, fundándose en que en la ley no existe disposición alguna que limite los medios de prueba para el esclarecimiento de sus derechos, debiendo ampliarse en lo favorable sus omisiones.

8—Es jurisprudencia constante de la Cámara fundada en el art. 118 del Cód. de Proc.

9—En 1ª Instancia se dijo por el juez, que la naturaleza sumaria del juicio de interdicto no permite ni el recurso de reposición ni el de apelación, siendo procedente este último tan solo en los casos expresamente establecidos por la ley. La Cámara pensó de otra manera, diciendo que todo auto denegando una diligencia de prueba trae gravamen irreparable, y por consiguiente es apelable. La disposición del art. 571 del Cód. de Proc. no importa privar á las partes del derecho de solicitar en el comparendo á que se refiere, medidas probatorias que no se tuvieran á disposición de las partes, como ser documentos públicos archivados en las oficinas, con el fin de instruir con ellos el derecho que les acuerda la ley: tampoco el citado artículo puede obstar á que las partes soliciten la citación de los testigos que no quieran concurrir voluntariamente.

10—Véase el núm. 2.

11—Presentado como prueba un documento fué arguido de falso. Convocadas las partes á juicio verbal de acuerdo con lo preceptuado



término sin culpa de la parte, pueden serlo después de vencido sin que se pueda abrir al efecto un término especial.

—Jur. Civ., tom. 1, pág. 351, Ser. 4ª.

12. Diligencias de prueba.—Vencido el término de prueba, no pueden decretarse diligencias que apesar de haber sido pedidas en tiempo no se cumplieron por negligencia de la parte.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 400, Ser. 4ª.

13. Diligencias de prueba.—A la parte corresponde urgir el cumplimiento, dentro del término de prueba, de las

en el art. 153 del Cód. de Proc., se fijó un día dentro del término de prueba. La audiencia no tuvo lugar por inasistencia justificada de una de ellas. Convocadas nuevamente se fijó un día fuera del término de prueba. Una de las partes se opuso á que el reconocimiento caligráfico tuviese lugar porque el término ordinario de prueba estaba vencido, no pudiendo producirse ninguna diligencia probatoria sino dentro del término, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 118 del Cód. de Proc. Se resolvió por la mayoría de la Cámara que la producción de la prueba era procedente, fundándose en que la producción en este caso, dentro del término no era imputable á la parte, pues las diligencias fueron solicitadas 20 días antes del vencimiento del término, y si las demás diligencias prescriptas por el Cód. de Proc. en el art. 153 y siguientes no se llevaron á cabo dentro del término probatorio fué debido á la naturaleza misma de esta clase de prueba. Que si bien es cierto que de acuerdo con lo preceptuado por el art. 112 del Cód. de Proc. el término ordinario no puede ser ampliado, es indiscutible el derecho que asiste á la parte, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 118; y que en caso de duda, es de buena Administración de Justicia estar por la amplitud de la defensa facilitando la averiguación de la verdad, fin primordial de los juicios.

12.—Se decretó la citación de un testigo cuando ya estaba vencido el término de prueba, habiendo resultado que no vivía en el domicilio denunciado: después de haber dejado pasar nueve días sin pedir señalamiento de nueva audiencia, recién se presentó la parte solicitándola. En este caso es de estricta aplicación la disposición del art. 118 del Cód. de Procedimientos.

13.—La parte presentó su lista de testigos dentro del término probatorio sin hacer durante él diligencia alguna para su producción, y después de vencido se presentó pidiendo su cumplimiento. Es



diligencias probatorias solicitadas. —Jur. Civ., tom. 3, pág. 83, Ser. 4^a.

14. Diligencias de prueba --Deben cumplirse aun después de vencido el término si la demora no es imputable a la parte. —Jur. Civ., tom. 4, pág. 210, Ser. 4^a.

15. Diligencias de prueba --Los jueces deben practicarlas dentro del término probatorio siempre que les fuese posible. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 373, Ser. 4^a.

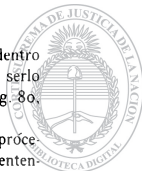
16. Diligencias de prueba --Deben practicarse aun después de vencido el término si la demora no es imputable a la parte. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 373, Ser. 4^a.

evidente la desidia en este caso y por consiguiente su falta de derecho para pedir su producción.

14.—Los testigos fueron presentados cinco días antes de vencerse el término de prueba, siendo citados algunos y otros no, por que no vivían en el domicilio indicado. La prueba no se tomó por ausencia del Juez, y entonces se presentó la parte alegando esa circunstancia, pidiendo nuevo día y denunciando los nuevos domicilios de los testigos. Parece injusta esta resolución en lo que respecta á los testigos que no fueron citados por no ser su domicilio el denunciado, pues es deber de la parte que los presenta conocer el domicilio actual, en la época de la presentación del escrito y no en el que tuvo ó en uno falso. Además si la parte no hubiese esperado los últimos días para presentar sus testigos habría tenido siempre tiempo de dar el nuevo domicilio dentro del término de prueba. Es evidente que la prueba no se produjo dentro del término por causa imputable á la parte, en cuyo caso el art. 118 del Cód. de Proc. ordena que esa prueba no se produzca. Si la declaración de los testigos cuyos domicilios estaban equivocados, no se tomó, fué debido al error en el domicilio indicado; la circunstancia accidental de no haber concurrido el Juez no pudo mejorar la situación legal de la parte, porque aun dado el caso de que el Juez hubiese concurrido á la audiencia, los testigos no habrían declarado por falta de citación, siendo esta falta de citación imputable á la parte.

15.—Este es el espíritu del art. 118 del Cód. de Proc.

16.—De acuerdo con la jurisprudencia constante basada en la disposición del art. 118 del Cód. de Proc.



17. Diligencias de prueba.—Las no practicadas dentro del término por negligencia de la parte, no pueden serlo después de su vencimiento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 80, Ser. 4^a.

18. Diligencias de prueba.—La procedencia ó imprócedencia de la prueba solo puede declararse al dictar sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 392, Ser. 4^a.

19. Diligencias de prueba.—No practicadas dentro del término por omisión de la autoridad, pueden serlo después de vencido.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 394, Ser. 4^a.

20. Diligencias de prueba.—Pedidas fuera del término probatorio no pueden concederse.—Jur. Civ., tom. 7, página 29, Ser. 4^a.

21. Diligencias de prueba.—Deben practicarse dentro del término.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 58, Ser. 4^a.

22. Diligencias de prueba.—A los interesados corresponde urgir para que sean practicadas dentro del término probatorio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 64, Ser. 4^a.

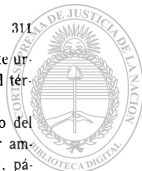
17—Se habían señalado varias audiencias sucesivas que no se celebraron por causas no imputables al Juzgado encargado de su diligenciamiento.

18—En el caso que nos ocupa, la Cámara dijo que la *validez ó pertinencia* de la prueba que las partes ofrecen, solo puede ser apreciada al pronunciar sentencia. El sumario habla de *procedencia* de la prueba, mientras que la Cámara habla de *validez ó pertinencia*, que son cosas distintas. Véase: tom. 4, verb. *Diligencias de prueba*, núm. 10; y *Término extraordinario*, núm. 2, tom. 3, mismo verb. núm. 14, y *Prueba*, núm. 10.

20—Art. 118 del Cód. de Proc.

21—Ofrecida la prueba en término, la parte no urgió su producción, ni constaba que hubiese habido omisión por parte de las autoridades encargadas de diligenciarlas, habiendo además quedado consentido el auto en que se hacía saber el certificado del actuario espresando no haberse producido prueba alguna.

22—Solicitada la prueba se dejó transcurrir un año sin pedir su producción dejando paralizado el expediente.



23. Diligencias de prueba Es obligación de la parte urgir para que las diligencias sean evacuadas dentro del término.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 31, Ser. 4ª.

24. Diligencias de prueba No practicadas dentro del término por negligencia de la parte, no pueden ser ampliadas después del vencimiento.—Jur. Civ., tom. 8, página 38, Ser. 4ª.

25. Diligencias de prueba Las no practicadas por ocupaciones del Juzgado deben cumplirse aun después de vencido el término.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 129, Ser. 4ª.

26. Diligencias de prueba El término extraordinario para evacuar diligencias en el extranjero es potestativo de las partes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 96, Ser. 4ª.

27. Diligencias de prueba—No procede la modificación

23—Además de la desidia de la parte se había dejado consentir el auto en que se mandaba agregar las pruebas producidas. Esta última causal no tiene trascendencia alguna, puesto que según disposición del art. 118 del Cód. de Proc., la parte puede pedir que las diligencias se practiquen antes de los alegatos, cuando ellas no se han producido dentro del término por omisión de las autoridades.

26—Las partes pueden considerarlas practicables dentro del término ordinario, en cuyo caso no hay necesidad de solicitar el término extraordinario, puesto que de no producirlas dentro del término ordinario, la única parte perjudicada sería la interesada en su producción. Esta resolución está en abierta contradicción con un caso resuelto por la Cámara de lo Comercial. Véase: Inst., tom. 4, verb. *Diligencias de prueba*, núm. 9. El principio sentado en el sumario consagra la buena doctrina, de acuerdo con la opinión que habíamos emitido al estudiar el caso anterior al que nos ocupa.

27—Cada parte tiene derecho a solicitar medidas probatorias tendientes a contrarrestar las de su adversario. Una medida probatoria modificada importa la petición de una nueva prueba, y si se admitiera la producción de ésta tendría que admitirse a la parte contraria la prueba necesaria para contrarrestarla. El principio consagrado en el art. 118 del Cód. de Proc. se basa no solo en la necesidad de establecer el orden de los juicios, sino también tiene como fundamento la perfecta igualdad en que para la defensa deben ser colocados los litigantes. Si se admi-

de diligencias de prueba pedidas, cuando no existe término hábil para su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 79, Ser. 4^a.

28. **Diligencias de prueba**—Producidas después de vencido el término sin culpa de la parte, deben ser agregadas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 86, Ser. 4^a.

29. **Diligencias de prueba**—Si no se provee el papel sellado necesario para la citación de los testigos, hay negligencia de parte del que los presenta y consiguientemente no puede pedirse su examen después de vencido el término.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 86, Ser. 4^a.

Diligencias de prueba—Véase: *Papel sellado*, núm. 4—*Alegar*, núm. 2—*Alimentos*, núm. 8.

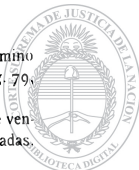
1. **Diligencias judiciales**—Su pedido en beneficio propio, hace procedente la condenación al pago de las costas y gastos que hayan debido verificar las demás partes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 124, Ser. 3^a.

tierra fuera de término la modificación de una medida probatoria, no se respetarían estos principios.

28—Con fecha 22 de Agosto se libró un oficio al cónsul de España, oficio que fué devuelto el 21 de Setiembre cuando ya había vencido con exceso el término de prueba; la Cámara dijo que procedía la agregación por haber sido la autoridad encargada de evacuar la diligencia pedida en tiempo, quien demoró su expedición.

29—No vemos el fundamento legal de esta resolución, puesto que para la citación de testigos no se requiere papel sellado. El art. 182 de! Cód. de Proc. establece terminantemente que los testigos serán citados por cédula en papel común. ¿Qué necesidad hay de proveer de papel sellado para la citación de testigos? La razón de la resolución es otra que la Cámara no se atreve á confesar. Generalmente los secretarios no se ocupan de los asuntos que tramitan por su secretaría, dejan librada la citación de testigos á los empleados inferiores, quienes se olvidan de hacer las citaciones, y los jueces por salvar á éstos, pretestan la falta de papel para no notificar.

1—Véase: verb. *Costas*, núm. 15.





2. Diligencias judiciales—El apoderado ó procurador judicial puede representar y acompañar á su poderdante en todos los actos y diligencias judiciales.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 127, Ser. 3ª.

3. Diligencias judiciales —El auto que señala día para una diligencia judicial es apelable. —Jur. Civ., tom. 5, página 370, Ser. 4ª.

Diligencias judiciales —Véase: *Firma*, núm. 1.

Diligencias nulas —Véase: *Nulidad del procedimiento*, núm. 2.

1ª. Diligencias para mejor proveer—No pueden ser resistidas por las partes.— Jur. Civ., tom. 1, pág. 116, Ser. 4ª.

Diligencias previas—Véase: *Boleto de compraventa*, número 33—*Declinatoria de jurisdicción*, núm. 1—*Nulidad del juicio*, núm. 2.

1ª. Dimensión —Ante dos títulos que tienen por origen

2—Véase: verb. *Apoderado*, num. 3.

3—Porque trae gravamen irreparable.

1ª --La diligencia decretada para mejor proveer se referia á una operación de mensura. La Cámara dijo, que tratándose de una diligencia ordenada con carácter de para mejor proveer, es facultivo del Juez dictarla.» Esta resolución de la Cámara es arbitraria y no tiene más fundamento que la propia suficiencia,—bien dudosa por cierto—de su afirmación. El art. 57 del Cód. de Proc. que enumera los casos en que puede un Juez dictar medidas para mejor proveer, lo hace en una forma taxativa. A esto se refiere el artículo 215 cuando habla de su producción. Así lo hemos sostenido siempre. Véase: Inst., tomo 4º, verb. *Mejor proveer*, núms. 1 y 2; tom. 2º, verb. *Declaraciones*, número 7 y su nota. La Cámara tiene declarado que los jueces no pueden dictar con carácter de para mejor proveer otras diligencias fuera de las enumeradas en el art. 57. Véase: Inst., tom. 1, verb. *Diligencias para mejor proveer*, núm. 879.

1ª—Esta cuestión fué resuelta por mayoría de un votos, estando ésta completamente equivocada. No esponemos los antecedentes por que la cuestión es larga y cumplida, es mejor ver el texto de la sentencia.



un mismo vendedor, prevalece el de fecha anterior si en él se espresa que no le queda más terreno y se señala linderos, aun cuando se haya fijado la dimensión exacta del terreno.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 404, Ser. 4^a.

Dimensión—Véase: *Precio*, núm. 2.

Dimensión parcial—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 1.

Dinero—Véase: *Dominio*, núm. 1.

1^a. **Dinero propio**—En las compras hechas por la esposa con dinero propio, basta consignar el hecho y la procedencia, sin que sea necesaria la comprobación de la verdad para la transferencia del dominio á un tercero.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 281, Ser. 3^a.

2. **Dinero propio**—La declaración de que la compra fué hecha con dinero propio de la esposa, no tenía por las leyes de Partida, tiempo ni forma determinada, siendo válida aun cuando tuviese fecha posterior al acto.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 363, Ser. 3^a.

Dinero propio—Véase: *Bienes*, núms. 1 y 5.

Director general—Véase: *Personería*, núm. 10.

1^b. **Disenso**—La resolución del Juez de 1^a Inst. en los

1^a—Los arts. 1246 y 1247 establecen terminantemente que solo se debe *designar ó espresar*, cómo el dinero pertenece á la mujer, y no exigen la comprobación de dichas enunciaciones.

2—Las leyes que se aplicaron para la resolución de este caso fueron las vigentes antes del Código Civil, porque la adquisición se hizo con anterioridad y porque el esposo que tal declaración hizo, falleció también antes de regir dicho Código.—art. 4044—La Ley 49, tít. 5º, Partida 5ª, cuando dice que las compras que con dinero ajeno hace una persona á su nombre son del que hizo la compra, agrega: fueras ende si tales dineros fuessen los dineros de la dote de alguna mujer, e su marido con voluntad della fiziese la compra. Ca en tales casos magüer el comprador compre la cosa en su nome, gana el señorío della aquel cuyos eran los dineros.

1^b—De acuerdo con lo dispuesto por el art. 173 del Cód. Civ. que



casos de disenso, es inapelable. —Jur. Civ., tom. 4, página 248, Ser. 4ª.

Disolución—Véase: *Sociedad*, núm. 2—*Contrato*, número 10—*Contrato de sociedad*, núm. 1—*Contrato de comisión*, núm. 1.

Disparidad de caracteres—Véase: *Divorcio*, núm. 8.

Disposiciones contrarias—Véase: *Incapacidad*, núm. 1.

Disposiciones pertinentes—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 23.

Disposiciones vigentes—Véase: *Culpa ó negligencia*, número 1.

División—Véase: *Condominio*, núms. 8 y 9—*Poder especial*, núm. 2—*Condómino*, núm. 4—*Herederos mayores*, núm. 2.

División del juicio—Véase: *Excepción de defecto legal*, núm. 12.

1. División en especie—Para que esta proceda debe practicarse la medición y tasación de la cosa común.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 9, Ser. 4ª.

2. División en especie—No procede la venta de la cosa común, si admite cómoda división en especie, y no existe la conformidad de los herederos. Jur. Civ., tom. 10, página 189, Ser. 4ª.

no ha sido modificado por el art. 11 de la Ley de Matrimonio Civil. Véase: Inst., tom. 2º, verb *Juicios de disenso*, núm. 1, el que está de acuerdo con la presente resolución.

1—Debe practicarse la medición á fin de conocer con exactitud la estensión total de lo que va á repartirse. La tasación es asimismo necesaria porque como la cosa puede variar de valor según su ubicación, pues cuando se trata de campos, cada palmo de tierra varia de valor, conviene conocer el valor para compensar a cada adjudicatario la menor estensión con el mayor valor de lo que se le adjudica, ó viceversa. Es como decía la Cámara, la mejor manera de garantizar los intereses de los condóminos.

2—Eran dos herederos, uno debía recibir dos quintos de la herencia,



División proporcional — Véase: *Indemnización*, núm. 9.

1. Divorcio—Decretado éste, el Juez puede entregar

otro tres quintos: las propiedades á dividirse eran dos, una tasada en 29.000 pesos y otra en 45.000. Se resolvió no hacer lugar á la venta de las propiedades, fundándose en que según lo dispone el art. 2692 del Cód. Civ., cada copropietario está autorizado á pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común, cuando no se encuentra sometida á una indivisión forzosa. Por otra parte, nadie puede ser obligado á vender sino cuando se encuentra sometido á una necesidad jurídica, lo que tiene lugar cuando la cosa fuere indivisible y perteneciese á varios individuos y alguno de ellos exigiese la licitación ó remate—art. 1324, inc. 3º.—Si bien es cierto que en este caso cada copropietario está facultado para pedir la división, también lo es que cualquiera de ellos puede oponerse á la venta si las cosas admiten cómoda división. En presencia de las disposiciones legales citadas, surge esta cuestión. ¿Pueden dividirse las propiedades más arriba mencionadas? Uno de los condóminos decía que no, fundándose en que dichas fincas tenían distintos valores, que los haberes de los herederos no eran iguales y que en vista de la actitud intransigente de la otra parte, nunca podían ponerse de acuerdo. A esto se contesta diciendo, que la ley no se ha puesto en el caso de que pueda dividirse materialmente la cosa, de manera que, si la extensión del fundo donde esos edificios se levantan es tal, que tirada una línea por el medio, queden dos partes sin afectar en nada á los dos edificios existentes. La diferencia de valor de las construcciones como asimismo la de los haberes de los herederos, no es un inconveniente que obste á que la división material de la cosa común se realice, porque al hacerse la partición de la herencia, el heredero á quien se le adjudique la casa de mayor valor, puede integrar lo que le falte al otro, pudiendo salvarse las dificultades de la elección de esas fincas por medio del sorteo ú otro cualquier recurso, sino prefiriesen los interesados arreglarse amistosamente. Debe no olvidarse, que en el caso presente se adujo como fundamento para no vender los inmuebles, la circunstancia de que uno de los herederos dedujo demanda contra el otro sobre ocultación de bienes, y que pendiente ese juicio no era posible proceder á la división en los términos de los arts. 666 y 667 del Cód. de Proc. por cuanto el resultado final de ese juicio podía traer una alteración en la parte que viniese corresponder á cada heredero en las dos fincas comunes.

1.—Siempre que ellos no sean menores de cinco años arts. 213 y 271 del Cód. Civ.



los hijos al cónyuge que justifique mayor idoneidad.

—Jur. Civ., tom. 1, pág. 68. Ser. 3^a.

2. **Divorcio**—Corresponde á los jueces proveer sobre la tenencia provisoria de los hijos, durante el juicio de divorcio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 65. Ser. 3^a.

3. **Divorcio**—Si con arreglo á las disposiciones de la Ley Argentina, el divorcio no disuelve el vínculo, la ma-

2—Arts. 73 y 81 de la Ley de Matrimonio Civil. Esta resolución está de acuerdo con otros casos resueltos. Véase, verb. *Divorcio*, números 2 y 3 del tom. 3^o de la Inst.

3—Son estrañas á una sucesión aquellas personas que son llamadas á ella, no por disposición de la ley, sino únicamente por la voluntad del testador. Un parentesco consanguíneo, pero lejano, existente entre el autor y el heredero instituido, no quita á éste su carácter de extraño en la acepción legal de la palabra. Ciertos lazos de familia y las vinculaciones por afinidad entre diversos miembros, si bien no les permite en sus reciprocas relaciones considerarse como estraños, lo son sin embargo para el derecho, que no estiende hasta ellos las presunciones de cariño y afecto que, aparte de otras razones, son la base sobre que reposa el orden establecido para las sucesiones. Escriche, verb. *Heredero*, § II, dice: «La calidad de heredero no puede tener otro origen que la voluntad del hombre ó la disposición de la ley; y de aquí viene la división general de herederos *testamentarios* y *legítimos*. Los herederos testamentarios se subdividen en *forzosos* ó *necesarios* y *voluntarios* ó *estraños*.» El mismo autor definiendo lo que debe entenderse por heredero extraño ó voluntario, agrega: § I «Como el testador solo está obligado á instituir como herederos á sus descendientes y en defecto de ellos á sus ascendientes, es claro que todos los herederos que no se encuentren en ninguna de estas dos líneas ó clases, serán herederos estraños ó voluntarios. Tales son por lo tanto así los parientes colaterales del testador como los que ninguna relación de parentesco tuvieren con él: dase á unos y otros la denominación de estraños, porque el testador no tiene obligación de nombrar los herederos. En el mismo sentido puede verse á Falcón, «Exposición doctrinal del Derecho Civil Español», tom. 2^o, pág. 179, § 4^o, núm. 3; Febrero, tom. 1^o, pág. 376, Sec. XIV, núm. 1190, edic. 1852 y la Ley 21, tit. 3^o, Part. 6^a. Es sabido que por nuestra legislación el divorcio no disuelve el vínculo matrimonial dando por solo resultado la separación de cuerpo. El matrimonio válido no se disuelve sino por la muerte de uno de los esposos, dice el



drastra, existiendo la madre, es un extraño para el causante de la sucesión, cualesquiera que fueren las leyes que

art. 219, y el 220 siguiente, agrega: «El matrimonio que puede disolverse según las leyes del país en que se hubiese celebrado, no se disolverá en la República sino en conformidad al artículo anterior.» Ya antes había estatuido el art. 165: «El matrimonio disuelto en país extranjero, de conformidad á las leyes del mismo país, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes de la República Argentina, no habilita para casarse á ninguno de los cónyuges. Es necesario no confundir la capacidad de hecho con la de derecho, y hecha la distinción, los artículos anteriores resuelven la cuestión en contra del extraño. Es en ese sentido de la capacidad de hecho, que el art. 7º de nuestro Código declara que la capacidad é incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio de la República será juzgada por las leyes de su respectivo domicilio, aun cuando se trate de actos ejecutados ó de bienes existentes en la República. Una cosa es que la madrastra del causante sea hábil para recibir por testamento como cualquier extraño, no oponiéndole nuestras leyes otros impedimentos que los que pudiera tener en su país, mejorando todavía el extranjero en algunos casos como cuando es menor allí y menor aquí—art. 138—y otra, que el divorcio habido en otro país haya de producir entre nosotros sus efectos propios hasta el extremo de que el que no podría casarse entre nosotros nuevamente, aparezca en nuestro país en sus relaciones de estado con nuevos vínculos de parentesco aun para efectos tan locales como el pago de impuestos. A tal extremo se opondrían preceptos claros de nuestra legislación como los art. 1207, 953 y el 14, que niega aplicación á las leyes extranjeras cuando se opongan á la moral y buenas costumbres, ó cuando su aplicación fuera incompatible con el espíritu de la legislación del Código; y es innegable que tal sucedería con la doctrina que acordara todos sus efectos entre nosotros al divorcio, *quo ad vinculum*, puesto que precisamente él no ha sido aceptado por nuestro Codificador consultando las buenas costumbres, y cuando menos, es de toda evidencia que aquella contrariaría el espíritu de nuestra legislación. Así lo impone el buen sentido que no podría permitir que no pudiendo volver á casarse en el país aquel cuyo matrimonio se ha disuelto en país extranjero, si no lo ha sido con arreglo á las leyes de la República, autorizara no obstante en el país con todos sus efectos el celebrado fuera de él en segundas nupcias. Hay más, y es que el art. 165 declara inhábil para volver á casarse á aquel cuyo matrimonio no es disuelto en el extranjero, de conformidad con nuestras



hubiesen autorizado el doble matrimonio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 5, Ser. 3ª.

4. Divorcio—Para decretarse, no basta la conformidad de los esposos: debe justificarse plenamente la existencia de los hechos en que se funda la acción. —Jur. Civ., tomo 6, pág. 134, Ser. 3ª.

leyes. Se arguye con la nota que trae en realidad alguna confusión al texto claro del artículo. Pero aun cuando las dudas quedaran con ella autorizadas, en lo que respecta á la habilidad para volver á casarse en país extranjero, se hace imposibles en orden á la procedencia de efectos civiles que quedan completamente interdictos en la nota como ya lo estaban en el texto de varios artículos. El art. 7º de nuestra actual Ley de Matrimonio, aunque inaplicable al presente, pone de relieve estos principios de nuestras leyes, cuando establece que la disolución, en país extranjero, de un matrimonio celebrado en la República, si no fuera de conformidad á las leyes de nuestro Código, no habilita á ninguno de los contrayentes para casarse. ¿Cómo podría la disolución pronunciada por otros jueces en contravención á nuestras leyes, dar efectos civiles en el país al nuevo matrimonio allí celebrado, cuando aquí tal matrimonio no podría concertarse entre los esposos divorciados? ¿Podrían ser mejoradas las leyes y juicios extranjeros en comparación con los propios? El estado mismo de las personas puede sufrir perturbaciones relacionado con el derecho de adquirir. Imponer el que pueda resultar de otras legislaciones con régimen de matrimonio distinto, bien podría causar ofensa á nuestras leyes y costumbres, si hubiéramos de considerar como legítimo al hijo que por nuestro Código fuera adulterino, incestuoso ó sacrilego, y aun al mismo hijo natural. Entretanto, el derecho de sucesión al patrimonio del difunto es regido por el derecho local del domicilio que el difunto tenía á su muerte, sean los sucesores nacionales ó extranjeros; la madrastra fué llamada á la sucesión sin consideración alguna á su relación de familia. Finalmente, no está demás hacer presente que toda suposición desaparece ante la realidad. Si por nuestras leyes, la madrastra debiera ser equiparada á la madre para sustraerla del pago de un impuesto, cuando la madre existe y goza del favor de la ley, está por demás decir que la madrastra queda escluida, so pena de darse dos madres á una misma persona.

4—El art. 71 de la Ley de Matrimonio Civil, establece que no hay divorcio por mutuo consentimiento de los esposos y que ellos no serán tenidos por divorciados sin sentencia de Juez competente.—Art. 76 de la Ley de Matrimonio Civil del 1889, y art. 213, Código Civ.



5. **Divorcio**—Decretado éste, los hijos menores de cinco años deben quedar en poder de la madre, designando el Juez cuál de los dos cónyuges debe tener á los mayores sin que ninguno de los esposos pueda alegar preferencia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 184, Ser. 4^a.

6. **Divorcio**—El Ministerio Fiscal solo es parte en el juicio de divorcio en cuanto se discuta el vínculo, pero no en los incidentes sobre alimentos y litisespensas.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 152, Ser. 3^a.

7. **Divorcio**—El juicio de divorcio basta para justificar la suspensión del marido en su carácter de administrador

5—Art. 76 de la Ley de Matrimonio Civil.—Es principio de procedimiento que la prueba incumbe la que afirma un hecho y que ella está á cargo del actor—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.—Si en un juicio de divorcio se comprueba que las relaciones entre los esposos no son tan cordiales como debieran serlo, no basta para autorizar la separación de los esposos, desde que ellos no revisten la gravedad que la ley exige para permitir el divorcio que nunca puede decretarse por mutuo consentimiento de partes—art. 67 de la Ley de Matrimonio Civil.—La justicia debe esforzarse en conservar la integridad del matrimonio, pues ésta no existe, según la espresión de un eminente jurisconsulto, únicamente para los esposos sino también para los hijos y para la sociedad; intereses permanentes aconsejan mantener la firmeza de los vínculos formados por él.

6—La intervención fiscal es al solo efecto de velar por las leyes de orden público en cuanto concierne al matrimonio. La cuestión de alimentos y litisespensas en manera alguna afecta el interés público.

7—La Cámara daba como fundamento, que existiendo entablada la demanda de divorcio y llevados á ese extremo las disenciones en el hogar, son de temer actos del marido perjudiciales á los intereses de la mujer, que imponen como medida precaucional dejar en suspenso la representación que ordinariamente corresponde al marido para estar en juicio por su esposa. Esta resolución no consulta los principios legales que rijen el caso, porque el art. 34 de la Ley de Matrimonio Civil de 1889 establece, que la mujer no puede estar en juicio sin la autorización del marido, la que puede ser suplida por los jueces cuando éste se hallase ausente ó impedido para darla y en los demás casos especia-



de los bienes de la esposa.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 117, Ser. 4ª.

8. Divorcio—La prueba de la causa que la ley exige para hacer procedente el divorcio, debe resultar clara y convincente: la disparidad de caracteres y aun algunos actos aislados de sevicia no bastan para declarar disuelto el vínculo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 332, Ser. 4ª.

9. Divorcio—La declaración de los parientes, dependientes y domésticos de los esposos, es admisible en los juicios de divorcio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 126, Ser. 4ª.

10. Divorcio—Las injurias graves y el abandono debidamente justificados, hacen procedente el divorcio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 126, Ser. 4ª.

les que allí se determina—art. 60.—Siendo el marido el administrador legítimo de los bienes de la mujer—art. 52—mientras no sea privado de esa administración, ella no puede ser concedida á la mujer.

9—El art. 70 de la Ley de Matrimonio Civil de 1889, establece que toda clase de prueba es admitida en este juicio con excepción del juramento de los cónyuges. Esto no quiere decir simplemente que las causas alegadas para el divorcio puedan probarse por los medios comunes y ordinarios que sirven para comprobar los actos jurídicos, sino que en estos juicios se ha de ensanchar el criterio de apreciación de la prueba en lo que se comprende la exclusión de ciertas incapacidades de los testigos según prudente arbitrio y regla de sana crítica. Darle este alcance sería una variedad legislativa. El legislador ha tenido en cuenta que de la vida íntima de los esposos solo pueden tener conocimiento sus allegados, parientes ó domésticos. Se ha admitido constantemente el testimonio de estas personas en los juicios de divorcio. Los prácticos también sostienen la misma teoría. Véase Walter, Manual de Derecho Eclesiástico Universal; Bonnier, Tratado de las Pruebas, núm. 284; Aubry y Rau, § 491—Laurent, Principios de Derecho Civil, tom. 3, § 234.

10—Art. 67, incs. 5 y 7 de la Ley de Matrimonio Civil de 1889. El marido que se ausenta sin dejar recursos á su esposa, ni persona alguna encargada de suministrarlos por él, se alza contra sus deberes y abandona voluntariamente á su esposa.



11. **Divorcio**—La acción fundada en el adulterio del esposo, debe ser rechazada en tanto no se justifique plenamente; las enfermedades venereas no bastan para justificarlo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 781, Ser. 4^a.

Divorcio—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 12.

1^a. **Doble ejemplar**—No puede exigirse el cumplimiento de un contrato bilateral constante de instrumento privado, si no se justifica la existencia del doble ejemplar que prescribe la ley.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 416, Ser. 3^a.

Doble ejemplar—Véase: *Contrato*, núm. 13.

Doble matrimonio—Véase: *Divorcio*, núm. 3.

Doble traslado—Véase: *Sentencia*, núm. 9.

1^b. **Documento**—El haber sido escrita la fecha en época distinta de la del cuerpo del documento, no invalida su contenido, siempre que no se justifique la existencia de otra fecha anterior.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 193, Ser. 3^a.

11—Legrand du Saulle en su tratado de medicina legal se espresa: «En procesos sobre separación de cuerpos, dice uno de ellos, mis esfuerzos se dirigen á que á la instancia se apoye sobre cualquier otro motivo que no sea enfermedad venerea; en primer lugar porque este motivo no siempre ha sido aceptado, y también porque es casi imposible establecer á cuál de los esposos debe imputarse la prioridad de la infección. Existen, observa el otro, casos singularmente difíciles y embarazosos en los que la buena fe del médico puede ser sorprendida si de antemano no ha establecido como regla absoluta rehusar estas declaraciones vagas, estos certificados mas ó menos complacientes de los cuales es fácil abusar. La cuestión en efecto, no consiste en reconocer la existencia de la sífilis en uno de los cónyuges, sino, necesario es decirlo, en determinar su origen y referirlo á uno ú otro con el triste vínculo del contagio.»

1^a—Véase: verb. *Contrato bilateral*, núm. 2.

1^b—Se trataba de una cuenta á la que se le puso el conforme algún tiempo después de haber sido ella escrita. La firma parecía haber sido puesta cuando se puso el conforme. El informe que se produjo estableció que la fecha había sido puesta después de escrito el cuerpo del documento, pero no se decía que lo hubiese sido después de puesto el



2. Documento—La parte puede pedir las diligencias que crea necesarias para autenticar el documento tachado de falso, sin perjuicio de las que practiquen los peritos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 153, Ser. 3ª.

3. Documento—Para que el principio de prueba escrita haga procedente la testimonial, es necesario que el documento exhibido arroje por sí solo fuertes presunciones de la verdad de la acción instaurada ó que contenga indicaciones precisas sobre el objeto de la convención.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 388, Ser. 4ª.

4. Documento—Procede el reconocimiento por la esposa, de un documento firmado por ella á ruego del esposo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 79, Ser. 4ª

5. Documento—No pudiendo comprobarse la fecha cierta de la recepción por el secretario, debe estarse á la del documento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 93, Ser. 4ª.

conforme y la firma, los que trazados por letra distinta constaban al pie del documento. En el caso que nos ocupa, la parte que alega el hecho debe comprobar plenamente su aseveración. Todo el documento comprobaba que la fecha estaba bien puesta, porque no había enmendaduras ni raspaduras, ni el documento tenía más fecha que la arguida de falsa.

2—Se pidió que un fotógrafo tomara copia fotográfica de un pagaré y de los documentos que debían servir de base para el cotejo. La Cámara dijo que no habiendo disposición alguna que limite los medios de prueba para el esclarecimiento de la verdad, debiendo en este caso ampliarse sus omisiones, procedía su producción.

3—Arts. 1192 del Cód. Civ. y 180 del de Proc. Laurent, tom. 19, págs. 338 á 345; Aubry y Rau, tom. 8, pág. 331; y Marcadé, tom. 5, pág. 133.

4—El art. 186 del Cód. de Proc. no es aplicable en este caso sino el 140.

5 Se trataba de un oficio rogatorio dirigido por un juez á otro: el actuario no le puso cargo al recibirlo: la Cámara consideró que lo justo era suponer que fué presentado en la fecha que llevaba el oficio; fundándose para así resolver, en que en caso de duda debe estarse á aquello que beneficie la amplitud de la defensa.



6. Documento De todo documento acompañado debe correrse traslado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 130, Ser. 4^a.

Documento—Véase: *Falsedad*, núm. 6—*Depósito gratuito*, núm. 1—*Estampilla*, núm. 2—*Mandatario*, núm. 14—*Excepción de compensación*, núm. 1—*Excepción de pago*, núm. 6—*Obligación por instrumento privado*, núm. 1.

Documento auténtico—Véase: *Cuenta presentada*, número 1.

1. Documento de depósito—Reconocida la autenticidad de un documento de depósito de ganados, el depositario ó sus herederos deben ser obligados á rendir cuenta del depósito y sus procreos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 133, Ser. 3^a.

1^a. Documento privado—La prueba tendente á desvir-

6—Se dice que la disposición del art. 102 del Cód. de Proc., es general. Parece que la Cámara se equivoca cuando establece la generalidad de la disposición citada. Todo lo contrario, ésta disposición se limita al caso en que al contestar la demanda ó al oponer reconvención se acompañan documentos; así lo dice espresamente sin establecer que esa disposición pueda ampliarse á los demás casos. Así cuando se acompañan documentos en estado de prueba, no hay necesidad de darse traslado, porque la parte tiene la más amplia libertad de impugnarlo sin necesidad del traslado, mientras que si se acompañan al evacuar el traslado de la demanda ó al deducir reconvención, se hace necesario el traslado á fin de que el cuasi-contrato de litiscontestación quede trabado en forma. La razón del precepto del art. 102 está, como dice Reus, «en que no sería justo tratar de sorprender al demandado con una petición que solo estuviese apoyada en el dicho de la parte, sea actor ó demandado, para reservarse después hacer uso de esos documentos en un tiempo en que su contrario no podría ya proporcionarse armas para combatirlos.» Véase el comentario al art. 504 de la Ley de Enjuiciamiento española, tom. 1, pág. 369. Tenemos entendido que así lo ha resuelto la Cámara en un caso que fué llevado por apelación ante ella, declarando que este art. solo se refiere á los documentos acompañados con la demanda ó contestación.

1^a—La parte que dijo de falsedad de los documentos trató de desvirtuar la prueba pericial, por medio de testigos, lo que es abiertamente



tuar el contenido de documentos privados argüidos de falsedad, es improcedente si con las formalidades de la ley se declara su autenticidad.—Jur. Civ., tom. 1, página 133, Ser. 3ª.

2. **Documento privado** —Carece de valor legal el documento privado sin las firmas de las partes que realizan un contrato bilateral: para que la firma de una sola haga suponer que existe otro ejemplar, el presentado debe tener la firma del contrario. — Jur. Civ., tom. 2, pág. 402, Ser. 3ª.

3. **Documento privado** —Autenticada la firma por fallecimiento del firmante, se considera autenticado el contenido.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 193, Ser. 3ª.

4. **Documento privado** —Los testigos firmantes de un documento privado firmado á ruego, no bastan para justificar su autenticidad después del fallecimiento de aquel que resulta obligado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 313, Ser. 3ª.

5. **Documento privado** —Para la declaración, después del improcedente, pues cuando el dictamen de los peritos es terminantemente asertivo, tiene fuerza de prueba legal. La prueba de testigos no puede contrarrestar la prueba pericial.

2—Véase, verb. *Contrato bilateral*, núm. 1.

3—Se dijo que la deuda que establecía el documento estaba prescripta: para establecer la prescripción se adujo como fundamento el hecho de que la fecha había sido puesta con posterioridad al otorgamiento del documento. La firma fué reconocida como auténtica en virtud del dictamen terminantemente asertivo de peritos—art. 178 del Cód. de Proc.—Reconocido como auténtica la firma, queda reconocido el contenido del documento—art. 1028 del Cód. Civ.—Correspondía al que aducía el hecho nuevo en juicio, desvirtuar el contenido del documento una vez reconocida la autenticidad de la firma.

4—Este caso debe tomarse con las limitaciones establecidas en la sentencia dictada. Véase, verb. *Autenticidad*, núm. 1.

5—Este sumario no fué materia de resolución. Con efecto, examinando el fallo resulta que el Juez dijo en su sentencia: Que desde luego deben notarse que los testigos que suscriben el documento son,



fallecimiento del obligado, de la autenticidad de un documento privado firmado á ruego, debe producirse prueba plena sobre la existencia de las obligaciones que él contenga.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 313, Ser. 3ª.

6. Documento privado—Las condiciones escritas en el documento privado, por el que lo presenta, no forman prueba si el ejemplar presentado por la contraparte no contiene igual anotación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 385, Ser. 4ª.

7. Documento privado—Presentado en juicio, y cuya autenticidad ha sido reconocida por las partes, es indivisible, y sus constancias forman prueba plena en contra de la parte que lo presentó.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 40, Ser. 4ª.

con escepción de uno, los mismos que han declarado sobre la autenticidad del documento. El único testigo que no ha firmado el documento aparece interesado en el contrato, y cede ese interés en él; no puede, como es de consiguiente, merecer igual crédito que el que merecerían los testimonios de otras personas que se hallaran desligadas del acto cuya prueba se pretende. Los testimonios de las citadas personas por sí solos y sin ninguna presunción que los contrariase, podrían quizá tomarse como decisivos para constatar el hecho sobre que versan: pero cuando repetidos indicios desautorizan su veracidad, no es posible admitirlas como prueba plena y concluyente.» Se ve, pues, que lejos de exigir el Juez las condiciones establecidas en el sumario, de lo espuesto resulta todo lo contrario, pues si los testimonios no estuviesen contrarrestados por presunciones graves, valdrían como prueba plena y concluyente. La Cámara dijo: «Para que la demanda pudiera prosperar era necesario acreditar la autenticidad del documento en que aquélla se funda, puesto que ella ha sido absoluta y categóricamente desconocida por la parte demandada. La forma de autenticar el documento en este caso no puede ser otra sino por medio de las mismas personas que en su otorgamiento han intervenido. El sumario, pues, está equivocado.

6—De acuerdo con el principio sentado en el art. 1030 del Código Civil.

7—Art. 1029 del Cód. Civ.

Documento privado Véase: *Contrato de compraventa*, núms. 23, 24 y 25.—*Autenticidad*, núm. 2.—*Obligación de hacer*, núm. 12.—*Compraventa*, núm. 2.—*Excepción de pago*, núm. 2.—*Embargo preventivo*, núm. 39.

1. Documentos—Los presentados durante el término de prueba, deben ser tenidos en consideración por el Juzgado al dictar sentencia, aun cuando no hubiesen sido mencionados en la contestación á la demanda, siempre que la parte contra quien se presentan, reconociéndolos no se hubiese opuesto á su agregación. —Jur. Civ., tom. 1, pág. 214, Ser. 3^a.

2. Documentos—Los que se mencionan en la demanda como existentes en poder del actor, no pueden ser agre-

1—El Juez de 1^a Ins. dijo, que los documentos agregados no podían ser tomados en consideración, por no haberse mencionado en la contestación á la demanda—Art. 100, inc. 4^o, Cód. de Proc.—La Cámara dijo, que reconocido el documento al absolver posiciones, sin oponer formalmente reparos legales á su agregación á los autos, pues no puede considerarse tal la reserva de sus derechos para discutir más tarde la oportunidad de su agregación, no puede el Juzgado dejar de tomarlo en consideración. Si la resistencia se hubiese ejercitado en el tiempo y forma establecidos por la ley, si se hubiese hecho uso del derecho para oponerse á la agregación esa resistencia sería legítima, pero es á todas luces incorrecto, como lo hacía el Juez, ya porque el reconocimiento voluntario del actor lo incorporó válidamente á la apreciación judicial, ya porque no es oficio de los jueces suplir los vacíos de la defensa, en tanto ellos se refieran á los hechos ó á los medios de presentarlos en juicio. En la hipótesis de que fuese arreglado á derecho el fundamento de la sentencia, el reconocimiento del demandante valdría siempre como confesión sin ningún menoscabo de su fuerza legal, en razón de las solemnidades y tiempo en que ha sido presentado—art. 125 del Cód. de Proc.

2—De la disposición de los arts. 72 y 73 del Cód. de Proc. resulta, que el legislador ha querido que el actor haga conocer del demandado todos los documentos en que funda su derecho, á fin de que éste pueda aceptar ó negar los hechos alegados por aquél. En el caso presente no se dió cumplimiento á la prescripción legal, porque ni siquiera se prestó el juramento de la ley al presentarlos en juicio. Cuando un liti-





gados durante el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 312, Ser. 3^a.

3. **Documentos**—La obligación de presentarlos con la demanda ó contestación, solo comprende aquéllos en que la parte funda su derecho.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 250, Ser. 3^a.

4. **Documentos** — Acompañados, la demanda no está obligada á repetir los datos que resulten de los documentos acompañados.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 141, Ser. 3^a.

5. **Documentos**—Los de fecha anterior á la demanda, pueden ser agregados durante la prueba bajo el juramento de ley.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 7, Ser. 4^a.

6. **Documentos**—Los reconocidos al absolver posiciones, y consentida la agregación en aquel acto, no deben ser desglosados por oposición ulterior—Jur. Civ., tom. 3, pág. 96, Ser. 4^a.

gante desea valerse de documentos que tiene en su poder pero que no puede presentarlos en la oportunidad legal, debe expresar lo que de ellos resulte, y hacer presente que no los acompaña en la demanda, debido á una imposibilidad, como por ejemplo, el hecho de haberse traspapelado y no serle posible encontrar.

3—Arts. 72 y 73 del Cód. de Proc. Véase: Inst., tom. 2^o, verbo *Documentos*, núm. 3 y su nota.

4—Véase *Demanda*, núm. 2.

5—El Juez de 1^a Inst., fundado en los arts. 73 y 100, inc. 4^o del Cód. de Proc., mandó devolver los documentos; la Cámara, fundándose en la disposición del art. 73, segunda parte, mandólos agregar. Los documentos de fecha anterior á la demanda ó á la contestación, que no pueden agregarse ni bajo juramento, son aquellos que sirven de fundamento al derecho alegado. Véanse los núms. 2 y 3; Inst., tom. 3^o, verb. *Documentos*, núm. 2.

6—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: Inst., tomo 3^o, verb. *Documentos*, núm. 3. Puede verse además el tom. 2^o, verbo *Absolución de posiciones*, núm. 1, y tom. 1^o, verb. *Documentos*, núm. 904, que parecen estar en contra del sumario, pero no es así, por que ellos resuelven casos en que la agregación no había quedado consentida.



7. **Documentos**—Los que no justifican hechos alegados en la demanda, pueden ser agregados durante el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 389. Ser. 4^a.

8. **Documentos**—No pueden agregarse los de fecha anterior á la demanda sin el juramento de ley.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 41. Ser. 4^a.

9. **Documentos**—Los mencionados en la demanda, no pueden ser agregados como prueba si su presentación dependía del que los mencionó.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 53. Ser. 4^a.

7—Véase: los núms. 3 y 5.

8—Los documentos se presentaron sin el juramento prescrito por el art. 73 del Cód. de Proc., ordenándose por haberse omitido el juramento su devolución. Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Juramento*, núm. 1.

9—La parte, al promover la cuestión hizo referencia en su escrito, á la existencia de las escrituras y documentos que se encontraban en el Dep. de Ingenieros, creyendo así dejar cumplido el precepto legal del art. 72 del Cód. de Proc., prescripción que responde al propósito de establecer igualdad de condiciones en la defensa, para contrarrestar la fuerza probatoria de los documentos aducidos como fundamento de la acción. El artículo citado dice, que bastará mencionar el archivo ú oficina pública en que se encuentre, *cuando no las tuviese á su disposición*, lo que no se concreta al caso en que *no las tuviese en su poder*, sino que es preciso además que no se encuentren á su disposición, es decir, que no basten sus diligencias particulares para conseguir desde luego lo que necesita. Los documentos que buenamente pueda adquirir la parte antes de demandar ó contestar á la demanda, aun cuando no los tenga en su poder, debe presentarlos y si no lo hiciera no le serán después admitidos aun cuando se hubiese designado el punto donde se encuentran. Esta disposición solo es aplicable al caso en que como dice la Ley Recopilada «*no las pudo haber*, esto es, no le fué posible adquirir por impedírselo una causa ajena á su voluntad.» Reus, comentando el art. 504 de la Ley de Enj. de España, en la que la nuestra se ha inspirado, resuelve la cuestión en este sentido. Véase, tom. 1^o, página 369, donde se cita asimismo la opinión de Manresa y Reus. Es de advertirse que la disposición que estudiamos no exige que se acompañen los documentos originales sino que bastan las copias correspondientes, que son siempre fáciles de obtener.



10. Documentos—Si no pueden ser presentado basta individualizarlos, indicando la oficina donde se encuentran.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 26, Ser. 4ª.

11. Documentos—La falta de presentación de los que fundan la demanda, no puede dar lugar á la escepción de defecto legal.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 294, Ser. 4ª.

12. Documentos—No puede ser devuelto el escrito en que se evacua el traslado sobre los documentos acompañados, aun cuando contenga apreciaciones sobre ellos.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 296, Ser. 4ª.

Documentos—Véase: *Dictamen pericial*, núm. 1—*Diligencias de prueba*, núm. 11—*Prueba de documentos*, número 1—*Escepción dilatoria*, núm. 3—*Escepción de defecto legal*, núm. 16.

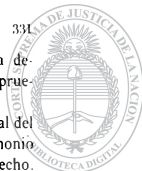
1. Documentos de descargo—Los reconocidos por el acreedor en cualquier estado del juicio forman prueba, aun en el caso de que no pudieran ser agregados.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 214, Ser. 3ª.

10—No se acompañaron los documentos, pero se designó la oficina pública donde se encontraban, espresando lo que de ellos resultaban. Véase nota precedente.

11—De acuerdo con la jurisprudencia constante de la Cámara. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Documentos*, núms. 4, 5 y 6; tom. 2º, verb. *Acción*, núm. 5; tom. 1º, verb. *Defecto legal*, núms. 759, 760, 761 y 762; *Documentos*, núm. 910; Caravantes, tom. 2º, pág. 89, núm. 607.

12—De acuerdo con lo preceptuado por el art. 102 del Cód. de Proc. se confirió traslado de los documentos acompañados al contestar la demanda: la parte no se limitó á examinar esos documentos sino que se estendió en consideraciones, lo que no es causal bastante para ordenar la devolución del escrito, pues no existe disposición legal alguna que imponga un límite á ese traslado, lo que por otra parte coartaría el derecho de defensa. Además, si el escrito contiene consideraciones que no hacen á la cuestión, en nada perjudicará esa circunstancia por cuanto no se tomarían en consideración al dictar sentencia.

1—Véase, verb. *Documentos*, núm. 1, la última parte de la nota.



1^a. Documentos públicos— Los mencionados en la demanda pueden ser agregados durante el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 19, Ser. 3^a.

2. Documentos públicos—En el acto del juicio verbal del interdicto, las partes pueden pedir se agregue testimonio de los documentos públicos que convengan á su derecho.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 160, Ser. 3^a.

Dolo—Véase: *Acto ilícito*, núm. 2—*Contrato de compra-venta*, núm. 4—*Declaraciones*, núm. 1—*Escritura*, número 2—*Nulidad de un acto jurídico*, núms. 2 y 7—*Prueba del dolo*, núm. 1.

Domésticos—Véase: *Divorcio*, núm. 9.

1^b. Domicilio—Ignorándose el del que debe absolver posiciones, no puede ser citado por edictos. debe fijarse un

1^a—Art. 72 del Cód. de Proc. El Juez dijo, que no se trataba de documentos que sirvieran de base á la demanda, sino de simples informes.

2—Véase *Diligencias de prueba*, núm. 9.

1—Este punto no fué materia de resolución en 1^a Inst., solo la Cámara lo estableció en la apelación. No fué materia de discusión si el apoderado estaba ó no obligado á denunciar el domicilio, sino si debía el absolvente ser citado por edicto. Se resolvió que no, porque el art. 80 del Cód. de Proc. legisla para los casos de citación ó emplazamiento á fin de que el demandado comparezca á estar á derecho, como se desprende no solo de la colocación que ese artículo tiene en la ley, sino también del contexto de todo él. La citación por edictos, no puede hacerse al que debe absolver posiciones, porque el Código establece que debe hacerse por cédula—art. 127.—La Cámara dijo, que «si bien no es procedente la citación por edictos para la comparecencia del que debe absolver posiciones, no puede privarse á las partes del derecho que le acuerda el art. 125 del Cód. de Proc. para que la contraria absuelva posiciones: que tampoco puede obligársele á que acepte como absolvente al apoderado—art. 136.— Fundada en esto, la Cámara declaró que debía fijársele al apoderado un término prudencial para que manifestara el lugar en que se encontraba, á fin de librar el oficio necesario. Los fundamentos de esta resolución, no pueden ser más desesnables. Con efecto, el art. 136 del Cód. de Pro-



término prudencial para que el apoderado manifieste el lugar donde reside.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 344. Serie 3ª.

2. Domicilio—Las posiciones deben ser absueltas en el domicilio del absolvente, aun cuando el cambio de dicho domicilio se haya verificado después de trabado el litigio.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 235, Ser. 3ª.

3. Domicilio—El cambio de domicilio de un testigo, no hace perder el derecho de presentarlo. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 107, Ser. 3ª.

cedimientos en que la Cámara se funda para obligar al apoderado a designar el lugar en que se encuentra su principal, precisamente es bastante para fundar una resolución contraria, pues autoriza al que pide las posiciones a exigir que las absuelva el apoderado. La absolución hecha por éste, estando facultado al efecto, surte todos los efectos legales, como si lo fuese por la misma parte dueña del pleito. No se le priva pues de ningún derecho al litigante. Por otra parte, esta resolución está en abierta oposición con otros casos resueltos. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Posiciones*, núm. 3, y tom. 1º, mismo verbo, núm. 2071. Se dice en la resolución de la Cámara que el apoderado debe dar el domicilio *bajo apercibimiento*, ¿de qué? preguntamos nosotros. ¿Cuál es el apercibimiento que corresponde hacer efectivo en este caso? Ninguno: no puede ser el de dar por absueltas las posiciones en rebeldía, porque, como tiene resuelto la Cámara, «cuando de autos resulta la ausencia del que debe absolver las posiciones, es inútil la citación bajo apercibimiento». Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Posiciones*, número 4. Esta resolución de la Cámara, no puede ser tenida en cuenta como precedente, porque ella no consulta la ley, ni fué materia de resolución en 1ª Inst., y además está en contra de la jurisprudencia sentada.

2—El art. 136 del Cód. de Proc. establece terminantemente que la absolución debe diligenciarse en el lugar donde se encuentre el absolvente. Ni siquiera exige que tenga allí su domicilio.

3—El testigo estuvo domiciliado en el domicilio indicado en el escrito de presentación hasta dos días antes de presentado dicho escrito, según se comprobó en la diligencia de citación, lo que aleja la idea de un falso domicilio, pues en tan corto intervalo bien pudo ignorar la parte el cambio verificado, en cuyo caso no se quebrantaría lo dispuesto en el art. 181 del Cód. de Proc.



4. **Domicilio**—El demandante por acción personal puede renunciar al fuero federal ocurriendo á la jurisdicción del domicilio del demandado. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 113, Ser. 3^a.

5. **Domicilio**— El damnificado por violación de domicilio tiene personería para gestionar la indemnización, aun cuando no sea el propietario ni su representante legal. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

6. **Domicilio**—Existe violación siempre que careciendo de orden de allanamiento dictada por Juez competente, la autoridad se introduce al domicilio privado sin permiso del propietario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

7. **Domicilio**—Las notificaciones practicadas en un domicilio que no es del demandado, producen la nulidad de lo actuado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 10, Ser. 4^a.

8. **Domicilio**—El conocimiento de las demandas de la sucesión contra terceros, corresponde al Juez del domicilio del demandado. —Jur. Civ., tom. 3, pág. 353, Ser. 4^a.

9. **Domicilio**—De los testigos, solo puede resultar falso

4—Véase: verb. *Acción personal*, núm. 1.

5—Véase: verb. *Damnificado*, núm. 1.

6—Véase: *Allanamiento*, núm. 1.

7—Arts. 37 y 77 del Cód. de Proc.

8—El juicio sucesorio atrae á sí á todos los demás, en virtud de la universalidad de su carácter, pero no pueden promoverse ante el Juez de la sucesión otras demandas que las enumeradas en el art. 634 del Cód. de Proc. Como el heredero entra á continuar la persona del causante, según disposición del art. 3417 del Cód. Civ., en consecuencia, es indudable que tiene los mismos derechos y obligaciones que á éste incumbían. Cuando una sucesión demanda, debe deducir su acción con sujeción á los principios generales de jurisdicción.

9 El que presentó los testigos, indicó el domicilio que fué alegado de falso por la parte contraria, antes de hacerse la notificación en el domicilio denunciado: esa falsedad alegada no puede ser tomada en consideración hasta tanto no resulte de la misma notificación.



del acto de la notificación, las indicaciones de la parte, no pueden ser atendidas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 432, Ser. 4^a.

10. Domicilio.— Si después del libramiento del exhorto el testigo cambia de domicilio, debe librarse nuevo oficio para que preste su declaración.— Jur. Civ., tom. 10, página 327, Ser. 4^a.

11. Domicilio—Debe declararse nula la sentencia re-

10—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 7.

11—Esta resolución fué resuelta por mayoría de votos, tres contra dos. Entablada una demanda fué notificado el emplazamiento en un domicilio que no era el del demandado: el apoderado de éste se presentó denunciando el nuevo domicilio y pidió que allí fuese notificado su representado: el Juez de 1^a Inst. hizo caso omiso de esta manifestación, declarando rebelde al demandado: este auto como todos los demás que debían notificarse por cédula lo fueron en el nuevo domicilio denunciado. La mayoría dijo: que la sentencia era nula, porque las notificaciones no fueron hechas de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 45 y 433 del Cód. de Proc. La diligencia de notificación del traslado de la demanda es nula, carece de todo valor legal, como asimismo la rebeldía que se declaró y en consecuencia todo lo actuado es nulo, dado lo dispuesto por el art. 77 del Cód. de Proc. Los demandados no han sido oídos y si bien fueron notificados personalmente de la sentencia que los absolvía de la demanda, esta circunstancia no puede excusar la declaración de una nulidad en la forma establecida por el Cód. de Procedimientos cuyas prescripciones son de orden público y como tales deben ser estrictamente observadas en todos los juicios. La minoría dijo, que si bien el emplazamiento fué notificado en un domicilio que después se alegó no ser verdadero, debía tenerse presente que la providencia declarando decaído el derecho para contestar el traslado de la demanda fué notificado en el nuevo domicilio denunciado, quedando dicha providencia consentida. Si el demandado fué notificado legalmente de esta providencia y de las demás sucesivas, y las consintió, es culpa del interesado no haber hecho uso de su derecho durante toda la secuela del litigio, no obstante haber sido notificado de las providencias dictadas. Si algún defecto hubiese habido en el procedimiento él quedaría subsanado por no haberse reclamado la nulidad en la misma instancia que se produjo—art. 240 del Cód. de Proc.—Uno de los Ca-



caída si el demandado fué notificado del traslado de la demanda en un domicilio que con posterioridad se ha reconocido por el demandante, que no era verdadero, aun cuando ese pronunciamiento le fuese favorable.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 383, Ser. 4ª.

12. Domicilio—Las posiciones deben ser absueltas ante el Juez del domicilio del absolvente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 233, Ser. 4ª.

13. Domicilio—Es nula la citación por edictos y todas las sentencias que se dictaron en virtud de ella. Los camaristas dijo, que no solo la sentencia era nula y todo lo obrado también, sino que era de opinión que las costas debían ser á cargo de la parte que produjo la nulidad. Ese voto solo, sin haber recibido la adhesión de ninguno de los demás, fué bastante para declarar que las costas eran á cargo de éste. De manera que las costas, con toda injusticia, las tuvo que pagar el actor y por el voto de uno contra cuatro. Así es la justicia que administra esta Cámara cuyo criterio está renido con lo justo y con la ley expresa. Si dos Camaristas consideraron que la sentencia era válida y que la nulidad deducida por una de las partes era improcedente, ella jamás debió condenar en las costas á la parte cuya buena fe había sido tan ampliamente reconocida. Es que parece que en esta época el secretario, en las sentencias definitivas era el que imponía las costas ó exoneraba de ellas con solo agregarle el aditamento «con costas» ó «sin costas» al acuerdo de la Cámara. Es evidente la injusticia de esta declaratoria de nulidad. El art. 240 del Cód. de Proc. es terminante cuando dice que la nulidad por defectos de procedimiento quedará subsanada si no se reclama en la misma instancia en que se hayan cometido. Por otra parte, la falta de notificación quedará subsanada y el vicio desaparecerá, siempre que resulte de autos haber tenido la parte noticia de la providencia. En este caso, la notificación surtirá sus efectos como si estuviese legítimamente hecha, dice el art. 40 del Cód. de Proc. En el caso que nos ocupa es más notoria y resaltante la injusticia, si se tiene en cuenta que el mismo apoderado, que denunció el domicilio efectivo del demandado, fué el que dedujo el recurso de nulidad. Esta es una de aquellas sentencias que en cualquier país celoso de sus derechos provocaría la más legítima de las reprobaciones.

12—Art. 136 del Cód. de Proc.

13—Entablada la demanda fué notificado el traslado en el domicilio denunciado, donde se le manifestó al notificador que hacia algún tiempo



las actuaciones que en ella se piden, si el demandante conocía ó tenía los medios de conocer el domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 424, Ser. 4^a.

Domicilio—Véase: *Fiador*, núm. 1—*Juez competente*, núm. 2—*Testamentaria*, núm. 2—*Testigo*, núms. 2 y 4—*Apoderado*, núm. 2—*Posiciones*, núm. 28—*Declaratoria de herederos*, núm. 5—*Alquiler*, núm. 1—*Escepción de arraigo*, núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6—*Menores*, núm. 2—*Jurisdicción*—*Esposa*, núm. 5.

Domicilio constituido—Véase: *Notificación*, núm. 6.

Domicilio del deudor—Véase: *Mora*, núm. 1.

1. **Dominio**—Transferido por la esposa el dominio á un tercero, los sucesivos adquirentes carecen de derecho para exigir la comprobación del origen del dinero: la nulidad ó validez solo puede discutirse por aquellos cuyos derechos creditarios pueden ser afectados por tal acto.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 281, Ser. 3^a.

no vivía allí. Entonces se pidió la citación por edictos, y vencido el término de éstos se le dió la intervención correspondiente al Defensor de Ausentes quien se espidió diciendo que estando comprobados los trabajos debían abonarse previa regulación. En este estado se presenta el demandado, pide se le de traslado de la demanda y dice de nulidad todo lo obrado, alegando que el domicilio denunciado no era el verdadero, y que antes de entablarse la demanda, el actor escribió al demandado diciéndole que tenía conocimiento del viage que éste había emprendido á su estancia. El art. 80 del Cód. de Proc. permite la citación por edictos de las personas cuyo domicilio se ignore. Esa ignorancia no puede presumirse como existente, si se tiene en cuenta que por la naturaleza de las relaciones entre actor y demandado debían necesariamente ser frecuentes y susceptibles de proporcionar, tanto á uno como á otro, el medio de conocer sus respectivos domicilios, como efectivamente lo comprobó el demandado en una forma concluyente.

1.—Nadie tiene el derecho de exigir la comprobación del origen del dinero, pues la ley solo exige que se *designé* ó *esprese* cómo el dinero pertenece á la mujer—arts. 1246 y 1247 del Cód. Civ.



Dominio—Véase: *Información sumaria*, núm. 2—*Dinero propio*, núm. 1—*Posesión*, núms. 3 y 4—*Reivindicación*, núms. 10, 12, 17, 20 y 23—*Obligación de hacer*, núm. 6—*Posesión judicial*, núm. 5—*Jactancia*, núm. 3—*Muebles embargados*, núm. 1.

Dominio municipal—Véase: *Dominio público*, núm. 1.

1^a. **Dominio público**—Reconocido el hecho de haber salido el bien del dominio público, la Municipalidad carece de acción para oponerse á los derechos que terceros invoquen sobre él en tanto no presente nuevo título que lo haya revertido al dominio público.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 263, Ser. 3^a.

Dominio público—Véase: *Aluvión*, núms. 1 y 2—*Municipalidad*, núm. 2.

1^b. **Donación**—Para su validez aunque comprenda todos los bienes del donante, basta justificar que retuvo el usufructo, sin que sea requisito indispensable que esa prueba resulte de la escritura de donación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 403, Ser. 3^a.

2. **Donación**—La remisión de una deuda hecha antes de la ley de correcciones al Cód. Civ., no importaba una donación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 218, Ser. 3^a.

1^a—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: Inst., tom. 3, verb. *Posesión*, núm. 10; y tom. 2, verb. *Municipalidad*, núm. 3.

1^b—La escritura decía: «No careciendo tampoco de los medios para subvenir á sus necesidades durante su vida de una manera conveniente.» En el curso de la demanda se comprobó que la donante tenía el usufructo y también una mensualidad que le pasaba la donataria, independientemente de satisfacerle los gastos que hacia para su decencia personal.

2—Así lo establece el art. 3°, inc. 3° del tit. «De la Donaciones» del Cód. Civ., edición de 1870; art. 1791 del vigente, habiendo sido reformado aquel artículo.



3. Donación—Debe declararse inoficiosa si el donante carecía de bienes el día de su fallecimiento.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 74, Ser. 3ª.

4. Donación—Si el donante no se reserva el derecho de obligar al donatario al cumplimiento de las condiciones impuestas para perfeccionar la donación, se considera que el acto es condicional y no de modo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 49, Ser. 4ª.

5. Donación—Cumplidas por el donatario las condiciones impuestas en la escritura de donación, el acto queda perfeccionado é irrevocable.—Jur. Civ., tom. 9, página 49, Ser. 4ª.

Donación—Véase: *Incapacidad*, núm. 2 — *Escritura de donación*, núm. 1

3—La ley reputa inoficiosa una donación cuando exceda de la parte de que el donante podía disponer—art. 1830, Cód. Civ.

4—Véase: verb. *Condiciones impuestas*, núm. 1.

5—Y sus efectos se retrotraen al día en que se contrajo la obligación, —art. 543 del Cód. Civ.—Pueden verse asimismo los arts. 533, 1197, 1198, 1849 y 1850.



Edad—Véase: *Agravio moral*, núms. 1 y 2.

1°. **Edictos**— Cualquiera que sea la prueba producida para justificar la ausencia con presunción del fallecimiento, la información no puede aprobarse sin la publicación de edictos por el término que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 256, Ser. 3ª.

2. **Edictos** — La citación al mandante para la notificación de la renuncia del mandatario, debe hacerse por edictos si no se conoce su domicilio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 207, Ser. 3ª.

3. **Edictos**—Es potestativo del Juzgado la designación

1ª—Art. 115 del Cód. Civ.

2—Véase: verb. *Apoderado*, núm. 2.

3—La Cámara dijo, que esa facultad era «sin perjuicio de que el Inferior si encuentra algún otro de circulación, que pueda hacer la publicación en condiciones menos onerosas para los interesados, así lo ordene.» Esta facultad discrecional dejada á los jueces, constituye una verdadera amenaza á los intereses de las partes litigantes. Si los jueces cumplieran lo prevenido por la Cámara, de que si otro diario de circulación quisiese hacer la publicación en condiciones menos onerosas, ordenen que se haga en éste, la amenaza no existiría; pero algunos jueces se obstinan en que la publicación se haga en diarios de su predilección, y una vez que uno ha sido designado, el precio que pidan es abusivo, como que saben que es una facultad potestativa concedida por la Cámara que todo lo puede. Conocemos un caso del señor juez Dr.



de los diarios para los edictos, sin perjuicio de tener en cuenta que sean los menos onerosos para los interesados.

—Jur. Civ., tom. 7, pág. 130, Ser. 3ª.

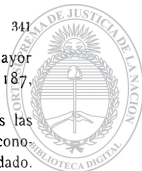
4. **Edictos**—Si no existe persona determinada que tenga la posesión de la cosa, debe citarse por edictos á los que se consideren con derecho excluyente. —Jur. Civ., tomo 8, pág. 70, Ser. 4ª.

5. **Edictos**—La falta de publicación de los edictos durante todo el término de ley en el diario designado, no basta para anular el remate judicial, siempre que se justi-

Peyret en el que ordenó que la publicación de unos estatutos se hiciera en «Tribuna»; la parte pidió que se designara otro órgano de publicidad entre los cuales estaba «El Diario» que pedía la tercera parte de lo exigido por «Tribuna». No hizo lugar el Dr. Peyret, y la Cámara confirmó la resolución fundada en esa facultad *potestativa* puesta por ella en manos de jueces que no saben en ciertos casos lo que es una recta administración de justicia. Véase el caso resuelto de «La Prevenida», Juzgado del Dr. Peyret, Secretaría de Carlos N. González. Conferir esta facultad discrecional á ciertos jueces de 1ª Instancia, es hacer lo mismo que se hizo con el tirano Juan Manuel de Rozas, invistiéndolo con las estraordinarias. Es necesario reaccionar contra esta jurisprudencia que carece de todo fundamento racional. Véase: verb. *Diarios*, núm. 1.

4—Arts. 564 y 568 del Cód. de Proc.

5—La publicación se había hecho en «El Boletín Judicial» por todo el término de ley, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 323 de la Ley Orgánica de los Tribunales de la Capital de 1886, que señala ese órgano de publicidad para insertar los edictos judiciales bajo pena de nulidad. A pesar de no haberse publicado por todo el tiempo que establece la ley, en el otro diario designado por el Juez, se publicaron en otros dos diarios de mucha circulación, circunstancia suficiente para llenar el objeto que se propuso el legislador al exigir que los edictos de los remates se publicaran en dos diarios como lo exige el art. 513 del Cód. de Proc. De aquí resulta que cuando los edictos se publican en diarios de igual ó mayor circulación de los designados por el juez y por igual ó mayor tiempo, el defecto queda salvado porque se cumple el objeto de la ley.



fique que la publicación se ha hecho por un término mayor aunque en otros diarios.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 187, Ser. 4^a.

6. **Edictos**—Es nula la citación por edictos y todas las actuaciones que en ella se funden, si el demandante conocía ó tenía medios de conocer el domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 424, Ser. 4^a.

Edictos—Véase: *Domicilio*, núm. 1—*Graduación de créditos*, núm. 1—*Prueba*, núm. 5—*Venia*, núm. 3.

Edictos policiales—Véase: *Poderes locales*, núm. 1.

1. **Edificación**—Sobre el terreno del que está en posesión el que se pretende propietario, excluye la clandestinidad del acto por el cual el reivindicante perdió la posesión.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 320, Ser. 4^a.

Edificación—Véase: *Interdicto de obra nueva*, núm. 2—*Inhabilidad de título*, núm. 3.

Edificio—Véase: *Demolición*, núm. 1—*Administración*, núm. 1—*Contrato de arrendamiento*, núm. 13.

Educación común—Véase: *Herencias transversales*, números 1, 2 y 3.

Efectivo—Véase: *Costas*, núm. 58.

6—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 13.

1—La edificación tiene necesariamente que levantarse á la luz del día, lo que constituye por esa misma causa una de las formas más salientes de los actos posesorios—art. 2384 del Cód. Civ.—No debe olvidarse que la edificación aunque sea por cuenta del poseedor precario, como cuando se trata de un inquilino, no puede darle derecho de posesión, porque entonces es difícil establecer el cambio de la causa de la posesión sin la especificación de hechos materiales que pudieran importar la pérdida de la posesión, para creer que el que tenía motivos fundados que su posesión continuaba por medio de otro, ha dejado de continuar en la misma forma: el propietario en este caso tiene derecho á creer que el inquilino continúa poseyendo para el propietario—art. 2446 del Cód. Civ.



1^a. **Efecto retroactivo**—La remisión de una deuda es un derecho adquirido desde la fecha en que tuvo lugar, y en consecuencia, las leyes que pueden modificar ese hecho no tienen efecto retroactivo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 218. Ser. 3^a.

Efectos legales—Véase: *Fallecimiento*, núm. 4.

Ejecución—Véase: *Escritura de compromiso*, núm. 1—*Costas*, núm. 20—*Crédito líquido*, núm. 1—*Remate judicial*, núm. 14—*Honorarios*, núm. 25—*Acción ejecutiva*, núm. 1—*Inhabilidad de título*, núms. 6 y 7—*Venta en remate*, núm. 1—*Albacea*, núm. 7—*Prenda*, núm. 1—*Excepciones*, núm. 4 y 7—*Embargo*, núm. 1—*Excepción de inhabilidad de título*, núms. 2 y 5—*Avisos*, núm. 1—*Excepción de pago*, núm. 4—*Nulidad de la ejecución*, número 1 y siguientes—*Obligación condicional*, núm. 4—*Jurisdicción civil*, núm. 1—*Depositario judicial*, núm. 2—*Mandamiento*, núms. 1 y 2.

1^b. **Ejecución de sentencia**—En ella procede la excepción de inhabilidad de título siempre que no conste hallarse consentida.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 227. Serie 4^a.

Ejecución de sentencia—Véase: *Excepción de nulidad*, núm. 1—*Excepción de pago*, núm. 6.

Ejecución del Fisco—Véase: *Título de propiedad*, número 20.

1^a—Porque como lo dice el art. 3º del Cód. Civ., las leyes disponen para lo futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos ya adquiridos. El art. 4º es una excepción á este principio general.

1^b—Porque el art. 535 del Cód. de Proc. exige como condición para que una sentencia sea ejecutable que «esté consentida ó ejecutoriada.» Y es en este concepto que no admite la excepción de inhabilidad de título cuando se ejecuta una sentencia consentida.



1. **Ejecución hipotecaria**—Es procedente la excepción de inhabilidad de título, si la ejecución hipotecaria se funda en un certificado del Escribano ante el cual se otorgó la escritura de préstamo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 226, Ser. 3^a.

Ejecución hipotecaria—Véase: *Excepción de espera*, número 1—*Excepción de pago*, núm. 2.

Ejecución por honorarios—Véase: *Excepción de pago*, número 1—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 5—*Inhabilidad de título*, núm. 7.

Ejecutado—Véase: *Autos inapelables*, núm. 1—*Costas*, núm. 20—*Convenio*, núm. 1—*Excepción de pago*, núm. 3.

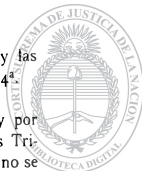
Ejecutante—Véase: *Costas*, núm. 20—*Convenio*, número 1.

Ejecutivo—Véase: *Empedrados*, núm. 2—*Liquidación*, núm. 4.

1. **Ejecutoria**—Las resoluciones no causan ejecutoria

1—Esta resolución fué dictada por mayoría de votos constituida la Cámara en Tribunal de Interlecutorias. El ejecutante decía que el certificado es un título que trae aparejada ejecución—art. 465, inc. 1^o del Cód. de Proc.—que atribuye ese carácter a los documentos públicos presentados en forma, y que dicho certificado se encuentra enumerado entre los del art. 979 del Cód. Civ. Pero aunque ese certificado hace referencia circunstanciada a una escritura pública, no es lo mismo que una escritura pública, ni tampoco una copia sacada de los libros de protocolo en la forma que prescribe la ley—art. 1006 del Cód. Civil—de manera que no está comprendido en la designación del inc. 1^o del recordado art. 979 del Cód. Civ. El ejecutante daba como razón para no acompañar la escritura pública hipotecaria a la que el certificado se refería, la circunstancia de que dicho testimonio pertenece al ejecutado; pero esto es inaceptable puesto que conteniendo la escritura de venta un pacto hipotecario, el acreedor tiene derecho a exigir del Escribano una copia autorizada—arts. 1006 y 1007 del Cód. Civ.

1—El art. 222 del Cód. de Proc. dice, que una vez pronunciada y notificada la sentencia concluye la jurisdicción del Juez, y el 236 dice,



hasta tanto los interesados hayan sido notificados y las hayan consentido.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 30, Ser. 4^a.

Ejecutoria—Véase: *Fuerza ejecutiva*, núm. 1.

1^a. **Ejemplar**—Justificado por la confesión ficta y por la cesión de derechos, la existencia del contrato, los Tribunales no pueden ponerlo en duda, aun cuando no se hubiese agregado á los autos el único ejemplar existente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 408, Ser. 3^a.

Ejemplar doble—Véase: *Contrato bilateral*, núms. 1 y 4.—*Contrato*, núms. 12 y 13.—*Documento privado*, núm. 6.

Ejército—Véase: *Proveedor*, núm. 1.

1^b. **Emancipación**—El matrimonio, solo emancipa á los

que transcurridos los términos sin interponerse apelación, quedarán consentidas las sentencias.

1^a Véase: *Cesión de derechos*, núm. 3.

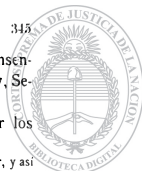
1^b—Este fué un punto muy bien tratado tanto por el Juez de 1^a Instancia, el Fiscal Dr. Cortés, como por la Cámara. Esta resolvió la cuestión revocando el auto de 1^a Inst., y contra la opinión del Fiscal. El sumario se funda en que el art. 131 del Cód. Civ., preceptúa que la emancipación de los menores, sin distinción de sexo, solo tendrá lugar en el caso de matrimonio de éstos, sin depender tampoco de formalidad alguna, cualquiera que fuese la edad en que se hubieren casado, con tal que el matrimonio se hubiere celebrado, con la autorización necesaria, conforme á lo dispuesto en el Código. Y el art. 169 del mismo Código determina que el hijo legítimo de familia y el natural reconocido, que no hubieren cumplido veintidos años, necesitan para contraer cualquier clase de matrimonio el consentimiento paterno. Es incuestionable que la autorización á que se refiere el art. 131 es la del 169 ó sea la de los padres. No hay duda que la emancipación queda subordinada en todos sus efectos á la existencia del consentimiento paterno, puesto que es condición legal que está impuesta. La expresión *con tal que*, gramatical y jurídicamente, envuelve el concepto de condición, siendo indiferente usar una ú otra expresión para determinar su existencia. La condición produce el efecto de subordinar á un acontecimiento futuro é incierto la adquisición de un derecho ó la resolución de un derecho adquirido. Siendo la emancipación una creación de la ley civil, no puede entenderse producida sino mediante el cumplimiento

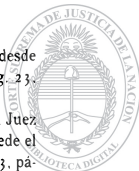
menores de edad cuando se ha verificado con el consentimiento de los padres.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 97, Serie 3ª.

2. **Emancipación**—El padre adeuda intereses por los

de las formalidades con que la ley haya entendido prestar tal favor, y así sucede, sobre todo, cuando se considera que se trata de una excepción, la de que un menor de edad mejore de condición, en cuya condición el beneficio solo puede acordarse al caso que se presenta rodeado de los requisitos exigidos. Del hecho de que la ley pene el casamiento sin el consenso paterno, con pérdidas de ciertos derechos relacionados con el gobierno de los bienes, no se sigue que ese sea el único efecto de esa falta de consentimiento, y por el contrario, fácil es retorcer el argumento, observando que también el art. 193 del Cód. demuestra la inexistencia de la emancipación en cuanto al gobierno de la persona, de modo que sería de preguntar, qué es lo que queda como efecto de la emancipación, cuando no hay administración de bienes, ni intervención del marido en un acto tan serio como el de estar en juicio. Freitas, de cuyo proyecto nuestro Codificador ha tomado la doctrina sobre el punto, en el art. 70 de su proyecto y en la nota del mismo, establece categóricamente, que casándose los menores sin las autorizaciones necesarias, se reputan incapaces como si no se hubiesen casado. Constituyendo la emancipación uno de los modos de extinguirse la patria potestad y estando fundada la que deriva del matrimonio de los menores en el consentimiento tácito, según doctrina común de los autores, porque tal matrimonio supone la existencia del consentimiento paterno para realizarlo, sería absurdo que hubiera de presumirse que tal consentimiento existe, cuando consta espresamente que para evitarlo se ha disimulado la edad. Por lo mismo que se sostiene que la ausencia del consentimiento no anula el matrimonio de los menores en nuestra legislación, habría verdadera inconsecuencia en que la emancipación tuviera como base el consentimiento presunto, y es por el contrario perfectamente congruente nuestra ley, cuando determina como condición de la emancipación por el hecho solo del matrimonio, el consentimiento paterno. De todo esto fluye la conclusión de que los menores que se casan sin el consentimiento de sus padres no quedan emancipados y continúan bajo la patria potestad.

2—Y sin necesidad de interpelación de parte de los hijos, dice el fallo que resolvió el punto. No son aplicables los artículos 508 y 509 del Cód. Civ., porque la obligación del padre no proviene de una obliga-





fondos de los hijos desde la mayor edad de éstos ó desde la fecha de su emancipación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 23, Ser. 4^a.

1. **Embargo**—La tercería debe ser deducida ante el Juez de la ejecución donde existen los fondos; no procede el embargo pedido ante otro Juez.—Jur. Civ., tom. 3, página 99, Ser. 3^a.

2. **Embargo**—Si los bienes dados á embargo responden al monto de la fianza, debe levantarse la inhibición.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 249, Ser. 3^a.

3. **Embargo**—Debe levantarse la inhibición si se presentan bienes suficientes á embargo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 155, Ser. 3^a.

4. **Embargo**—Ejecutoriada la inhibición general, es procedente el embargo de los fondos del deudor, depositados en poder de terceros.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 125, Ser. 4^a.

5. **Embargo**—La sentencia de alimentos hace proce-

ción de dar ó de hacer, sino de fondos que por ministerio de la ley ha recibido para administrar—estinguída dicha administración y como consecuencia el usufructo que de los bienes de los hijos tiene el padre—está obligado á abonarlos desde el día en que se le reclama. Si así no fuese, tendríamos que el derecho de usufructo no se extinguiría á pesar de llegar los hijos á la mayor edad ó de emanciparse, si hubiese de subordinarse previamente á lo que éstos tuviesen que hacer para entrar en posesión de lo que legítimamente les corresponde.

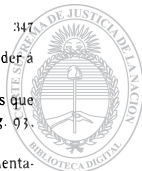
1—Porque es ante el Juez á cuya orden estén los fondos, donde debe discutirse el mejor derecho que puedan tener los que pretendan preferencia á los mismos.

2—El Juez ordenó la tasación del inmueble dado á embargo, y de ella resultó que el valor de la cosa excedía de la cantidad á afianzarse.

3—Arts. 455 y 461, en su última parte.

4—Desde el momento en que hay ejecutoria, toda discusión sobre su procedencia es impertinente y fuera de lugar.

5—Art. 448 del Cód. de Proc. en su última parte.



dente el embargo de bienes suficientes para responder a su pago.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 165, Ser. 4^a.

6. **Embargo**—Solo puede trabarse en bienes de los que esté en posesión el deudor.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 93, Ser. 4^a.

7. **Embargo**—Solo puede embargarse bienes al alimentario por las mensualidades vencidas, aun cuando enajene el único bien que constituye su responsabilidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 52, Ser. 4^a.

8. **Embargo**—Subsistente el embargo, procede el informe del Registro de la Propiedad sobre las condiciones del dominio de los bienes embargados.—Jur. Civ., tom. 3, página 76, Ser. 4^a.

9. **Embargo**—No procede, si el crédito que lo funda se encuentra pendiente del fallo del Juzgado.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 28, Ser. 4^a.

10. **Embargo**—Presentados á embargo bienes de la sociedad suficientes á responder al crédito, debe levantarse la inhibición personal de los bienes particulares de los socios.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 411, Ser. 4^a.

6—No debe tomarse como principio general el sentado en el sumario, pues el art. 473 establece con toda claridad que el embargo puede recaer sobre bienes que estén en poder de un tercero. El art. 478 parece favorecer lo resuelto en el sumario, cuando dice, que si el acreedor señala los bienes á embargarse, deberá proveerse de conformidad, «si estuviere en posesión de ellos el deudor.»

7—Porque esas mensualidades son las únicas que constituyen deuda exigible.

8—Hay evidente conveniencia en saber si los bienes embargados pertenecen ó han dejado de pertenecer al embargado con el fin de conocer la eficacia del embargo, pues podría resultar que ellos hubiesen pasado á otras personas y en tal caso sería el embargo completamente ilusorio.

10 - Véase: *Bienes de la sociedad*, núm. 1.



11. **Embargo**—La oposición deducida por el que debe pagar los fondos cuyo embargo se ha pedido y decretado, debe sustanciarse en juicio ordinario.—Jur. Civ., tom 7, pág. 66, Ser. 4^a.

12. **Embargo**—De los alquileres, hace procedente el nombramiento de un administrador judicial.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 51, Ser. 4^a.

13. **Embargo**—Debe decretarse una vez dictada sentencia de alimentos aun cuando no se encuentre consentida.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 17, Ser. 4^a.

14. **Embargo**—Solo procede la inhibición preventiva cuando no se conocen bienes en que trabar el embargo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 24, Ser. 4^a.

15. **Embargo**—Trabado sin oposición, no procede su levantamiento sin que se deduzca la correspondiente tercera.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 42, Ser. 4^a.

16. **Embargo**—Es facultativo del Juzgado apreciar el valor de los bienes presentados á embargo para el levantamiento de la inhibición.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 83, Ser. 4^a.

11—Porque esa oposición no tiene marcado un trámite especial en nuestro Cód. de Proc., en cuyo caso debe ventilarse en la forma ordinaria—art. 66.

13—No es necesario que el demandado consienta la sentencia de alimentos provisorios, dada la naturaleza especial del juicio de alimentos en el cual la apelación solo procede en el efecto devolutivo. El artículo 536, no puede aplicarse á esta clase de sentencias porque en ellas no se trata de hacer efectivo el cobro de un crédito, sino de una prestación alimenticia que se fija, teniendo en cuenta el importe del caudal del alimentario y la condición social del alimentado. Esta resolución está de acuerdo con el núm. 5.

14—Art. 461 del Cód. de Proc.

15—Art. 529 del Cód. de Proc.

16—El art. 454 del Cód. de Proc. faculta al Juez para calificar por sí solo la caución ofrecida. Esta cuestión ha sido resuelta contradictoriamente por la Cámara. Véase: verb. *Caución*, núm. 1 y su nota.



17. **Embargo**—Terminado por convenio entre ejecutante y ejecutado el litigio que motivó el embargo, éste debe levantarse declarándose procedente la tercería de dominio á que hubiese dado lugar—Jur. Civ., tom. 9, página 198, Ser. 4^a.

18. **Embargo**—El ejecutante que ha conseguido ampliación del embargo, carece de derecho para mantener el segundo embargo si los bienes que fueron objeto del primero bastan para cubrir el importe de su crédito.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 198, Ser. 4^a.

19. **Embargo**—Trabado sobre otros bienes que no sean los ordenados, debe quedar sin efecto.—Jur. Civ., tomo 10, página 57, Ser. 4^a.

17—El embargo tiene por objeto garantir al acreedor con los bienes de su deudor y solo debe estenderse hasta la concurrencia de su crédito—art. 471 del Cód. de Proc.—y si el crédito á que respondía el embargo desaparece, también el embargo debe levantarse, porque no hay ya ningún crédito que garantir. La tercería será declarada procedente, si el ejecutado no se opone al derecho invocado por el tercerista.

18—El ejecutante obtuvo el embargo de algunos bienes para responder á su ejecución. Se dedujo tercería sobre esos bienes: entonces pidió y obtuvo la ampliación del embargo. El dueño de los bienes sobre los cuales recayó este segundo embargo, dedujo tercería: pendiente ésta, se falló la primera tercería rechazándola. La segunda tercería no puede subsistir porque ella tenía su fundamento en la existencia de la primera; si ésta desaparece no hay razón para mantener el segundo embargo, porque la primera tercería fué causa del segundo embargo: desaparecida la causa desaparece el efecto. *Sublata causa tollitur effectum*. Con el rechazo de la primera tercería, queda el crédito suficientemente garantido con los bienes primeramente embargados, y es sabido que el embargo debe limitarse á los bienes suficientes para pagar el crédito que se ejecuta—art. 471 del Cód. de Proc.

19—Dirigido un exhorto á las autoridades judiciales de San Juan, se embargaron bienes que no eran los designados en el oficio rogatorio. Se ordenó el levantamiento de dicho embargo, porque el artículo



20. **Embargo**—Los fondos depositados á los efectos de una transacción, no pueden ser embargados para responder á otras obligaciones de los mismos depositantes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 311, Ser. 4^a.

Embargo—Véase: *Tercería*, núm. 2—*Inhibición*, núm. 5—*Caso fortuito*, núm. 2—*Depositario judicial*, núm. 1—*Excepción de pago*, núm. 3—*Depósito*, núm. 1—*Tercería*, núm. 6.

1^a. **Embargo indebido**—Hace responsable al que lo pidió, de los daños y perjuicios causados, ya sea á un tercero, ya al mismo ejecutado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 381, Ser. 3^a.

2^a. **Embargo indebido**—La acción por daños y perjuicios, fundada en un embargo indebido, es improcedente, si el demandado como responsable no lo solicitó, y si llevado á efecto no se opuso á su levantamiento.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 187, Ser. 3^a.

1^b. **Embargo preventivo**—La declaración de incompetencia del Juzgado, hace procedente el levantamiento del embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 370, Ser. 3^a.

2^b. **Embargo preventivo**—Para que proceda en virtud de

478 del Cód. de Proc. establece que se embargarán los bienes que el acreedor señale.

1^a—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 4.

2^a—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 1.

1^b—El dueño de los bienes embargados tiene derecho á exigir que la acción se entable dentro del término de ocho días, debiendo en caso de no hacerlo el actor, alzarse el embargo. La demanda se dedujo ante juez incompetente, declarándose así, siendo procedente el levantamiento del embargo. Es por esto que la Cámara ha dicho que el juez que se considere incompetente debe de oficio escusarse de decretar un embargo preventivo. Véase: Inst., tom. 4, verb. *Embargo preventivo*, núm. 10.

2^b—La Cámara dió como único fundamento la circunstancia de «no acompañarse recaudo alguno suficiente para determinar la aplicación del art. 447 del Cód. de Proc.» Parece que esta resolución no consulta debidamente el derecho de los litigantes. La ley dice que procede el



una acción reivindicatoria deducida, debe acompañarse recaudos suficientes.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 354, Ser. 3ª

3. **Embargo preventivo**—La falta de cumplimiento de una obligación de hacer, no puede fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 359, Ser. 3ª.

4. **Embargo preventivo**—La acción de daños y perjuicios fundada en un embargo preventivo indebido, es impropcedente contra el juez, mientras no se demuestre la irresponsabilidad del que lo obtuvo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 312, Ser. 3ª.

5. **Embargo preventivo**—La deducción de la demanda en forma dentro del término de ocho días después de trabado el embargo preventivo, no es procedente si ésta es la consecuencia de la acción deducida.—Jur. Civ., tom. 1, página 334, Ser. 3ª.

6. **Embargo preventivo**—El rechazo de la demanda por embargo preventivo, siempre que se deduce acción reivindicatoria. Nada más exige. Las condiciones impuestas por la Cámara en este caso no están fundadas ni en la ley ni en la equidad.

3—De acuerdo con la jurisprudencia constante de la Cámara, con la que no estamos conformes, según puede verse en el tom. 2 de la Inst., verb. *Embargo preventivo*, núm. 20 y su nota. Puede verse además otras resoluciones de acuerdo con el sumario. Inst., tom. 4, verb. *Embargo preventivo*, núms. 3 y 4; tom. 3, mismo verb. núms. 3, 4, 5, 6, 10 y 12; *Obligación de hacer*, núms. 1, 2 y 5; tom. 2, verb. *Embargo preventivo*, números 19, 20, 22 y 25; *Obligación de hacer*, núms. 2 y 3; tom. 1, verb. *Mandamiento de embargo preventivo*, núm. 1703.

4—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 2.

5—El art. 460 del Cód. de Proc., solo tiene aplicación tratándose de una demanda á iniciarse, pues no se puede referir ni se refiere á una demanda ya instaurada.

6—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Embargo preventivo*, núm. 2. El fundamento aducido por la Cámara es que «no se puede pedir embargo porque no existe crédito siempre que la sentencia hubiese sido apelada.» Este argumento nada prueba. Ningún crédito, reconocido en una sentencia, existe mientras ella no



sentencia definitiva, aún con especial condenación en costas. no basta para decretar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 18, Ser. 3^a.

7. **Embargo preventivo**—La sentencia que condena al cumplimiento de una obligación de hacer, no puede fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 22, Ser. 3^a.

8. **Embargo preventivo**—La retractación de la fianza

hubiese pasado en autoridad de cosa juzgada. De manera que jamás podría aplicarse la disposición del art. 448 en su última parte. El embargo preventivo no se dá cuando el derecho ó crédito es incontrovertible, todo lo contrario, cuando el derecho es tan solo verosímil, la ley acuerda el embargo preventivo al que favorece la sentencia, que el derecho para garantizarse en los resultados posibles del juicio. Si la sentencia pasase en autoridad de cosa juzgada, si ya no fuese apelable, si el crédito existiera de una manera real é incontrovertida, el litigante no pediría un embargo preventivo sino uno definitivo. La Cámara quiere hacer distinciones que la ley no ha tenido en cuenta: la Cámara es peor que el más caviloso de los litigantes; trata de introducir el caos en la jurisprudencia para tener siempre en apoyo de sus resoluciones, precedentes contradictorios y así poder resolver cualquiera cuestión en la forma que mejor le parezca, pudiendo siempre aducir como fundamento un precedente por ella establecido. El art. 448 del Cód. de Proc. es terminante cuando dice: «durante un juicio ordinario, podrá pedirse un embargo preventivo, siempre que el que lo solicita hubiese obtenido una sentencia favorable.» Esa sentencia favorable de que nos habla la ley, no quiere decir que si ella es apelada no pueda pedirse el embargo preventivo. La Cámara ha dictado en otro caso una resolución por la que dijo, que no estando regulados los honorarios no procede el embargo preventivo, lo que hace creer que regulados los honorarios, la orden dada es perfectamente procedente. Véase: Inst., tom. 3, verb. *Embargo preventivo*, núm. 7. El principio establecido en el sumario es á todas luces insubsistente y es seguro que será reformado.

7—Véase el núm. 3.

8—Decretado un embargo preventivo previa fianza que el solicitante deberá prestar, fué un tercero ofrecido como fiador y aceptado, otorgándose la respectiva escritura. Después se presenta el fiador diciendo que tiene que ausentarse para Europa, y que como su fianza es de



aceptada de conformidad de partes, debe admitirse sin que el Juzgado esté obligado á resolver si existe ó no trabado el embargo preventivo para el cual fué otorgado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 190, Ser. 3^a.

9. Embargo preventivo—Las cuentas por empedrados debidamente visadas por la Municipalidad, son título bastante para fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 231, Ser. 3^a.

10. Embargo preventivo—La concesión del recurso de apelación del incidente sobre embargo preventivo, no suspende la jurisdicción del Juzgado sobre lo principal.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 371, Ser. 4^a.

11. Embargo preventivo—El inmueble objeto de una

obligación futura por no existir aún obligación principal, se encuentra en el caso del art. 1990 del Cód. Civ., y pide que se le permita retractar la fianza. El Juzgado ordenó la cancelación de la fianza por la conformidad prestada por las partes y porque el embargo no se había trabado aun. Una de las partes dijo que el embargo había sido trabado, lo que fué negado por el otro litigante. Esta cuestión de si estaba ó no trabado el embargo, nada tenía que ver con la fianza, desde el momento en que todos estaban conformes con la retractación de la fianza prestada. La razón de esa conformidad nada tenía que ver con este caso.

9—El título trae aparejada ejecución, de acuerdo con lo establecido en los arts. 465 y 471 del Cód. de Proc., y leyes de 26 de Octubre de 1881, y 29 de Setiembre de 1882.

10—Cuando el incidente corre por cuerda separada, pues de lo contrario no es posible continuar entendiendo en lo principal cuando con motivo de la apelación se elevan al Superior los autos. Desde el momento en que el expediente se eleva por cualquiera causa, se suspende el juicio, de manera que al ser devuelto al Inferior, continúa en el mismo estado en que se encontraba en el momento de ser elevado. Cuando el incidente corre por cuerda separada, como en el caso que nos ocupa, la jurisdicción del juez no se suspende, porque el procedimiento seguido entonces es independiente de lo principal, regido por trámites completamente distintos.

11—Art. 447 del Cód. de Proc.



demanda reivindicatoria, puede ser embargado preventivamente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 182, Ser. 4^a.

12. **Embargo preventivo**—Procede el de los bienes del esposo ó de la sociedad conyugal, si iniciado el juicio de divorcio existe peligro de que aquél pretenda defraudar los intereses de la esposa.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 128, Ser. 4^a.

13. **Embargo preventivo**—La falta de contestación á la demanda, no hace procedente el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 149, Ser. 4^a.

14. **Embargo preventivo**—El reconocimiento parcial de

12—Se decretó el embargo preventivo con la sola manifestación de la parte, en la que aseveraba que sus bienes corrían peligro. El art. 74 de la Ley de Matrimonio solo establece que los bienes se pongan á cargo de otro administrador bajo inventario, cuando durante el juicio de divorcio, la conducta del marido hiciese temer enajenaciones fraudulentas ó disipación de los bienes del matrimonio. Pero como el solo hecho de poner los bienes bajo otra *administración* no le impediría al esposo la *enajenación* de los bienes, la jurisprudencia ha establecido á favor del cónyuge la facultad de pedir el embargo preventivo de los bienes. Por varios conceptos este artículo no llena los fines que se tuvieron en vista al dictarlo. Así la ley solo autoriza á poner bajo otra administración los *bienes de la sociedad*, ¿y los de la esposa que el marido administra por ministerio de la ley?

13—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara. La rebeldía puede ser total ó parcial, la primera se opera cuando se declara rebelde á un litigante y se le sigue el juicio en rebeldía; lo segundo sucede cuando se dá por evacuado en rebeldía un traslado conferido. Solo la rebeldía total autoriza el embargo preventivo—art. 437 del Cód. de Proc.—Véase: Inst., tom. 3, verb. *Rebeldía*, núm. 7.

14—Una persona demandada por asistencia médica, reconoció al contestar la demanda parte de esa asistencia. El Juez fijó prudencialmente la suma por la cual debía librarse mandamiento de embargo preventivo, fundándose especialmente en el art. 448 del Cód. de Proc. Ese reconocimiento hace presumir verosímilmente el derecho del actor respecto á la parte que reconoce el demandado adeudar. La circunstancia de que un reconocimiento sea condicional, nada arguye contra la apli-



la deuda al contestar la demanda, hace procedente el embargo preventivo—Jur. Civ., tom. 1, pág. 160, Ser. 4^a.

15. Embargo preventivo—Es improcedente cuando el crédito no resulta exigible sin juicio previo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 147, Ser. 4^a.

16. Embargo preventivo—No procede tratándose de una obligación de hacer.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 372, Ser. 4^a.

17. Embargo preventivo—La sentencia que condena al cumplimiento de una obligación de hacer, no basta para decretar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 1, página 134, Ser. 4^a.

18. Embargo preventivo—Es procedente siempre que el crédito conste de instrumento público.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 113, Ser. 4^a.

19. Embargo preventivo—Siempre que del instrumento público resulte crédito líquido, procede el embargo preventivo ó la inhibición.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 138, Serie 4^a.

cabilidad del art. 448 citado, porque esta disposición no exige un reconocimiento simple, espreso ó categórico, bastando una confesión ficta y aun verosímil.

15—El documento en virtud del cual se pidió el embargo preventivo, no acreditaba la existencia de la obligación, y por consiguiente no procedía el embargo preventivo. Tampoco el documento estaba comprendido entre los legislados en el art. 620 del Cód. Civ.

16—Véase, el núm. 3.

17—Véase, nota precedente.

18—Art. 443, inc. 2° del Cód. de Proc.

19—Se trataba de un contrato bilateral, en el que concurrían las condiciones requeridas por el art. 443 en su inc. 3°, para los embargos preventivos, á saber: 1° que la acción se funde en un contrato bilateral; 2° que el crédito esté debidamente comprobado; 3° que se justifique sumariamente el cumplimiento del contrato por parte del actor ó que éste ofrezca cumplirlo.



20. **Embargo preventivo**.—Justificado el crédito por instrumento público, el embargo preventivo es procedente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 119, Ser. 4ª.

21. **Embargo preventivo**.—Para que proceda, es necesario que el instrumento público contenga obligación de pagar cantidad líquida en plazo determinado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 150, Ser. 4ª.

22. **Embargo preventivo**.—El término que fija la ley para deducir acción en caso de embargo preventivo, es improrrogable.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 372, Ser. 4ª.

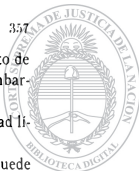
23. **Embargo preventivo**.—Para que éste se conceda, no basta que sea procedente, debe fundarse el pedido en las disposiciones pertinentes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 38, Serie. 4ª.

20—Art. 443, inc. 3º del Cód. de Proc.

21—De los antecedentes que suministra el fallo publicado no se puede saber si se pedía mandamiento de ejecución y embargo en un juicio ejecutivo ó si solamente se pedía embargo preventivo como medida de garantía de un juicio ordinario. Para lo primero el auto sería correcto, pues el art. 464 del Cód. de Proc. establece el principio sentado en el sumario. No sucede lo propio, tratándose de un embargo preventivo, porque las exigencias del sumario no las establece el art. 443 en ninguno de sus incisos: por el contrario, espresamente establece su procedencia aunque la deuda esté sujeta á condición, suspensión ó *pendiente de plazo*. Tampoco es necesario que la deuda sea líquida, pues cuando no reúne esta condición puede el Juez fijar prudencialmente su monto para poderse librar el mandamiento por cantidad líquida, como puede verse en el núm. 14.

22—Así resulta de la disposición del art. 460 del Cód. de Proc., cuando dice, «si el dueño de los bienes embargados lo exigiera, la demanda deberá ser deducida en el *preciso término* de ocho días.» Véase el núm. 28.

23—El sumario se refiere á los fundamentos de hecho que se debe aducir en apoyo de su pedido, como cuando el deudor trata de enajenar ó trasportar sus bienes—art. 443, inc. 5º.—No se hizo lugar al embargo sin perjuicio del derecho de solicitarlo nuevamente una vez llenados esos requisitos



24. Embargo preventivo.—La falta de cumplimiento de una obligación de hacer, no basta para fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 363, Ser. 4ª.

25. Embargo preventivo.—Solo procede por cantidad líquida.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 53, Ser. 4ª.

26. Embargo preventivo.—El mandamiento solo puede

24—Véase el núm. 3.

25—La existencia de la obligación no se estableció ni por instrumento público ni privado, como lo exige el art. 443 del Cód. de Proc. en su inc. 2º: solo se presentaron algunas cartas que á lo más podían servir como elementos de prueba; pero en manera alguna para llenar las exigencias de la ley. Por esto, no se hizo lugar al embargo preventivo, y teniendo por último en consideración que la jurisprudencia de la Cámara siempre ha exigido para librarse el embargo preventivo que haya cantidad líquida. Pero debe tenerse presente que si esta última condición no concurre *á priori*, puede el Juez establecerla prudencialmente. Véase el núm. 21.

26—En un juicio ordinario sobre cobro de honorarios, se había obtenido una sentencia favorable. Fundándose en el art. 448 se solicitó un embargo preventivo, á lo que no se hizo lugar, porque la sentencia no contenía la obligación de pagar cantidad líquida, y que tampoco se podría estimar prudencialmente porque ese acto importaría un prejuzgamiento. Que por otra parte, cuando el art. 443 del Cód. de Procedimientos acuerda el embargo preventivo tratándose de obligaciones de dar, exige que concurren las demás circunstancias que la ley enumera, entre las que se encuentra la de que el mandamiento se libere por cantidad líquida: que el derecho acordado por el art. 448 del Cód. de Proc. está subordinado á los requisitos de los arts. 451 y 455, los cuales establecen: el 1º que se observe lo dispuesto en el art. 471, y el 2º que se trabé el embargo en la forma y orden prescripto para el juicio ejecutivo. Uno solo de estos argumentos no resiste una réplica razonada. Ante todo, esta resolución está en contra de lo establecido en el núm. 14. Ambas resoluciones, que sientan principios tan diametralmente opuestos fueron confirmadas por sus fundamentos. Esto prueba cómo se preocupa la Cámara en el estudio que se somete á su decisión. El Inferior la convence con suma facilidad y confirma su resolución aunque consagre la mayor de las injusticias. Véase: Inst., tomo 3º, verb. *Embargo preventivo*, núm. 3; y tom. 2º, mismo verbo, números 25 y 26.



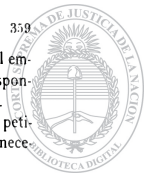
librarse por cantidad líquida, tratándose de obligaciones de dar.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 389, Ser. 4^a.

27. Embargo preventivo—El embargado á las resultas de un juicio, puede exigir la fijación judicial del plazo dentro del cual debe deducirse la acción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 362, Ser. 4^a.

28. Embargo preventivo—El error en la acción no al-

27—El embargado no puede esperar indefinidamente que se deduzca la acción, pues esa demora puede traerle graves perjuicios por tener sus bienes embargados. Se fijó el término de diez días. Entablada una demanda para que se otorgara un mandato á favor del actor y obtenida en 1^a Inst. una sentencia favorable, se pidió y obtuvo un embargo preventivo. La sentencia fué confirmada por el Superior: el vencido no otorgó el poder. Como se trataba de una obligación de hacer, en caso de no cumplirse, tenía que resolverse en indemnización de daños y perjuicios, en caso de inejecución. Los que habían obtenido una sentencia favorable quedaron inactivos, y entonces el vencido pidió que se le fijara un término dentro del cual debía iniciar la acción correspondiente, bajo apercibimiento de levantarse el embargo. Se proveyó de conformidad.

28—Obtenido un embargo preventivo, el embargado pidió que se iniciara el juicio correspondiente dentro del término de ocho días que acuerda el art. 460 del Cód. de Proc.. El actor dejó pasar los primeros siete días y al octavo presentó escrito pidiendo el reconocimiento de la firma que servía de base á la acción, á lo que no se hizo lugar. Este escrito fué considerado como que no interrumpía el término, por que su presentación dió margen á un error, pretendiéndose preparar la vía ejecutiva que fué declarada improcedente por el Inferior y confirmada la resolución por el Superior. Resulta entonces que la acción no fué entablada en forma, porque debió haberse iniciado el juicio ordinario en forma, lo que no se efectuó, pues solo se pidió el reconocimiento como medida preparatoria del juicio ejecutivo, á lo que no se hizo lugar, como se ha visto más arriba. Quizá habría procedido como medida preparatoria del juicio ordinario, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 67 del Cód. de Proc., pero ni aun este trámite habría sido bastante para considerar deducida en forma la acción. De aquí resulta que ha habido error por parte del actor, error de derecho que en ningún caso excusa los efectos legales de los actos lícitos—art. 923 del



tera el término que la ley fija para deducirla, y el embargo debe ser levantado, acusada que sea la correspondiente rebeldía.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 372, Ser. 4^a.

29. Embargo preventivo—Para que proceda en la petición de herencia, deben acompañarse los recaudos necesarios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 220, Ser. 4^a.

30. Embargo preventivo—Esta medida procede cuando se obtiene una sentencia favorable.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 212, Ser. 4^a.

31. Embargo preventivo—Fundado en sentencia favorable, solo procede si se condena al pago de cantidad determinada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 218, Ser. 4^a.

32. Embargo preventivo—No procede fundado en daños y perjuicios no justificados—Jur. Civ., tom. 4, página 239, Ser. 4^a.

Cód. Civ.—Ese error no puede hacer renacer un término fenecido, no puede considerarse como existente para eludir una disposición legal que crea obligación, ó declara el vencimiento de un término.—Nota del Dr. Velez al artículo citado.—El escrito presentado después de denegada la medida preparatoria solicitada, y después de vencido el término aunque sea ya en forma, no puede partir los efectos legales ni considerarse presentado en la forma prescripta por el art. 460 citado.

29—El Juez de 1^a Inst. dijo, que no procedía la medida solicitada porque ella no estaba autorizada por ninguna disposición legal. La Cámara confirmó el auto por «no acompañarse á la demanda los recaudos necesarios para que sea procedente la medida de seguridad solicitada.

30—Art. 448 del Cód. de Proc.

31—Se trataba de una sentencia que condenaba á hacer escritura pública, en cuyo caso no procede el embargo preventivo, según la jurisprudencia constante de la Cámara.

32—Los daños y perjuicios se hacían consistir en los causados por el curador de un insano; no se hizo lugar á la medida preventiva por que su existencia no estaba acreditada en forma alguna, y además por que el juicio no versaba sobre ellos sino sobre remoción del curador.



33. **Embargo preventivo**—El hecho de no conocerse los bienes al deudor, hace procedente la inhibición en los casos que la ley acuerda el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 212, Ser. 4^a.

34. **Embargo preventivo**—Esta medida solo procede para garantizar los derechos reconocidos, no debiendo ampliarse si éstos están suficientemente garantizados.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 430, Ser. 4^a.

35. **Embargo preventivo**—La absolución de las posiciones en rebeldía, no basta para decretarlo.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 325, Ser. 4^a.

36. **Embargo preventivo**—Para que la demanda de rei-

33—Art. 461 del Cód. de Proc.

34—Los embargos preventivos por su carácter precaucional y conservatorio, no deben exceder del justo límite que señala el derecho mismo que se trata de garantizar, so pena de convertirse en odiosa y arbitraria una medida introducida en la ley con fines esencialmente saludables. El art. 471 del Cód. de Proc. consagra esta doctrina cuando dice: «se procederá á embargar *bienes suficientes* para cubrir la cantidad demandada, sus intereses y costas.»

35—Se había dado por contestada la demanda, y la parte no había comparecido al acto de las posiciones el día señalado. Es sabido que el hecho de darse por evacuado el traslado de la demanda en rebeldía, no autoriza el embargo preventivo porque esto solo importa una rebeldía parcial, siendo así que el art. 437 del Cód. de Proc. exige una rebeldía total. En cuanto á las posiciones mandadas agregar, no pueden tampoco autorizar el embargo preventivo, porque la ley solo autoriza al Juez á darlas por absueltas al dictar sentencia—art. 133 del Cód. de Proc.—De aquí resulta que no se puede decretar un embargo preventivo en virtud de las posiciones mandadas agregar cuando no concurre el absolvente á la audiencia, porque el Juez no tiene elementos en que fundar su resolución, ni puede decirse que existan en autos indicios ó presunciones que hagan verosímil el hecho litigioso, como dice el artículo 448 del Cód. de Proc.

36—La Cámara revocó el auto del Inferior que concedía el embargo: ella dijo que «hallándose desprovista de todo recaudo que haga verosímil el derecho alegado y de acuerdo con la jurisprudencia estable



vindicación haga procedente el embargo preventivo, debe ser acompañada de recaudos suficientes.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 393, Ser. 4^a.

37. **Embargo preventivo**—No procede fundado en un contrato bilateral, si la parte no justifica sumariamente haberlo cumplido.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 12, Ser. 4^a.

38. **Embargo preventivo**—No procede aun después de iniciada la separación de bienes, mientras no se justifique el peligro de la demora.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 28, Serie 4^a.

39. **Embargo preventivo**—La demanda de reivindicación de muebles, aun fundada en un documento privado, hace procedente el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 7, página 51, Ser. 4^a.

40. **Embargo preventivo**—Cualquier Juez puede cumplir

cida en casos análogos, no procede la medida solicitada.» Hemos buscado inútilmente esta jurisprudencia invocada por la Cámara sin que nos haya sido posible encontrarla en ninguno de sus fallos. En los varios casos resueltos, jamás se ha exigido la justificación previa por medio de recaudos que acrediten el derecho invocado. No se ha exigido ese requisito en ninguno de los siguientes casos: Inst., tom. 4^o, verb. *Embargo preventivo*, núm. 7; tom. 3^o, mismo verbo, núm. 1; tomo 1^o, verb. *Petición de herencia*, núm. 20:8. El embargo debe limitarse á la parte alicuota que puede corresponder al heredero. Véase: Inst., tom. 2^a, verb. *Embargo preventivo*, núm. 3.

37—Art. 443, inc. 3^o del Cód. de Proc.

38—El art. 1295 del Cód. Civ. exige que haya peligro en la demora para que sea procedente el embargo preventivo.

39—Art. 447 del Cód. de Proc. El documento privado hace verosímil el derecho alegado.

40—Un exhorto dirigido á los Tribunales de esta Capital por un Juez de 1^a Inst. extraño á esta jurisdicción, solicitando un embargo preventivo por una suma inferior á la competencia de los Jueces de 1^a Instancia, se ordenó su cumplimiento por este Tribunal. Se dijo, que tratándose de un asunto de menor cuantía no competía su diligenciamiento al Juez de 1^a Inst. Se resolvió dar cumplimiento al exhorto,

un exhorto del extranjero pidiendo un embargo preventivo, aun cuando no se halle debidamente dirigido.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 68, Ser. 4ª.

41. Embargo preventivo—El término que la ley fija, al

teniendo en cuenta que la Ley Orgánica de los Tribunales no es aplicable en este caso por cuanto se trata de una simple comisión á cumplir que le encomienda otro Juez de igual jurisdicción á la del Juzgado exhortado. Se tuvo en cuenta asimismo, que la comisión se refería á un embargo preventivo cuyo diligenciamiento no debía demorarse, cumpliéndose al mismo tiempo con la cordialidad y reciprocidad que las leyes encomiendan á los Jueces guardar entre sí. Por otra parte, debe tenerse presente que los Jueces de países ó territorios distantes, cumplen con dirigirse á un Juez de igual categoría, pues pueden ignorar las leyes de forma vigentes en el país á donde se dirigen.

41.—El último día antes de haber espirado el término de ocho días que acuerda el art. 460 del Cód. de Proc., solicitóse el reconocimiento de una firma para preparar la vía ejecutiva, petición que fué rechazada. Se resolvió que dicha petición no podía producir el efecto de suspender el término, porque el art. 460 del Cód. de Proc. habla de demanda, y en tal concepto debe deducirse una acción que revista los caracteres de tal, dentro del plazo que es improrrogable á estar al texto explicito del artículo. Siendo improrrogable el plazo, no puede ampliarse ni prorrogarse por mayor término que el señalado, ni reabrirse después de vencido: este es el efecto propio de los términos perentorios ó fatales. Estudiando la razón del artículo parece incuestionable que la sanción que él contiene, una vez que el deudor ha formalizado sus exigencias de conformidad á lo prevenido en el mismo, no podría evitarse con peticiones cuya impertinencia ha sido constatada en juicio, sino mediante la presentación de demanda en forma y dentro del término fijado para ello, entre otros motivos, porque sería contrario á la equidad que el dueño de los bienes embargados hubiera de quedar sujeto por tiempo indefinido á las consecuencias enojosas que apareaja aquella medida autorizada para casos extraordinarios. La disposición de nuestro Código ha sido tomada de la Ley de Enjuic. Civil de España, cuyo art. 940 contiene una disposición análoga. Los comentadores de dicha ley sostienen que el término allí establecido para accionar y para lo que se supone debía estar dispuesto el que solicitó el embargo, es improrrogable por equivaler á este concepto la calidad de *preciso* con que lo designa la ley. Del mismo modo que el plazo para apelar ó para oponer excepciones no





que ha conseguido un embargo preventivo para deducir demanda, es fatal sin que por ningún incidente se considere interrumpido.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 108, Ser. 4ª.

42. Embargo preventivo—No procede si la obligación es de hacer.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 31, Ser. 4ª.

43. Embargo preventivo—Procede si de los libros de comercio llevados en forma consta la deuda que se reclama.—Jur. Civ., tom. 9, págs. 138 y 235, Ser. 4ª.

44. Embargo preventivo—Si es como diligencia preparatoria del juicio, no procede la declinatoria de jurisdicción—Jur. Civ., tom. 9, pág. 141, Ser. 4ª.

45. Embargo preventivo—Aun cuando no se haya hecho saber al deudor el embargo preventivo, el término para apelar corre desde que la parte haya tenido conocimiento de él.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 58, Ser. 4ª.

se ha considerado jamás que se interrumpiera por la presentación de escritos que no importasen la interposición de un recurso ó la promoción de un artículo. Estos fueron los fundamentos aducidos por la mayoría de los Camaristas, habiendo la minoría aducido razones de peso en contra de esta resolución. El sumario está de acuerdo con el caso resuelto en el núm. 28.

42—De acuerdo con la jurisprudencia constante de la Cámara.

43—Art. 443, inc. 4º del Cód. de Proc.

44—Véase: verb. *Declinatoria de jurisdicción*, núm. 1.

45—Después de decretado un embargo preventivo, se confirió traslado de la demanda entregándose al demandado las respectivas copias al practicarse la notificación: en ésta constaba el embargo preventivo trabado, pero como no se había dado cumplimiento al art. 452 del Código de Proc., que ordena se haga saber al embargado el embargo trabado dentro de tercero día, se presentó éste después de once días pidiendo revocatoria del auto y apelación en subsidio. No se hizo lugar á la revocatoria porque este recurso no procede según disposición del artículo 453 del Cód. de Proc., que sólo admite el recurso de apelación, y por que el convencimiento que tuvo del embargo trabado por medio de la cédula surtía los efectos de la notificación en forma sin necesidad de hacerse saber especialmente en la forma prescripta por el art. 453 citado.



46. Embargo preventivo—Solo procede la inhibición preventiva si concurren los requisitos que la ley exige para el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 68, Ser. 4ª.

47. Embargo preventivo—El reconocimiento de la obligación de rendir cuentas, hace procedente el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 83, Ser. 4ª.

48. Embargo preventivo—La confesión espresa ó ficta que hace procedente el embargo preventivo, debe resultar del mismo expediente en que se dicte.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 100, Ser. 4ª.

49. Embargo preventivo—Procede si existe justificada la obligación de dar.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 310, Ser. 4ª.

Embargo preventivo.—Véase: *Obligación de hacer*, número 13—*Rebeldía*, núm. 9—*Alimentos*, núm. 12—*Embargo*, núm. 9—*Inhibición*, núm. 14.

1. Empedrados—Visadas por la Municipalidad las cuentas por empedrados y fijadas las cuotas á pagar en mensualidades, la escepción de inhabilidad de título fundada

46—Art. 461 del Cód. de Proc.

47—Porque ese reconocimiento importa una confesión espresa, la que según disposición del art. 448 del Cód. de Proc., hace procedente el embargo preventivo.

48—El art. 448 del Cód. de Proc. requiere que la confesión espresa ó ficta resulte de los autos en que tiene jurisdicción el mismo Juez, decia la Cámara. Pero si examinamos detenidamente la disposición legal citada, se ve que esta interpretación es completamente arbitraria. No hay una sola palabra que nos conduzca á interpretar este artículo en el sentido del sumario.

49—Art. 443 del Cód. de Proc.

1—Visadas por la Municipalidad las cuentas correspondientes á la totalidad de las deudas, que es en lo que se funda la ejecución, y disponiendo el art. 4º de ley de Oct. 1º de 1888 que aquella debe fijarse por mensualidades, existen términos hábiles para constatar la legitimidad y exigibilidad del crédito reclamado, sin necesidad de planillas par-



en la falta de visación á cada una de las mensualidades vencidas, es improcedente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 5, Serie 3^a.

2. **Empedrados**—Las cuentas por empedrados, no son ejecutivas mientras no se hayan fijado las cuotas que la ley estatuye para hacer obligatorio su pago. —Jur. Civ., tom. 4, pág. 16, Ser. 4^a.

3. **Empedrados**—Siendo requisito indispensable del impuesto su entrada en las arcas fiscales y su inclusión en los cálculos de recursos, el pago del importe de empedrados no llena aquellos requisitos y en consecuencia debe ser abonado aun por las empresas que por concesión especial están exoneradas del pago de impuestos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 16, Ser. 4^a.

4. **Empedrados**—La escepción de inhabilidad de título procede contra las cuentas por empedrados, aunque estén visadas por la Municipalidad, mientras no se haya fijado al propietario la fecha desde la cual debe efectuarse el pago por cuotas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 5, Ser. 4^a.

Empedrados— Véase: *Escepción de pago parcial*, número 1.

1. **Empleado**—La calificación de jugador de garito, hecha de una persona que además de comprobar su honorabilidad justifica la falsedad del hecho imputado, importa estralimitación de facultades en el empleado y una ofensa ciales. Conocido el total de la deuda y los plazos legales para el pago, es conocido de antemano el importe de cada mensualidad. Si la totalidad de la cuenta está visada, ¿qué necesidad hay de visar cada mensualidad?

2.—Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Empedrados*, núms. 2 y 4.

3.—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara en otros casos. Véase: Inst., verb. *Adoquinado*, núms. 1 y 2.

4.—Véase el núm. 2, y verb. *Adoquinado*, núm. 3.

1.—Véase: *Acto falsedad*, núm. 3.



ilícita al ciudadano, la que debe ser indemnizada según el criterio del Tribunal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Serie 3ª.

Empleado—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 63 y 70.

1ª. **Empleados públicos**—El Poder Judicial tiene derecho y está obligado á entender en las acusaciones, ya sean civiles ó criminales, que se inicien contra empleados públicos, aun por actos que hayan merecido la aprobación de sus superiores, sin que ello importe obstaculizar la acción de otros poderes, ni estralimitación de facultades que le son propias.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

Empleados subalternos—Véase: *Culpa ó negligencia*, número 1.

1ª. **Empresa propietaria**—La responsabilidad de la empresa del tren que sufre el accidente, es directa hacia el damnificado, sin perjuicio de su derecho á repetir contra la empresa culpable.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 61, Ser. 4ª.

Empresas—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 46, 51 y 103—*Acto ilícito*, núm. 4—*Culpa ó negligencia*, núm. 1—*Personería*, núm. 10—*Adoquinado*, núms. 1 y 2—*Afirmado*, núm. 1—*Empedrados*, núm. 3.

1ª. **Empresas de transportes**—Son responsables de los daños y perjuicios que por cualquier accidente se ocasionen á los pasajeros.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 61, Ser. 4ª.

Empresarios—Véase: *Excepción de pago parcial*, núm. 1—*Adoquinado*, núm. 3.

Enajenación—Véase: *Contrato de arrendamiento*, número 30.

1ª—Véase: *Poder judicial*, núm. 1.

1ª—Véase: verb. *Accidente*, núm. 1.

1ª—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 107.



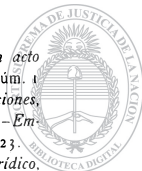
Endoso—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 5.

1. Enemistad—Si bien la enemistad con el abogado no es causa de recusación, procede si éste desempeña la tutela de menores.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 201, Ser. 3^a.

Enemistad—Véase: *Abogado*, núm. 12.

Enfermedades venéreas—Véase: *Divorcio*, núm. 11.

1.—Habiéndose escusado el Juez Mendez Paz de continuar conociendo en un juicio testamentario por resentimiento con el Dr. Bunge que intervenía en ellos, se ordenó se pasaran los autos al Dr. Pizarro quien rehusó admitirlos por considerar insuficiente el indicado motivo. El abogado era al mismo tiempo tutor, con cuya personalidad se identifica completándola y viniendo así á ser parte en el juicio. Tal como se reconoce que el derecho de recusación debe interpretarse con cierta latitud, lo mismo debe admitirse respecto á las causales de escusación, toda vez que no resulte que el Juez al escusarse se proponga solo esquivar el trabajo ó sustraerse á las responsabilidades propias de su ejercicio, como sucede casi siempre con las escusaciones del Dr. Mendez Paz. Este Juez tiene su Juzgado convertido en un desierto, y son contados los litigantes que consienten que ese Juez les resuelva sus asuntos, los que pasan á otros jueces por recusación ó por escusación. El Mendez Paz ha erigido la escusación en sistema, y es tan notorio el poco apego que tiene al trabajo que el Dr. Pizarro cuya laboriosidad y competencia son notorias en el foro de la Capital, ha tenido que presentarse á la Cámara pidiendo que le cambiaran de turno, porque como le seguía á aquél, resultaba un doble recargo por la gran cantidad de expedientes que pasaban del Juzgado del Dr. Mendez Paz: tenemos entendido que la Cámara consideró justo el reclamo y cambió el turno. Si á jueces como éste se les da la facultad de ampliar las causales de escusación, con ello se fomentaría lo anormal, recargando á los jueces buenos y laboriosos con el trabajo que debiera corresponder á los que no reúnen estas condiciones. Por lo demás, la ley prescribe que el Juez que se encuentra en algún caso de impedimento se inhiba, mas no resuelve que para escusarse deba existir precisamente alguno de los motivos de recusación sin serle lícito separarse del asunto por causales de delicadeza ó de decoro consultando su reputación: y á este respecto debe haber cierta latitud. La Cámara de lo Com. y Crim. resolvió en este sentido un incidente suscitado con motivo del asesinato del general Lopez Jordan. Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Escusación*, núm. 3.



Error.—Véase: *Nulidad*, núm. 4—*Nulidad de un acto jurídico*, núm. 7—*Causante*, núm. 1—*Contador*, núm. 1—*Calumnia*, núm. 1—*Escritura*, núm. 2—*Declaraciones*, núm. 1—*Acto jurídico*, núm. 2—*Apellido*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 28—*Remate judicial*, núm. 23.

Error de derecho.—Véase: *Nulidad de un acto jurídico*, núm. 8.

1ª. **Error de hecho.**—Sobre la ubicación del terreno materia del contrato, anula el acto mientras no se justifique la existencia de dolo.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 367, Serie 3ª.

2ª. **Error de hecho.**—La inexistencia del error de hecho que se invoca como fundamento de la acción, hace precedente el rechazo de la demanda.—Jur. Civ., tom. 3, página 281, Ser. 3ª.

Error de hecho.—Véase: *Interdicto de adquirir*, núm. 2—*Nulidad de un acto jurídico*, núm. 8.

Error invencible.—Véase: *Nulidad*, núm. 4.

Error en un asiento.—Véase: *Fallecimiento*, núm. 5.

1ª. **Escepción.**—Importando el pedido de suspensión del juicio, una escepción, debe ser rechazada si se opone fuera de la estación oportuna.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 41, Serie 4ª.

2ª. **Escepción.**—La afirmación del propietario en que re

1ª—Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 4.

2ª—Siendo el error de hecho la base de la demanda, ésta no puede prosperar cuando falla por su base ese fundamento.

1ª—Contestada la demanda y abierta la causa á prueba la parte pidió que se suspendiera el juicio á lo que no se hizo lugar, porque después de contestada la demanda no se pueden oponer escepciones de ninguna clase á no ser la de prescripción.

2ª—El constructor de una obra demandó al propietario del terreno donde se edificó una casa. Este alegó que él no había contratado con el constructor, sino con un tercero quien indudablemente á su vez con-



conociendo la verdad de las obras que alega haberlas contratado con un tercero, importa una escepción cuya prueba le corresponde.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 356, Ser. 4^a.

Escepción—Véase: *Hijo natural*, núm. 1—*Precio*, número 1—*Servicios*, núm. 3—*Contrato de compraventa*, núm. 14.

1. Escepción de arraigo—Es procedente siempre que el demandado tenga su domicilio fuera de la capital.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 43, Ser. 4^a.

2. Escepción de arraigo—La residencia en distinta jurisdicción hace procedente la escepción de arraigo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 142, Ser. 4^a.

3. Escepción de arraigo—Procede si el demandado tiene su domicilio fuera de la jurisdicción del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 41, Ser. 4^a.

4. Escepción de arraigo—Procede, si el actor al iniciar el juicio, tiene su domicilio fuera de la jurisdicción del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 84, Ser. 4^a.

trató con los obreros. La Cámara dijo que el dueño del terreno debía pagar las construcciones porque al defenderse del cobro de una suma echando sobre un tercero la obligación de pagarla importa indudablemente escepcionarse, y el que se escepciona debe probar la defensa, de acuerdo con la conocida regla *reus in excipiendo fit actor*. Además al alegar que el dueño del terreno contrató con un tercero la construcción de la obra, se alega un hecho nuevo en juicio, y es sabido que su prueba incumbe al que la aduce.

1—Art. 85 del Cód. de Proc. Esta escepción fué resuelta con costas tanto en 1^a como en 2^a Instancia, lo que es de extrañarse, pues rara vez se resuelve así.

2—Véase nota precedente. Aquí el Juez de 1^a Instancia no impuso las costas, y apelada la resolución, fué confirmada con costas.

3—También fué este caso resuelto sin las costas de 1^a Instancia y confirmado con costas.

4—Aquí se resolvió la escepción eximiendo al actor de las costas en 1^a y 2^a Instancia.



5. **Excepción de arraigo**—Procede si el demandante se encuentra domiciliado fuera de la jurisdicción del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 233, Ser. 4ª.

6. **Excepción de arraigo**—La residencia del demandante en distinta jurisdicción de la del Juzgado, hace procedente esta excepción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 398, Ser. 4ª.

7. **Excepción de arraigo**—Procede esta excepción una vez justificada la residencia del demandante fuera de la jurisdicción del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 89, Serie 4ª.

1ª. **Excepción de compensación**—Para que sea admitida y recibida á prueba, debe acompañarse al oponerla el documento en que conste la obligación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 9, Ser. 4ª.

1ª. **Excepción de cosa juzgada**—No procede la excepción

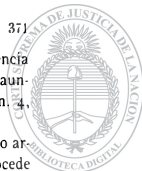
5—En el caso del sumario se opuso esta excepción con otras más que fueron declaradas procedentes, menos una de ellas, imponiéndose las costas al actor en 1ª y 2ª Instancia. Esta resolución es tanto más injusta cuanto que se declaró improcedente una de ellas: nada más arreglado á la justicia que exonerar de las costas al vencido cuando el vencedor no ha conseguido que se declarasen procedentes todas las excepciones.

6—No se impusieron las costas ni en 1ª ni en 2ª Instancia.

7—Tampoco se impusieron las costas en 1ª Instancia, pero fué confirmada la resolución con costas. Puede verse con las resoluciones precedentes que la Cámara no tiene criterio para imponer las costas: ella siempre confirma lo que el inferior resuelve, ya sea que las imponga ó no. Todo es cuestión de suerte allí, no de derecho.

1ª—Así lo exige el art. 488 en su inc. 8º, cuando dice que el crédito debe resultar de documento que traiga aparejada ejecución.

1ª—Para que haya cosa juzgada se requiere que concurren tres elementos indispensables á saber: identidad de objeto ó cosa demandada, identidad de personas á sus calidades, é identidad de causa: de tal manera que faltando una de ellas sería improcedente la excepción—Leyes 19 y 20, tít. 22, Part. 3ª—En el caso del sumario no concurre la identidad de personas, y por consiguiente, la excepción no podía prosperar.



de cosa juzgada, si el litigio en el cual recayó la sentencia en que se funda, se siguió entre distintas personas, aunque uno mismo haya sido el objeto.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 111, Ser. 3^a.

2^a. **Excepción de cosa juzgada**—Fundada en un laudo arbitral y cuya ejecución se sigue judicialmente procede siempre que la acción tenga por base la misma cosa que dió origen al arbitraje, y entre las mismas personas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 318, Ser. 4^a.

1. **Excepción de defecto legal**—En el modo de proponer la demanda, no puede fundarla la omisión de algún hecho en que la acción se funda.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 244, Ser. 3^a.

2^b. **Excepción de defecto legal**—Procede si no se individualiza el objeto de la demanda.—Jur. Civ., tom. 5, página 223, Ser. 3^a.

3. **Excepción de defecto legal**—No procede si se individualiza el objeto de la demanda.—Jur. Civ., tom. 5, página 239, Ser. 3^a.

2^a—Porque concurren los requisitos exigidos por la ley para que sea procedente la excepción. Véase nota precedente.

1—Si el demandante deja de alegar algún hecho que sirve de fundamento á la acción, en nada perjudica al demandado, porque la prueba producida acerca de ese hecho omitido y no articulado, no le aprovecharía. El art. 108 del Cód. de Proc. establece terminantemente que no podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos; y las que se refieren á hechos no articulados, serán irremisiblemente desechadas al pronunciar sentencia definitiva.

2^b—En una demanda sobre escrituración se designó la ubicación del inmueble, diciéndose que estaba limitada por tres calles sin nombres. Se dijo que á fin de determinar con mayor precisión la cosa materia de la acción debió además manifestarse los linderos del inmueble.

3—Porque en este caso se llenan cumplidamente los requisitos exigidos por el inc. 3^o del art. 71 del Cód. de Proc.



4. **Excepción de defecto legal**—No procede si se indica el objeto de la demanda, aun cuando no se cite disposición legal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 126, Ser. 3ª.

5. **Excepción de defecto legal**—La falta de cita de una disposición expresa, no puede fundar esta excepción.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 133, Ser. 3ª.

6. **Excepción de defecto legal**—No procede si la demanda fija los hechos é invoca el derecho que de ellos surge.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 138, Ser. 3ª.

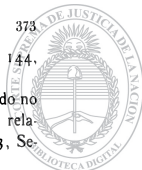
7. **Excepción de defecto legal**—Si el mandatario no acompaña, al rendir cuentas, los justificativos que invoca, esta

4—Aun cuando no se cita la disposición legal en que la demanda se apoya, no puede decirse que esto constituya un defecto legal en el modo de proponerla en el sentido del art. 71 del Cód. de Proc., siempre que en ella se diga como se decía en el caso presente, que la demanda es por cobro de pesos, por saldo de mercaderías, en cuyo caso la acción es la que corresponde al vendedor contra el comprador que no ha pagado la cosa comprada. Esta es la jurisprudencia sentada por la Cámara en varios casos que tiene resueltos. Acerca de esta cuestión de procedimiento se han dictado resoluciones contradictorias. De acuerdo con el sumario puede verse: Inst., tom. 3, verb. *Defecto legal*, núm. 4; en contra, tom. 4, verb. *Excepción de defecto legal*, núm. 9; y tom. 3, verb. *Excepción de defecto legal*, núms. 2 y 4, y *Defecto legal*, núm. 3.

5—Si bien es cierto que la ley exige que el demandante esponga con la demanda sucintamente el derecho en que la funda, evitando repeticiones inútiles, también lo es que no le impone la obligación de fundarla en el texto expreso y determinado de la ley. Véase la nota precedente.

6—Art. 71 del Cód. de Proc.

7—Los arts. 1009 y 1911 imponen al mandatario la obligación de dar cuenta de sus operaciones entregando al mandante todo lo que le confió ó recibió de terceros y de que no hubiese dispuesto por su orden; todos los documentos, dineros, títulos y papeles que le fueron entregados. Cuando estos comprobantes no se acompañan, no se puede obligar al demandado á que conteste la demanda, puesto que le faltan los comprobantes que debe tener en su poder el mandatario para impugnarlos ó aceptarlos.



excepción es procedente. — Jur. Civ., tom. 1, pág. 144, Ser. 4^a.

8. **Excepción de defecto legal**—Es procedente cuando no se fija claramente el derecho que nace de los hechos relatados en la demanda.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 233, Serie 4^a.

9. **Excepción de defecto legal**—Tratándose del cobro de servicios profesionales, esta excepción es procedente si dichos servicios no han sido individualizados en el escrito de demanda.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 424, Ser. 4^a.

10.—**Excepción de defecto legal**—Basta esponer los hechos y el derecho que de estos surge para rechazar la excepción de defecto legal, sin que sea necesario citar de-

8—La acción versaba sobre filiación natural; el demandante no adujo fundamento alguno de derecho, y al evacuar el traslado que se le confirió de la excepción de defecto legal, dijo que era improcedente, porque tratándose de una materia tan trivial y tan común como es la filiación natural, basta invocar el derecho procedente de la filiación sin que sea forzoso señalar atildadamente la ley que asigna á los hijos naturales la parte que ella les acuerda en los bienes de sus padres. El Juez dijo que no se habían llenado los requisitos del art. 71 del Cód. de Proc., pues no se había espuesto el derecho, como lo exige el inc. 5º, ni se había citado disposición alguna legal, lo que hacía palpable el defecto de que adolecía la demanda. Como puede verse, esta resolución está en contra de los núms. 4 y 5.

9—Véase: *Servicios profesionales*, núm. 1.

10—El fallo decía que según se ha declarado uniformemente por la Cámara, no es necesario que se cite una disposición espresa de la ley, que los Jueces están obligados á conocer, bastando que el derecho surja de la petición que se formula. Según se ve, reina un verdadero caos en esta cuestión, y con las resoluciones contradictorias que dejamos anotadas, se podría formar un verdadero mosaico. La Cámara resuelve hoy esta cuestión en un sentido para reformarla mañana, la que á su vez es reformada al día siguiente. La ley es terminante y ella se dicta para ser cumplida. El art. 71 en su inc. 5º, exige que el derecho sea espuesto suscintamente. Toda demanda que no llene este requisito es defectuosa.



terminadamente el artículo de la ley.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 386, Ser. 4^a.

11. Excepción de defecto legal—Espuestos claramente los hechos y el derecho que de ellos surge, es improcedente esta excepción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 90, Ser. 4^a.

12. Excepción de defecto legal—Si la reivindicación se dirige contra el poseedor y vendedor, esta excepción es improcedente, pues la unidad de acción no permite la división del juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 377, Ser. 4^a.

13. Excepción de defecto legal—Si los hechos han sido claramente espuestos, é invocado el derecho que de ellos surge, esta excepción es improcedente.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 415, Ser. 4^a.

14. Excepción de defecto legal—No procede si se funda en la falta de cita de la ley que ampara el derecho invocado, siempre que resulte de los hechos.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 32, Ser. 4^a.

15. Excepción de defecto legal—Esta excepción debe ser rechazada si resulta claramente espresado el objeto de la demanda.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 67, Ser. 4^a.

16. Excepción de defecto legal—Es improcedente si se

14—Los fundamentos de esta resolución fueron los siguientes: «Si bien es cierto que en la demanda no se invoca disposición legal alguna para fundarla, en ella se cobra cantidad de pesos, especificándose detalladamente en la cuenta que se adjunta el origen y naturaleza de los diversos créditos, cuyo pago se persigue, lo que basta para determinar la naturaleza de las diversas acciones que se deducen: quedando así caracterizadas las acciones entabladas, el demandado está habilitado para contestarlas y el Juzgado para resolverlas en su oportunidad, sin que sea necesario más exposición de derecho ni tampoco la cita de las disposiciones legales que rigen el caso.»

16—La excepción de defecto legal solo es procedente cuando se infringen las reglas establecidas en el art. 71 del Cód. de Proc. Cuando el actor no presenta con su demanda los documentos y escrituras en que funda sus derechos, como lo previene el art. 72, la pena por in-



funda en la falta de presentación de los documentos que se invocan.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 15, Ser. 4^a.

17. Escepción de defecto legal.—La falta de cita de la ley que ampara el derecho del demandante, no puede fundar la escepción si se invoa el título de acreedor.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 35, Ser. 4^a.

18. Escepción de defecto legal.—Es procedente si no se expresa la fecha en que tuvieron lugar los hechos en que se funda la demanda.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 44, Ser. 4^a.

19. Escepción de defecto legal.—Si de los hechos surge el derecho, esta escepción es improcedente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 132, Ser. 4^a.

20. Escepción de defecto legal.—Es improcedente si la demanda llena todos los requisitos de la ley.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 269, Ser. 4^a.

21. Escepción de defecto legal.—Si no se acompaña el detalle de los trabajos, en la demanda por locación de servicios, esta escepción es procedente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 300, Ser. 4^a.

22. Escepción de defecto legal.—Procede si no se detalla fringir ese precepto es la que señala el art. 73, esto es, que no se admitan otros documentos que no sean de fecha posterior. Manresa y Reus tratan este punto en el tom. 2, pág. 115 de su obra sobre la Ley de Enjuiciamiento Española. Esta ha sido la jurisprudencia constante de la Cámara. Véase: verb. *Documentos*, núm. 11.

17—Parece que la jurisprudencia se inclina en el sentido del sumario. Véase núm. 14.

18—Esa fecha debe conocerla el demandado á fin de que pueda hacer uso del derecho que le acuerda la ley respecto de la prescripción de la acción. El juez en el caso que nos ocupa dijo que la demanda era también defectuosa porque no se había aducido los fundamentos de derecho.

19—La Cámara dijo que surgiendo claramente de los hechos enunciados en la demanda el derecho de la misma, el requisito determinado en el art. 71, inc. 5º del Cód. de Proc. no puede dar lugar á esta escepción.

21—Véase: verb. *Detalle*, núm. 1.

22—Véase nota precedente.

la cuenta demandada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 321, Serie 4ª.

23. **Escepción de defecto legal**—Esta escepción no es procedente si la demanda espresa claramente su objeto.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 324, Ser. 4ª.

24. **Escepción de defecto legal**—La falta de presentación de los documentos en que se funda la demanda no puede dar lugar á esta escepción.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 294, Ser. 4ª.

1ª. **Escepción de espera**—La ley de moratorias solo es aplicable á las obligaciones comerciales sin que ella pueda fundar la escepción de espera contra la ejecución de una hipoteca.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 96, Ser. 4ª.

Escepción de espera—Véase: *Escepción*, núm. 1.

1ª. **Escepción de falsedad**—Es procedente en el juicio ejecutivo cuando se refiere al título con que se ejecuta, pero no á la obligación que de él emana.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 409, Ser. 4ª.

23—Se dijo que la demanda era defectuosa porque no se había designado el nombre técnico que correspondía á la acción ejercitada. No se hizo lugar á esta escepción porque la falta de dicho requisito no afecta sustancialmente á la demanda. Esta resolución está de acuerdo con otro caso resuelto por esta misma Cámara y que corre publicado en el tom. 4, pág. 491, Ser. 1ª.

24—Véase: verb. *Documentos*, núm. 11.

1ª—La escepción se fundó en la Ley de Moratorias de 19 de Junio de 1891, la que fué dada en beneficio del comercio; y no siendo mercantil la obligación hipotecaria no puede dicha ley ampararla.

1ª—El ejecutado al oponer la escepción no desconoció la autenticidad de la escritura en que la ejecución se basaba; dijo de falsedad de la deuda que en ella se reconocía que no es la falsedad del título con que se pide la ejecución, decia la Cámara. Ya tenemos manifestada nuestra opinión acerca de este punto, pues consideramos que la escepción de inhabilidad como la de falsedad del título, puede deducirse aun tratándose de la causa de la obligación.—Véase, verb. *Escepción de inhabilidad de título*, núm. 12.





2ª. **Excepción de falsedad**—De la ejecutoria, la escritura de compromiso forma parte integrante del laudo arbitral; siempre que se pretenda su ejecución omitiendo la presentación de la primera; la excepción de falsedad es procedente aun cuando no se haya interpuesto recurso ni deducido acción contra el segundo.—Jur. Civ., tom. 10, página 160, Ser. 4ª.

1. **Excepción de falta de personería**—Es improcedente si el poder individualiza el objeto del mandato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 229, Ser. 3ª.

2ª. **Excepción de falta de personería**—Por carecer del poder necesario para deducir la acción, puede ser opuesta contestando á la demanda.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 68, Ser. 3ª.

2ª—Véase: *Escritura de compromiso*, núm. 1.

1—Se dijo que el apoderado no tenía facultad para iniciar un pleito sobre daños y perjuicios, teniendo en cuenta que las palabras empleadas en el poder «asegurar la indemnización que fuere debida», acordaban tan solo una facultad que dada su abstracción no autorizaba al mandatario para estar en juicio. A esto se contestó diciendo, que tratándose de definir la responsabilidad de un hecho originario de un daño, la demanda judicial es el medio indicado para obtener el resultado que se persigue, cual es la constatación del fundamento en que descansa el derecho que se reclama. De los términos del poder se desprendía que éste se había dado á fin de que se intentara la acción deducida, pues decía testualmente, «con facultad de tratar con quien corresponda» y más adelante se refería al cobro de honorarios. El art. 1884 del Código Civ. no es aplicable por cuanto el derecho de reclamar indemnizaciones, supone como consecuencia indispensable la necesidad de recurrir á los jueces para hacerlas efectivas. La autoridad conferida en el poder para reclamar dichas indemnizaciones, no podía ponerse en duda, pues aparecía de los términos espresos del poder y de la naturaleza del negocio que determina la estención de los poderes para conseguir el objeto del mandato—art. 1905, Cód. Civ.

2ª—Cuando no se oponen las excepciones dilatorias en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento, no por eso pierde el demandado el derecho á deducirlas al contestar la demanda—art. 86, Cód. de Proc.



3. Excepción de falta de personería—Cuando afecta el derecho del actor, no procede como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 50, Ser. 4^a.

4. Excepción de falta de personería—Por carecer el actor del derecho que invoca, no puede ser resuelta como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 375, Ser. 4^a.

5. Excepción de falta de personería—Por carecer de acción, es improcedente si se opone como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 378, Ser. 4^a.

6. Excepción de falta de personería—Que se funda en la falta de derecho del actor, es improcedente como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 253, Ser. 4^a.

7. Excepción de falta de personería—Resuelto por sentencia ejecutoriada el carácter de socio de una sociedad, aquella excepción debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 253, Ser. 4^a.

8. Excepción de falta de personería—El poder para cobrar al deudor, no importa la de demandarlo judicialmente y en consecuencia procede esta excepción.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 398, Ser. 4^a.

9. Excepción de falta de personería—Es improcedente la excepción de falta de personería, ya sea en el demandante

3—Véase: *Excepción dilatoria*, núm. 1.

4—Véase nota precedente.

7—No puede volverse sobre la misma cuestión pasada en autoridad de cosa juzgada.

8—El poder invocado no autorizaba para demandar ni para ocurrir á los Tribunales en nombre de su comitente, sino simplemente para cobrar, dando los recibos del caso y practicando á ese efecto las diligencias necesarias. Un mandato así concebido no comprende más que los actos de administración, de acuerdo con lo prescripto en el art. 1880 del Cód. Civ.: el poder para cobrar deudas no comprende el de demandar á los deudores, como lo establece el art. 1888.

9—Véase: verb. *Excepción dilatoria*, núm. 1.



ó en el demandado si se funda en la falta de derecho.—
Jur. Civ., tom. 5, pág. 386, Ser. 4ª.

10. Excepción de falta de personería—Si hace al derecho del actor, solo procede como perentoria.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 364, Ser. 4ª.

11. Excepción de falta de personería—Esta excepción debe ser rechazada si se funda en la falta de derecho.—
Jur. Civ., tom. 5, pág. 415, Ser. 4ª.

12. Excepción de falta de personería—Es improcedente si se opone á la acción ejecutiva de una letra de cambio.—
Jur. Civ., tom. 7, pág. 235, Ser. 4ª.

13. Excepción de falta de personería—Contra la ejecución de una sentencia, son inadmisibles las excepciones de falta de personería, inhabilidad de título y litispendencia.—
Jur. Civ., tom. 8, pág. 305, Ser. 4ª.

14. Excepción de falta de personería—Es improcedente si haciendo al fondo de la acción se opone como dilatoria.—
Jur. Civ., tom 8, pág. 42, Ser. 4ª.

15. Excepción de falta de personería—Es improcedente opuesta como dilatoria si se funda en la falta de acción.—
Jur. Civ., tom. 8, pág. 59, Ser. 4ª.

16. Excepción de falta de personería—Aun declarada procedente, no debe condenarse en costas al vencido si no

10—Las defensas que hacen al fondo del litigio no se encuentran comprendidas entre las enumeradas en el art. 84 del Cód. de Proc. Las únicas excepciones perentorias que pueden deducirse en forma de artículo previo son las tres enumeradas en el art. 95 del Cód. de Proc., todas las demás deben deducirse al contestar la demanda.

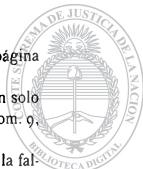
12—Véase: *Excepción de falta de personería*, núm. 1, Inst., tom. 4º.

13—Porque no están comprendidas entre las únicas excepciones consideradas como legítimas por el art. 539 del Cód. de Proc.

14—Véase: *Excepción dilatoria*, núm. 1.

15—Véase nota precedente.

16—Véase: verb. *Costas*, núm. 57.



resulta evidente su temeridad.—Jur. Civ., tom. 8, página 301, Ser. 4^a.

17. Excepción de falta de personería —Esta excepción solo puede fundarse de la incapacidad civil.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 26, Ser. 4^a.

18. Excepción de falta de personería—Fundada en la falta de derecho, es improcedente como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 27, Ser. 4^a.

19. Excepción de falta de personería—Es improcedente si se funda en la falta de derecho.—Jur. Civ., tom. 10, página 328, Ser. 4^a.

Excepción de falta de personería—Véase: *Excepción dilatoria*, núm. 1.

1. Excepción de incompetencia—Por razón de menor cuantía, es improcedente si se ejecuta una sentencia ejecutoriada.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 415, Ser. 4^a.

2. Excepción de incompetencia—La resolución que rechaza esta excepción opuesta como dilatoria, hace cosa juzgada é inhabilita al demandado para oponerla como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 332, Ser. 4^a.

3. Excepción de incompetencia—Si ella es potestativa

17—Véase: *Excepción dilatoria*, núm. 5.

1—Se trataba de ejecutar una resolución dictada por el Juzgado y confirmada por la Cámara. La ejecución por otra parte, era un incidente de otro juicio seguido anteriormente: en este caso es competente para entender en el incidente el mismo Juez que ha entendido en lo principal. Se trataba de obtener la devolución de unos fondos indebidamente extraídos y pertenecientes á una sucesión.

2—Véase: verb. *Cosa juzgada*, núm. 5.

3—Un extranjero inició un pleito contra un argentino ante la justicia ordinaria: éste declino de jurisdicción, siendo la excepción rechazada con costas de 1^a y 2^a Inst. El inc. 2^o del art. 2^o de la Ley sobre jurisdicción y competencia de los Trin. Nacionales, atribuye á éstos el conocimiento de las causas civiles en que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero; pero del estudio general de esta Ley resulta

del demandante, no procede la escepción.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 73, Ser. 4^a.

4. Escepción de incompetencia—Opuesta esta escepción por corresponder el conocimiento de la causa á la jurisdicción federal, es improcedente si la jurisdicción es potestativa del demandante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 109, Ser. 4^a.

5. Escepción de incompetencia—Esta escepción fundada en la distinta nacionalidad de la de las partes, es improcedente si ha sido opuesta por el ciudadano argentino.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 231, Ser. 4^a.

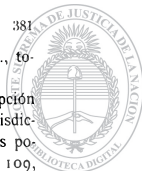
6. Escepción de incompetencia—Es improcedente si se

que la jurisdicción en este caso, ha sido establecida en beneficio exclusivo de los extranjeros, y que siendo un privilegio ó un beneficio pueden renunciarlo. El art. 12 en su inc. 4º corrobora esta interpretación de la ley.

4—La escepción se fundaba en que el demandante era vecino de la provincia de Buenos Aires y el demandado residía en esta Capital. Las disposiciones legales que rigen el caso son dictadas en beneficio del vecino de la otra provincia distinta de aquella en que se se inicia el juicio, y como una escepción establecida en su favor, á la que no puede nunca ampararse el demandado, que como litigante está sometido á la jurisdicción de los jueces ordinarios de su domicilio que son sus jueces naturales—art. 2º, inc. 2º de la Ley de 14 de Set. de 1863, y art. 111 de la Ley Org. de los Trib. de la Cap.—La jurisdicción de los Tribunales Federales es privativa y excluyente de la de provincia, pero con las escepciones que establece para varios casos—art. 12, inc. 4º de la citada Ley de 1863—entre los cuales se encuentra el caso que nos ocupa. Las leyes de escepción solo pueden ser invocadas por aquellos en cuyo beneficio son establecidas. Esta escepción fué rechazada con costas en 1ª Inst. y confirmada en la misma forma por el Superior.

5—De acuerdo con las resoluciones precedentes. También en el caso presente se rechazó la escepción con costas en 1ª y 2ª Inst.

6—Se pedía el cumplimiento de un contrato de compraventa, de un inmueble, constante de un boleto. La acción es personal, y por consiguiente cae bajo la sanción del art. 4º del Cód. de Proc.. Como el Juez de 1ª Inst. no condenó en costas al escepcionante vencido, la Cá-



pide el cumplimiento de un contrato en el domicilio del demandado, aun cuando el bien que le dió origen esté situado en otra jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 386, Ser. 4ª.

7. **Escepción de incompetencia**—No puede ser sustanciada si se opone fuera de término.—Jur. Civ., tom. 10, página 319, Ser. 4ª.

8. **Escepción de incompetencia**—Debe resolverse por el Juez de cuya jurisdicción se declina, aun cuando se haya deducido inhibitoria.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 256, Serie 4ª.

* **Escepción de incompetencia**—Véase: *Jurisdicción*, número 2.

1. **Escepción de inhabilidad de título**—Visadas por la Municipalidad las cuentas por empedrados y fijadas las cuotas á pagar por mensualidades, la escepción de inha-

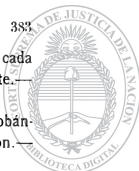
mara confirmó la resolución declarando que no había razón para imponer las costas. Si el Inferior hubiese impuesto las costas al vencido seguramente que la Cámara hubiese confirmado con costas. Lo que ella quiere es confirmar las resoluciones del Inferior por más injustas que sean, así se evita el trabajo de estudiar las cuestiones y se ocupa tan solo de dar palo de ciego á los pobres litigantes sin que para ello se tenga en cuenta el derecho que es para este Tribunal letra muerta.

7—La escepción de incompetencia es dilatoria—art. 84, inc. 1º del Cód. de Proc.—El art. 83 dice, que las escepciones deben deducirse dentro de los nueve días en que debe ser contestada la demanda. Y el art. 46 declara perentorio el término para oponer escepciones dilatorias.

8—Habiéndose deducido cuestión de competencia por la vía inhibitoria, se presentó la misma parte ante el Juez que no consideraba competente, pidiéndole que no continuara entendiendo en el asunto porque había deducido inhibitoria ante el que juzgaba competente. No le hizo lugar y continuó entendiendo porque dicho Juez no había recibido el oficio de que habla el art. 410 del Cód. de Proc. Las escepciones deben ser resueltas por el mismo Juez ante quien se opusieron.

1—Véase: verb. *Empedrados*, núm. 1.





bilidad de título fundada en la falta de visación de cada una de las mensualidades vencidas es improcedente.—

Jur. Civ., tom. 1, pág. 5, Ser. 3ª.

2. **Excepción de inhabilidad de título**—No comprobándose esta excepción, debe llevarse adelante la ejecución.—

—Jur. Civ., tom. 5, pág. 144, Ser. 3ª.

3. **Excepción de inhabilidad de título**—Es improcedente si se funda en la falsedad ó vicios de los hechos que le dieron origen, pero que no constan del título mismo.—

Jur. Civ., tom. 6, pág. 150, Ser. 3ª.

5. **Excepción de inhabilidad de título**—Es improcedente si la ejecución se funda en un instrumento público.

—Jur. Civ., tom. 7, pág. 323, Sér. 3ª.

7. **Excepción de inhabilidad de título**—Es procedente

2—Art. 498 del Cód. de Proc.

3—La Cámara de lo Civil tiene resuelto que esta excepción solo es procedente cuando se funda en defectos del título mismo capaces de destruir su fuerza ejecutiva, ó en no estar comprendido entre los que la ley considera como tales. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Excepción de inhabilidad de título*, núms. 1 y 9; tom. 2º, verb. *Inhabilidad de título*, números 4 y 7. Esta resolución es correcta si se trata de letras de cambio ú otros papeles que la están equiparadas, porque, no está enumerada entre las únicas admisibles en la ejecución de una letra de cambio —art. 852 del Cód. de Com. ant., y 676 del vigente.—Como estos artículos están en oposición con el art. 488 del Cód. de Proc., en cuyo caso debe estarse á lo que dispone el Cód. de Com.—art. 813 del Código de Proc.—Son las disposiciones del Cód. de Com. las que deben aplicarse. Pero si se trata de la ejecución de una obligación que no sea una letra de cambio ú otro papel que le esté equiparado, el sumario no es exacto, ni consulta los principios legales que rigen la materia. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Inhabilidad de título*, núm. 4 y su nota, donde combatimos aquel principio legal.

5—Porque estos títulos traen aparejada ejecución —art. 465, inc. 1º. Cód. de Proc.

7—La ejecución se inició fundándola en un certificado expedido por el escribano que autorizó la escritura de venta y la garantía hi-



si la ejecución hipotecaria se funda en un certificado del escribano ante el cual se otorgó la escritura de préstamo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 226, Sér. 3ª.

8. Excepción de inhabilidad de título—Es procedente siempre que la deuda no sea exigible en juicio ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 1.º, pág. 409, Sér. 4ª.

9. Excepción de inhabilidad de título—Opuesta á una liquidación no aprobada, es procedente.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 381, Sér. 4ª.

10. Excepción de inhabilidad de título—Es procedente contra los instrumentos públicos emanados de oficinas municipales, si en su expedición no se han observado los requisitos que le impone la ley que les dió origen.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 16, Sér. 4ª.

11. Excepcion de inhabilidad de título—Esta excepcion

potecaria que se constituyó por la deuda contraida. Se dijo que el título era inhábil porque ese certificado no es lo mismo que una escritura pública, ni tampoco una copia sacada de los libros de protocolo en la forma que prescribe la ley—art. 1006 del Cód. Civ—de manera que no puede estar comprendido en la designación del art. 979 citado. El acreedor alegaba como razón para no presentar el testimonio de la escritura pública de venta á que el certificado se refería, diciendo que dicho testimonio pertenecía al ejecutado, lo es inaceptable, puesto que conteniendo la escritura de venta un pacto hipotecario, el acreedor tiene derecho á exigir del Escribano una copia autorizada—art. 1006—No estando el documento comprendido entre los que según el art. 465 del Cód. de Proc. traen aparejada ejecución, el título es inhábil. Esta resolución fué dictada por mayoría de votos, habiendo la minoría aducido argumentos de verdadero mérito jurídico.

8 - Art. 464, del Cód. de Proc. Cuando se inició la acción, el plazo de la obligación aún no había vencido.

9—Así lo requiere el art. 465, inc. 4.º del Cód. de Proc.

10—La inhabilidad se dijo que consistía en que no se habían fijado las cuotas mensuales en que debía abonarse el afirmado, en contra de la ley que preceptuaba esta forma de pago. Esta excepcion, está estudiada en el verb. *Adoquinado*, núm. 3.

11—Veáse nota precedente, y verb. *Empedrados*, núm. 3.

procede contra las cuentas por empedrados, aun visitadas por la Municipalidad, mientras no se haya fijado al propietario la fecha desde la cual debe efectuarse el pago por cuotas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 5, Ser. 4ª.

12. Excepción de inhabilidad de título Esta excepción

12—Esta excepción se opuso fundándola entre otras razones en que la ordenanza poniendo en vigencia los impuestos establecidos aparecía dictada sin la concurrencia de los mayores contribuyentes que determina la ley; para dictarse ésta, solo concurrieron siete, siendo así que debieron ser nueve porque este fué el número de Concejales presentes á la sesión; de esta circunstancia y de lo preceptuado en el art. 44 de la Ley Orgánica Municipal deducía el excepcionante que la ordenanza había sido ilegalmente sancionada, siendo de consiguiente nulo é inhabil el título de la ejecución. Se declaró improcedente la excepción fundándose en que el art. 64 de la ley citada establece que el cobro de las deudas por impuestos y recursos municipales, se hará efectivo por la vía de apremio judicial, sirviendo de título suficiente para la ejecución la boleta respectiva con el visto bueno del Intendente Municipal. La ejecución versaba sobre el cobro de la patente del «Frontón Buenos Aires». El artículo subsiguiente declara impuestos y rentas municipales, entre otros, las patentes sobre teatros, cafés, etc. y demás establecimientos de diversión y recreo. Finalmente la ordenanza vigente en aquel año gravaba á los Frontones de 1ª categoría con un impuesto de 250 \$ por cada función en día de trabajo. El título era la boleta correspondiente extendida de conformidad con las disposiciones que quedan relacionadas. Entretanto esta Cámara tiene sentada la jurisprudencia, á nuestro modo de ver equivocada, que la excepción de inhabilidad debe referirse á defectos del título mismo ó á omisiones sustanciales que le quiten su fuerza ejecutiva. Es la presencia de estos vicios la que debe constatar el ejecutado, ó en su caso, que el título no trae aparejada ejecución, por no hallarse comprendido entre los que la ley enumera como tales. El excepcionante debatiendo cuestiones de fondo atacaba la validez del impuesto por haber trasgredido, el Concejo Deliberante, las prescripciones de su ley y por no ser conforme la ordenanza al espíritu y á la letra de la Constitución. Basta enunciar este antecedente, decía la Cámara, para persuadirse que la defensa opuesta es de todo punto extraña á la índole y á los trámites del juicio ejecutivo. En sus actuaciones rápidas no caben discusiones fundamentales, por cuanto se desvirtuarían si hubieran de estimarse como pertinentes, procedimien-





cuando el juicio ejecutivo se funda en una ordenanza municipal, solo puede referirse á la existencia de esta pero no á su nulidad ó validez.—Jur. Civ., tom. 6, página 215, Ser. 4^a.

tos establecidos en beneficio exclusivo del acreedor, subvirtiendo además reglas tan sustanciales á los juicios como son las que imponen formas amplias y solemnes para declarar la existencia de derechos dudosos ó contravertidos. Consecuencia de la naturaleza de este juicio, dice Caravantes en el tomo 3^o, pág. 267, es que se cierre la puerta todo lo posible á la oposición de la parte contraria dirigiéndose rápidamente á dar cumplido efecto al derecho que se reclama sin dar lugar á controversias propias solo de un juicio declarativo. De aquí el haber algunos, juzgado impropia de este procedimiento, la denominación de juicio hasta el punto de haberse limitado la ley de enjuiciamiento á llamarle procedimiento ejecutivo. Manresa y Reus, critican la denominación de la ley de Enj. Civ. Española de 1855, pues en vez de «ejecuciones» debiera decirse, por ser más propio «juicio ejecutivo, y sustituirse este epígrafe por el de procedimiento ejecutivo.» El Cód. de 1881, adoptó este sistema. Tomando como antecedente los procedimientos sumarios del juicio ejecutivo, todas las prácticas divulgan sin reservas la doctrina enunciada. Así el Dr. Esteves Sagui dice: Se conoce por este nombre el procedimiento destinado á pedir y obtener el cumplimiento ó solución de obligaciones que son constantes y claras de suyo sin que requieran para instrucción del Juez, discusión ni dilaciones. La Suprema Corte Nacional ha dicho también, que las graves cuestiones sobre la nulidad de una ley, son de lato conocimiento, no pudiendo por su trascendencia discutirse y resolverse bajo los trámites sumarios y premiosos del juicio ejecutivo—tom. 16, pág. 357, Ser. 2^a.—Cuando un documento está comprendido entre los que la ley declara como de carácter ejecutivo, y hallándose revestido de todos los requisitos que la misma establece para su eficacia, no puede oponérsele la excepción de inhabilidad. Por último el art. 500 del Cód. de Proc. demuestra á las claras que esta excepción solo puede referirse á los recaudos que le den ó no aparejada ejecución. Esta es la jurisprudencia constante de la Cámara, la que siempre hemos combatido con argumentos de peso, pero que aquel tribunal no ha querido tomar en consideración: Véase verbo *Inhabilidad de Título*, núm. 4, tom. 2^o, Instituta. El argumento principal que se hace es que esas cuestiones de gran importancia requieren una discusión amplia lo que no es posible encerrándola en los términos



13. **Excepción de inhabilidad de título**—Opuesta esta excepción por no estar vencidas todas las cuotas de una deuda, deben ser rechazadas, pues las vencidas tienen igual carácter que el conjunto de la obligación.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 231, Ser. 4ª.

14. **Excepción de inhabilidad de título**—Procede contra la regulación de honorarios, si la ejecución se sigue con-

breves y angustiosos del juicio sumario, como es el ejecutivo. A esto se contestó diciendo que si el demandado se aviene á discutir con premura y precipitación dichas cuestiones, el juez no tiene porque oponerse á ello. Si el litigante no puede dar á su defensa la amplitud necesaria para triunfar suya será la culpa de haber querido discutir en esta forma. Los interesados no sufren nada porque los términos legales corren lo mismo para una como para otra excepción.

13.—En las obligaciones contraídas para ser pagadas por cuotas, cada una de ellas en un término fijo, puede hacerse su cobro por separado ó conjuntamente, según lo estimase prudente el acreedor. Siendo esto así, y vencida una de las cuotas sin efectuarse su pago, el acreedor está facultado para exigirlo en la forma que corresponda, siendo asimismo procedente la vía ejecutiva, y si la totalidad de la deuda estuviese garantida con hipoteca, podría exigirse la ejecución por cada cuota desde el momento en que una de ellas está garantida con la hipoteca constituido sobre la totalidad del inmueble—art. 3112 del Cód. Civ.—El contrato es la ley para las partes, y no siendo indispensable que en él conste la facultad de exigir el pago al vencimiento de cada cuota, desde que por otra parte, no se impuso para su exigibilidad, el cumplimiento de todas las cuotas, el derecho del acreedor nace desde que vence la primera, puesto que son prestaciones independientes los unos de los otros, y pudiendo además el acreedor ampliar la ejecución á medida que vayan venciendo.

14.—Una persona que pretendió una herencia se presentó reclamándola, siendo rechazada su acción por carecer de derecho. El abogado y procurador que patrocinaron á la parte vencida se presentaron ejecutando al vencedor por sus honorarios, la ejecución fué rechazada porque ninguna relación de derecho existía entre ellos y la sucesión vencedora. Los actores tenían derecho á ir contra sus clientes, pero jamás contra la parte que había ganado el pleito. Lo mejor del caso es que la parte patrocinada por el abogado y procurador que ejecutó los honorarios, había perdido el pleito con costas.



tra los que no tienen vínculo alguno de derecho con el abogado y procurador ejecutantes. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 292, Serie 4^a.

15. **Excepción de inhabilidad de título.** — Contra la ejecución de una sentencia, son inadmisibles las excepciones de falta de personería, inhabilidad de título y litispendencia —Jur. Civ., tom. 8, pág. 305, Ser. 4^a.

16. **Excepción de inhabilidad de título** Por ser la obligación personal del esposo, no procede si se ejecuta á la sociedad conyugal —Jur. Civ., tom. 9, pág. 288, Ser. 4^a.

Excepción de inhabilidad de título. — Véase: *Inhabilidad de título*, núm. 5 y 6.

1. **Excepción de litispendencia.** No procede en el juicio sobre reducción á escritura pública del contrato de locación, fundada en el juicio de desalojo del mismo predio. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 186, Ser. 3^a.

2. **Excepción de litispendencia** — Fundada en un jui-

15—Contra la ejecución de sentencias solo son admisibles las excepciones establecidas en el art. 339 del Cód. de Proc. entre las cuales no están comprendidas las enumeradas en el sumario.

16—Se trataba de la ejecución de un pagaré á la orden, iniciado contra la sucesión de la esposa, pagaré firmado por ésta y por el esposo. La obligación así contraída es solidaria y por consiguiente ejecutable contra cualquiera de los esposos coobligados. Si en realidad la deuda es de uno solo de ellos, esa es cuestión á debatirse particularmente entre los coobligados y completamente extraña al ejecutante.

1—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 5.

2—Para que esta excepción sea procedente, se requiere que además de la identidad de personas y cosa demandada concorra la circunstancia de que ambos juicios sean de la misma naturaleza y deban por consiguiente sustanciarse por los mismos trámites: esto es claro, porque una vez producida la litispendencia viene la acumulación de los autos, ó lo que es lo mismo, la refundición de los dos juicios en uno solo, lo que no puede hacerse cuando los trámites marcados por la ley para ambos juicios son distintos. Este sumario está de acuerdo con la jurisprudencia constante de la Cámara. Véase; Inst. tom. 3, verb. *Excepción de litis-*



cio ejecutivo, no es procedente si se opone á una de-
manda ordinaria.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 351, Ser. 4^a.

3. **Excepción de litispendencia**—Esta excepción fun-
dada en un juicio ordinario es improcedente si se ope-
ne en el ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 41, Ser. 4^a.

4. **Excepción de litispendencia**—Fundada en la identi-
dad de causa y objeto, es improcedente si no existe
también identidad de personas Jur. Civ., tom. 6, pág.
187, Ser. 4^a.

5. **Excepción de litispendencia**—Es improcedente si se
funda en un juicio seguido ante distinta jurisdicción
territorial.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 330, Ser. 4^a.

6. **Excepción de litispendencia**—Contra la ejecución de
una sentencia son inadmisibles las excepciones de fal-
ta de personería, inhabilidad de título y litispendencia.
—Jur. Civ., tom. 8, pág. 305, Ser. 4^a.

7. **Excepción de litispendencia**—El expediente en que
pendencia, núm. 2; tom. 2, verb. *Litispendencia*, núms. 3, 4, 5 y 6, y to-
mo 1º mismo verb. núm. 1677.

3— Véase nota precedente.

4—Para que haya litispendencia se requiere que resuelto uno de los
litigios produzca cosa juzgada para el otro: de donde se deduce, que para
que haya litispendencia, se requiere la concurrencia de los mismos ele-
mentos que para la cosa juzgada. Fallo Suprema Corte Nacional, tomo
17, pág. 340, Ser. 2º; Jur. Civ., tom. 2º, pág. 393, Ser. 2º.

5—No solo se tramitaban los juicios ante distintas jurisdicciones sino
que ni se comprobó que el litigio hubiera sido entre las mismas partes
ni sobre idéntico objeto de manera á poder dar lugar á fallos que pu-
dieran resultar contradictorios.

6 —Porque el art. 539 del Cód. de Proc. no las incluye entre las
únicas admisibles.

7—El expediente en que esta excepción se fundaba, lejos de justificarla
ponía de manifiesto que resoluciones pasadas en autoridad de cosa
juzgada habían declarado la incompetencia del otro Juez y había orde-
nado que la parte debía ocurrir donde correspondía. La excepción solo
es procedente cuando existe ante un juzgado competente pleito pendiente
para obtener lo mismo que sea objeto del que se inicia.



se ha declarado la incompetencia no puede fundarla.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 27, Ser. 4^a.

8. **Escepción de litispendencia**—Opuesta en juicio ejecutivo, es improcedente si se funda en un juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 188, Ser. 4^a.

Escepcion de litispendencia—Véase: *Acción*, núm. 2—*Ejecución de sentencia*, núm. 1.

1. **Escepcion de nulidad**—Opuesta á la ejecución de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, es improcedente, cualesquiera que sean los vicios de que adolezca el procedimiento que le dió origen.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 167, Ser. 4^a.

2. **Escepcion de nulidad**—Por defectos de procedimientos, no importa, ni escepción, ni recurso, y en con-

8—Véase el núm. 2.

1—No está comprendido entre las únicas declaradas admisibles por el art. 539 del Cód. de Proc.

2—Este sumario no expresa en manera alguna lo resuelto por la Cámara. El caso es el siguiente: Iniciado un juicio ejecutivo contra una insano, se entendieron todas las diligencias con una persona que había sido curadora, pero que había dejado de serlo. Después de dictada sentencia de trance y remate se viene á dar con el curador verdadero del insano, y pide se le notifique las providencias: así se hace, y entonces se presenta diciendo de nulidad de todo lo obrado, deduciendo la escepción de nulidad que correspondía, á lo que no se hizo lugar porque cualesquier que sean los defectos del procedimiento seguido, ellos quedan cubiertos por la espiración del término acordado por la ley para decir de nulidad del juicio, y que en todo caso podía hacer uso de su derecho en el competente juicio ordinario. La Cámara revocando la sentencia declaró la nulidad porque se le habían notificado al nuevo curador todas las diligencias incluso la de remate, y como el artículo 489 dice que el ejecutado puede decir de nulidad de la ejecución por violación de las formas que para ello establece la ley, se dijo que las providencias habían sido ya notificadas, y que solo importaba la notificación al nuevo curador el hacerle saber el estado de la ejecución. Pero esas providencias habían sido notificadas antes á quien no era parte en el juicio y por consiguiente es como si no se hubiese notificado á nadie. La



secuencia el término solo se cuenta desde la notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 213, Ser. 4^a.

1. **Excepción de pago**—Al que la alega contra la ejecución por honorarios, corresponde presentar los justificativos de haberlo verificado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 165, Ser. 3^a.

2. **Excepción de pago**—O transacción, opuestas á una ejecución hipotecaria, son improcedentes si no resultan de escritura pública ó documento privado reconocido judicialmente por el acreedor, la prueba testimonial es improcedente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 284, Ser. 4^a.

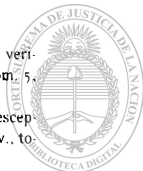
3. **Excepción de pago**—La procedencia de esta excep-

nidad como recurso tal como se encuentra legislada en el Cód. de Proc. presupone que intervienen en el asunto las partes que tienen interés en él y que han tenido ó podido tener oportunidad de reclamar en tiempo y forma la violación de la ley que enjendra la nulidad: pero cuando esa intervención no ha existido, cuando no ha habido oportunidad para usar del recurso la nulidad puede deducirse y pronunciarse en cualquiera oportunidad.

1—En la ejecución seguida en virtud de una regulación ejecutoriada de honorarios, se opuso la excepción de pago fundada en varias entregas hechas á cuenta según detalle que constaba en una cuenta corriente acompañada. No se demostró ni la efectividad de las entregas, ni la autenticidad del documento, siendo la excepción rechazada de acuerdo con lo preceptuado en la ley 8, tit. 3, part. 3^a.

2—El reo en la excepción se hace actor: *reus in excipiendo fit actor*.—Ley 8, tit. 3, part. 3^a.—A esta corresponde la prueba, la que no puede consistir en testigos cuando el valor de la obligación exceda de 20.000 pesos—art. 180 del Cód. de Proc.—En cuanto á la transacción puede verse, los artículos 832 y 833 del Cód. Civ. La prueba puede también resultar de la confesión de las partes.

3—La Municipalidad entabló demanda contra un frontón por pago ejecutivo de pesos que se le adeudaban, procedentes del impuesto de una patente anual y por las funciones en días de trabajo, establecidas por sus ordenanzas, como asimismo por las multas en que había incurrido por no haberse verificado su pago oportunamente. El Juez de 1^a Instancia declaró procedente la excepción de pago porque la Municipalidad



ción no exonera de las costas al ejecutado, si la verificó después de trabado el embargo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 200, Ser. 4ª.

4. **Excepción de pago**—No justificándose esta excepción, debe llevarse adelante la ejecución. —Jur. Civ., tomo 5, pág. 240, Ser. 4ª.

5. **Excepción de pago**—Para que esta excepción sea procedente, los recibos en que se funda deben referirse especial y determinadamente á la obligación que se ejecuta; existiendo otra anterior, deben imputarse á la primera.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 272, Ser. 4ª.

6. **Excepción de pago**—Para que sea procedente la excepción de pago opuesta á la ejecución de una sentencia, debe acompañarse el documento en que se funda.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 49, Ser. 4ª.

recibió el importe del impuesto quedando estinguida la obligación—art. 724 del Cód. Civ.—La Cámara confirmó la sentencia. Pero como al mismo tiempo se habían opuesto otras excepciones que se declararon improcedentes mandándose llevar adelante la ejecución, se le condenó en costas al ejecutado. Esta resolución está de acuerdo con lo preceptuado en el art. 507 del Cód. de Proc., el que establece que las costas serán á cargo del que fuere vencido en última instancia. Como la sentencia de remate solo puede dar por resultado una de dos: ó que se lleve la ejecución adelante, ó que no se lleve: en el primer caso es el ejecutado el vencido y en el segundo el ejecutante, siendo á cargo de uno ú otro las costas del juicio, según le sea favorable ó desfavorable la sentencia. Así cuando como en el caso que nos ocupa, una de las excepciones prospera, aunque las demás sean declaradas improcedentes, la ejecución no se lleva adelante y las costas son á cargo del ejecutado, por que es él el vencido en última instancia. De acuerdo con la jurisprudencia sentada, puede verse el verbo *Costas*, núm. 42, y especialmente el núm. 20.

4 Véase los números precedentes.

5 —El Juez no dijo que era necesario que los recibos se refiriesen especialmente á la obligación ejecutada, sino que rechazó la excepción de pago porque los recibos se referían especialmente á obligaciones anteriores.

6—El art. 539 del Cód. de Proc. lo preceptúa espresa y terminantemente en su última parte.



1^a. **Excepción de pago parcial**—Fundada en la retención del anterior empedrado por el empresario, es improcedente si la Municipalidad hizo uso de él.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 5, Ser. 3^a.

1^b. **Excepción perentoria**—No puede ser opuesta como artículo de incontestación á la demanda.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 86, Ser. 3^a.

2. **Excepción perentoria**—Solo puede resolverse como tal, la excepción de falta de personería por carecer de derecho el actor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 246, Ser. 3^a.

3. **Excepción perentoria**—Opuesta esta excepción como

1^a—El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación—art. 725 del Cód. Civ.—No se puede decir que el dueño de una propiedad pague parte del empedrado nuevo con la piedra vieja que se saca de la calle, porque esa piedra vieja que se extrae no puede ser el objeto de la prestación de parte del deudor. Por otra parte, si no es el empresario el que lleva la piedra sino la Municipalidad, con menos razón se puede alegar el pago, porque la prestación, si es que la hay, no la recibe la persona que debe recibirla—art. 731 del Cód. Civ.

1^b—Salvo las especificadas en el art. 95 del Cód. de Proc., las que á pesar de ser perentorias pueden oponerse en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento.

2—La excepción de falta de personería solo es dilatoria cuando se funda en la incapacidad del actor para estar en juicio. La excepción de falta de personería por carecer de derecho, no puede oponerse como dilatoria, porque declarada procedente, ella terminaría el pleito, siendo así que la excepción dilatoria solo produce el efecto de diferir la entrada al juicio, pero una vez sustanciado y resuelto, el pleito sigue su curso.

3—Entablada una acción reivindicatoria, el demandado opuso la excepción de prescripción treintenaria: sustanciada la excepción, el Juez la rechazó declarando procedente la acción reivindicatoria, lo que implica resolver sobre el fondo de la demanda. Las excepciones dilatorias, cuando se oponen en forma de artículo previo y son declaradas procedentes termina el pleito, pero siendo rechazadas queda la demanda en estado de ser contestada directamente y seguirse por los trá-



dilatatoria, no puede fallarse sobre el fondo de la causa.— Jur. Civ., tom. 5, pág. 416, Ser. 3ª.

1. **Excepción de prescripción**—La posesión quieta y pacífica por mayor término de 30 años, hace procedente esta excepción, sin que el demandado [deba justificar la existencia de buena fe ni de justo título.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 3ª.

2. **Excepción de prescripción**—Opuesta por el demandado por acción reivindicatoria, hace procedente la exoneración de las costas al actor.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 3ª.

3. **Excepción de prescripción**—La prueba de esta excep-

tes ordinarios. En el presente caso la excepción perentoria fué rechazada, declarándose procedente la reivindicación: esta última parte vicia de nulidad la sentencia, porque la resolución debió tan solo limitarse al rechazo de la excepción, mandando que se contestara directamente la demanda.

1.—Debe además ser continua, no interrumpida y á título de propietario. En el caso que nos ocupa, se presentaron títulos que acreditaban el dominio; el que presenta títulos tiene á su favor la presunción de su posesión desde la fecha de su título—art. 4003, Cód. Civ.—y puede unir su posesión á la de su antecesor. La posesión de largo tiempo, tanto por la antigua como por la moderna legislación, deja al poseedor al abrigo de toda gestión sobre su dominio, y en aptitud de defenderse con el hecho solo de la posesión sin necesidad de título ni de buena fe. Cuando se alega que la posesión ha sido interrumpida, esta circunstancia debe ser comprobada por el que la alega. En cuanto á la adquisición por prescripción treintenaria sin necesidad de buena fe ni de justo título, espresamente lo establecen los arts. 4015 y 4016 del Cód. Civ.

2.—Véase, verb. *Costas*, núm. 28.

3.—Los demandados exhibieron título y en este caso su derecho está amparado por la disposición del art. 4003 del Cód. Civ., que establece á favor del que presenta un título la presunción de que la posesión data desde la fecha del título. Pero en el caso que nos ocupa, se comprobó que la posesión había sido interrumpida, prueba que constaba de documentos públicos exhibidos en autos. El mismo poseedor al contestar una pregunta del pliego de posiciones dijo, que no le constaba



ción corresponde al escepcionante, pero la de que la posesión ha sido interrumpida, ó á nombre de otra, corresponde al que deduce la reivindicación.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 342, Ser. 4^a.

4. Excepción de prescripción—La falta de pronuncia-

que el absolvente y el reivindicante hubiesen poseído en común hasta poco tiempo antes de la demanda, el terreno materia de ella. Esa contestación demuestra que él no estuvo en posesión del inmueble, pues que si hubiese estado, no habría contestado diciendo que lo ignoraba. En mérito de ésto, el Juez de 1^a Inst. rechazó la excepción de prescripción. La mayoría de la Cámara, compuesta de los Dres. Bustos y Molina Arrotea, fué de opinión que la sentencia debía revocarse; y la minoría que la formaba el Dr. Gonzalez del Solar, votó por su confirmación. Aquélla se fundaba en que el título presentado por el escepcionante establecía la presunción de que lo posesión databa desde la fecha del título; que si el demandado no se encontraba en la época de la demanda en posesión de la cosa, y si esa posesión empezó desde la fecha del título, correspondía averiguar si esa presunción había sido destruida por la prueba contraria. Analiza esa prueba con el criterio propio del abogado que hace un alegato en favor de su parte, y termina diciendo que la interrupción de la posesión no ha sido comprobada. Este es uno de los fallos más injustos de los que hemos anotado: es una verdadera injusticia y para convencerse de ello, bastará estudiar no solo los fundamentos de la sentencia de 1^a Inst. que fué revocada, sino también los del Camarista Dr. Gonzalez del Solar quien entre otras cosas, después de aducir algunos fundamentos, dijo: «Bastaría con lo espuesto para el rechazo de la prescripción invocada por los demandados» y más adelante agrega: «De todos los antecedentes resulta plenamente evidenciado, que el demandado no ha poseído exclusivamente los terrenos cuestionados, si títulos de único dueño sino que esa posesión ha sido común.» Así continúa el Camarista, tratando con su voto, de evitar que se consumase una de las más grandes injusticias que registran los fallos, pero todo fué inútil, la mayoría indudablemente ya estaba hecha en el sentido de consumarla. Debe leerse este fallo para ver de lo que es capaz la Cámara. Esta sentencia clama al cielo por una reparación de la justicia escarnecida por la inconsciencia de los que la dictaron.

4.—La parte demandada que salió vencedora, opuso al alegar de bien probado y como para mayor abundamiento la excepción de prescrip-



miento del Juzgado, sobre esta excepción opuesta en el alegato, no puede fundar la nulidad de la sentencia alegada por la parte contra quien fué opuesta. —Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4^a.

Excepción de prescripción — Véase: *Cuenta presentada*, núm. 1 — *Carta de crédito*, núm. 1 — *Prescripción de diez años*, núm. 1 — *Prescripción de treinta años*, núms. 4 y 5 — *Prescripción como excepción*, núm. 1 — *Prescripción liberatoria*, núm. 1.

1^a. **Excepción de remisión** — Es improcedente si al tiempo en que tuvo lugar el acto que le sirve de base no existía deuda. — Jur. Civ., tom. 4, pág. 16, Ser. 4^a.

1^b. **Excepción dilatoria** — La falta de personería, si se relaciona que el Inferior no la tomó en consideración. El Juez *a quo* al estudiar la causa encontró elementos suficientes para rechazarla, y por consiguiente ha podido dejar de dictar la excepción de prescripción como innecesaria. El Juez tiene facultad para estudiar tan solo aquellos argumentos que considere bastantes para fundar su sentencia, y por esto dijo al final de uno de sus considerandos que conceptuaba innecesario estudiar las demás. No se puede decir que si la Cámara en contraria insuficientes los fundamentos del Juez *a quo*, se vería en el caso de fallar en única instancia respecto de dicha excepción, con violación de lo dispuesto en el art. 267 del Cód. de Proc., desde que autorizando el art. 3962 del Cód. Civ. que la prescripción pueda oponerse en cualquiera instancia y en cualquier estado del juicio hasta la sentencia que lo determine definitivamente, la disposición general del art. 267 es inaplicable á la prescripción. Pero aun dado el caso de que esta circunstancia fuese una causal de nulidad, lo sería tan solo siendo alegada por la parte á quien esa omisión hubiese perjudicado, pero en manera alguna para la contraparte, á quien ningún agravio le irroga.

1^a — La remisión supone necesariamente la existencia de la deuda remitida y la voluntad del acreedor manifestada espresamente, de perdonarla.

1^b — Entablada una demanda sobre escrituración, el demandado opuso la excepción dilatoria de falta de personería, diciendo que el terreno motivo del pleito no era de propiedad del actor. Las disposiciones de nuestra ley y la jurisprudencia constante de los Tribunales, han estable-



fiere al derecho del actor, no puede ser resuelta como dilatoria.— Jur. Civ., tom. 4, pág. 244, Ser. 3ª.

2. **Escepción dilatoria**— Las escepciones dilatorias solo pueden oponerse en el mismo escrito, ó después al contestar la demanda.— Jur. Civ., tom. 3, pág. 365, Ser. 4ª.

3. **Escepción dilatoria**— La falta de presentación de los documentos no puede fundarla.— Jur. Civ., tom. 7, página 32, Ser. 4ª.

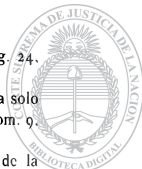
4. **Escepción dilatoria**— Resuelta la competencia como escepción dilatoria, no puede ser materia de decisión al

cido que la escepción dilatoria de la falta de personería, se dá contra aquel que se presenta en juicio gestionando los derechos de un tercero sin acreditar su legítima representación, ó contra aquel que se presenta en juicio sin estar en el pleno goce de sus derechos civiles. En el caso que nos ocupa, el actor demandaba por derecho propio, y no se le negó su capacidad para estar en juicio. La escepción dilatoria que se le opuso tendía á negarle acción para promover el pleito, lo que no puede hacerse sino contestando la demanda. Las escepciones dilatorias solo tienen por objeto dilatar el ingreso al juicio, pero no destruyen por completo la acción. Si los jueces se pronunciaron sobre el derecho del actor para instaurar su demanda, vendrían á resolver el juicio en definitiva en la forma y con los trámites de una escepción dilatoria, lo que sería á todas luces improcedente.

2—El art. 86 del Cód. de Proc. establece que á un tiempo y en un mismo escrito alegará el demandado todas las escepciones, y no haciéndolo así solo podrá usar de las que no alegase contestando la demanda.

3—Véase, verb. *Escepción de defecto legal*, núm. 16.

4.—La ley que permitiera dos oportunidades distintas para deducir una declinatoria de jurisdicción, carecería de plan y de desarrollo lógico. No es posible discutir la competencia de los jueces, por primera vez antes de contestar la demanda y otra al recibir la causa á prueba. La disposición del art. 87 del Cód. de Proc. debe entenderse en el sentido de que la competencia que se refiere es, ó un pronunciamiento sobre la escepción deducida en la oportunidad que determina el art. 86, ó una declaración del Juzgado tendente á evitar que en adelante pueda de oficio desprenderse del conocimiento del asunto. Cuando se rechaza la escepción de incompetencia opuesta como dilatoria, se declara así implícitamente que el Juzgado es competente para conocer en la



recibirse la causa á prueba.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 24, Ser. 4^a.

5. Escepción dilatoria—La de falta de personería solo puede fundarse en la incapacidad civil.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 26, Ser. 4^a.

6. Escepción dilatoria—La falta de presentación de la partida de bautismo que justifique el carácter de hijo natural, no puede fundar una escepción dilatoria.—Jur. Civil, tom. 3, pág. 33, Ser. 4^a.

Escepción dilatoria —Véase: *Escepción de falta de personería*, núm. -- *Recusación*, núm. 7.

1^a. Escepción potestativa—En esta escepción cuando es potestativa del demandado, no procede la condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 137, Ser. 3^a.

Escepción potestativa —Véase: *Costas*, núm. 18—*Cosa juzgada*, núm. 7—*Prescripción de treinta años*, núm. 1 y siguientes.

1^b. Escepciones—Rechazada la ejecución, las costas son á cargo del ejecutante, aun cuando se hayan declarado improcedentes algunas de las escepciones opuestas por el ejecutado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 74, Ser. 3^a.

demanda que se ordena contestar derechamente. No debe olvidarse por otra parte, que la resolución en este caso causa ejecutoria y pasa en autoridad de cosa juzgada.

5—O en la insuficiencia ó carencia de facultades en el apoderado. Véase el núm. 1.

6—Se opuso la escepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, fundándola en que el actor no había acompañado la partida de nacimiento para comprobar el estado de hija natural en que fundaba su acción. Si la demanda reúne todos los requisitos del art. 71 del Cód. de Proc., la falta de presentación de la partida, la de cualquier otro documento ó escritura en que se funde la demanda, no constituye un defecto legal de ella, porque esa omisión tiene su sanción legal en el art. 73. Esta es la jurisprudencia constante de la Cámara.

1^a Véase: verb. *Costas*, núm. 26, como asimismo el núm. 22.

1^b—Véase: *Costas*, núm. 20.



2. **Excepciones**—En el término de la prórroga concedida para contestar la demanda, no pueden oponerse excepciones sin contestarla. —Jur. Civ., tom. 3, pág. 50, Serie 4^a.

3. **Excepciones**—El escrito en que se opone excepciones, no puede considerarse como contestación al traslado de la demanda, aun cuando no se haga constar explícitamente. —Jur. Civ., tom. 3, pág. 397, Ser. 4^a.

4. **Excepciones**—Improbadas las excepciones procede su rechazo llevándose la ejecución adelante. —Jur. Civ., tomo 6, pág. 353, Ser. 4^a.

5. **Excepciones**—Reconocida por el actor la procedencia de las excepciones opuestas, corresponde su condenación en costas. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 84, Ser. 4^a.

6. **Excepciones**—Todo escrito en que no se conteste derechamente la demanda, importa oponer excepciones, aun cuando claramente no se determinen. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 42, Ser. 4^a.

7. **Excepciones**—Aun cuando el título de la ejecución

2—Una excepción previa fué opuesta fuera del término legal que asigna el art. 83, término declarado perentorio por el art. 46. Perdido ese derecho siempre puede oponer las excepciones contestando á la demanda—art. 86, última parte. —De modo que si se declara decaído el derecho para oponer excepciones con carácter de previo pronunciamiento, eso no inhibe al interesado para oponerlas contestando la demanda.

3—La Cámara había declarado que la petición importaba una excepción ó incidencia de la demanda.—Véase el núm. 6.

4—El demandado en la excepción se hace actor y le incumbe la prueba.—Ley 1^a, tít. 14, Part. 3^a; y Ley 8^a, tít. 3^o, Part. 3^a; art. 498 del Cód. de Proc.

5—Véase: *Costas*, núm. 51.

6—La ley no ha impuesto una forma sacramental para hacer presente que las excepciones se oponen como artículo de incontestación.

7—Vendida una propiedad en remate judicial se le intimó al com-



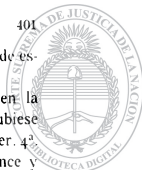
sea un auto consentido, procede la recepción á prueba de las escepciones opuestas. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 5, Serie 4ª.

8. **Escepciones** —La omisión del segundo traslado antes de resolverse las escepciones, no es causa de nulidad de la sentencia. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 28, Ser. 4ª.

9. **Escepciones** —Corresponde se dicte sentencia de reproductor oblara dentro del tercero día el precio de compra. Consentido el auto se pidió mandamiento: librado éste no fué pagado, oponiendo el ejecutado escepción de inhabilidad de título una vez citado de remate: el Juzgado declaró improcedente la escepción, porque ésta se fundaba en la ley de moratorias, la que no era aplicable al caso por no tratarse de obligaciones comerciales; y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 465, inc. 1º, y en el 498, ordenó se llevara adelante la ejecución. Se dijo de nulidad de la sentencia deduciéndose el recurso correspondiente. La Cámara declaró nula la sentencia fundándose en que ante los términos y alcance del auto que mandaba hacer la oblación, no podía sustentarse válidamente que no se trata de un juicio ejecutivo perfectamente bien caracterizado, teniendo en cuenta el procedimiento que se le había impreso: hecha la citación de remate, y opuesta las escepciones, lo correcto era abrir á prueba antes de dictarse sentencia si es que ellas son admisibles, pues de lo contrario el juicio adolece de nulidad por violación de las formas sustanciales del procedimiento. Así se declaró en el caso del sumario, porque el inferior debió proceder de acuerdo con el art. 490 en su última parte. Omitiéndose ese trámite la sentencia es nula —art. 237—Cualquier que sea el recaudo con que se instruye la demanda y que le sirve de base «no modifica su esencia ni las desaloja de las disposiciones que le son privativas. En tal concepto sus trámites ó modalidades deben ajustarse á las reglas que especialmente la regían y no á otras. Aunque sea manifiesta su analogía, porque los procedimientos son de orden público.

8—El art. 91 del Cód. de Proc. dice, que el juez *podrá* para mejor proveer correr un nuevo traslado por su orden, lo que implica que deja ese trámite librado al criterio del Juzgado, quien puede ó no hacer uso de ese derecho.

9—Un martillero cuya cuenta de comisión y gastos fué aprobada, pidió que el ejecutante le abonara dicha cuenta, fundándose en que el inmueble había sido adjudicado al acreedor por falta de postores. Citado de remate, el acreedor se presentó diciendo que se notificara al marti-



mate, si las observaciones no revisten el carácter de excepciones.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 12, Ser. 4ª.

10. **Excepciones**—Las regulaciones contenidas en la sentencia de remate son inapelables si no se hubiese opuesto excepciones.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 124, Ser. 4ª.

11. **Excepciones**—Consentida la sentencia de trance y remate, solo proceden contra ella las excepciones que la ley determina, las que se refieren al derecho que ella resuelve son improcedentes.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 194, Ser. 4ª.

12. **Excepciones**—La sentencia que no hace lugar á las excepciones opuestas á la ejecución de una sentencia es

llero ejecutante que debía ocurrir á cobrar sus honorarios al deudor primitivamente ejecutado, y que se rebajara la mitad de la cuenta del martillero por no haberse realizado la venta. Como se ve, estas peticiones no implican excepciones, pues no se determinaron con precisión de acuerdo con lo que establece el art. 487 del Cód. de Proc. Por otra parte, las defensas alegadas no podían incluirse entre ninguna de las excepciones establecidas como admisibles por el art. 488. En cuanto á la comisión cuya rebaja se pedía no era posible tomarla en consideración por cuanto la cuenta había sido ya aprobada, no siendo posible volver sobre la cosa juzgada.

10—La Cámara dijo que no siendo recurrible en lo principal la resolución, de conformidad con lo prevenido en el art. 501 del Cód. de Proc., tampoco puede serlo sobre la condenación en costas, que es accesoria, como lo tiene resuelto la Cámara en diversos casos. En su mérito se declaró bien denegado el recurso. Esta resolución no consulta los verdaderos principios que rigen la condenación en costas, la que está legislada en el Apéndice del Cód. de Proc. Hemos combatido constantemente la doctrina sentada en el sumario y felizmente á pesar de la jurisprudencia uniforme de la Cámara de lo Civil, esta ha vuelto sobre sus pasos en estos últimos tiempos, declarando la apelabilidad de los autos en los casos como los consignados en el sumario. De acuerdo con esto puede verse verb. *Costas*, núm. 50, donde se estudia el punto: como asimismo el núm. 60.

11—No es posible cuestionar el derecho que la sentencia resuelve por cuanto ese punto pasa en autoridad de cosa juzgada en virtud de la sentencia.



apelable, aun cuando no se haya producido prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 105, Ser. 4^a.

Excepciones.—Véase: *Cédula*, núm. 1—*Boleto de compra-venta*, núms. 17 y 32—*Alimentos*, núm. 10—*Notificación*, núm. 7.

1^a. **Excepciones perentorias**—El demandado puede, al contestar la demanda, oponer simplemente excepciones perentorias sin entrar al fondo, y los jueces están obligados á resolverlas al mismo tiempo que lo principal.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 371, Ser. 4^a.

1^b. **Escribano público**—Tiene derecho de retención de los títulos hasta tanto se le paguen los honorarios de la escritura otorgada.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 10, Ser. 4^a.

2. **Escribano público**—La afirmación del Escribano au-

1^a—De acuerdo con los fundamentos aducidos en la nota del verb. *Excepción dilatoria*, núm. 2.

1^b—Los Escribanos de Registro tienen la obligación de extender los actos y contratos que las partes les piden siempre que no sean contrarios á las leyes, sin que puedan escusarse de esta obligación bajo pena de responder por los daños y perjuicios que causen—art. 174 de la Ley Orgánica—Compelidos á trabajar para toda clase de clientela y para todo el que quiera ocuparlos, no se les puede escluir del derecho que acuerda el art. 3939 del Cód. Civ. á los tenedores de cosa ajena para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que le sea debido por razón de la misma cosa. Las condiciones requeridas por el art. 3940 concurren en el caso presente, y por consiguiente el derecho de retención procede.

2—El nombre de la persona era uno de aquellos sumamente comunes; se llamaba Gertrudis Correa. El oficial público autorizante da fe de la identidad de las personas que intervienen en el otorgamiento de una escritura, y esa atestación es de aquellas que por mandato de la ley hacen plena fe en juicio—art. 993 del Cód. Civ.—La prueba está siempre á cargo del que impugna un documento público, y ella no puede consistir, en el caso que nos ocupa, en la presentación de una partida que puede referirse á otra persona que llevara el mismo nombre y apellido, sino que esa prueba debe robustecerse con la identidad de una y otra persona, de aquella á que se refiere la partida de defunción y de aquella á que se refiere la atestación hecha por el Escribano. Debe tenerse



torizante de una escritura pública, sobre la existencia e identidad del compareciente, no puede ser enervada por una partida de defunción que pueda corresponder a un homónimo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4ª.

Escribano—Véase: *Testamento*, núm. 3—*Conocimiento*, núm. 1—*Ejecución hipotecaria*, núm. 1.

1. **Escribanos**—Inscriptos en la matrícula durante los meses de Enero y Febrero de 1890.—Jur. Civ., tom. 1, págs. 33 y 380; durante el mes de Marzo del mismo año, tom. 3, pág. 102; durante el mes de Abril, tom. 4, página 253; Mayo del mismo año, tom. 5, pág. 258, todo de la Jur. Civ., Ser. 3ª; durante el mes de Junio de 1890, tomo 7, pág. 164, Ser. 3ª; durante el mes de Junio de 1891, tomo 4, pág. 267, Ser. 4ª; durante Julio del mismo año, tom. 5, pág. 125, Ser. 4ª; durante Agosto, tom. 5, página 425; durante Set., tom. 7, pág. 80; durante Octubre, tom. 8, pág. 72; durante Nov., tom. 9, pág. 48; durante Dic., tom. 9, pág. 89, todos del mismo año 1891 y de la misma Ser. 4ª; durante Enero de 1892, tom. 9, pág. 152, Ser. 4ª, Feb., tom. 9, pág. 275; Marzo, tom. 10, página 122, Abril, tom. 10, pág. 336, todos del año 1892 y de la misma Ser. 4ª.

2. **Escribanos**—De registro, pueden sacar de las secretarías bajo constancia, los expedientes en que deban otorgar escritura.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 253, Ser. 3ª.

3. **Escribanos**—De Registro, los informes de las oficinas presentes además, que la persona de quien se trataba había intervenido con posterioridad a la fecha del fallecimiento, según la partida de defunción, en actos judiciales llevados a cabo por la presunta muerta.

2—El término por el cual se entregarán los expedientes, en este caso, no excederá de quince días. Si vencido el término el Escribano no devuelve el expediente, dará cuenta de ello el actuario al Juzgado, el cual intimará su inmediata devolución bajo los apercibimientos de derecho.

3—Véase, verb. *Administración*, núm. 1.



nas públicas ya sean de la administración, ó ya de las escribanías de Registro, son pruebas que ofrecen más garantías de exactitud que la pericial cuando se trata del precio de terrenos sin edificio.—Jur. Civ., tom. 7, página 220, Ser. 3^a.

1. **Escrito**—Aun cuando se haya admitido y proveído el escrito de contestación á la demanda, debe ordenarse su devolución si fué presentado fuera del término y existía rebeldía acusada.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 54, Serie 3^a.

2. **Escrito**—Acusada rebeldía, procede la devolución del escrito presentado después del vencimiento del término que la ley concede para evacuar el traslado.—Jur. Civil, tom. 3, pág. 97, Ser. 3^a.

3. **Escrito**—Aun cuando no se hayan acompañado las copias, si el escrito fuese recibido por el Secretario, no puede tenerse por no presentado.—Jur. Civ., tom. 5, página 376, Ser. 4^a.

4. **Escrito**—El secretario no debe recibir escritos sin las copias respectivas y en caso de que aquéllos se pre-

1—Puede verse, de acuerdo con la resolución, el tom. 3^o de la Instituta, verb. *Rebeldía*, núms. 4 y 5. En contra, véanse los núms. 1 y 8.

2—Véase el número precedente.

3—El art. 21 del Cód. de Proc. en su segundo aparte dice, que si no se exhibiesen las copias, el secretario no recibirá el escrito produciendo el efecto de no presentado: de donde resulte que recibíendose el escrito aunque no se acompañen las copias, debe tenerse por presentado. Esta jurisprudencia debe reformarse porque no interpreta correctamente el art. 21 citado; la hemos combatido constantemente como puede verse en el tom. 4^o, Inst., verb. *Copias*, núm. 1.

4—Estamos conformes en cuanto á la primera parte del sumario, pero no así en cuanto á la segunda. El art. 21 del Cód. de Proc. es imperativo en su mandato, y la Cámara no tiene la facultad de autorizar á los secretarios que violen ese precepto claro y terminante de la ley, como lo hemos sostenido en el número precedente.



senten sin éstas debe hacerlo constar en el cargo.—Jur. Civ., tom 5, pág. 376, Ser. 4^a.

5. **Escrito**—No puede tenerse por no presentado un escrito recibido por el secretario, aun cuando no se hayan acompañado las copias.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 367, Ser. 4^a.

6. **Escrito**—Vencido el término para contestar la demanda, procede la devolución del escrito presentado después de acusada la rebeldía. Jur. Civ., tom. 5, pág. 95, Ser. 4^a.

7. **Escrito**—La interrupción del término permite la presentación del escrito desde que aquélla cese, aun cuando no se hubiese concedido la prórroga solicitada.—Jur. Civil, tom. 7, pág. 47, Ser. 4^a.

8. **Escrito**—La falta de firma de la copia, no basta para dar por no presentado el escrito si el secretario lo recibe sin observación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 136, Ser. 4^a.

9. **Escrito**—La recusación con causa debe presentarse en cada uno de los litigios, no basta un escrito para todos

5—Véanse los números precedentes.

6—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 45 del Cód. de Proc.

7—Solicitada la prórroga de un término no se hizo lugar, pero se declaró que la parte tenía derecho a presentar el escrito dentro del término que aun faltaba, para completar el acordado por la ley. De manera que, si un litigante pide a los seis días de conferido el traslado de la demanda, una prórroga de nueve días más para evacuar el traslado, y si esa prórroga no se le concede, siempre tiene derecho a contestar la demanda dentro de los tres días que le faltan para completar los nueve que la ley acuerda, debiendo empezar a contarse nuevamente el término después que el incidente sobre prórroga quede terminado.

8—Véase: verb. *Copia*, núm. 1.

9—Teniendo en cuenta la diversa naturaleza de los juicios, pueden ser también distintas las resoluciones del Tribunal en cada uno de ellos, debiendo por consiguiente deducirse la recusación separadamente para que en cada caso recaiga la respectiva resolución.



los que existen pendientes del Juzgado.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 133, Ser. 4ª.

10. Escrito—No pudiendo comprobarse la fecha cierta de su recepción por el secretario, debe estarse á la del documento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 93, Ser. 4ª.

11. Escrito—No puede ser devuelto el escrito en que se evacua el traslado de los documentos acompañados, aun cuando contenga apreciaciones sobre ellos.—Jur. Civil, tom. 10, pág. 296, Ser. 4ª.

12. Escrito—Presentado después de acusada rebeldía, debe ser devuelto.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 330, Ser. 4ª.

13. Escrito—Los secretarios no deben dar curso á los escritos que tengan claros.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 80, Ser. 4ª.

Escrito— Véase: *Apercibimiento*, núm. 2—*Posiciones*, núm. 24—*Testamento*, núm. 3—*Desacato*, núm. 2—*Excepciones*, núms. 3 y 6—*Término perentorio*, núm. 1—*Término suspendido*, núm. 1—*Notificación*, núm. 9—*Ape-
lación de hecho*, núm. 1—*Rebeldía*, núms. 5, 6, 7 y 15—*Recusación*, núms. 1 y 18.

1. Escritura—La cláusula de otorgarse ésta si los titulos no tuviesen defecto alguno, solo puede entenderse en favor del comprador.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 193, Ser. 3ª.

10—Se trataba de un oficio recibido en una Secretaría sin poderse saber en qué fecha: se resolvió, que debía considerarse como presentado en la fecha que llevaba el oficio. Al resolver así, se tuvo en cuenta la amplitud de la defensa á la que debe estarse en caso de duda.

11—Véase: verb. *Documentos*, núm. 12.

12—Véase el núm. 6.

1—Porque dicha condición á nadie favorece sino al comprador, y su aceptación depende de su voluntad: ella constituye el hecho futuro é incierto determinante de la condición. La mala calidad de los títulos autoriza al comprador á desistir de la compra, pero no autoriza á pro-



2. **Escritura**—La prueba del error, dolo, ó fraude, á fin de declarar la nulidad de la escritura, corresponde al que deduce la acción.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 296, Ser. 3^a.

3. **Escritura**—Debe entender en el juicio sobre otorgamiento de la escritura, el Juez que conoció en el espediente en que fué ordenado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 384, Ser. 4^a.

4. **Escritura**—El reconocimiento judicial de que la es-

ceder del mismo modo al vendedor, lo que prueba evidentemente que la condición está establecida por la ley á favor del comprador, como se desprende de la disposición del art. 522 del Cód. de Proc.

2—Esta prueba corresponde no solo en virtud del principio general de que la prueba incumbe al que alega un hecho nuevo en juicio—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a—sino en virtud de que una escritura pública tiene á su favor la presunción de verdad de sus cláusulas hasta que sea argüida de falsedad.

3—Porque el segundo juicio no importa promover uno nuevo ajeno á la tramitación del primero desde que solo se persigue el cumplimiento de éste.

4—El actor se presentó diciendo que la manifestación que habia hecho en la testamentaria de su señor padre declarando que una casa que estaba á su nombre debía de estar á nombre de éste, era un error de su parte por ser contraria á la verdad, pues dicha propiedad era del compareciente, pagada con su dinero ganado con su trabajo personal, por lo que pedía se le diese por desistido de la primera declaración. A esto se opusieron los demás herederos. La petición formulada por el actor solicitando se le diese por desistido de la manifestación hecha por él, importaba una nulidad de ese acto jurídico, fundada en el error que decía haber incurrido. El reconocimiento hecho es un acto bilateral perfectamente concluido, pues habia sido aceptado por los demás coherederos. Ese acto jurídico creó derechos y obligaciones que no podían dejarse sin efecto por la sola voluntad de una de las partes que han concurrido á realizarlo. Los coherederos tienen derecho para emplear los medios legales á fin de que el deudor cumpla con lo que se obligó—art. 305, Cód. Civ.—Ese reconocimiento reúne los requisitos exigidos por los arts. 718 y siguientes, y produce todos los efectos legales mientras no se declare su insubsistencia ó nulidad. Por otra parte, el actor al decir que el reconocimiento habia hecho por error,



critura de propiedad de una finca era simulada, solo puede ser revocada por la existencia de los vicios que la ley estatuye para la revocación de los actos jurídicos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 370, Ser. 4ª.

Escritura—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 7—*Derechos hereditarios*, núm. 3—*Comprador judicial*, núm. 1—*Hijo natural*, núm. 10—*Escribanos*, núm. 2—*Posesión judicial*, núm. 2.

Escritura de adquisición—Véase: *Bienes*, núm. 4.

Escritura de cesión—Véase: *Cesión de derechos hereditarios*, núm. 1—*Nulidad de una escritura pública*, núm. 2.

1ª. **Escritura de compromiso**—Forma parte integrante del laudo arbitral, y siempre que se pretenda su ejecución omitiendo la presentación de la primera, la excepción de falsedad de la ejecutoria es procedente aun cuando no se haya interpuesto recurso ni deducido acción contra el segundo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 160, Ser. 4ª.

1ª. **Escritura de donación**—Para la validez de la donación, aunque comprenda todos los bienes del donante, basta justificar que retuvo el usufructo, sin que sea requi-

no manifestó en qué consistía éste, ni si era de hecho ó de derecho. La naturaleza del asunto hace imposible el error invocado, pues se trata de un acto jurídico por el que se reconoce que la propiedad de una casa cuyo titulo está á nombre del declarante pertenece á la sucesión del padre. Si el error fuese de derecho no podría ser invocado por él para impedir los efectos legales del acto—art. 923, Cód. Civ.—y tampoco si el error fuese de hecho, porque en tal caso su ignorancia, respecto del verdadero estado de las cosas, provendría de una negligencia culpable.—art. 929 del Cód. Civ.—El actor no provó ni siquiera trató de probar el error alegado, como era de su deber.—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

1ª Véase: *Excepción de falsedad*, núm. 1.

1ª Véase: verb. *Donación*, núm. 1.



sito indispensable que esa prueba resulte de la escritura de donación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 403, Ser. 3ª.

Escritura de donación—Véase: *Incapacidad*, núm. 1. *Condiciones impuestas*, núms. 1 y 2. *Donación*, núm. 5.

1ª. **Escritura de préstamo**—Es procedente la excepción de inhabilidad, si la ejecución hipotecaria se funda en un certificado del escribano ante el cual se otorgó la escritura de préstamo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 226, Ser. 3ª.

1ª. **Escritura de venta**—Para la validez del acto no es requisito esencial que la escritura de venta de derechos y acciones á un inmueble determinado, contenga todas las cláusulas que la ley fija para la venta directa del mismo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 181, Ser. 4ª.

Escritura de venta—Véase: *Mandatario*, núm. 12—*Pacto de retroventa*, núm. 2—*Inscripción*, núm. 1.

1ª. **Escritura pública**—Cuando la ley requiere para de terminados actos la solemnidad de la escritura pública, surte los mismos efectos y tiene igual fuerza la presentación de la transacción al juez de la causa.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 111, Ser. 3ª.

2. **Escritura pública**—Para que exista la obligación

1ª—Véase: verb. *Ejecución hipotecaria*, núm. 1.

1ª—De acuerdo con la jurisprudencia sentada en casos análogos. Véase: verb. *Cesión de derechos*, núm. 1.

1ª—Se trataba de la renuncia de derechos hereditarios que excedían de mil nacionales y que el Cód. Civ. exige sea hecha por escritura pública bajo pena de nulidad—art. 1184, inc. 6ª—El Dr. Llerena al ocuparse del inc. 8 del mismo artículo, trae consideraciones que son aplicables al inc. 6ª, por ser una misma la razón de las dos disposiciones, y sostiene que si la transacción versa sobre derechos litigiosos que se relacionan con un inmueble, presentándose la transacción firmada por las partes, el acto queda perfectamente válido sin necesidad de escritura pública—Concordancias al Cód. Civ., tom. 2, pág. 212.

2 Se trataba de un contrato de locación celebrado, según el actor, por correspondencia epistolar. Se resolvió que hubo contrato por cuanto



de elevar á escritura pública el contrato, es indispensable justificar que hubo acuerdo de voluntades.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 278, Ser. 3^a.

3. **Escritura pública**—El vendedor debe otorgar la del contrato de compraventa constante de instrumento privado, bajo pena de ser condenado en las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3^a.

4. **Escritura pública**—Reconocida la existencia del contrato de compraventa en instrumento privado, procede su reducción á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 6, página 188, Ser. 3^a.

5. **Escritura pública**—La existencia del mandato para

las partes no se pusieron de acuerdo en el precio, requisito indispensable para que este contrato exista—art. 1493, Cód. Civ.—No puede obligarse á que se eleve á escritura pública un contrato que no existe.

3—Arts. 1185 y 1187 del Cód. Civ.

4—Art. 1185 del Cód. Civ. Se pidió la escrituración del inmueble cuya venta se había concertado en un boleto privado de compraventa. El juez falló condenando al demandado á que «otorgue escritura de venta del terreno á que se refiere el boleto, bajo apercibimiento de resolver la obligación en pérdidas é intereses.» La Cámara confirmó esta sentencia en contra de la jurisprudencia constantemente sentada por ella misma en la que sostiene que un boleto privado de compraventa no puede fundar una demanda de escrituración del inmueble, sino que debe pedirse primeramente la escrituración del boleto para después exigir la escrituración del inmueble. El principio establecido en el sumario es el correcto. Véase en contra, el núm. 7 y su nota, donde combatimos la doctrina contraria al sumario, que es la que hoy sostiene la Cámara.

5—Esta resolución está de acuerdo con otra dictada por esta misma Cámara. Véase: Inst., tom. 3, verb. *Mandato*, núm. 1. El art. 1184 establece en su inc. 7^o que los poderes generales ó especiales deben ser hechos en escritura pública, cuando tengan que presentarse en juicio, así como los poderes que se otorgan para administrar bienes y cualesquiera otros que tengan por objeto un acto redactado ó que deba redactarse en escritura pública. Freitas, explicando el art. 2892 de su Proyecto, dice: «Este Código exige procuración por instrumento público siempre que el objeto del mandato fuere cualquier de los actos para



la compra de inmuebles, solo puede justificarse presentando la escritura pública en que se constituyó.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 199, Ser. 3ª.

6. **Escritura pública**—El contrato sobre arrendamientos de inmuebles, puede ser hecho por instrumento privado, no siendo requisito esencial para su existencia y validez su otorgamiento por escritura pública.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 3ª.

7. **Escritura pública**—Cualesquiera que sean las con-

los cuales la ley decreta exclusivamente ó bajo pena de nulidad la forma de la escritura pública». El Dr. Llerena, en sus Comentarios á nuestro Código, estudiando el art. 1184 sienta el principio de que la prueba de la existencia del mandato está sujeta á las reglas establecidas para la prueba de los contratos en general. El art. 1184 concuerda con el 1191 y puede decirse que éste es el complemento de aquél.

6—El art. 1184 del Cód. Civ., que exige escritura pública bajo pena de nulidad, solo se refiere—inc. 7º—á los contratos de transmisión de inmuebles ó que versan sobre gravámenes que se constituyen sobre los mismos. Véase: verb. *Arrendamiento*, núm. 1.

7—Este sumario está en contra del núm. 4. Allí se ordenó la *escritura del inmueble* materia del contrato contenido en documento privado, mientras que aquí se niega el derecho de la parte para exigir la misma cosa, y se obliga en primer término á *reducir á escritura pública el boleto*, para después pedir la escrituración del inmueble. Es una doctrina novedosa la sentada por la Cámara en este sumario. El caso es el siguiente: Se demandó la escrituración de una casa adquirida en virtud de un boleto privado que decía testualmente: «Recibí del señor N. la suma de 5000 \$ al contado, en pago del precio de un chalet de mi propiedad, que se lo he vendido en esa suma, reservándome el derecho de retrotraer la finca en el plazo de dos meses á contar desde el 15 de Octubre, debiendo escriturar la propiedad en el término de seis días perentorios, y si no lo hiciera espontáneamente queda autorizado el comprador para hacerla firmar judicialmente y sin forma ninguna de juicio, pues con su sola presentación bastará para consumir esta escrituración por el Registro del Escribano Roverano. Para no hacer lugar á la escrituración del inmueble, la Cámara dijo, que demandándose como se demanda la escrituración definitiva del inmueble, es indubitante que el acreedor atribuye al documento el alcance y efectos jurídicos de una



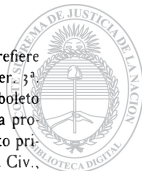
diciones que hubiesen estipulado las partes en el con-

venta con pacto de retroventa, con la sola reserva de que la espiración del plazo estipulado no la convertiría en venta definitiva sino mediante la formalidad consignada al final del boleto. Ahora bien, es de precepto estricto que los contratos que tuvieren por objeto la trasmisión de inmuebles en propiedad ó usufructo ó alguna obligación ó gravamen sobre los mismos, deberán ser hechos en escritura pública bajo pena de nulidad, como también que en el caso en que la forma del instrumento público fuese exclusivamente ordenada, la falta de ella no puede ser suplida por ninguna otra prueba, siendo igualmente nulo el acto - arts. 976 y 1184 del Cód. Civ.-- Es, pues, fuera de discusión, que el instrumento transcrito no sustituye la escritura pública exigida como condición sustancial para la existencia y eficacia del acto jurídico, en cuya situación no puede juzgarse concluida válidamente la retroventa con los efectos pretendidos por la demanda. Ese instrumento solo acredita la existencia de una convención cuyas consecuencias han sido previstas y determinadas por la ley. Los contratos que debiendo ser hechos por escritura pública, dice el art. 1185, fuesen hechos por instrumento particular en que las partes se obligasen á reducirlo á escritura pública, no quedan concluidos como tales, mientras la escritura pública no se halle firmada; pero quedarán concluidos como contratos en que las partes se han obligado á hacer escritura pública. De ninguna manera podría, pues, atribuirse á la obligación contenida en el documento de la referencia, otro carácter del que le atribuye el artículo recordado; el contrato de retroventa no ha quedado perfecto, no ha sido definitivamente concluido, no ha tenido en resumen existencia legal, porque le han faltado las formas externas, la solemnidad de la escritura pública. Ha quedado solo concluido como contrato en que las partes se obligan á hacer escritura pública, y de este punto de mira es perfectamente arreglado lo que se observaba por la parte demandada, de que lo único que podía pedir el demandante era la escrituración del contrato de venta con pacto de retroventa. No es justo por cierto pretender que un acto puramente privado tenga la eficacia y produzca los efectos exclusivamente reservados á los instrumentos públicos. Hasta aquí la argumentación de la Cámara. Podemos afirmar sin temor de equivocarnos, que en presencia de los arts. 1185 y 1187 del Cód. Civ., la parte que firma un boleto privado de compraventa, tiene el derecho evidente de exigir que ese contrato se cumpla haciéndose la escritura pública de transferencia del inmueble, materia del contrato; y que su derecho no está limitado á exigir la escrituración del boleto. La comprobación de este principio



trato privado, solo pueden hacerse efectivas después de

es tan sencilla como la de todas las verdades. El contrato de compraventa no se constituye, jurídicamente, por otros elementos que los expresados en la definición del art. 1323: obligación de una parte de transferir á otra la propiedad de una cosa, y de la otra parte la de recibirla y pagar por ella un precio cierto en dinero, ó según la fórmula concisa y antiquísima: cosa, precio, consentimiento. Pero una cosa es el contrato y otra la prueba del contrato. La primera idea es de orden esencialmente jurídico: la segunda corresponde al orden político, en el amplio sentido de esta palabra, de organización social. Es conveniente á una buena organización, evitar la incertidumbre y la disputa sobre la existencia de los actos de que nacen derechos y obligaciones, y todos los actos serían sometidos á la prueba auténtica si las demoras de esta formalidad no constituyeran un verdadero entorpecimiento en la actividad social. De aquí que sea muy limitado el número de casos en que la ley lo exige terminantemente, bajo pena de nulidad. Cuando se celebra la compraventa de un inmueble, sin que intervenga la escritura pública, el contrato queda concluido en su esencia jurídica: una de las partes se obliga á transferir á otra la propiedad de una cosa, y la otra á recibirla y á pagar el precio. Nada impide que se principie á cumplir ó que se cumplan estas obligaciones con la tradición real de la cosa y con el pago del precio. Pero interviene la exigencia de la ley: se requiere para la conclusión de este contrato la escritura pública que lo pruebe. ¿Nada valdrá entre tanto, aquel consentimiento sobre la cosa y sobre el precio, que puede haber llegado hasta la ejecución misma de las obligaciones del contrato? ¿El requisito formal será tan absoluto que impida entre los contratantes la formación de todo vínculo jurídico? ¿No! El sentimiento de la justicia interviene para reconocer que la prueba del acto, aunque sea requerida esencialmente para su validez, no es de la esencia jurídica del contrato, que la libertad civil de comprar y vender no está restringida á tal punto que sean palabras absolutamente vanas, todo lo que se haya dicho sobre el contrato antes de la escritura pública. Ninguno de los contratantes puede decir al otro: esto que hemos contratado nada vale, y yo no lo cumplo, cualquiera que sea el perjuicio que tú recibas. La ley reconoce que cuando las partes han concluido el contrato en su esencia jurídica, se han comprometido implícitamente á darle la forma requerida por la ley; que mientras no esté cumplida la forma no podría exigirse el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato, pero podría requerirse el cumplimiento de la forma. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de tal obligación? Es indis-



reducido á escritura pública, si la convención se refiere á bienes inmuebles.— Jur. Civ., tom. 7, pág. 72, Ser. 3^a.

8. **Escritura pública**—El plazo estipulado en un boleto privado para hacer uso del derecho de retrotraer la propiedad solo puede contarse desde que el instrumento privado quede convertido en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 72, Ser. 3^a.

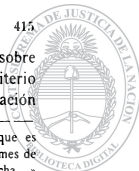
9. **Escritura pública**—Reconocida la autenticidad del boleto promesa de venta, procede su conversión á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 248, Ser. 3^a.

10. **Escritura pública**—Los blancos que pueden existir tíblemente una obligación de hacer; debe pues, hacerse la escritura pública de la compraventa. El sentimiento de lo justo queda satisfecho con esto: el que contrató privadamente la compraventa del inmueble no sufrirá perjuicio alguno si el contrato no se cumple. Esto es lo que consagran esplicitamente los arts. 1185 y 1187 del Cód. Civ. Cuando el primero dice: «los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública fuesen hechos por instrumento particular» la ley no les desconoce el carácter de contratos, y de contratos ya hechos. Cuando agrega que «no quedan concluidos como tales mientras la escritura pública no se halle firmada» la ley no les niega toda existencia, sino que aplaza su perfección hasta que esté firmada la escritura. Cuando termina que «quedarán concluidos como contratos en que las partes se han obligado á hacer escritura pública,» hubiera sido siempre superfluo decir qué escritura pública era la que tenía que hacerse, porque según nuestra opinión jamás pudo ocurrírsele al más sutil de los legisladores creer que se dudara que con sus palabras se refería á otra escritura pública que á la que faltaba para que el contrato quedara perfecto. Véase: verb. *Condominio*, núm. 6, donde la Cámara sienta una teoría de acuerdo con la que sostenemos en este caso.

8—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 9.

9—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 30.

10—La ley 111, tit. 18, Part. 3^a, enumera las causas por las cuales los jueces pueden desechar ó tener por nulas las escrituras que se presenten ante ellos: la una es, dice, «si la carta fuere tal que non se pueda leer, nin tomar verdadero entendimiento della.» La otra es, «si fuese raida ó ouiesse letra cambiada ó desmentida en el nome de aquel que manda fazer la carta, o que la da, o del que la recibe o en el tiempo



en una escritura pública en partes no esenciales sobre el acto, no afectan su validez, pues la ley deja al criterio de los jueces, si ellas pueden dar lugar á la declaración

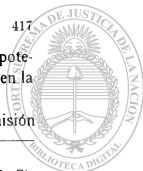
del plazo, o en la quantia de los maravedís, o en la cosa sobre que es fecha la carta, o en el día, o en el mes, o en la era, o en los nombres de los testigos o del Escriuano, o en el nombre del lugar do fué fecha....» De donde resulta que aun cuando las omisiones que contuviere una escritura constituyesen en realidad un defecto ó acusaran una informalidad no afectando sin embargo la sustancia del acto, en manera alguna la viciarían de nulidad. Los comentadores de la ley citada previenen que no son nulas las escrituras cuando los espresados vicios recayeran en alguna parte no esencial de ellas, no alterasen el sentido en lo sustancial del acto, en la data del mismo, en los nombres de los otorgantes, ni en los de los testigos ó del Escribano; y este comentario tiene como fundamento primordial pasajes de la misma ley, que hacen manifiesto su espíritu aunque varíe en el texto de sus divulgadores. La ley 7 de la misma Part. 3ª, y 13, tit. 25, lib. 4ª, R. C., que corresponde á la ley 1ª, tit. 23, lib. 10, Novísima Rec., no se oponen al principio sentado en el sumario. Manda la primera que «los escribanos de la corte, de las ciudades y villas deben escribir cumplidamente sus escritos y no por abreviaturas por guardar que non venga yer nin contienda en sus escritos.» La inteligencia de esta disposición la esplican los mismos ejemplos del testo... «que non ponga una letra por nombre de ome o de mujer—assi como A. por Alfonso, nin en los nombres de los lugares nin en cuenta de auer o de otra cosa assi con C. por ciento.» La escritura cuya validez estaba en tela de juicio tenia blancos, pero no se referían ni á los nombres de los contratantes, ni al lugar del otorgamiento, ni al precio de la cosa, ni á ninguna otra formalidad sustancial, sino á una enunciación que no comprometía la eficacia ni la seriedad del acto; estando claramente determinada la cosa en cuanto á la ubicación, rumbo, linderos, etc. En cuanto á la ley de Rec. citada, ella enumera el conjunto de las solemnidades que deben revestir los instrumentos públicos, y aunque más minuciosa y exigente que la de Partida, á la cual complementa, tampoco va más allá de las exigencias de aquella en cuanto á requisitos necesarios para la validez jurídica del acto. Del texto de las leyes citadas, de su comentario y de su razón filosófica, resulta que no todas las omisiones ni todos los defectos irritan los instrumentos expedidos por oficiales públicos á cuyo resultado no podría llegarse sino cuando tales defectos ú omisiones comprometieran ó alte-

de nulidad del título, pero no á la del acto que le dió origen y que puede ser probado por otros medios.

—Jur. Civ., tom. 2, pág. 249, Sér. 4ª.

... raran el objeto del acto jurídico, la calidad ó naturaleza de sus prestaciones, la voluntad de las partes ó cuando fuesen finalmente el resultado de la comisión de un dolo ó de un fraude derivado de cualquiera de los otorgantes, del escribano, ó de un tercero. Y son únicamente los defectos sustanciales los que de pleno derecho pueden afectar la integridad del instrumento, quitarle su fuerza, viciarlo, destruirlo, anularlo en su esencia y en sus efectos jurídicos. Hay un interés positivo de conservación social en mantener á las convenciones humanas su durabilidad y su firmeza. El Código Argentino ha incorporado sin vacilaciones estos principios á la letra de sus preceptos, siendo su fórmula más saliente la del art. 989, con la particularidad que la ley actual es más rigurosa que la antigua ley en cuanto á las ritualidades que deben rodear los actos por instrumento público. Son anulables, dice el artículo, los instrumentos públicos cuando.... tuviesen enmiendas, palabras entrelineas, borraduras ó alteraciones en partes esenciales, como la fecha, nombre, cantidades, cosas, etc., no salvadas al fin. Nuestro lejislador ha dejado, como se ve, al arbitrio ó prudencia de los jueces la sana apreciación de estos vicios, arbitrio que tiene su límite espresamente determinado—en parte esencial del instrumento—y aunque la disposición parece inspirada por el art. 702 del proyecto de Freitas para quien los defectos deben recaer además en lugar sospechoso, es fuera de duda—véase la nota ilustrativa—que no ha sido extraño á su espíritu el siguiente pasaje de la ley 111 á que hemos hecho referencia.... «pero si la roedura ó la letra fue hecha ó canmiada ó dexada por yerro del escriuano, ó fuere en otro lugar de la carta que non se canmie y por la razón que non deua dubdar en ella el judgador ó otro ome sanio fuese fecho a mala parte.... degimos que non deue ser desechada por ende.» Entre los autores franceses que sostienen la doctrina que es universal; —Aubry y Ran dicen... que la ley quiere que las escrituras sean escritas en un solo y mismo contexto, que sean legibles, sin abreviaturas, blancos, lagunas, ni intervalos y sin enmiendas, interlineas ni adición en el cuerpo del acto; pero la inobservancia de estas prescripciones solo provoca una multa contra el notario, careciendo en general de influencia sobre su validez. Bonnier que es sin disputa el que más ha profundizado la materia, enseña que el mero hecho de dejar blancos en una escritura autorizada por notario, no lleva consigo nulidad—tom. 2, pág. 47.





11. **Escritura pública** --La cesión de un crédito hipotecario constituido en escritura pública, debe hacerse en la misma forma—Jur. Civ., tom. 3, pág. 403, Ser. 4ª.

12. **Escritura pública**—Para la validez de la transmisión

11—Véase: *Crédito hipotecario*, núm. 1.

12—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase, verb. *Bienes raíces*, núm. 2. Nuestras antiguas leyes prescribían en determinados pasajes, que los contratos inmuebles debían ser reducidos á escritura pública, pero con ninguna de sus disposiciones podría hacerse argumento contra la subsistencia del acto, á virtud de que aquella solemnidad no era exigida, como lo es en el derecho contemporáneo, como condición esencial á la validez de la transmisión. La Ley de Partida no apareja nulidades, ni en su inteligencia, ni en su letra, ni en la glosa de sus intérpretes. Caravantes opina que no se considera que ella tenga por objeto dar validez al contrato ni á su perfección y consumación, sino que se entiende como refiriéndose á los efectos del mismo, á saber, que debiendo tomarse razón de esta escritura en la Contaduría de Hipotecas, en el plazo señalado por las leyes administrativas, se evitan los fraudes de los que venden lo que no pueden, y se consigue que se asegure el pago de los tributos que pesan sobre la traslación de la propiedad inmueble—nota á Bonnier, tom. 1º, pág. 168.—El mismo Código de Partidas autoriza las ventas de bienes raíces sin la formalidad de la escritura pública, cuando establece que el contrato puede hacerse de dos maneras: con carta y sin ella—Ley 6ª, tit. 5ª, Part. 5ª.—De la disposición general de esta ley se deduce, según sus comentadores —edición de 1843—que los bienes raíces pueden venderse de palabra y por correspondencia como las cosas muebles, disposición que se halla reproducida en la Ley 23 del mismo título y aunque obsta al parecer la ley 56, tit. 18, Part. 3ª donde se lee, «vendidas fazen los omes entre si: e porque aquello que pusieren sea firme; fazen ende carta»; estas palabras pueden naturalmente tomarse como dirigidas á indicar, no una circunstancia esencial, sino un medio de impedir la inejecución del contrato por falta de prueba. Obsérvase en el mismo pasaje, que como en las leyes sobre alcabalas se parte siempre del supuesto que el acto se ha verificado por escritura pública, podría inferirse con algún fundamento que se miró como ley la general costumbre de aquella formalidad ó que se quiso que se ejecutase así en lo sucesivo; obra no obstante en contrario la autoridad de Antonio Gomez, el cual á pesar de escribir posteriormente á las citadas leyes, dice que la escritura no es

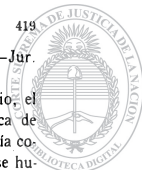


de derechos reales, antes de la vigencia del Código Civil, no era requisito esencial la escritura pública.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 56, Ser. 4^a.

13. **Escritura pública**.—Es requisito indispensable para la validez de toda cesión ó venta de derechos hereditarios

de la esencia del contrato de compraventa. En cuanto á las leyes de Recopilación no imponen la solemnidad de la escritura como ineludible á la validez del acto. Sus disposiciones preceptivas tienen como fin primordial, según su propio texto y la jurisprudencia de los tribunales españoles, asegurar el pago de los impuestos fiscales é impedir el fraude ó daño que resultaría para el estado con la ocultación de la venta de bienes raíces. Refiriéndose á estas dos leyes, las de Partida y las Recopiladas, el conocido espositor español Gutierrez Fernandez dice—tit. 4^o, pág. 275—sin desconocer la conveniencia de la escritura de la adquisición de cosas inmuebles, se pregunta de qué manera debe intervenir este requisito, si como prueba ó como solemnidad, espresando que la cuestión es sencilla y que el legislador no ha podido exigir la escritura como solemnidad sustancial de este género de contratos, arrancando al consentimiento no contradicho de las partes el poder que le corresponde. Esta doctrina ha sido antes de ahora declarada por la Corte Suprema de la Provincia, siendo opinión del Tribunal, que destinadas especialmente aquellas disposiciones á regir la forma de las escrituras y las solemnidades de ciertos actos no podían suponerse, tuvieran por objeto derogar las que en el mismo Código rigen el contrato de compraventa, ni menos entre ellas, la Ley 6^a, tit. 5^o, Part. 5^a, que estatúa la manera de «faser la vendita e la compra, con carta ó sin ella». Y debe tenerse en cuenta, que estas disposiciones legislan espresamente sobre la compraventa y que el impuesto de alcabala cuya recaudación se buscaba garantir con la escritura, solo gravaba los contratos de esta naturaleza y que si es exacto del punto de vista de la doctrina, que las transmisiones de derechos reales deben estar sometidas á iguales solemnidades, es indudable que en el supuesto mismo en que éstas hubieran sido requeridas en la forma de escritura pública, no podían aplicarse en todo rigo; al caso presente, pues no se controvierte una compraventa ni se ventila en juicio un acto á virtud del cual se haya constituido sobre una cosa determinada un derecho absoluto y permanente del dominio.

13 —Arts. 1184, 1454 y 1455 del Cód. Civ.



que tenga un valor mayor de mil pesos nacionales.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 411, Ser 4^a.

14. **Escritura pública**—Reconocido el condominio el condómino está obligado á otorgar escritura pública de ese reconocimiento, pero no de la parte que debería corresponderá cada uno de los condóminos como si se hubiese verificado la división.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 31, Ser. 4^a.

15. **Escritura pública**—La obligación de hacer escritura

14—Véase, verb. *Condominio*, núm. 8.

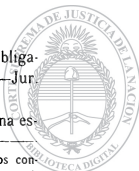
15—Aquí se renovó la cuestión que el Dr. Gonzalez del Solar promueve constantemente contra la opinión de los demás miembros de la Cámara, opinando el primero que el boleto privado de compraventa da derecho á pedir la escrituración de la cosa materia del contrato, sin necesidad de elevar el documento á escritura pública para después exigir la escrituración del inmueble. La Cámara es de opinión que un boleto privado solo da derecho á la parte para pedir que se escrete ese boleto elevándolo á escritura pública, y una vez hecho esto, es recién llegado el caso de pedir la escrituración del inmueble. Pero en el caso que nos ocupa, ha sucedido la más grande de las confusiones. «El actor se presenta pidiendo que en virtud de un boleto privado que exhibe se condene al demandado por *escrituración del terreno* vendido según el documento que se adjunta». El Juez de 1^a Inst. resuelve ordenando que se cumpla el contrato de compraventa de que instruye el documento, debiendo en consecuencia *escriturar la tierra* que se determina en el referido documento. El Camarista Dr. Bustos dice que «los antecedentes que deja espuestos demuestran suficientemente la justicia de la demanda de *escrituración del documento*» y que en ese sentido vota por la confirmación de la sentencia. El Dr. Gonzalez del Solar dice que procede la confirmación de la sentencia porque lo que *debe escriturarse es la tierra y no el boleto*. Los Dres. Molina Arrotea, Gimenez y Sauze se adhieren á estos dos votos. Y termina la Cámara confirmando la sentencia de 1^a Inst., debiendo *reducirse á escritura pública el documento* bajo apercibimiento del art. 1187 del Cód. Civ. No es posible darse un cúmulo mayor de consideraciones contradictorias. El actor pide la escrituración del *terreno*, el Juez de 1^a Inst. así lo ordena. Un Camarista opina que lo que debe escriturarse no es la tierra sino el boleto; otro Camarista dice que no es el boleto lo que debe escriturarse sino el

pública del boleto de compraventa, no importa la obligación de escriturar el inmueble materia del contrato.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 131, Ser. 4ª.

16. Escritura pública—El testimonio judicial de una es-

terreno: los tres Camaristas restantes se adhieren á los dos votos contradictorios y de todo esto resulta un producto híbrido, visto por primera vez en los anales judiciales; que se confirma una sentencia que ordena una cosa distinta de la que en definitiva resuelve la Cámara. ¿Y qué diremos de los Sres. Camaristas que se adhieren á los dos votos contradictorios? Diremos simplemente que no solo no leyeron el expediente, sino que ni siquiera leyeron los votos á los cuales se habían adherido. Si el Juez de 1ª Inst. condena al demandado á escriturar el terreno, de acuerdo con lo pedido en la demanda, y si la Cámara resuelve que lo que debe escriturarse es el boleto y no el terreno, lo lógico era revocar la sentencia, pero la Cámara entiende la lógica al revés. En cuanto al principio sentado en el sumario, está de acuerdo con la jurisprudencia constante. Véase *Boleto de compraventa*, núm. 1; y *Escritura pública*, núm. 7.

16—El auto de 1ª Instancia decía: «Cítese por edictos por quince veces en los diarios de esta ciudad.» La Cámara dijo: «Por los fundamentos del auto se confirma». Si en algún caso el *cliché* de la Cámara, venía en su aplicación al presente, como pedrada en ojo de boticario, es en éste: ¿qué fundamentos contenía el auto de 1ª Inst.? Ninguno; pero es tan socorrido este estribillo y les ahorra tanto tiempo y trabajo, que no tienen inconveniente en emplearlo en cualquier caso. El artículo 1008 del Cód. Civ. establece el principio sentado en el sumario. El 1007 dice que siempre que se pidieren nuevas copias, el escribano debe darlas; pero si en la escritura, alguna de las partes se hubiese obligado á dar ó á hacer alguna cosa, la segunda copia no podrá darse sin autorización expresa del Juez. En esto último, el art. 1008 establece las solemnidades que deben guardarse antes de expedirse las copias. El escribano puede expedir segundas ó terceras copias en los casos de la Ley 10, tít. 19, Part. 3ª, la que debe observarse en la expedición de segunda ó terceras copias, según disposición de Ley 5ª, tít. 23, lib. 10 de la Nov. Rec., que dice: «Ligeramente podría acaecer que pues que el ome tuuiesse en su poder la carta fecha por mano del Escriptuano público, que la perdería o le sería furtada; e tornaría al Escriptuano que la auia fecho, que gela fizesse otra vez. E por que algunos y ha, que la piden maliciosamente; Nos, por guardar los Escriptuano de yerro, que-





critura pública, debe expedirse con citación del otorgante.

—Jur. Civ., tom. 4, pág. 249, Ser. 4^a.

remosles mostrar en esta ley cierta manera, como sepan guardar. E dezimos, que si la carta que dizen que es perdida, es de compra, o de vendida, o de cambio, o de testamento, o de personeria, o de otras cosas semejantes destas; que fuesen tales, que maguer pareciesen dobladas, non puede venir daño por ellas a la otra parte; que el Escriuano por si puede, e deve fazer esta carta; sacandola de su registro, e faciendola, bien assi como fue fecha la primera que dizen que es perdida, e darla a aquel a quien pertenesce. Mas si la carta que pidiessen al Escriuano que la refiziesse otra vez, por que la primera era perdida, fuesse de debda que alguno deuiesse a otro, quier fuesse de dineros, o de otra cosa, por la cual pudiesse demandar tantas veces la debda quantas pareciesse la carta; tal como esta non la deve el Escribano refazer nin dar por si: por que podria ser, que la demandaria engañosamente, despues que fuesse pagada debda, o la uiesse quitada; e vendria della gran daño a la otra parte. Mas dezimos, que aquel que la demanda deve yr adelante del Juez, e fazer emplazar su debdor contra quien fuere fecha la carta.» Esta Ley de Part. tiene su fundamento en la Ordenanza de Alcalá. Resulta de ella que el escribano puede dar el segundo testimonio sin necesidad de mandato judicial y sin consentimiento de la otorgante cuando la escritura aunque apareciese duplicada, no perjudicase á esta parte, como en los casos de compra-venta, mandato, etc. como espresamente lo dice la ley por via de ejemplo. La Ley 5^a, tít. 23, lib. 10, reproduce estos mismos principios cuando dice: «Mandamos que cada y quando que algún Escribano hiciere alguna escritura, que pertenezca y deba ser dada a ambas partes, que la haya de dar y dé á la parte que se la pidiere, aunque la otra parte no la pida: empero que en las escrituras que alguna parte se obliga á la otra de hacer ó dar alguna cosa, mandamos que despues que el Escribano diere una vez la tal escritura signada a la parte a quien perteneciere, que no se dé otra vez, aunque alegue causa ó razon para ello, salvo por mandamiento de la Justicia, llamada la parte, segun se contiene en la ley decena y onena del tít. 19, Part. 3^a.» Concurran estas leyes con la ley 17, tít. 25, lib. 4^a, R.; y con la ley 2^a, título 8^o, lib. 1^o, F. R. García Goyena, estudiando el art. 1216 de su Proyecto, en el tom. 3^o, pág. 223, dice: «Hay escrituras de que el escribano mismo que las autorizó, no puede sin mandamiento del Juez dar más que una copia á la parte interesada: tales son todas aquellas en cuya virtud se puede pedir la deuda tantas veces quantas parezca la pri-



17. **Escritura pública**—Las atestaciones de una escritura pública, forman prueba plena de los actos que se dicen pasados ante el oficial público, y no procede la prueba de las partes que en ella intervinieron sobre simulación del pago que se haya hecho constar.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 15, Ser. 4^a.

18. **Escritura pública**—Solo procede la reducción á escritura pública del boleto de compraventa, pero no la del contrato que de él resulte.—Jur. Civ., tom. 6, página 91, Ser. 4^a.

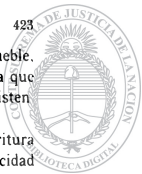
19. **Escritura pública**—No procede la acción sobre cum-

mera copia, como acontece en las obligaciones de hacer, dar ó pagar, etc.» En el caso del sumario, la copia que se pedía no era de aquellas que requieren la intervención judicial, ni la de la otra parte, pero esto de examinar las leyes que rijen la materia compulsando libros, no entra en la norma de conducta que se ha trazado la Cámara. Cuando alguna cuestión requiere estudio y ésta va en apelación en virtud de una providencia interlocutoria, confirma el auto recurrido «por sus fundamentos.» Es triste ver esto, cuando en un país como el nuestro lo que cada magistrado debe tratar de hacer, es estudiar bien las cuestiones para que sus resoluciones sean respetadas, de manera á impedir lo que hoy sucede. Cuando se dice que la Cámara ha resuelto una cuestión en cierto sentido, los litigantes en seguida citan casos resueltos en sentido contrario. Esta no es la forma de proceder para crearse un cuerpo de jurisprudencia serio y digno de respeto. No se diga que este defecto sea debido á insuficiencia de nuestro Poder Judicial, es debido al poco respeto que le merece la ley: no tienen inconveniente alguno en ir contra ella en los casos necesarios. Hay sentencias que son verdaderos prevaricatos, y que en otros países no se habrían tolerado un segundo. Pero aquí todo pasa, hasta lo monstruosamente inícuo, y hay magistrados que harían perfectamente el papel de Bacón ante una acusación formal de la Cámara de Diputados: por cierto que no nos referimos á aquellos que han preocupado tanto la atención pública en estos últimos tiempos.

17—Véase, verb. *Contradocumento*, núm. 2.

18—Véase, verb. *Escritura pública*, núm. 7.

19—Véase, verb. *Contrato de compraventa*, núm. 18.



plimiento del contrato de compraventa de un inmueble, en tanto no se haya extendido la escritura pública que la ley declara indispensable para reconocer su existencia y validez.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 109, Ser. 4^a.

20. **Escritura pública.**—Procede la reducción á escritura pública del boleto de compraventa cuya autenticidad se ha reconocido por las partes pero no el de la convención en él estipulada —Jur. Civ., tom. 6, pág. 298, Ser. 4^a.

21. **Escritura pública.**—Reconocida la autenticidad del boleto privado de compraventa, procede su reducción á escritura pública; las escepciones que obsten al cumplimiento del contrato, solo pueden ser juzgadas cuando se exija su cumplimiento—Jur. Civ., tom. 6, pág. 320, Serie 4^a.

22. **Escritura pública.**—Es improcedente la nulidad de

20—Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 16.

21—Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 17.

22—En virtud de una sentencia ejecutoriada que condenaba á una parte á elevar á escritura pública un boleto privado de promesa de venta, se otorgó la escritura pública firmada por la parte vencida, sin intervención del vencedor. Se dijo de nulidad de esa escritura, y así se declaró por el Juez de 1^a Inst., fundándose en que es condición esencial para la validez de las escrituras públicas, que en su otorgamiento intervengan las partes interesadas y que la suscriban, como terminantemente los disponen los arts. 988, 1001 y 1004 del Cód. Civ., sin hacer distinción alguna entre las escrituras públicas de contratos unilaterales ó bilaterales; que aún tratándose de contratos unilaterales, en que una sola de las partes contratantes queda obligada, siempre es necesario que concurren las partes interesadas, que son los contratantes, en el otorgamiento de la escritura, puesto que ésta tiene por objeto hacer constar de una manera fehaciente y con las formalidades que la ley prescribe, la celebración del respectivo contrato. Que las convenciones unilaterales como todos los contratos, solo existen cuando los contratantes se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada á reglar sus derechos—art. 1187.—Una promesa no aceptada carece por



la escritura pública fundada en la falta de firma de una

completo de importancia jurídica, y el que la hace puede retractarse o modificarla—arts. 1144 y 1149 á 1154.—Que por consiguiente, la escritura pública mandada otorgar por las mencionada sentencia, debe ser aceptada por aquel en cuyo favor se otorga, á fin de que la concurrencia de ambas partes produzca el acuerdo de voluntades que forma el contrato. La Cámara dijo: la sentencia definitiva pronunciada en el juicio sobre escrituración, establecía que la promesa hecha por el promitente al prometido, de referencia en el juicio, no era un contrato bilateral, desde que el segundo no contraía obligación de comprar, siendo únicamente aquél el que se obligaba á dar la preferencia á éste; de manera que el instrumento privado era perfectamente válido aunque estuviera redactado en un solo ejemplar y aunque no hubiere sido suscrito por éste. La sentencia del Superior sobre este particular, confirmó estas declaraciones estableciendo de consuno, que ese documento no contenía una convención bilateral. El carácter del contrato en cuestión viene á quedar de esta manera claramente determinado por ejecutoria judicial. El Inferior juzgó, empero, con el argumento del art. 988 y demás disposiciones que cita del Cód. Civ., que en toda escritura es condición esencial á su validez, que intervengan en su otorgamiento las partes interesadas y sea suscrito por todas ellas. El artículo ordena efectivamente que el instrumento sea firmado por todos los interesados que aparezcan como parte en él, pero es indudable que el precepto reza con las convenciones sinalagmáticas, esto es, cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Si de acuerdo, entre tanto, con la inteligencia que se ha dado al acto ya mencionado, solo el promitente era el obligado sin que hubiere obligación recíproca del demandante, se hace evidente que su intervención no ha debido ser reclamada por el oficial público como se pretende. Comentando el artículo citado, dice Segovia, que las firmas exigidas como esenciales, son las de las partes que se obligan y que así en los contratos unilaterales, como el depósito, bastará la firma del deudor. Esta es también la doctrina de los esposos franceses á la que no es ciertamente extraño nuestro Código. El Dr. Velez, entre otras opiniones ilustrativas de distintos pasajes de su libro, recuerda sobre el art. 988, la de Marcadé, que se ocupa estensamente de la materia. Según este autor, en las convenciones sinalagmáticas en las cuales cada una de las partes ha contraído obligaciones, la firma de todas ellas es indispensable; pero cuando se trata de un contrato unilateral, es claro agrega, será suficiente que tenga la firma del deudor. Según Bonnier, el acto que consigna un contrato unilateral no



de las partes, si el contrato es unilateral y está firmado por el obligado—Jur. Civ., tom. 5, pág. 17, Ser. 4^a.

23. **Escritura pública**— Para el cumplimiento de la sentencia requiere que sea firmado por acreedor y deudor. Se trata aquí, según dice Boiceau, de la *subscriptio facta per debitorem*. Si la ley sobre el notariado habla de todas las partes, es porque tiene á la vista los contratos sinalmáticos, para cuya prueba conviene que haya firmado cada una de las partes, puesto que los empeños de ambos son causa uno de otro. De acuerdo con los principios enunciados y con la interpretación que se dió en el juicio al contrato, es muy exacto que la persona á cuyo favor se ha hecho la promesa, no puede pretender que su firma aparezca en la escritura ni decir de nulidad por haberse prescindido de su comparecencia, á virtud de no ser parte por no haber contraído obligación. Nuestro antiguo derecho no prescribía tampoco en los actos de carácter unilateral la formalidad que la sentencia tiene por ineludible, y podría como antecedente de que aquella exigencia no estaba en el espíritu de sus disposiciones, recordarse el auto acordado, del estinguido Tribunal de justicia, de Enero de 1866, mandando que en toda escritura pública de contrato bilateral se requiere la firma de ambos contratantes y cuyo auto tuvo por objeto primordial cortar la «práctica irregular introducida en las escrituras de compraventa, por la cual no se exigía sino la firma del vendedor, y la del comprador solamente en casos determinados.» Es oportuno observar que no se discute al presente la índole jurídica de la promesa de compraventa, pues este punto no se halla en tela de juicio, sino únicamente si el documento firmado constante en los autos agregados, con la inteligencia que se le ha atribuido por ejecutoria, requería ó no para su validez, al ser elevado á escritura pública, la concurrencia y la firma del demandante.

23— El vendedor de un inmueble fué condenado á escriturar á favor del comprador, previo perfeccionamiento de los títulos dentro del término de noventa días que le acordó la sentencia de la Cámara. Esta primera demanda, fué instaurada por el vendedor á fin de que el comprador le entregara el resto del precio que le adeudaba y que se negaba á pagar alegando defectos de los títulos ó renunciara al derecho adquirido por el boleto, ó para que en caso negativo se declarara la rescisión del contrato. Para cumplir la sentencia, el condenado pidió una mensura y otras diligencias, y luego que éstas fueron practicadas y aprobadas, pidió se diesen por cumplidas las formalidades que obstaban á la escrituración y se le intimara al comprador designara escribano para la autorización de la escritura. Se proveyó de conformidad y el



tencia que la manda otorgar, no procede nuevo juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 359, Ser. 4^a.

24. **Escritura pública**—La confesión por escritura pública de que el acto que consta por instrumento público era simulado, vuelve las cosas al mismo é igual estado que tenían antes; pero sus declaraciones sobre derechos anteriores al acto simulado, carecen de valor legal.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 157, Ser. 4^a.

25. **Escritura pública**—La sentencia que manda reducir el comprador propuso escribano. Posteriormente denuncia éste que el escribano designado objetaba los títulos diciendo que la propiedad reconoce una hipoteca que no sabía si se había levantado ó no. El vendedor sostuvo que la escrituración debía llevarse adelante no siendo la circunstancia anotada un obstáculo, porque constaba que ella fué levantada, y por otras razones más. A esto contestó el vendedor que no podía ser obligado á escriturar, pues el valor del inmueble había variado enormemente, no habiéndose cumplido la negociación por culpa del comprador. En consecuencia, contrademanda por rescisión del contrato con devolución de la suma pagada á cuenta. Esta cuestión no pudo nunca ser materia de expediente distinto, porque lo que en él se pide es el cumplimiento de la sentencia que obliga al comprador á escriturar después de perfeccionar él sus títulos sobre defectos determinados. Esta conducta del vendedor no tiene explicación cuando se trata de dejar sin efecto el contrato que una sentencia anterior ha ordenado se cumpla, en virtud de una demanda interpuesta por esta misma parte. Aquí hay cosa juzgada, y la única vía procedente, una vez descartados los defectos, era y es la del apremio judicial para hacer respetar la sentencia consentida y ejecutoriada. Los defectos de los títulos fueron la materia de la litiscontestación en el juicio fenecido, y es evidente que un pleito sobre escrituración no acabaría jamás, si el comprador ó el vendedor se considera cada uno con derecho de objetar uno á uno y en juicio distinto los defectos de los títulos. Especialmente en el caso del sumario, el comprador no pudo observar por segunda vez los títulos, pues que el auto en que se daban por subsanadas las deficiencias había quedado consentido por él con el hecho de haber propuesto escribano en virtud del mandato del Juez de la causa.

24—Véase: verb. *Acto simulado*, núm. 1.

25—Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 28.



cir á escritura pública el boleto de compraventa, solo importa ordenar su protocolización en un registro público.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 229, Ser. 4ª.

26. **Escritura pública**—Para que proceda el cumplimiento del contrato de compraventa, el boléto simple debe ser convertido en escritura pública.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 153, Ser. 4ª.

27. **Escritura pública**—La pena estipulada para el caso de mora en el cumplimiento del contrato, solo puede ser exigida por el acreedor después de reducido á escritura pública el boleto simple de compraventa.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 153, Ser. 4ª.

28. **Escritura pública**—Justificada la existencia del contrato de compraventa por documento privado, procede su conversión á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 9, página 337, Ser. 4ª.

29. **Escritura pública**—El hecho de ser los testigos dependientes de una oficina autorizada para otorgar escrituras públicas, no es causa de nulidad del instrumento; la ley fulmina esa pena si los firmantes como testigos son dependientes autorizados para otorgarlas.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 189, Ser. 4ª.

30. **Escritura pública**—Declarada la autenticidad del boleto privado de compraventa, procede su conversión á escritura pública dentro del término que el Juez señale.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 222, Ser. 4ª.

31. **Escritura pública**—No es indispensable para justificar la propiedad de bienes inmuebles adquiridos durante

26.—Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 24.

28.—Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 25.

29.—Véase: *Dependientes*, núm. 1.

30.—Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 29.

31.—Véase: *Bienes raíces*, núm. 2.



la vigencia de las antiguas leyes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 262, Scr. 4^a

32. **Escritura pública**—El Ministerio Fiscal no es parte en los juicios civiles sobre falsedad, simulación ó fraude

32—El Juez de 1^o Inst. Dr. Mendez Paz, ordenó que se diera intervención al Agente Fiscal que lo era el Dr. Rod. Bustamante, quien se opuso, y la Cámara resolvió la cuestión por los fundamentos aducidos por éste. El Juez de 1^o Inst. decía, que: «estando prescripto en el artículo 117 de la Ley Org. de 12 de Noviembre de 1886 citada en el auto de fs. 283 vta., según lo reconoce el Agente Fiscal en su anterior dictamen, que el Ministerio Público es parte y le corresponde *intervenir en todos los negocios concernientes al orden público*—inc. 6^o—la intervención que se le ha dado en estos autos es procedente. Que si es verdad que por el art. 119 que se invoca, el Agente Fiscal de lo Civil debe intervenir en los asuntos allí determinados ó enumerados, debe tenerse presente que esta disposición establece los casos especiales en que la intervención corresponde *sin perjuicio* de lo que anteriormente está establecido para *los casos en general*, según la disposición del art. 117 recordado y formando el Agente Fiscal *parte integrante* del Ministerio, es lógico que le comprende lo dispuesto en dicho art. 117». El Fiscal dijo: «Que se trata en este expediente de una demanda civil sobre nulidad de una escritura de cesión de derechos autorizada por un escribano del partido 9 de Julio de la provincia de Buenos Aires. El Juez pretende que debe intervenir el Agente Fiscal, fundándose en el inc. 6^o, art. 117 de la Ley Org. de los Tribunales de la Capital, según el cual corresponde al Ministerio Público intervenir en todos los negocios concernientes al orden público. ¿Qué es un negocio concerniente al orden público? El que afecta á la sociedad en su organización política y privada, el que tiene en mira la seguridad individual y colectiva, el que se relaciona con la capacidad é incapacidad de las personas y con el régimen de las familias. Orden público, según Laurent, quiere decir arreglos de la persona en la sociedad. Las cuestiones relativas á los bienes, raras veces interesan al orden público aunque aparezca comprometido, pero mientras esto no se declare y establezca, la acción del Ministerio Público es improcedente. No es, en consecuencia, sostenible que por que se tache de nulidad ó falsedad una escritura pública referente á bienes privados, el orden público se encuentre comprometido. Si declarada la falsedad aparece un delito, recién entonces será llegado el caso de que ejercite sus funciones el Ministerio Público y no sería



de una escritura pública. —Jur. Civ., tom. 10, pág. 307, Ser. 4^a.

33. **Escritura pública**— La afirmación del escribano autorizante de una escritura pública, sobre la existencia é identidad del compareciente, no puede ser enervada por una partida de defunción que pueda corresponder á un homónimo. —Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4^a.

Escritura pública— Véase: *Boleto de compraventa*, número 1 y siguientes— *Contrato de compraventa*, núm. 1 y siguientes— *Contrato*, núm. 1— *Contrato de arrendamiento*, núms. 5, 6 y 7— *Contrato verbal*, núm. 7— *Cesión de derechos*, núm. 4— *Condominio*, núm. 6— *Contradocumento*, núm. 2— *Contrato por escritura pública*, núm.— *Daños y perjuicios*, núms. 26 y 98— *Desistimiento*, núm. 6— *Desalojo*, núm. 2— *Escribano*, número 1— *Excepción de pago*, núm. 2— *Falsedad de pago*, núm. 3— *Hipoteca*, núm. 1— *Herederos mayores*, núm. 1— *Incapacidad*, núm. 2— *Interdicto de obra nueva*, núm. 4— *Inscripción*, núm. 1— *Jurisdicción por cantidad*, número 1— *Nulidad de una escritura pública*, núm. 2— *Nulidad de un testamento*, núms. 2 y 3— *Obligación de hacer*, núms. 6 y 12— *Posesión*, núm. 3 y 4— *Posesión judicial*, núm. 2 y 5— *Prueba testimonial*, núm. 4— *Pena*, núm. 3— *Reivindicación*, núm. 17— *Remate judicial*, número 12— *Simulación*, núms. 4 y 14— *Tercería*, núm. 2— *Título habilitante*, núm. 1.

ciertamente el Ministerio Público de la Capital el llamado á poner en juego la acción pública en el litigio de que se trata, sino el Ministerio Público de la Provincia, porque en ella sería donde se había cometido el delito.

33 Véase, verb. *Escribano*, núm. 2.



1. **Escriituración**—El defecto de los títulos de propiedad suspende el plazo estipulado para la escrituración.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 61, Ser. 1ª.

2. **Escriituración**—El comprador en remate judicial que no lleve á efecto la escrituración, se hace responsable de la diferencia de precio, daños y perjuicios y gastos del nuevo remate, si el desistimiento ha sido sin causa justificada.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 108, Sér. 3ª.

3. **Escriituración**—Un boleto de compraventa basta para fundar el pedido de escrituración, pero no el de la entrega de la cosa.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 403, Ser. 4ª.

4. **Escriituración**—El término fijado para la escrituración en el boleto de compraventa, no importa un pacto comisorio, sino un término dentro del cual no puede exigirse judicialmente el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 109, Ser. 4ª.

5. **Escriituración**—Subsanados los defectos de los títulos reconocidos por sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, el comprador no puede alegar nuevos defectos para retardar la escrituración.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 359, Ser. 4ª.

Escriituración — Véase: *Boleto de compraventa*, números 1 y 2—*Pacto comisorio*, núm. 2—*Depósito judicial*,

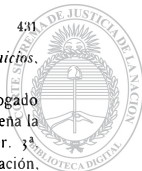
1—Art. 522 del Cód. de Proc.

2—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 23.

3—El boleto lo constituía un documento privado el que no autoriza intentar otra acción que la designada en los arts. 1185 y 1887 del Cód. Civ.; pero en manera alguna puede autorizar la petición de la entrega de la cosa vendida, pues esto supone necesariamente la existencia de un contrato concluido y redactado en escritura pública. Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 7.

4—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: verb. *Condición resolutoria*, núm. 1.

5—Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 23.



núm. 1 — *Hijo natural*, núm. 9 — *Daños y perjuicios*,
núm. 23 — *Recusación*, núm. 3.

1. **Eseusación**—Si bien la enemistad con el abogado no es causa de eseusación, procede si éste desempeña la tutela de menores. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 201, Ser. 3^a.

2. **Eseusación**—Aun cuando las causas de eseusación, no se encuentren entre las espresamente enumeradas, deben admitirse siempre que ellas pueden afectar la delicadeza ó el decoro del juez.— Jur. Civ., tom. 5, pág. 201, Ser. 3^a.

3. **Eseusación** —La resolución no haciendo lugar á la indemnización de daños y perjuicios, hace procedente la eseusación del juez para fijarla, en caso de ser revocada aquella por el Superior. — Jur. Civ., tom. 5, pág. 85, Ser. 4^a.

4. **Eseusación**—El pedido de declaratoria de demencia por el Asesor de Menores, es causa de eseusación, si la misma persona desempeña después el Juzgado en que se solicita la insania. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 108, Ser. 4^a.

5. **Eseusación**—Importa un desacato al juez la invitación á que se escuse de entender en el juicio por motivos personales.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 81, Ser. 4^a.

6. **Eseusación**—La amistad del juez con el abogado no es causa de eseusación en tanto éste represente á terceros y no tenga interés personal en el juicio.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 44, Ser. 4^a.

1—Véase: *Enemistad*, núm. 1.

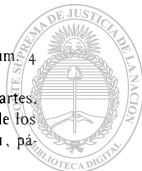
2—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara en varios casos. Véase: verb. *Enemistad*, núm. 1; y tom. 4^o, verb. *Eseusación*, núm. 3.

3—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 91.

4—Véase: *Demencia*, núm. 1.

5—Véase: verb. *Desacato*, núm. 1.

6—Véase: verb. *Amistad*, núm. 1.



Escusación—Véase: *Bienes*, núm. 2 —*Fianza*, núm. 4 —*Fiador*, núm. 1.

1. **Espediente**—No pueden ser entregado á las partes, aun cuando exista conformidad entre ellas, fuera de los casos determinados por la ley.—Jur. Civ., tom. 1, página 365, Ser. 3ª.

2. **Espediente**—Para que el tenedor de un expediente pueda ser condenado á su entrega, debe justificarse que ha pertenecido ó que corresponde á los Tribunales de la Capital.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 301, Ser. 3ª.

3. **Espediente**—Los Escribanos de Registro pueden sacar de las Secretarías, bajo constancia, los expedientes en que deban otorgar escritura pública.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 253, Ser. 3ª.

4. **Espediente**—El juez en turno debe recibirlo aun cuando por error haya sido pasado y admitido por otro Juzgado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 45, Ser. 4ª.

5. **Espediente**—La negativa á la agregación de un expediente, no basta para fundar la petición testimonio de sus piezas después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 82, Ser. 4ª.

6. **Espediente**—Los honorarios devengados en expedientes, deben ser regulados por el juez que en ellos tenga jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 318, Ser. 4ª.

1—El art. 26 del Cód. de Proc. lo prohíbe terminantemente.

3—Véase: verb. *Escribanos*, núm. 2.

4—La fecha del auto que se dicta mandando pasar los autos al juez de lo Civil determina cuál es el que debe recibirlos: y si por error pasa á otro juez que lo recibe, ese error no puede perjudicarlo.

5—Solicitada la agregación de un expediente, no se hizo lugar sin perjuicio de pedir los testimonios ó certificados que viere convenir al peticionante. Consentido el auto, solicitó los testimonios después de vencido el término probatorio. El art. 118 es aplicable, pues la negligencia de parte del interesado era evidente.



Espediente—Véase: *Litispendencia*, núm. 1—*Cuestiones*, núm. 3—*Prueba testimonial*, núm. 8—*Confesión*, núm. 2—*Escritura*, núm. 3—*Alegato*, núm. 3—*Notificación*, núm. 8—*Denuncias*, núm. 1—*Prueba*, núm. 3—*Honorarios*, núm. 12—*Incompetencia*, núm. 3.

1^a. **Espedientes**—Los que se encuentren en poder de particulares deben ser entregados al archivo general de los Tribunales.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 323, Ser. 3^a.

2. **Espedientes**—Reglamentación para la entrega de los que tramitaban ante los Jueces de Paz letrados.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 85, Ser. 4^a.

3. **Espedientes**—Distribución de los de la Justicia de Paz.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 148, Ser. 4^a.

4. **Espedientes**—Acuerdo sobre términos judiciales en los expedientes de la Justicia de Paz.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 271, Ser. 4^a.

5. **Espedientes**—Los pedidos *ad effectum videndi*, deben ser devueltos siempre que el Juzgado los conceptúe innecesarios al objeto para que fueron traídos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 148, Ser. 4^a.

6. **Espedientes**—Los secretarios no pueden entregar los expedientes á las partes.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 229, Ser. 4^a.

Espedientes contenciosos—Véase: *Apelación*, núm. 1.

1^b. **Espedientes informativos**—Sobre propiedad de un te-

1^a—Art. 298 de la ley Orgánica de los Tribunales.

5—Se dijo que el Juzgado no podía retenerlos porque pertenecían á otro, y mucho menos cuando el que los había enviado los reclamaba.

6—Art. 26 del Cód. de Proc.

1^b—De esta manera se puede dilucidar mejor y con más acierto acerca de la posesión de cada uno de los que pretenden haberla tenido, controlándose recíprocamente en la producción de la información posesoria. Conviene asimismo á la continencia de la causa.



rreno, aunque iniciados por diferentes personas deben acumularse.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 101, Ser. 4ª.

Espedientes terminados—Véase: *Testimonio*, núm. 1.

1. **Esposa**—La declaración de que la compra fué hecha con dinero propio de la esposa, no tenía por las leyes de Partida tiempo ni forma determinada; siendo válida aun cuando tuviese fecha posterior al acto.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 363, Ser. 3ª.

2. **Esposa**—Pertenecen exclusivamente á la esposa, los bienes comprados con anterioridad á la vigencia del Cód. Civ. con dinero propio, aun cuando la declaración no conste en la escritura de adquisición.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 363, Ser. 3ª.

3. **Esposa**—Aun después de muerto el marido, es responsable de las costas á que haya sido condenada en el juicio sobre separación de bienes, iniciado temerariamente en vida de aquél.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 401, Ser. 3ª.

4. **Esposa**—Durante la menor edad de ésta, para que el marido pueda estraer los fondos pertenecientes á ella, debe justificarse plenamente su necesidad ó conveniencia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 349, Ser. 4ª.

5. **Esposa**—Depositada judicialmente, debe habitar en el domicilio del depositario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 35, Ser. 4ª.

Esposa—Véase: *Dinero propio*, núm. 1. —*Bienes*, núm. 1.

1—Véase: verb. *Dinero propio*, núm. 2.

2—Véase: verb. *Bienes*, núm. 4.

4—El Asesor de Menores manifestóse conforme con la extracción. El juez no hizo lugar por no encontrarse en las condiciones requeridas por el art. 1250 del Cód. Civ., siendo confirmada la resolución por la Cámara.

5—Se había nombrado un depositario á la esposa, y aquél designó una tercera persona en cuya compañía debía vivir; la Cámara resolvió que la esposa «debe habitar con la depositaria.»



meros 1, 4 y 5.—*Dominio*, núm. 1.—*Divorcio*, núm. 7.—*Gananciales*, núm. 1.—*Herencia*, núm. 2.—*Ilegitimidad*, núm. 1.—*Cosa juzgada*, núm. 1.—*Paternidad legítima*, núm. 1.—*Rendición de cuentas*, núm. 2.—*Prescripción a nombre propio*, núm. 2.—*Contrato de locación*, núm. 3.—*Padrastro*, núm. 1.—*Bienes del esposo*, núm. 1.—*Embarazo preventivo*, núm. 12.—*Hijos menores*, núm. 2.—*Revocación*, núm. 1.—*Venia*, núms. 2 y 3.—*Acreedores del viudo*, núm. 1 y 2.—*Documento*, núm. 4.—*Nulidad de la ejecución*, núms. 6 y 7.—*Separación de bienes*, núm. 1 y siguientes.—*Recusación*, núm. 16.—*Alimentos*, núm. 14.

1. **Esposo**.—El vendedor de cosa ajena, no es responsable por los daños y perjuicios ocasionados por falta de cumplimiento del contrato, si el comprador conocía ese hecho; la regla no se modifica por ser el vendedor esposo ó pariente cercano del propietario.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 386, Ser. 3ª.

2. **Esposo**.—Corresponden á la sucesión del esposo, los bienes que le fueron adjudicados en virtud de la cuenta de partición debidamente aprobada en la testamentaria de la esposa, aun cuando fuesen propios de ésta y siempre que á sus herederos se les hubiese adjudicado bienes que representen igual valor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 90, Serie 3ª.

3. **Esposo**.—Para la fijación de la cantidad á suplir por

1.—Véase: verb. *Cosa ajena*, núm. 1. Podría considerarse á la esposa como un tercero en el contrato, y entonces la venta se consideraría como cuando se promete el hecho de un tercero, sujeto á la ratificación de parte del verdadero dueño que es la esposa ó un pariente próximo, en cuyo caso correspondería aplicar la disposición del art. 627 del Cód. Civ.

2.—Véase: verb. *Bienes*, núm. 1.

3.—Debe justificarlo aproximadamente cuando menos, como lo establece el art. 602, inc. 2 del Cód. de Proc.



litisexpensas, debe justificarse el capital del esposo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 152, Ser. 3ª.

4. **Esposo**—Para la fijación de la cantidad á suplir por litisexpensas, debe justificarse el capital del esposo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 152, Ser. 3ª.

Esposo—Véase: *Gananciales*, núm. 1 — *Contrato de arrendamiento*, núm. 3 — *Cosa juzgada*, núm. 1 — *Divorcio*, núm. 11 — *Ilegitimidad*, núm. 2 — *De oficio*, núms. 2 y 3.

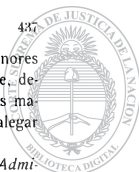
1. **Esposos**—La firma de éstos en el acta matrimonial, no basta para justificar su ingreso á la secta, siempre que por otros medios se compruebe que pertenecen á otra.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 160, Ser. 3ª.

2. **Esposos**—Para decretarse el divorcio, no basta la conformidad de los esposos: debe justificarse plenamente la existencia de los hechos en que se funda la acción.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 134, Ser. 3ª.

4—Véase: *Cantidad*, núm.

1—Las prescripciones terminantes del Cód. Civ., niegan á un Pastor protestante la facultad de casar á todos los disidentes, aun cuando sean de diversa comunión. Su poder se circunscribe á sus feligreses. Tratándose de religiones positivas que se encuentran constituidas en iglesia, tienen un símbolo ó doctrina que las caracteriza, distinguiéndolas de las demás; usan un culto especial, sus miembros se reconocen entre sí, y emplean ciertas ceremonias para la incorporación á su seno, de nuevos neófitos, además de la profesión de fe, y á ninguno se ingresa con solo firmar el acta del matrimonio que celebra. Así un judío que ocultando su religión, se presentara á la iglesia católica á contraer matrimonio y firmara el acta matrimonial, por ese hecho solo no ingresaría á la comunidad católica.

2—El esposo pidió el divorcio fundado en el art. 72, inc. 1 de la Ley de Matrimonio Civil del 12 de Noviembre de 1888—Ley núm. 2393—igual al art. 67, inc. 1ª de la ley vigente. La esposa negó el adulterio, pero estuvo conforme en que se declarase el divorcio. La prueba producida por el actor fué insuficiente, no haciéndose lugar al divorcio apesar del mutuo consentimiento de los cónyuges, porque el art. 66 de la ley de Matrimonio vigente, no admite el divorcio en esta forma, sino por las causales expresadas en el art. 67.



3. **Esposos**—Decretado el divorcio, los hijos menores de cinco años deben quedar en poder de la madre, designando el juez, cuál de los cónyuges debe tener los mayores, sin que ninguno de los dos esposos pueda alegar preferencia. —Jur. Civ., tom. 10, pág. 184, Ser. 4^a.

Esposos—Véase: *Separación de hecho*, núm. 1—*Administrador*, núm. 4—*Bienes de la esposa*, núms. 1, 4 y 5—*Venia*, núm. 4—*Divorcio*, núms. 9 y 10—*Pensión alimenticia*, núm. 5.

Esposición de agravios—Véase: *Cámara*, núm. 1.

1^a. **Espropiación**—El juicio contencioso-administrativo, no procede contra resoluciones municipales sobre espropiación de terreno ó demolición de un edificio. —Jur. Civ., tom. 3, pág. 64, Ser. 3^a.

Espropiación—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 6.

Establecimiento—Véase: *Departamento Nacional de Higiene*, núm. 1.

Establecimiento bancario—Véase: *Remate judicial*, número 20.

1^b. **Estado Civil**—De las personas, no puede conceptuarse un derecho en expectativa; las leyes posteriores al nacimiento, no pueden modificar el derecho adquirido. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 388, Ser. 4^a.

Estado Civil—Véase: *Partidas*, núm. 1.

1. **Estampilla**—Mientras no se justifique plenamente lo contrario, la ley presume puesta la estampilla en la fecha en que aparece inutilizada. —Jur. Civ., tom. 4, página 238, Ser. 4^a.

3—Véase: verb. *Divorcio*, núm. 12.

1^a—Véase, verb. *Demolición*, núm. 1.

1^b—Véase: *Derecho en expectativa*, núm. 1.



2. **Estampilla**—El recibo de descargo cualquiera que sea el valor y los documentos recibidos, solo está sujeto al uso de la estampilla que la ley de sellos fija para los recibos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 70, Ser. 4^a.

Estampilla—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 13.
—*Autenticidad*, núm. 3.

1^a. **Estatutos sociales**—Para que el interdicto de adquirir los bienes de una sociedad, deducido por los que se dicen sus mandatarios, sea procedente, deben justificar que el mandato ha sido conferido por quien tiene autoridad legal, en la forma y con las solemnidades que los estatutos sociales requieren.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 341, Ser. 4^a.

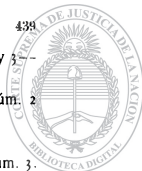
Estatutos sociales—Véase: *Personería*, núm. 9, *Sociedad anónima*, núm. 2.

Extensión—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 24.
—*Reivindicación*, núm. 18.

Estimación—Véase: *Regulación de honorarios*, núm. 2.

2.—Los documentos de descargo no son documentos de obligación, y por consiguiente debía aplicarse el art. 41 de la Ley de sellos vigente en aquella época—año 1891.

1^a—Según el Reglamento de la sociedad de que se trataba, la Asamblea era el supremo poder, como asimismo sus deliberaciones, y de consiguiente la ley suprema de los asociados. Ante este principio esencial para la conservación y marcha regular de toda institución, es punto de importancia capital averiguar si el que invoca su representación ha sido legítimamente investido con su poder y si el que lo confiere tiene facultad al efecto. Es necesario averiguar si la Asamblea que dió nacimiento á las autoridades que representan á la sociedad fué celebrada conforme á los preceptos reglamentarios. Si estos extremos se llenan y si se justifica que se han cumplido, el interdicto podrá prosperar por cuanto la persona que lo deduce tendrá facultad bastante. Ante todo es necesario averiguar si la persona que se presenta á nombre de otra acredita en forma su representación, y si el que otorga el poder tenía facultad para conferirlo.



Estranjero —Véase: *Jurisdicción federal*, núm. 2 y 3.—
Embargo preventivo, núm. 40.

Estraño —Véase: *Divorcio*, núm. 3 —*Curador*, núm. 2
—*Menores*, núm. 2—*Patria potestad*, núm. 4.

Examen facultativo —Véase: *Insania*, núm. 1.

Exhibición general —Véase: *Libros de comercio*, núm. 3.

1ª. **Exhorto**—No diligenciado por falta de presentación al Juez exhortado, no puede ser reiterado. —Jur. Civ., tomo 4, pág. 251, Ser. 4ª.

2ª. **Exhorto**—Si después de librado el exhorto, el testigo cambia de domicilio, debe librarse nuevo oficio para la declaración.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 327, Ser. 4ª.

Exhorto— Véase: *Embargo preventivo*, núm. 40—*Prueba*, núm. 8 —*Testigos*, núm. 25.

1. **Evicción**—Debe intervenir conjuntamente en el juicio de reivindicación comprador y vendedor. si ambos son demandados aun cuando el segundo intervenga también en virtud de la citación de evicción solicitada por el primero.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 377, Ser. 4ª.

2. **Evicción**—La citación de evicción solo procede cuando se deducen acciones reales.—Jur. Civ., tom. 5, página 397, Ser. 4ª.

3. **Evicción**—El cedente no está obligado á la evicción de los derechos transferidos en su totalidad, sino cuando ella comprenda la mayor parte de los que fueron materia del contrato.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 127, Ser. 4ª.

1ª.—Siempre que el término de prueba esté vencido ó que sea evidente la imposibilidad de diligenciarlo dentro del término. En el caso del sumario la negligencia de la parte es evidente, debiendo aplicársele lo dispuesto en el art. 118 del Cód. de Proc.

2ª.— Véase, verb. *Declaraciones*, núm. 7.

3ª.— Arts. 2089 y siguientes del Cód. Civ. Véase, verb. *Derechos hereditarios*, núm. 1.

4. **Evicción**—No procede la citación de evicción en el juicio de mensura.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 106, Ser. 3^a.

Evicción—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 1.

4—No es aplicable el art. 2108 del Cód. Civ., porque no afecta ni al derecho de propiedad ni al de posesión.





Facción de planos—Véase: *Remuneración profesional*, núm. 1.

Facultad—Véase: *Posiciones*, núm. 3—*Mandatario*, números 3 y 11—*Poder*, núm. 3—*Fiador*, núm. 3—*Tutor*, núm. 11.

Facultad de firmar—Véase: *Transacciones*, núm. 11.

Facultad discrecional—Véase: *Pensión alimenticia*, número 2.

Facultad exclusiva—Véase: *Fianza*, núm. 6.

Facultad especial—Véase: *Mandatario*, núm. 6—*Herederos*, núm. 2.

1. **Facultades**—La calificación de jugador de garito hecha á una persona que además de comprobar su honorabilidad justifica la falsedad del hecho imputado, importa extralimitación de facultades del empleado, y una ofensa ilícita al ciudadano, que debe ser indemnizada según el criterio del Tribunal. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

2. **Facultades**—El poder judicial tiene derecho y está obligado á entender en las acusaciones, ya civiles ó criminales que se inicien contra empleados públicos, aún por actos que hayan merecido la aprobación de sus supe-

1—Véase, verb. *Empleado*, núm. 1.

2—Véase, verb. *Acusaciones*, núm. 1.



riores, sin que ello importe obstaculizar la acción de otros poderes ni estralimitación de facultades que le son propias.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

Facultades. —Véase: *Funcionarios públicos*, núms. 4 y 5.
—*Bienes municipales*, núm. 1.

Facultades del mandatario. Véase: *Nulidad de un acto jurídico*, núm. 1.

1. **Facultades legales.** —Los actos llevados á cabo por un comisario de policía, estralimitando sus facultades legales, importan un acto ilícito que puede fundar una acción por indemnización de daños y perjuicios. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

2. **Facultades legales.** —La aprobación del Superior y aun la orden verbal, no eximen de responsabilidad al funcionario por la estralimitación de sus facultades legales. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

Facultativos. —Véase: *Asistencia médica*, núm. 2.

Falsa causa. —Véase: *Nulidad de un acto jurídico*, número 7.

1ª. **Falsedad.** —La escepción del inhabilidad de título, es improcedente si se funda en la falsedad ó vicios de los hechos que le dieron origen, ajenos al título mismo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 150, Ser. 3ª.

2. **Falsedad.** —La parte puede pedir las diligencias que crea necesarias para autenticar el documento tachado de

2—Véase, verb. *Actos ilícitos*, núm. 5.—Para salvar la responsabilidad de un empleado ejecutivo, es necesario que el mandato bajo el cual procede el empleado que realiza el acto —arrestar á una persona, secuestrar bienes, entrar por fuerza en una casa habitada—esté legalmente expresada en la fas del documento. ... «Decisiones constitucionales» de Galvo. Decisión 2588.

1ª.—Véase: *Escepción de inhabilidad de título*, núm. 6.

2— Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 7.



falso, sin perjuicio de las que practiquen los peritos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 153, Ser. 3ª.

3. **Falsedad**—La calificación de jugador dada de garito á una persona que además de comprobar su honorabilidad, justifica la falsedad del hecho imputado, importa estralimitación de facultades en el empleado, y una ofensa ilícita al ciudadano, las que debe ser indemnizada según el criterio del Tribunal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

4. **Falsedad**—De pago, el contradocumento otorgado, para probar la falsedad de un pago, prueba contra el tercero que intervino por medio de mandatario en la formación de la escritura pública.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 179, Ser. 4ª.

5. **Falsedad**—De documentos, los Jueces de lo Civil son incompetentes para conocer, ni aún están obligados á dar curso á las denuncias sobre falsedad de documentos agregados á un expediente, por el que no sea parte en dicho juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 400, Ser. 4ª.

6. **Falsedad**—El heredero aún cuando no desconozca la validez del documento en que se funda la obligación,

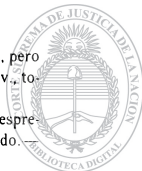
3—Véase: *Empleado*, núm. 1.

4—Véase, verb. *Contradocumento*, núm. 3.

5—Véase, verb. *Denuncias*, núm. 1.

6—Es de espreso derecho que no existe obligación sin causa y que ésta consiste hoy como consistía en la legislación romana, en lo dado ó en lo hecho para que otro diese ó hiciese: *Datio vel factum, certa lege*. Desconocida la causa de la obligación y siendo de espreso derecho que aun cuando la causa no aparezca en ella se presume su existencia mientras el deudor no pruebe lo contrario—art. 500 del Cód. Civ.—Resultado que á éste corresponde la prueba de la escepción, no solamente en virtud de lo dispuesto en este artículo, de la reconocida máxima: *reus in excipiendo fit actor*, sino también de acuerdo con la doctrina sostenida por la generalidad de los autores, pues probándose la falsedad de la causa expresada en la obligación resultará ésta insanablemente nula.

Laurent y Demolombe; Duranton, tit. 10, núm. 349, y Llerena, tom. 1ª, pág. 326.



puede invocar la falsedad de la causa que él espresa, pero como escepcionante carga con la prueba.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 5, Ser. 4ª.

7. **Falsedad**—Probada la falsedad de la causa que espresa la obligación, procede la absolución del demandado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4ª.

8. **Falsedad**—Siempre que existan indicios de falsedad, deben pasarse los antecedentes, de oficio, al juzgado del Crimen.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4ª.

Falsedad—Véase: *Documento privado*, núm. 1 —*Herederos*, núm. 6—*Inhabilidad de título*, núm. 1 —*Nulidad de un acto jurídico*, núm. 3 —*Escritura pública*, núm. 32—*Escepción de falta de personería*, núm. 1 —*Notificaciones*, núm. 2—*Domicilio*, núm. 9.

Falsedad de hecho—Véase: *Instrumento público*, núm. 1 —*Inhabilidad de título*, núm. 1—*Escritura pública*, número 32.

Falta de acción—Véase: *Escepción de falta de personería*, núms. 14, 15, 18 y 19.

Falta de cumplimiento—Véase: *Contrato de arrendato*, núm. 7—*Cláusula penal*, núm. 1—*Contrato de compraventa*, núm. 18.

Falta de derecho—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 32—*Demanda*, núm. 3.

Falta de intervención Véase: *Avisos*, núm. 1—*Testamentaria*, núm. 6.

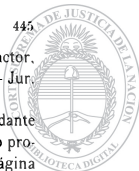
Falta de llamado—Véase: *Servicios*, núm. 8.

1. **Falta de personería**—Si ella se refiere al derecho del actor, no puede ser resuelta como escepción dilatoria.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 244, Ser. 3ª.

7—Véase el número precedente.

8—Véase, verb. *De oficio*, núm. 4.

1—Véase, *Escepción dilatoria*, núm. 1.



2. **Falta de personería**—Por carecer de derecho el actor, solo puede resolverse como excepción perentoria.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 246, Ser. 3^a.

3. **Falta de personería**—Reconocida por el demandante la falta de personería alegada por el demandado, no procede la condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 3, página 54, Ser. 4^a.

Falta de personería—Véase: *Costas*, núm. 57—*Excepción de falta de personería*, núm. 1 y siguientes.

Falta de presentación—Véase: *Documentos*, núm. 11.

Faltas—Véase: *Correcciones disciplinarias*, núm. 1.

1. **Fallecimiento**—Cualquiera que sea la prueba producida para justificar la ausencia con presunción de fallecimiento, la información no puede aprobarse sin la publicación de edictos por el término que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 256, Ser. 3^a.

2. **Fallecimiento**—Mientras no conste judicialmente el fallecimiento, la parte no está obligada á suspender el procedimiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 166, Ser. 4^a.

3. **Fallecimiento**—Para que proceda la presunción de fallecimiento, debe justificarse que no han dado resultado las diligencias practicadas para obtener noticias del ausente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 367, Ser. 4^a.

4. **Fallecimiento**—Puede probarse por información, la

2—Véase *Excepción perentoria*, núm. 2.

3—Véase, verb. *Costas*, núm. 7.

1—Véase, verb. *Edictos*, núm. 1.

2—El Juez de 1^a Inst. en virtud de denuncia hecha por el abogado, de que su patrocinado había fallecido, mandó suspender el procedimiento. La Cámara lo revocó fundándose en que el fallecimiento no constaba en debida forma, y teniendo en cuenta además el carácter de la medida solicitada que era meramente conservativa.

3—Art. 114 del Cód. Civ.

4—Aprobada una información, el mismo Juez la revocó por contrario



que aprobada surte pleno efecto legal.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 24, Ser. 4ª.

5. Fallecimiento—El denunciante de un fallecimiento que suministra datos equivocados en una partida del Registro Civil, carece de personería para producir información con el objeto de anotar el error.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 21, Ser. 4ª.

6. Fallecimiento—Al apoderado corresponde justificar el fallecimiento de su mandante si no negase el hecho.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 262, Ser. 4ª.

Fallecimiento — Véase: *Autenticidad*, núm. 1 — *Dona-*

imperio fundándose en que ella no era bastante para acreditar en *debida forma* la verbad y exactitud del fallecimiento, considerándola deficiente, porque los testigos no dieron razón satisfactoria de sus dichos. La Cámara revocó esta resolución fundándose en que el fallecimiento se hallaba acreditado con el testimonio intachable de dos personas que daban acabada razón de sus dichos.

5—El dictámen del Fiscal de la Cámara, que sirvió de fundamento á la resolución contenida en el sumario decía, que los testigos de los actos del Registro Civil, no pueden ser admitidos á corregirlos ó adicionarlos, pues se comprende sin esfuerzo que si en algún caso puede inspirarles una recta intención, en otro pueden proceder maliciosamente y ocasionar grandes trastornos en el orden de las familias. Sin embargo, cuando un testigo se apercibe de un error en que ha incurrido al hacer las manifestaciones que debe contener un asiento, puede y debe manifestarlo á la autoridad competente, pero debe también oírse á la persona realmente interesada en la perfección del acto, y con su audiencia y las pruebas evidentes del caso podrá decretarse la rectificación.

6—Al apoderado que denuncia el fallecimiento de su mandante, le corresponde en su calidad de mandatario hacer las averiguaciones del caso para dejar establecida la verdad del hecho denunciado: es el apoderado quien tiene interés directo en constatarlo, teniendo en cuenta las responsabilidades legales que podrían surgir si continuase interviniendo en la causa después de denunciada formalmente la muerte de su mandante. El Juez debe fijar un término prudencial para la constatación del hecho.



ción, núm. 3—*Documento privado*, núms. 3, 4 y 5—*Declaratoria de herederos*, núm. 7—*Testamentaria*, núm. 7—*Causante*, núm. 2—*Bienes del esposo*, núm. 1—*Bienes*, núm. 7.

Fallo—Véase: *Excepciones perentorias*, núm. 3.

Fama pública—Véase: *Testigos*, núm. 5.

Familia—Véase: *Menores*, núm. 2.

1. Fecha—El hecho de haber sido escrita la fecha en época distinta de la del cuerpo del documento, no modifica su validez, siempre que no se justifique la existencia de otra fecha anterior.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 193, Serie 3ª.

2. Fecha—De la escritura, es la fuente del derecho cuando el total de los derechos hereditarios ha sido cedido á diversas personas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 102, Serie 3ª.

Fecha—Véase: *Acreedor privilegiado*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 104—*Excepción de defecto legal*, número 18—*Capellanía*, núm. 4—*Posesión*, núm. 19—*Prescripción de obligaciones*, núm. 2—*Dimensión*, núm. 1—*Alimentos*, núm. 3—*Alegar*, núm. 1—*Estampilla*, número 1—*Nulidad de un acto jurídico*, núm. 3.

Fecha anterior—Véase: *Prueba preconstituida*, núm. 1—*Documentos*, núm. 5.

Fecha cierta—Véase: *Documentos*, núm. 5—*Escrito*, número 10.

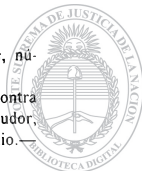
Fecha posterior—Véase: *Mandante*, núm. 3—*Dinero propio*, núm. 2.

Fecundación—Véase: *Filiación natural*, núm. 2.

Ferrocarriles—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 62, 70

1—Véase, verb. *Documento*, núm. 1.

2—Véase, verb. *Derechos hereditarios*, núm. 3.



y 103—*Municipalidad*, núm. 11—*Poderes locales*, número 1.

1^a. Fiador—El acreedor puede ejercer su acción contra el fiador, sin hacer escusión en los bienes del deudor, siempre que éste se hubiese ausentado de su domicilio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 148, Ser. 3^a.

2. Fiador—La solidaridad no se presume; el simple fiador no está obligado mientras no se haga escusión en los bienes del deudor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 175, Serie 3^a.

3. Fiador—Es facultivo del Juzgado apreciar la responsabilidad propuesta—Jur. Civ., tom. 7, pág. 62, Ser. 4^a.

4. Fiador—La falta de presentación del fiador dentro del plazo estipulado, en un contrato de locación, lo deja sin efecto.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 3^a.

Fiador—Véase: *Bienes*, núms. 2 y 6—*Fianza*, núms. 3, 4 y 6—*Abogado*, núm. 2.

1^b. Fiadores—Los Agentes Fiscales pueden ser fiado-

1^a—Art. 2013, inc. 5^o del Cód. Civ.

2—Véase, verb. *Bienes*, núm. 2.

3—El Juez de 1^a Instancia no consideró suficiente la fianza propuesta, y la Cámara confirmó la resolución diciendo, que es facultativo del Juez apreciar la calidad de la fianza ofrecida. De acuerdo con este caso, véase: verb. *Fianza*, núm. 6.

4—Véase, verb. *Contrato de locación*, núm. 10.

1^b—No existe prohibición alguna legal para que los miembros del Poder Judicial puedan dar fianza siempre que no tenga lugar en causa que más tarde hubiese de intervenir el fiador. La Ley 2^a, tit. 12, Part. 5^a, no se relaciona con los Agentes Fiscales. En el derecho español no se encuentra una prohibición semejante, como puede verse en Alvarez «Instituciones de derecho legal», y en Sala «Ilustración al mismo», pues estos autores al esponder y enumerar los que no pueden ser fiadores, no los comprende, como tampoco los comprenden las leyes de Indias. Y aún dado el caso de que esa prohibición hubiese existido, no habría podido subsistir después de la vigencia del Cód. Civ. En



res en causas que no sean de su jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 351, Ser. 3ª.

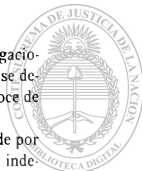
1. **Fianza**—De conformidad de partes, debe permitirse la retractación de la fianza, sin que el Juzgado esté obligado á resolver si existe ó nó trabado el embargo preventivo para el que fué otorgado.—Jur. Civ., tom. 2, página 190, Ser. 3ª

2. **Fianza**—Limitada á los alquileres por un tiempo

las disposiciones en que hace mención á los funcionarios públicos y en que establecen los contratos que le son prohibidos tampoco los consigna y aun cuando va hasta establecer las condiciones que debe tener la fianza judicial. La Ley Orgánica, ni ninguna otra ley lo prohíbe, á no ser como se ha dicho, cuando esa fianza tuviese por resultado impedir las funciones del magistrado judicial.

1—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 8.

2—El actor había celebrado un contrato de arrendamiento de un museo anatómico por el término de seis meses, mediante el pago adelantado de 200 pesos mensuales. El demandado se había constituido fiador por el cumplimiento del contrato. El inquilino pagó dos mensualidades, y no queriendo abonar las siguientes, se presentó á un Juzgado de Paz pidiendo la devolución del museo, que estaba completamente abandonado, y la rescisión del contrato. En ese Juzgado se levantó un inventario de los objetos depositándolos en mérito de las denuncias de hallarse abandonado el negocio y ordenándose el desalojo, y por último, se ordenó la entrega del museo á su dueño, quien se negó á recibirlo por el mal estado de algunos cajones que contenían objetos del museo. En este estado el locador demanda al fiador por los daños y perjuicios que le ocasionó el inquilino. Esta acción no es procedente porque las responsabilidades del fiador en este caso solo se limitan á aquello á que se obligó el fiador, pues el art. 2582 del Cód. Civ., sin embargo de establecer que las fianzas de la locación obligan á los que las prestan, no solo al pago de los alquileres, sino á las demás obligaciones del contrato, al mismo tiempo exceptúa el caso en que la fianza se hubiese limitado espresamente al pago de los alquileres, estando consignada espresamente esa cláusula en el contrato materia de la cuestión. La fianza termina por la extinción de la obligación principal—art. 2042, Código Civil—y desde entonces, si el arrendamiento queda concluido y si el fiador no lo es por las demás obligaciones del contrato, claro es que



determinado, no obliga al fiador por las demás obligaciones del contrato, ni tampoco por los alquileres que se devenguen hasta que el locador recupere el uso y goce de la cosa—Jur. Civ., tom. 3, pág. 148, Ser. 3ª.

3. Fianza—El fiador de un curador solo responde por los bienes pertenecientes á los menores; probado el indolido nombramiento por no ser menores, falta la causa de la fianza.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 345, Ser. 3ª.

4. Fianza—El término para la prescripción de la fianza

su responsabilidad no puede ser llevada más allá para hacerlo pasible de las obligaciones en que haya incurrido el inquilino. Hecho por tiempo determinado el contrato de arrendamiento, vence cuando se acaba ese tiempo—art. 1604, Cód. Civ.—Y es sabido que, aun cuando el locatario permanece en el goce de la cosa arrendada con asentimiento tácito ó espreso del locador, no se produce la tácita reconducción de que nos habla el Cód. Civ. Francés; lo que vale decir, que si en ese caso no subsisten las obligaciones del fiador, menos pueden subsistir hasta que el locador recupere el uso y goce de la cosa.

3—Véase, verb. *Bienes*, núm. 6.

4—Esta resolución la dictó la Cámara tomando como base la sentencia del Juez de 1ª Inst., que lo era el Dr. Gimenez, quien dijo que con arreglo al primitivo derecho romano—Ley 5ª del Cód. de «Fidejussoribus» la fianza reposaba en la responsabilidad solidaria y directa de la tercera persona que la daba: y el acreedor tenía el derecho de exigir su crédito al fiador ó al deudor, según eligiere. Pero las «Novelas» alteraron esta doctrina y establecieron que la responsabilidad debía ser «subsidiaria ó indirecta», de manera que el fiador vino á tener el beneficio de orden, por el cual el acreedor debía discutir la deuda, primero con el deudor, y perseguirlo para que pagase—Lopez, Derecho Romano.—Esta última doctrina es la que ha sido adoptada por la legislación de las Partidas y por nuestro Cód. Civ.—Ley 9ª, tít. 12, Partida 5ª y art. 2012, Cód. Civ.—Ella sin embargo, reconoce sus escepciones, pudiendo citarse entre otros casos los siguientes: cuando el fiador renuncia el beneficio de orden ó de escusión, ó cuando es notoria su insolvencia. Respecto al primer caso de escepción, si bien la escritura no contenía la renuncia que hacía el fiador del beneficio de orden ó escusión, parecía desprenderse de sus términos, pues se constituía en liso y llano pagador, y manifestaba su voluntad para el caso de faltar al



empieza desde que sea notoria la insolvencia del deudor, aun cuando el fiador no haya renunciado al beneficio de escusión.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 345, Ser. 3ª.

5. **Fianza**—La prescripción de una fianza constituida antes de la vigencia del Código Civil, se rige única y exclusivamente por las antiguas leyes —Jur. Civ., tom. 4, pág. 345, Ser. 3ª.

6. **Fianza**—Es facultad exclusiva del Juez apreciar su

cumplimiento de la obligación, de hacer suya la deuda ajena, queriendo que todas las diligencias y demás concernientes a este respecto se entendieran directamente con él. En cuanto al segundo caso de excepción, es indudable que el concurso del deudor induce necesariamente a su insolvencia, pues ese estado presupone la carencia de recursos para hacer frente a los compromisos contraídos—Gutierrez, Códigos Fundamentales, tom. 5º, pág. 51.—Producida la insolvencia del deudor que da origen al concurso, desaparece por tal causa el beneficio de orden ó escusión, y los acreedores pueden ejercitar desde entonces sus acciones y derechos directamente contra el fiador. Véase el art. 2072 del Código Civil.

5.—Las leyes no tienen efecto retroactivo—art. 3º, tít. Preliminar del Cód. Civ.—Si bien es doctrina corriente admitir que las nuevas leyes se aplican á los simples derechos en expectativa, en el caso que motivó el sumario, no podía decirse que los derechos del acreedor contra el deudor pertenecieran á esa categoría, pues las relaciones entre deudor y acreedor, garantizadas por fiador, estaban ya establecidas irrevocablemente desde 20 años antes de la demanda.

6.—El Juez aceptó como fiador al abogado patrocinante de una de las partes y mandó se otorgara la respectiva escritura en la escribanía que designó. Apelada la resolución, la Cámara la confirmó diciendo precisamente lo que expresa el sumario. La resolución de la Cámara en sí misma importa una contradicción porque si es facultad exclusiva del Juez apreciar la fianza en su calidad y en su grado de responsabilidad, el auto que la aceptase ó denegase no sería apelable; pero como la Cámara entró á entender en el fondo del asunto, resulta que el Juez de 1ª Instancia no es soberano en la apreciación, porque si lo fuera, el auto no sería apelable y por consiguiente la Cámara habría declarado mal concedido el recurso. Puede verse de acuerdo con el sumario, verb. *Fianza*, núm. 3, Inst., tom. 2º. En cuanto á la inapelabilidad del auto puede verse el mismo verb. núm. 4 del tomo citado. La Cámara de lo Comercial



calidad y el grado de responsabilidad del fiador propuesto.

—Jur. Civ., tom. 7, pág. 5, Ser. 4^a.

Fianza.—Véase: *Costas*, núm. 58—*Bienes*, núms. 2, 3 y 6—*Embargo*, núm. 2.

Fianza personal.—Véase: *Arraigo*, núm. 1.

Fijación.—Véase: *Condición resolutoria*, núm. 1—*Inpedimento dirimente*, núm. 1.

1. Filiación legítima.—Para que el adulterio sirva de prueba al desconocimiento de la filiación legítima, debe justificarse que tuvo lugar al tiempo de la concepción: los hechos anteriores á esa época no son pertinentes.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 165, Ser. 3^a.

2. Filiación legítima.—El testamento del padre es prueba bastante de la filiación en la testamentaria de la madre.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 214, Ser. 3^a.

ha declarado que el auto que no acepta una fianza es apelable y que el Juez no es soberano en la apreciación de la calidad y grado de responsabilidad del fiador propuesto, en el caso de Alvez de Araujo contra el Banco de Londres y Río de la Plata. El Juez de 1^a Inst. no aceptó la fianza del abogado patrocinante y la Cámara revocó la resolución.

1.—El art. 252 del Cód. Civ., establece que el marido que comprueba el adulterio y la ocultación del parto tiene derecho á contestar la legitimidad de su hijo. Igual disposición consigna la Ley 39, tit. 2, Part. 3^a, Mercadé, ocupándose de los arts. 312 y 313 del Cód. Nap., del cual han sido tomados los del nuestro, dice que esta acción puede tener lugar en tres casos diferentes: 1° Demostrando la absoluta imposibilidad para haber tenido acceso con la esposa, *por la época en que debió hacerse embarazada*, sobre lo que está obligado á producir prueba completa. El fundamento de la ilegitimidad no lo puede constituir el adulterio de la esposa tan solo, sino que es necesario que ese adulterio haya dado por resultado el embarazo de la esposa y el nacimiento del hijo cuya legitimidad se desconoce. Es necesario que la época del adulterio concuerde con la del embarazo.

2.—El Juez de 1^a Inst. dijo, que tales declaraciones solo pueden servir como antecedente, pero no como comprobación bastante para fundar la declaratoria, pues ésta solo puede dictarse en presencia de las respectivas partidas, con escepción de los casos en que es procedente la prueba supletoria. La Cámara revocó esta providencia fundándose en que el testamento es prueba bastante de la filiación.



3. Filiación legítima—A la madre que niega la filiación, corresponde la prueba de que la reclamante solo era adoptada, y que la posesión de estado de hija legítima debidamente justificada, solo respondía á un propósito caritativo. Jur. Civ., tom. 7, pág. 79, Ser. 3ª.

Filiación legítima Véase: *Declaratoria de herederos*, núms. 3 y 4.

1. Filiación natural—Justificada la vida licenciosa y el contacto carnal con varios hombres en la época de la concepción, la demanda sobre filiación natural debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 84, Ser. 3ª.

2. Filiación natural—Para la prueba de la filiación na-

3—La causal alegada importa una verdadera excepción, y es sabido que el demandado en la excepción se hace actor, incurbiéndole su prueba.

1—Durante la vida de los padres, para la manifestación de la paternidad ó maternidad, se admite todos los medios de prueba procedentes para comprobar los hechos y que concurren á demostrar la filiación—arts. 311, 324 y 325 del Cód. Civ.—Los hechos demostrativos de la filiación natural respecto del padre, los constituyen aquellos que justifiquen las relaciones ilícitas entre éste y la madre, cuando esas relaciones coinciden con la época de la concepción del hijo natural y cuando hayan sido mantenidas exclusivamente con el hombre á quien se atribuye la paternidad. Por consiguiente, se requiere la concurrencia de dos condiciones en las relaciones del pretendido padre con la madre para que el hijo pueda ser declarado como de aquel que le niega la paternidad, á saber: 1º que esas relaciones coincidan con la época legal de la concepción, puesto que sin establecer esta coincidencia no habría razón ni motivo alguno para establecer la relación necesaria que debe existir entre la causa y el efecto; 2º que esas relaciones hayan existido durante esa época con un solo hombre, pues de lo contrario sería imposible conocer cuál fué el autor de la fecundación.

2—En cuanto á la primera parte del sumario, puede verse la nota precedente. En cuanto á la necesidad de justificar la honestidad debe observarse que en el caso que nos ocupa, el demandado á quien se atribuía la paternidad, la negó por completo, alegando que si había tenido contacto carnal con la madre fué en un prostíbulo, y que obtuvo



tural durante la vida del padre, no basta justificar el contacto, debe justificarse que tuvo lugar en la época precisa de la concepción, y que la honestidad de la madre haga imposible la duda de que otro hombre pueda ser el autor de la fecundación. ---Jur. Civ., tom. 1, página 224, Ser. 3ª.

3. Filiación natural—No basta que el que se dice hijo

sus favores como tantos otros pagando un precio por ellos. Todo esto lo comprobó acabadamente. De aquí se deduce que si en el sumario se establece el requisito de la prueba de la honestidad indubitable de la madre, es por que esa honestidad fué puesta en duda por afirmaciones categóricas del pretendido padre, afirmaciones que fueron plenamente comprobadas. Resulta asimismo que la Cámara no ha querido imponer á la madre la carga de la prueba de su honestidad cuando ésta no ha sido puesta en duda ni objetada. Con tanta más razón no puede imponerse al hijo la prueba de este extremo, cuando es él quien deduce la acción y no la madre. Es principio general en procedimiento, que la prueba incumbe al que afirma un hecho nuevo en juicio.

3—Se trata de la comprobación de la filiación después de muerto el padre, la que solo puede establecerse por medio de la posesión de estado. Los hechos constitutivos de la posesión de estado son tres: *nomen, tractatus, fama*. En cuanto al *nomen*, es necesario que el hijo haya llevado el apellido del padre natural, porque este hecho constata no solamente el reconocimiento del padre, sino que autoriza á la familia de éste como á la sociedad para suponer la existencia de la filiación natural: pero ese apellido debe entenderse llevado con consentimiento del padre, es decir, que el mismo padre lo ha autorizado, y que no sea consecuencias de otro género que le hayan dado origen. En el caso que nos ocupa, el apellido lo llevaba porque el hijo fué arrojado á un zaguán de la casa de la familia á la que pertenecía el presunto padre, pero éste no era el jefe de la casa. En estas circunstancias es fácil explicar cómo llevaba esa persona el apellido de su pretendido padre, pues es costumbre entre nosotros que los huérfanos y aún los sirvientes que carecen de apellido, lleven el de los dueños de la casa donde son recogidos ó prestan sus servicios. Para un hijo natural su posesión de estado consistirá en que si bien el padre no hubiese reconocido por documento su paternidad, tampoco la negase, pero confesando quizá privadamente y conduciéndose con aquél, en todas ocasiones, como padre, según suelen hacerlo los demás en igual caso, prove-

natural, lleve el apellido del pretendido padre para que este hecho acredite la filiación, es necesario que el mismo padre sea quien haya autorizado ese uso.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 358, Ser. 3ª.

4. Filiación natural --Al que demanda la declaratoria

yendo á sus necesidades y procurando su bienestar; todo lo que puede demostrarse por una serie de hechos bien caracterizados que escluyen toda duda. Cuando el autor del Cód. Civ. exigía en la nota al artículo 325, la presentación del hijo á su familia, que el padre hubiese tenido en su casa á la concubina manteniéndola públicamente, reconociendo su paternidad ante innumerables personas, no hace el legislador otra cosa sino presentar un caso de posesión de estado, el más notorio: la misma rareza del caso hace comprender que es un ejemplo puesto allí, no como condiciones requeridas para la existencia de la posesión de estado. El Dr. Velez quería con eso criticar el sistema francés que solo admite la prueba por documento auténtico, demostrando con los hechos enumerados, que la posesión de estado que esos hechos crean, puede en muchos casos tener mayor eficacia que el documento auténtico exigido por la ley francesa. Véase Demolombe, tom. 5, página 485, 496 y 498. Entre los medios por los que puede establecerse la posesión de estado se encuentra el *nomen*, que siempre que fuese usado con asentimiento del padre sería una prueba poderosa.

4—Se argumenta en contra de este principio diciendo que si la ley, para calificar á una persona como hijo natural, requiere que sus padres al tiempo de la concepción, pudieran casarse entre sí aunque fuese con dispensa, para ser declarado tal hijo hijo natural de un individuo, no le bastará el acreditar que éste en realidad es su padre, si no prueba además que al tiempo en que fué concebido aquél, podía haberse casado con la madre. Ahora bien, es evidente que esto no podría saberse ni hacerse constar sin que aparezca quiénes son los dos padres; porque si solo fuese conocido uno de ellos, aunque éste siendo soltero ó viudo, bien pudiera casarse, quizá no podría hacerlo con el otro por resultar respecto de él algún impedimento dirimente no dispensable, cual sería por ejemplo, el que estuviese ya casado. Si la ley, distinguiendo primero los hijos legítimos de los ilegítimos, divide después á éstos en naturales y espúrcos, y reconoce en aquéllos ciertos derechos que niega á los segundos, no puede permitirse á éstos hacerse pasar por naturales respecto de una persona que digan ser su padre, con ocultar el nombre de la madre, como sucedería muchas veces





de esta filiación, solo corresponde probar el carácter que se atribuye con relación á la persona de quien se pretenda hijo; no está obligado á declarar el nombre del padre

si fuese lícito reclamar la filiación respecto de uno solo de los padres, callando el nombre del otro sea quien sea. Todo esto es cierto, pero no alcanza á demostrar la verdad de las tesis en cuya comprobación se aduce, es decir, que no sea permitido reclamar la filiación natural respecto de uno solo de los padres, sin demandar al mismo tiempo y sin determinar el otro, lo cual solo se encuentra prevenido respecto de la filiación legítima—art. 260 del Cód. de Proc.—Podría ser que solo se conociese á uno de ellos. ¿Por qué la ley le había de quitar ese único autor conocido de sus días? Puede suceder que estuviese constatado de una manera cierta y positiva cuál es la madre, ignorándose absolutamente quién sea el padre. ¿En qué calidad había de ser tenido el hijo, como natural ó como espúreo? Esta última condición supondría un caso de excepción, y es doctrina aceptada que los casos de excepción no deben admitirse sino en una forma muy restringida y cuando sean comprobados: debe estarse siempre al principio general. La regla general es que á cualquiera le es dado casarse, y en caso de duda, lo razonable es suponer lo que sucede con más frecuencia. El incesto, adulterio ó sacrilegio, por otra parte, supondría un delito cometido por los padres; pero como el delito jamás se presume, ni debe admitirse mientras no se pruebe, resulta que constando la filiación de una persona respecto de otra, y apareciendo ser ilegítima, debe considerarse natural y no espúrea, á menos que quien sostenga lo contrario lo demuestre. Cuando una madre después de tener un hijo natural se casa con otro que no es el padre de su hijo, ese hijo no perdería su derecho de filiación respecto del padre; al reclamar su filiación no debiera exigírsele el nombre de la madre, porque respecto de ella, la indagación de la maternidad está prohibida por la ley—art. 326, Cód. Civ.—La ley no impone al hijo natural, cuando solicita ser declarado tal, que dirija su acción conjuntamente contra padre y madre, solo exige esto al que solicita ser declarado hijo legítimo—art. 260.—Por el contrario, resuelve que puede hacerlo respecto de uno de ellos, desde que da lugar al reconocimiento que uno solo de ellos haga de su paternidad. Que esto es así, se deduce claramente de la disposición que prohíbe á cualquiera, al reconocer á un hijo natural, declarar en quién lo hubo, á menos que esa persona lo tuviese ya reconocido también—art. 334.—Resulta de lo espuesto que en la demanda para el reconocimiento de la filiación natural contra uno de los padres, no es esencial designar el otro, y



ó madre que no es parte en el juicio.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 358, Ser. 3ª.

5. Filiación natural—Justificada la posesión de estado, procede la declaración de la filiación natural.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 136, Ser. 3ª.

6. Filiación natural—La prueba, para justificar la filiación natural durante la vida del padre, debe recaer directamente sobre la paternidad, puesto que la posesión de estado haría innecesaria la acción.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 150, Ser. 3ª.

7. Filiación natural—Justificado el reconocimiento que el padre hacía de la paternidad, procede la declaración de la filiación natural.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 24, Ser. 3ª.

8. Filiación natural—Justificados los hechos que hacen que si bien es cierto que apareciendo haber existido entre ambos un impedimento dirimente no dispensable, tal demanda caducaría, esa prueba en todo caso sería á cargo del demandado, el cual alegaría un hecho excepcional; no del demandante, que esta parte negando simplemente tendría además en su favor la presunción que esa duda induce á admitir las más de las veces; y sobre todo á rechazar la existencia de un delito no justificado.

5—Art. 325 del Cód. Civ.

6—La posesión de estado es uno de los medios, el más eficaz de los establecidos por la ley, y puede servir de prueba no solo después del fallecimiento del padre, sino también durante su vida, á fin de dejar constancia en una forma solemne de la filiación invocada. No es pues, exacto lo que dice el sumario de que la posesión de estado hace innecesaria la declaración de filiación, pues aquella puede ser impugnada por cualquiera que tenga interés en hacerlo, mientras que la sentencia que declara la filiación una vez pasada en autoridad de cosa juzgada se tiene como una expresión fiel de la verdad sin que se admita prueba en contrario.

7—Porque ese reconocimiento importa la posesión de estado, y en este caso la filiación natural debe ser declarada. Véase el núm. 5.

8—No se requiere para comprobar la filiación natural la justificación del hecho material de la unión carnal de la madre con el hombre á quien se atribuye la paternidad, sino de los hechos que concurren á demos-



presumir las relaciones carnales en la época de la concepción, debe conceptuarse probada la filiación natural en tanto no se justifique la mala conducta de la madre,

trarla, como lo dice el art. 325 del Cód. Civ., por la dificultad inherente á la misma naturaleza de los hechos, pues como dice el Dr. Velez al anotar este artículo, las leyes, no pudiendo llegar á una perfección absoluta, se han guiado en la constitución de las pruebas por lo que regularmente sucede, por meras presunciones de hombre. En el caso del sumario se comprobó que el hombre había visitado á la concubina á altas horas de la noche, que había pasado toda la noche con ella retirándose recién al día siguiente; y si en caso el individuo llamado á explicar razonablemente su conducta no lo hace, debe presumirse que mantiene con esa mujer relaciones ilícitas porque es lo que regularmente sucede en casos semejantes. Y si esas relaciones ilícitas concuerdan con la época en que esa mujer ha concebido, debe presumirse que ellas han dado origen á la concepción, puesto que existe entre éstas y aquéllas la relación indestructible que entre el efecto y la causa, á no ser que se pruebe que tuvo otra causa que pudo producir el mismo efecto. Para resolver cuestiones de esta naturaleza bajo el imperio de nuestro Cód. Civ. no debe olvidarse la favorable doctrina que éste sigue con relación á los hijos naturales, y que informan no solo sus disposiciones expresas respecto á los derechos que les acuerda, sino también las notas explicativas que sobre el particular creyó oportuno agregar el legislador, como un medio de poner de relieve su pensamiento sobre un punto tan principal en el derecho de las personas. La conducta de la madre anterior ó posterior á la concepción del hijo no puede influir en el derecho de éste para atribuir su filiación al hombre con quien aquella mantuvo exclusivas relaciones ilícitas en la época en que fué engendrado. Mucho se ha declamado contra las mujeres fáciles que conciben fuera del matrimonio, y contra los peligros de atribuir equivocadamente la paternidad de su hijo, olvidando que esos hijos deben el ser á la irregularidad de la vida de sus padres, puesto que forzosa, necesariamente, deben tenerlo y que, en todo caso, los resultados de una equivocación semejante, solo daña á los que voluntariamente se han puesto en condición de sufrirla pasivamente. El estado, la sociedad, el hijo, tienen derecho á descubrir y conocer cuál es el padre, para compelerlo á cumplir el deber más sagrado de los que la naturaleza impone, mientras que el padre no tiene derecho á sustraerse al cumplimiento de los deberes que la paternidad irroga. Debe entonces favorecerse la prueba de la filiación natural, puesto que en ello, si alguna injusticia pudiera haber en



cuya prueba corresponde al que la alegue.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 31, Ser. 3ª.

9. Filiación natural—En vida del padre, puede justificarse por todos los medios que la ley permite para probar los hechos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 319, Ser. 3ª.

10. Filiación natural—Si ésta ha sido reconocida por el padre en instrumentos públicos, no se requiere igual declaración para intervenir en los autos testamentarios.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 434, Ser. 3ª.

11. Filiación natural—Justificada la posesión de estado,

casos excepcionales, siempre sería insignificante comparada con la gran injusticia que resultaría de restringirla cuando se trata de hechos en que el interesado, el hijo, no fué parte, ni está en sus manos procurarse otros elementos de convicción que los que la suerte le ofrece, á pesar de las precauciones que oportuna y medítadamente pudo tomar el padre. Estos fueron los fundamentos de la sentencia de 1ª Instancia dictada por el Dr. Pizarro, los que fueron reproducidos por el Fiscal de las Cámaras Dr. Cortés, agregando que la filiación natural debiera declararse porque, por una parte el tiempo que duraron las relaciones coincidía con la época del embarazo; y por otra parte, no se había justificado que aquella mantuviese durante la misma época con otros individuos iguales relaciones.

9—Art. 325 del Cód. Civ. De acuerdo con la jurisprudencia establecida por los Tribunales. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Filiación natural*, núms. 1 y 6; tom. 1, mismo verb., núm. 1218.

10—El art. 325 del Cód. Civ. dice: «Los hijos naturales tienen acción para pedir ser reconocidos por el padre *cundo éste negase* que son hijos suyos.» No negando el padre durante su vida la paternidad, no es procedente la acción. Este fué el argumento del juez de 1ª Instancia, pero la sentencia en su parte dispositiva declaró al postulante hijo natural del demandado. El Fiscal Dr. Cortés dijo, que como la filiación constaba en documentos auténticos y fehacientes, como lo son las actuaciones judiciales y la partida de bautismo sacada de los libros parroquiales, en su concepto el pleito no tenía razón de ser, pues no es necesaria la declaración del Juez cuando existe el reconocimiento expreso del padre. La Cámara confirmó la sentencia declarando la filiación natural en la forma solicitada.

11—Art. 325 del Cód. Civ.



procede la declaración de filiación natural.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 229, Ser. 3ª.

12. **Filiación natural**—Procede el rechazo de la acción de filiación natural ejercida por la nieta en virtud del derecho de representación, en tanto no justifique el reconocimiento hecho en vida por la madre natural.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 12, Ser. 3ª.

13. **Filiación natural**—Justificada la posesión de estado, la declaración de la filiación natural es ineludible.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 195, Ser. 4ª.

14. **Filiación natural**—Tratándose de probar la pose-

12—La hija legítima de un causante se presentó reclamando derechos hereditarios en la sucesión de la madre natural de su padre legítimo: la sentencia rechazó la demanda fundándose en que no se comprobó suficientemente la filiación natural del padre de la actora. Si no se comprueba la filiación natural del padre, la demanda no puede prosperar, porque este hecho es el fundamento de la acción deducida.

13—Art. 325 del Cód. Civ.

14—Esta sentencia se dictó por mayoría de un voto en la Cámara. El Juez de 1ª Instancia dijo que los hechos probados eran más que suficientes para establecer la posesión de estado invocada por los hijos naturales, y que por nuestra antigua legislación bastaba para probar la filiación natural, el hecho de nacer el hijo en casa del hombre que tenía en la madre su concubina, cuando los padres podían casarse. Bastaba esta circunstancia para considerar probada la filiación; lo propio sucede en la legislación vigente. Pero cuando la concubina tiene un hijo y el concubinato continúa, debe presumirse que el hombre que la tiene en su casa reconoce por suyo el hijo que nace del concubinato. El sostener á los hijos de la concubina nacidos durante el concubinato, el tratarlos como hijos, presentarlos como tales á sus relaciones y á sus parientes, ya no deja duda alguna del reconocimiento que de la filiación hace el padre. ¿Qué mejor prueba podría exigirseles á los hijos? Esto preguntaba el Juez Dr. Pizarro al dictar esta luminosa sentencia. Resolución que fué dada de acuerdo con la opinión del Agente Fiscal. Apelada la sentencia, el Fiscal de las Cámaras Dr. Marengo pidió su confirmación. La Cámara la revocó por mayoría de un voto, fundándose ésta en que la falta de detalles en la declaración de los testigos era tan



sión de estado para declarar la filiación natural, no basta que los testigos declaren el reconocimiento hecho en su presencia, se requiere que determinen los hechos en virtud de los cuales se produjo, las personas presentes y todos los detalles ó circunstancias que puedan demostrar al

absoluta y que bastaba por sí sola para que se considerara completamente ineficaz la prueba testimonial. Aun bajo el sistema preceptivo, decía la mayoría, establecido en las leyes de Partidas, para la apreciación de esta prueba, se recomendaba muy especialmente á los Jueces, que al interrogar á los testigos cuiden de averiguar por sus respuestas, si saben lo que deponen por haber visto el hecho ó la cosa en disputa, con expresión de las fechas, lugar y de las personas que estaban presentes, enunciando en una palabra todas las circunstancias que pueden contribuir á demostrar la sinceridad del testigo y el conocimiento completo de los hechos acerca de los cuales depone. Y tales exigencias ó formalidades son aun más de rigor, ahora que la ley libra á la sana crítica del magistrado la apreciación del valor probatorio de la testimonial, teniendo muy en cuenta la razón de ciencia que los testigos hubieren dado, formalidades y exigencias que se hacen aun más necesarias en las causas de filiación, en las que de las esplicaciones que los testigos suministren deberá ó no resultar el conjunto de hechos que establezcan la prueba compleja de la posesión de estado, de hechos que demuestren un reconocimiento continuo y perseverante de muchos y variados actos. Para que las declaraciones puedan apreciarse conforme á las reglas de la sana crítica, es necesario que los testimonios expresen los hechos en que las fundan, pues de otra suerte, no manifestándose en qué consisten los actos de reconocimiento del padre, que dicen haber presenciado, serían los testigos y no el Juez, quienes en definitiva vendrían á juzgar si esos actos son ó no suficientemente demostrativos de la paternidad, lo que es inadmisibile. La minoría dijo todo lo contrario y manifestó que era tal el convencimiento que se apoderaba de su espíritu después del estudio de las pruebas producidas que no trepidaba un solo momento en votar por la confirmación de la sentencia, y se preguntaba: ¿Qué pruebas deben producirse en los casos de filiación natural? ¿Podría decirse escluidas algunas de las que se admiten por derecho para comprobar los hechos en general? La ley y la jurisprudencia contestan que nó. Los testimonios producidos, son concordantes todos ellos y procedentes de personas mayores de toda escepción, son sin duda suficientes para producir la prueba legal, conforme al principio consagrado por la ley 32,



Juzgado la ciencia y conciencia de la declaración.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 296, Ser. 4ª.

15. **Filiación natural**—La prueba plena de los impedimentos dirimentes no dispensables que cambiarían el carácter de la filiación y obligarían a los Jueces á rechazar la demanda, corresponde al que invoque su existencia.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 323, Ser. 4ª.

16. **Filiación natural**—En vida del demandado, puede probarse por todos los medios que la ley admite para probar los hechos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 323, Ser. 4ª.

17. **Filiación natural**—La prueba de la posesión de es-

tít. 16, Part. 3ª, sino también el convencimiento más completo de la filiación natural por la posesión de estado de que gozaron los menores en vida de sus padres. Esta clase de prueba debe tomarse en su conjunto; cada testigo no puede presentar la corrección irreprochable de un documento público, y basta que no estén convencidos de falsedad, ni haya sospecha de que lo sean, para llevar al ánimo del Juez la prueba de la verdad de sus declaraciones. Los testigos habían contestado á cada una de las preguntas que se les hizo, afirmando los hechos por el conocimiento personal que de ellos tenían; es decir, eran testigos de ciencia propia, no de oídas, y si no abundaron en otros detalles, no puede decirse por esto que carezcan de valor sus declaraciones, bastando saber que sobre esos detalles ó circunstancias en que podrían haber abundado no fueron preguntados. La demanda sobre filiación natural, fué rechazada por el voto de tres camaristas contra dos, habiendo tenido éstos en su favor las opiniones del Juez de 1ª Instancia, del Agente Fiscal y la del Fiscal de las Cámaras; total: cinco magistrados contra tres habiendo salido triunfante la opinión de éstos últimos que no consulta los verdaderos principios de la justicia, según puede verse por la exposición que queda hecha.

15—Véase: *Impedimentos dirimentes*, núm. 1.

16—Véase el núm. 9.

17—El padre había manifestado á algunas de sus relaciones, en un carácter íntimo y confidencial, que tenía una hija: esto no constituye la posesión de estado, ni siquiera puede tener el efecto de una prueba del reconocimiento de la filiación por ser regla admitida que las manifestaciones fuera de juicio solo revisten el carácter de confesión cuando se hacen con el propósito indudable de reconocer una obligación, y no



tado para declarar la filiación natural, después de la muerte del padre, debe ser clara y concluyente; no basta la sola confesión estrajudicial del causante si fué hecha incidentalmente y sin propósito determinado. — Jur. Civ., tom. 6, pág. 121, Ser. 4ª.

18. Filiación natural.—Justificada la posesión de estado, debe declararse la filiación, aun cuando el padre haya omitido hacer tal reconocimiento en el testamento. — Jur. Civ., tom. 9, pág. 347 Ser. 4ª.

como referencia incidental de un hecho ó acontecimiento al que no se le dá el alcance de espresión jurídica de la voluntad—Ley 7, tit. 13, Part. 3ª—Por liberal que sea nuestra legislación y por amplias las facultades conferidas á los Jueces para apreciar los hechos constitutivos de la posesión de estado, es necesario que la prueba producida sea aquella que se ve, que habla, que se palpa, esa prueba en cuya presencia el Juez puede dar su fallo con ánimo tranquilo. Se ha repetido con insistencia que la prueba de la posesión de estado por su índole propia no puede ser librada á la apreciación de los testigos y que si en algún caso éstos deben limitarse á deponer sobre los hechos, deduciendo el Juez sus consecuencias sin sujeciones estrañas, nunca debe observarse con más escurpulosidad el principio, que cuando se trata de la prueba de la filiación natural, por el mismo misterio de que la ley ha rodeado á los fenómenos de la generación y por la misma facilidad de ser inducidos los testigos en error. La amistad, la sociedad, la generalidad del dicho, no son razones concretas con las que pueda encadenarse las conciencias de los Jueces. Se ha dicho que la prueba de la posesión de estado debe ser pública, y si esa publicidad no ha de ser siempre absoluta, tampoco los hechos demostrativos de la posesión de estado pueden ser de tal carácter que hayan debido escapar al conocimiento de los testigos. No puede considerarse como un reconocimiento cuando no aparece ni el concubinato, ni los cuidados prestados á la madre y al hijo en los primeros momentos del alumbramiento de aquella, ni más tarde los vínculos del cariño manifestado por el alimento, el vestido, la educación, el trato, el nombre y en general esos hechos con los que la sociedad sabe distinguir los lazos del parentesco.

18—Y aun cuando hubiese afirmado no tener sucesión natural— Art. 321, Cód. Civ.



Filiación natural—Véase: *Partida de bautismo*, núms. 1 y 2—*Hijo natural*, núm. 1.

1ª. **Finca**—Los títulos de propiedad deben entregarse al heredero á quien se haya adjudicado mayor parte en la finca.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 147, Ser. 3ª.

Finca—Véase: *Escritura*, núm. 4—*Incidente*, núm. 2—*Venta*, núm. 10.

Finca contigua—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 78.

Finca gravada—Véase: *Abogado*, núm. 10.

1ª. **Firma**—Reconocida la que suscribe una diligencia judicial, queda reconocido todo su contenido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 52, Ser. 3ª.

2. **Firma**—Autenticada la firma de un documento privado, por fallecimiento del firmante, se considera autenticado su contenido.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 193, Serie 3ª.

3. **Firma**—Solo puede exigirse al firmante el reconocimiento de la firma de una obligación.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 81, Ser. 4ª.

4. **Firma**—La negativa á ratificarse en la de una tran-

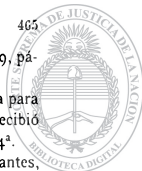
1ª—El desglose del documento debe hacerse en la forma ordenada por la Cámara. Véase: *Inst.*, tom. 3ª, verb. *Desglose*, núm. 9.

1ª—Art. 469 del Cód. de Proc.

2—Véase: verb. *Documento privado*, núm. 3.

3—Porque solo en este caso puede aplicarse la sanción contenida en el art. 1031 del Cód. Civ., ni hacerse efectivo el apercibimiento establecido en el art. 142 del Cód. de Proc.

4—Presentada en autos una transacción, una de las partes fundándose en que su contrario se había rehusado á firmar un escrito aclaratorio de la misma, manifestó el hecho al Juzgado pidiendo negara su aprobación al convenio celebrado, á lo que se proveyó de conformidad. La Cámara revocó el auto fundándose en que la ley no exige para la validez de las transacciones la observancia de formalidades estrictas, imponiendo solo, cuando versare sobre derechos litigiosos, que sea presentada al Juez de causa y firmada por los interesados —ar-



sacción, no impide su aprobación.—Jur. Civ., tom. 9, página 82, Ser. 4^a.

5. Firma—La falta de firma de la copia, no basta para dar por no presentado el escrito, si el secretario lo recibió sin observación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 136, Ser. 4^a.

6. Firma—A objeto de autenticarlas los firmantes, pueden comparecer sin las formalidades que la ley establece para los testigos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 10, Serie 4^a.

7. Firma—No procede el reconocimiento de la firma artículos 837 y 838 del Cód. Civ.—Estas mismas disposiciones autorizan únicamente el desistimiento de los interesados antes que la transacción sea presentada á la autoridad judicial, quedando definitivamente concluida, según el argumento del último artículo, después de aquella presentación ó después de haberse acompañado la escritura en que ella conste. La diligencia de ratificación no es un requisito necesario para la subsistencia jurídica del acto que ha quedado perfecto por su presentación al Juez, teniendo además para las partes la autoridad de la cosa juzgada. Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Firmas*, núm. 1.

5—Véase: verb. *Escrito*, núm. 8.

6—El Juez de 1^a Inst. no hizo lugar á que los firmantes de ciertos recibos, que fueron presentados con menos de tres días de anticipación al vencimiento del término de prueba, concurrieran á ratificarse en sus firmas, fundándose en que ellos no eran parte en el juicio, y en que además ni aún como testigos podían ser admitidos por cuanto cuando fueron presentados, faltaba menos de tres días para vencerse el término probatorio, de manera que no había sido posible dar cumplimiento á la disposición imperativa del art. 184 del Cód. de Proc. La Cámara revocó esta resolución fundándose en que solo se trataba de acreditar la autenticidad de los documentos agregados, no siendo indispensable que la comparecencia al juicio para el reconocimiento se produzca en la forma establecida en el auto de 1^a Inst. En el caso del sumario no se trata de la prueba de testigos sino de la prueba instrumental, estando esta diligencia regida por el art. 139 y siguientes del Código de Proc.

7—Porque esta medida está autorizada por el inc. 2^o del art. 435 del Cód. de Proc. con el objeto de preparar la vía ejecutiva. Si aún reconocida la firma, la ejecución no queda preparada, esa medida no pue-



de una obligación sin plazo, por no ser ejecutiva.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 148, Ser. 3^a.

Firma—Véase: *Desacato*, núm. 2—*Mandatario*, núm. 2—*Esposos*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 22—*Instrumento privado*, núm. 4—*Prueba de peritos*, núm. 1—*Par-tida de bautismo*, núm. 2—*Nulidad de un testamento*, número 2.

Firma á ruego—Véase: *Documento privado*, núms. 4 y 5.

Firma del fiador—Véase: *Contrato*, núm. 18.

Firmantes—Véase: *Autenticidad*, núm. 1—*Documento privado*, núms. 3 y 4—*Prescripción de la obligación*, número 1—*Testamento*, núm. 3—*Escritura pública*, número 29—*Acción*, núm. 3—*Acto jurídico*, núm. 2—*Compraventa*, núm. 2—*Boleto de compraventa*, núm. 13.

Fisco—Véase: *Título de propiedad*, núm. 20.

1. Fondos—La madre, en ejercicio de la patria potestad, no está obligada á tener depositados los fondos pertenecientes á los menores.—Jur. Civ., tom. 9, página 232, Ser. 4^a.

de ordenarse porque no tendría objeto, por cuanto no tiene plazo, y por consiguiente carece de uno de los recaudos indispensables para hacer procedente la vía ejecutiva. Con efecto, el art. 618 del Cód. Civil preceptúa que si no estuviere determinado en el acto por el que se ha constituido la obligación el día en que debe hacerse la entrega del dinero, el Juez señalará el tiempo en que el deudor deba hacerlo. Tampoco procedería el reconocimiento en el juicio ejecutivo, pues como medida de prueba que es, debe solicitarse en la estación oportuna del juicio.

1—A falta del padre ejerce la madre la patria potestad sobre sus hijos menores.—art. 305, Cód. Civ.—Y siendo la patria potestad el conjunto de los derechos que las leyes acuerdan á los padres sobre la persona y bienes de sus hijos, no pueden ser privados de ella sin causa legal justificada. Entre esos derechos se encuentra el que determina el art. 393, que los faculta para administrar los bienes de los hijos que están bajo su patria potestad: no hay disposición alguna legal que obligue á los padres á tener depositados los dineros de sus hijos menores.



2^a. Fondos—Depositados á los efectos de una transacción, no pueden ser embargados para responder á otras obligaciones de los mismos depositantes.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 311, Ser. 4^a.

Fondos—Véase: *Intereses*, núm. 1—*Embargo*, núms. 1 y 4—*Emancipación*, núm. 2—*Esposa*, núm. 4.

Fondos extraídos—Véase: *Depósito judicial*, núm. 1.

Fondos particulares—Véase: *Bienes*, núm. 5.

Fondos públicos—Véase: *Administrador*, núm. 1.

Fondos testamentarios—Véase: *Heredero*, núm. 4—*Herederos*, núm. 6.

1. Forma—El consentimiento de las partes exigido en un contrato por escritura pública, debe revestir la misma forma: el tácito que resulte del conocimiento personal que tuvo de la infracción, no importa la renuncia de su derecho para exigir la rescisión estipulada como pena.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 4^a.

2^b. Forma—La prueba de las modificaciones á un contrato por escritura pública, debe revestir igual forma.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 353, Ser. 4^a.

Forma auténtica—Véase: *Hijo natural*, núm. 9.

Forma de pago—Véase: *Construcciones*, núm. 2.

Forma determinada—Véase: *Dinero propio*, núm. 2—*Bienes*, núm. 4.

Forma intrínseca—Véase: *Inhabilidad de título*, núm. 5.

Forma tácita—Véase: *Ratificación*, núm. 2.

Formas externas—Véase: *Instrumento público*, núm. 3.

Formalidades—Véase: *Nulidad de sentencia*, núms. 14 y 19—*Firma*, núm. 6—*Notificaciones*, núm. 5.

2^a.—Véase: verb. *Embargo*, núm. 20.

1.—Véase: verb. *Contrato por escritura pública*, núm. 1.

2^b.—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: Inst., tomo 4^o, verb. *Contrato de mayor cuantía*, núms. 1 y 2.



Fórmula—Véase: *Abogados*, núm. 2.

Fraude—Véase: *Escritura pública*, núm. 32—*Escritura*, núm. 2—*Nulidad de un acto jurídico*, núms. 2 y 3—*Revocación*, núm. 1.

1ª. Frutos—El legatario de parte alicuota tiene derecho proporcional á los frutos ó renta de los bienes de la sucesión mientras dura la indivisión.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 418, Ser. 4ª.

Frutos—Véase: *Heredero poseedor*, núm. 1.

1ª. Fuero federal—El demandante por acción personal, puede renunciar al fuero federal ocurriendo á la jurisdicción del domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 113, Ser. 3ª.

1ª. Fuerza ejecutiva—Para que el testimonio de una sentencia tenga fuerza ejecutiva, debe contener constancia espresa de que está ejecutoriada.—Jur. Civ., tom. 2, página 229, Ser. 4ª.

Fuerza ejecutiva—Véase: *Afirmados*, núm. 3—*Obligación á plazo*, núm. 1.

Fuerza legal—Véase: *Apoderado*, núm. 5.

1ª. Fuerza mayor—Los hechos que previstos y tomados en consideración al formar el contrato, se suceden fuera de las condiciones naturales, importan la fuerza mayor que permite faltar á su cumplimiento.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 301, Ser. 4ª.

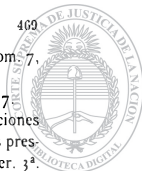
2. Fuerza mayor—Se conceptúa tal, la orden de una administración nacional que amparada por la fuerza pública

1ª—Véase: verb. *Bienes de la sucesión*, núm. 3.

1ª—Véase: verb. *Acción personal*, núm. 1.

1ª—Art. 535 del Cód. de Proc. «Consentida ó ejecutoriada la sentencia», dice el artículo citado.

1ª—Véase: verb. *Caso fortuito*, núm. 1.



deja sin efecto órdenes municipales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 186, Ser. 4^a.

Fuerza mayor—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 97.

1^a. Fuerza probatoria—Carecen de ella las declaraciones de testigos en que no se hubiesen observado las prescripciones de la ley.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 16, Ser. 3^a.

Fuerza pública—Véase: *Fuerza mayor*, núm. 2.

Funcionario—Véase: *Acto jurídico*, núm. 2.

1^b. Funcionarios públicos—Los Tribunales ordinarios son competentes para entender en una acción por daños y perjuicios contra funcionarios públicos, sin que sea necesario que los superiores del demandado se pronuncien sobre su culpabilidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 89, Ser. 3^a.

2. Funcionarios públicos—Los jueces no son demandables por daños y perjuicios ante los Tribunales ordinarios si la acción tiene por fundamento actos llevados á efecto en su carácter de funcionarios del Poder Judicial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 345, Ser. 3^a.

3. Funcionarios públicos—La aprobación del superior y aún la orden verbal, no eximen de responsabilidad al funcionario por la estralimitación de sus facultades legales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

4. Funcionarios públicos—Que estralimitando las atribuciones que la ley les confiere, irrogan perjuicios, son responsables civilmente de su indemnización.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 317, Ser. 4^a.

5. Funcionarios públicos—Que estralimitando sus facul-

1^a—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 2.

1^b—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 15.

2—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 14.

3—Véase: verb. *Facultades legales*, núm. 2.

4—Art. 1112, Cód. Civ.

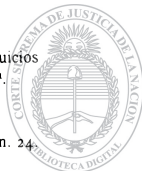
5—Véase el número precedente.

tades causan un daño, son responsables de los perjuicios que ocasionen.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 396, Ser. 4^a.

Fundación—Véase: *Capellania*, núms. 4 y 5.

Fundador—Véase: *Capellania*, núms. 1 y 2.

Fondos adyacentes—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 24.





Ganancia—Véase: *Juramento estimatorio*, núm. 9.

1^a. **Gananciales**—Solo puede oponerse á la inclusión de bienes en los gananciales, el esposo que se considere con derecho exclusivo á ellos.—Jur. Civ., tom. 1, página 328, Ser. 3^a.

Gananciales—Véase: *Bienes*, núms. 1 y 5.

Garantía—Véase: *Remate judicial*, núm. 3.

1^b. **Gastos**—El padre debe proveer de la suma necesaria para gastos de instalación de los menores además de la pensión alimenticia fijada por el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 419, Ser. 4^a.

1^a—El inmueble fué adquirido durante la sociedad conyugal, debiendo considerarse como ganancial—art. 1272, inc. 2º, Cód. Civ.—Cualquiera de los cónyuges que pretenda derechos propios exclusivos, debe comprobar que el inmueble es de su exclusiva propiedad. La ley presume que el bien es ganancial, salvo prueba en contrario.

1^b—Se había fijado una suma que el padre debía abonar como pensión alimenticia para sus hijos menores. Después se pidió además una suma para instalar á los hijos, proveyéndoles de muebles. El Juez dijo que en la primera suma fijada no estaban comprendidos esos gastos, los que indiscutiblemente debían ser abonados por el padre. El art. 372 del Cód. Civ. establece que la petición de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario, correspondientes á la condición social del que lo recibe y al caudal del alimentario, y que por consiguiente procedía la fijación de una suma para instalar á los hijos.



2^a. Gastos—El padre, usufructuario de los bienes de los menores, no puede cargar á éstos los gastos de contribución directa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4^a.

3. Gastos—El acreedor que ha dado fianza al recibir en pago el bien hipotecado, está obligado á la devolución en efectivo de lo que fué imputado á la deuda, pero nó de lo que se le adjudicó por costas y gastos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 394, Ser. 4^a.

Gastos—Véase: *Costas*, núms. 15 y 45—*Daños y perjuicios*, núm. 23.

Gastos generales—Véase: *Litispensas*, núm. 1.

Gastos urgentes—Véase: *Tutor*, núm. 1.

Gastos verificados—Véase: *Tutor*, núm. 5.

Gefe—Véase: *Proveedor*, núm. 1.

Gestión—Véase: *Contrato*, núm. 4—*Caución*, núm. 2.

1. Grado—El heredero de grado más próximo, que aceptando la herencia hace uso del derecho de petición, adquiere el patrimonio para sí y lo transfiere á sus herederos, cesando en consecuencia la personería de los de grado más lejano para iniciar la misma acción.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 250, Ser. 3^a.

2^b. Grado—El derecho que la ley confiere al pariente de grado sucesible más lejano, para gestionar los derechos hereditarios, por inacción ó renuncia del de grado más próximo, no puede ser usado, si el último aceptando la herencia ejercitó ese derecho.—Jur. Civ., tom. 6, página 250, Ser. 3^a.

Grado inferior—Véase: *Prelación*, núm. 1.

2^a—Véase: *Bienes de menores*, núm. 6.

3—Véase: verb. *Costas*, núm. 58.

1—Véase: verb. *Derecho de petición*, núm. 2.

2^b—Véase: *Derechos hereditarios*, núm. 4.



1. Graduación de créditos —El término para deducir oposición al estado de graduación de créditos, vence el día fijado en los editos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 392, Ser. 3^a.

Graduación de créditos—Véase: *Honorarios*, núm. 26—*Acreedor hipotecario*, núm. 1.

Gratuidad—Véase: *Depósito de muebles*, núm. 1—*Servicios*, núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12.

Gravamen—Véase: *Comprador*, núm. 4.

Guardadores—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 79.

1—El art. 738 del Cód. de Proc. previene que el estado de graduación de créditos quedará depositado en la oficina del actuario por el término de quince días para que puedan inspeccionarlo los acreedores, y agrega, que se anunciará en los periódicos que el Juez designe el depósito del estado y el término por el que estará á disposición de los acreedores. Ese término empezará á correr desde la fecha de la inserción del aviso en los diarios.



Haber hereditario—Véase: *Alimentos*, núm. 9—*Padre*, núms. 3 y 4.

Haber líquido—Véase: *Tutor*, núm. 8.

Habilitado—Acuerdo prohibiendo al habilitado de los Tribunales hacer anticipos de sueldos á los empleados y percibir remuneración aunque sea voluntaria.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 266, Ser. 4ª.

Hecho—Véase: *Prescripción de la indemnización*, número 1—*Costas*, núm. 23—*Divorcio*, núm. 4—*Escepción de inhabilidad de título*, núm. 6.

Hecho condicional—Véase: *Contrato verbal*, núm. 3.

Hechos—Véase: *Caso fortuito*, núm. 1—*Demandante*, núm. 1—*Escepción de defecto legal*, núms. 6, 8 y 18—*Prueba en segunda Instancia*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 113—*Hijo natural*, núm. 7.

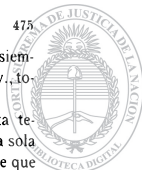
Hechos confesados—Véase: *Instrumento público*, núm. 4.

Hechos contradictorios—Véase: *Prueba*, núm. 1—*Nulidad de una sentencia*, núm. 7.

Hechos graves—Véase: *Patria potestad*, núm. 2—*Demanda*, núm. 3—*Calumnia*, núm. 2—*Costas*, núm. 59—*Escepción de defecto legal*, núm. 19.

Hechos inmorales—Véase: *Patria potestad*, núm. 1.

1. **Heredero**—El reconocimiento del carácter heredita-



rio hecho por los coherederos, es prueba suficiente, siempre que no afecte intereses de terceros.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 357, Ser. 3ª.

2. **Heredero**—El carácter de locatario que importa tenencia á nombre de otro, no puede modificarse por la sola voluntad, y por tanto se conserva aun en el caso de que por hechos sobrevinientes pudiera ser cambiado por el de heredero, mientras judicialmente no fuere reconocido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 245, Ser. 4ª.

3. **Heredero**—De grado más próximo, que aceptando la herencia hace uso del derecho de petición, adquiere el patrimonio para sí y lo transfiere á sus herederos, cesando en consecuencia la personería de los de grado más lejano para iniciar la misma acción.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 250, Ser. 3ª.

4. **Heredero**—El heredero que paga deudas de la sucesión reconocidas como auténticas por los demás coherederos, se subroga á los acreedores y tiene derecho á exigir su reembolso de los fondos testamentarios.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 117, Ser. 4ª.

5. **Heredero**—El más próximo debe obtener la posesión

1—Véase: verb. *Terceros*, núm. 1.

2—Arts. 2352 y 2354 del Cód. Civ.

3—Véase: verb. *Derecho de petición*, núm. 2.

4—Se trataba de una deuda que los herederos debían pagar con preferencia, de acuerdo con lo establecido en el art. 3495 del Cód. Civ. Si un heredero abona esas cuentas la subrogación se opera en virtud de lo establecido en el art. 792, inc. 3; y 771, inc. 1ª del Cód. Civil.

5—Esta resolución se dictó tomando como fundamento la vista del Fiscal Dr. Marengo, quien decía: «Cuando pretenden una herencia personas que figuran en distinto grado sucesible y surge controversia sobre el título hereditario que invocan, solamente la carencia completa de elementos probatorios puede dar lugar á que se reconozcan como herederos á los que serían escludidos si otros justificaran el parentesco en el cual fundan su título. De otro modo obtendrían el carácter hereditario



de la herencia con preferencia al más lejano.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 24, Ser. 4^a.

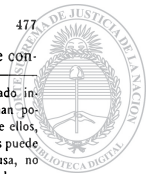
6. **Heredero**—Antes de la partición, los herederos tienen derecho á pedir una cuota alimenticia imputable á su haber.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 399, Ser. 4^a.

7. **Heredero**—El que recibe como de su causante el bien

y la posesión de la herencia los que más actividad desplegaran en la comprobación del parentesco. Así veríamos á los colaterales excluyendo á herederos directos, y entre aquellos excluyendo los más remotos á los más próximos. En el caso actual aspiran al título hereditario personas que se dicen hijas del causante y otra que se dice hermana. Los primeros tienen en su favor una partida de bautismo y ofrecen comprobar el matrimonio. La segunda ha comprobado su parentesco y por el simple hecho de desconocer el carácter de hijos legítimos, que los primeros invocan, pretende que se la declare heredera y se obligue á los que se dicen hijos á justificar en juicio contradictorio el carácter de tales. Esto es contrario á toda razón y justicia, y por consiguiente opino que V. E. debe confirmar el auto apelado que manda admitir una información sumaria para comprobar el matrimonio del causante con la madre de los pretendidos hijos, á consecuencia de la falta de asientos en los libros parroquiales que lo acredite en debida forma.»

6—Véase: verb. *Alimentos*, núm. 9.

7—Varios hermanos heredaron conjuntamente de su padre un inmueble, adjudicándose por la partición de dicha herencia á cada uno de los coherederos una parte en dinero sobre la mencionada finca: es decir, que la propiedad fué tasada en una suma determinada y en ese precio se adjudicó á cada heredero su parte, de manera que no hubo división material, sino simplemente ideal. Posteriormente, mucho tiempo después, por muerte de uno de los coherederos primitivos, la finca fué adjudicada en su totalidad á los sucesores de uno solo de los coherederos, con olvido y prescindencia del coheredero que tenía en ella una parte. Con estos antecedentes, el señor Juez de 1^a Instancia dijo que «basta dejar así planteada la cuestión para resolverla, á no ser que fuese efectivo que realmente la indivisión no existió desde su origen. Decía además el Dr. Mendez Paz, en esta bien meditada sentencia, la que fué injustamente revocada por la Cámara, que es insostenible pretender que la indivisión á que se ha hecho referencia ha dejado de existir, dados los hechos espuestos, pues la adjudicación en dinero sobre la finca, si dividía la herencia, no dividía la propiedad, que seguramente quedaba in-



hereditario, se supone que posee para sí, y los que se con-

divisa entre los condóminos adjudicatarios. Y habiendo quedado indivisa, hay que averiguar si los que oponían la prescripción han poseído ó han podido poseer legalmente la finca que pretendían ser de ellos, en virtud del único título que la posesión por el trascurso legal les puede acordar. Los coherederos primitivos, sin haber mediado otra causa, no han podido cambiar por sí la de su posesión y por lo tanto, cada uno de aquellos coherederos primitivos poseyó en común la cosa con los otros, según lo enseñan los principios más elementales del derecho—Ley 5, tit. 15, Lib. 4º, R. C.—y transmitió á sus herederos y sucesores la mencionada propiedad en las mismas condiciones en que la tenía—art. 2353 y concordantes del Cód. Civ.—Por consiguiente, poseyendo los sucesores de los primitivos herederos, la propiedad litigada en las mismas condiciones que su causante, ella puede ser reivindicada por los que se consideren comuneros, á no mediar otras razones que puedan influir en las ulterioridades de esa posesión, porque estando indivisa la propiedad, la acción que les acuerda los arts. 2679 y 2761 del Cód. Civ. es imprescriptible como lo ha sido siempre por la legislación anterior al Código. Se alegó asimismo haberse operado la retroversión del título: pero este argumento es inaceptable porque esa doctrina, sin ningún género de duda, es contraria á nuestra legislación antigua y vigente, y para demostrarlo basta citar los arts. 2447 y 2449 del Cód. Civ. La retroversión no existe ni puede existir entre nosotros, porque la posesión subsiste aún cuando el que poseía á nombre del poseedor *manifestase la voluntad de poseer á nombre suyo*—art. 2447—Y es esto precisamente lo que hizo uno de los coherederos primitivos y los sucesores de éste, porque cuando *aquel por medio del cual se tiene la posesión muere, la posesión se continúa por medio del heredero, aunque éste creyese que la propiedad y posesión pertenecían á su autor*. Luego, aunque por las cuentas participatorias de uno de los coherederos primitivos y de su esposa, los sucesores de estos hayan creído que la propiedad y la posesión pertenecían á sus causantes; ellos, los sucesores y herederos continuaban poseyendo con sus condóminos. Además, aún en el supuesto de que la retroversión del título estuviese admitida por nuestra legislación, ella, según la doctrina francesa, nunca procede sino cuando existen actos materiales que en el caso del sumario no han existido, y el mismo art. 2458, que se decía consagraba la doctrina de la retroversión, no solo no la consagra, sino que él se refiere, como lo enseña la Ley 13, tit. 30, Part. 3ª en que se apoya el codificador, al caso en que hubiese una pérdida material de la posesión por actos de esa naturaleza *detradendo*



sideren con derecho por un condominio anterior, deben

realiter possessionem et non per actos fictos—que no eran los que en el caso que nos ocupa habían existido. La escepción de prescripción no podía prosperar porque, no habiendo existido actos legales por los cuales puede pretenderse un cambio en la posesión, ni aquellos hechos *reales* y *efectivos* en virtud de los cuales se puede por derecho desapoderar á otro de la posesión que antes tenía, dicha posesión había continuado por medio de los mismos sucesores de los coherederos primitivos á favor de los otros; pues no pueden revestir ese carácter—*detradendo realiter possessionem*—la simple voluntad de cambiar la posesión, que otra cosa no importa «que el que poseía á nombre de otro, como los coherederos primitivos hayan arreglado sus sucesiones testamentarias como si las cosas les perteneciere en su integridad completa,» como decía el escepcionante. Aun en la hipótesis de que el art. 2458 del Cód. Civ. consagrase la doctrina de la retroversión del título, ella no se habría realizado porque no se habrían cumplido las condiciones exigidas por la ley que sirven de fundamento á este artículo—Ley 13, tit. 30, Part. 3ª citada—á saber, actos exteriores que tengan la capacidad legal de producir el efecto de la pérdida de la posesión. Esta bien meditada sentencia fué revocada por la Cámara constituida en Tribunal de Interlocutorias, fundándose en que, si bien es cierto que las adjudicaciones no se hicieron en fracciones determinadas de terreno, sino en cantidades de dinero, según el valor respectivo de los mismos, debe tenerse en cuenta, en lo que respecta á la articulación promovida, que según manifestaciones espresas de los actores y resultante de la causa, ocurrido en 1847 el fallecimiento de uno de los coherederos primitivo y causante de los poseedores actuales, el predio cuestionado figuró entre sus bienes fincados, siendo inventariado en ese carácter, y adjudicado en su totalidad á una de estas últimas según división practicada el mismo año del deceso de uno de los primeros: que habiendo fallecido más tarde y promovido el juicio respectivo de testamentaria, la referida propiedad fué adjudicada por fracciones á sus hijos que son los que la ocupan actualmente y contra los cuales se ha deducido la presente demanda reivindicatoria. Que dados estos antecedentes y cualquiera que sea el alcance ó inteligencia que se atribuya á la partición originaria de 1816, es incuestionable, que la cosa ha sido poseída *animo domini* por uno de los sucesores una vez que le fué adjudicada en su carácter de heredero, en su totalidad y con prescindencia absoluta de los primitivos coherederos. Que es evidente que si esta adjudicación, por la forma en que se llevó á cabo, lesionaba los derechos de los otros coherederos, debieron éstos ejercitar sus

ejercer sus acciones en tiempo oportuno para interrumpir

acciones en el modo y en el tiempo que las leyes entonces vigentes les acordaban, que la propia demanda ha puesto entre tanto de manifiesto la inacción ó negligencia, tanto de la causante como de sus sucesores universales, á contar desde la época remota en que se verificó á favor de uno de ellos, la adjudicación de la finca hasta la fecha de la demanda, es decir, durante cuarenta años próximamente. Que en esta situación y en conformidad á nuestras antiguas leyes, bajo cuyos preceptos cae el caso *sub-judice*, es indiscutible la procedencia de la articulación opuesta por los sucesores de los primitivos coherederos. Según las leyes 63 de Toro, y 6ª, tít. 15, lib. 4º, R. C., las obligaciones mixtas de personal y real se prescribían á los treinta años. La Ley 7ª, título 14, Part. 6ª, establecía á su vez que: «si aquel que ha derecho en la heredad, non la demanda á los tenedores della fasta los treinta años sabiendolo y pudiendolo fazer, pierde por su negligencia aquel derecho que en ella auia e ganala por este tiempo el otro que la toue.» Estos principios son hoy doctrina general; han sido incorporados á las disposiciones del Código Civil—arts. 3949 y 4017—y es oportuno recordar que según las fuentes que han inspirado estas disposiciones, la prescripción propiamente dicha, no requiere en general otra condición que la inacción ó negligencia de aquel contra quien se invoca. Que en cuanto á los hechos, los demandados han justificado con haber ocupado pública y pacíficamente y sin interrupción el inmueble, por más de cuarenta años, sin que de su parte los otros coherederos ó sus causantes hayan ejercitado sobre el acto posesorio alguno. Que de otro lado no se ha intentado siquiera demostrar por los mandantes, que durante este largo lapso de tiempo hayan hecho valer los derechos que al presente gestionan, ni reclamado judicial ó extrajudicialmente contra los poseedores del predio por razón de la adjudicación de 1847. Con la prueba de confesión solo se ha tratado de establecer que la actora había vivido en la quinta hasta el año de 1868, lo que no se niega por la defensa, aunque se afirma que fué como simple locataria y además que los demandados creyeron constantemente que el predio en cuestión les correspondía en condominio, lo que ha sido categóricamente contestado. Las buenas relaciones de amistad entre los antecesores del demandante y demandado, relaciones que persistieron hasta el fallecimiento de los primeros, no es un extremo que conduce al artículo ni que favorece el derecho de los reivindicantes, siendo en verdad inexplicable esa frecuencia de tratos con personas que habían inferido serios agravios á sus derechos, y más inexplicable aún durante largos años. Esta sentencia de la Cá-



la prescripción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 111, Ser. 4ª.

mara no resista la más sencilla de las réplicas. Estudiando sus fundamentos se ve que no es la justicia la que campea en este fallo sino el más evidente y palmario de los errores jurídicos que pueden cometerse. Puede decirse que el fallo dictado por el Dr. Méndez Paz, es la más clara protesta contra este avance violatorio de la legislación, llevado a cabo por la Cámara. Se cita la ley 7ª, tit. 14, Part. 6ª, para fundar el derecho que tenían los sucesores de uno de los coherederos primitivos para prescribir por la mera inacción de sus condóminos. Pero si esta ley rige para los casos en que no existe indivisión, no puede regir para cuando esa indivisión existe. La cita hecha por la Cámara adolece de la más evidente mala fe. Es una cita verdaderamente falsa. Dicha disposición legisla para el caso en que no sea el coheredero ó el condómino el que posea los bienes de la herencia, sino cuando el poseedor sea un extraño ó un tercero respecto del verdadero heredero. Así, uno de los ejemplos, dice: «La primera es, quando aquel que la tiene, cuida auer derecho en ella por alguna razon e non lo ha. E esto sería, si la ouisse comprado de alguno que non ouisse derecho en ella, cuidando que era suya; ó si alguno fuesse establecido por heredero en alguno testamento, que después fuesse reuocado, non lo sabiendo él. E en tal caso dezimos, que si aquel que dize que ha derecho en tales bienes como éstos non lo demandare en juyzio fasta diez año, á aquel que assi lo tiene, seyendo en la tierra ó fasta veinte seyendo en otra parte, que perdería despues su derecho; e gana la herencia aquel que fuesse asi tenedor de ella.» Como se ve en el caso citado por la Ley de Partida, no hay estado de indivisión, no hay condominio, sino que toda la herencia pasa por testamento á una persona que á no existir éste, no tendría derecho á la herencia, sino que correspondería al heredero legítimo. Cuando existe condominio, esa prescripción no procede aun que pasen mil años; porque esa posesión es viciosa y nadie pueda cambiar por sí mismo ni por el trascurso del tiempo la causa de su posesión. Sinembargo el fallo de la Cámara viene á suprimir con un solo rasgo de pluma esta disposición legal que ha sido establecida como una de las más preciosas garantías contra la usurpación de la propiedad. Pero el inmueble era muy valioso y los demandados muy poderosos. Como se ha visto en el curso de esta nota: la división en vez de hacerse sobre el terreno, se había hecho sobre su valor, adjudicándose á cada heredero una suma determinada de dinero sobre una parte indeterminada del inmueble, ó mejor dicho, sobre todo él. La indivisión, pues, continuaba, porque como dice Demolombe: «La división





8. **Hereditario**—No procede la venta de la cosa común si admite cómoda división en especie y si no existe la conformidad de los herederos.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 189, Ser. 4^a.

9. **Hereditario**—Las cantidades adjudicadas sobre un bien testamentario para el pago de la hijuela de deudas, aumentan el haber del heredero encargado de ese pago, y en consecuencia los condóminos herederos no pueden pretender se dividan las rentas por partes iguales, sino equivalentes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4^a.

10. **Hereditario**—Los títulos de propiedad deben entregarse al heredero á quien se haya adjudicado mayor parte en la finca.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 147, Ser. 3^a.

Hereditario—Véase: *De oficio*, núm. 1—*Falsedad*, núm. 6—*Administrador*, núm. 3—*Condominio*, núm. 9—*Poder especial*, núm. 6—*Rendición de cuentas*, núm. 25.

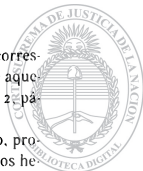
1. **Hereditario poseedor**—El heredero poseedor de la herencia para ser completa y definitiva debe hacer cesar la indivisión completa y definitivamente entre los coherederos; y no existe verdadera y definitiva partición mientras la indivisión continúa subsistiendo de cualquier manera y sobre cualquier punto que sea.—Véase: tom. 15, § 614.—Si en vez de citar con toda malicia el párrafo trunco de la Ley de Part., la Cámara hubiese citado el que acabamos de transcribir, otra hubiese sido la suerte del pleito, pero no se ven sino las cosas que se quieren ver. El mismo demandado creyéndose vencido recurrió al argumento absurdo de la retroversión, la que está completamente desechada por nuestra legislación. Pero estaba escrito que debía triunfar y triunfó en contra de la ley expresa y de la doctrina sustentada por los publicistas más notables. El fallo está en abierta oposición con los artículos 2353, 2447, 2449, 2679, 2691 y 4019, inc. 3^o del Cód. Civ.; Ley 5^a, tit. 15, lib. 4^o, R. C.

8—Véase: verb. *División en especie*, núm. 1.

9—Véase: verb. *Condominio*, núm. 3.

10—Véase: verb. *Finca*, núm. 1.

1.—La regla establecida en la ley 4^a, tit. 14, Part. 6^a, es que el Juez al mandar que se entregue una herencia á aquel que debe haberla,



rencia, debe entregar á sus coherederos la parte correspondiente con sus frutos, desde que el derecho de aquellos fué reconocido judicialmente.—Jur. Civ., tom. 2, página 71, Ser. 3^a.

1. **Herederos**.—Justificado el carácter hereditario, procede la declaratoria de universales pero no de únicos herederos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 252, Ser. 3^a.

2. **Herederos**.—Para que el reconocimiento de un deuda por los representantes de los herederos obligue á la testamentaria, deben aquéllos tener facultad especial en el instrumento del mandato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 259, Ser. 3^a.

3. **Herederos**.—La compra á perpetuidad del terreno en que se encuentra la bóveda de familia, en venta particular y como heredero del anterior arrendatario, establece un condominio con los demás herederos, para cuya adquisición solo están obligados á abonar la parte que les corresponda en el precio de la compra.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 116, Ser. 3^a.

4. **Herederos**.—O acreedores, solo pueden intervenir en
mandará también que se le entreguen los frutos de ella; pero si el anterior poseedor de la herencia, siéndolo de buena fe, hubiese gastado los frutos que hubiere percibido de la misma, no estará obligado á entregar su valor. Esta escepción establecida por la ley á favor del poseedor de buena fe, no puede beneficiar á aquellos que continúan en posesión de la herencia á pesar de haber sido reconocido judicialmente, á favor de otro, el derecho á esa herencia, pues la sentencia los constituye en poseedores de mala fe.

1—Los pretendientes á la herencia solo pidieron la declaratoria de *herederos universales* pero no de *únicos*, y fundándose la Cámara en esta circunstancia resolvió de conformidad.

2—El art. 1881 en su inc. 17, establece la necesidad de un poder especial para reconocer ó confesar obligaciones anteriores al mandato.

3—Véase: verb. *Compraventa*, núm. 4.

4—El Juez dijo que, desde el momento que el postulante no era

los autos testamentarios los herederos ó acreedores que hayan justificado su carácter.—Jur. Civ., tom. 1, página 159, Ser. 4ª.

5. **Herederos**—Los herederos no pueden reclamar de terceros, los bienes propios enajenados por los padres du-

acreedor reconocido contra la testamentaria, ni tampoco interesado, ni representante de alguno de los herederos, según resultaba de autos, no puede en manera presentarse reclamando ninguna medida en dicha testamentaria. La Cámara confirmó el auto por sus fundamentos, y por no constar en autos comprobante alguno del carácter de acreedor invocado. El sumario no está bien, pues la parte que se relaciona con los herederos no fué materia de resolución en la Cámara.

5.—El antiguo derecho prohibía á los padres enajenar los bienes propios de sus hijos, quedando en su caso obligados los suyos y con la facultad reservada al heredero para perseguirlos de terceros. Pero este principio enunciado en la ley 24, tit. 13, Part. 5ª, no acordaba al heredero un derecho absoluto, hay en la misma un límite á su ejercicio. «E esto se entiende, dice. quando non quisieren heredar nin auer parte en los bienes del padre. Ca si quisiessen heredar en ellos, entonce non podrian demandar los sus bienes propios, a aquellos a quien los ouiesse el padre enagenado, segun que es dicho: porque todos los pleytos derechos que el padre ouiesse fechos, serian tenudos de guardar, e de non venir contra ellos, despues que fuessen herederos.» Entre tanto, si el acto del causante era un acto válidamente celebrado en su forma como se ha visto, si él mismo no podría haberse alzado contra su firmeza estando por el contrario obligado á su cumplimiento, es fuera de duda, de acuerdo con las disposiciones escritas bajo cuyo imperio fué otorgado, que sus sucesores carecen de derecho para accionar en los términos de que instruye la demanda. *Quod ipsis qui contraxerunt, obstat, et successoribus eorum obstat.* No puede argumentarse con la inaplicabilidad de la Ley 24 citada, porque en el caso ocurrente el padre no enajenó ni malmetió los bienes de los menores, pues si para una situación semejante es inconcuso el principio, menos podría decirse contra su eficiencia cuando los actos del padre no lesionan tan gravemente los intereses de los hijos. El heredero sucede á su autor en todos sus derechos y obligaciones; siendo jurídicamente considerados como una sola persona.—Ley 13, tit. 9º, Part. 6ª.—El sumario está de acuerdo con dos casos resueltos por la S. C. N.—tom. 8º, pág. 492, Ser. 1ª, y tom. 13, pág. 267, Ser. 2ª.





rante su menor edad, si hubiesen aceptado la herencia.— Jur. Civ., tom. 4, pág. 56, Ser. 4^a.

6. **Herederos**—Los parientes no pueden solicitar declaratoria á su favor si existe esposa, mientras no justifiquen en juicio contradictorio la falsedad del título que se invoca.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 18, Ser. 4^a.

7. **Herederos**—La oposición á incluir un bien en el inventario, obliga á las herederos á deducir sus acciones contra el opositor.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 37, Ser. 4^a.

8. **Herederos**—La falta de intervención de algunos herederos, como asimismo la publicación de los avisos del remate judicial por menos días que los fijados por el Juez, hacen procedente la nulidad de la ejecución, aun después de aprobada la venta, hecha la oblación del precio y dada posesión al comprador. — Jur. Civ., tom. 9, pág. 310, Serie 4^a.

Herederos— Véase: *Apoderado único*, núm. 1—*Administrador*, núm. 2—*Albacea*, núms. 1 y 7—*Bienes*, número 1—*Costas*, núms. 5 y 40—*Colación*, núm. 1—*Crédito líquido*, núm. 1—*Cuenta particionaria*, núm. 2—*Cuidador*, núms. 1 y 6—*Documentos de depósito*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 18—*Herencia*, núm. 3—*Jurisdicción*, núm. 1—*Litispendencia*, núm. 1—*Prescripción contra*

6—La esposa se había presentado ejercitando los derechos que le correspondía en su carácter de tal sobre los bienes del marido. Con esta presentación quedan excluidos los parientes colaterales, pues éstos solo pueden suceder al hermano cuando no ha dejado ascendientes ni descendientes legítimos ó naturales ni esposa. A no ser que en juicio contradictorio se declare que esta última ha perdido el derecho á la herencia, por inacción ó por otra causa legal—art. 3424 del Cód. Civ.

7—La oposición sobre inclusión ó exclusión de bienes inventariados, debe sustanciarse por cuerda separada en el competente juicio ordinario—art. 66 del Cód. de Proc.

8—Véase: verb. *Avisos*, núm. 1.

menores, núm. 1—*Nulidad*, núms. 3 y 6—*Reivindicación*, núm. 7—*Títulos de propiedad*, núms. 1 y 15.

Herederos del esposo—Véase: *De oficio*, núm. 1.

1. **Herederos forzosos**—La mayor ó menor parte de la

1—Se trata de la nulidad de una partición estrajudicial hecha por escritura pública entre coherederos mayores de edad, en ejercicio del derecho que les acuerda el art. 3462 del Cód. Civ. Para que este acto sea nulo, es necesario demostrar que él es contrario á la esencia misma de la partición, ó que adolece de vicios de error, dolo, violación ó fraude—arts. 954 y 3462.—En el caso que nos ocupa, el acto no era contrario á la esencia misma de la partición. Con efecto, los que atacaban el acto, fundados en esta circunstancia decían, que ese atentado consistía en que debiendo la partición verificarse en partes iguales entre los herederos, se había adjudicado á uno de ellos una porción mucho mayor de la que le correspondía. Pero es fácil comprender desde luego, que la esencia misma de la partición á que se refiere la última parte del art. 3462, no puede constituir la perfecta igualdad de los lotes ó porciones adjudicados á los coparticipes. La esencia de la partición de bienes, consiste en que éstos se repartan efectivamente, haciendo cesar el estado de indivisión. Así resulta de los ejemplos que el Codificador pone en la nota explicativa del art. 3462, y también de los tratadistas que cita, como Demolombe, que dice: «La división para ser completa y definitiva debe hacer cesar la indivisión completa y definitivamente entre los coherederos; y no existe verdadera y definitiva partición mientras la indivisión continúa de cualquiera manera y sobre cualquier punto»—tom. 15, § 614.—Debe tenerse también en cuenta que la disposición del art. 3462 se refiere, en términos generales, á los herederos testamentarios y ab-intestato, á los herederos forzosos y á los que no lo son; y es bien sabido que no siempre los herederos tienen derecho á una porción igual en los bienes de la herencia, como sucede entre los mismos descendientes, cuando los nietos concurren con los hijos del causante de la sucesión. Luego, pues, la partición privada que autoriza el referido art. 3462, no ha sido sometida para su subsistencia y validez á la igualdad de los lotes y porciones. La partición atacada, adjudicaba á cada coheredero ó coparticipes porciones perfectamente deslindadas, y definitivamente: no podía atentar entonces á la esencia misma de la partición en el sentido jurídico y legal de las palabras. Siendo todos los herederos capaces para disponer de sus bienes, pueden válida y legalmente dividir la herencia en la fo-





herencia que los herederos todos mayores se adjudiquen en una partición estrajudicial, no repugna ni es contraria á lo que la ley dispone sobre porción de los herederos forzosos, pues las diferencias importan una renuncia permitida por la ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Serie 3ª.

1. **Herederos mayores**—No procede la nulidad de la partición hecha, entre todos los herederos mayores por escritura pública, fundada en la diferencia de las adjudicaciones.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3ª.

2. **Herederos mayores**—El reconocimiento de la deuda por los herederos mayores, hace procedente su abono en la parte que á éstos corresponda, pero debe justificarse ampliamente para obligar á los menores.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 127, Ser. 4ª.

3. **Herederos mayores**—Verificada la división por sorteo entre éstos, corresponde se les dé posesión de los lotes respectivos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 39, Ser. 4ª.

Herederos mayores—Véase: *Cuenta particionaria*, número 1—*Legatario*, núm. 1.

Herederos menores—Véase: *Cuenta particionaria*, núm. 6—*Bienes testamentarios*, núm. 1.

Herederos reconocidos—Véase: *Término*, núm. 1.

ma y con las bases que mejor les parece. Pueden adjudicarse lotes de mayor ó menor valor respectivamente, y aún adjudicar toda la herencia en cuestión á un solo heredero, usando del derecho que tienen de disponer libremente de sus bienes, sin violar ningún precepto legal, y por consiguiente, válidamente.

1—Véase: *Herederos forzosos*, núm. 1.

2—De acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Crédito*, núm. 1; tom. 3º, verb. *Deudas*, núm. 1. La confesión de los herederos mayores puede servir como principio de prueba por escrito que haga procedente la de testigos. Tomo 2º, verb. *Prueba testimonial*, núm. 1.



1. **Herencia**—Aprobada la cuenta particionaria, los herederos mayores tienen derecho á retirar su parte de herencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 41, Ser. 3ª.

2. **Herencia**—Los que aceptan la herencia, continúan la persona del causante y en consecuencia sus obligaciones; y carecen de personería para pedir la nulidad de las declaraciones de aquél, que reconozcan á la esposa derechos á bienes determinados.—Jur. Civ., tom. 4, página 363, Ser. 3ª.

3. **Herencia**—La inacción de los herederos designados por testamento ó la falta de justificación de que invisten ese carácter, hace procedente se declara vacante la herencia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 104, Ser. 3ª.

4. **Herencia**—El reparto que el testador haga del re-

1—Véase: verb. *Cuenta particionaria*, núm. 1.

3—El testador por una cláusula de su disposición testamentaria, instituyó por herederos del remanente de sus bienes á todos sus sobrinos «cuyos nombres no espresa en ese momento por no recordarlos.» Después de una larga tramitación, el Juez de 1ª Inst. á petición fiscal, intimó á todos los que se habian presentado pretendiendo derechos á la herencia justificasen su carácter hereditario dentro del término improrrogable de cuarenta días, bajo apercibimiento de declarar vacante la herencia. Apelada esta resolución fué confirmada y notificada personalmente á los que intervenían en autos, y por edictos á todos los que se consideren con derecho á los bienes del causante. No habiendo justificado el título ninguno de los pretendidos herederos, se hizo efectivo el apercibimiento declarando vacante la herencia. De esta providencia se interpuso apelación, siendo confirmada por la Cámara, pues esta segunda resolución no es sino el cumplimiento de la primera.

4—La cláusula del testamento decía: «Si después de cumplidas estas adjudicaciones quedase algún sobrante del quinto, es su voluntad que se incorpore al cuerpo general de bienes, para que sea dividido entre sus cinco hijos legítimos, los dos naturales y el espúreo». Toda la cuestión consiste en resolver cómo debe entenderse esa cláusula. Su redacción es clara y no ofrece duda de que el espúreo debe recibir del remanente del quinto una parte igual á la de los hijos legítimos y naturales; el hijo espúreo no es un heredero sino un legatario, y no hay razón para



manente del quinto, debe conceptuarse legado y no herencia, si entre los favorecidos existen extraños á la sucesión, aun cuando manifieste que debe incorporarse al cuerpo general de bienes.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 157, Ser. 3ª.

5. *Herencia*—La mayor ó menor parte de la herencia que los herederos todos mayores se adjudiquen en la participación estrajudicial, no repugna ni es contraria á lo que la ley dispone sobre porción de los herederos forzosos, pues las diferencias importan una renuncia permitida por la ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3ª.

Herencia—Véase: *Derecho de petición*, núm. 2—*Litispendencia*, núm. 1—*Derechos hereditarios*, núms. 2, 3 y 4—*Nombramiento*, núm. 1—*Heredero*, núms. 4, 5 y 6—*Heredero poseedor*, núm. 1—*Herederos*, núms. 2 y 3—*Poseción judicial*, núm. 7—*Abogado*, núm. 1—*Bienes propios*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 11.

1. *Herencia en efectivo*—La que corresponde á los hijos, debe ser entregada á los padres para su administración.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 216, Ser. 4ª.

que se le equipare en la división. La espresión *incorporar al cuerpo general de bienes* es vaga y no puede aplicarse al pié de la letra, porque de hacerse así no podría recibir nada el espúreo, que no es heredero, y la voluntad del testador que quiere espresamente que reciba, sería violada. ¿En virtud de qué principio ó ley, al incorporar ese remanente al cuerpo general de bienes, se le dirá al espúreo: se le dá tanto como á hijo natural, y se reserva cuánto para los hijos legítimos? El testador quiere que el remanente del quinto se reparta entre sus hijos, legítimos, naturales y espúreo. Debe entenderse que es por partes iguales.

5—Véase: *Herederos forzosos*, núm. 1.

1—El Juez Dr. Mendez Paz no hizo lugar á la entrega fundándose en que la madre no había dado razón sobre la inversión que á los fondos quería dar. La Cámara revocó el auto fundándose en la jurisprudencia constante. Véase: *Inst.*, tom. 3ª, verb. *Menores*, núm. 2.



1ª. **Herencia materna**—La colación solo es aplicable a los herederos ó legatarios: las deudas del padre no pueden afectar á los derechos hereditarios de los hijos en la herencia materna.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 218, Ser. 3ª

1ª. **Herencia vacante**—La propiedad de los bienes que por herencia vacante son declarados fiscales, corresponde al Consejo Nacional de Educación.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 109, Ser. 3ª.

2. **Herencia vacante**—El Consejo Nacional de Educación no es parte en los juicios de herencia vacante sino después de hecha la declaratoria á favor del Fisco.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 360, Ser. 4ª.

Herencia vacante—Véase: *Herencia*, núm. 3.

1ª. **Herencias transversales** —La inconstitucionalidad de

1ª—Véase: *Colación*, núm. 1.

1ª—Véase: *Bienes fiscales*, núm. 1.

2.—Según el art. 691 del Cód. de Proc., el curador ejerce activa y pasivamente los derechos del heredero, y sus facultades y deberes son los que corresponden al heredero que acepta la herencia con beneficio de inventario. Y según se desprende de lo prescripto por el art. 693, el curador debe intervenir en el juicio hasta tanto se declare vacante la herencia y se vendan los bienes que la constituyen para poner su importe á disposición del Fisco ó de quien corresponda. Por otra parte, no hay disposición legal alguna que dé intervención en el juicio al Consejo de Educación.

1ª —Habiéndose ordenado por el Juez de 1ª Instancia que antes de darse la posesión de la herencia se abonara previamente el impuesto correspondiente al Consejo de Educación, la parte interpuso simplemente el recurso de apelación. La Cámara dijo, —que no habiendo sido sometida á juicio la cuestión en 1ª Inst., no podía ese Tribunal entrar á conocer de ella. Era además necesario tramitarla en forma, proponiéndola en 1ª Inst., dando la interversión al Consejo de Educación á quien afecta directamente. De no ser así, vendría á destruirse el orden establecido para toda contienda judicial por el Cód. de Proc. y por la ley de organización de los Tribunales, prescribiendo los trámites que deben observarse y las atribuciones y facultades que corresponden á



la ley que grava á los legados y herencias transversales en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda instancia si no ha sido propuesta y resuelta por el Inferior.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 273, Ser. 3^a.

2. **Herencias transversales**—La inconstitucionalidad de la ley que grava á los legados y herencias transversales en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda Instancia si no ha sido propuesta y resuelta por el inferior.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 285, Ser. 3^a.

3. **Herencias transversales**—La inconstitucionalidad de la ley que grava los legados y herencias transversales con un impuesto en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda instancia si no fué propuesta y resuelta ante el Inferior.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 315, Ser. 3^a.

4. **Herencias transversales**—La resolución que declara

la Cámara para conocer en última instancia de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los jueces de 1^a Inst. y en los demás casos que la última ley establece en su art. 71. La resolución reclamada puede decirse, era una mera providencia y tiene á su favor una ley en completa vigencia cual es, la de 8 de Julio de 1884, que establece el impuesto destinado al fomento de la educación común en la Capital. Por consiguiente, al ordenar el Inferior que se abone el impuesto correspondiente antes de extraerse los fondos depositados en el Banco, procedentes de la fundación de la capellanía ordenada por la causante de esta testamentaria, se ha ajustado á una prescripción legal, cuya vigencia ó inconstitucionalidad no aparece que se haya opuesto ante el mismo, como sería necesario para fundar su recurso contra esa providencia y para traerlo á conocimiento de esta Cámara después de resuelto por el mismo Juez con la intervención del representante del Consejo de Educación, como he dicho y del Ministerio Fiscal, que no aparece tampoco haber sido oído.»

2.—Véase nota precedente.

3.—Véase el núm. 1.

4.—Una legataria instituida tal en virtud de disposición testamentaria, se presentó en la testamentaria del causante pidiendo se librara oficio



haber ó nó lugar al pago del impuesto sobre legados ó herencias transversales, debe recaer después de amplia al Banco Nacional á fin de que se le entregara el importe de su legado; el Juzgado confirió traslado de la petición al representante del Consejo Nacional de Educación, el que se dió por evacuado en su rebeldía, ordenándose que corrieran los autos según su estado. En seguida se dictó resolución, por la cual se declaró, que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 44, incs. 11 y 12 de la ley de Educación, el legado no se hallaba sujeto á impuesto alguno. De esta resolución se interpuso el recurso de apelación. La Cámara declaró nulo todo lo obrado: esta resolución se dictó por mayoría de votos, fundándose ésta en que aquélla no pudo pronunciarse sin la previa discusión que la ley prescribe para cuestiones como la decidida, observándose las formalidades que ellas señalan y de las que se prescindió por completo. La petición tendente á obtener una declaración del Inferior, de que su legado no estaba sujeto á impuesto alguno, entrañando como en efecto entraña, una cuestión de derecho, ha debido sustanciarse con arreglo al procedimiento estatuido para las de este género, y entonces, el representante del Consejo Nacional de Educación habría tenido la oportunidad legal de sostener cuál es el impuesto que en su concepto grava á dicho legado, y el Juez el medio de juzgar, al resolver, las acciones y escepciones de que las partes hubiesen respectivamente hecho uso. Y si esto se hubiera hecho, no se encontraría inhabilidad en el Tribunal para el caso de pedirse la revocatoria, para declarar, como sería de su deber hacerlo, cuál es el impuesto aplicable, desde que no existe acción sobre ese punto, deducida en tiempo, ya que es de estricto derecho que la sentencia debe contener espresa decisión con arreglo á las acciones deducidas en juicio, no procediendo otras declaraciones de los jueces que las que pronuncian resolviendo con sujeción á las formalidades del proceso, cuando, como acontece con la resolución apelada, no se trata de una mera providencia en la secuela del mismo, sino de una sentencia definitiva sobre el punto en cuestión, de lo que es una prueba la forma en que el recurso ha sido concedido. Además, en esa sentencia no se han observado las formas y solemnidades prescriptas en el art. 217 del Cód. de Proc., y por consiguiente la nulidad se impone, no solo en virtud de los vicios de procedimiento antes indicados, sino también por la forma de la sentencia misma. La minoría dijo, que «no existía vicio de nulidad en el procedimiento observado por el Inferior, ni con respecto de la resolución que ha pronunciado y de la cual se ha interpuesto tan solo el recurso de apelación por el representante del Consejo Nacio



discusión, pues tiene fuerza de sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 409, Ser. 4^a.

1^a. **Hermanos unilaterales**—Escluyen de la herencia a los tíos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 78, Ser. 3^a.

1^b. **Hija legítima**—A la madre que niega la filiación, corresponde la prueba de que la reclamante solo era adoptada y que la posesión de estado de hija legítima debida-

nal de Educación, por considerarla agravante de sus derechos; pues dada la naturaleza de esa resolución no se encuentra que adolezca de vicio alguno de nulidad, ni que se haya faltado al procedimiento que correspondía observarse. Por el contrario, en el estado del juicio y dada la petición formulada por la parte interesada, el Inferior ha podido pronunciarse, haciendo la declaración solicitada, sin que importe reconocer por mi parte, si es ó nó justa esa resolución, en cuanto exonera al legado mencionado del pago del impuesto establecido por la ley á favor del fondo escolar, por cuanto ésta es una cuestión que corresponde al fondo del asunto. Menos debe entenderse que el Tribunal pudiera encontrarse inhabilitado para conocer de la justicia de ese pronunciamiento, confirmando ó revocando lo resuelto por el Inferior, desde que hecha la declaración que en él se contiene, fundada en lo dispuesto en el art. 44, incs. 11 y 12 de la ley citada, sería el caso de resolver si efectivamente el legado de que se trata no está comprendido entre los gravados por la ley, como lo sostiene la interesada, ó si por el contrario, debe pagar el impuesto que aquélla establece, según se alega por el Consejo Nacional de Educación. Finalmente, la forma en que se ha concedido el recurso, no es tampoco á mi juicio, un argumento del que pueda deducirse que no se trata de una resolución meramente interlocutoria, sino de una sentencia definitiva, la que en este caso debe ajustarse á las formas y solemnidades prescriptas por el Código de Procedimientos en su art. 217 y para demostrarlo, bastará tener presente las mismas constancias de autos, de las que resulta que es un simple incidente del juicio testamentario, lo que ha motivado la resolución del Inferior, debiendo agregar que así aparece reconocerlo también la parte del Consejo Nacional de Educación, que ha limitado su recurso tan solo al de apelación.»

1^a -Art. 3587 del Cód. Civ.

1^b Véase: *Filiación legítima*, núm. 2.

mente justificada, solo respondía á un propósito caritativo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 9, Ser. 3ª.

Hijo— Véase: *Ilegitimidad*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núm. 105 —*Fondos*, núm. 1— *Agravio moral*, número 1

Hijo legítimo—Véase: *Partida de bautismo*, núm. 2—*Tutor especial*, núms. 2 y 3.

1. **Hijo natural**—La prueba de los impedimentos existentes en la época de la concepción, que convertirían al hijo natural en adulterino, incestuoso ó sacrilego, como escepción, corresponde al que afirme su existencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 358, Ser. 3ª.

2. **Hijo natural**—No basta que el que se dice hijo natural lleve el apellido del pretendido padre para que este hecho acredite la filiación; es necesario que sea él mismo quien haya autorizado su uso.—Jur. Civ., tom. 3, página 358, Ser. 3ª.

3. **Hijo natural**—Los hijos naturales carecen del dere-

1—Véase: *Filiación natural*, núm. 4.

2—Véase: *Filiación natural*, núm. 1.

3—La parte actora se presentó pretendiendo tomar intervención en la testamentaria de su abuela, madre legítima de su padre, del que ella es hija natural. Los herederos de la abuela que no lo eran del hijo de ésta, declararon que ellos no eran quienes debían entenderse con la actora sino los herederos del padre de ésta. Igual cosa pensó el Ministerio de Menores y el Juez lo declaró así. Los herederos del padre de la actora, al que llamaremos H, se opusieron á que la hija natural de éste, á quien llamaremos N, interviniera en la sucesión de su abuela, á quien llamaremos A, porque no tenía el derecho de representación. El Ministerio Pupilar también combatió las pretensiones de la actora, y el Juez falló la causa ordenando que N no tomara participación en los autos testamentarios de A, su abuela, porque no le competía el derecho de representación por ser hija natural. Apelada la sentencia, fué confirmada por unanimidad en todas sus partes por la Cámara. Es este uno de los puntos más controvertidos en nuestro derecho civil, y ha dividido á los autores en tres grupos bien caracterizados: 1º Que nunca se heredera á los abuelos naturales y en ninguna forma. 2º Que los nietos





cho de representación para intervenir en la sucesión

naturales siempre heredan á los abuelos naturales por derecho de representación. 3º Que los hijos legítimos de otros hijos naturales heredan á sus abuelos naturales; pero no heredan los hijos naturales de otros hijos legítimos ó naturales. Los que sostienen el primer sistema hacen hincapié en el artículo 3582 del Cód. Civ. en cuanto dice que los hijos naturales *nunca heredan á sus abuelos naturales*. Relacionan esta disposición con la del art. 3548 que dice que se *hereda* por derecho propio y por derecho de *representación*; y siguen argumentando en esta forma: Si el representante es colocado por el derecho de representación en el lugar que su padre ó su madre tenía en la *familia* de su abuelo, según el art. 3549; y si el hijo natural no forma parte de la *familia* de su padre, —arts. 365 y 366, Cód. Civ.—el hijo de este hijo natural, sea ó no legítimo, no puede herederar á su abuelo, por derecho propio porque los nietos heredan siempre por derecho de representación—art. 3566—y por derecho de representación tampoco, porque donde su padre ó madre no está incluido—la familia del abuelo—no puede él ser colocado. En cuanto á los hijos naturales de hijos legítimos, tampoco heredan á los abuelos naturales por la disposición espresa del art. 3582 ya citado; y acepta este artículo y no el siguiente porque guarda perfecta armonía y concordancia con los otros arriba mencionados; en tanto que el artículo 3583 queda solo, en medio del Código, como un escollo solitario en medio de las aguas del mar. Podría armonizarse con su anterior, es cierto, pero ello importaría un desconocimiento de los principios repetidas veces sostenidos ya en el mismo Código.—2º grupo. Los partidarios de la segunda tésis empiezan por sostener como base, que los hijos naturales son herederos forzosos de sus padres, y que la representación ha sido ideada á fin de reparar el mal que causó á los hijos la muerte de sus padres, lo que por otra parte es indiscutible en nuestro derecho. Por el hecho de ser los hijos naturales herederos forzosos de sus padres, sacan la consecuencia de que les transmiten todos sus derechos presentes y eventuales, y por tanto el derecho de heredar á sus ascendientes; y como á los abuelos no se hereda sino por derecho de representación, nace el derecho de representar á sus padres á este efecto. Así lo dispone el art. 3583 de una manera perentoria, y ese artículo, dicen, establece un principio mucho más lato: lo que consagra es el derecho de representación aún en toda la descendencia, natural siempre, sin que ninguno de los grados sea legítimo. Esta teoría no puede combatirse en nuestro derecho como lo hace Demolombe en el derecho francés, porque allí parten de la base de que el hijo natural no es heredero, y el

de sus abuelos.—Jur. Civ., tom. 3.º, pág. 110, Ser. 3.º.

art. 759 de aquel Código es una escepción que como tal debe interpretarse restrictivamente. En el sistema de nuestro Código pasa todo lo contrario: ese sistema lo combate el legislador en la nota del art. 3579, y equipara los derechos sucesorios del hijo natural á los del hijo legítimo, salvo la cantidad. Por eso ha querido refermar el precepto, que en derecho francés es regla y en el nuestro la escepción del art. 756, dejando solo, como tal escepción la última parte de aquel artículo que dice así: «Ella—la ley—no les acuerda ningún derecho sobre los bienes de los parientes de su padre ó madre» y queriendo especificar cada clase de parientes empezó por aquellos, cuya mente era escluirlos de esa misma enumeración, porque era contrario á su apreciación; fué una inadvertencia. Solo así se explica la presencia de ese artículo que es el 3582 que choca con el siguiente, y con todo el sistema del Código: la escepción resultó regla, y la regla espúrea choca con la regla natural del sistema: la intrusa no puede subsistir, á lo menos como regla, esto es con toda la estensión que tiene. Queda de manifiesto esta «singular inadvertencia» cuando se examina el art. 778 del Cód. Español comentado por Goyena, y se compara con el art. 3583 del nuestro, dice así: Art. 778 español: «Los derechos hereditarios *concedidos* al hijo natural en los dos artículos anteriores, se trasmiten por su muerte á su descendencia, á virtud del derecho de representación.» Art. 3583 argentino: «Los derechos hereditarios del hijo natural se trasmiten por su muerte á sus descendientes por el derecho de representación.» Como se vé, está copiado casi á la letra del artículo español; no tiene más diferencia sensible que la falta en el nuestro, de la incidental que empieza en el español con la palabra *concedidos*; y es que allí solo á los dos casos se refiere la representación de los hijos naturales y no se estiende al de los alimentos, materia del art. 775. El codificador argentino habría podido dejar la frase incidental diciendo *los seis artículos anteriores, ó los cinco primeros de este capítulo*; pero no era esa su mente: quería que el derecho de representación de los hijos naturales fuera tan estenso como el de los legítimos; quería que esa representación rigiera en los casos de sucesión entre colaterales á que se refiere el capítulo VI, con la única escepción de los parientes legítimos de sus padres, que no sean los ascendientes; lo que queda perfectamente encuadrado dentro del sistema del Código. En efecto: dos principios informan este sistema; el 1.º es que los descendientes naturales no forman parte de la familia de los parientes legítimos; y el 2.º, que los derechos sucesorios del hijo natural son de la misma naturaleza que los de los hijos legítimos. Estos dos





4. Hijo natural—El concubinato es una fuerte presun-

principios no pueden ser destruidos el uno por el otro, porque son la base del sistema, y como son en parte contradictorios, hay que poner un límite entre ambos y dejarlos subsistir el uno relativamente al otro. Los parientes colaterales, cuando unos son legítimos y otros ilegítimos casi nunca se miran con buenos ojos, á éstos se les considera como intrusos que vienen á compartir la fortuna y muchas veces el nombre de sus mayores; y los naturales, á su vez, se sienten heridos por ese desprecio y malquerencia, y los retribuyen en la misma forma. Los ascendentes, por el contrario, viejos ya y débiles cuando son abuelos, no anhelan esa lucha constante por la vida, más cerca de la tumba que del mundo, cavilosos y reflexivos, sienten que los descendientes naturales de sus hijos son sus nietos, que llevan en su venas sangre de su sangre, que esos seres no son sino la transformación y multiplicación de una célula viva de su propio organismo reproducidos en su principio vital; los ve lastimados por una sociedad exigente, por faltas que nunca cometieron. Los abuelos, dicen, entonces los quieren con un cariño mezclado de lástima, y aún los quieren más que á sus nietos legítimos que hacen sombra sobre sus propios hermanos muchas veces. El codificador que establece la sucesión legítima sobre la base del cariño presunto del causante, ha tenido que ser lógico en estos dos casos, resolviéndolos de opuesta manera; á los primeros no se les hereda por que el cariño en los causantes se presume negativo; pero á los segundos sí, porque se presume que ese cariño existe: pero como para heredarlos es menester el derecho de representación, esos nietos—naturales—lo tienen. Ese es el afecto que todas las legislaciones han encontrado forzosamente en los ascendientes naturales, desde la romana, la española, la francesa hasta la nuestra: por eso heredan á los padres, y si no en igual cantidad que los hijos legítimos, no es porque el afecto se presuma menor, sino por consideraciones de orden moral, que no es del caso discutir las. Y ese afecto á la prole la tienen los otros ascendientes, y la tienen, queda dicho, con una mezcla de compasión que lo hace más profundo y estable todavía. Es ahora menester estudiar el derecho de representación, única vía legal para llegar á la sucesión de los abuelos. ¿Qué es el derecho de representación? se preguntan, y se responden con el art. 3549: «La representación es el derecho por el cual los hijos de un grado ulterior son colocados en el grado que ocupaba su padre ó su madre en la familia del difunto, á fin de suceder juntos en su lugar á la misma parte de la herencia á la cual el padre ó la madre habría su-

(Continúa en la pág. 497.)



ción de que los hijos de la concubina, habidos durante la vida del padre, son herederos de él. «Esta es ante la ley el derecho de representación. No se puede heredar, se ha dicho, sin estar dentro de la familia, la que la ley organiza de acuerdo con los principios fundamentales de su sistema sucesorio. Esto es falso en nuestro derecho; pero, los partidarios de este grupo aún quieren aceptar el principio por vía de hipótesis. El padre natural, dicen, y sus hijos naturales, forman familia, pues el art. 365, ni explicita ni implícitamente lo prohíbe, y a contrario sensu implícitamente así lo estatuye. Los sostenedores de las otras tesis también lo aceptan. Ahí, si los hijos naturales forman familia con sus padres, y éstos, sean legítimos ó no, también la forman con los suyos, no es concebible siquiera que esos hijos no vayan á la familia con su propia familia—con sus hijos—sería lo mismo que decir que las ramas forman el árbol con el tronco, pero que las hojas no son parte de ese mismo árbol, porque su forma ó generación difiere de la forma y la generación de las ramas. Todo lo que el art. 365 quiere decir, es que las hojas de una rama no son parte de las otras ramas; es decir, que el abuelo—el tronco—tiene una familia general que la forman todos sus descendientes legítimos—las ramas—y tantas familias particulares como familias naturales haya en su descendencia—las hojas de cada rama—esta es la interpretación lógica y natural del citado artículo. Según esta interpretación, podrían, pues, los hijos naturales representar á sus abuelos naturales porque forman familia con él, y el parentesco consanguíneo, sobre todo en la línea recta, nunca se rompe por la muerte de los intermediarios. Pero en derecho argentino hay una excepción á esta regla de la familia en la sucesión. El art. 3545 dice que las sucesiones intestadas corresponden á los descendientes legítimos y naturales, y la representación se encargará de hacer efectivo ese precepto legal. Por ese artículo ya el hijo es hábil para heredar si otras inhabilidades personales no vienen á obstruir la habilidad establecida en él. Por otra parte, el derecho de representación no viene á continuar el sistema real y regular del Código; nó, el codificador acepta con Molina á quien cita en primer término, que la representación es una ficción de la ley—Molina, comentarios á las leyes de Toro, ley 8ª, núm. 4—y cuando se entra en el campo de la ficción, por cierto el peor en derecho, ya no se guarda vinculación y armonía con lo que se tiene por verdadero y real: la verdad no es ya bastante y se recurre entonces á la ficción para llegar al fin propuesto. Por eso nó es ni siquiera menester que el representado ni el representante estén en la familia del causante para poderle heredar por representación; nó, la ley lo pone en la familia de su ascendiente por una ficción suya, sin preguntar si realmente está ó no



vida en común, son hijos naturales del querido.—Jur. Civ., tom.5, pág. 24, Ser. 3^a.

en esa familia; y es lógico que así sea, porque aún en la ficción cabe la lógica, pues de lo contrario no tendría necesidad de recurrir á ella, y el *familiar ipso facto*, *ipso jure* heredaría al causante sin necesidad de tantos rodeos como trae la ley. Y concluyen: que la fuente del art. 3583 no es el art. 759 del Cód. francés, sino el 778 del español comentado por Goyena, y amplificado dentro del sistema de nuestro Código, más liberal que aquellos; que el artículo es conforme con toda la legislación argentina y que solo choca con una parte del art. 3582, que al revés de aquel no encuadra en el sistema del Código, que queda aislado y que por tanto no puede prevalecer; que los descendientes naturales forman familia con sus ascendientes, aunque no con los parientes legítimos de ellos; que para heredar tienen el afecto presunto de sus abuelos naturales; que el derecho de representación no requiere que el representado ni el representante estén en la familia del causante, porque los coloca allí por ficción de la ley, de todo lo que resulta que el nieto natural hereda siempre al abuelo natural, sea su ascendencia siempre ilegítima ó haya algún vínculo legítimo en alguno de sus grados.—3^{er} grupo: Los sostenedores del tercer sistema no vienen á armonizar el sistema del Código con los dos artículos 3582 y 3583, sino que vienen á armonizar á estos entre sí porque se chocan directamente uno con otro, y están tan juntos que solo entre sí se les compara sin acordarse casi del resto del Código. Arguyen en esta forma: Los abuelos naturales son los padres naturales de otros padres naturales; así: A es hijo natural de B, y éste es hijo natural de C, el abuelo natural de A es C. Este nieto natural no puede heredar á su abuelo por la prohibición del art. 3582. El art. 3583 se refiere á los descendientes legítimos, y el art. 3549 da el derecho de representación á los que están en la familia del representado; luego, si el nieto A fuera hijo legítimo del hijo natural B puede representar á su padre, y ser colocado en el lugar que su padre tenía en la familia del que fué su padre natural C. De igual manera se resolvió esta misma cuestión en el derecho francés: allí los textos de los artículos correlativos á los nuestros no tienen la antinomia saltante que tienen los de los nuestros; de modo que con mayor razón deberá resolverse en igual sentido entre nosotros, pues él es el único medio de armonizar estas dos disposiciones. Esta es casi testualmente la manera de interpretar estos dos artículos, que trae el Dr. Llerena en su obra «Concordancias y Comentarios del Código Civil Argentino», y la tomamos de él por ser el que con más claridad la ha espuesto, al mismo tiempo que su nombre



5. Hijo natural—La legitimación del hijo natural por

es autoridad en materia civil entre nosotros. De estas tres doctrinas la primera ya no tiene sostenedores, más aún, casi ni los ha tenido; la segunda se debate todavía, por prevalecer como la más conforme al derecho natural, al sistema del Código y á los principios que lo informan; la segunda es casi ley para los Jueces, porque es la interpretación que se da en nuestra facultad desde donde ha pasado al foro y á la magistratura. ¿Cuál de ellas queda mejor encuadrada dentro de nuestro derecho positivo, y de su sistema? ¿Cuál es la más justa? De desear es que los dos caracteres se encuentren reunidos en la misma. Del método empleado por cada uno de los tres grupos en la dilucidación de este punto, diremos que los del 1º y 3º son defectuosos, pues aquél empieza por apoyarse en uno de los artículos que precisamente está en discusión y partiendo de tal principio forzosamente se tiene que llegar á la anulación del que resulta contradictorio. El 3º sigue otro: la interpretación de los dos artículos en discusión, el uno por el otro, como si estuvieran completamente fuera del Código; solo después de considerarlos armonizados se les relaciona con artículos sueltos sin atender al sistema, interpretando también los textos concordantes con el alcance que á aquellos se les da. El defecto común de estos dos sistemas es el haber subordinado el Código á uno ó dos artículos; es decir, á lo principal se le ha hecho seguir la condición de lo accesorio. Hay que confesar que el 2º grupo ha empleado un método más racional; pues ha empezado por hacer un estudio del sistema que entraña el Código mismo con prescindencia del punto que se discute para hacer encuadrar en ese sistema todo lo que pueda caber de los dos artículos; es el orden lógico: subordinar lo menos á lo que es más, la hoja al árbol y no el árbol á la hoja. No es nuestra mente decir cuál de los grupos ha empleado mejor su método, aunque tengamos nuestra convicción sólidamente formada: nos basta esponder el resultado á que cada uno llega. Respecto de la justicia que cada uno de los grupos encierra, allí están las palabras del camarista Dr. Gimenez, por quien dió comienzo la votación, que al examinar la sentencia de 1ª Instancia dice: «Y aún cuando el Código se opusiera, *debía ser* como él lo pretende», este *él* es el actor, es decir N, nieto natural de A, á quien pretende heredar representando á H, su padre natural. Esta sentencia, que negaba á N el derecho de representación para heredar á A fué confirmada por unanimidad, pues los vocales restantes se adhirieron al voto del Dr. Gimenez. Este es el primer caso que se presenta en nuestros tribunales desde la vigencia del

(Continúa en la pág. 500)



el subsiguiente matrimonio de los padres no requiere forma espresa; se opera *ipso facto*.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 142, Ser. 3ª.

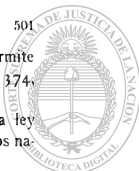
6. **Hijo natural**—La falta de presentación de la partida de bautismo que justifique el carácter de hijo natural, no puede fundar una excepción dilatoria.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 33, Ser. 4ª.

7. **Hijo natural**—Para justificar la posesión de estado de hijo natural después de la muerte del padre, es admi-

Código Civil, y la Cámara ha sentado jurisprudencia sin la más leve divergencia entre sus cinco miembros.

6—Véase: verb. *Excepción dilatoria*, núm. 6.

7—Lo que se requiere para que exista la posesión de estado es la prueba de hechos y actos que importen un reconocimiento indudable de la filiación. Ninguna disposición legal determina cuáles son los actos constitutivos de la posesión de estado de los hijos naturales. Los juriconsultos han establecido y concretado los actos constitutivos de la filiación legítima, desde que ella reposa en una presunción de derecho basada en el matrimonio, y desde que por otra parte los hijos nacidos de una vinculación legítima y que cumplen con las exigencias legales, no son objeto de medidas precaucionales para ocultar una falta. No habría razón ni equidad en aplicar á los hijos naturales ese criterio, que parte de distinta situación jurídica: tratándose de éstos se buscará que concurren actos que demuestren la posesión de estado de hijos naturales, pero no con los caracteres y peculiaridades de los hijos legítimos. En el caso del sumario se comprobó el trato íntimo entre los padres é hijos, la comunidad de vida, el reconocimiento que aquéllos hacían de sus hijos ante las personas conocedoras de ese trato é intimidad y la regularidad de la vida de la madre. Estos hechos son suficientes para comprobar la posesión de estado en toda su amplitud. La jurisprudencia de los tribunales ha sido siempre uniforme en este punto; salvo rarísimas excepciones como el de Leloir, en el que probada la posesión de estado en una forma completamente amplia y que no dejaba lugar á dudas, la Cámara sin embargo declaró improbada la filiación. Puede verse en el sentido del sumario: verb. *Filiación natural*, núms. 3, 14 y 17; tom. 3, verb. *Posesión de estado*, núm. 1; *Hijo natural*, núm. 1; tom. 2, verb. *Filiación natural*, núms. 2 y 3; tom. 1, verb. *Posesión de estado*, núm. 2066.



sible la prueba por todos los medios que la ley permite para probar los hechos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 374, Ser. 4^a.

8. **Hijo natural**—Justificados los extremos que la ley prescribe, procede la fijación de alimentos á los hijos naturales.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 411, Ser. 4^a.

9. **Hijo natural**—La legitimación del hijo natural por el subsiguiente matrimonio de los padres, se produce

8—Véase: verb. *Alimentos*, núm. 11. ¿Cuáles son esos extremos que la ley exige? La opinión de la Cámara ha variado en algunos casos. Alguna vez ha dicho que es necesario que sea previamente reconocido por medio de la confesión expresa ó ficta del alimentario. Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Alimentos*, núm. 1. Pero después de resuelto este caso, no ha exigido sino los extremos de los arts. 331 del Cód. Civ. y 602 del Cód. de Proc. La resolución citada en contra de estas disposiciones puede considerarse como un lunar en la jurisprudencia constantemente establecida por la Cámara: indudablemente así lo resolvió este Tribunal por no abandonar la costumbre de contradecirse hasta en las cuestiones más inconcusas del derecho.

9—Es el mismo caso resuelto en el verb. *De oficio*, núm. 3, pueden verse asimismo los núms. 1 y 2. El Juez de 1^a Inst. dijo, que resultando de la partida de bautismo que el apellido de la madre era distinto del de la viuda del causante, y teniendo en cuenta además que el nacimiento tuvo lugar antes de la celebración del matrimonio de los padres sin que en dicha partida aparezca la nota de que habla el artículo 317 del Cód. Civ., el solo matrimonio de los padres no era bastante para dejar establecida la legitimidad del hijo, pues no se había llenado ninguno de los requisitos del art. 318 del Cód. Civ. La Cámara revocó el auto diciendo: que si bien el nacimiento era posterior al matrimonio de los padres, la prescripción del art. 318 queda cumplida por el hecho de la inscripción del hijo en los libros parroquiales después del matrimonio, pues este artículo no exige cláusula alguna especial para ello. Además, en el caso que nos ocupa, se trataba de obtener la declaratoria de herederos, reconociéndose al hijo como sucesor legítimo por todos los interesados en la sucesión. La Cámara tiene resuelto, que la legitimación del hijo natural por el subsiguiente matrimonio de sus padres, no está sujeto á forma alguna especial. Véase el núm. 5.



cualquiera que sea la forma auténtica en que éstos reconocan la filiación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 382, Ser. 4ª.

10. **Hijo natural**—No puede espeditse testimonio de la escritura de reconocimiento de hijos naturales sin citación del otorgante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 358, Ser. 4ª.

11. **Hijo natural**—El reconocimiento de un hijo natural, no requiere ser acompañado de prueba alguna.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 20, Ser. 4ª.

12. **Hijo natural**—La legislación anterior al Código Ci-

10—Cuando se ignora el domicilio, la citación debe hacerse en la forma prescripta por el art. 80 del Cód. de Proc. Consideramos que el hijo natural que pide testimonio de la escritura de reconocimiento de su estado civil, no tiene por que esperar el consentimiento del padre para que se le espida el testimonio; y para así pensar, nos fundamos en los mismos argumentos aducidos en la nota al verb. *Escritura pública*, núm. 16.

11—Así se desprende de lo dispuesto por los arts. 50 y 53 de la Ley de Registro Civil, y 332 del Cód. Civ.

12—La cuestión á resolver fué la de si una hija concebida en adulterio, cuando aún vivía el esposo de la madre, y nacida cuando ésta era ya viuda, quedó legitimada por el subsiguiente matrimonio de sus padres. Ante todo, debe observarse que el caso está regido por legislación anterior á nuestro Código Civil, cuyas disposiciones carecen de aplicación, puesto que según su propio art. 3º, las leyes disponen para lo futuro, y no tienen efecto retroactivo ni pueden alterar los derechos ya adquiridos. El estado civil de las personas es un derecho que nace de la ley, sin que las convenciones particulares ni otras leyes posteriores puedan modificarlo ni cambiarlo. El que es hijo legítimo ó legitimado por las leyes en vigencia á la época del nacimiento de la legitimación, seguirá siéndolo siempre aunque otras leyes posteriores modifiquen ó alteren los requisitos necesarios para serlo. Así vemos, que aún tratándose de la adopción, que ha sido suprimida por nuestro Código, el art. 4050 dispone que las adopciones y los derechos de los hijos adoptados, son regidos por las leyes del tiempo en que pasaron los actos jurídicos. La cuestión presente debe, pues, ser resuelta de acuerdo con las leyes vigentes en la época del nacimiento y del matrimonio de cuyos efectos legales se trata. Es verdad que la Ley 2ª, tit. 15, Part. 3ª, disponía que el hijo adulterino, procedente de padre casado y de mujer soltera,



vil reconocía como hijos naturales á los nacidos cuando los padres podían contraer matrimonio aun cuando por

no podía ser legitimado por subsiguiente matrimonio y que lo mismo debe entenderse cuando la madre es casada y soltero el padre; que no se trata de la legitimación de un hijo adulterino, sino de si un hijo natural concebido en adulterio, puede ser legitimado. El derecho común Español era que solo podían ser legitimados por el subsiguiente matrimonio de sus padres, los hijos naturales. Según las leyes de Partida solo se consideraban hijos naturales los que un hombre tenía en su barragana—Ley 1ª, tit. 13, Part. 4ª.—Solo los hombres solteros podían tener barragana—Ley 1ª, tit. 14, Part. 4ª—de manera que solo los hijos de personas que podían casarse al tiempo de la concepción y al tiempo del nacimiento, eran hijos naturales. Pero vino después la Ley 11 de Toro á modificar la legislación de partida en esta materia, y dispuso: «E por que no se puede dubdar cuales son hijos naturales, ordenemos e mandamos que entonces se digan ser hijos naturales, *cuando al tiempo que nacieren ó fueren concebidos*, sus padres podían casar con sus madres, justamente sin dispensación, en tanto que el padre lo reconozca por su hijo, puesto que no haya tenido la mujer de quien lo tuvo en su casa, ni sea una sola, concurriendo en el fijo las calidades susodichas, mandamos que sea hijo natural.» Después de esta ley, ya no solo eran hijos naturales los habidos en barragana, sino todos los que procedían de personas que pudieran casarse al tiempo de la concepción ó al tiempo del nacimiento. De acuerdo con lo que disponía la Ley 11 de Toro, la persona concebida en adulterio era hija natural, puesto que sus padres pudieron casarse en la época en que ella nació, desde que la madre había ya enviudado. La hija natural concebida en adulterio, en dañado ó punible ayuntamiento, según la frase de los espositores del derecho antiguo español, fué legitimada por el subsiguiente matrimonio de sus padres. Los civilistas españoles están divididos, los que sostienen que los hijos concebidos en adulterio, pero que nacieron cuando sus padres podían casarse libremente, no pueden ser legitimados por el subsiguiente matrimonio, se ven en la necesidad de principiar negando que sean hijos naturales, á pesar de los términos claros é indiscutibles de la ley. Sus opiniones se fundan en principios de derecho abstracto, que solo pueden servir para demostrar la injusticia ó la inmoralidad de la ley, pero sin destruirla, y los jueces deben limitarse á aplicar la ley sin entrar á examinar de su bondad. García Goyena, en su obra «Concordancias, motivos y comentarios» del Código Civil Español, tomo 1º, apéndice 2º, examinando esta cuestión, dice: «La letra de la ley de



la época de la concepción resultaran adulterinos, y en

Toro se resiste á que se tome su disjuntiva por conjuntiva, como pretenden algunos, aunque alguna vez *conjuncta pro dijuncti pro conjunctis accipientur*, es preciso admitir todo antes que el escándalo. A pesar de tan repetable opinión y precisamente por el motivo fundamental de la misma, los jueces deben limitarse á la aplicación de la ley buena ó mala, antes que sustituirla por la opinión individual. Para el célebre glosador de las Partidas, más respeto merecía la ley que los principios generales, la moralidad y la justicia, cuando solo se trataba de la aplicación de aquélla, y así vemos que en la glosa diez y seis á la Ley 1.^a, tit. 13, Partida 4.^a, dice: y en tanto procede lo que acaba de decirse, como que bastará también, con tal que se haya subseguido el matrimonio, que la aptitud de los padres para contraerlo haya existido al tiempo de la concepción. De la misma opinión son los señores Samponts, Barba, Eixala, Ferré y Subirana, comentadores y adicionadores de las glosas de Gregorio Lopez, y finalmente, dicen, basta que los padres fuesen solteros, no impedidos de casarse al tiempo *de la concepción ó del nacimiento*, y en nada obstante el que la concubina no fuese única ni cohabitase con el padre; dicha Ley 11 de Toro, adición á la glosa 1.^a de la Ley 1.^a, tit. 13, Part. 4.^a. Y para no citar otras opiniones bastará recordar la de Guiterrez y Fernandez, que en sus estudios fundamentales sobre el derecho Civil Español se espresa así: «El nacido de una viuda, la cual por su estado es libre, no se halla en el mismo caso que el hijo de una mujer casada, ¿por qué se le lia de privar de un beneficio que debe á la Providencia, pues cabe en el lenguaje cristiano hablar de casualidad? El derecho siempre supone lo mejor y propende á lo que es favorable; un momento de libertad durante el estado del embarazo, bastaba en Roma para que fuese libre el hijo de la esclava; pues bien, la moralidad pública gana en ocultar, no en que se descubran ciertas debilidades; ¿por qué la libertad de la madre viuda no ha de servir para hacer al hijo natural en vez de adulterino? el hijo lo es desde que nace: *conceptus prohibito reputatur*. Repugna al buen sentido, continúa, una interpretación que autoriza un absurdo jurídico; pero los espositores menos favorables á la ley, no pueden menos que reconocer su fuerza. Llamas, perdido en un mar de erudición, divaga y se contradice. Mucho más práctico el Sr. Escriche, dice: no deja de parecer á primera vista bastante ridícula esta doctrina, y aún, hay autores que la han calificado de tal; pero no por eso es menos cierta, ni está por eso menos claramente contenida en las leyes 9, 10 y 11 de Toro, á las cuales, como se hallan vigentes en el día, tienen que arreglar los jueces sus decisiones,



consecuencia, el subsiguiente matrimonio los convertía en legítimos.—Jur. Civ., tom. 9 pág. 388, Ser. 4ª.

1. **Hijó póstumo**—El desconocimiento del carácter here-

cualquiera que sean las contradicciones, inconsecuencias ó faltas de principios, si es que las hay, en que incurrieron los redactores de los acuerdos de aquellas Cortes.—Dic., hijo adulterino.—Así es la verdad, agrega, está declarado que las leyes en lo que pueden ser referentes á las cuestiones de filiación natural, se hallan modificadas por la Ley 11 de Toro ó sea 1ª, tít. 15, lib. 10, Novísima Recopilación, que es por la que deben resolverse las cuestiones de esta clase—Sentencias del 10 de Mayo de 1860—tanto por lo terminante de su letra como por la interpretación que de ella hacen los tribunales y contra la cual no existe jurisprudencia consignada por el Tribunal Supremo de Justicia—Sentencia del 26 de Setiembre de 1867, tom. 1º, lib. 1º, cap. 4º, Sec. 2ª, art. 3º.—Como queda dicho, y según las disposiciones legales y opiniones citadas, la hija natural queda legitimada por el subsiguiente matrimonio de sus padres, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1ª, tít. 13, Part. 4ª. Es verdad que esta ley, en su letra, solo dice que el hijo que nace de barragana queda legitimado por el subsiguiente matrimonio de sus padres, pero al referirse al hijo de barragana ha querido y entendido referirse en general á los hijos naturales, pues entonces solo tenían este carácter los hijos de barragana. Pero la ley Toro citada, amplió la significación de hijo natural, quedando subsistentes las de Partida en cuanto á la legitimación de los mismos. La razón de la legitimación, según la Ley de Partida no fué ni pudo ser modificada por la de Toro, como que ésta no tuvo por objeto ni se refirió á la legitimación, sino únicamente al carácter de la filiación natural. Y así resulta de las propias palabras de la Ley 1ª de Partida, citada, cuando da la razón de su disposición diciendo: «Ca mugüer estos hijos atales non son legitimos quando nascen, tan grand fuerça ha el matrimonio que luego que el padre e la madre son casados, se fazen por ende los fijos legitimos.» La legitimación es así un resultado inmediato y propio del matrimonio, sin requerirse nada más que su celebración para que los hijos naturales queden convertidos en legítimos: tan grand fuerza, ha el matrimonio. Por regla general, el matrimonio en estos casos se realiza por consideración á los hijos, para legitimarlos lavando en cuanto es posible las manchas de su origen: y los hijos que nacen después de celebrado el matrimonio, son deudores de su existencia legítima á los nacidos con anterioridad.

1.—Véase: verb. *De oficio*, núm. 1.



ditario del hijo póstumo por haber nacido dentro del término mínimo que fija la ley desde la fecha del matrimonio, no puede dictarse de oficio: solo los herederos del esposo tienen derecho para solicitarlo.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 397, Ser. 3^a.

Hijo natural—Véase: *Filiación natural*, núms. 3 y 4—*Concubinato*, núm. 1—*Alimentos*, núm. 1.

Hijos—Véase: *Concubinato*, núm. 1—*Colación*, núm. 1—*Divorcio*, núms. 1 y 2—*Emancipación*, núm. 2—*Herencia en efectivo*, núm. 1—*Separación de hecho*, núm. 1—*Patria potestad*, núm. 1—*Padrastró*, núm. 1.

1^a. **Hijos legítimos**—Los Jueces no pueden de oficio desconocer la legitimidad de los hijos nacidos después del matrimonio y concebidos con anterioridad.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 115, Ser. 3^a.

1^b. **Hijos menores**—La responsabilidad del padre por los daños que causen sus hijos menores, procede aun respecto de aquellos que no habiten con él, siempre que no se encuentren bajo la vigilancia ó á cargo de otra persona.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 9, Ser. 3^a.

2. **Hijos menores**—Mientras no exista contra la esposa pena de reclusión ó de destierro, los hijos menores de cinco años deben estar en su poder.—Jur. Civ., tom. 1, página 45, Ser. 4^a.

3. **Hijos menores**—Decretado el divorcio, los hijos menores de cinco años deben quedar en poder de la madre, designando el Juez cual de los cónyuges debe tener los

1^a—Véase: verb. *De oficio*, núm. 3.

1^b—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 5.

2—El art. 214 del Cód. Civ. establece, que en los casos en que alguno de los esposos deba sufrir condenación ó prisión, reclusión ó destierro, ninguno de los hijos de cualquiera edad que sea deberá ir con el que deba sufrir la condena.

3—Véase: verb. *Divorcio*, núm. 12.



mayores, sin que ninguno de los esposos pueda alegar preferencia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 184, Ser. 4^a.

1^a. **Hijuela**—El hecho de no estar incluido un bien en la hijuela del que produce la información, no forma prueba en contra de la posesión que pudieron tener éste y su causante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 135, Ser. 3^a.

1^b. **Hijuela de deudas**—Las cantidades adjudicadas sobre un bien testamentario para el pago de la hijuela de deudas aumentan el haber del heredero encargado de su pago y en consecuencia los condóminos herederos no pueden pretender que se dividan las rentas por partes iguales sino equivalentes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4^a.

1^c. **Hipoteca**—La prórroga constante de instrumento privado del plazo fijado en la escritura pública de hipoteca.

1^d—La herencia es el conjunto de los derechos activos y pasivos que componen el haber hereditario de una persona muerta. Esos derechos, como su adquisición, no están sometidos á que sean ó no manifestados en los autos testamentarios: ellos subsisten independientemente de dicha manifestación, como asimismo de su inclusión ó exclusión de la cuenta particionaria ó de la hijuela. El derecho de posesión no mejora ni se perjudica por estar ó no comprendido en la hijuela. Desde que la posesión es independiente de esta fórmula, ella se transfiere con todas sus ventajas y sus vicios—art. 3418, Cód. Civ.—y las dos posesiones pueden unirse, la del causante á la de su sucesor.

1^b—Véase: verb. *Condómino*, núm. 3.

1^c—Prorrogar una obligación no es entretanto novarla. La novación exige alteraciones fundamentales capaces de extinguir ó de transformar la obligación primitiva. Además, no se presume siendo indispensable que la voluntad de las partes se manifieste claramente en la nueva convención, ó que la existencia de la anterior obligación sea incompatible con la nueva—art. 812, Cód. Civ.—La reducción ó aumento del interés estipulado originariamente, el aumento ó disminución de la deuda, no afectan sustancialmente su carácter jurídico ni producen de consiguiente novación. Estos principios son de doctrina universal: los enseñan entre otros autores, Toullier, Aubrey y Rau, tom. 4; Marcadé, § 765, Mour



aun cuando se modifique el interés estipulado no importa una novación de la obligación primitiva.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 139, Ser. 4ª.

Hipoteca—Véase: *Menores*, núm. 1—*Acreeedor hipotecario*, núms. 1 y 2.

Homónimo—Véase: *Escribano*, núm. 2.

Honestidad—Véase: *Filiación natural*, núm. 2.

1. **Honorarios**—No procede la regulación de los del perito mientras no sea aprobada la tasación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 85, Ser. 3ª.

2. **Honorarios**—La transacción ó desistimiento de las partes, no hace caducar la jurisdicción del Juez para entender en los incidentes sobre honorarios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 248, Ser. 3ª.

3. **Honorarios**—Del apoderado, se prescriben á los dos años de liquidados.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 163, Ser. 3ª.

4. **Honorarios**—De abogados, se prescriben á los dos años de terminado el juicio, y el término corre aún cuando con posterioridad se haya patrocinado á la misma persona en otros asuntos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 169, Serie 3ª.

5. **Honorarios**—Consentida la providencia de autos no lon § 1461, Segovia y Llerena sobre el art. 812 ya citado. Este último comentador recuerda en nuestra jurisprudencia y la francesa, que no se producirá novación ni aún en el caso en que el acreedor dispense los intereses devengados ó á devengarse, ni cuando las partes convengan en que se pagarán intereses que antes no habían convenido en la deuda primitiva.

1—La Cámara dijo simplemente que la regulación era estemporánea.

2—Porque se trataba de diligencias ulteriores que correspondían ser resueltas por el Juez de lo principal.

3—Véase: verb. *Apoderado*, núm. 1.

4—Véase: verb. *Abogado*, núm. 1.

5—Porque consentida la providencia se reconoce implícitamente la jurisdicción del juzgado.



procede la nulidad de la regulación de honorarios del agremensor, por incompetencia del Juzgado.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 205, Ser. 3ª.

6. **Honorarios**—La parte está obligada al pago de los honorarios, sin perjuicio de su derecho contra el condenado en costas.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 93, Ser. 3ª.

7. **Honorarios**—Antes de fijar su monto, debe resolverse quién está obligado á pagarlo.—Jur. Civ., tom. 7, página 95, Ser. 3ª.

6—Véase: verb. *Costas*, núm. 25.

7—El abogado patrocinante de un heredero pidió se le regulasen sus honorarios y que el Juez declarara cuáles eran los que debían ser abonados por la masa por haber sido devengados en beneficio común, y cuáles por el heredero. El Juez no hizo lugar, porque según él, no era posible resolver esa cuestión en el juicio sumario de regulación de honorarios, como lo tiene resuelto la Cámara en los casos publicados en el tom. 7, pág. 454, y tom. 8, pág. 49 de la 1ª Serie de la Jur. Civ. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Honorarios*, núms. 13 y 14. Estas dos resoluciones declaran que el procedimiento sumario solo es aplicable tratándose de su monto pero no cuando se trata de quién debe pagarlos. Sin embargo la Cámara revocó el auto diciendo que el punto en cuestión es indudablemente de resolución previa desde que no puede exigirse conformidad ó disconformidad á quien aún no se ha declarado deudor, y que el Juez debe pronunciarse sobre este punto con los elementos que arrojen los autos, fijando en seguida el *quantum* de los honorarios, pues este procedimiento en nada perjudica los derechos de las partes, desde que en la oportunidad debida podrán hacer valer las excepciones que crean convenientes á la defensa de su derecho. El principio sentado en el sumario se adapta mejor al procedimiento y á los antecedentes que es necesario tener en cuenta para proceder á la regulación. Así en el juicio testamentario, un heredero puede presentar escritos de interés común y que benefician á la testamentaria, los que son á cargo de la masa—Inst., tom. 1, verb. *Honorarios*, núm. 1354—y tener escritos presentados en su interés particular: para proceder á la regulación debe saberse quién debe abonarlos, porque si los debe abonar la masa se regularán más altos, pues la estimación debe hacerse con arreglo al monto de la causa, y es evidente que el acervo total de la sucesión tiene necesariamente que ser mayor que el de un heredero éstos cuando son varios.



8. **Honorarios**—No procede el nombramiento de tutor especial al menor, en el incidente sobre regulación de honorarios á cargo de la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 104, Ser. 3^a.

9. **Honorarios**—Al que alega la escepción de pago contra la ejecución por honorarios, corresponde su comprobación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 165, Ser. 3^a.

10. **Honorarios**—Terminado el juicio por transacción, la regulación de honorarios contra una de las partes, es improcedente si no resulta de su conformidad, la obligación de abonarlos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 154. Serie 4^a.

11. **Honorarios**—Los de los peritos, deben ser regula-

El sumario, pues, consagra la buena doctrina, la que ha sido sustentada en otros casos por la misma Cámara—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Regulación de honorarios*, núms. 1 y 4. En contra además de los citados más arriba—Véase: Inst., tom. 3, verb. *Honorarios*, núm. 13.

8—El art. 69 del Apéndice al Cód. de Proc. dispone, que cuando hubieren menores interesados, la fijación de honorarios debe ser hecha sin sustanciación alguna, y dictado el auto de regulación solo procede el recurso de apelación, el que lo puede interponer el Asesor de Menores en caso de no estar conforme con la estimación hecha por el Juzgado: no vale la pena de nombrar para esto un tutor especial, cuya única misión se reduciría á la interposición del recurso.

9—Véase: verb. *Escepción de pago*, núm. 1.

10—En un juicio terminado amigablemente por transacción, el demandado pidió que el contrario manifestara su conformidad con la cuenta presentada: éste dijo, que no reconocía la obligación de abonarlos, pues no se había comprometido á ello: no podía el Juez regular los honorarios en este caso en que se pedía contra la parte que no estaba obligada á abonarlos, desde que no había condenación en costas. Esta resolución está en abierta oposición con otro caso resuelto. Véase: Inst., tom. 3^a, verb. *Honorarios*, núm. 13. Estos dos casos se contradicen tan claramente que al compararlos nos parece ver representada en la justicia de la Cámara al dios Jano con sus dos caras, sentado en el Janículo.

11—En el caso ocurrente se trataba de una simple operación de di-



dos por el Juez de la causa.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 357, Ser. 4^a.

12. **Honorarios**—Para su regulación, el Juzgado debe tener á la vista todos los expedientes que forman el litigio, aún los de otros Juzgados. —Jur. Civ., tom. 3, página 67, Ser. 3^a.

13. **Honorarios** — El procedimiento sumario solo es aplicable á los honorarios devengados judicialmente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 365, Ser. 4^a.

14. **Honorarios**—La estimación de los honorarios que visión de un terreno en lotes para adjudicar á cada heredero su parte hereditaria. Esta operación no está regida por las disposiciones relativas al juicio de mensura —Cap. XXI del Cód. de Proc.—sino por el apéndice—art. 58 y siguientes.

12—El Juez de 1^a Inst. dijo, que él debía limitarse á regular los trabajos profesionales del abogado que consten de autos, independientemente de los devengados y regulados en otros juicios. La Cámara revocó el auto, alegando la conveniencia, la necesidad de tener á la vista los otros expedientes para la más acertada apreciación de los trabajos practicados. Nos parece que tanto la resolución del Juez, como la de la Cámara pueden ser procedentes según los casos. Así cuando el monto de lo litigado conste en otro expediente del cual aquél en que va á regularse es un incidente, es conveniente tenerlo á la vista para tener en cuenta el valor del litigio al proceder á la regulación. Pero si los expedientes no tienen conexión los unos con los otros, y aún teniéndolo no aportara ningún antecedente necesario para la apreciación, el sumario no sería aceptable.

13—Así se desprende claramente de lo dispuesto por los arts. 57 y 65 del Apéndice al Cód. de Proc. El primero dice: «En toda clase de juicio el actuario formará la correspondiente planilla», y el segundo que: «Siempre que ocurra cuestión entre un abogado y el litigante á quien defiende.» Para el cobro de los honorarios devengados fuera de juicio, se sigue el procedimiento ordinario.

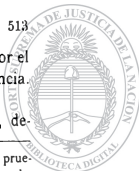
14—Las sentencias solo tienen efecto entre las partes litigantes, es decir, entre los dueños del pleito. El abogado patrocinante y el procurador no son dueños del pleito. Además, las relaciones entre el abogado y procurador con su cliente están regidas especialmente por las disposiciones del Apéndice al Cód. de Proc.

el Juzgado hace al condenar en costas al vencido, no afecta los derechos de los que los han devengado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 377, Ser. 4^a.

15. Honorarios—Para que el abogado pueda exigir de

15.—Se dedujo una demanda tendente á obtener el pago de honorarios prestados como abogado, alegando no haber sido ellos comprendidos en la regulación que se practicó en el juicio en que se devengaron. Se dijo que solo habían sido regulados los escritos presentados, pero no las demás diligencias practicadas en gran número entre otros como 30 conferencias que duraron todas ellas casi todo el día. El demandado opuso la escepción de pago, diciendo que los honorarios que se cobraban habían sido satisfechos en virtud de la regulación hecha por el Juez de la causa. Al presentar el abogado su cuenta en el expediente dijo, que al hacer la estimación tenía en consideración la importancia del asunto, la naturaleza de los trabajos profesionales y el éxito obtenido, así como también que esos trabajos no solo comprendían los escritos presentados sino como se ha dicho ya, en más de treinta conferencias con distintas personas, entre las que la mitad habían absorbido casi todo el día, lo que para el efecto de la regulación debía tenerse presente, y al efecto debía ordenarse que el patrocinado manifestara si dicha aseveración era ó no exacta en cuanto á las conferencias celebradas con motivo del mismo juicio. El demandado al hacer esta manifestación rechaza como inexacto lo aseverado por su letrado, procediéndose después á la regulación. Después de esta regulación deduce el abogado su acción ordinaria por cobro de esas conferencias y trabajos que no constaban en autos. La Cámara dijo, que los honorarios habían quedado satisfechos en la primera regulación, pues se había ejercitado el derecho acordado por el art. 1627 del Cód. Civ. Que la regulación no hace distinción entre los honorarios devengados y constantes del expediente y los que no constaban, ni contenía ninguna salvedad por la que debía entenderse que se reservaba el derecho para gestionar en otro juicio el cobro de los honorarios no reconocidos por el patrocinado. Se dijo asimismo que la prueba rendida era insuficiente para dejar probados los servicios estrajudiciales. Un abogado puede en ejercicio de su profesión, prestar á su cliente servicios, que si bien no constan especialmente en el proceso que dirige ó patrocina bajo su firma se tienen siempre en consideración al hacerse la regulación, pero cuando, así no sucede y cuando fueran negados por el que se dice haberlos causado, y á quien se demanda especialmente su pago, como ocurre en el





su patrocinado otros honorarios que los regulados por el Juez del litigio, debe justificar plenamente su existencia.

—Jur. Civ., tom. 4, pág. 5, Ser. 4^a.

16. Honorarios—Reconocida la asistencia médica, de-

presente caso, no sería justo ni de derecho una condenación sin las pruebas que justifiquen la existencia de esos trabajos extraordinarios, prueba que debió el actor producir, y que repito, no encuentro bastante en las que se han analizado por el Inferior. Parece que los fundamentos aducidos por la Cámara no son muy poderosos. Ella cree que los honorarios regulados en un juicio, comprenden no solo el valor de los escritos sino también el de las consultas, conferencias, etc., que se celebren en el mismo juicio, porque según ella, esas conferencias son necesarias y hasta puede decirse anexas al patrocinio del abogado, siendo así que esas conferencias son indispensables para ponerse al corriente del asunto que se le encomienda. Está bien esto, cuando se trata de conferencias celebradas tan solo con el cliente: pero cuando el abogado concurre á conferencias celebradas con el abogado contrario para arribar á una transacción, por ejemplo, ese honorario no puede quedar comprendido en la regulación. Si la transacción se lleva á cabo, y si el Juez tiene en cuenta el resultado final del pleito, entonces sí puede considerarse como comprendida en la regulación: mas si el arreglo no se llevó á buen término, es claro que esos trabajos no pueden considerarse comprendidos en la regulación. En el caso que nos ocupa, el patrocinado negó la celebración de las conferencias, luego el Juez no podía tomarlas en consideración, porque la forma sumaria de la estimación de honorarios está establecida en el Apéndice al Cód. de Proc., mientras que la forma ordinaria tiene su tramitación general que es la de todo juicio. Mal puede el Juez regular trabajos que fueron negados. Por consiguiente, la regulación hecha en la forma sumaria comprendía tan solo los trabajos confesados, pero jamás pudieron quedar comprendidos los que fueron negados. No tenía pues el Juez, por qué hacer la salvedad de que nos habla la Cámara, diciendo que debió espresarse que quedaba á salvo el derecho del abogado, para exigir el cobro del honorario negado, por la vía ordinaria. Es, á todas luces injusta la resolución de la Cámara, porque es contraria á las leyes que rigen el caso.

16—La demanda se dió por contestada en rebeldía, produciéndose la confesión ficta de los hechos en que se funda—art. 100 del Cód. de Proc.—La demandada fué una sucesión, y la viuda del causante presentó una cuenta que por asistencia médica le había sido pasada. Sus



ben los honorarios ser regulados por el Consejo de Higiene, aún cuando no resulte plenamente justificado el número de visitas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 164, Ser. 4^a.

17. **Honorarios**—En el incidente sobre obligación de pagar honorarios, debe oírse á todos los que puedan ser afectados por la regulación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 215, Ser. 4^a.

18. **Honorarios**—El abogado patrocinante de un heredero, solo puede exigir de su patrocinado el pago de sus honorarios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 247, Ser. 4^a.

términos revelaban que el médico no cobraba toda la asistencia. El actor también exhibió otra por la cual la viuda solicitaba la suspensión del juicio, sin desconocerse el derecho que asistía al médico para cobrar sus honorarios. También se comprobó la asistencia por medio de testigos. Pero de todo este cúmulo de pruebas, no resultaba el número de visitas, siendo así que el actor cobraba hasta el número de 103. No es de extrañarse la falta de comprobación del número de visitas, porque es punto menos que imposible que un médico pueda justificar el número de visitas ó curaciones que hace á sus enfermos, por la naturaleza misma de los hechos, bastando se acredite la asistencia durante un término proporcional. De aquí resulta que el art. 1627 del Cód. Civ. es de perfecta aplicación.

17—Cuando hay pretensiones encontradas respecto á quién debe pagar honorarios, hay que resolverlas primero, y después fijar el monto de dichos honorarios; y por consiguiente es necesario oír á todo aquel que pueda tener interés en contestar esa regulación, ya sea oponiéndose á ella ó recurriendo para ante la Cámara cuando considere elevado la estimación.

18—De acuerdo con la jurisprudencia establecida en ciertos casos. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Honorarios*, núm. 5; tom. 1º, mismo verbo, núm. 1357; y verb. *Testamentaria*, núm. 2596. En contra puede verse, Inst., tom. 3º, verb. *Honorarios*, núm. 4; tom. 2º, *Regulación de honorarios*, núm. 1, y tom. 1º, verb. *Honorarios*, núm. 1354. Nos parece difícil establecer reglas fijas para estos casos, y los Jueces deben resolverlos en la forma que mejor consulte los antecedentes de la cuestión. El abogado patrocinante de un heredero, no puede ejecutar á la testamentaria por el importe de sus honorarios devengandos en ella. Este es el principio general: pero si los escritos han beneficiado á la masa, se



19. **Honorarios**—La regulación judicial de ellos, comprende no solo los que constan en los escritos presentados sino también las conferencias necesarias para la presentación de los espresados escritos—Jur. Civ., tom. 4, pág. 5, Ser. 4^a.

20. **Honorarios**—Los del agrimensor nombrado particularmente, deben ser fijados por peritos: la disposición del Cód. de Proc. que ordena su regulación por el Departamento de Ingenieros, solo es aplicable cuando su nombramiento ha sido judicial.—Jur. Civ., tom. 6, página 58, Ser. 4^a.

21. **Honorarios**—La condenación en costas y la regulación de honorarios contenidas en una sentencia inapelable, es inapelable también.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 419, Ser. 4^a.

22. **Honorarios**—Procede la escepción de inhabilidad de titulo contra la regulación de honorarios si la ejecución se sigue contra los que no tienen vínculo alguno de derecho con el abogado ó procurador ejecutantes.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 292, Ser. 4^a.

23. **Honorarios**—Los honorarios solo pueden ser exigidos al cliente cuya representación se ha ejercido.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 314, Ser. 4^a.

debe pedir que el Juez declare que está obligado á abonarlos la testamentaria y entonces procede la vía ejecutiva, por tratarse de un negocio conducido útilmente, como lo tiene resuelto en algunos casos la jurisprudencia. Véase: Inst. tom. 3^o, verb. *Honorarios*, núms. 4, 5 y 6; tomo 2^o, mismo verbo, núms. 5, 20 y 22.

19—Véase la nota al núm. 15.

20—Véase: verb. *Agrimensor*, núm. 1.

21—Véase: verb. *Costas*, núm. 50.

22.—Véase: *Excepción de inhabilidad de titulo*, núm. 14.

23—Es jurisprudencia constante que el abogado ó procurador solo tiene derecho á exigir sus honorarios del cliente á quien presta sus servicios.



24. **Honorarios**—El acreedor hipotecario de segunda hipoteca, tiene derecho de apelar de las regulaciones de honorarios recaídas en la sentencia dictada en la ejecución del primer hipotecante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 109, Ser. 4^a.

25. **Honorarios**—Justificado el contrato de locación de servicios sin estipulación de precio determinado, los honorarios deben ser determinados por peritos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 244, Ser. 4^a.

26. **Honorarios**—El acreedor por honorarios cuyo privilegio general ha sido reconocido en la graduación de créditos, no está obligado á esperar la terminación del concurso para su cobro.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 333, Serie 4^a.

27. **Honorarios**—Del agrimensor, deben ser fijados por

24—Véase: *Acreedor hipotecario*, núm. 2.

25—Art. 1627 del Cód. Civ.

26—El Cód. de Proc. al tratar del concurso civil, dispone que los acreedores hipotecarios y aquellos que tengan privilegio especial respecto de los cuales no haya habido oposición, ó que hayan obtenido sentencia que haya pasado á autoridad de cosa juzgada, no estarán obligados á esperar el resultado del concurso general, y deben ser pagados con el producto de los bienes afectados al privilegio ó hipoteca, sin perjuicio de obligarlos á dar caución para el caso que aparecieren acreedores de mejor derecho—artículo 738 del Cód. Civ.—En este caso se encuentran los honorarios del abogado del síndico de un concurso que son regulados con intervención del Síndico. Consentida la regulación, el abogado no está obligado á esperar la terminación del concurso. Además que el honorario en este caso tiene por la ley un privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor, sean muebles ó inmuebles.

27—La Cámara dijo, que los trabajos debían ser fijados por árbitros, de acuerdo con el art. 1627 del Cód. Civ., «no pudiendo sin embargo el Tribunal cometer esa regulación al Dep. de Ingenieros de la Provincia como se ha pedido, por tratarse de una repartición fiscal del orden provincial que no tiene relación jurisdiccional con los Tribunales de la Capital.» Este caso está de acuerdo con otro resuelto. Véase: verb. *Agrimensor*, núm. 1.



peritos si el contrato de locación ha sido privado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 400, Ser. 4^a.

28. **Honorarios**—Solo deben ser á cargo de la testamentaria los honorarios causados en interés común de los herederos—Jur. Civ., tom. 8, pág. 21, Ser. 4^a.

29. **Honorarios**—La viuda del causante, nombrada judicialmente administradora de los bienes, tiene derecho á cobrar honorarios—Jur. Civ., tom. 8, pág. 21, Ser. 4^a.

30. **Honorarios**—No existiendo condenación en costas, los honorarios de los peritos nombrados de oficio deben ser satisfechos proporcionalmente.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 46 Ser. 4^a.

31. **Honorarios**—Para que sea obligatorio para un tercero el pago de los honorarios por asistencia médica, debe justificarse no solo la prestación sino que fueron prestados por su orden.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 426, Ser. 4^a.

32. **Honorarios**—La condenación en costas al Juez, no enerva el derecho del abogado para exigir el pago de sus honorarios á la parte.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 125, Serie 4^a.

28—Entre otros escritos que se dijo por el Juez de 1^a Inst. que no correspondía á la sucesión abonar, estaba uno en que se pedía la partida de defunción del causante; la Cámara dijo, que era evidente que esa petición era formulada en beneficio de la masa hereditaria, y que por consiguiente á ella correspondía abonarlo. De acuerdo con el sumario, véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Honorarios*, núms. 4 y 5; tom. 2^o, mismo verb. núms. 5, 10, 20 y 22; *Regulación de honorarios*, núm. 1, y tom. 1^o *Honorarios*, núm. 1354. En estos casos la acción nace de la locación de servicios ó del mandato que son contratos, y como tales no pueden oponerse á terceros—art. 1199 del Cód. Civ.

29—Véase: *Administrador judicial*, núm. 1.

30—Véase: verb. *Costas*, núm. 55.

31—Véase: *Asistencia médica*, núm. 1.

32—Véase: verb. *Abogado*, núm. 6.



33. **Honorarios**—De abogado, devengados estrajudicialmente, deben ser determinados por peritos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 169, Ser. 4^a.

34. **Honorarios**—La manifestación sobre honorarios, debe hacerla el interesado sin que esto importe reconocerse obligado á su pago.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 254, Ser. 4^a.

35. **Honorarios**—El abogado defensor de los que se consideran con derecho al patronato de una capellanía, carece de derecho para cobrar sus honorarios de la finca gravada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 74, Ser. 4^a.

36. **Honorarios**—Los abogados y procuradores carecen de personería para reclamar de sus honorarios en los casos de condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 10, página 81, Ser. 4^a.

33—Véase: verb. *Abogado*, núm. 8.

34—Presentada su cuenta de honorarios por un apoderado, el principal se negó á hacer manifestación alguna diciendo, que no tenía obligación de hacerlo. El Juez dijo, que por el momento solo se trataba de hacer una manifestación para con su resultado practicar la regulación: que la discusión sobre si está ó nó obligado al pago, solo puede hacerse en la oportunidad del artículo 485 del Cód. de Proc., y que por consiguiente esa manifestación debía hacerse sin perjuicio de hacer valer sus derechos en oportunidad. La Cámara confirmó esta resolución por sus fundamentos. Es evidente que esta resolución no se ajusta á la ley. El art. 65 del apéndice al Cód. de Proc. legisla para el caso en que entre el abogado ó procurador y su cliente no medie contrato sobre honorarios, como lo establece espresamente el art. 67, cuando dice: «no habiendo convenio escrito.» Si al patrocinado se le ordena que haga la manifestación pedida, y alega que existe convenio escrito, es evidente que no habria derecho á obligarlo á hacer la manifestación, porque sus relaciones de derecho no están regidas entonces por las disposiciones del apéndice sino por el convenio escrito. El sumario pues, no podria aplicarse en este caso y la regla allí sentada fallaria por su base. De acuerdo con el sumario, véase: tom. 3^o, verb. *Honorarios*, núm. 13. En contra, véase el núm. 7.

35—Véase: verb. *Abogado*, núm. 10.

36—Véase: verb. *Abogado*, núm. 15.



37. **Honorarios**—El abogado del peticionante de herencia, cuya acción ha sido rechazada, carece de derecho para cobrar honorarios á la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 84, Ser. 4^a.

38. **Honorarios**—El abogado patrocinante tiene derecho para exigir el pago de sus honorarios directamente á su patrocinado, con prescindencia absoluta de los apoderados ó intermediarios.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 151, Ser. 4^a.

39. **Honorarios**—Los devengados en espedientes, deben ser regulados por el Juez que en ellos tenga jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 318, Ser. 4^a.

Honorarios—Véase: *Litispensas*, núm. 1—*Inhabilidad de título*, núms. 6 y 7—*Escribano público*, núm. 1—*Costas*, núm. 45.

Honorarios médicos—Véase: *Honorarios*, núm. 16—*Asistencia médica*, núms. 1 y 2.

Hora—Véase: *Posiciones*, núms. 12, 17, 24 y 31—*Rebeldía*, núm. 5.

37—Véase: verb. *Abogado*, núm. 11.

38—Véase: verb. *Abogado*, núm. 14.

39—Véase: verb. *Espediente*, núm. 6.



FE DE ERRATAS

TOMO V — PRIMERA PARTE



Pág.	Núm.	Línea	Dice	Léase
2	5	3	121	421
4	v. <i>Abogado</i>		Enemista	Enemistad
19	1 ^a	3	112	102
37	2	6	152	76
53	1	5	63	263
59	v. <i>Apelables</i>		Autos inapelables	Auto inapelable
60	1	4	Ser. 4 ^a	Ser. 3 ^a
71	v. <i>Ausente</i>		Citación n° 2	Citación n° 1
74	nota 1 ^a	4	tom. 4, v. <i>Inapelables</i>	—
82	2	3	78	85
85	2	4	Ser. 3 ^a	Ser. 4 ^a
98	21	4	221	220
101	34	4	251	351
118	3	4	392	368
124	1 ^b	5	201	378
126	nota 4	3	núm. 34	núm. 9
136	3	4	Ser. 4 ^a	Ser. 3 ^a
195	1 ^a	3	mismos	menores
227	1 ^b	3	194	195
290	5	3	3	4
264	72	4	150	158
275	6	4	tom. 6, pág. 86	tom. 4, pág. 405
291	1 ^a	5	363	348
298	2	4	tom. 4	tom. 10
322	11	4	781	81
327	2	4	312	323
342	1 ^b	3	227	229
383	2	3	144	114
427	29	6	189	198
430	1	3	1 ^a	3 ^a
437	1	4	Ser. 4 ^a	Ser. 3 ^a
439	1 ^a	3	Ser. 4 ^a	Ser. 3 ^a
445	4	3	24	240
457	8	6	31	319
468	1 ^d	5	301	300

Pág.	Núm.	Línea	Dice	Léase
475	nota 4	4	792	791
481	9	1	Condominio	Condómino
492	16	5	9	79
506	16	5	9	29
511	12	4	Ser. 3ª	Ser. 4ª
516	nota 26	8	728 del Cód. Civ.	763 Cód. de Proc.
518	88	3	7	9



